

Augusto **Varas**

El GOBIERNO de PIÑERA

(2010 - 2014)

Catalonia

EL GOBIERNO DE PIÑERA
(2010-2014)

AUGUSTO VARAS

EL GOBIERNO DE PIÑERA (2010-2014)

La fronda aristocrática rediviva

Catalonia

AUGUSTO VARAS
El gobierno de Piñera, (2010-2014). La fronda aristocrática rediviva / Augusto Varas
Santiago, Chile: Catalonia, 2013
400 p.; 15 x 23 cm
ISBN 978-956-324-201-0

CIENCIAS POLÍTICAS
CH320

Diseño de portada: Mario Mora
Edición de textos: Luis San Martín Arzola
Composición: Salgó Ltda.
Impresión: Salesianos Impresores S.A., Santiago de Chile
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Primera edición: agosto 2013
Segunda edición: septiembre 2014

ISBN: 978-956-324-201-0
Registro de Propiedad Intelectual Nº 231.567

Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl

ÍNDICE

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los amigos y colegas del Barómetro de Política y Equidad (BPE) —iniciativa conjunta de Fundación Equitas y Fundación Friedrich Ebert—, quienes periódica y sistemáticamente comentaron, debatieron y corrigieron las apreciaciones y análisis políticos que les presentaba en memorables reuniones matutinas.

Óscar Espinoza, Hernán Frigolett, Bet Gerber, Luis Eduardo González, Flavia Liberona, Domingo Namuncura, Eugenio Rivera, Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez, Marcia Scantlebury y Patricia Silva, integraron el notable equipo de expertos que semestralmente entregó análisis pormenorizados de la gestión gubernamental del Presidente Piñera en cada área de su especialidad. Especial reconocimiento debo a Pamela Díaz-Romero, directora ejecutiva de Fundación Equitas y coeditora del Barómetro, por su permanente apoyo, actualización y lúcido refuerzo académico.

De cada uno de ellos recibí instrucción avanzada sobre el complejo país en que vivimos; me enteré de dimensiones desconocidas de la gestión pública y, principalmente, me dieron valiosas lecciones de compromiso político, responsabilidad ciudadana y humildad intelectual, lo que espero haber reflejado, en algo, en esta publicación.

"El poder político es mucho más profundo de lo que se sospecha. Hay centros y puntos de apoyo invisible, poco conocidos. Su verdadera resistencia, su verdadera solidez se encuentra, quizás, allí donde no lo esperamos."

Michel Foucault

PRESENTACIÓN

Después de 52 años que la derecha no llegaba democráticamente al poder, el 17 de enero de 2010, Sebastián Piñera Echenique, finalmente, fue elegido presidente de la República.

Su triunfo fue el producto, entre otras medidas, de un largo proceso de preparación político-programática para alcanzar el Poder Ejecutivo. Este esfuerzo se materializó en los grupos Tantauco (para los huilliches, "lugar donde confluyen las aguas"), iniciativa que reunió a 1200 profesionales, los que durante dos años y en 36 comisiones elaboraron un programa de Gobierno bajo la estrecha supervisión de su organizador. Propuesta que entregaron al futuro presidente el 3 de abril de 2009, en una ceremonia en la destacaron los representantes del Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán, el Centro de Estudios Públicos y Libertad y Desarrollo, brillando por su ausencia personalidades políticas y empresariales. El 21 de enero de 2010 dieron a conocer al presidente electo un borrador con los programas ministeriales para la definir la hoja de ruta de sus primeros cien días de gobierno.

Estos episodios muestran el enérgico involucramiento programático del futuro presidente en todas las materias de su gestión y el énfasis en los criterios técnicos que orientarían su acción. De la misma forma, develaron su decisión de confiar en el círculo más cercano de relaciones personales y en técnicos más que en dirigentes políticos de la coalición que lo llevó al Gobierno.

En su campaña presidencial denunció las falencias de las administraciones concertacionistas con especial énfasis en la crítica a la presidenta Michelle Bachelet, reiterando la necesidad de un Gobierno que supiera hacer mejor las cosas. Una multimillonaria campaña utilizó los últimos recursos técnicos y de contenidos, nacionales e internacionales, para proyectar su figura por sobre la tradicional política nacional, instalando un discurso que logró entusiasmar a parte de la ciudadanía.

Antes de inaugurar su Gobierno, esta larga y costosa preparación enfrentó dos contratiempos. Uno no anticipable, el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 que lo forzó a entrar en terrenos no anticipados. Otro, más estructural, la resiliencia del imaginario democrático republicano y del Estado chileno que, algo disminuido, no entregaba tan fácilmente todas sus herramientas de dirección societal al mercado.

El efecto simultáneo y combinado del énfasis en un enfoque técnico, encabezado por personal de derecha con nula experiencia en el Estado, que enfrentó sin

haberse preparado una crisis nacional de magnitud, desorganizó relativamente la planificación previa de control del poder tan cuidadosamente preparada. Ante esta inesperada situación, Piñera tuvo que rearmar prioridades y enfrentar nuevas demandas y movimientos sociales no previstos. Un antiguo habría exclamado "¡*Hic Rhodus, hic salta*!".

Los capítulos que siguen han puesto su foco en el análisis de las dimensiones políticas y relaciones de poder que caracterizaron la administración del Presidente Piñera, a través de ciclos semestrales, correspondientes, más o menos, a los observados en la política nacional. En cada uno de ellos se han seleccionado aquellos aspectos y situaciones que han graficado de mejor forma la manera en que el Ejecutivo llevó a cabo sus orientaciones originales, al tiempo que las modificaba sin alterar su sentido último. Hemos tratado de delinear los contornos, se podría decir de la "nodriza" conceptual y política del Presidente, aquello que hizo que sus políticas fueran lo que fueron. Las abundantes citas a pie de página permitirán a los interesados profundizar en los elementos expuestos.

Como una introducción a la descripción analítica de cada período (Capítulo 1), hemos resumido los principales componentes, el hilo conductor, de lo que se podría llamar la estrategia política *de facto* del Presidente Piñera, poniendo su administración en perspectiva y aislando sus principales componentes.

Toda vez que postulamos que el triunfo de Sebastián Piñera fue más bien uno por defecto, este fue la derrota de Frei, hemos incorporado en el Capítulo 2 los factores que ayudan a explicar ese fracaso y que, al mismo tiempo, establecieron una línea de base a partir de la cual el presidente electo tuvo que comenzar a gobernar. Esto implicó hacerse cargo del malestar ciudadano latente acumulado en veinte años de gobiernos concertacionistas y enfrentar un nivel de conflicto social desconocido, el que sin duda fue agudizado por la puesta en práctica de sus propias políticas.

La instalación de su Gobierno (Capítulo 3), con todos los elementos idiosincrásicos que tuvo, es un análisis obligado de cómo se emplazaron desde el inicio los principales componentes que iban a estar complicándole permanentemente su gestión.

El Capítulo 4 se detiene especialmente en describir y analizar la fórmula estratégica que intentó llevar a cabo el Presidente, el *presidencialismo plebiscitario* y esa nueva derecha que intentó fundar.

A su vez, el Capítulo 5 comienza a mostrar los problemas que se van acumulando en materia de reformas que no resultan, conflictos con sus fuerzas de apoyo y movilizaciones sociales que comienzan. La épica del rescate del los "33" le da un respiro, pero con el tiempo ya no le sirve para seguir fortaleciendo su imagen, la que comienza a decaer.

La protesta ciudadana, en especial la movilización estudiantil de fines de 2011, mostró un gran desconcierto gubernamental (Capitulo 6) que tuvo como producto una rotativa de ministros de Educación y la sensación de un Ejecutivo que había tocado fondo, del cual solo cabía recuperarse.

Aun cuando las aguas parecían haberse calmado después de las movilizaciones y confrontaciones en las calles, las tensiones y contradicciones al interior del Gobierno, de la coalición y de los partidos de la Alianza (Capítulo 7), mostraron una derecha azotada por vientos de fronda que lentificaron, una vez más, la gestión gubernamental.

El Presidente hizo su *mea culpa* el 21 de mayo de 2012, pero reincidió en sus principales errores, lo que de alguna manera explica el revés electoral de la Alianza en la elecciones municipales de fines de año (Capítulo 8).

El Capítulo 9 nos lleva desde la derrota electoral en las elecciones municipales de octubre de 2012 hasta el último Mensaje del Presidente en mayo de 2013, período en el cual se plantea descarnadamente la posibilidad de perder las elecciones presidenciales, bajar la representación parlamentaria y quedar en una posición muy desventajosa en una posible próxima administración concertacionista.

El último año de la administración Piñera se presenta en dos capítulos. En el Capítulo 10 se analizan los desarrollos políticos comprendidos entre el último Mensaje y la derrota electoral sufrida por el Gobierno y la derecha en las elecciones parlamentarias y presidencial de 2013. Este período se complementa en el Capítulo 11 con la conmemoración de los 40 años del golpe militar y los efectos que tuvo la derrota electoral y la elección de Michelle Bachelet, observándose una derecha sumida en una profunda reorganización y crisis de identidad.

Finalmente, en el Capítulo 12 reflexionamos sobre los futuros escenarios de la derecha y del "piñerismo", así como los desafíos que el gobierno de Sebastián Piñera le dejó a la nueva administración.

En cada capítulo hemos incorporado el papel de la oposición concertacionista y sus partidos, así como otros actores opositores, tratamiento que se va ampliando a medida que se acerca el fin del período presidencial y reaparece la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

CAPÍTULO 1

"LOS TIEMPOS SON COMO LOS HACEN LOS HOMBRES"
La administración Piñera en perspectiva

Cerrando la evaluación de sus primeros cien días de Gobierno y dándole un sello personal a ese corto período, el recién electo presidente recordaba las palabras de San Agustín: "Los tiempos son como los hacen los hombres"[1]. Olvidaba la advertencia de Carlos Marx: "Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado"[2].

Al final de su mandato cabe preguntarse sobre "el tiempo que hizo" el Presidente Piñera y cuáles fueron las "circunstancias" que marcaron su administración.

En su principal crítica a la Concertación, Piñera enfatizaba que "los veinte años en el poder le arrugaron el rostro y el alma. Donde hubo una misión, hoy solo queda la voluntad de aferrarse al poder"[3]. Sin embargo, este presidente concentró más poder que ningún otro en democracia. Responsable del Gobierno y la administración del Estado y con estrechos vínculos con el mundo empresarial, intentó introducir cambios profundos en los asuntos públicos que llevarían al país al desarrollo en libertad, transformaciones que serían custodiadas por sucesivas administraciones de su propia coalición. Sin embargo, en su último año de gestión, el asesor de contenidos, Ricardo Rivadeneira, haciendo un balance de los problemas del Gobierno y la derecha, se felicitaba de los logros alcanzados gracias a tales ideas, pero reconocía que "este progreso se ha dado principalmente en el ámbito de lo privado (…) Lo público, en cambio, se nos fue quedando atrás: las instituciones, la política, los barrios y ciudades, la televisión, la educación, el transporte, e incluso valores fundamentales como la confianza y fe pública, parecen estar al debe"[4].

¿Cómo explicar la paradoja de un Gobierno que concentró altísimas cuotas de poder pero que no estuvo a la altura de la misión que se había propuesto en el es-

---

1. Véase http://www.gob.cl/discursos/2010/06/16/balance-100-primeros-dias-de-gobierno.htm
2. Marx, C., *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, Buenos Aires: Editorial Ateneo, 1972, pág. 15.
3. Piñera, S., *Programa de gobierno para el cambio, el futuro y la esperanza. Chile 2010-2014*, Santiago, 2009.
4. Véase http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-05-02&dtB= 02-05-2013 %200:00:00&PaginaId=3&bodyid=3

pacio público? Para establecer algunas hipótesis explicativas plausibles es necesario detenerse en la descripción de la estrategia de poder del Presidente Piñera, para lo cual debemos aclarar qué entendemos por *poder* y, desde allí, analizar los principales componentes de su estrategia.

LOS USOS DEL PODER

El poder puede ser definido como la *capacidad* —individual o grupal— de definir situaciones, esto es, de acuerdo a Bertrand Russell, la capacidad de producir "efectos deseados"[5], o como otros teóricos lo han definido, "como la capacidad de hacer una diferencia"[6]. Desde esta perspectiva, el optar, seleccionar y hacer una diferencia produciendo efectos deseados implica necesariamente una toma de control sobre la contingencia[7].

Esta concepción de poder, según Max Weber, establece una asimetría entre el "número creciente de los que compiten en comparación con las posibilidades adquisitivas [lo que] acrecienta el interés de los partícipes en limitar su número de algún modo", esto habitualmente se realiza en base a alguna característica "exteriormente comprobable, de los competidores (reales o potenciales), por ejemplo, raza, el idioma, la religión, el lugar de nacimiento, la clase social, el domicilio, etc.". Tal proceso genera una comunidad de interesados, definido como de "cierre," el que tiene "como fuerza impulsora la tendencia al monopolio de determinadas probabilidades" sociales o económicas[8]. Charles Tilly le llama "acaparamiento de oportunidades", el que genera negativas desigualdades estructurales en materia de oportunidades y recompensas[9].

La capacidad de controlar la contingencia para hacer una diferencia y producir efectos deseados depende de la disponibilidad de recursos que se encuentra bajo la forma de organizaciones. Así, de acuerdo a Jenkins, "las organizaciones, son entre otras cosas, medios institucionalizados de administrar recursos —manejándolos

---

5. Russell, B., *Power*, London: George Allen & Unwin, 1938, pág. 23 (edición de Routledge Classics, 2005).
6. Bech Dyrberg, T., *The Circular Structure of Power*, London: Verso, 1997, pág. 87. O como lo caracterizó el cazurro Enrique Lafourcade cuando fue despedido de un programa de televisión: "Poder es el que puede".
7. Luhmann, N., *Poder*, Barcelona: Universidad Iberoamericana-Anthropos, 1995, págs. 13-15; 119; 146.
8. Weber, M., *Economía y sociedad,* op . cit., Volumen I, pág. 276.
9. Tilly, C., *Durable Inequality*, Berkeley: University of California Press, 1999.

prudentemente, adquiriendo, manteniendo, modificando, explotando y distribuyéndolos— y en este sentido pueden entenderse como 'contendores de poder'"[10].

Finalmente, desde una perspectiva sociológica, Clarissa Rile Hayward señala que "los mecanismos del poder son concebidos de mejor forma (…) como fronteras que, en conjunto, definen campos de acción para todos los actores sociales. El poder define los campos de posibilidad. Facilita y constriñe la acción social. Sus mecanismos consisten en, por ejemplo, leyes, reglas, símbolos, normas, costumbres, identidades sociales, y estándares, que constriñen y facilitan la acción inter e intra subjetiva"[11].

A la luz de estos conceptos podremos ver que la concentración de poder que logró Piñera como presidente tuvo efectos positivos y negativos. Su limitado control de la contingencia terminó sirviendo al acaparamiento de oportunidades por parte de sus fuerzas de apoyo, de su "cierre". Las instituciones contenedoras de poder intentaron ser provistas de nuevos contenidos sin lograrlo plenamente, y se quisieron establecer nuevas y más reducidas fronteras a la acción del Estado. Algunos intentos fueron exitosos, otros no. A continuación veremos por qué.

LAS ESTRATEGIAS DEL PODER

Más que un análisis evaluativo de la gestión del Ejecutivo en todas sus áreas de acción, nos interesa tomar distancia de la implementación de políticas públicas específicas y dirigir la mirada hacia aquellos aspectos menos visibles, más de fondo, que detrás de la retórica informaron y orientaron su accionar, constituyéndose *en la práctica* en la estrategia seguida para controlar el poder y llevar a cabo su misión.

Para una mejor comprensión de cada uno de los períodos que organizan este análisis -descritos en detalle en los capítulos que siguen-, hemos extraído y resumido a continuación los principales núcleos estratégicos que los cruzan transversalmente, los hilos conductores del análisis coyuntural.

Estos son los temas referidos al presidencialismo plebiscitario como estrategia de control del poder, la ausencia de un relato que unificara y energizara a sus seguidores, el nombramiento de técnicos y empresarios en el gobierno, los conflictos de intereses y la captura del Estado por parte de intereses privados, el clima de fronda que se dio entre sus apoyos políticos, la crisis de legitimidad institucional concomitante con su mandato, la forma de manejar los conflictos, la protección de los derechos de los consumidores, los problemas para enfrentar la seguridad ciudadana,

---

10. Jenkins, R., "Erving Goffman: A major theorist of power?", en *Journal of Power,* Vol. 1, N° 2, August 2008, págs. 157-168.
11. Rile Hayward, C., *De-facing power,* Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pág. 30.

algunos de los cambios observados en política exterior y el distanciamiento de la dictadura con ocasión de los 40 años del golpe.

Este conjunto temático sintetiza la estrategia gubernamental de poder seguida de hecho por este primer gobierno de la derecha elegido después de cincuenta años.

1. Presidencialismo plebiscitario

Piñera fue acompañado durante toda su gestión por permanentes críticas a la personalización del poder presidencial, su incesante búsqueda de una aprobación pública mayoritaria y la porfiada ubicación por sobre sus fuerzas de apoyo. Aun cuando esas conductas están asociadas a su original carácter, ellas tienen una explicación política y estratégica de mayor profundidad.

Las personalizadas relaciones del Presidente con su Gabinete y los partidos de la Coalición para el Cambio dieron pie a esfuerzos de caracterización de su posicionamiento inicial. Entre los más recurridos se puede rescatar el de "bonapartismo", "en el sentido de que termina por anular el rol de los partidos políticos para centrarse en un poder imperial, surgido del sufragio popular"[12]. Sin embargo, en sus orígenes esa definición fue dada para caracterizar el gobierno de un representante de una clase social atomizada, incapaz de representarse políticamente a sí misma y necesitada de protección, no correspondiendo a la situación existente en el país[13]. Así, la definición de su estrategia hay que encontrarla en el intento de tener una fórmula propia, idiosincrática, de concentración del poder.

Dado que la figura presidencial adolecía de una seria legitimidad de origen y débil enraizamiento en la derecha, su aspiración suprapartidaria era una necesidad funcional. Su biografía y trayectoria profesional y política lo ubicaban al interior del espacio sociocultural del centro político más que en la médula del conservadurismo. Su feble integración a las redes y lealtades desarrolladas durante años de construcción partidaria, por las que pasaron la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), lo llevaron a desplegar un posicionamiento independiente por sobre esas cons-

12. Marco Enríquez-Ominami, "Bonapartismo y descomposición", *La Tercera*, 28/06/2010.
13. "Bonaparte representa a una clase, que es, además, la clase más numerosa de la sociedad francesa: *los campesinos parcelarios* (…) incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, ya sea por medio de un parlamento o por medio de una Convención. No pueden representarse, sino que tienen que ser representados. Su representante tiene que aparecer al mismo tiempo como su señor, como una autoridad por encima de ellos, como un poder ilimitado de gobierno que los proteja de las demás clases y les envíe desde lo alto la lluvia y el sol. Por consiguiente, la influencia política de los campesinos parcelarios encuentra su última expresión en el hecho de que el poder ejecutivo somete bajo su mando a la sociedad". Marx, K., op. cit., págs. 132-133.

telaciones sociopolíticas, de manera de poder llevar a cabo sus propias ideas. Las características del presidencialismo chileno fueron altamente funcionales y coadyuvaron en esa tarea, reforzando su proyecto. Piñera no se concibió a sí mismo como el representante de la Alianza en el Gobierno, más bien quiso ser el demiurgo o líder que una nueva derecha, rehecha por él y capaz de convocar a una nueva mayoría social, la que finalmente lo iba a reconocer como su conductor.

Desde esta perspectiva, ya como Presidente, Sebastián Piñera debía subrayar su particular y directa relación con sus electores, buscando un amplio respaldo en la opinión pública, superior a la base electoral de su propia coalición. Esa búsqueda permanente por aumentar su aprobación ciudadana, en parte a través de una "grandilocuencia comunicacional" —hábito bautizado por el editorialista de *La Segunda*—[14], no tuvo su principal explicación en las características narcisistas atribuidas al primer mandatario[15], más bien obedeció a una estrategia de control y poder político dadas las "circunstancias" en las que asumió. Su apuesta para "hacer su tiempo" fue la de imponerse a su coalición gracias a un presidencialismo reforzado y apoyado por un alto porcentaje de apoyo popular, lo que le permitiría tratar de implantar lo que definimos como un *presidencialismo con fuertes componentes plebiscitarios*[16].

Sin embargo, las propias limitaciones del presidencialismo le jugaron una mala pasada. Si bien este da mayores posibilidades a individuos sin experiencia ministerial, refuerza el personalismo a expensas de la creación de instituciones y les permite ser más autónomos respecto de los partidos, no genera mecanismos institucionalizados para asegurar mayorías parlamentarias —especialmente siendo minoría en el Congreso— y los presidentes terminan siendo responsables de una amplia variedad de funciones cuyos limitados poderes le impiden lograr todo lo que se han propuesto[17]. Tales constataciones de la politología no fueron debidamente tomadas en cuenta.

Así, como veremos en los capítulos que siguen, el derrumbe de los pilares de la fórmula estratégica piñerista para concentrar el poder (presidencialismo reforzado

---

14. Editorial, *La Segunda*, 20 de septiembre, 2012. http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/09/20/la-confianza-en-crisis.asp
15. Carlos Peña, "Piñera: Tiene un narcisismo extremo", véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/04/16/carlos-pena-sobre-pinera-tiene-un-narcismo-extremo/
    También ver: Tironi, E., *¿Por qué no me quieren? Del Piñera way a la rebelión de los estudiantes*, Santiago: Uqbar, 2011.
16. Sobre las características del presidencialismo: Linz, J., "The perils of presidentialism", en *Journal of Democracy*, Winter 1990.
17. Cfr. Blondel, J., Suarez, W., "Las limitaciones del sistema presidencialista", en *Criterio*, 26 de febrero, 1981. Citado por: Mainwaring, S., "Presidentialism in Latin America", en *Latin American Research Review*, Vol. 25, N°1, 1990.

+ tecnocracia + nueva derecha + apoyo popular) dejó en claro que la política, como tradicionalmente se había institucionalizado en el país, era refractaria a tales intentos y que más temprano que tarde retomaría su curso.

2. Relato inenarrable

"Piñera —hay que enterarse— es el primer Presidente nihilista: no tiene convicciones que orienten su voluntad. Tiene apetencias, anhelos de reconocimiento, deseos de aplauso, pero convicciones no tiene", afirmaba Carlos Peña, al analizar las razones de la falta de "relato" de la cual fue sistemáticamente acusado Sebastián Piñera[18].

El tema de la ausencia de un "relato" que expresara las orientaciones básicas del Gobierno fue adquiriendo notoriedad después de los permanentes reclamos del aquel entonces senador Pablo Longueira, quien en mayo de 2011 afirmaba: "La UDI tuvo un relato de 30 años en las poblaciones (…) eso genera mística, épica, porque la política no es sólo un juego del poder. Si ese concepto chorrea en todas las actividades de gobierno empezará haber un cambio en las encuestas, de lo contrario seguirán iguales"[19].

Por esas razones, el ministro Larroulet trataba de organizar un discurso presentable: "el relato es que este gobierno está dando las oportunidades que ningún otro dio (…) descansa en tres ejes. Uno es crear una sociedad de oportunidades para todos; dos, de seguridades donde haya un mínimo nivel de seguridad ante una eventualidad y, en tercer lugar, una sociedad de valores en la que se defienda el futuro"[20].

El problema del Ejecutivo fue que el "relato" que se le exigía y que de hecho orientaba su gestión, era básicamente inenarrable. No era concebible generar mística y épica confesando la estrategia presidencialista plebiscitaria y el diseño de políticas públicas orientado a incrementar los niveles lucro y rentas privadas, la privatización del Estado y la mantención del control oligárquico de la política. Oportunidades, seguridad y valores no eran, realmente, las principales guías gubernamentales de fondo, por lo que su mero enunciado no bastaba para darle capacidad movilizadora. Por el contrario, a diferencia de los empresarios, que ampliaban sus oportunidades de negocios, la ciudadanía veía cómo sus oportunidades de ejercer derechos sociales se reducían, su seguridad no estaba asegurada y los valores esgrimidos —que no representaban la sociedad toda— no eran sistemáticamente defendidos.

---

18. "Piñera —hay que enterarse— es el primer Presidente nihilista: no tiene convicciones que orienten su voluntad. Tiene apetencias, anhelos de reconocimiento, deseos de aplauso, pero convicciones no tiene". Carlos Peña, "Piñera no es de derecha", véase http://www.elmercurio.com/blogs/2011/07/30/989/pinera_no_es_de_derecha.aspx
19. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/05/05/si-el-relato-no-se-inicia-este-21-de-mayo-las-encuestas-van-a-seguir-exactamente-iguales/
20. Véase http://www.clarin.com/politica/inflacion-mala-punto-vista-democratico_0_466153432.html

3. Técnicos y empresarios

Una de las ideas que empapó las propuestas programáticas del Ejecutivo fue su convicción tecnocrática y la sobrevaloración de la gestión eficiente por sobre la destreza política, o capacidad basada en la experiencia para definir, convencer y llevar a cabo políticas públicas en forma exitosa. La presunción de neutralidad ideológica de los expertos, sintetizada en la fórmula de "el Gobierno de los mejores", contenía un velado desprecio por la política. Así, la separación de la política del poder, esta es la política de la anti-política y su complemento, la ideología de la anti-ideología, se constituyeron en discurso oficial, intentando establecer el falso carácter impoluto y exento de valores del personal docto y del juicio técnico, y su absoluta excentricidad respecto de las relaciones de poder.

En ese contexto, el nombramiento de personal técnico en las altas responsabilidades de Gobierno fue parte necesaria de su estrategia. Así, en su primer discurso en La Moneda, el 11 de marzo de 2010, el Presidente Piñera destacaba que su equipo de Gobierno estaba compuesto por técnicos y empresarios de excelencia, con gran compromiso y vocación de servicio público[21] (véase Cuadro 5), por lo que a menos de un mes de iniciado su mandato y con prematuro triunfalismo declaraba: "en 20 días yo siento que hemos avanzado más que otros, tal vez, en 20 años"[22], afirmación que al final de su mandato la consideró desafortunada.

La presencia de técnicos en la política pública no era una novedad en el país. De acuerdo a Patricio Silva, "tanto el origen como el desarrollo del fenómeno tecnocrático en Chile durante la mayor parte del siglo XX han estado íntimamente relacionados con la aparición y posterior ascenso de la clase media (…) los presidentes a menudo nombran a ministros u otros colaboradores con perfiles marcadamente tecnocráticos, con el objeto de disminuir la capacidad de presión sobre su gestión y sus políticas por parte de los partidos políticos que lo llevaron al poder"[23].

Igualmente, en los años 90 se instaló en las ciencias sociales el concepto de "*tecnopols*", aludiendo a la combinación de amplio conocimiento experto junto a un liderazgo político que influía en la reorientación de las políticas nacionales[24]. El estudio de Alfredo Joignant sobre los "*tecnopols*" reclutados por los gobiernos de la Concertación concluía que "dando prioridad a una forma de lealtad social a la comunidad de sus pares y relativizando la lealtad política a sus partidos, los *tecnopols* formaron un grupo dominante en nombre tanto de la razón como de la fuerza

---

21. Véase http://www.gob.cl/discursos/2010/03/11/palacio-de-la-moneda-11-de-marzo-de-2010.htm
22. Véase http://www.cooperativa.cl/sebastian-pinera-en-20-dias-hemos-avanzado-mas-que-otros-en-20-anos/prontus_nots/2010-04-01/133613.html
23. Silva, P., *En el nombre de la razón. Tecnócratas y política en Chile,* Santiago: Universidad Diego Portales, 2010, págs. 265-266.
24. Dominguez, Jorge I. (ed.), *Technopols: Ideas and Leaders in Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, pág. 7.

política (…) un grupo de agentes poderosos cuya distribución en puestos en diferentes gobiernos a lo largo de un período de 20 años les permitió proporcionar un liderazgo transversal a una coalición de partidos de centro izquierda"[25].

A diferencia de los anteriores tecnócratas y "*tecnopols*", el personal reclutado por el Presidente Piñera como ministros, subsecretarios y jefes de servicios, en su mayoría no tenía experiencia política en la gestión del Estado, proviniendo mayoritariamente del sector privado. Esta característica le imprimió a su administración un doble sesgo. Por una parte, esos funcionarios, sin entender bien los asuntos públicos *desde* el Estado, aplicaron fórmulas y estilos propios de gestión de la empresa privada, con todos los problemas que esto le significó al Gobierno. Y, por la otra, abrió un amplio espacio a los conflictos de interés.

4. Asuntos públicos versus intereses privados

"Nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos", afirmaba en el siglo XVIII Jean Jacques Rousseau[26]. A pesar de esta advertencia, los conflictos de interés de personeros en cargos de confianza presidencial terminaron transformándose en una decidida política empresarial de captura del Estado.

Conflictos de interés se dieron inicialmente con gran visibilidad producto de las inversiones del Presidente antes y después de ser elegido, al igual que los exhibidos por los funcionarios nombrados en el Gobierno y organismos autónomos. Casos notorios fueron los nombramientos en Obras Públicas de personeros que debían fiscalizar sus propias obras ejecutadas con anterioridad; otros habían demandando al Estado en el área de su nueva titularidad; personeros que habían defendido a instituciones acusadas por la propia institución fiscalizadora en que desempeñarían; intendentes nombrados en la zona del sismo con previos intereses en las industrias forestales y madereras, de ingeniería, construcción y sanitarias; intendentes que debían modificar planos reguladores con intereses en inmobiliarias; funcionarios en Salud ex personeros de Isapres; ministros que debían aprobar proyectos en marcha en los que previamente habían participado como privados; encargado de Deportes accionista de un club de futbol; un Cónsul general que había expresado que la mejor política hacia el país en el que había sido asignado era no tener relaciones; la adjudicación a grandes empresas para la reconstrucción post terremoto, excluyendo PYMES y ferreterías; parlamentarios que ocultaban sociedades pese a la obligación de declararlas; hasta el Presidente, que siendo propietario de un canal

25. Joignant, A., "The Politics of Technopols: Resources, Political Competence and Collective Leadership in Chile, 1990-2010", en *Journal of Latin American Studies*, Vol. 43 / Issue 03 / August 2011, págs. 517-546.
26. Véase http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/Juan%20J.%20Rousseau%20-%20El%20Contrato%20Social.pdf, pág. 62.

de TV, debía nombrar autoridades en TVN, el Consejo Nacional de TV y legislar en materia de televisión digital.

Todos esos conflictos y tensiones no fueron otra cosa que la clara demostración de la configuración de un equipo de Gobierno que tendió a responder más que nada a la estructura de mando personalizada de Piñera y su círculo más íntimo reclutado en el sector privado, excluyendo a las estructuras partidarias y empresariales corporativas que le dieron el apoyo electoral.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esos conflictos de interés se transformaron en una decidida captura del Estado por parte del sector privado, tal como se observó en el caso de INDAP, jardines infantiles, entrega de derechos de agua, empresas concesionarias decidiendo obras viales, o subsidios asignados a una propiedad en Futrono en la que el Presidente tenía acciones.

5. Fronda

A los anteriores elementos que caracterizaron su gestión, se le agregó el indomable espíritu de fronda de la derecha.

Iniciado el siglo XX, Alberto Edwards, desde la derecha nacionalista, criticaba a la oligarquía chilena por su espíritu de fronda, desorganizadora del orden político, hostil a la autoridad de los gobiernos y "a veces en abierta rebelión contra ellos"[27]. A este rasgo genético se le podría acoplar el reverso de la medalla: su dificultad para administrar los asuntos públicos desde el Estado. Un siglo después, ese gen recesivo volvió a manifestarse.

El período de la administración piñerista fue permanentemente jalonado por conflictos entre el Ejecutivo y los partidos de la Alianza, tensiones al interior de ella, así como duras confrontaciones intrapartidarias. Los primeros enfrentamientos fueron visibles con ocasión de los nombramientos de partidarios en cargos de Gobierno. La UDI —especialmente— y RN protestaron por ver disminuida la presencia de sus cuadros en la gestión pública.

Un caso paradigmático de conflicto entre el Ejecutivo y la Alianza fue la oposición, tanto de la UDI como de RN, frente a la idea de reforma del binominal cuando sus directivas declararon que no podía haber una propuesta sin acuerdo previo con la Alianza, lo que terminó sepultando la iniciativa. Sin embargo, más adelante RN y la DC acordarían secretamente cambios al sistema electoral y político.

Otro caso de clara disconformidad entre partidarios y Gobierno fue el cuestionamiento de Libertad y Desarrollo al supuesto estatismo gubernamental, su crítica a los empresarios en defensa de los consumidores y al ajuste tributario. Por su parte,

---

27. Un análisis de su obra en: Gazmuri, C., "Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática", en *Historia*, N°37, Vol. I, enero-junio 2004.

los empresarios cuestionaron el personalismo de Piñera, la falta de una política comunicacional clara en algunas materias relevantes y manifestaron frontalmente su oposición ante temas tributarios y medioambientales.

Las tensiones subieron de tono al interior de los partidos cuando en 2011 sectores de RN propusieron escindirse creando Renovación Liberal Nacional, en base a una "Propuesta Liberal Ciudadana", o cuando la disidencia RN se preparaba para desbancar a su presidente en la elección interna de 2012. Lo mismo sucedió en la UDI, a fines de 2012, cuando algunos de sus militantes lanzaron el movimiento independiente "Evolución Política". Y en 2013 con "Amplitud", escisión al interior de RN.

Los conflictos escalaron al interior del Gabinete y las relaciones entre los ministros precandidatos presidenciales se deterioraron producto del inicio, de hecho, de sus respectivas campañas al tiempo que seguían en sus ministerios. Las advertencias y llamados presidenciales a deponer las armas no surtieron efecto por lo que se impuso un cambio ministerial.

A esas diferencias políticas y estratégicas se sumaron nuevas discrepancias valóricas cuando algunos personeros de derecha se manifestaron arrepentidos de haber apoyado a un Gobierno que violó los DD.HH., declaraciones que motivaron respuestas de sus correligionarios en favor del régimen pinochetista. Lo mismo se produjo en torno al proyecto de "Acuerdo de Vida en Pareja", enviado al Congreso por el Ejecutivo con apoyo de un sector de RN, pero cuestionado públicamente por diputados de la UDI[28].

Estas fracturas valóricas, políticas y estratégicas no pudieron ser resueltas por un Ejecutivo que fue perdiendo su poder e influencia para ordenar a su coalición a medida que menguaba su aprobación ciudadana, todo lo cual le impidió una implementación más exitosa de las políticas públicas intentadas.

6. Legitimidad institucional

La personalización del poder presidencial y el estilo del primer mandatario tuvieron como producto no un aumento de su popularidad sino, por el contrario, una caída de la misma, con el agravante de que a su paso se deterioró la imagen de la Presidencia como poder del Estado.

A su vez, la gestión personal del Presidente puso en cuestión instituciones como las ambientales, producto del episodio de Barrancones; las críticas de su Gobierno al Poder Judicial enfrentó como nunca en dos décadas a estos poderes del Estado; la contestación a las decisiones del Consejo para la Transparencia debilitó a una institución que estaba en su primera fase de desarrollo; los concursos declarados desiertos del Sistema de Alta Dirección Pública lo politizaron; y las controversias en torno a los datos proporcionados por la Encuesta de Caracterización Socioeco-

28. Véase http://static.latercera.com/20110602/1272813.pdf

nómica Nacional (CASEN), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Electoral (SERVEL), deslegitimaron importantes instituciones para la vida cívica del país. Algo similar sucedió con el tema del femicidio y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), llegando a niveles críticos con el cuestionamiento al Servicio de Impuestos Internos (SII) por condonación de deudas a un grupo empresarial.

Como se verá en los capítulos que siguen, estos problemas crearon una situación de deslegitimación institucional que se tradujo en los niveles más bajos de apoyo ciudadano a las instituciones democráticas. Autoridades gubernamentales cuestionadas debieron renunciar; instituciones estatales contramayoritarias se impusieron sobre la soberanía popular; el principio republicano de separación de poderes fue cuestionado; las instituciones armadas dieron muestras de falta de transparencia y las de orden de falta de probidad y uso excesivo de la fuerza; el sistema de regulaciones no protegió a los consumidores; y el generalizado rechazo al lucro en la educación puso en cuestión el sistema de mercado y el rol subsidiario del Estado.

Indudablemente, no todos estos problemas fueron de responsabilidad exclusiva del Presidente, pero el tipo de gestión que este fue implementando ayuda a explicar su ocurrencia. De alguna forma, el malestar ciudadano latente fue transformado en movilización social gracias a la gestión de su administración, la que extremó los factores que irritaban a la población; tal fue su decidida política de apoyo al lucro y rentas privadas.

7. Manejo de conflictos

Una dimensión difícil de haber sido anticipada por el Presidente y su equipo fue la de cómo manejar conflictos sociales. Primero, porque en el imaginario gobiernista existía la idea que una gestión de excelencia, que hiciera mejor las cosas e introdujera modernizaciones en todos los niveles iba a ser ampliamente apoyada por la opinión pública y las movilizaciones sociales serían pequeñas y sin mayor significación.

No le creyeron a Eduardo Frei, cuando en la campaña de 2009 advertía que "la arrogancia de una derecha que pretende conducir el país [...] nos va a llevar a conflictos sociales y a problemas, porque siempre cuando han conducido el país solamente han mirado los intereses de una minoría". Ante tales afirmaciones el coordinador de la campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, denunciaba una campaña del terror[29] y el propio candidato respondía que tales aseveraciones le parecían "de una arrogancia absoluta [...] Yo creo que la gente se formó un juicio

29. Véase http://www.latercera.com/contenido/674_189524_9.shtml

sobre eso. Los que se creen los dueños de la democracia y la gobernabilidad, en el fondo están enfermos de falta de democracia"[30].

Una segunda dificultad radicó en la falsa confianza que en todas las materias conflictivas primaría el criterio técnico neutral por sobre el político, producto de lo cual su gobierno constituyó un alto número de comisiones asesoras.

La superficialidad del análisis y la hiperconfianza tecnocrática fue el sesgo que llevó al nuevo gobierno a que ante la inesperada explosión de una amplia variedad de conflictos y movilizaciones sociales, el Ejecutivo tuviera una conducta reactiva más que preventiva.

Una vez desatadas las movilizaciones, el gobierno desarrolló una metodología de manejo de conflictos que en vez de inhibirlos, los potenciaría[31]. Así, la primera reacción gubernamental fue intentar aislar el conflicto a través de su invisibilización. Sin embargo, el control y manejo de los medios de comunicación tuvo el efecto contrario, ya que ante tal negación de presencia, los actores sociales se tomaron las calles y comenzaron a sumar apoyos gracias al amplio desarrollo de las tecnologías de información.

Una vez hecho visible el conflicto, el gobierno puso en acción una política de descrédito de sus dirigentes, nuevamente apoyado por el manejo de la opinión pública dado su control de medios, a la cual sumaba, bajo un mismo formato, a dirigentes y congresistas de la Alianza.

Fracasada esta segunda táctica apareció la faceta represiva de la derecha, la que nuevamente tuvo efectos contraproducentes ya que al reprimir con abuso y exceso de fuerza levantó el tema de derechos humanos, aumentando la oposición a su gestión y bajando su apoyo.

Antes esos fracasos que ponían en peligro uno de los pilares clave de la estrategia piñerista –la aprobación pública– el Ejecutivo se abría al diálogo, pero dadas las tensiones y fronda interna sus interlocutores fueron cambiantes, lo que hizo que la resolución de los conflictos se alargara y quedaran en evidencia las divergencias internas.

Finalmente, ante la pérdida de su capacidad de imponer los términos del conflicto el Ejecutivo terminaba negociando, no en las mejores condiciones y dando respuestas parciales, todo lo cual o bien prolongaba el conflicto o solo lo contenía temporalmente. Como elemento agregado, todas las negociaciones significaron un desempoderamiento de funcionarios locales, regionales, e incluso de ministros, concentrándose la acción en la Presidencia y en Santiago.

---

30. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/10/09/379475/temas-valoricos-y-disputa-por-conflicto-social-definen-segundo-debate-presidencial.html
31. Un análisis de las movilizaciones estudiantiles desde esta perspectiva en: Jackson, G., *El país que soñamos*, Santiago: Random House Mondadori, Santiago, 2013, capítulo 3.

8. Defensa de los consumidores

La defensa de los consumidores fue una política consistentemente implementada por la administración Piñera lo que le significó cierta aprobación ciudadana, pero una fuerte crítica empresarial. Consistente con su concepción privatista de los derechos económicos y sociales, su gobierno sí estuvo dispuesto a velar por los derechos de los consumidores *en el mercado*, en la medida que este se fortalecería al crear una sólida cultura de la demanda que corrigiera las imperfecciones de la libre competencia sin tener que incrementar las regulaciones a los oferentes.

Así, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) desarrolló una incansable política de supervisión y sanción de los abusos de empresas de diversos sectores contra los consumidores, abogando por más transparencia y estableciendo demandas colectivas contra la colusión de farmacias, y cobro ilegal y cláusulas abusivas en multitiendas.

Igualmente, el SERNAC denunció vicios en la oferta de créditos post terremoto identificando empresas infractoras en el área bancaria, farmacias, *retail* y supermercados, producto de lo cual se iniciaron gestiones para la creación de un SERNAC financiero, proyecto que derivó en algunas funciones adicionales de control del mismo servicio. Igualmente, enfrentó a empresas del *retail* y farmacias por no entregar información que permitiera comprobar las promesas publicitarias de sus productos, y detectó cláusulas abusivas en contratos de cajas de compensación y firmas de telecomunicaciones.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) prohibió las ventas atadas de productos en la banca y el alza unilateral en comisiones o cupos en líneas de créditos. A su vez, el SERNAC denunció a bancos por no entregar información veraz a los consumidores sobre el costo final del crédito. En esta misma área de transparencia el Ministerio del Trabajo anunció informes mensuales sobre costos en las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y el SERNAC comunicó la creación de un Sello SERNAC de garantía entregado a quienes permitieran que la entidad revisara sus contratos.

Nuevas acciones se focalizaron en el Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO) flexibilizando el impuesto a los combustibles, la “Ley Super 8”, que restringió la comida chatarra, la identificación de 220 fármacos bioequivalentes que deberían estar en las farmacias, la amnistía en el DICOM, y las exigencias preventivas a jardines infantiles públicos y privados ante abusos sexuales o maltrato infantil.

Todas estas medidas fueron parte de una sistemática y consistente política de defensa del consumidor.

9. Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana fue una de las principales banderas de la campaña piñerista, durante la cual el candidato interpelaba directamente a los delincuentes y narcotraficantes advirtiéndoles que "se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar el recreo, se van a encontrar con un presidente que los va a enfrentar con una fuerza, con una voluntad, que ni ellos mismos se imaginan"[32]. Sin embargo, a pesar de haberse aprobado más penas y más duras, después de transcurrido la mayor parte de su mandato, la Encuesta Nacional UDP (Primer Semestre 2013), informaba que el principal problema del país percibido por la ciudadanía seguía siendo, de lejos, la delincuencia. Al final de su gobierno reconoció esta como una de sus principales falencias.

Frente a las dificultades de reducir los delitos, el Ejecutivo enfiló sus críticas a los jueces de garantía originando un conflicto de magnitud con el Poder Judicial. No obstante, frente a la resiliencia delictual reorientó su accionar hacia las policías, las que debían enfrentar de manera más eficiente el problema. De esta forma, el desmedido apoyo inicial dado a los cuerpos de orden interno dio paso a una política de control de la efectividad del accionar policial para la reducción de la victimización y el temor. Para ello, el gobierno decidió evaluar el desempeño policial -licitando la evaluación del Plan Cuadrante de Carabineros- y puso plazo fijo para la implementación total del Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD). Los efectos de esa nueva orientación hacia las instituciones policiales comenzaron a tener resultados en el mediano plazo.

La acertada acción del Ejecutivo en este campo desmontó una histórica complicidad gubernativa-policial de hecho, la que había entorpecido el perfeccionamiento de la eficacia institucional de las policías. En la medida que el orden público es una medida central en la popularidad de un gobierno, este siempre se había visto limitada su capacidad de introducir controles institucionales a las policías que pudieran resentir a sus mandos y personal. De hacerlo, la falta de iniciativa policial podría incrementar los problemas de seguridad ciudadana lo que redundaba en la baja aceptación del gobierno. De esa forma, las instituciones policiales se vieron protegidas y seguras en sus fronteras institucionales, siendo capaces de prevenir controles de metas institucionales de eficiencia o escrutinio público.

La creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito a cargo de la evaluación de la eficiencia de las instituciones policiales fue un importante paso adelante en materia institucional, el que fue seguido de modificaciones en la forma de proveer seguridad por parte de las policías a la ciudadanía.

---

32. Véase http://www.youtube.com/watch?v=-zZpgkBBG8w

10. Distancia con la dictadura y sus apoyos

Con ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe militar, Piñera se refirió a los responsables de las violaciones masivas a los derechos humanos señalando a las máximas autoridades del gobierno militar y a "muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas. También periodistas, que titularon sabiendo que lo publicado no correspondía a la verdad". Declaraciones que apuntaban directamente a toda una generación de políticos, preferentemente militantes de la UDI, pero también a algunos de RN.

Con esta toma de distancia de la dictadura, Piñera pavimentó el camino a una nueva generación de políticos que no habiendo sido actores en ese período se identificaron con sus afirmaciones. De igual forma, tanto en RN como en UDI surgieron voces para modificar las respectivas declaraciones de principios en las que existía un apoyo a ese período dictatorial[33].

11. Política exterior

Si bien las dimensiones de la gestión gubernamental antes reseñadas fueron características permanentemente observadas, el Ejecutivo tuvo la capacidad de ir introduciendo cambios en algunas de sus inclinaciones políticas iniciales, en particular en materia internacional.

El Presidente aceptó en la práctica que la política exterior era un reflejo o consecuencia de la política interior, por lo que cambió su postura ideológica y se orientó pragmáticamente a buscar un protagonismo positivo en el medio internacional que redundara en una mayor aprobación pública en el país, objetivo uno de su estrategia presidencialista plebiscitaria.

Así, a pesar de su fuerte crítica a la administración anterior le dio su apoyo a la candidatura de José Miguel Insulza a secretario general de la OEA. De la misma forma, su alineamiento ideológico con gobiernos latinoamericanos de orientación similar y los iniciales enfrentamientos con el Presidente Chávez, dieron paso a una cierta neutralidad comunicacional al respecto, terminando como principal guardia de honor en su funeral. Su automático alineamiento con los EE.UU. se transformó en una normal y activa participación en UNASUR y su preocupación por los derechos humanos en China fue rápidamente desapareciendo. De la mis-

---

33. vease http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/08/674-540379-9-pinera-y-los-40-anos-del-golpe-hubo-muchos-que-fueron-complices-pasivos.shtml

ma forma, extremó su discurso nacionalista incrementando innecesariamente las tensiones con Bolivia, escalando fricciones que terminaron con el apresamiento de conscriptos bolivianos.

Si bien la política exterior es un reflejo de la política interior[34], el diseño estratégico presidencial fue más allá y la terminó funcionalizando en su propio beneficio.



Quizás el principal problema que enfrentó el Presidente Piñera en su período de gobierno fue no haber sido capaz de desplegar plenamente su estrategia de poder bajo la fórmula *presidencialista plebiscitaria* dada la alta institucionalización del medio y cultura política nacional, tan distintos al fluido y cambiante mundo de los negocios privados. Se encontró con poderes de Estado que tenían más fuerza de la pensada y una dignidad que, a pesar de su desprestigio, les permitía seguir siendo el refugio ciudadano frente al poder del mercado. Las inercias partidarias de la derecha, sus objetivos y ambiciones, no eran fáciles de moldear, ni estaba dispuesta a aceptar una nueva fisonomía. La relación con la ciudadanía tenía canales institucionales que, desfigurados o no, seguían siendo parte del imaginario democrático del país, el que aspiraba recibir de la práctica gubernamental una propuesta de gestión clara, con objetivos reales transparentes. A la vez, su promesa de eficiencia técnica debía ser demostrada como destreza superior a la política, y los intereses privados no debían primar por sobre el interés colectivo. Cuando todos estos elementos alcanzaron un alto nivel de crispación, las movilizaciones sociales no se hicieron esperar

En suma, su débil control de la contingencia, el acaparamiento de oportunidades por el gran empresario, los infructuosos esfuerzos de redefinir las instituciones contenedoras de poder y los intentos de establecer nuevas y más reducidas fronteras a la acción del Estado caracterizaron su gestión. Su estrategia no pudo superar las "circunstancias" transmitidas desde el pasado que establecían que el Estado debía ser fuerte, cumplir sus funciones y hacerlo bien.

Los capítulos siguientes mostrarán, en cada uno de los períodos seleccionados, cómo la arquitectura política piñerista fue configurándose sin lograr plenamente sus objetivos. Pero antes de iniciar este análisis es preciso examinar las razones de la derrota concertacionista en 2010, línea de base de la nueva administración.

34. Cfr. van Klaveren, A., "Doscientos años de política exterior de Chile: de Hobbes a Grocio", en Artaza R., M., Ross O., C. (eds.), *La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integración global,* Santiago: RIL Editores, 2012, pág. 69.

CAPÍTULO 2

LA DERROTA ELECTORAL DE 2010[1]
Un triunfo por defecto

El 11 de marzo de 2010, en medio de fuertes réplicas del terremoto y maremoto del 27 de febrero, la Presidenta Michelle Bachelet, ostentando un asísmico 84% de apoyo popular a pesar de las críticas por el manejo de la emergencia, entregó la banda presidencial a Sebastián Piñera. "El verdadero continuador de mi obra es Eduardo Frei y no otro"[2], había afirmado la Presidenta a pocos meses de la primera vuelta de la elección presidencial. La victoria y traspaso del poder al candidato de la derecha opacó el término de un exitoso Gobierno que puso su mayor énfasis en la protección social.

Ambas realidades cambiaron el paisaje político chileno despertando naturales preguntas sobre el incongruente traspaso de poder a la oposición por parte de una presidenta tan popular y exitosa.

La derrota del candidato concertacionista y la trascendencia del triunfo de Sebastián Piñera despertó la natural pregunta sobre las razones por las cuales el Gobierno de Bachelet no pudo transferir su alto respaldo[3] al candidato continuista de la misma coalición.

I. CAUSAS DE LA DERROTA

En un marco altamente auspicioso de apoyo ciudadano a la presidenta Bachelet, la Concertación, segura en que ese sólido porcentaje se traspasaría mayoritariamente a cualquier candidato de sus filas, enfrentó las elecciones de 2009 confiada en la

---

1. Este capítulo resume una parte del artículo: "Del éxito al fracaso concertacionista. El gobierno de Michelle Bachelet y la derrota electoral de 2010", en: Quiroga, Y., Ensignia, J. (eds.), *Chile en la Concertación (1990-2010)*, Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2010.
2. Claudia Álamos, "Presidenta Michelle Bachelet: 'Mi verdadero continuador es Frei y no otro'", en *COSAS Online*, véase http://www.cosas.com/content/view/4380/320/, 22 de octubre 2009.
3. 83% en enero de 2010. Adimark, "Encuesta: Evaluación Gestión del Gobierno. Informe mensual. Enero 2010", véase http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Ene2010.pdf

posibilidad de obtener el respaldo popular para un nuevo mandato. La derrota concertacionista llevó a preguntarse sobre las causas de tal resultado.

El fracaso electoral fue la consecuencia de un conjunto de profundos problemas que aquejaban a la Concertación y sus partidos, los que dieron por resultado el triunfo final de Sebastián Piñera. Entre esos factores se cuentan el agotamiento del proyecto concertacionista, el déficit intelectual y ético asociado al mismo, así como factores más estructurales propios del sistema político chileno como su profunda crisis de representación y los límites redistributivos que no pudo superar. Junto a ellos es necesario constatar las fallas en el manejo de la campaña del candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle, las que significaron, entre otras cosas, la pérdida del voto de las mujeres, el que le había sido favorable en 2006. Como catalizador de estos factores, la campaña concertacionista enfrentó una derecha altamente eficiente y preparada, que aprovechó en terreno los problemas de la coalición gobernante.

1. La derrota de Frei

No existe una razón única para explicar la derrota de Frei. Más bien hay que analizar un conjunto de factores dinámicos de largo plazo que actuaron, combinada y simultáneamente, junto a elementos más coyunturales de campaña. Dirigentes y analistas políticos esbozaron diversas explicaciones, en distintos niveles de profundidad y con variados respaldos empíricos. Indudablemente, de las respuestas a los principales interrogantes se obtenían diversas políticas a seguir en el futuro.

Antes de entrar en el detalle del conjunto de hipótesis explicativas del resultado electoral es necesario, en primer lugar, destacar la estrecha cantidad de votos que separó a Frei del triunfo. Esto llevó a J. Samuel Valenzuela a desdramatizar el hecho y definir el éxito de Piñera solamente como un "temblorcito", producido por el giro hacia la derecha de un "grupo oscilante compuesto mayormente de su segmento más conservador por razones ideológicas o religiosas"[4].

Un segundo elemento a considerar es el hecho que Piñera fue electo con el menor número de electores desde 1990. Tal como lo indicó Marta Lagos, "la Concertación perdió 363 mil votos respecto de la elección de Michelle Bachelet, más votos que los que gana la derecha. [E]sta es la elección presidencial en que han votado válidamente la menor cantidad de chilenos desde 1988 cuando se inicia el nuevo padrón electoral (…) Este presidente se elige con 3.5 millones, el 29.85% de todos los votantes (12.000.000)"[5]. Coincidió con este análisis Rodrigo Salcedo, quien a una semana de la elección afirmaba que "quienes dejaron de votar o lo hicieron

4. Valenzuela, J. S., *La Tercera*, 24 de enero 2010.
5. Marta Lagos, "El fin de la transición", en *El Mostrador*, 25 de enero, 2010. Se refiere a votantes potenciales.

blanco o nulo, fueron votantes que antiguamente votaban por la Concertación"[6]. Así, los 111.500 votos que separaron a Frei del triunfo fueron fundamentalmente de concertacionistas desilusionados[7].

El tercer elemento a tener en cuenta es la evolución del padrón electoral observada en esos últimos años. De acuerdo a un estudio sobre inscripción de los jóvenes, se demostró un "proceso de construcción de un electorado con fuerte sesgo de clase (...) En Las Condes hay unos 8 mil jóvenes entre 18 y 19 años. De ellos, más de cuatro mil se registraron para votar en las últimas elecciones. En La Pintana también viven ocho mil jóvenes de la misma edad, pero menos de trescientos se registraron para votar. Un patrón similar, no tan pronunciado pero sistemático, se repitió a través de todo Chile: la tasa de registro juvenil fue mayor en las comunas de ingresos más altos"[8]. En general, los jóvenes no representaban más del 10% del padrón electoral, pero los de sectores de más altos ingresos —que no necesitaban del Estado— participaban más que aquellos jóvenes que sí lo necesitaban y que habría sido en su propio interés apoyar alternativas de políticas públicas que efectivamente los consideraran.

En suma, más que un triunfo de Piñera, la elección de 2010 fue una derrota de Frei y de la coalición de Gobierno producto de la desmovilización de las bases de apoyo concertacionista. Desde esta perspectiva es posible especificar un conjunto de hipótesis plausibles a partir de las primeras explicaciones propuestas.

2. Crisis del proyecto

Una primera línea de explicación fue la crisis de la Concertación, la que en veinte años de Gobierno fue perdiendo la dirección hegemónica sobre la sociedad y la propia coalición, con la consecuente dispersión política y conflictos de intereses no resueltos.

Dirigentes como Mariana Aylwin reconocieron como una de sus causas la "pérdida de un proyecto colectivo"[9], tal como el que inspiró a la coalición en sus

---

6. Rodrigo Salcedo, "Siete claves para entender el resultado electoral", en *La Nación Domingo*, 24 al 30 de enero, 2010.
7. Otro indicador de este distanciamiento fue el voto cruzado, el que en la primera vuelta fue muy superior en el caso de Frei en comparación con Piñera. Cfr. Morales Quiroga, M., Espinoza Iturra, A., "Voto cruzado 2009. Otra señal de deslealtad partidaria", ICSO, Documento de Trabajo, Año 2, N°28, diciembre de 2009.
8. Paulo Cox y Alejandro Corvalán,"Voto voluntario o el desinterés por la igualdad", en Chile21, *http://www.chile21.cl/2010/01/12/opinion21voto-voluntario-o-el-desinteres-por-la-igualdad* Análisis coincidente con Marcela Ríos, "Participación política de los jóvenes hoy, límites institucionales y oportunidades para su superación", en: Díaz-Romero, P., Varas, A. (eds.), *Inclusiones inconclusas. Políticas públicas para superar la exclusión*. Santiago: Equitas-Catalonia, 2009.
9. Mariana Aylwin, "El cauce natural de la DC es la centroizquierda, pero eso está en riesgo", *La Segunda,* 25 de enero 2010.

inicios. Esto hizo perder la épica, el adhesivo o elemento aglutinador de la coalición y produjo, según Marcelo Schilling, secretario general del PS en ese momento, la "división de la Concertación, el quiebre del PPD, el quiebre de la DC, las dos listas municipales, la fuga de dirigentes importantes del PS"[10]. El declive del principal partido de centro, la DC, en las parlamentarias de 1997 habría marcado el inicio de la crisis[11].

Esta ausencia de un proyecto aglutinador permitió una fractura en la coordinación concertacionista entre Gobierno y coalición, por lo cual, según Ernesto Ottone, "la gente del gobierno hizo cambios que no han estado en sintonía con lo que ha hecho la gente de los partidos"[12]. Eugenio Rivera fue más allá y afirmó que la propia gestión política del Gobierno debilitó a la Concertación[13]. A lo que se agregó la crítica desde los partidos de la introducción por parte del Gobierno de políticas neoliberales en vez de una consistente propuesta progresista[14], lo que reeditó la polémica concertacionista entre autoflagelantes y autocomplacientes. Frente a esta fisura político-ideológica se optó por ocultarla bajo el tradicional tupido velo, en vez de llevarla a debate en espacios abiertos.

Efectivamente, el impulso a inicios de los 90 generado por la vivencia compartida de un proceso liberador y democratizante fue perdiendo fuerza en esas dos décadas y sus integrantes reemplazaron el proyecto colectivo por intereses partidarios y grupales. La dirigencia de la Concertación y los presidentes que ella eligió —después de la épica transicional inaugurada del Presidente Aylwin— no fue capaz de formular una narrativa movilizadora, consistente con las importantes políticas públicas implementadas, aptas para unificar las mayoritarias fuerzas concertacionistas. Aun cuando la Concertación pudo poner en agenda y aprobar reformas institucionales fundamentales, dejó en suspenso la formulación y diseminación de una propuesta de sociedad que le diera sentido y proyección al conjunto de políticas. De acuerdo al senador Jaime Gazmuri, la Concertación no fue capaz de "recoger las nuevas aspiraciones, exigencias y lenguajes de la sociedad, de ampliar la participación ciudadana para resolver sus liderazgos en todos los niveles, de proponer horizontes y sentidos de futuro"[15].

De esta forma, la polaridad dictadura-democracia fue perdiendo fuerza, aun cuando siguió siendo parcialmente efectiva dado el envejecimiento del padrón electoral. La Concertación no tuvo la capacidad de elaborar una nueva perspectiva, horizonte político o proyecto compartido, que revitalizara y proyectara sus fuerzas con

---

10. Marcelo Schilling, *El Mercurio*, 23 de enero 2010, pág. C4.
11. De acuerdo a Carlos Ominami, Gonzalo Martner y Guido Girardi, *La Tercera*, 18 de enero, 2010.
12. Ernesto Ottone, *La Tercera*, 18 de enero 2010, pág. 36.
13. Eugenio Rivera, "El rol del Gobierno en la derrota de la Concertación en primera vuelta", *La Tercera*, véase http://blog.latercera.com/blog/erivera/entry/el_rol_del_gobierno_en
14. Guido Girardi, *La Tercera*, 18 de enero 2010.
15. Jaime Gazmuri, "El Partido Socialista y el futuro", *La Segunda*, 26 de enero 2010, pág. 9.

una nueva propuesta de sociedad delineándola a medida que las políticas democratizadoras, de justicia y equidad se iban implementando. De la semántica discusión, acerca de si había o no terminado la transición, no se sacaron las conclusiones pertinentes, no entendiendo que ese debate estaba exigiendo una nueva formulación del proyecto concertacionista. O bien, si se entendió, ningún sector tuvo la fuerza suficiente como para hegemonizar su perspectiva.

3. Déficit intelectual

Otra explicación de la falta de proyecto colectivo la planteó el senador Ricardo Núñez al destacar la inhabilidad de la Concertación —a pesar de ser "dueña de los mejores equipos profesionales y políticos"[16]— de "encauzar adecuadamente una legítima discusión que fue surgiendo a propósito de los cambios que ha sufrido la sociedad chilena"[17]. Una de las razones ofrecidas para explicar esta insuficiencia fue el que "las mentes más brillantes de la Concertación han visto a los partidos y a la militancia política como una actividad menor"[18]. A su vez, los partidos descuidaron y desvalorizaron sus propias tareas intelectuales no abriendo espacio a la elaboración de línea política sustantiva. Así, la inicial capacidad intelectual instalada fue desperdiciada.

Una razón más profunda de esa incapacidad y desencuentro entre partidos e intelectualidad puede encontrarse en la desconsideración y falta de apoyo gubernamental al desarrollo de unas ciencias sociales legítimamente autónomas y críticas, pensadas como bien colectivo, vinculadas al proyecto de desarrollo nacional. La desconfianza postmoderna de post Guerra Fría hacia sistemas de pensamiento comprehensivos estimuló una cultura tecnocrática dominada por la economía neoclásica, centrada en logros de corto alcance, la solución de problemas puntuales a través de consultorías, y oscureció el desarrollo de visiones mas integradas de la sociedad y el Estado. Este sesgo economicista penetró al conjunto de las ciencias sociales y encontró eco en todos los niveles de la tecnocracia gubernamental. Contados fueron los casos, como el de Antonio Cortés Terzi, que a costo de parecer majaderos, permanentemente llamaban a una discusión más de fondo.

El trabajo académico —especialmente el sociopolítico— como capital social o bien colectivo y su rol en el desarrollo nacional fue depreciado y predominó el acento utilitario dejando la investigación librada al mercado. La Concertación, paradojalmente compuesta por destacados cientistas sociales, fracasó en este campo.

---

16. Ascanio Cavallo, "El 'big bang' de la Concertación", *La Tercera*, 18 de enero 2010, pág. 24.
17. Ricardo Núñez, *La Tercera*, 18 de enero 2010, pág. 37.
18. Eugenio Tironi, *La Segunda*, 18 de enero 2010, pág. 16.

De la misma forma, el apoyo técnico a los parlamentarios de la Concertación, que podría haber subsidiado la ausencia de esta capacidad analítica, nunca llegó al nivel que alcanzó el de la derecha, por lo que tampoco pudieron contar con un sólido respaldo legislativo. Ejemplo ilustrativo fue la Corporación Tiempo 2000, programa de asistencia legislativa que fue desechado por los partidos de la Concertación y que derivó en la dependencia legislativa de los cuadros técnicos del Ejecutivo.

Nada aprendió la Concertación de una situación parecida creada durante la Unidad Popular donde, de acuerdo a Manuel Antonio Garretón, se generó un vacío teórico-ideológico, "una relativa incapacidad de dar cuenta, a sí mismo y a los otros actores sociales, del carácter real de lo que se hace [expresando] el significado y proyección exactos del proceso que se vivía"[19].

De esta forma, a la incapacidad o falta de visión de la Concertación de proveer un sentido de futuro se le agregó un déficit intelectual que se fue profundizando durante esas dos décadas y, que entre otras manifestaciones, se expresó en la falta de una política proactiva frente a las universidades estatales, en particular a sus ciencias sociales, las que tuvieron que operar en niveles de sobrevivencia o adaptarse a un funcionamiento de mercado[20].

4. Crisis ética

Ante la ausencia de un proyecto aglutinador, producto de esta crisis hegemónica o de dirección y para mantener el orden en sus filas, al interior de la coalición surgieron fuertes tendencias autoritarias, las que, de acuerdo a dirigentes concertacionistas, transformaron a sus partidos, en el caso del PS en el Gobierno, "en una máquina de administración del poder"[21], rasgo que podría extenderse a los otros partidos de la coalición.

Este fenómeno no era nuevo y ya había sido denunciado en 2007 por Genaro Arriagada:

> Todo ocurrió como si se hubiera decidido ahogar la naciente democracia interna y volver al gobierno de oscuras oligarquías, ahora más rudas que los grupos de notables que en las décadas de los 20 a 50 habían manejado los partidos. Se cerraron de hecho los registros de militantes, el proceso de inscripción dejó de ser transparente quedando entregado a la benevolencia de anónimos burócratas de la organización, el conocimiento de los padrones electorales se hizo clandestino y se impulsaron, desde las directivas,

19. Garretón, M.A., *El proceso político chileno*, Santiago: FLACSO-Chile, 1983, pág. 45.
20. Tampoco las ciencias sociales pusieron mucho de su parte para renovarse.
21. Carlos Ominami, *La Tercera*, 23 de enero 2010, pág. 11.

"refichajes" o procesos de "depuración" de los listados de militantes, que permitieron reducir —incluso en decenas de miles— su número.[22]

Este autoritarismo, o "centralismo burocrático", se manifestó, de acuerdo a Francisco Javier Díaz, asesor de la presidenta Bachelet, en la "opacidad en muchas de sus prácticas"[23]. Estas se expresaron en hechos de corrupción, clientelismo político y la escasa participación y democracia en los partidos[24]. Las estructuras partidarias y los métodos de dirección fueron "cada vez más opacos (…) dominados por caciques autoritarios, que imponían su voluntad en base a métodos medios turbios"[25].

La manifestación más aguda de este autoritarismo, según Pepe Auth, secretario general del PPD, fue el limitado proceso de "primarias abiertas en todo el país y la ausencia de un debate nacional que definiera respuestas progresistas a los grandes problemas del país y restableciera los niveles necesarios de credibilidad en los compromisos de la Concertación para impulsarlas"[26]. Coincidían en este juicio Carlos Ominami e Ignacio Walker, quienes consideraban que habría sido necesario organizar "primarias abiertas en todo el país y un debate nacional que definiera respuestas progresistas a los grandes problemas del país y restableciera los niveles necesarios de credibilidad en los compromisos de la Concertación para impulsarlas"[27].

Este déficit ético de la Concertación tuvo consecuencias más profundas que el propio desprestigio frente a la opinión pública, ya que abandonó lo que muchos de sus dirigentes antes de 1990, inspirados en Gramsci, se habían comprometido con una "dirección moral" de la sociedad.

No es de extrañar, entonces, que ante esta falta de un proyecto político movilizador producto de una crisis intelectual y ética, la Concertación no haya sido capaz de conectarse con el mundo complejo, vital y proactivo de la juventud. De hecho, las importantes iniciativas de "escuela de cuadros", fundamentales para darle continuidad generacional a las fuerzas democráticas durante la dictadura, salvo escasas excepciones, brillaron por su ausencia. No así en la derecha, que trabajó sistemáticamente con las nuevas generaciones a través de los talleres bicentenario, generando nuevos liderazgos y propuestas de políticas públicas.

---

22. Arriagada, G., "El desprestigio de la política", Informe 610, 01-06- 2007, www.asuntospublicos.org. Citado por Jorge Arrate, "Algunas reflexiones sobre la Concertación y sus partidos", Friedrich Ebert Stiftung, junio 2008.
23. Francisco Javier Díaz, "Chile ya cambió", *La Segunda*, 18 de enero de 2010, pág. 18. Una crítica desde la derecha en: Duval, T., "1990-2009: Maldita Corrupción. La peor bofetada a los pobres", Santiago: Instituto Libertad, 2009.
24. Auth, P., "Anatomía de nuestra primera derrota y guías para la próxima victoria", véase http://www.ppd.cl/columna-de-opinion/anatomia-de-nuestra-primera-derrota-y-guias-para-la-proxima-victoria
25. Eugenio Tironi, *La Segunda*, 18 de enero 2010, pág. 16.
26. Ibíd.
27. *La Tercera*, 18 de enero 2010, pág. 36.

5. Crisis de representación

"La crisis de la Concertación es la crisis de los partidos" [28], concluía en su análisis el senador Gazmuri, a lo cual el senador Juan Pablo Letelier agregaba que "los partidos se han alejado (…) de los debates de la gente. Aquellos políticos que han aprendido a hacer política apegados a la gente les ha ido bien. Pero eso ha llevado a que la política tenga más bien liderazgos en las personas que en los partidos"[29]. Esta personalización de la política con la mediatización y "farandulización" asociadas coexistió con una creciente dependencia de los partidos respecto del Estado[30], perdiendo así su rol propio de representación y articulación de intereses.

La crisis de los partidos de la Concertación también fue asociada a la prescindencia presidencial. De acuerdo a analistas políticos, "Frei, Lagos, Bachelet tienen responsabilidad en esto. Se desentendieron de los partidos"[31]. En el caso de Bachelet, según Ominami, ella "actuó desde el primer momento más desligada de los partidos, sin hacerse cargo de la crisis"[32], juicio ampliado por Carlos Huneeus al indicar que la Presidenta se mantuvo "alejada de los partidos y de la Concertación, sin asumir directamente (como lo hizo el Presidente Aylwin) o a través de uno de sus ministros (como actuaron Frei y Lagos) la función mediadora en los conflictos de la coalición"[33].

Sin embargo, esta crisis de los partidos no fue necesaria y exclusivamente producto de la conducta de los parlamentarios o de los presidentes. Ella fue principalmente consecuencia del limitado y contrahecho rol que la Constitución y las leyes le asignaron —y continúa asignándole— a los partidos en el sistema político chileno, en su distorsión como mecanismos de representación ciudadana y de articulación de intereses, de ámbito de debate y generación de proyectos públicos de carácter nacional.

Desde 1990 Chile muestra la más alta concentración del poder en la Presidencia en toda su historia democrática, lo que ha roto de hecho el equilibrio entre los poderes del Estado, particularmente con el Congreso[34]. El Presidente puede vetar leyes aprobadas por este; asigna urgencias y tiene una amplia potestad

---

28. Jaime Gazmuri, op. cit.
29. Juan Pablo Letelier, *La Tercera*, 18 de enero 2010, pág. 37.
30. Eugenio Tironi, *La Segunda*, 18 de enero 2010, pág. 16.
31. Ibíd.
32. Carlos Ominami, *La Tercera*, 23 de enero 2010, pág. 11.
33. Carlos Huneeus, "Costos de la popularidad presidencial", *La Tercera*, 7 de febrero 2010, pág. 4.
34. La Constitución de 1980 vino a consolidar una tendencia al aumento de las facultades presidenciales que venía dándose desde la Constitución de 1925, y con sus modificaciones producidas en 1943 y 1970. Alan Bronfman, "Constitucionalismo chileno y Congreso Nacional: las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en las reformas constitucionales y

reglamentaria; puede refundir, coordinar y sistematizar leyes —lo que previamente debía realizarse bajo autorización expresa del Congreso—; denunciar un tratado internacional; designa tres ministros del Tribunal Constitucional —de hecho un órgano colegislador—; y cuenta con la "capacidad de articular la iniciativa con distintos actores, de ser espacio de diálogo y negociación con ellos y de formar equipos para estudiar y proponer proyectos de ley"[35], generándose una enorme asimetría de información y recursos que pone en desventaja a los parlamentarios. Por su parte, el Congreso no tiene un rol clave en la aprobación presupuestaria; sus tareas fiscalizadoras son limitadas ya que estas no pueden terminar en la destitución de un funcionario, salvo la acusación constitucional. Igualmente, para los acuerdos, observaciones o solicitud de antecedentes no existe sanción para el incumplimiento o atraso[36], y no hay exigencias respecto al contenido ni se compromete la responsabilidad política de los ministros. Las comisiones investigadoras no tienen capacidad de sancionar, salvo las acusaciones constitucionales, y las interpelaciones se han transformado en un espectáculo mediático. Finalmente, la posibilidad de que los parlamentarios puedan ejercer también como ministros debilita el rol del Congreso[37]. Para superar estas limitaciones institucionales, el senador Núñez propuso un cambio radical, un nuevo régimen constitucional que genere "las bases para un régimen semipresidencial que reequilibre los poderes del Estado"[38]. Sin embargo, esa crucial discusión de régimen político fue tempranamente sepultada, acusada de querer reeditar el desprestigiado parlamentarismo decimonónico.

En el actual marco institucional y estructura política —sin considerar los enormes sesgos introducidos por el sistema binominal— la crisis de los partidos no es otra cosa que una profunda crisis de la representación política, la cual impide que los delegados de la ciudadanía sean efectivamente sus representantes en el debate de la agenda nacional, en la articulación de intereses y en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.

---

proyectos de reforma constitucional del siglo XX". Ponencia presentada en el XXI Congreso Mundial de Ciencia Política, Santiago, 12-16 de julio 2009.

35. Jorge Insunza, "Reformas Sustantivas al Congreso", *El Mercurio*, 20 de junio 2009, pág. A2.
36. En este sentido, el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, tiene más y efectivas atribuciones que permiten que sus decisiones obliguen.
37. Un avance significativo podría ser una nueva ley de partidos enviada en mayo de 2008, la que fortalece la disciplina interna, establece transparencia, descentraliza, establece primarias internas para selección de candidatos, etc. No obstante, estas serían flexibles, trasparentes, voluntarias y vinculantes. Una crítica a estas limitaciones en: Claudio Fuentes, "El temor a más democracia", véase http://www.udp.cl/difusion/columnas/columnistas/fuentesS/democracia.htm
38. Núñez Muñoz, R., "Con la fuerza de las ideas: los desafíos de la Concertación", en Quiroga, Y., Ensignia, J. (eds.), *Chile en la Concertación (1990-2010) Una mirada crítica, balance y perspectivas*, Santiago: Friedrich Ebert Stiftung, 2009, pág. 35.

Frente a esta debilitada institución, la política de demolición del prestigio del Congreso y los parlamentarios por parte de los medios de comunicación (en la cual han ayudado con lamentables conductas algunos congresistas) encontró campo fértil. A pesar de este talón de Aquiles de la política democrática, la reforma del rol del Congreso no fue una prioridad concertacionista, por lo que los parlamentarios terminaron siendo rehenes de su propia inacción en este terreno[39].

6. Límites redistributivos

Otra de las consecuencias que tuvo la incapacidad analítica de la Concertación y sus partidos fue el no poder entender los cambios que sus propias políticas habían inducido en las clases medias. Tal como Gutenberg Martínez lo reconocía, "precisamente sectores que han sido beneficiados por las políticas de la Concertación, las clases medias, comenzaron a desarrollar necesidades que no supimos responder debidamente"[40]. Lo mismo fue reforzado por Ignacio Walker, cuando afirmaba que uno de los principales problemas de la coalición fueron las "dificultades para representar la sociedad emergente, a los sectores medios emergentes, a las mujeres, a los jóvenes"[41]. Desde el ángulo del PS, Marcelo Schilling destacaba que "nuestras políticas tendieron a favorecer a los grandes o poderosos y a los pobres, pero no nos hicimos cargo de la vulnerabilidad y las amenazas que tiene la clase media "[42]. Estas autocríticas políticas no explican el porqué de algunos sectores de la clase media que volcaron su apoyo a Piñera.

Un difundido análisis —sincrónico— de los resultados electorales por comuna confirmaría estas afirmaciones: "(…) el fin de la hegemonía de la Concertación se vincula directamente con los cambios socioeconómicos experimentados por el electorado en los últimos 10 años, en particular con la irrupción de la clase media aspiracional"[43]. Sin embargo, desde una perspectiva diacrónica, pareciera que las razones de este voto tienen que ver con la rígida distribución de ingreso que ha existido en el país y que en la última década no benefició a las clases medias, lo que

---

39. Curiosamente, Jovino Novoa, Presidente del Senado, retomó el tema proponiendo una limitación al poder presidencial de fijar urgencias en períodos electorales y la posibilidad de incorporar prioridades parlamentarias en ambas cámaras. *El Mercurio*, 8 de febrero 2010, pág. C4.
40. Gutenberg Martínez. "Cumplimos un ciclo pero perder por un 3% es una derrota bastante digna", *La Segunda*, 28 de enero 2010.
41. Ignacio Walker, *La Tercera,* 18 de enero 2010, pág. 36.
42. Marcelo Schilling, *El Mercurio*, 23 de enero 2010, pág. C4.
43. Cristóbal Aninat y Gregory Elaqua, "Elecciones 2009: el tiempo de Andrea, la vendedora de isapres, y no de la señora juanita", *El Mercurio*, 31 de enero 2010.

nos permite entender y analizar los resultados electorales desde una perspectiva más estructural.

Nuestra hipótesis se fundamenta, en primer lugar, en las conclusiones de un estudio de Dante Contreras *et. al.* sobre distribución de ingreso y desarrollo en Chile que nos informa que el crecimiento en esas dos décadas fue "pro-rico": los percentiles con mayores recursos fueron aquellos que más crecieron dentro de ese subgrupo entre los años 1990 y 2000[44]; y que la desigualdad "es explicada por el comportamiento del quintil más rico de la población. O, lo que es lo mismo, la desigualdad no se debe a que existan diferencias homogéneas entre quintiles. Antes bien, es el último quintil (el más rico) el que recibe un ingreso significativamente superior al resto de la población, mientras que las diferencias de ingreso entre los primeros cuatro quintiles no son de gran importancia"[45]. Diferencias que de acuerdo a la CASEN 2010 aumentaron en 2009 en relación al 2006, subiendo el índice de Gini (desigualdad) del 0,54 en 2006 al 0,55 en 2009. Esta situación se debería, según Manuel Agosín,

> (…) al modelo chileno de crecimiento. La política social no puede cambiar las desigualdades estructurales de la economía chilena, pese a que los subsidios monetarios hayan sido correctamente enfocados hacia los quintiles de más bajos ingresos (…) El nuestro es un modelo de economía abierta basado en el impulso de la minería, que emplea a muy poca fuerza de trabajo, cerca del 1%. La gran mayoría de los trabajadores se desempeña en el sector servicios, algunos de ellos con remuneraciones extraordinariamente bajas. Este patrón incentiva las desigualdades e impide avanzar hacia un empleo de calidad.[46]

En segundo término, a esta desigualdad, Solimano y Torche agregaban que "la distribución del ingreso es muy asimétrica y está altamente concentrada en el último decil (el más rico), que capta más del 45% de todo el ingreso[47]. Además, se muestra estable en el tiempo. Estas características son, en general, robustas para el ingreso de perceptores y del hogar *per cápita*, y además para los ingresos laborales. También detectamos una mayor desigualdad (un Gini más alto) en zonas urbanas que rurales"[48].

---

44. Contreras, D., Coope, R. y Neilson, C., "Crecimiento pro pobre en Chile", en *Documento de Trabajo,* N° 239, Departamento de Economía, Universidad de Chile, Santiago, mayo 2007.
45. Contreras, D., "Distribución del ingreso en Chile. Nueve hechos y algunos mitos", en *Perspectivas*, Volumen 2, N°2, mayo 1999.
46. *La Tercera*, 27 de julio 2010, pág. 9.
47. Ingresos autónomos, esto es antes de subsidios y transferencias del Gobierno.
48. Solimano, A., Torche, A., "La distribución del ingreso en Chile: La experiencia del último cuarto de siglo", 31 de julio 2008, págs. 5-6, véase http://www.andressolimano.com/publicaciones/distribucion.pdf

CUADRO 1

COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES SEGÚN DECIL DE INGRESO
(PORCENTAJE DEL INGRESO TOTAL)

Decil de Ingreso	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	2,4	2,1	2,2	2,4	2,3	2,7	2,6	2,7
2	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3
3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	5,1	5,1	5,2
4	5,9	5,9	5,9	5,8	6,2	6,1	6,0	6,2
5	6,6	6,9	6,7	6,9	7,1	6,9	6,9	6,9
6	7,7	8,0	7,7	8,0	7,9	7,7	7,8	7,7
7	8,8	9,1	8,8	9,3	9,3	9,1	8,8	8,9
8	10,7	11,3	10,7	11,2	11,3	11,0	10,6	10,9
9	14,8	14,7	14,7	15,4	15,4	14,4	14,8	14,9
10	34,1	32,9	34,4	32,0	31,1	32,9	33,2	32,5

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos INE

Finalmente, Reinecke y Valenzuela establecieron que el mejoramiento de los ingresos monetario de los sectores más pobres se realizó vía transferencias directas y no a través de aumentos salariales reales: "Los datos indican la limitación de un escenario donde se mejora la distribución a través de las transferencias mientras que los ingresos del mercado de trabajo, donde se genera la gran mayoría de los ingresos de los hogares, no registra mejoras"[49].

El Cuadro 1 muestra que el cambio en el ingreso de los hogares (distinto al de los perceptores) entre 2001 y 2008 favoreció a los quintiles 1 a 5 (sectores pobres y clase media "aspiracional" o emergente), mantuvo casi sin variaciones la distribución de los quintiles 6 a 9 (clase media tradicional), y disminuyó poco el del décimo quintil (ricos). Los datos preliminares aportados por la CASEN 2009 ratificaron esa tendencia y mostraron que entre 2006 y 2009 la evolución de la distribución del ingreso monetario de los hogares, según decil de ingreso autónomo *per cápita* del hogar, fue negativa para los deciles 4 a 9, esto es, tanto para la clase media emergente como para la tradicional[50].

Tenemos, entonces, que la Concertación implementó un conjunto de políticas públicas que mantuvo una estructura de distribución del ingreso rígida, estable, que favoreció a los sectores más pobres y no tocó a los más ricos. De esta forma, al existir un 10% de la población más rica que captaba el 45% del ingreso nacional —proporción que no cambió sustancialmente a través de los años—, un 20%

---

49. Reinecke, G., Valenzuela, M. E., *Distribución y mercado de trabajo: Un vínculo ineludible*, Santiago: OIT, Santiago, abril de 2008.
50. Véase http://www.mideplan.cl/casen/publicaciones/2009/distribucion_ingreso_casen_2009.pdf

más pobre que percibía solamente el 3.5%, y una política que aumentó ingresos a los pobres vía transferencias directas, la limitada redistribución que se observó en esos últimos años habría tendido a generar: a) un efecto de suma cero entre los sectores pobres y medios tradicionales; y b) una deprivación relativa de las clases medias —emergentes o tradicionales— que no recibieron los beneficios del sector más rico, ni de los más pobres.

CUADRO 2

INGRESO DE LOS HOGARES Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL (*)
(PORCENTAJE DEL INGRESO TOTAL)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Región Arica y Parinacota**								0,8
Región de Tarapacá	2,7	2,9	2,9	3,0	3,0	2,8	2,5	2,3
Región de Antofagasta	3,4	3,6	3,4	3,5	3,8	3,5	3,6	3,9
Región de Atacama	1,5	1,7	1,6	1,6	1,9	1,5	1,7	1,6
Región de Coquimbo	2,9	3,2	3,0	3,0	3,0	3,5	3,3	3,4
Región de Valparaíso	9,5	9,6	10,1	9,7	9,5	9,5	9,7	10,1
Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins	3,7	4,3	4,5	4,4	4,6	4,3	4,3	4,2
Región del Maule	3,9	4,3	4,3	4,4	4,1	3,9	4,2	3,9
Región del Bío Bío	10,9	11,4	11,3	11,3	11,1	9,6	9,8	9,5
Región de la Araucanía	4,6	3,9	4,3	4,6	4,2	3,9	4,1	4,6
Región de los Ríos**								1,8
Región de Los Lagos	5,2	5,0	5,2	5,4	5,2	5,4	5,4	4,1
Región de Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,8
Región de Magallanes y Antártida Chilena	1,2	1,3	1,5	1,2	1,2	1,1	1,3	1,0
Región Metropolitana	49,6	48,0	47,2	47,0	47,6	50,2	49,4	47,8

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos INE
(*) Incluye arriendos e intereses
(**) Estas regiones se incorporaron al análisis de la ESI en el año 2008, según última División Política Administrativa

CUADRO 3

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO REGIONAL Y VOTACIÓN PRESIDENCIAL 2010

REGIÓN	CAMBIO EN INGRESOS	FAVORECE	PUNTOS DIFERENCIA
Tarapacá	Decrece	Piñera	20
Antofagasta	Aumenta	Frei	4
Atacama	Aumenta	Frei	6
Coquimbo	Aumenta	Frei	10
Valparaíso	Aumenta	Piñera	6

RM	Decrece	Piñera	4
Bdo O'Higgins	Aumenta	Frei	2
Maule	Igual	Frei	6
Bío Bío	Decrece	Piñera	1
Araucanía	Igual	Piñera	15
Los Lagos	Decrece	Piñera	10
Aysén	Igual	Piñera	17
Magallanes	Decrece	Piñera	10

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio del Interior e INE

Si aceptamos la evidencia que muestra "una relación negativa entre el nivel de desigualdad del ingreso y el tamaño y riqueza de la clase media"[51], podemos analizar el voto en las regiones de acuerdo al aumento o pérdida proporcional en el ingreso nacional (Cuadros 2 y 3). Así, en el Cuadro 3 observamos que Frei ganó en aquellas regiones en que el ingreso aumentó, y Piñera en aquellas en que el ingreso disminuyó o permaneció igual, información lo que apoyaría la tesis de una "deprivación relativa" de las clases medias tradicionales en este período. Esta ocurre cuando los individuos o grupos se perciben a sí mismos como injustamente en desventaja respecto de otros con atributos similares y mereciendo recompensas similares[52]. Al no haber sido posible una efectiva reforma tributaria, por oposición de la derecha, estos sectores medios no pudieron recibir parte de los beneficios que efectivamente percibieron desde el año 2000 los más pobres. Frente a esta deprivación relativa la reacción de algunos sectores de la clase media habría sido la de votar por la derecha, tal como un estudio sobre este tema lo ha mostrado en los casos de la ultraderecha en Rumania y Francia[53].

Estos datos son corroborados por el análisis de encuestas de opinión que analizaron las bases electorales de Frei y que dan cuenta que este recibió un mayor

---

51. Solimano, A., "The Middle Class and the Development Process: International Evidence", 8 de julio 2008, véase http://www.andressolimano.com/articles/inequality/The%20Middle%20Class%20and%20the%20Development%20Process%20PAPER%20%20_July%2008,%202008_.pdf
52. Esta conceptualización sociológica elaborada originalmente por Stauffer, S.A., *The American Soldier. Adjustment During Army Life*, New Jersey: Princeton, New Jersey, 1949, y desarrollada como teoría por Runciman, W.G., *Relative Deprivation and Social Justice*, New York: Routledge, 1966; ha sido extendida al campo de la economía, específicamente al tema de la distribución del ingreso, por: Yitzhaki, S., "Relative deprivation and the Gini Coefficient", en *The Quarterly Journal of Economics*, 93:2, 1979.
53. Cfr. Fesnic, F.N., Viman-Miller, R., "What Drives the Vote for the Extreme Right? Absolute Vs. Relative Deprivation", Prepared for delivery at the Annual Conference of the American Political Science Association, Toronto, 3-6 de septiembre 2009, véase http://www.florinfesnic.us/?2ce7de00

apoyo en los sectores de bajos ingresos, de menor educación, rurales o ciudades pequeñas, y que a nivel socioeconómico tuvo mayor intensión de voto en los sectores E y D, y menos en el C2 y C3, esto es la clase media tradicional[54].

Es precisamente por estas razones que para algunos economistas concertacionistas era necesaria una reforma que eliminara las exenciones tributarias y regímenes especiales existentes, disminuyera el número de tramos y las tasas marginales del impuesto al ingreso de las personas y aumentara un poco la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas[55]. El asesor económico de Frei, José Miguel Benavente, afirmaba que se podría "aumentar el 1 por ciento del PIB en temas tributarios, algo así como 1.500 millones de dólares. Eso se consigue con racionalización de exenciones tributarias, mayor equidad tributaria, mayor equidad tributaria para la clase media, tributos en los recursos naturales e incorporar impuesto a emisiones de CO2"[56]. La lógica detrás de esta reforma la explicitaba Oscar Landerretche, explicando que "por la estructura progresiva del impuesto a la renta, las personas que invierten en capital humano, se educan, suben sus salarios y tienen que pagar tasas altísimas. Entonces, hay una cordillera tributaria que tienen que pasar las familias de clase media para ser parte de las elites de este país"[57]. Sin embargo, esas recomendaciones llegaron muy tarde.

Así, al no haberse logrado una reforma tributaria que modificara la estructura impositiva del país, los beneficios que ricos y pobres recibieron durante los gobiernos de la Concertación no se extendieron a la clase media tradicional, generándose una situación de privación relativa que las llevó a encandilarse con el espejismo derechista.

7. Pérdida del voto de la mujer

Otro importante factor en la derrota fue la pérdida del voto de la mujer, que en 2006 había favorecido a Bachelet. Un estudio de la Corporación Humanas[58] observó que las mujeres tenían un alto interés en política al representar el 52,6% del electorado; los votos nulos y blancos son menores en mujeres (3,7%) que en varones (4,2%); y que desde 1990 la tendencia mayoritaria del voto femenino era progresista. Sin embargo, para las elecciones parlamentarias de 2009 mostró que

---

54. Morales Quiroga, M., "¿Quiénes son, donde están, que quieren? Las bases electorales de los candidatos presidenciales 2009", Documento ICSO-UDP, Santiago, 2009.
55. Agostini, C., "La paradójica ausencia de debate tributario", véase http://www.blogeconomia.uahurtado.cl/?p=
56. Véase http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20091223/pags/20091223091614.html
57. Véase http://www.derechotributario.cl/not_detalle.php?id_noticia=436
58. Véase http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2010/01/ANALISIS-ELECCIONES-2009.pdf

el “voto de género”[59] favoreció a las candidatas de la Coalición por el Cambio, las que “lograron un significativo respaldo en las mesas de mujeres pues un 63,4% de las candidatas de la coalición obtuvieron mayor votación femenina. Del total de candidatas de la ‘Concertación’ y ‘Juntos Podemos más Democracia’ un 42,1% obtuvo voto de género”.

CUADRO 4

VOTO MUJERES ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2009-2010

	TOTAL	MUJERES	%
Primera vuelta			
Arrate	430824	210909	48,95
ME-O	1396655	793353	56,80
Frei	2053514	1072122	52,21
Diferencia Frei/ME-O			4,69
Centro izquierda	3880993	2076384	55,84
Piñera	3.056.526	1.642.090	44,16
Diferencia Centro Izquierda/Piñera			11,68
Total	6.937.519	3.718.474	53,60
Segunda vuelta			
Piñera	3582800	1921567	51,89
Frei	3359801	1781163	48,10
Diferencia Piñera/Frei			3,79

Todo lo anterior ayuda a explicar que el voto de la mujer que favoreció a Bachelet en 2006 y a la Concertación en primera vuelta en 2009 se debió a la existencia de candidatas mujeres y a propuestas que las favoreciera. Por otra parte (Cuadro 4), si se considera que el voto de mujeres en la primera vuelta favoreció a las candidaturas de centroizquierda, especialmente la de Marco Enríquez-Ominami (ME-O ex PS) en 11,6 puntos porcentuales, y que en la segunda vuelta el voto de las mujeres favoreció a Piñera por 3,79 puntos porcentuales, es posible afirmar que el voto preferencial de las mujeres por ME-O se volcó más a Piñera que a Frei en la segunda vuelta.

El conjunto de los datos estaba indicando que en la segunda vuelta la candidatura de Frei debería haber puesto especial énfasis en una atractiva propuesta para las mujeres. Esto era especialmente crítico en un contexto en el cual se sabía que las expectativas de autonomía de las mujeres habían crecido exponencialmente durante

59. Define “voto de género” cuando el porcentaje de votos obtenidos en mujeres respecto del total de electoras del distrito o circunscripción supera al porcentaje obtenido sobre el total de electores varones.

el gobierno de Bachelet. Los principales problemas que afectaban a las mujeres y que ellas sentían que debían ser resueltos pronto —especialmente las de clase media, ahora con una autoconsciencia de modernas— eran, en particular, las relacionadas con las tensiones entre trabajo y familia[60], las que no encontraron en la candidatura de Frei una propuesta *equivalente* al desarrollo e independencia logrado por la mujeres en este período. Por el contrario, esa propuesta fue improvisada, de muy baja calidad[61] y bajo perfil, frustrando a un importante segmento de su electorado potencial.

8. Crisis de conducción

Finalmente, pero no menos importante, un elemento coyuntural clave y que de alguna manera resumió todos los problemas anteriores, fue la deficiente campaña de la Concertación, especialmente la de su candidato presidencial. Esta presentó inicialmente tres candidatos, mostró permanentes debilidades, intereses cruzados, cambios en las figuras, voceros y conflictos entre el equipo político y el programático.

Frente a ella se posicionó una exitosa y profesional campaña de Piñera, la que por primera vez ordenó y homogenizó militantemente a sus fuerzas, se apropió de toda la simbología concertacionista, extrajo las mejores prácticas de las campañas ganadoras en el mundo y tuvo respuestas inmediatas a los desafíos que le formulaba la Concertación (superioridad moral, negocios y política, etc.).

No menos importante fue la escasez relativa de recursos frente al despliegue multimillonario de Piñera, el cierre empresarial en torno a su candidatura y la negativa de apoyar a Frei. Efectivamente, los montos declarados de gasto de campaña en la primera vuelta mostraron $5 mil millones gastados por Piñera y $3,4 mil millones por Frei[62]. Si a esto se le suma el control duopólico de los medios de comunicación, tal como un medio gubernamental lo indicó, los medios "orientados a favorecer a Piñera tenían por lo menos 10 veces más posibilidades de llegada al público que los favorables a Frei" [63]. En estas materias ha quedado en claro que en el campo de los medios de comunicación la Concertación cometió uno de sus principales errores históricos. De acuerdo a la Premio Nacional de Periodismo, María

60. Al respecto, véase: Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social*, Santiago, 2009.
61. "La desnudez o el cuerpo de las mujeres en sí no debe llamar a escándalo, pero al ser usado con fines políticos aparece como indigno e irrespetuoso", afirmó Lorena Fries de Corporación Humanas criticando la propaganda de la candidatura Frei en la segunda vuelta. http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/23963
62. *La Tercera*, 27 de enero 2010, pág. 10.
63. Editorial, *La Nación*, 24 al 30 de enero 2010.

Olivia Mönckeberg, el actual panorama de los medios "restringe el desarrollo, no sólo de la libertad de opinión, sino la posibilidad de conocer la realidad, de discutir sobre temas relevantes". Los gobiernos de la Concertación impulsaron pocas iniciativas para propiciar el "pluralismo" informativo e Internet "todavía no ha sido sustitutivo de los medios escritos" en el país[64].

Con todo, a pesar del enorme y valioso esfuerzo puesto por el candidato en la segunda vuelta, la campaña de Frei no pudo "vender" un producto que aparecía con fecha de vencimiento pasada, más aun cuando brillaron por su ausencia la mística, los contenidos y las formas.



Tal como afirmáramos anteriormente[65], sin lugar a dudas la Concertación de Partidos por la Democracia fue la coalición política más exitosa en la historia contemporánea nacional[66]. El desarrollo que bajo sus gobiernos tuvieron los derechos sociales no tiene parangón y, a pesar de las limitaciones institucionales y políticas enfrentadas, la importancia de la obra concertacionista fue un hito en la expansión de las libertades ciudadanas en el país. Pero el cambio de la dictadura a la democracia no implicó el *pleno* desmontaje del orden político y económico preexistente, tal como la coalición se lo propuso en 1989. Quedaron tareas pendientes.

Durante las dos décadas concertacionistas la altamente concentrada y centralizada configuración del poder, en lo sustancial, se mantuvo sin cambios significativos y las relaciones entre poder y democracia no se compatibilizaron adecuadamente. Por el contrario, estas fueron acumulando presión hasta estallar en 2011, bajo la forma de un amplio movimiento de protesta intergeneracional y multiclasista que puso en cuestión al conjunto de las principales instituciones existentes en el país, evidenciando la profunda crisis, no solo de la educación, sino también del rol del Estado, del sistema de representación política y de la organización económica y social.

Coincidiendo con este diagnóstico, dirigentes concertacionistas reconocieron esta situación, tal como lo hiciera el entonces ex y futuro presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien al finalizar el gobierno de Frei estimaba que "en Chile 'los de arriba' tienen demasiado poder (…) esa cuota desmedida y desproporcionada de poder deberá superarse progresivamente"[67]. Cinco años más tarde, casi

64. Mönckeberg, M.O., "Chile es un caso 'paradigmático' de concentración de medio", véase http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20091105/pags/20091105173456.html También véase Ibíd, *Los magnates de la prensa: concentración de los medios de comunicación*, Santiago: Random House-Debate, 2009.
65. Varas, A., *La democracia frente al poder. Chile 1990-2010*, Santiago: Catalonia, 2012, págs. 378-379.
66. Cfr. Bascuñán, C., Correa, G., Maldonado, J. y Sánchez, V. (eds.), *Más acá de los sueños, más allá de lo posible. La Concertación en Chile*, Santiago: LOM Ediciones, 2009.
67. Escalona, C., *Una transición de dos caras. Crónica crítica y autocrítica*, Santiago de Chile: LOM Ediciones, pág. 169.

al finalizar el gobierno del presidente Lagos, Soledad Alvear volvía a establecer que "la derecha tiene el poder del dinero, tiene poderes ocultos, tiene el predominio de las comunicaciones. Nosotros no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es el poder que nos ha confiado la gente"[68]. Esta constatación se hizo más evidente aun al finalizar el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando su ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, reconoció que "el poder está mal distribuido en Chile. Los ricos tienen más poder que los pobres, los productores más que los consumidores y los empleadores más que los trabajadores"[69].

Así, los propios dirigentes concertacionistas —a quienes en 1989 los ciudadanos les entregaron el mandato de plasmar la inicial promesa de dar curso a "*procesos reales de descentralización y desconcentración del poder*"—, terminaron coincidiendo que en veinte años de gobierno esa tarea no fue cabalmente cumplida.

Por ello, al finalizar la segunda vuelta de la elección presidencial, Jorge Arrate definió la situación como el momento en que Chile alcanzó "el punto más alto de fusión entre dinero y política", agregando que "hoy la derecha suma al poder económico, comunicacional y gubernamental, buena parte del Congreso y de los municipios, poderosas universidades, colegios y escuelas, instituciones de salud y seguridad social privadas, o sea una concentración de facultades desconocida en Chile, salvo durante los diecisiete años de dictadura pinochetista"[70].

El conjunto de factores tanto coyunturales como estructurales, antes señalados, permiten explicar el triunfo de Sebastián Piñera en 2010 y, al mismo tiempo, ayudan a entender las características y desafíos que enfrentó su accidentada administración.

---

68. Alvear, S., "Progresismo y nuevos desafíos", en Águila, E. (ed.), *Los desafíos del progresismo. Hacia un nuevo ciclo de la política*, Santiago: Catalonia, 2005, pág. 245.
69. Velasco, A., Huneeus, C., *Contra la desigualdad el empleo es la clave*, Santiago: Random House Mondadori, 2011, pág. 26.
70. Arrate Mac Niven, J., "Nuevos tiempos políticos", carta a los adherentes, votantes y simpatizantes de mi candidatura en la primera vuelta presidencial, Santiago, 18 de febrero 2010. Véase http://www.cctt.cl/correo/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:nuevos-tiempos-politicos-carta-de-jorge-arratemac-niven&catid=26&Itemid=50. Conceptos similares expresó posteriormente Eduardo Frei, "Los primeros 45 días de Piñera: Realidades que inquietan", *La Segunda*, 23 de abril 2010.

CAPÍTULO 3

LA INSTALACIÓN
Pendrives, cronómetros y carpetas

La esencia de un fenómeno
se revela en el instante de su génesis.

Milan Kundera, *Un encuentro.*

En las 18 semanas transcurridas entre la elección de Sebastián Piñera, candidato de la Coalición por el Cambio, y su discurso ante el Congreso Pleno, la política chilena se vio sustancialmente alterada. El terremoto que golpeó al país y el cambio político que representó el Gobierno entrante generaron nuevas dinámicas alterando de manera radical el escenario político existente a mediados de enero de 2010.

La crisis de la Concertación fue más profunda de lo esperado y la unidad de las fuerzas gubernamentales fue menor a la anticipada, todo lo cual dio lugar a un reordenamiento político en el cual las prioridades de la nueva administración tuvieron que ser modificadas y la oposición se vio forzada a una postura menos confrontacional que la imaginada.

En ese período de acomodación de las fuerzas políticas a las nuevas condiciones, se observó a un Ejecutivo que intentaba encontrar un punto de equilibrio por sobre sus fuerzas políticas y sociales de apoyo, trataba de lograr una forma de entendimiento con la oposición anunciando medidas no contempladas en su programa, y le imprimía un muy personal sello a su gestión, aun cuando el perfil de las promesas anunciadas y la inspiración de base de su orientación política se mantuvieron.

El manejo del Estado se convirtió en un desafío difícil de superar en el corto plazo, condicionando parte de sus acciones. A su vez, el terremoto y sus secuelas alteraron el plan de instalación gubernamental, concentrando la agenda legislativa en los planes de reconstrucción. Esta nueva configuración del sistema de relaciones políticas impactó al interior de la Alianza generando una creciente tensión entre la UDI, RN y el Ejecutivo, especialmente sobre aquellos nuevos temas puestos por la emergencia y que no habían sido previamente discutidos en la campaña o en los comités de programa, lo que revivió la antigua división al interior de la coalición gobernante.

De igual forma, en ambas coaliciones y en cada uno de sus partidos las relaciones internas se vieron enervadas por los competitivos procesos de elección de las nuevas directivas, evidenciándose fisuras que no se habían expresado con fuerza durante el período eleccionario y que, pasada la inauguración del nuevo Gobierno, se manifestaron en toda su magnitud.

1. La apertura

En su discurso de la noche del triunfo, el presidente electo formuló dos parámetros estratégicos de su gestión: un Gobierno de unidad nacional incorporando personalidades independientes o que no votaron por él; y una democracia de los acuerdos para conducir una segunda transición que llevara al desarrollo[1]. Intentaba así reeditar la política del Presidente Aylwin que, al iniciar la transición a la democracia en 1990, pactó con la derecha en torno a temas claves para la estabilidad política del momento.

En el plano programático, la propuesta de campaña de Piñera enfatizó siete puntos centrales, con énfasis en una economía de mercado contra el rol destacado del Estado, entre los que se enfatizaba el "reducir la desigualdad en el acceso a los activos productivos, tales como educación, infraestructura y derechos de propiedad; mejorar el funcionamiento de los mercados, ya sea el de productos, el laboral o el de los créditos; fortalecer la capacidad redistributiva del Estado descentralizando los programas sociales; y el mejorar el sistema político mediante mayor transparencia o eliminando ventajas injustificadas". Las políticas públicas a través de las cuales se alcanzarían estas metas estarían muy condicionadas por el perfil del Gabinete del nuevo presidente.

En la primera semana, inmediatamente después de su triunfo, comenzaron a delinearse los grandes temas de confrontación sociopolítica tanto con la oposición como con las organizaciones sindicales.

Los primeros en salir a la cancha haciendo relucir sus propios intereses fueron los empresarios, quienes, después de la elección de sus principales dirigentes gremiales, rápidamente exigieron mayor flexibilidad laboral; la disminución del salario mínimo; el término del sistema de indemnización por años de servicio[2];

1. Formulación explicitada en su columna: "Democracia de los acuerdos: ¿En qué consiste? ¿Por qué ahora? ¿Es posible?", *El Mercurio*, 31 de enero 2010. Una crítica a esta propuesta en: Carlos Peña, "¿Democracia de los acuerdos?", *El Mercurio*, 31 de enero 2010.
2. Rafael Guilisasti: "En materia laboral también hemos planteado que el seguro de cesantía es un mecanismo muy eficiente que ojalá se pueda reforzar, para cubrir los ajustes que se producen en las empresas, y avancemos hacia un contrato único con un seguro de cesantía más fuerte y disminución de las indemnizaciones por años de servicio". Carlos Jorquiera, Consejero de la

rebajas tributarias; reformas al sistema regulatorio (litio[3] y acuícola; trámites de aduana, transacciones financieras; otorgamiento de permisos) poniendo fin de las "exigencias desmedidas que suelen acompañar los procesos de proyectos en materias medioambientales"[4]. Las demandas de flexibilización laboral preocuparon de inmediato a la dirigencia sindical, lo que llevó al secretario general de la CUT a pronunciarse en contra de una mayor flexibilidad laboral y del término de la indemnización por años de servicio[5], temas que reiteró en su discurso con ocasión del 1 de mayo.

Al poco correr de los días la democracia de los acuerdos mostró una nueva faceta cuando sus partidarios la evidenciaron como una manera de evitar la oposición a iniciativas centrales de la próxima administración. Un punto álgido fue la propuesta de ingreso de capitales privados a CODELCO, lo que fue rechazado no solo por la Concertación sino por los sindicatos de la cuprífera y las centrales sindicales. El vespertino *La Segunda* editorializaba que:

> Evidentemente, cuando los dirigentes anuncian "tiempos difíciles" para los trabajadores, levantan slogans del tipo "ni un paso atrás" y llaman a hacer de la mesa del Senado una trinchera opositora, crean un ambiente político menos propicio a los entendimientos. También, al demonizar determinadas iniciativas, como la posibilidad del ingreso de capitales privados a CODELCO (un planteamiento que muchos técnicos de la Concertación apoyan), o al sugerir encabezar una suerte de frente común con distintos grupos de presión (CUT, colegios profesionales), rigidizan posiciones y estrechan el marco de lo conversable.[6]

A nivel de los medios de comunicación, una señal de cómo sería el manejo de la prensa la dio el candidato triunfante cuando concedió entrevistas solo a condición que no se le interrogara acerca de sus negocios y el estado en que se hallaba la promesa de desprenderse de ellos[7]. De la misma forma, la propia prensa comenzó a cambiar su lenguaje. Así, frente a la presión de la UDI y RN por una mayor presencia de sus militantes en el Gabinete, informaban que "el Presidente escuchó

Cámara de Comercio de Santiago, "que se avance en la disminución del salario mínimo y el término de indemnización por años de servicio". *La Nación*, 19 de enero 2010.

3. Preocupación por la propuesta del Senador Ricardo Núñez de declarar al litio como material estratégico incorporado en la Constitución. *El Mercurio*, 26 de enero 2010, pág. B3.
4. "¿Cuales deben ser los principales obstáculos que deben removerse?", *El Mercurio*, 13 de febrero 2010, pág. A3.
5. Arturo Martínez, *La Nación*, martes 19 de enero 2010.
6. Editoriales, "Acuerdos versus oposición dura", *La Segunda*, 27 de enero 2010.
7. "Sebastián Piñera o, lo que es lo mismo, quienes dependen de él concedieron entrevistas a condición de que no se le interrogara acerca de sus negocios y el estado en que se hallaba la promesa de desprenderse de ellos". Carlos Peña, "Piñera y la prensa", *El Mercurio*, Columnas y Blogs, 24 de enero 2010.

la opinión de los partidos", o cuando Piñera designó en el Gobierno a candidatos derrotados en la últimas elecciones, comentaba que "se aprovechará la experiencia política para el mejor aprovechamiento de sus funciones públicas", dejando atrás las críticas al cuoteo y "premios de consuelo"[8]. De esta forma, un tercio de los candidatos derrotados de la Alianza terminaron ocupando cargos en el Gobierno[9].

Las tensiones al interior de la Alianza por el nombramiento de partidarios en cargos de Gobierno llegó a finales de abril hasta la misma UDI, cuando el ministro de Planificación, Felipe Kast, sobrino del rival del presidente del partido, le pidió la renuncia a la dirección del FOSIS a Pablo Coloma, hermano del presidente de la UDI.

La necesidad de poner gente de ese partido en regiones reemplazando a funcionarios elegidos por la Alta Dirección Pública se sumó al conflicto de intereses generado por la presencia de la jefa de asesores, Ana María Brahm, como consejera del mismo, lo que puso en cuestión—aun después de su renuncia a esta— la función original de la institución.

Una vez nominado el primer Gabinete, el Presidente electo inauguró una nueva estrategia bajando al máximo las posibles confrontaciones con la oposición de manera de aplacar las tensiones que generaría el reinventar el país, creando así una necesaria continuidad tranquilizadora para no enfrentar conflictos importantes los cien primeros días de gobierno. En esa línea el ministro designado en Minería afirmó que CODELCO seguiría siendo estatal, el de Salud que la píldora del día después estaría disponible en los consultorios, y el de Agricultura que INDAP seguiría y sería reforzado. Igualmente, en materia de empleados fiscales, en los días posteriores a la designación del Gabinete y en el discurso del Presidente electo se trataron de borrar temores señalando que no habría persecución política.

En política internacional, se estimaba que el nuevo Gobierno se distanciaría de las administraciones progresistas de la región y estrecharía relaciones con las contrapartes más conservadoras, como Alan García, Álvaro Uribe y Felipe Calderón. Ya se habían establecido diferencias con la administración saliente respecto del tema de la mediterraneidad boliviana, se esperaba estrechar vínculos con Perú, en medio de la demanda peruana en La Haya, y se tuvo una primera confrontación retórica con el Presidente Hugo Chávez. El alineamiento privilegiado con los EE.UU. iba a enfriar las relaciones con Brasil, y el rol de Chile en UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa sería alterado. En la medida que el programa de política exterior de Piñera enfatizó la necesidad de una reforma a la carta democrática latinoamericana para no solamente evitar los golpes militares, sino también asegurar el ejercicio democrático del poder, especial importancia revistió su reticencia inicial

---

8. Jorge Donoso Pacheco, "Designación de subsecretarios", *El Mercurio*, 20 de febrero 2010, pág. A2.
9. *El Mercurio*, 18 de abril 2010, pág. C5.

de darle el apoyo gubernamental a la reelección del Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza (PS).

Sin embargo, a los pocos días de ser elegido Piñera mostró una nueva disposición respecto a Brasil y Bolivia, no continuó atacando a Chávez, y gracias a un eficiente lobby concertacionista apoyó la candidatura de Insulza en la OEA, evitando el aislamiento hemisférico en caso de su reelección. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se contuvo a los sectores más radicales del grupo Hamlet, y el ministro Alfredo Moreno tomó control institucional del mismo. Destinaciones como las embajadas en Naciones Unidas y Suiza fueron un reflejo del aislamiento de los sectores más conservadores del grupo y vocales al interior del ministerio. En su primer viaje al exterior, Piñera apoyó en Buenos Aires la candidatura de Kirchner a la secretaría general de UNASUR lo que llevó al secretario general del Partido Comunista a reconocer que "se está imponiendo una política exterior racional con Cuba y Venezuela"[10].

Con todo, el alineamiento internacional de fondo de la nueva administración quedó en claro en la reunión de Cancún, donde se dio inicio a la Comunidad Latinoamericana de Naciones, oportunidad en la cual Piñera criticó fuertemente la situación de los derechos humanos en Cuba producto de la muerte de Orlando Zapata en huelga de hambre. En este contexto se entiende la decisión del nuevo Gobierno de apelar la resolución judicial que cerró el caso Soria alegando que existe "un compromiso internacional del Estado de Chile con la familia Soria". Enmarcada la gestión de política exterior por los límites de la continuidad, las novedades que la nueva administración podría introducir se manifestaron con más fuerza en un cambio significativo de personal. Este giro pragmático y priorización de América Latina en la agenda presidencial, que apareció continuando las orientaciones concertacionistas en política exterior, estuvo fundamentalmente forzado por la necesidad de sumar fuerzas continentales en el contexto de la demanda peruana en La Haya, así como proteger las inversiones chilenas en el exterior, principalmente situadas en los países vecinos.

Estas primeras señales mostraron los principales desafíos que el nuevo presidente enfrentaría. Sin mayoría en ambas cámaras y descartado el gobernar vía decretos, Piñera reconocía en los hechos las dificultades de lograr acuerdos amplios para una agenda de cambios sustanciales, los que serían difíciles de lograr. Al mismo tiempo, le sería complicado incorporar más mecanismos de mercado a los programas de protección social o cuando tratara de ampliarlos a las clases medias sin mediar reforma tributaria alguna. Complejas se verían las relaciones con la oposición cuando tratara de debilitar el sistema regulatorio o cuando los sectores más conservadores de su coalición, y aquellos vinculados al Opus Dei y Legionarios de Cristo, intentaran revertir medidas en derechos sexuales y reproductivos. Las relaciones obrero-patronales se

10. Guillermo Teillier, *La Tercera*, 10 de abril 2010, pág. 11.

verían crispadas por los deseos del sector empresarial de mayor poder en el campo laboral. Y su Gobierno de unidad nacional debería enfrentar las tentaciones de demoler el prestigio político de Concertación durante sus veinte años en el Gobierno.

En tal contexto, el principal desafío que enfrentaba esa derecha que llegaba democráticamente al Gobierno después de cincuenta años, pero sin mayoría parlamentaria, era demostrar en la práctica —más allá de la retórica— que era capaz de lograr un proyecto de país con unidad y acuerdos nacionales, sin que la concentración del todo el poder —económico, político y mediático— que ostentaba, la llevara a ceder a sus históricas tentaciones autoritarias. Sin embargo, como veremos más adelante, el escenario político se vería sustancialmente modificado después del terremoto del 27 de febrero.

2. Primer Gabinete

La primera y más importante actividad del presidente electo, tres semanas después del triunfo, fue la nominación de su primer Gabinete, cuyos integrantes fueron ampliamente destacados por sus pergaminos académicos y técnicos.

La función política de ese panegírico no fue otra que darle sustento retórico a la opción presidencial de integrar personas sin peso político-partidario específico y de no convocar a políticos o parlamentarios aliancistas que habían manifestado deseos de integrarse al equipo ministerial. De esta forma, el Ejecutivo tomó distancia de los partidos, aumentó su control personal sobre el Gabinete y no permitió individualidades políticas que pudieran tener un rol protagónico, lo que llevó a algunos de sus partidarios a adoptar posturas "díscolas" frente a algunas de sus políticas. Sumado esto, a los cambios en el "segundo piso" y a la autoridad de María Luisa Brahm como jefa de asesores, se comenzó a configurar un mando presidencial fundamentalmente centrado en la Presidencia y el Ministerio del Interior. Esta decisión no estuvo desprovista de críticas en su propio partido, donde Andrés Allamand inmediatamente protestó por la falta de sensibilidad y experiencia política del Gabinete.

Las características de ese primer Gabinete, y de algunas otras autoridades gubernamentales, mostraron la impronta del nuevo Gobierno en su primera etapa de instalación. Aun cuando Rafael Guilisasti, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), anticipándose a la composición del Gabinete afirmaba que "el propio Sebastián Piñera ha señalado que éste no será el gobierno de los emp|resarios"[11], después de las nominaciones quedó en claro, según Carlos Peña, que este sería un "Gabinete del *retail*" y que parecería "cada vez más a los restaurantes de provincia: un país atendido por sus propios

11. *La Nación*, martes 19 de enero de 2010.

dueños"[12], siendo caracterizado como el Gabinete de los gerentes, similar al de Jorge Alessandri en 1958.

No obstante, un análisis más de cerca de la configuración de este primer Gabinete muestra que, más importante que la presencia de gerentes, Ph.D, o ingenieros provenientes fundamentalmente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un par de importantes colegios privados, el equipo presidencial se constituyó básicamente como el grupo de representación de los diez más importantes conglomerados económicos del país (Cuadro 5).

CUADRO 5

VÍNCULOS CORPORATIVOS DEL PRIMER GABINETE DE PIÑERA

	Empresas y Directorios	Sector	Conglomerado	Otros
Ministerio del Interior: Rodrigo Hinzpeter (RN)	Casa & Ideas SMU	Retail	Álvaro Saieh	Universidad Católica
Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Cristián Larroulet (UDI)	Universidad del Desarrollo	Educación	-	Universidad Católica
Ministerio de Hacienda: Felipe Larraín (UDI)	D&S Antarchile Deutsche Bank Independencia Viña Quintay	Retail Holding Copec Deutsche Bank A.G. Fondo Inversiones Vitivinícola	Pedro Ibáñez Angelini Propio Propia	Universidad Católica
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Felipe Morandé Lavín	BCI Asesoría Financiera Viña Quintay	Finanzas Vitivinícola	Juan Yarur Propia	Universidad Católica
Ministerio Secretaría General De Gobierno: Ena von Baer (UDI)	-	-	-	Universidad Católica Investigadora Instituto Libertad y Desarrollo
Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Camila Merino	SQM	Minería	Julio Ponce Lerou	Universidad Católica
Ministerio de Educación: Joaquín Lavín (UDI)	Universidad del Desarrollo	-	-	Universidad Católica Opus Dei

12. Carlos Peña, "El gabinete de Piñera", *El Mercurio*, domingo 7 de febrero de 2010; "El gabinete del retail", *El Mercurio*, domingo 14 de febrero 2010.

Ministerio de Economía: Juan Andrés Fontaine (UDI)	Banco de Chile Transelec Socovesa Quiñenco Bolsa Electrónica	Financiero Electricidad Construcción Alimentos Holding	Andrónico Luksic Brookfield Asset Manage-ment (BAM) Familia Gras Andrónico Luksic	Universidad Católica Consejero Libertad & Desarrollo
Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (RN)	-	-	-	Universidad Católica
Ministerio de Vivienda: Magdalena Matte (UDI)	Papelera Dimar Cristalerías Chile	Industrial	Ricardo Claro	Universidad Católica
Ministerio de Relaciones Exteriores: Alfredo Moreno	Falabella Sodimac	Retail	José Luis del Río, DERCO	Universidad católica
Ministerio De Defensa: Jaime Ravinet	Aguas Metropolitanas Geotec Boyles	Sanitarias Sondajes mineros	Aguas Barcelona Propia	Universidad de Chile
Ministerio de Minería: Laurence Golborne	Inversiones Alsacia Ripley Corp Inversiones Arrigoni Inversiones Ecomac Havas Media Vox	Retail Minería Construcción Comunicaciones	Horst Paulmann Marcelo Calderón Familia Mas Propia	Universidad Católica
Ministerio de Justicia: Felipe Bulnes	Inversiones del Litoral Bulnes, Pellegrini y Urrutia	Inmobiliaria Propio	-	Universidad Católica
Ministerio de Agricultura: José Antonio Galilea (RN)	Universidad Autónoma	Educación	Grupo familia Teodoro Ribera (inversiones en: Instituto Profe-sional Incacea (35%); Clínica del Maule (21%); Canal 2 Autónoma Televisión (100%); Colegio particular George Chaytor English College, en Temuco (100%).	INACAP
Ministerio de Energía: Ricardo Rainieri	-	-	-	Universidad Católica
Ministerio de Salud: Jaime Mañalich	Clínica las Condes	Salud	-	Universidad de Chile Fundador Comité de Médicos de Clínicas Privadas
Ministerio del Medioambiente: María Ignacia Benítez (UDI)	Gestión Ambiental Consultores	-	-	Universidad de Chile

Ministerio de Planificación: Felipe Kast (UDI)	-	-	-	Schoenstatt Instituto Libertad & Desarrollo
Ministerio de Obras Públicas: Hernán de Solminihac	Pavimentos APSA	Infraestructura	-	Universidad Católica
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Luciano Cruz-Coke	Lastarria 90	Entretenimiento	-	-
SERNAM: Carolina Schmidt	Foods S.A.	Alimentos	Andrónico Luksic	Universidad Católica

Los ministros seleccionados —personas destacadas en sus tareas empresariales y profesionales— fueron altos ejecutivos o miembros de directorios de los principales grupos económicos nacionales, lo que les ofreció a estos últimos acceso e influencia directa en la formulación de políticas públicas.

A diferencia del Gabinete de los gerentes de Alessandri en 1958, en el que sus más connotados miembros eran efectivamente empresarios, estos eran partidariamente independientes y fueron seleccionados por pertenecer a los gremios empresariales, específicamente a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA); pero sus relaciones con los grandes empresarios no fueron nada fáciles[13]. El propio Alessandri había sido presidente de la CPC y consejero de la SOFOFA, así como los subsecretarios de Economía, Transportes y Minería, todos ellos bajo el mando del triministro Roberto Vergara[14]. A diferencia de ese Gabinete, los nominados por Piñera no fueron dirigentes de las cúpulas gremiales empresariales, sus intereses no eran corporativos representando sectores productivos, sino agentes directamente interesados y con vasta experiencia en los rubros de los respectivos conglomerados, abriendo así un amplio margen para el conflicto de intereses entre estos ministros y sus conglomerados de origen, lo que fue una temática permanente durante toda la gestión piñerista.

Socioculturalmente, el equipo ministerial replicó el perfil profesional, económico y la experiencia del propio Presidente. Las redes sociales que los contenían y unían se constituyeron de hecho en una nueva cofradía apta para ejercitarse en el poder político. Esta distancia relativa de las estructuras partidarias y su dependencia de la figura del Presidente, si bien le dieron un cierto pegamento funcionario, dejó al Gabinete sin el necesario respaldo político, tema que surgirá repetida y conflictivamente en la relación Gobierno-Alianza.

13. Arriagada, G., *Los empresarios y la política*, Santiago: LOM Ediciones, 2004, pág. 126.
14. Correa, S., *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*, Santiago: Editorial Sudamericana, 2004, pág. 223; Correa, S. et. al., *Historia de siglo XX chileno*, Santiago: Editorial Sudamericana, 2001, pág. 207.

Mención aparte amerita la nominación y aceptación del democratacristiano Jaime Ravinet en el Ministerio de Defensa, el único nombre que el presidente electo logró reclutar desde las filas del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su fallido retorno a la alcaldía de Santiago —que sepultó sus aspiraciones como precandidato presidencial— lo distanció de su partido y dirigencia, y resentido por el poco apoyo prestado a su candidatura se alejó de hecho de la actividad partidaria. Sus críticas a la reforma del Ministerio de Defensa (MINDEF) fueron públicas, lo que terminó poniéndolo en una zona cercana al candidato triunfante.

El equipo ministerial se completó con la nominación de subsecretarios y asesores. La presencia de la UDI y RN se vio con mayor claridad en la nominación de los primeros, accediendo al Ejecutivo después que el presidente electo escuchó "la opinión de los partidos", consultó con los ministros y procedió al tradicional y criticado cuoteo, en el cual influyeron las principales figuras de cada partido[15]. A nivel de asesores, los centros de pensamiento de la derecha desembarcaron en masa en el Gobierno, siendo Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán quienes, con fuerte sesgo UDI, lograron introducir un mayor número de expertos en cargos gubernamentales claves en relación a los provenientes del Instituto Libertad de RN. No obstante, en los cargos políticos tendieron a predominar nombres más vinculados a RN y al círculo íntimo del Presidente, lo que motivó las permanentes quejas de la UDI.

Así, la configuración del equipo de Gobierno tendió a responder más que nada a una estructura de mando personalizada del Presidente y su círculo más íntimo, dejando relativamente fuera de la toma de decisiones a las estructuras partidarias y empresariales corporativas que le dieron el apoyo electoral.

3. La parafernalia del nuevo poder

La puesta en escena y escenografía de las nominaciones de ministros y subsecretarios, junto a otros elementos simbólicos, deben ser considerados en un análisis comprehensivo del inicio del nuevo Gobierno. Tal como indica la historiadora española, Carmen Orcástegui,

> En conjunto, los ritos y ceremonias de acceso al trono deben considerarse como partes integrantes del sistema político y de la estructura de poder, no deben ser entendidos como elementos secundarios de un sistema político o como una máscara tras la que se esconde una manera de ejercer el poder, sino como forma de poder en sí mismos.

15. Cfr. "Las 7 claves de la designación de los subsecretarios del gobierno de Piñera", *El Mercurio*, 21 de febrero, pág. D6; "El triunfo de la UDI en el gallito de los subsecretarios", *La Nación Domingo*, semana del 21 al 27 de febrero de 2010, págs. 4-6.

> Además, todos los gestos propios de las ceremonias se relacionan con la propaganda política y la legitimidad del poder.[16]

Así, la elección del logotipo encargado y elegido por la nueva administración —cuyo costo ascendió a los $100 millones—, el Museo Histórico Nacional[17] como lugar elegido para la ceremonia, el *pendrive* y cronómetro con que se condecoró a ministros y subsecretarios respectivamente, la primera entrevista televisiva del Presidente en el Patio de los Naranjos de la Moneda, o el nuevo podio para comunicados gubernamentales en la casa de Gobierno, mostraron, por una parte, tanto la nueva forma de cómo se comenzaría a ejercer y dónde radicaba el poder, así como la intención de imprimirle una cierta dignidad a los actos gubernamentales, intentando de esta forma subsidiar una ausencia, quizás no conscientemente percibida, de la débil institucionalidad con que se gobernaría.

Estas características del nuevo Gobierno se vieron refrendadas en el discurso del Presidente Piñera en la ceremonia de nominación de sus colaboradores que mostró, entre otros, cuatro importantes rasgos simbólicos a destacarse. El primero, fue el criterio de selección de los elegidos: "amar a Chile con pasión" y, obviamente, por su superlativa valoración de ser un grupo de "excelencia, con sólida formación e intachable trayectoria académica, profesional y política, férrea honestidad, sentido de servicio público, generosidad y patriotismo". Calificativos que llamaron la atención al ser otorgados a quienes sin experiencia previa en el aparato público aún no habían puesto en evidencia tales atributos en su gestión gubernamental. Un segundo elemento fue el énfasis en consagrar como épica la gestión gubernamental que se avecinaba, augurándole a los nominados una tarea "ardua, sacrificada e incomprendida", comparable con la de los próceres que dieron su vida por la Independencia y los soldados de la Guerra del Pacífico que se enfrentaron con la "soledad, con el sueño y con la muerte". Aun cuando el presidente electo reiteró afirmaciones del ex Presidente Aylwin sobre que no se partiría de cero, exhortó a sus futuros ministros indicándoles que juntos "tomaremos los pinceles y comenzaremos a dibujar", dando la impresión que el bastidor estaba más en blanco que prediseñado. Finalmente, esta épica de reinventar el país requería apoyos adicionales por lo que pidió a Dios la ayuda necesaria.

Esta necesidad de reforzar la imagen del nuevo poder al servicio del país se volvió a manifestar retóricamente después de la caótica y sísmica transmisión

---

16. Orcástegui Gros, C., "La coronación de los reyes de Aragón. Evolución política, ideológica y ritual", en *Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol*, Universidad de Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pág. 635.
17. Edificación que albergó en la Colonia al Palacio de la Real Audiencia, al Primer Congreso Nacional y primera Casa de Gobierno, a la Real Audiencia durante la reconquista, al Cabildo de Santiago, y fue sede de Gobierno hasta 1845, y posteriormente Intendencia de Santiago.

del mando en Valparaíso. El Presidente Piñera, en su primer discurso en la Moneda, afirmó que:

> La nueva transición apunta a construir un Chile desarrollado, sin pobreza, con verdadera igualdad de oportunidades y con oportunidades de progreso para todos sus hijos. Cualquiera sea la condición de la cuna que los vio o los verá nacer. Pero esa nueva transición apunta también a levantar el alma de nuestro país, no solamente progreso material, también progreso espiritual; a construir un Chile en que el valor de la vida y la familia sean siempre sagrados; a construir un Chile en que los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad, el trabajo bien hecho y la responsabilidad, sean siempre valorados y respetados; un Chile con espíritu de unidad y con confianza en nuestro presente y con mucha esperanza en nuestro futuro.

Como se verá a continuación, estos generosos conceptos no se correspondían con las propuestas de sus fuerzas de apoyo, así como con los primeros nombramientos y reacciones frente al proceso de reconstrucción.

4. Efectos políticos del terremoto

El sismo del 27 de febrero, 8.8 en la escala de Richter y que conmovió al país entero, generó cambios políticos de significación. Los días siguientes se caracterizaron por una serie de recriminaciones al Gobierno saliente por la demora en responder a la emergencia, en particular para controlar el orden público y terminar con los saqueos en Concepción y otras zonas devastadas. Sin embargo, cerca de la transmisión del mando se inauguró una etapa de colaboración en la que el Gobierno saliente incorporó a funcionarios de la entrante administración en los comités de crisis y el Gobierno electo manifestó su voluntad de mantener a algunos funcionarios públicos en funciones para darle continuidad a la gestión. En este marco de colaboración con la futura oposición concertacionista Piñera intentó retomar la política de un "nuevo trato" consistente en un acuerdo en torno a tres proyectos de ley: uno de emergencia, otro de reconstrucción y un tercero para posibilitar las donaciones privadas para la reconstrucción.

Por su parte, el tono y las críticas a la gestión del Gobierno saliente pasaron a un nivel más constructivo, que apuntó a la reforma del Estado y la creación de una nueva y más eficiente institucionalidad estatal para enfrentar adecuadamente problemas de alerta temprana, el establecimiento de un centro de control y mando, de un comité de crisis permanente y una claridad sobre su dirección ejecutiva, lo que significaría resolver los problemas de comunicación y coordinación de todos los recursos estatales incluyendo las Fuerzas Armadas. Este cambio de política se vio reforzado por el increíble apoyo logrado por la presidenta Bachelet, la que,

indiferente de las críticas, recibió a los pocos días antes de transferir el poder a Piñera un contundente 84% de aprobación ciudadana[18].

En medio de estas réplicas políticas, se evidenciaron tres impactos no anticipados del terremoto que adquirieron relevancia. El primero fue el daño causado a la imagen de la Marina producto de la incompetencia y demora del SHOA en dar la alarma de maremoto, lo que cobró cientos de víctimas fatales. Pero junto a este deterioro de la imagen institucional, se sumó un pequeño pero significativo episodio centrado en la figura de Nicolás Ibáñez, socio y director de D&S, que en uniforme de campaña como reservista de la Marina ayudaba a empaquetar productos en un local penquista. Aun cuando este hecho le mereció una reprimenda del mando superior, quedó en evidencia la estrecha vinculación de la Armada con el sector empresarial y la ausencia de un vínculo permanente con los sectores medios de la zona. A esto se le sumó la muerte de un comerciante en Hualpén producto de su detención por parte de infantes de marina a cargo del orden público en la zona, lo que afectó las buenas relaciones de esta rama de la defensa con los sectores populares.

El despliegue de las FF.AA. en apoyo a un sobrepasado cuerpo de Carabineros para resguardar el orden público —que contó con un amplio apoyo ciudadano— se convirtió en el escenario propicio para que reaparecieran propuestas de modificación del rol de las instituciones armadas. Así, en columna editorial de un matutino, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, afirmaba que "las Fuerzas Armadas tendrían que ser consideradas con roles diferentes a los que actualmente se les otorga, que incluyan tanto tareas de seguridad, como de apoyo a la emergencia"[19]. Llamó la atención una propuesta de esta naturaleza toda vez que los roles de las FFAA estaban establecidos en la Constitución y las tareas de los militares en situaciones de emergencia quedaban claramente definidos. Esta propuesta de cambio de roles de alguna manera se vio acompañada de una inusual presencia de ex comandantes en jefe de las instituciones armadas en el Ministerio de Defensa. Acompañando al ministro como su jefe de Gabinete, reapareció el ex comandante en jefe de la Armada, almirante (r) Rodolfo Codina, y como subsecretario de Defensa el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Oscar Izurieta.

La respuesta del Ejército fue más medida y en el marco de sus competencias implementó una Fuerza de Apoyo Humanitario bajo el mando de jefaturas militares regionales que, trabajando en paralelo con la División Fraternidad del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), lo reforzó con 1.120 personas y contrató un total de 12.000 civiles en trabajos de emergencia.

Una segunda consecuencia no anticipada del sismo fue la nueva pérdida de legitimidad del sector privado. Este que en las últimas décadas mostraba una baja con-

---

18. Véase http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Terremoto2010.pdf
19. Juan Emilio Cheyre, "Un cimiento sólido para reconstruir", *La Tercera*, 6 de marzo 2010, pág. 4.

fianza en la opinión pública había mejorado levemente su imagen en veinte años de democracia. Así, del exiguo 7,8% que declaraba tener mucha confianza en los empresarios en febrero de 1991 (el más bajo de todos los sectores mencionados) solo pasó a recibir un 18% de opinión de confianza en marzo-abril de 2008, llegando a un 28% en octubre de 2009[20]. Sin embargo, diversos hechos ocurridos en medio de la catástrofe y durante el período de reconstrucción no ayudaron a mejorar esta deteriorada imagen. De acuerdo a Acción/RSE, en 2013, "las evaluaciones bajo nota 4 presentan una media total de 55,1%"[21].

El saqueo en Concepción (junto a los ocurridos en Talca, Arauco y Santiago), del cual al 8 de marzo se habían recuperado US$2 millones en mercaderías robadas, generó condenas y se asignaron responsabilidades, ante lo cual proliferaron las explicaciones políticas (el énfasis en el garantismo del derecho y no en las responsabilidades, un sistema que protegería a los delincuentes y no a las víctimas, la ausencia de una autoridad, la impunidad, la falta de liderazgo); valóricas y morales (el deterioro de la familia chilena, la codicia, el egoísmo, el individualismo, la falta de sobriedad de las clases dirigentes); y sociales (la falta de solidaridad, de comunitarismo, ausencia de redes sociales, las desigualdades, una sociedad dividida, sin cohesión ni ligazones éticas). Sin embargo, las más potentes fueron las de Verónica Gómez y Domingo Asún, quienes pusieron el énfasis en el saqueo como desquite y expresión de un resentimiento social frente al *retail* e instituciones ante las cuales no se sentía lealtad[22]. Este factor explicativo se validó posteriormente con la evidencia de claras responsabilidades de inmobiliarias en la construcción de edificios nuevos, supuestamente antisísmicos, que quedaron inutilizados después del terremoto[23].

Frente a esta crisis de credibilidad, la respuesta del sector empresarial fue modesta. La responsabilidad social empresarial, en esa hora de prueba de su efectivo compromiso, se manifestó débilmente en la Teletón, en la que figuras empresariales se sumaron a la farándula y otros aportaron sumas muy menores comparadas con las utilidades generadas por sus respectivos conglomerados[24]. Sin embargo, la mayoría de las empresas encontraron en el terremoto una oportunidad de negocios. De acuerdo a Claudio Fuentes, se usó y abusó de la tragedia:

---

20. CEP, "Encuestas de opinión pública", varios años, véase http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_443_pag_1.html
21. Véase http://www.accionrse.cl/uploads/files/Estudio%20confianza.pdf
22. Opiniones de diversos sectores en: "Saqueos: ¿Por qué?", *El Mercurio*, 7 de marzo 2010, pág. A4; y Mariela Vallejos, "Los daños morales de un cataclismo social", *La Nación Domingo*, semana del 7 al 13 de marzo de 2010, págs. 32-33.
23. Cfr. http://ciperchile.cl/2010/03/15/estas-son-las-constructoras-e-inmobiliarias-de-los-edificios-mas-danados-en-santiago-2/
24. Por ejemplo: Álvaro Saieh, US$4 millones; Isabel Allende, US$500 mil, 12,5% de lo donado por Saieh.

> Para promocionar bienes y servicios…: un banco ofreciendo créditos de consumo a "tasas y condiciones espectaculares" para hacer frente a este cataclismo, como si los afectados tuviesen capacidad de crédito en estos momentos. Una empresa de *retail* posponiendo generosamente la cuota del mes de marzo a sus clientes de las zonas afectadas, mostrando con la mano en el corazón un acto de altruismo en aquella rebaja. Una tercera ofreciendo minutos de celular gratuito a sus "clientes", asumiendo que las víctimas tienen celular y pueden comunicarse (…) empresas que compran avisaje en los periódicos para explicarles a sus clientes el envío de cientos de camiones a la zona de catástrofe. Otro conglomerado que comete el desatino de colocar las marcas de sus asociados en una mediagua. Otra empresa que informa de la donación de un millón de sus artículos a los afectados y de miles de millones de pesos a la Teletón como parte de su contribución a Chile. Una cadena de farmacias que informa que todas sus sucursales del país están en pleno funcionamiento como un compromiso con el país, como si abrir una tienda fuese parte de un acto generoso.[25]

Un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) mostró graves vicios en la oferta de créditos post-terremoto, señalando que "cerca de un 52% de la publicidad no cumplió informar sobre las condiciones legales y la vigencia de la oferta, se abusó de la letra pequeña, lo que dificultó el acceso a la información y podía llevar a confusión a los consumidores. Entre las empresas infractoras estuvieron el banco BCI, Banco de Chile, BBVA, CorpBanca, Santander Banefe, Scotiabank, CENCOSUD, ABC DIN, Easy y Líder"[26]. Este oportunismo frente a la tragedia nacional no ayudó a mejorar la imagen y ni contribuyó a apuntalar la alicaída legitimidad del sector privado, la que siguió siendo erosionada por la decisión de algunas inmobiliarias en las zonas de catástrofe que traspasaron todo su patrimonio a otras compañías con contratos ficticios para evitar responsabilidades civiles.

No obstante las críticas que levantaron estas reacciones empresariales, el gobierno anunciaría la adjudicación a tres grandes empresas (Easy, Homecenter y Construmart) el programa "Manos a la obra", encargado de la reconstrucción post-terremoto. Aun cuando este tipo de compras directas y adjudicaciones sin licitación era permitido por la legislación sobre sismos y catástrofes, las críticas tanto desde la oposición como del sector empresarial mediano y pequeño, inmediatamente se hicieron sentir obligando al Gobierno a modificar parcialmente su política. Así, a los pocos días de haber anunciado este paquete de compras, el ministro del Interior informaba que habría "una segunda fase" en la que incorporarían las PYMES y las ferreterías de la Región del Bío-Bío implementando

---

25. Claudio Fuentes S., "La solidaridad como negocio", *El Mostrador*, 9 de marzo 2010.
26. Véase http://sernacparticipa.blogspot.com/2010/03/graves-vicios-en-publicidad-de-creditos.html

"un sistema de adquisición a través de las intendencias, para que las ferreterías también sean parte de este programa"[27].

5. Costo y origen de los fondos para la reconstrucción

Un tercer fenómeno asociado al terremoto fue la rápida reacción de la administración entrante de dar por descontado que el programa presidencial y sus promesas debían alterarse en vista de la emergencia, por lo cual se fijaron nuevas prioridades y se inició un estudio para cambiar la Ley de Presupuestos.

Al mismo tiempo, la estimación del monto total de la reconstrucción se convirtió en campo de enfrentamiento de entre quienes vieron en esta situación una nueva oportunidad de privatizaciones o, por el contrario, de aumentar algunos impuestos. Así, aun cuando consultoras privadas estimaron que el costo solo sería cercano a la mitad o un tercio de la estimación gubernamental[28], los USD$30 mil millones se constituyeron en la línea de base de la administración y sirvieron de apoyo para el cambio de prioridades y nuevas fórmulas para solventar el costo de la reconstrucción. Así, resurgieron las propuestas de nuevas políticas económicas que aprovecharan estas "oportunidades de temporada" y se volvió al tema de la privatización de CODELCO, afirmándose que: "Esta es la gran oportunidad para atreverse a privatizar parte de CODELCO. Un porcentaje de la empresa de todos los chilenos ayudaría a levantar a los afectados por la tragedia, reconstruir mejor, terminar con la pobreza y asegurar el futuro de la cuprera"[29]. La venta de la participación estatal en las sanitarias sería otra de las fórmulas barajadas.

Tampoco fue desaprovechada la oportunidad por el editorialista económico de *El Mercurio* cuando señalaba que en el área educacional "no necesariamente debe reemplazarse en su totalidad la infraestructura dañada [dado que] el tiempo que los estudiantes pasan en la sala de clases no tiene efectos importantes en su desempeño [y] la jornada escolar completa arroja resultados sólo modestos", agregando que en materia de salud el AUGE estaba "introduciendo en la atención de salud una discriminación de consecuencias insospechadas… para mejorar la atención en salud de la población sería más adecuado un modelo de seguros catastróficos que cubra los desembolsos de las personas hasta cierto monto"[30].

La discusión sobre las fórmulas de financiar la reconstrucción fue multidimensional. Por una parte, se volvió a criticar el gasto del último año de la presidenta

---

27. "Gobierno incorpora a PYMES para reconstrucción", *La Nación*, 2 de abril 2010.
28. Agencia EFE, "Chile cifra pérdida en infraestructura pública en 10.000 millones de dólares", véase http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gkvEvJa1Vv_wBx0jsVZNDZ-EW2kg
29. Leonidas Montes, "La oportunidad del terremoto de Piñera", *La Tercera*, 14 de marzo 2010, pág. 47.
30. "Elevar la mirada", *El Mercurio*, 15 de marzo 2010, pág. A3.

Bachelet y la ejecución presupuestaria por parte del ministro Velasco, que habría dejado limitados recursos al Gobierno entrante. Por la otra, se anunciaron recortes presupuestarios dado lo "estrecho" del presupuesto, la redefinición de algunos proyectos, recortes a ministerios, reducción de personal y de los honorarios de asesores gubernamentales para equipararlos a los de la administración anterior. Desde una perspectiva más proactiva se inició el debate sobre un aumento de impuestos, incluyendo un incremento del *royalty* minero, un endeudamiento moderado y la venta de activos estatales que no fueran ENAP y CODELCO, propuestas que incendiaron la pradera aliancista.

Los dos temas más urticantes para la derecha fueron el aumento transitorio de impuestos a las ganancias de las grandes empresas y el *royalty* minero. Por una parte, especialistas como Paul Fontaine propusieron triplicar a este último, frente a lo cual Hernán Büchi respondió enfatizando la opción de privatizar, endeudarse y pagar con privatizaciones pero no con *royalty*. Una curiosa tercera posición surgió en una editorial de *El Mercurio*, que, considerando la demostración de sensibilidad de las empresas mineras ante la catástrofe, proponía un *royalty* voluntario[31].

Este llamado de atención del sector empresarial al Presidente evidenció una falla estructural en la relación entre el equipo de Gobierno y los gremios empresariales —o la nueva "fronda aristocrática"— que en las primeras semanas de Gobierno no vieron con buenos ojos la personalización del poder en el Ejecutivo, la marginación de las influencias institucionalizadas y reaccionaron con temor frente al riesgo de un aumento de la carga impositiva que podría ser más que temporal. El mayor de todos los miedos era que Piñera respondiera y representara los intereses del grupo de empresas presentes en su Gabinete más que los intereses corporativos del empresariado como un todo. Por tales razones los máximos representantes de las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por Rafael Guilisasti, tuvieron un primer encuentro oficial con el Presidente, quien ratificó su intención de un aumento temporal de los impuestos a las grandes empresas sin afectar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), ni a las personas, por lo que la opción de aumentar gravámenes a las grandes firmas no estaba descartada, ante lo cual Guilisasti reaccionó afirmando: "No somos partidarios de un alza de impuestos, pero esa es una opinión como cualquier otra"[32]. El pragmatismo y la necesidad de obtener recursos para la reconstrucción, que no debilitara el dólar y, al mismo tiempo, no implicara niveles mayores de inflación, finalmente doblegó la actitud más ideológica antiimpositiva de sectores del empresariado y de la UDI (Jovino Novoa). Al mismo tiempo, la actitud heterodoxa de Piñera y su ministro

---

31. *El Mercurio*, Editorial, 9 de marzo 2010, pág. A3.
32. *Diario Financiero*, "Piñera ratifica a la CPC que alza de impuestos es una alternativa para financiar reconstrucción", 30 de marzo 2010. http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100330/cont_137227.html

de Hacienda, que recordaban políticas concertacionistas, simbólicamente mostró el poder presidencial ante el cual se sometía la resistencia empresarial.

Finalmente, la propuesta del Ejecutivo a ser enviada al Congreso contempló un aumento de tres puntos porcentuales al impuesto a las empresas por tres años, aumento por dos años del *royalty* a las mineras entre el 3,5% y el 9%, alza de contribuciones a inmuebles con tasación superior a $100 millones, y aumento del 60% al 67% del impuesto al tabaco. Sin embargo, la "letra chica" de la propuesta nuevamente mostró las características que las políticas públicas de la administración tendrían en su punto de partida. Así, en lo relativo al *royalty* minero, el ministro de Minería confesaba que este tenía importantes beneficios para las compañías:

> El sistema que estamos planteando va a permitir a las mineras ser más socias del país en los momentos buenos de ciclos de precios, y en los malos, el país también va a ser socio con ellas cobrándoles menos impuestos, va a ser variable en función de los ciclos o de los márgenes de las empresas, en este caso. El tercer elemento tiene que ver con la prolongación de la invariabilidad tributaria, lo que les da una garantía de que no habrá discrecionalidad durante un período importante respecto a una industria tan relevante como la minería en Chile[33].

Lo mismo se observó en materia del aumento de impuestos a las grandes empresas, ya que, cómo el diario oficialista *La Nación* lo señalaba, "si bien el gobierno elevará transitoriamente el tributo a las empresas, impulsará también un beneficio que permite depreciar el primer año el 50% de nuevas inversiones. Expertos tributarios dicen que ello reduciría la base impositiva y, por tanto, las firmas pagarían menos impuestos. Economistas estiman que es un incentivo importante a la inversión"[34]. La fuerte crítica a esta compensación forzó finalmente al Ejecutivo a eliminar del proyecto de ley la depreciación acelerada.

La discusión del proyecto de creación del Fondo Nacional para la Reconstrucción (FNR) fue un momento decisivo que mostró los límites del accionar del Gobierno y las capacidades de la oposición para contribuir a una política pública pensando en el interés nacional. De esta forma, durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados "la Contraloría hizo observaciones al proyecto convergentes con las de la oposición eliminando del comité ejecutivo que dirigiría el Presidente de la República y la secretaría ejecutiva, la irretroactividad de la normativa, y la reducción del ámbito de potestad administrativa del Jefe de Estado. [Con lo que el FNR quedó] sujeto a fiscalización de la Contraloría y la Cámara de Diputados,

---

33. "Ministro de Minería: Con Cambio a *Royalty* Sistema Tributario Va a Ser Bastante Más Justo", *Estrategia*, 27 de abril 2010, http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=29280
34. "Expertos: depreciación acelerada puede compensar alza de impuestos", *La Tercera*, 20 de abril 2010, pág. 22.

que operará como un programa del Ministerio de Hacienda inserto en la ley de presupuesto y que tendrá un conjunto de reglas de administración que disuelven cualquier interrogante acerca de su funcionamiento[35]".

No obstante este acuerdo oposición-Gobierno, las otras dos propuestas del *royalty* y aumento de impuestos a las grandes empresas evidenciaron una profunda y transversal fisura al interior de la Alianza escuchándose acusaciones de "política concertacionista". A las críticas del presidente del Consejo Minero al *royalty* por discriminar contra mineras se sumaron ex ministros de Pinochet, como Rolf Lüders, quien criticó el aumento de impuestos y *royalty* argumentando que bajarían los incentivos para invertir[36], lo que fue ampliamente apoyado por Hernán Büchi. La disputa llegó al interior de RN y la UDI, donde dirigentes como Jovino Novoa y Andrés Chadwick mostraron opiniones completamente opuestas entre sí.

Estas diferencias con el sector empresarial y parte de la Alianza —en pleno proceso de renovación de sus dirigencias partidarias— fueron presentadas por los medios de comunicación como parte de una política de toma de distancia del Ejecutivo respecto del mundo político y económico, intentando demostrar su independencia en ambos frentes en el contexto del controvertido tema de la relación política-negocios, el que hasta mayo de 2010 seguía persiguiendo al Presidente por su no resuelta relación con Chilevisión. Sin embargo, estos desacuerdos más que independencia mostraron una diferencia de procedimiento, no una ruptura estratégica.

Un episodio no anticipado que agitó las aguas aliancistas fue la visita del Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone quien frente a los numerosos escándalos de pedofilia en que se ha visto involucrada la Iglesia católica, afirmó que conocía estudios que habrían demostrado que "no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad, este es el problema"[37]. Tales afirmaciones, no relacionadas con el propósito de la visita destinada a evaluar la próxima nominación del Cardenal de Santiago en reemplazo de Monseñor Errázuriz, generó una amplia polémica sobre homosexualidad y pederastia, dejando la sucesión del Cardenal a un lado, reponiendo la situación de los Legionarios de Cristo y sacando al tapete las acusaciones de abuso sexual contra el ex párroco de la iglesia de los Sagrados

---

35. "Acuerdo político para la Ley de Donaciones", *La Nación*, 23 de abril 2010.
36. Rolf Lüders, "Una oportunidad desperdiciada", *La Tercera*, 20 de abril 2010, pág. 4.
37. Véase http://www.radiobiobio.cl/2010/04/13/exigen-a-cardenal-bertone-demostrar-vinculos-entre-homosexualidad-y-pedofilia

Corazones de El Bosque, Fernando Karadima[38]. En este torbellino se vieron enfrentados sacerdotes y seglares, quienes, a favor o en contra de las acusaciones, profundizaron viejas fisuras entre liberales y conservadores en el seno de la Iglesia y de la Alianza. Frente a esta situación el Presidente se pronunció con claridad contra todo tipo de abuso sexual y comprometió la protección a "todos nuestros niños y nuestras mujeres"[39].

6. En medio de un triángulo

En este primer período de instalación de su Gobierno, el Presidente Piñera quedó estratégicamente ubicado en medio de un triángulo de fuerzas al interior del cual desplegó su iniciativa en esas primeras dieciocho semanas: se posicionó por sobre sus fuerzas políticas y sociales de apoyo con las consabidas críticas y tensiones internas en la Alianza; sin mayoría parlamentaria y necesitado de lograr acuerdos, tuvo que reconocer la necesidad de negociar con la oposición; y, sin experiencia previa en la administración pública, encontró que el Estado era una empresa más difícil de manejar que la privada.

Producto de la acción opositora, parte de las iniciativas gubernamentales sufrieron modificaciones, tal como sucedió con la eliminación de la depreciación acelerada del proyecto de financiamiento de la reconstrucción, el cambio de la naturaleza del fondo de reconstrucción y la eliminación del mismo de quienes participaron en la Teletón. Con todo, las iniciativas gubernamentales siguieron mostrando su inspiración original tal como sucedió con la agenda política[40] cuando al referirse al tema del voto de chileno en el exterior declaró que "somos y siempre hemos sido abiertos y entusiastas partidarios de que los chilenos también puedan votar desde el extranjero, siempre y cuando tengan un compromiso y sentido de pertenencia con nuestra nación, y por lo tanto vamos a buscar los mecanismos para que eso ocurra, tanto para chilenos que se encuentren de visita en el exterior y para los que residen en forma más permanente". De la misma forma, el salario ético situado en los $240 mil pesos solo estaría compuesto por el salario mínimo más subsidios directos a los sectores de más bajos ingresos, el *royalty* minero congelaba todo cambio impositivo hasta el 2020, la reforma tributaria sería por una sola vez

38. Una dimensión política de este caso en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/04/28/los-nexos-del-caso-karadima-con-el-asesinato-del-general-schneider
39. *La Nación*, 25 de abril 2010.
40. Inscripción automática y voto voluntario; voto de chilenos en el extranjero; cambio de fecha para elecciones; reforma al Servicio Electoral; locales de votación mixtos, reforma a la ley de Partidos Políticos, que contemplaría el sistema de primarias; y la posibilidad de que los ciudadanos puedan promover proyectos de ley.

recaudando el Estado en 2013 menos que en 2010, y la extensión del postnatal sería una flexibilización más que una extensión neta de días[41].

La imagen proyectada de independencia relativa de sus fuerzas de apoyo llevó, prematuramente, a caracterizar la administración Piñera como quinto Gobierno de la Concertación, y a la figura presidencial de personalista, caudillista, hasta llegar al extremo de calificarlo de ¡bonapartista! Incluso, frente a los inicios de una negociación entre el Partido Regionalista Independiente (PRI) y Renovación Nacional para crear una federación de partidos más amplia que la Coalición por el Cambio, eventualmente integrando sectores del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Alex Buchheister especulaba que dentro de la UDI circulaba "el fantasma que lo que se persigue [con esta distancia del Ejecutivo] es restarle [a la UDI] base electoral o aislarla para formar un nuevo referente con sectores de la Concertación"[42].

Esas críticas, sumadas a las dificultades de gobernar un Estado tan diferente al mundo de la empresa privada, entrabaron la gestión presidencial en diversos ámbitos (nombramientos, iniciativas legislativas) lo que perjudicó sus primeros sondeos de aprobación y los de su gobierno. De acuerdo a la encuesta de Adimark realizada entre abril y mayo de 2010, la desaprobación a Piñera aumentó trece puntos porcentuales. Ese castigo fue mayor en el grupo de mujeres, en todos los grupos de edad —menos los jóvenes—, en los sectores socioeconómicos ABC1 y C3, y en regiones, y la aprobación de su gobierno bajó en catorce puntos porcentuales en todos los grupos[43]. Por su parte, la encuesta de Subjetiva para Giro País, a fines de abril y comienzos de mayo, mostró la más baja aprobación del gobierno en el grupo socioeconómico D y un aumento de más de 20 puntos porcentuales en la percepción del gobierno de Piñera como representante de los grandes empresarios (91,5%)[44].



La estrategia seguida por el Presidente desorientó a todos los actores políticos llevando a sus partidarios a exigir lealtad al proyecto original; a la oposición parlamentaria, a demandar ser parte de la discusión de los proyectos enviados a las comisiones asesoras; y a los partidos de la Concertación, a imaginar el potencial

41. "La subsecretaria del Sernam, María Paz Lagos, señaló que la propuesta inicial del Gobierno apunta a flexibilizar el post natal de 45 días para el pre y 84 para el post de manera de poder traspasar días del primero al segundo y ver la factibilidad de optar por un retorno paulatino al trabajo hasta llegar a los 6 meses". Véase http://www.puntomujer.emol.com/mujer_y_trabajo/noticia/detallenoticia.asp?id=%7B807F87A1-AF79-479F-90D2-3B9C4841C964%7D

42. "Entre la lealtad y el desorden", *La Tercera*, 16 de mayo 2010.

43. Adimark, "Encuesta: Evaluación Gestión del Gobierno. Informe mensual Abril 2010", véase http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Abr10.pdf

44. "Resultados 10ª Encuesta política y social", estudio realizado por Subjetiva para Giro País, mayo 2010.

peligro de quedar sin banderas. Así las cosas, los meses que siguieron fueron claves para establecer las tendencias, estrategias y objetivos de largo plazo que finalmente se perfilarían con más fuerza en el proceso de asentamiento del nuevo equipo presidencial, así como las políticas que llevaría a cabo para implementar su comprometido programa de Gobierno, u otro.

CAPÍTULO 4

UNA NUEVA DERECHA
Presidencialismo plebiscitario y los "33"

En sus primeros seis meses de gobierno el Ejecutivo intentó crear las precondiciones para una amplia restructuración del sistema de relaciones políticas en torno a su propio liderazgo. Su insistencia en que la transición había terminado fue parte del esfuerzo para crear el espacio adecuado a tal redefinición[1].

Esa postura estuvo apoyada en dos hechos principales. Primero, al contar con escasos cuatro años de gobierno y sin mayoría parlamentaria —lo que le impedía introducir profundos y significativos cambios sistémicos—, el Presidente enfatizó los llamados a la unidad nacional y a una democracia de los acuerdos. Segundo, porque en ese marco de restricciones se vio obligado a continuar con algunas de las políticas concertacionistas. Su propuesta de campaña, reforzada en el primer Mensaje, enfatizó "una nueva transición para construir un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades de igualdad, cualquiera que sea la cuna", horizonte estratégico en nada incompatible con el camino pavimentado durante veinte años de gobiernos concertacionistas. A esas políticas intentaba agregarles valor a través de una nueva y mejor forma de gobernar —reiterada 66 veces en su primer Mensaje— empapada de un obvio sesgo empresarial tendiente a abrir nuevos y más amplios focos de renta y lucro privado.

Para desplegar su liderazgo encontró un punto de equilibrio por sobre los partidos de la Alianza y distante —relativamente— de los gremios empresariales, creando una estructura de mando y gestión altamente personalizada. Esto le permitió una proyección mediática autónoma en la que sobresalió el permanente despliegue de un Presidente en campaña con la preocupación centrada en su aprobación pública, quedando la agenda de la nueva administración subordinada primeramente

---

1. "Pero esa transición ya terminó y es la transición del pasado, y hoy día 11 de septiembre del 2010 con la Portada de Antofagasta a nuestras espaldas yo quiero invitar a todos los chilenos sin ninguna distinción que seamos protagonistas de la transición joven la transición nueva, del futuro", véase http://www.valdiviacapital.cl/nacional/30-general/1243-presidente-pinera-hoy-11-de-septiembre-de-2010-gracias-a-dios-tenemos-un-chile-muy-distinto.html
Esta afirmación encontró eco en analistas concertacionistas. Cfr. Eugenio Tironi, "La partida de Bachelet pone la lápida a la vieja Concertación", *El Mercurio*, 18 de septiembre 2010, pág. C4.

a la emergencia producida por el terremoto y, posteriormente, a los vaivenes de imprevistos acontecimientos nacionales (indultos, mineros, *mapuche*).

Consistente con esa apuesta de fondo comenzaron a surgir propuestas de reformas constitucionales que permitirían la reelección inmediata y/o la extensión a seis años del período presidencial[2]. La modificación parcial del sistema electoral enunciada por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet (UDI)[3], ampliando el número de parlamentarios y creando representaciones nacionales, podría haber sido un fuerte incentivo en algunos partidos —aliancistas y concertacionistas— para repensar su política de coaliciones. Enmarcado en las limitaciones antes mencionadas, el escenario que el Ejecutivo buscaba construir en el mediano plazo era el rebaraje del naipe político, gracias a un reforzado presidencialismo y con un alto porcentaje de apoyo popular. Los quiebres observados en la unidad concertacionista en el Senado y la Cámara durante la discusión de los cambios a la ley antiterrorista daban pábulo a esa especulación.

Sin embargo, ese proceso no estuvo exento de tensiones. Por una parte, el sacrificio de una mayor coherencia de su política global a cambio de altos porcentajes de aprobación personal le acarrearon al Presidente permanentes críticas dentro de su propia coalición por estar perdiendo su objetivo inicial[4], llegando incluso sus críticos de derecha a caracterizar su administración como el quinto Gobierno de la Concertación. Igualmente, la personalizada estructura de poder se vio acompañada de permanentes conflictos de intereses tanto a nivel presidencial como entre sus principales colaboradores. Por la otra, los llamados a la unidad nacional y democracia de los acuerdos contrastaron con la política realmente implementada en la que primaron los despidos de funcionarios públicos junto a una severa, permanente y extensiva crítica al Gobierno de Bachelet.

---

2. El senador Pablo Longueira (UDI) ofreció dos alternativas: ampliar el mandato a seis años sin reelección o establecer cuatro con reelección; el diputado RN Gaspar Rivas presentó un proyecto de ley para establecer la reelección presidencial inmediata, véase http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=21988&categoria_id=54 El senador Alberto Espina (RN) afirmó que "los períodos presidenciales de cuatro años son muy cortos. Creo que los gobiernos deberían ser de cuatro años con reelección inmediata, garantizando sanciones drásticas para la intervención electoral del Estado (…) en subsidio (…) el período pueda extenderse a seis años", véase http://diario.latercera.com/2010/09/12/01/contenido/pais/31-38370-9-los-periodos-presidenciales-de-cuatro-anos-son-muy-cortos.shtml Similar postura adoptó el diputado UDI, Nicolás Monckeberg. Definitivamente en contra se pronuncio la ex senadora institucional, Olga Feliú: "Reelección presidencial", *La Tercera*, 17 de septiembre 2010.
3. Presentación del ministro Larroulet en el Taller de Reforma Política (CED, CDC, Chile21, CIEPLAN, Dialoga, Igualdad, ProyectAmérica), 9 de septiembre 2010.
4. Tema presente en las declaraciones del presidente de RN, Carlos Larraín, cuando afirmó que "la autoridad que pasa pendiente de las encuestas simplemente no puede gobernar" (*La Segunda*, 28 de julio 2010), hasta en columnas como la de Andrés Benítez, "El Llanero Solitario", *La Tercera*, 11 de septiembre 2010.

A continuación analizaremos la política del nuevo Gobierno en sus primeros meses de gestión, la nueva forma que adoptó el liderazgo presidencial, que caracterizamos como *presidencialismo plebiscitario*; las características de sus principales colaboradores y los conflictos de intereses que los han rodeado, alcanzando hasta los planes de reconstrucción post-terremoto; el contraste entre los llamados a la unidad en su primer Mensaje y la política favorecedora de un "desalojo"; y la descalificación de la administración Bachelet.

1. Una nueva forma de liderar

El difícil proceso de asentamiento de la nueva administración, con todas sus diferencias, tensiones internas, orientaciones poco claras, no decididas y contradictorias, pusieron en cuestión el rol del Presidente y su efectiva capacidad de conducción de una nueva transición, ahora, al desarrollo. Inicialmente, las dificultades de gobernar un Estado tan diferente al mundo de la empresa privada entrabaron la gestión piñerista en diversos ámbitos (nombramientos, iniciativas legislativas) perjudicando su nivel de aprobación y el de su gobierno. De acuerdo a la encuesta Adimark realizada entre abril y mayo de 2010, la desaprobación a Piñera aumentó 13 puntos porcentuales[5], y en julio la encuesta CEP daba un magro 45% de aprobación presidencial.

Su estrategia de *presidencialismo plebiscitario* no era fácil de aceptar por sus partidarios. A muy pocos días de inaugurado el nuevo Gobierno, Arturo Fontaine, entonces director del Centro de Estudios Públicos (CEP), metafóricamente descalificaba el tipo de liderazgo desplegado criticando la mala relación del Presidente con los partidos que le hicieron la campaña, el conflicto de intereses y la indecisión de Piñera frente a la disyuntiva de política o negocios, todo lo cual estaría minando "el prestigio moral y credibilidad del Presidente", al tiempo que cuestionaba su discurso vacío y su tendencia a la microadministración[6].

Las observaciones que mereció el primer mandatario por su estilo "plebiscitario" de gobernar pasaron así, desde la inicial admiración por su extenuante dedicación al trabajo (24/7), a una insatisfacción con las formas y actitudes asumidas como jefe de Estado. El ex Director de Estudios Jurídicos de Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister, se preguntaba "¿Por qué todos los que de una u otra manera se vinculan con el 'antiguo régimen' se permiten un comportamiento descortés

---

5. Adimark, "Encuesta: Evaluación Gestión del Gobierno. Informe mensual Abril 2010", véase http://www.adimark.cl/medios/Ev_Gob_Abr10.pdf
6. Arturo Fontaine, "Piñera en blanco y negro según Fontaine", *La Tercera Reportajes*, 28 de marzo 2010, págs. 6-7.

o insolente hacia la máxima autoridad del país?”[7]. Un principio de respuesta la proporcionó días después una editorial de *El Mercurio*, en la que se reconocía que

> la identidad más específica del nuevo Mandatario aún no se asienta (…) El respeto a la autoridad presidencial ha sido siempre motivo de preocupación de estas páginas, y hoy llaman la atención algunos signos que, sin llegar a constituir una tendencia, no contribuyen a fortalecerlo. Algo de eso hay en la forma más que en el fondo del emplazamiento que hizo el rector de la Universidad de Chile al Mandatario; en las expresiones de los dirigentes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tras su reunión con aquél, o en la molestia pública del presidente del fútbol profesional por la espontaneidad de la invitación de Piñera a la selección nacional para homenajearla en La Moneda. A escasos 100 días de haber asumido, la identidad más específica del nuevo Mandatario aún no se asienta, y de seguro no será ella la cercanía empática de Bachelet, ni el perfil de estadista republicano que cultivó Lagos, sino probablemente algo más cercano a una nueva forma de gobernar y gestionar los asuntos públicos, a esa cultura de “hacer bien las cosas” —palabras que tuvieron eco en los electores y lo llevaron a La Moneda.[8]

A estas críticas, su asesor de comunicaciones replicaba que “el Presidente Piñera no se está construyendo un personaje y con el tiempo eso se va a valorar. Pone toda su autoridad y liderazgo en la ejecución del proyecto que encabeza. Le gusta estar en terreno y tiene sentido del humor. Los chilenos castigarían si se empezara a construir un personaje, y eso no se está haciendo”[9]. No obstante, el senador Allamand replicaba que el mandatario “debe encuadrarse un poco mejor en el rol presidencial”[10]. Respaldando implícitamente esta postura, *El Mercurio* ofreció seis mandamientos para cuidar la imagen presidencial: no ser eterno candidato, no improvisar, solo una idea por día, anticipar escenarios conflictivos y no enfrentar personajes populares[11]. Aun cuando la polémica parecía ser un simple problema de libreto y escenografía, ella escondía una trama más profunda: la no compartida

---

7. Axel Buchheister, “Respeto por la dignidad presidencial”, *La Tercera*, 27 de junio 2010. Tema que llegó hasta el Gabinete: “‘Presidente, creo que llegó la hora de colgar las parkas rojas’, recomendó Bulnes (…) ‘¡Pero cómo dices eso!’, fue la respuesta casi inmediata de Piñera”. *La Tercera Reportajes*, 11 de julio 2010, pág. 4.
8. *El Mercurio*, “La semana política”, 4 de julio 2010, pág. A3
9. Hernán Larraín Matte, asesor comunicacional de la Presidencia, *El Mercurio*, 6 de julio 2010.
10. “En una frase: que se olvide de la parka roja”. *Cambio21*, 6 de julio 2010. La molestia por el particular posicionamiento presidencial se manifestó en el permanente cuestionamiento del senador Allamand a la dirección política del Gobierno, especialmente al presentar el proyecto de ley “Acuerdo de Vida en Común”, que reconoce jurídicamente las parejas homosexuales, un tema contemplado en el programa presidencial pero que el Ejecutivo había abandonado.
11. *El Mercurio*, 11 de julio 2010, pág. D4.

definición del rol presidencial tan autónomo de fuerzas de apoyo y su agenda de hecho, aparentemente distinta a la de la coalición que lo llevó al poder.

Este *presidencialismo plebiscitario* se vio favorecido, primeramente, por la situación observada al interior de la Alianza. La competencia desplegada al interior de RN y la UDI por la elección de sus direcciones partidarias, las distintas prioridades políticas y agenda subyacente que las contenía, crearon un período en el cual el Ejecutivo encontró un amplio espacio de maniobra[12]. En segundo término, concomitantemente surgieron tensiones al interior de cada ministerio por las contradicciones entre ministros personalmente ligados al presidente y los cuadros UDI —muchos de ellos asignados a segundos niveles de mando—, lo que incrementó la entropía intra-Alianza, despotenciándola en su capacidad de influencia sobre el Ejecutivo. Las profundas e históricas fracturas transversales entre liberales y conservadores al interior de la Alianza también se expresaron en las tensiones entre ministros fundamentalmente cercanos al Presidente y funcionarios de segundo nivel que, con características diferentes en cada caso, dieron por término la corta gestión de los subsecretarios de Trabajo (RN) y Cultura (Fundación Jaime Guzmán).

Frente a las fisuras políticas e ideológicas y los procesos de cambio al interior de la Alianza y el Gobierno, el Presidente desplegó un incesante activismo mediático en pos de mayores niveles de aceptación ciudadana, lo que le dio a su gestión, en esos momentos, un carácter aparentemente difuso en el que su rol como conductor de un programa de Gobierno —que se había abierto a todas las expresiones de la derecha— no se lograba perfilar con claridad. El corto tiempo transcurrido desde la asunción al mando, el costo político de la reconstrucción, junto con los esfuerzos por recuperar la economía, no facilitaron su tarea, pero quedaba en claro que dentro de sus propias fuerzas de apoyo su postura suprapartidaria era un tema que concentraba crecientemente las preocupaciones.

El *presidencialismo plebiscitario* de Piñera se vio confrontado a una severa prueba con ocasión de las propuestas de indulto bicentenario por parte de la Iglesia católica y de las Iglesias evangélicas, saliendo airosamente de ella gracias a su decidida postura en sintonía con la mayoría del país[13], objetivo convertido en principal

12. El triunfo de Carlos Larraín en RN (68%) mostró la abrumadora presencia al interior de RN de los sectores más conservadores. Aun cuando revistió otras características, la candidatura de José Antonio Kast a la dirección de su partido mostró la disconformidad con el cerrado manejo de la dirección de Coloma y la vieja guardia UDI, y una propuesta de perfilar de mejor forma las posturas más conservadoras del partido a nivel nacional y en el Gobierno. Sin embargo, el Consejo General del gremialismo le dio el 68,7% de respaldo a Coloma, y un magro 31,3% de apoyo para la renovación que proponía Kast, menor al logrado en la elección anterior.
13. "Una encuesta realizada por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, los días 22 y 23 de julio, en la que el 65% de las personas entrevistadas señaló que no debería haber indulto, frente al 27% que se manifestó a favor", véase http://www.udd.cl/noticias/un-65-de-la-poblacion-se-opone-a-otorgar-indultos

opción y duramente criticado desde sus propias filas. Fue el presidente de RN, Carlos Larraín, el más claro al afirmar que "la autoridad que pasa pendiente de las encuestas simplemente no puede gobernar"[14]. El magro 45% de aprobación que obtuvo el Presidente en la encuesta CEP de julio de 2010; y la caída en la probación presidencial (52% a 46%), y un aumento en la desaprobación al Presidente (34% a 40%) informada por Adimark a comienzos de agosto, parecía haberle dado la razón a Larraín.

Sin embargo, el cambio más radical de apoyo ciudadano que fortalecería la apuesta presidencial fue producto del adecuado, sostenido y exitoso compromiso del Ejecutivo con la dramática situación vivida por 33 mineros en la mina San José en Copiapó. Esa crisis, que puso en cuestión al sector privado por su falta de atención a las medidas de seguridad y protección de los operarios, catapultó al estrellato al ministro de Minería, Laurence Golborne, y significó un súbito aumento de la popularidad presidencial (56,2%). Su compromiso y esfuerzos por un pronto y seguro rescate, con la investigación de los hechos y penalización de los responsables, así como la revisión de las normas de seguridad general del trabajo en el país —comisión encargada a la ministra del Trabajo que dejó fuera a representantes de la CUT— generaron un especial momento de liderazgo presidencial al inicio del mes del Bicentenario.

En esa búsqueda de aprobación, Piñera se enfrentó a diversas movilizaciones sociales (estudiantes, *mapuche*, habitantes de Isla de Pascua, alcaldes de la región del Bío-Bío). Por una parte, estas fueron sistemáticamente desperfiladas por los medios de información progobierno[15]. Por la otra, el Ejecutivo desplegó un desproporcionado control policial. No obstante, el poder de las protestas se hizo sentir. Así, la masividad y transversalidad política y social de oposición al proyecto Barrancones para instalar dos centrales termoeléctricas en el sector de Punta de Choros, en la región de Coquimbo[16], forzaron al Presidente a anunciar la relocalización de la planta. Decisión personal que generó nuevos problemas al Ejecutivo, ya que el proceso de aprobación había pasado todos los pasos legales e institucionales, incluyendo la aprobación del concejo comunal y la COREMA, por lo que empresarios y dirigentes políticos de la Alianza se volvieron a manifestar disconformes con el tipo de intervención presidencial al alterar la institucionalidad vigente. De la misma forma, la huelga de hambre de los comuneros *mapuche* y su apoyo por cientos de manifestantes en las calles de Santiago, obligaron al Ejecutivo a enviar proyectos

14. *La Segunda*, 28 de julio 2010.
15. Tal fue así que, producto de la huelga de hambre de los presos políticos *mapuche*, las dependencias de *Radio Bío-Bío* fueron tomadas pacíficamente para poner término al cerco comunicacional. Por su parte, el Colegio de Periodistas condenó el silencio informativo en torno a esta huelga de hambre que 32 presos de comunidades *mapuche* llevaban a cabo desde hace más de un mes en diversas cárceles de la Octava, Novena y Décima Regiones.
16. DLB Consultores, "Informe de prensa", 25 de agosto 2010.

de ley restringiendo la competencia de la justicia militar y redefiniendo los tipos penales de la Ley Antiterrorista, así como encargar al arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, buenos oficios para la apertura de un diálogo entre el Gobierno y los comuneros *mapuche* en huelga de hambre.

El *presidencialismo plebiscitario* mostró sus bondades cuando en la última semana de agosto la encuesta *El Mercurio*-Opina le dio un 56,2% de apoyo. Sin embargo, las críticas a la personalización del poder se mantuvieron. En esa misma edición, la editorial semanal del matutino reiteraba que "la búsqueda de aprobación no ha de ser el objetivo de esa gestión, ni la legitimidad de las causas justifica el descuido de las formas propias de la institucionalidad que se ha dado el país"[17].

Con todo, en esos seis primeros meses de gobierno la política del Ejecutivo de lograr un importante apoyo en la opinión pública como recurso de poder fue exitoso, lo que, acoplado a las señales de apertura a reformas constitucionales del sistema electoral, podría haber abierto espacio para la no visible estrategia presidencial de reordenamiento de las dos principales coaliciones.

2. Conflicto de intereses

La instalación de las nuevas autoridades, junto a las tensiones políticas generadas al interior de la Alianza, abrió nuevos flancos de crítica producto de las "desprolijidades" en el proceso de nombramiento de funcionarios en las que se volvieron a manifestar los obvios conflictos de interés que se crearían.

Los casos más destacados fueron los de Mauricio Gatica, Director de Concesiones del MOP, socio de la empresa Ruta 68 y presidente de COPSA, obras bajo fiscalización de su propia dirección; Patricio Lahsen, Director General de Obras Públicas, originalmente gerente general de la Concesionaria Convento Viejo, la que había demandando al Estado por USD$28 millones[18]; Loreto Silva, subsecretaria de Obras Públicas, que había sido abogada de la Cámara Chilena de la Construcción, participado en la redacción de la Ley de Concesiones y demandado al Estado[19]; y Felipe Irarrázaval, designado Fiscal Nacional Económico, quien había patrocinado a la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, entidad acusada por la FNE de coludirse para hacer fracasar una licitación del Metro.

No obstante los obvios conflictos de intereses, la inclinación a mezclar política y negocios una vez más se evidenció en el caso de los intendentes nombrados en

---

17. *El Mercurio*, 5 de septiembre 2010, pág. A3.
18. Véase http://ciperchile.cl/2010/03/18/los-vinculos-de-pinera-con-las-empresas-de-los-edificios-danados-los-hombres-del-presidente Lahsen renunció al cargo a dos meses de haberlo asumido, *La Segunda*, 13 de mayo 2010, pág. 39.
19. Véase http://www.cooperativa.cl/autoridades-que-acompanan-a-pinera-enfrentan-diversos-conflictos-de-intereses/prontus_nots/2010-03-25/172046.html

la zona del sismo como, por ejemplo, en la IX Región (Andrés Molina, gerente general de Forestales Santa Laura y Magasa), VII Región (Rodrigo Galilea, gerente general de empresa de ingeniería y construcción en el Maule, y presidente del directorio de Aguas San Pedro), Región Metropolitana (Fernando Echeverría, dueño de constructora de edificios dañados por el terremoto) y VI Región (Rodrigo Pérez, miembro del directorio de Esval y Essbio).

Otro flanco conflictivo que se abrió en el mes de julio de 2010 fue el del Intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, promotor de la modificación al Plano Regulador de Santiago, lo que podría haberlo beneficiado a futuro. De acuerdo al diputado Gabriel Silber (DC), el intendente —principal promotor del proyecto y un actor importante del punto de vista inmobiliario— estaría en un franco conflicto de interés[20]. A ese conflicto se sumó el nombramiento del nuevo Superintendente de Salud, Luis Romero, anterior subgerente general de la Isapre Colmena", considerado como un funcionario ortodoxo y reacio a las regulaciones del sistema de Isapres[21]. Para completar el cuadro, a mediados de julio el director recientemente designado de la CONADI, Francisco Painepán, reconoció que cometió irregularidades y devolvería recursos mal asignados, para luego despedir "al subdirector nacional de la entidad, Alejandro Huaiquil, quien era el personero que habría liderado la investigación interna contra la máxima autoridad de la entidad indígena, debido al subsidio de $3 millones de pesos que se adjudicó de manera irregular y que la Contraloría le obligó devolver al Estado, ya que percibía una renta anual calculada en $80 millones de pesos, en su negocio de ferreterías"[22]. Similar política se observó en la licitación de la publicidad del Gobierno. De acuerdo al diputado Felipe Harboe (PPD), esta "se concentra en cinco empresas (…) lo que da paso a un oligopolio y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, va a aumentar la subcontratación y así estas grandes empresas van a tener ganancias por dos lados"[23].

El conflicto de intereses continuó durante agosto, cuando la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue cuestionada por la senadora Soledad Alvear (DC) recurriendo a la Contraloría General de la República, ya que la ministra "antes de asumir su cargo y a través de la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), habría participado en la evaluación medio ambiental del proyecto para construir la termoeléctrica Cruz Grande, que se emplazaría en una zona cercana a la caleta Punta de Choros de la Región de Coquimbo y que estará próxima al inicio de su proceso de aprobación"[24].

---

20. *Cambio 21*, 2 de julio 2010.
21. CIPER, 25 de junio 2010.
22. *Cambio 21*, 20 de julio 2010.
23. *Cambio 21*, 17 de agosto 2010.
24. *El Mostrador*, 30 de agosto 2010.

Algunas "desprolijidades" adicionales se produjeron con el nombramiento del Cónsul general en La Paz, quien había dicho que la mejor política hacia Bolivia era no tener relaciones, lo que provocó la abstención de hecho de Bolivia en la elección de Insulza en la OEA y la toma de distancia con el nuevo representante consular; la nominación del gobernador de Los Andes, Ángelo Barbieri, con 137 documentos morosos o protestos en DICOM, destituido por deudas que no pudo pagar; la del gobernador del Bío-Bío, José Miguel Stegmeier, destituido a horas de ser nombrado al sindicarlo como vinculado con una red de lavado de dinero de la ex Colonia Dignidad; el caso del Director de Gendarmería, ex general de Carabineros Iván Andrusco, integrante de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), organismo represor de la dictadura, rápidamente removido de su cargo después de transparentarse su currículum; el nombramiento como director del diario *La Nación* de Mirko Macari, director del diario electrónico *El Mostrador*, y anulación del mismo por su supuesto rol en las acusaciones contra personeros de la UDI en el caso Spiniak; y la duración por 48 horas en sus cargos del derrotado candidato a senador de la UDI, el abogado Cristián Letelier y el economista de derecha Ángel Cabrera, en sus cargos de directores de la ZOFRI.

Todos esos conflictos y tensiones no fueron otra cosa que la clara demostración de la configuración de un equipo de Gobierno que tendió a responder más que nada a la estructura de mando personalizada en Piñera y su círculo más íntimo, dejando fuera a las estructuras partidarias y empresariales corporativas que le dieron el apoyo electoral. Esta tensión se vio posteriormente acrecentada por la crítica corporativa empresarial a la gestión del primer mandatario.

Aun cuando el Presidente envió al Congreso el proyecto de ley sobre fideicomiso ciego con el que se buscaba transparentar el patrimonio e intereses de quienes tuvieran cargos en la administración pública, y extendía la obligación a los senadores y diputados y el Contralor General de la República, el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), afirmó que la disposición de la Concertación para legislar el fideicomiso ciego estaría sujeta a la condición de no trabajar en iniciativas donde existiera un "conflicto de interés" por parte del oficialismo, afirmando que la Concertación evaluaría en su momento una posible inhabilidad para legislar al respecto.

Al centro de esta tensión estuvo el plazo de la concesión del canal a la Universidad de Chile, el que vencía en 2018, lo que hizo fracasar las negociaciones con el grupo Linzor para vender Chilevisión. Dado que el Presidente debía nombrar autoridades en TVN y el Consejo Nacional de TV, y legislar en materia de televisión digital, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de pedir a Piñera que vendiera sus acciones de Chilevisión. Sin embargo, el fallo de la Contraloría del 12 de julio estableció que el Presidente podía hacer los nombramientos en TVN y Consejo Nacional de TV, razón por la cual a fines de julio el directorio de TVN nombró a Mauro Valdés como director de la estación. Finalmente, la empresa estadounidense Inversiones Turner International II Ltda.

concretó la compra del 100% de Chilevisión por más de US$140 millones, de manera que el dueño de CNN, HBO y TNT pasó a administrar el canal. En 2005, Piñera había pagado US$24 millones por la señal televisiva[25].

Con todo, el mismo fallo consideró que el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, debía abstenerse de tomar decisiones vinculadas al fútbol debido a su condición de accionista de Colo Colo. Lo insostenible de su posición y la presión sobre ese funcionario lo obligaron a fines de julio a vender sus acciones, lo que dejó al Presidente Piñera, propietario de un 13,77 % de ese club, nuevamente en una difícil posición frente al tema de sus conflictos de intereses. Sin embargo, la venta de Chilevisión —y su posterior declaración señalando que por la venta prematura de acciones de LAN había perdido US$ 700 millones— terminó por bajarle el perfil al tema de los conflictos de interés del Presidente.

3. El primer Mensaje

Tal como su discurso la noche del triunfo fue el estreno de Piñera en su rol presidencial, su primer Mensaje fue el inicio en su rol gubernamental. Este se caracterizó por ciertas continuidades con la Concertación y, las más significativas, por anunciar la introducción de importantes cambios en la orientación y gestión del Estado. En la medida que el tono del mensaje fue conciliador y generoso hacia los ex presidentes concertacionistas, el carácter marcadamente liberal de los cambios tendió a pasar levemente desapercibido, ya que los mecanismos y políticas específicas a ser implementadas no fueron suficientemente explicitados.

En materia de continuidades[26] se podría mencionar el permanente énfasis en la unidad nacional, junto al cual el primer mandatario introdujo elementos de orientación valórica, como los de solidaridad y equidad. Materializando ese compromiso anunció la creación del Servicio para Discapacitados; los cincuenta liceos Bicentenario; el perfeccionamiento del seguro de desempleo; la eliminación gradual y progresiva del 7% de la cotización de salud de los jubilados más pobres[27]; y el ingreso ético vía bonos condicionados.

---

25. *El Periodista*, 26 de agosto 2010.
26. Una aguda reflexión sobre continuismo, en: Robert Funk, "La nueva forma de triangular", *El Mostrador*, 1 de junio 2010, http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/06/01/la-nueva-forma-de-triangular
27. La personas entre 60 y menores de 75 años, que reciben una pensión inferior a $250 mil, solo cotizarán un 3% de las pensiones. Y si el monto de las pensiones es entre $250 mil pesos y $500 mil impondrán un 5%. En caso de ser superior, se impondrá el 7%. En tanto, los mayores de 75 años con pensiones bajo los $250 mil no pagarán cotizaciones a FONASA. Y aquellos mayores de 75 con pensiones en $250 mil y $500 mil, pagarán un 3%; quienes superen los $500 mil, cotizarán un 5%.

Se comprometió, en el marco del terremoto, a continuar con el dictamen de marzo de la Dirección del Trabajo frente a excesos del mercado restringiendo "los despidos por caso fortuito o fuerza mayor sin derecho a indemnización, de manera de evitar abusos y proteger los derechos de nuestros trabajadores". Sin embargo, a nivel del Gobierno central, a fines de septiembre ya se contabilizaban por parte de la ANEF 5000 empleados públicos despedidos.

En el Mensaje anunció la corrección de "las malas prácticas que muchas veces distorsionan el concepto de empresa, recurriendo a múltiples RUTs, afectando negativamente los derechos de los trabajadores"[28]. Los empresarios se pronunciaron en contra[29], sugiriendo cautela en las redefiniciones del concepto empresa[30], por lo que a fines de agosto, la ministra del trabajo, Camila Merino, solicitó a los miembros de la oposición, integrantes de la comisión legislativa respectiva que estaba viendo el proyecto de ley que modificaría el concepto de empresa, no someter a votación el texto informándoles la intención del Gobierno de ingresar un proyecto para sancionar "el abuso" de los *multirut*[31]. El Presidente se comprometió a darle a la Superintendencia de Salud las mismas atribuciones regulatorias y de control para el sector público y privado, y anunció nuevas protecciones al consumidor a través de la creación de un SERNAC financiero, proyecto abandonado a fines de julio a cambio de una ampliación de las tareas en el ámbito financiero del actual SERNAC. El conjunto limitado de medidas regulatorias, más que una protección a los derechos ciudadanos, estuvo orientado a mejorar la eficiencia del Estado en la articulación mercado-privados.

Las reformas políticas fueron, quizás, los anuncios más relevantes. Incorporó en la agenda "primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular"; y se comprometió a "impulsar una profunda revolución descentralizadora, transfiriendo poder efectivo a las regiones y a los municipios, a través de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos, desde el gobierno central a los gobiernos regionales y comunales, en un contexto de mayor flexibilidad y autonomía en su gestión y plantas de personal, respetando los legítimos derechos de los funcionarios municipales". Junto a esas

---

28. D&S, dueña del supermercado Líder, es la empresa retail que más Rut posee (133), le sigue Falabella (35) y CENCOSUD (los redujo de 43 a 10). Sodimac solo tiene uno.
29. Este anuncio dividió la opinión de los empresarios, pronunciándose a favor de la misma los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME). Sin embargo, otros sectores como la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) se pronunciaron en contra. Véase http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=30214
30. Esta redefinición preocupó al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien reiteró que la definición actual era suficiente. Véase http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20100526/cont_141875.html
31. *Diario Financiero*, 28 de agosto 2010.

medidas descentralizadoras, anunció la creación de la Academia de Gestión Regional y Municipal, la que "a través de convenios con las universidades e institutos regionales [permitirá] formar y capacitar a los funcionarios", externalización que no dejó en claro el rol que tendría la asociación de municipalidades en este proceso. Finalmente, anunció la implementación de una Justicia Vecinal como una "instancia temprana de resolución de conflictos menores", para descomprimir los juzgados y darle a la vida en comunidad una nueva dimensión de resolución pacífica de disputas. Sin embargo, al compromiso por reconocer el "derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero" —proyecto enviado anteriormente por la presidenta Bachelet— le agregó un elemento restrictivo: "en la medida que mantengan un compromiso y sentido de pertenencia con nuestro país", con lo que distorsionó la efectiva ciudadanía de los chilenos en el extranjero. Posteriormente, el ministro Larroulet indicó que esa agenda contendría reformas constitucionales para permitir plebiscitos comunales, la iniciativa popular de ley, elección de consejeros regionales y ley del Congreso. De acuerdo a la Fundación Dialoga, del conjunto de iniciativas anunciadas "el actual gobierno solo ha generado dos iniciativas vía mensaje (sobre cambio de fecha de elecciones y declaración de intereses y patrimonio)". Las otras iniciativas fueron presentadas durante el gobierno anterior[32].

En el Mensaje incluyó anuncios sobre la introducción de políticas de mercado y nuevas y reformadas instituciones como la Dirección de Relaciones Laborales, el Ministerio del Medio Ambiente, la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, el Servicio País para la Educación, la Academia de Gestión Regional y Municipal, la Agencia Nacional de Emergencia ex Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Igualmente, se reformarían otras instituciones, dando lugar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ex MININT), el Servicio Electoral (SERVEL), el Servicio de Protección de la Infancia y la Adolescencia (ex SENAME) y la Agencia de Desarrollo Indígena (ex CONADI).

En el área de trabajo, extendió el bono especial existente para la capacitación, que subsidiaba al empleador, y el diseño de uno de intermediación laboral para ayudar a encontrar trabajo a personas de baja calificación, a través de agencias dedicadas a buscar trabajos estables para personas vulnerables en situación de cesantía. Otras medidas, como la adaptabilidad horaria y turnos en las regiones, el teletrabajo y las ocupaciones desde hogar, ampliarían la flexibilización laboral y el estatuto especial para el trabajador agrícola y mujeres temporeras; sería tema de especial escrutinio en la perspectiva de los derechos laborales. El programa "Comprométete con una Escuela" y "Comprométete con un Niño", diseñado para que fundaciones, empresas y profesionales apoyaran con recursos económicos y medios humanos a los establecimientos más pobres o apadrinaran a niños de escasos recursos, versión adaptada de los programas de responsabilidad social empresarial, dejaba

32. Fundación Dialoga, "Taller de Reforma Política, Informe N°1", septiembre 2010.

en manos del sector privado el apoyo a aquellos establecimientos de su predilección. Otras medidas como "la inversión en energía, particularmente la hidroeléctrica", que necesitaba ser incrementada "removiendo los obstáculos burocráticos que hoy la dificultan"; el financiamiento del Transantiago; hasta el bono por cincuenta años de matrimonio, fueron temas vistos desde una perspectiva libremercadista, por lo que el anuncio del "fortalecimiento de la institucionalidad de las aguas" generó serias aprehensiones.

En suma, el primer Mensaje presidencial mostró a un Ejecutivo proponiendo al país algo de regulación y mucho de mercado, una articulación público-privada de nuevo tipo en la que el rol del Estado sería el poner en práctica un nuevo modelo priorizando al sector privado como eje de todos los cambios.

4. La política gubernamental implementada

El manejo del Estado —distinto al de una empresa privada— se convirtió para el Ejecutivo en un desafío difícil de superar en el corto plazo, siendo la *real politik* un condicionante de parte de sus acciones, algunas de las cuales olvidaron sus iniciales tonos conciliadores.

En ese primer período el Presidente Piñera sinceró los anuncios y promesas electorales: el salario ético situado en los $240 mil pesos solo estaría compuesto por el salario mínimo más subsidios directos a los sectores de más bajos ingresos; el *royalty* minero congelaba todo cambio impositivo hasta el 2020; la reforma tributaria sería por una sola vez recaudando el Estado en 2013 menos que en 2010; y la extensión del postnatal sería una flexibilización más que una extensión neta de días[33].

Igualmente, la gestión gubernamental en campos determinados mostró fuertes diferencias con el discurso y llamados unitarios iniciales, fluctuando entre una aproximación dialogante y una confrontacional con la oposición.

Para crear nuevos espacios de interlocución política, replicó la estrategia de la presidenta Bachelet creando la "Comisión Técnica del Salario Mínimo"[34], compuesta por representantes de los trabajadores, empresarios, economistas y académicos, a la que se le encargó entregar un insumo técnico a la negociación del salario

33. "La subsecretaria del Sernam, María Paz Lagos, señaló que la propuesta inicial del Gobierno apunta a flexibilizar el post natal de 45 días para el pre y 84 para el post de manera de poder traspasar días del primero al segundo y ver la factibilidad de optar por un retorno paulatino al trabajo hasta llegar a los 6 meses". Véase http://www.puntomujer.emol.com/mujer_y_trabajo/noticia/detallenoticia.asp?id=%7B807F87A1-AF79-479F-90D2-3B9C4841C964%7D

34. Harald Beyer, CEP; CUT y UNT, Roberto Morales y Juan Carlos Scapini; Pablo Bosch, gerente general de B. Bosch; Alfonso Sweet, Forus; CONAPYME, Carlos Boada; académicos: Bernardita Vial, Alejandra Mizala, Joseph Ramos, Ricardo Paredes, Cristóbal Hunneus y Raphael Bergoeing.

mínimo, debiéndose iniciar la discusión con una recomendación sobre el sueldo mínimo en 2010. Organizada por el Servicio Nacional de la Mujer, a la comisión "Mujer, Trabajo y Maternidad"[35] se le encomendó analizar la extensión del post-natal, el fuero maternal, la norma del Código Laboral sobre el derecho a salas cuna a cargo de las empresas y las licencias por enfermedad de hijo o hija menor de un año. El "Panel de Expertos para una Educación de Calidad"[36] debía elaborar los lineamientos para una nueva carrera docente y buscar nuevas fórmulas para administrar la educación pública. Y producto del derrumbe en mina San José, se formó la de "Seguridad en el Trabajo"[37].

Esas comisiones, que si bien integraron personalidades opositoras, difícilmente podían constituirse en espacio extraparlamentario de creación de consensos, dado que las tensiones estructurales centrales estaban situadas principalmente, por una parte, en las relaciones intra-Alianza y, por la otra, en las crecientemente complejas relaciones con la oposición, la que adquirió un inesperado poder de veto y capacidad de interlocución a medida que se acercaba el 21 de mayo, momento en el cual el Ejecutivo debía llegar con iniciativas legislativas sustantivas.

La postura más cercana al diálogo se vinculó a las dificultades que la administración Piñera comenzó a enfrentar tanto en sus relaciones con el empresariado producto de la necesidad de aumentar impuestos para financiar la reconstrucción post-terremoto, así como con las dificultades que tendría en el Congreso siendo la Alianza minoría. Por tales razones, a comienzos de abril se comenzaron a escuchar voces de miembros de la Coalición por el Cambio mostrando la necesidad de entregarle al presidente facultades extraordinarias[38]. Así, el presidente del PRI, Adolfo Zaldívar, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, se reunieron con Piñera para entregarle un proyecto de ley que ampliaba las facultades del Ejecutivo para enfrentar las consecuencias del terremoto. Sorprendentemente, la crítica a las facultades extraordinarias provino desde una

---

35. María Gracia Cariola (SNA, presidenta), María Elena Valenzuela (OIT), Paula Bedregal (PUC), Osvaldo Larrañaga (PNUD), Francisca Dussaillant (CEP), Ana Bell Jaras (CUT/PS), Susana Carey (Comunidad Mujer), Carmen Domínguez (UC), Álvaro Pizarro (Abogado laborista, Ex Director Nacional del Trabajo 1974-1976), Ximena Luengo (Instituto Chileno De Medicina Reproductiva), Andrea Tokman (UDP), José Ramón Valente (Econsult), Rodrigo Cerda (Ministerio de Hacienda), Ricardo Solari.
36. José Joaquín Brunner, Sergio Molina, José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Pilar Romaguera, Jaime Pavez, Pablo Zalaquett, Pedro Pablo Rosso, Patricia Matte, Julia Alvarado, Andrea Krebs y Harald Beyer, presidente.
37. La ministra del Trabajo, Camila Merino, encabeza la comisión, junto a Olga Feliú, Marcelo Albornoz, Carlos Portales, Mónica Titze, Pablo Inhnen, Víctor Riveros, Víctor Araya, Nicolás Starck y María Elena Gaete, secretaria ejecutiva. Dado que no se invitó a ningún representante sindical, la CUT y el PS constituyeron una comisión para proponer reformas en materia de seguridad laboral.
38. Pablo Rodríguez Grez, "Facultades extraordinarias", *El Mercurio*, 4 de abril 2010, pág. A2.

alarmada derecha cuando *El Mercurio* editorializó en contra de las mismas[39], lo que terminó por sepultar la iniciativa.

Los iniciales llamados a la unidad nacional fueron rápidamente desplazados por la fuerte y sostenida ofensiva gubernamental contra los sectores opositores y el gobierno de la presidenta Bachelet. Igualmente, la política de continuidad se vio alterada por importantes cambios a través de imperceptibles modificaciones institucionales como, por ejemplo, la eliminación de la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO) de la Dirección del Trabajo, lo que debilitó fuertemente su estrategia inspectiva[40]. Estos cambios institucionales vía decretos dejaron fuera de la capacidad de control del Congreso a un sinnúmero de servicios estatales.

Los temas que primaron entre el 11 de marzo y el 18 de septiembre de 2010 permitieron visibilizar la autonomización relativa del Ejecutivo respecto de sus fuerzas de apoyo y su búsqueda permanente de popularidad, su compromiso con la ampliación de los mecanismos de mercado, el copamiento del Estado a través de despidos y los ataques a la Concertación, así como parte de sus compromisos valóricos. Estos elementos se manifestaron a propósito del conflictivo plan de reconstrucción; los derechos humanos y la propuesta de indultos de la Iglesia católica; ciertos signos de ineficiencia; los despidos de funcionarios gubernamentales del antiguo régimen y la contratación de nuevos de sus propias filas; la ampliación del mercado en la gestión estatal; los derechos de las mujeres; la crítica a la Concertación; y la política comunicacional, que coparon la agenda.

a) El Plan de Financiamiento de la Reconstrucción

Acordado finalmente con la oposición, este Plan estableció, contra la opinión de algunos sectores gobiernistas, aumentos transitorios de las contribuciones (Impuesto de Primera Categoría y del Impuesto Territorial) a las propiedades de mayor avalúo fiscal, a excepción de los predios agrícolas; un alza permanente del Impuesto Específico al Tabaco; fijó beneficios tributarios a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) para la reinversión de utilidades; rebajó a 0,6% el Impuesto de Timbres y Estampillas; restringió a un máximo de dos las propiedades que una persona natural puede acoger a los beneficios del DFL-2; excluyó como renta para fines tributarios los depósitos convenidos por hasta 900 UF acumulados al año; y autorizó el traspaso de fondos de la Ley Reservada del Cobre para fines de la reconstrucción por US$ 300 millones anuales en 2010 y 2011. Sin embargo, la Comisión Mixta del Congreso rechazó la propuesta del *royalty* minero del Gobierno por mantenerse la

---

39. "¿Facultades extraordinarias al Presidente?", *El Mercurio*, 13 de abril 2010, pág. A2. Una muestra más de la distancia que el empresariado tomaba respecto de un posible autocrático Ejecutivo.
40. Cfr. http://www.dt.gob.cl/1601/w3-article-61399.html

invariabilidad tributaria hasta el 2025, por lo que los parlamentarios propusieron ver el tema del *royalty* fuera del marco del Plan.

b) Derechos humanos

Derechos humanos fue una de las áreas de mayor conflictividad en la que se expresó en forma más clara la primacía de la opinión pública por sobre la demanda de derecha. Aun cuando en el mes de junio se redujo el personal del Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, y la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la ex ministra de Bienes Nacionales de la presidenta Bachelet, Romy Schmidt, rechazó el recorte presupuestario de $300 millones, el tema que centró la atención en esta área fue el indulto Bicentenario.

La iniciativa gubernamental había partido con la reunión sostenida entre la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossy Lama, con abogados de militares procesados para explorar su inclusión en el indulto promovido por la Iglesia católica. Sin embargo, en contra de ese indulto se pronunció una sólida y transversal mayoría: la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los ex presidentes de la República y la oposición en su conjunto, a los que inesperadamente se sumaron, en contra de esta facultad presidencial, el ministro del Interior, el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón (RN), la senadora Lily Pérez (RN), el presidente de la UDI, José Antonio Coloma, hasta el presidente de la Corte Suprema. Por su parte, la mesa ampliada de Iglesias evangélicas presentó su propuesta para el Indulto Bicentenario, excluyendo los delitos de lesa humanidad[41]. La reacción negativa de la opinión pública, nuevamente, llevó al Presidente en cadena nacional de TV el domingo 25 de julio en la mañana a pronunciarse en contra de una ley de indulto, lo que fue aplaudido por la ciudadanía y dejó en una alicaída condición a la Iglesia católica.

c) Ineficiencia gubernamental

La gestión de la administración durante ese período se apartó rápidamente de la imagen de eficiencia que los *pendrives* con tareas ministeriales y los cronómetros de los subsecretarios habían inicialmente proyectado, apareciendo muestras de ineficiencia gubernamental en el proceso de reconstrucción, como, por ejemplo, la demora en pagar a municipalidades los gastos del terremoto y retirar escombros; el catastro del Comité de Reconstrucción constando más de tres mil familias recibiendo mediaguas sin ser damnificadas por falta de prolijidad en los chequeos; el bajo porcentaje de

41. *La Segunda*, 22 de julio 2010.

ejecución ministerial del presupuesto; y la poca relevancia de las propuestas legislativas. Estos fueron todos hechos que golpearon a la gestión recién iniciada.

La salida de la coordinadora general del Transantiago, Ana Luisa Covarrubias, aun cuando fue justificada como una forma de fortalecer el rediseño de este sistema de transporte, comenzó a mostrar las primeras bajas en la coalición gobernante comprometida con una mejor gestión.

d) Despidos de funcionarios públicos

La política más conflictiva fueron los despidos masivos en la administración pública, contradiciendo las iniciales declaraciones presidenciales de cohabitación, las que fueron rápidamente desplazadas por una política de desalojo. El nuevo Gobierno debía nombrar, además de su Gabinete, 1.306 funcionarios de confianza y 851 seleccionados por el sistema de Alta Administración Pública. Para ello, el equipo de transición de Piñera elaboró una metodología de traspaso de Gobierno que en vez de tranquilizar los ánimos comenzó a levantar sospechas de futuras persecuciones a ex funcionarios gubernamentales.

Desde el sector político triunfante se escucharon voces pidiendo una reforma del Estado que distinguiera entre empleados fiscales y "operadores políticos"[42]. La demanda de erradicar supuestos operadores políticos se volvió a repetir, a mediados de abril, en la queja de la Alianza ante el Gobierno denunciando que en "la Segpres, la Segegob, el MOP el Minvu, la DOS (División de Organizaciones Sociales) y muchos municipios, estarían aún colonizados por funcionarios concertacionistas. En la DOS, fuentes de Gobierno hablan de, al menos, 150 funcionarios sindicados como 'operadores'"[43]. Especial preocupación causó el instructivo de la intendenta de Atacama, en el mes de mayo, quien solicitaba datos de pertenencia política y sindical de todos los funcionarios públicos de la región, lo que llevó a la ANEF a presentar la primera denuncia formal por persecución política[44].

Desde que asumió Piñera hasta mediados de julio, cinco mil trabajadores habían dejado la administración pública, 2.500 despedidos directamente, otros dos mil cuyo contrato venció el 31 de marzo o a fines de junio y quinientos que renunciaron a sus cargos por diversos motivos[45]. La política de despidos fue decididamente apoyada por

---

42. Véase http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=17855&categoria_id=61
43. "La queja de la Alianza a La Moneda por los operadores políticos que aún trabajan en el Gobierno", *El Mercurio*, 18 de abril 2010.
44. *El Mercurio*, 11 de mayo, 2010, pág. C2. Según la ANEF, desde que asumió Piñera hasta mediados de mayo más de mil funcionarios públicos fueron cesados de sus labores por ser simpatizantes de algún partido de la Concertación. Véase http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=19642&categoria_id=54
45. *Cambio21*, 18 de julio 2010.

el senador Alberto Espina (RN)[46], lo que fue reafirmado por el Presidente Piñera[47]. Sin embargo, esta recibió un revés con la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la Contraloría detener notificaciones de despidos en Chile-Deportes[48]. Igualmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a tramitación el recurso de protección presentado para dejar sin efecto los despidos injustificados realizados en la Seremi de Educación de la V Región[49]. No obstante esta política, continuó con el despido director del Centro Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y del director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). En el Ministerio de Energía, habiendo sido inicialmente confirmada por Piñera, se le pidió la renuncia a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, después de nueve años en esa institución. En el Ministerio de Economía ocurrió lo mismo con la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El conjunto de destituciones de funcionarios elegidos por la Alta Dirección Pública alcanzó en agosto de 2010 al 42% del total de puestos concursados, por lo que el Gobierno fue cuestionado por dejar en fojas cero las intenciones profesionalizantes del proyecto que creó esa repartición pública.

e) Privatismo

Siguiendo con la orientación de introducir mecanismos de mercado en todo el sistema estatal, el Ministerio de Obras Públicas anunció la intención de licitar diez proyectos a concesionar por un total de US$ 3.200 millones bajo un período de operación mayor al habitual, llegando "a lo que la ley permite, a los 50 años". El ministro Hernán de Solminihac, a mediados de junio formalmente anunció el plan de concesiones 2010-2014, el que se empinó a los US$ 8 mil millones. El programa fue dado a conocer a los representantes de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Ingenieros. El monto de las licitaciones, se indicó, podría aumentar debido a que existían iniciativas que se encontraban en estudio por US$ 3.730 millones y que, de concretarse, la inversión podría haber superado los US$ 11 mil millones. Entre las obras que más destacaban se encontraba el llamado a licitación de la Autopista Vespucio Oriente, y que alcanzaría una

---

46. *El Mercurio*, 7 de junio 2010.
47. *La Segunda*, 10 de junio 2010.
48. "Es una razzia política ya que contratan operadores políticos de la UDI", dicen dirigentes sindicales. *Cambio21*, 5 de julio 2010.
49. El enojoso clima de persecución política quedó de manifiesto en las declaraciones —a través de Twitter— del concejal de Concepción, Fernando González, al Seremi de Gobierno, Francisco Ibieta, asegurando que "a punta de balazos deberían sacar a la tropa de upelientos que aún hay en el gobierno regional… con dos militares se te arrancan". *La Nación*, 11 de julio 2010.

inversión de US$ 1.172 millones. Además se anunció la construcción de la Costanera Central, otra importante carretera urbana que beneficiará al sector sur de Santiago, en especial a los residentes de La Florida y Puente Alto. Esta última consideraba una inversión de US$ 1.184 millones. Se confirmó el programa de concesiones hospitalarias que incluía los recintos de Antofagasta, Curicó, Cauquenes, y a los hospitales Sótero del Río, Félix Bulnes y del Salvador, todos por una inversión de US$ 1.338 millones. También se incluyeron algunas obras en regiones, como el Proyecto de Revitalización Urbana del Estero Marga Marga en Viña del Mar (US$ 84 millones), la interconexión Vial Logística Interportuaria de Concepción (US$ 371 millones) y la relicitación del aeropuerto de Cerro Moreno de Antofagasta (US$ 26 millones)[50].

Por su parte, el ministro de Minería, Laurence Golborne, se propuso modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras otorgando concesiones para la explotación del litio otorgando permisos a transnacionales mineras. Con ese piso legal se abriría el mercado a la inversión extranjera, ya que de acuerdo a la legislación vigente solamente la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) —propiedad del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y donde el hermano del ministro de Minería, Patricio de Solminihac, trabajaba como vicepresidente ejecutivo— y la Sociedad Chilena del Litio (SCL Chemetall) tenían contratos de explotación firmados con CORFO antes de que la Ley 18.097 de Concesiones Mineras y el nuevo Código de Minería (dictados por la dictadura) impidieran la concesión del litio. Estas empresas producían 60 mil toneladas anuales y representaban, en conjunto, cerca del 60% de la oferta mundial de carbonato de litio[51]. Aun cuando el litio había sido catalogado como recurso estratégico para el país y el propio ministro Golborne había destacado su importancia, posteriormente lo minimizó como mineral estratégico afirmado que “se trata de un área menor en Chile”[52], pavimentando así el camino a su reclasificación retirándole el carácter de mineral estratégico para su posterior licitación internacional.

Contradiciendo tal postura, a comienzos de agosto el mismo ministro Golborne afirmaba que “tomando las medidas correctas podemos soñar con que el litio algún día tenga la importancia que hoy tiene el cobre para nuestro país. La decisión es nuestra, y necesitamos partir por la voluntad de revisar las reglas

---

50. *El Mercurio*, 16 de julio 2010.
51. Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería, en Chile se concentra más del 70% de las reservas de litio en el mundo, de las cuales solo el 40% están operativas en los yacimientos del Salar de Atacama. Su uso está asociado a diversas industrias: farmacéutica, electrónica, nuclear y automotriz, utilizándose en los vehículos híbridos o eléctricos. De acuerdo a la demanda internacional, su consumo se ha duplicado; de 45 mil toneladas en los 90 a más de cien mil toneladas entre los años 2007 y 2008.
52. *La Tercera*, 19 de junio 2010, pág. 28.

que enmarcan a la industria, que hoy no responden ni a la realidad del país ni a la del resto del mundo"[53].

La misma impronta mercadista se manifestó en el campo de la educación superior, donde el gobierno promovió una institución asociativa única que agrupara a todas las universidades, modificando los procedimientos de asignación de recursos al aumentar la proporción dentro del presupuesto universitario de aquellas sumas otorgadas vía fondos concursables; haciendo partícipes de ellos a todas las instituciones universitarias; creando un subsidio portátil o sistema único de créditos y becas, donde los beneficios los recibían los alumnos, sin importar el lugar donde estudien; ampliando el sistema Becas Chile para estudiar en el país; y proporcionando más información sobre las universidades.

No obstante estas claras orientaciones privatizadoras, los resultados de la encuesta CEP de julio mostraron un muy bajo apoyo a la venta de acciones estatales en empresas públicas (30%), lo cual inhibió momentáneamente la propuesta de privatización de las sanitarias.

f) Mujeres

En el campo laboral de las mujeres, voces desde la derecha comenzaron a pronunciarse contra cualquier esbozo de acción afirmativa. Así, Francisca Valdés, Directora Ejecutiva de Mujeres Empresarias, afirmaba que para ayudar a las mujeres "la mejor manera (…) es promocionar a la mujer por sus capacidades, por su forma complementaria de abordar los problemas, porque en definitiva se la puede, porque está preparada para ello y no por equiparar el número de hombres en esos cargos. Seamos pacientes. Es cosa de tiempo. Pero seamos activos y asertivos en la elección de las mejores personas"[54]. Semanas más tarde, la recién nombrada ministra del SERNAM coincidía con estos planteamientos cuando señalaba que "pretender que en todos los puestos vamos a tener paridad, no es realista, no tenemos mujeres para eso", y avanzaba propuestas de flexibilización para incrementar la tasa de participación femenina proponiendo rebajar el postnatal de 18 a 10 semanas pero con jornada parcial[55].

La minuta del departamento de estudios del SERNAM, filtrada a la prensa, en la que recomendaba a los jóvenes abstenerse del sexo antes del matrimonio, fue un claro ejemplo —desautorizado por la ministra— del tipo de orientaciones ideológicas que comenzaban a primar en el seno del Gobierno[56].

---

53. Laurence Golborne, "El litio: ¿estratégico y no concesible?", *El Mercurio*, 5 de agosto 2010, pág. A2.
54. Francisca Valdés, "Sacando lecciones de género", *La Tercera*, 5 de febrero 2010.
55. Diana Massis, "Insistir en la paridad es poner la carreta delante de los bueyes", *COSAS*, N° 573, 24 de marzo 2010, págs. 56 y 58.
56. Cfr. María de los Ángeles Fernández, "El 'neomachismo' de la nueva forma de gobernar", véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/09/16/el-%e2%80%9cneomachismo

g) Críticas a la Concertación

Una sistemática política gubernamental fue la sostenida crítica a los gobiernos de la Concertación, en especial el de la presidenta Bachelet.

Sin embargo, el 68% de opinión pública favorecía un nuevo gobierno bacheletista, contrastando con el 54% de aprobación al Presidente y un aumento al 33% de su rechazo. Así informaba la encuesta CERC del 23 de junio, la aprobación más baja de las recibidas por los cinco presidentes elegidos desde 1990. En ese escenario la figura de la ex mandataria ocupó un lugar central en tales críticas, focalizándose en dos áreas sensibles: la efectividad de los programas sociales implementados y los actos de corrupción de sus funcionarios. Política que se mostró definitivamente equivocada al conocerse la encuesta CEP de julio, que le dio un 77% de apoyo a la forma cómo la presidenta Bachelet condujo su gobierno.

La crítica a la efectividad de los programas sociales se confundió con —y sirvió de base a— la reformulación de los mismos, por lo que a comienzos de junio el presidente del Senado, Jorge Pizarro, denunciaba el estancamiento de los beneficios sociales de Subsidio Único Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal[57]. Pero los resultados de la encuesta CASEN —que mostraron un aumento de la pobreza del 13,7% (2006) al 15.1% (2009)— permitieron al ministro de Planificación, Felipe Kast, afirmar que en el país "hay que tener políticas públicas mucho más efectivas" para derrotarla, y al Presidente Piñera anunciar la "evaluación flash" de 298 programas sociales con el fin de decidir su continuidad[58], además de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de todos los programas sociales del Gobierno de manera de controlar que los recursos lleguen donde están destinados[59]. Estas declaraciones forzaron a la presidenta Bachelet a salir en defensa de su política social indicando que sin ella los efectos habrían sido peores, y estimar como útil una evaluación de esas políticas[60]. De acuerdo a especialistas, el ministro omitió el incremento de los precios de los alimentos en ese período y el que esa fuera la primera CASEN que se realizó durante un año de recesión, lo que habría afectado los resultados.

Sin embargo, las declaraciones más conflictivas las hizo el propio Presidente cuando afirmó que "todos lo sabemos, muchas veces los recursos no llegan a quienes realmente lo necesitan. O porque los recursos se quedan entrampados en la

---

%e2%80%9d-de-la-nueva-forma-de-gobernar

57. "Este año se ha resuelto 'congelar' estos beneficios sociales, que en suma se entregan a cerca de 2 millones de familias, no reajustando los valores que la propia ley establece se haga los 1º de julio de cada año". En "El silencioso congelamiento de la Red de Protección Social", *Cambio 21*, 1 julio 2010, véase http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=20477&categoria_id=64
58. *Cambio21*, 8 de julio 2010.
59. *La Tercera* online, 14 de julio 2010.
60. *La Nación*, 26 de julio 2010.

burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o porque sencillamente se pierden en las garras de la corrupción"[61]. Dadas las reacciones ante la gravedad de sus dichos, tuvo que enmendar rumbos en una especial cadena nacional de TV afirmando que en la opción de "enfrascarnos en divisiones o peleas pequeñas, o bien unirnos con generosidad y con grandeza, para enfrentar las verdaderas causas de la pobreza. Nuestro gobierno ha optado firmemente por el segundo camino".

Desde sus propias filas salieron críticas a tal política, siendo categórico el senador Longueira (UDI) al indicar que le "pareció innecesario que vinculara las denuncias que se han conocido a las razones por las cuales llegamos a estas cifras", advirtiendo que en este tema no hay que "buscar culpables" y que es precisamente su uso político el responsable del fracaso de "muchas de las políticas para erradicar la pobreza"[62], postura a la que se sumó el alcalde de Puente Alto, José Manuel Ossandón (RN). No obstante, el Gobierno persistió en organizar esa política de desprestigio tal como el memorándum de la Secretaría de Comunicación (SECOM) lo consignó entregando los lineamientos comunicacionales para enfrentar a la oposición e identificando como "adversarios" del Gobierno a "la oposición por negarle los US$ 1000 millones para la reconstrucción y por ser los creadores y diseñadores del Transantiago", agregando que el "terremoto y el maremoto, los delincuentes y los narcotraficantes, las irregularidades, los operadores políticos y la mala distribución del ingreso", eran los enemigos de la administración[63].

El segundo ángulo fueron los ataques por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración Bachelet, como el apoyo financiero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), lo que posteriormente fue descartado por la directora de presupuesto Rossana Costa[64]. Continuaron denuncias respecto del gasto en viáticos del Estado, el que habría crecido en 1.000% en los últimos veinte años; el desorden en gastos en el Ministerio de la Cultura; un supuesto déficit de $4.500 millones de pesos en remuneraciones en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); irregularidades en otorgamiento de becas CONICYT; y los posibles vicios en antiguas asesorías del Transantiago. La más grave situación denunciada fueron las irregularidades en la Intendencia de Valparaíso por lo que el Gobierno solicitó una auditoría de todos los gastos de las intendencias en los últimos días del gobierno bacheletista. Los diputados RN Cristián Monckeberg y el UDI Gustavo Hasbún adquirieron protagonismo en este campo de denuncias. Sin embargo, el escándalo por la acusación contra el alcalde de la Municipalidad

---

61. *La Nación*, 14 de julio 2010.
62. *El Mostrador*, 14 de julio 2010.
63. *El Mercurio*, 28 de julio 2010, pág. C4.
64. "Yo no encontré ilegalidades con la información que tengo disponible hasta el momento", dijo Rossana Costa tras asistir a la comisión investigadora de las transferencias de recursos a ONGs en el gobierno de Michelle Bachelet, *La Nación*, 12 de agosto 2010.

de Colina, Mario Olavarría, vicepresidente de la UDI, por el delito de cohecho y otorgamiento indebido de patente de alcoholes al supermercado Tottus en esa comuna, le quitó fuerza a esa estrategia.

Lo más grave entre estos temas fue el trascendido del almuerzo del Presidente Piñera y los parlamentarios de la Alianza, en Cerro Castillo, donde habría instado a redoblar los esfuerzos a la hora de fiscalizar la gestión de Michelle Bachelet indicando que "hay un listado de irregularidades sobre las que les podemos informar"[65].

Otra política seguida por el Gobierno fue la sistemática crítica y descalificación de los proyectos y programas Bicentenario implementados por los gobiernos de la Concertación, como el apoyo financiero al Teatro Teletón (al que posteriormente se le reasignaron recursos), la Comisión Bicentenario, la remodelación del Estadio Nacional y la Ciudad Parque Bicentenario de Los Cerrillos.

5. La Concertación en la oposición

Pasada la catarsis de la derrota, que tensionó las relaciones interpartidarias —paralelo a la renovación de sus dirigencias partidarias—, la Concertación dio sus primeros pasos como oposición. Por una parte, debía curar sus heridas, al tiempo que hacer una sincera autocrítica. Por la otra, posicionarse frente al nuevo Gobierno sin "negar la sal y el agua" para no perder el escaso apoyo con que contaba, pero al mismo tiempo desplegar iniciativas opositoras. En sus primeros seis meses como oposición la Concertación recién inició parte de sus tareas, dejando pendiente una profunda autocrítica y propuestas opositoras que le permitan recuperar el apoyo perdido.

Así, al primer cónclave concertacionista en el estadio El Llano de San Miguel, en abril, le siguió en el mes de mayo una reunión en la residencia particular del senador Frei para enfrentar el tema de los municipios, la que se repitió en junio con todos los alcaldes del país para delinear la estrategia de cara a la elección municipal. De igual forma, los ex presidentes Frei y Lagos aparecieron en varias oportunidades criticando conjuntamente el actuar del gobierno Piñera en el proyecto de ley de reconstrucción y el *royalty* minero. Con todo, de acuerdo con la encuesta del CEP, al final del mes de julio la Concertación recibía un pobre 29% de aprobación ciudadana, caída también reflejada en la encuesta Adimark presentada a comienzos de agosto.

El terremoto que asoló al país tuvo fuertes réplicas políticas en la Concertación, la que desde el 17 de enero comenzó un lento proceso de toma de conciencia de su nuevo rol en torno a tres ejes.

---

65. *Cambio 21*, 30 de junio 2010, véase también: "Elaborado por La Moneda. Documento revela irregularidades en aportes de Bachelet a ONGs", *El Mostrador*, 27 junio 2010.

El primero fue comenzar a desempeñar el inédito papel opositor, el que en esta primera etapa mostró reacciones lentas y de difícil articulación. En la medida que la coalición había surgido para reconstruir una democracia y no un país *terremoteado* bajo un Gobierno de derecha, en un complejo proceso de despliegue de destrezas sus iniciativas fueron más bien reactivas centrándose en la crítica a la amplia gama de conflictos de interés que evidenciaba tanto el Presidente como sus ministros. La postergación de venta de los activos de Piñera en LAN —que se justificó por razones de "la emergencia"— comenzó a perder su filo en la medida que se iniciaba la venta del paquete accionario. En este contexto, el ministro Larroulet advertía que, de seguir la oposición una política confrontacional, no habría diálogo posible. Sin embargo, la crítica sostenida respecto a otros activos como Chilevisión significó un cambio en la solución antes anunciada de crear una fundación bajo su dirección —que mantendría los conflictos de intereses— moviéndose en la dirección de una venta del canal avaluado en cerca de US$140 millones. La tensión llegó al punto que senadores concertacionistas promovieron el congelamiento de la Ley de Televisión Nacional y el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de Televisión hasta que se vendiera definitivamente Chilevisión. Otras acciones opositoras en el Congreso, como el aumento a $100 mil para el bono, terminó en la aprobación parlamentaria de la propuesta gubernamental por los originales $40 mil. Un tema que preocupó a la oposición fue el anuncio de la Ley de Donaciones que dejaría importantes sumas de dineros fiscales en manos privadas fuera de la supervisión parlamentaria. Anotándose un punto, la oposición fue capaz de modificar esta propuesta otorgando "facultades a la Contraloría para que fiscalice el uso de los fondos que se recaudarán"; se eliminó la retroactividad, lo que —en la práctica— impedirá que quienes hicieron donaciones durante la Teletón que se realizó el 5 y 6 de marzo se beneficien de esta ley. Eliminó la creación del controvertido Comité Ejecutivo para la Reconstrucción que integraba el Presidente Sebastián Piñera y que —según el texto original— estableció "que los fondos [ser] administrados por el Ministerio de Hacienda"[66].

Las críticas opositoras a las decisiones e indecisiones gubernamentales, los evidentes conflictos de interés presidenciales y de otros funcionarios, así como la decisión de la presidenta Bachelet de iniciar actividades en un nuevo marco institucional como la Fundación Dialoga, publicar el libro *Ideas para Chile, aportes de la centroizquierda* y anunciar trabajo en terreno, puso en cuestión la anunciada política oficialista de los acuerdos y de unidad nacional. Quizás el elemento aglutinante que necesitaba lo proporcionó el Gobierno con su permanente ataque a la obra concertacionista y el gobierno Bachelet, frente al cual sus dirigentes salieron a defender la herencia gubernamental.

66. *La Nación*, 22 de abril 2010.

No obstante estas tensiones, los senadores opositores Camilo Escalona (PS), Ignacio Walker (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) adoptaron una postura más proactiva elaborando un proyecto de ley que crearía una Agencia para la Reconstrucción Nacional que permitiría coordinar los esfuerzos públicos y privados para reparar los daños producidos por el terremoto, dando mayor transparencia y control sobre el conjunto del proceso. Igualmente, el presidente Lagos formuló una propuesta de reconstrucción que vinculaba la forma de financiamiento de esta con el desarrollo de un proyecto consensuado del país que se quería construir[67].

Producto de la propuesta de financiamiento del fondo de reconstrucción elaborado por el Gobierno —que contempló un aumento del impuesto a las grandes empresas— las relaciones oposición-Gobierno dieron paso a una nueva forma de relacionamiento abriéndose espacios de comunicación entre las directivas partidarias de la Concertación y el Presidente, modificándose propuestas legislativas aun cuando subsistieron diferencias respecto al alza de tributos, las que la oposición proponía convertir en permanentes y el gobierno consideraba medidas temporales.

El nuevo tipo de relacionamiento Gobierno-oposición fue igualmente alentado por las crecientes divergencias al interior de la Alianza respecto al alza de impuestos y a la orientación que iba adoptando en sus primeros meses la administración Piñera. Una columna de Axel Buchheister fue expresiva de tales diferencias, donde le enrostraba al Gobierno el que su agenda hubiera sido raptada por el terremoto postergándose la agenda que lo había llevado al poder, y afirmaba que "sería inconcebible que la centro-derecha terminara gobernando en torno a una agenda estatista y 'progre' puesta por la oposición, pues ello sería pasaporte seguro para un quinto gobierno de la Concertación, que a esas alturas seria el sexto"[68]. De esta forma, la dinámica política oposición-Gobierno adoptó un nuevo cariz en el que la dirigencia concertacionista, en opinión de algunos analistas, se sobreactuó, aplaudiendo las iniciativas gubernamentales como el alza de impuestos a las grandes empresas sin mostrar los aspectos críticos de ella[69].

Una segunda línea de reorganización —además de incorporar a los diputados PC a las comisiones parlamentarias concertacionistas (15 de marzo)— fueron los controvertidos intentos de refundación de la coalición. Este difícil y lento proceso mostró sus fallas estructurales cuando se convocó a la formulación del programa opositor, pero al mismo tiempo se excluyó al disidente Marco Enríquez-Ominami, reproduciéndose el sectarismo que había llevado, en parte, a la derrota de enero. De igual forma, rápidamente se renovaron las tensiones intrapartidarias en miras a la elección de sus nuevas autoridades. En el caso del PPD, se inició una fuerte disputa

---

67. Carta abierta de Ricardo Lagos Escobar, "La tarea de Chile hoy: reconstruir y avanzar", *La Tercera*, 21 de marzo 2010.
68. Axel Buchheister, "Una 'guerra falsa'", *La Tercera*, 18 de abril 2010, pág. 4.
69. Jorge Navarrete, "Un sabroso gato por liebre", *La Tercera*, 25 de abril 2010, pág. 4.

entre laguistas y girardistas por el control de su directiva, entre escalonistas y las divididas fuerzas de Rossi y Díaz en el PS, y entre la vieja guardia DC y la nueva generación de dirigentes. En este marco se produjo el conflicto Rossi-Tohá, el que mostró a una generación política en crisis y, hasta ese momento, el imposible recambio generacional en estilos y procedimientos.

Un episodio más en este proceso de reconstrucción política fueron los discursos de los ex presidentes en el cónclave que la Concertación organizó el lunes 12 de abril, momento en el cual destacaron los grandes logros en materia de protección social implementados por los gobiernos concertacionistas, la necesidad de mejorar la institucionalidad política de la coalición y de desplegar una oposición propositiva capaz de recoger los sentimientos de la sociedad construida en las últimas décadas.

Una tercera línea de acción fue el intento de darle un fundamento conceptual y político a una ampliación de la Concertación, lo que se inició con el acercamiento entre los seguidores de ME-O, Junto Podemos, socialistas, ex miembros de los respectivos comandos, ex ministros de Frei y Océanos Azules materializándose en el documento "Nuevo consenso progresista". Los puntos de acuerdo fueron la necesidad de generar una nueva Constitución, restablecer el aborto terapéutico, la protección de los recursos naturales, un mayor y permanente *royalty* a las empresas mineras, una reforma laboral que fortaleciera el sindicalismo, el mejoramiento de la educación pública y una reforma tributaria permanente. No obstante, la filtración de estos encuentros y su documento generó fuertes reacciones de un sector del PDC que rechazó con vehemencia la posibilidad de una refundación de la Concertación ampliándose hacia la izquierda e integrando movimientos y organizaciones sociales, en torno a una institucionalidad tipo Frente Amplio uruguayo. No obstante las nuevas ideas del sector concertacionista de izquierda, estimuladas quizás por la errónea percepción de la emergencia de nuevos liderazgos sociales producto del terremoto como las movilizaciones en Dichato y la aparición de líderes en edificios destruidos que confrontaban las inmobiliarias, no avanzaron más allá de declaraciones que irritaron a sus aliados democratacristianos.

Más adelante, el documento laboral conjunto del diputado Osvaldo Andrade (PS) y el senador Pablo Longueira (UDI), "Más y mejor sindicalismo para una mayor equidad", y la propuesta "Gran pacto nacional para superar la pobreza" de los diputados Osvaldo Andrade, Sergio Aguiló, Denisse Pascal y Juan Luis Castro, aspiraban llegar a consensos con el Gobierno y la alianza en torno a estos temas[70]. También otras iniciativas similares, tal como la reunión de la bancada de diputados democratacristianos con el ministro de Planificación, Felipe Kast, para abordar los temas relativos a la superación de la pobreza, la creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social y la red de protección social impulsada por los gobiernos de la Concertación. Estas gestiones finalmente se tradujeron en

70. *La Nación*, 2 de agosto 2010.

un acuerdo Alianza-Concertación para crear en el Senado una comisión conjunta sobre la pobreza. De la misma forma, en la Va región, el intendente, alcaldes, empresarios, universidades y parlamentarios suscribiendo diez medidas de probidad y transparencia. El acuerdo final en torno al financiamiento del Transantiago continuó esta dinámica colaborativa.

Terminado el proceso de renovación de sus directivas, los partidos de la Concertación iniciaron una revisión de su política opositora y comenzaron a adoptar nuevas posturas en vistas de la elección municipal de 2012, tema en el cual la inclusión del PC volvió a enturbiar las aguas democratacristianas.

Especial efecto disruptivo tuvo la postura del senador DC, Hosain Sabag, durante la discusión de la reforma a la Ley Antiterrorista, dándole su voto al oficialismo para mantener la figura de incendio como terrorismo, quebrando la unidad concertacionista, ante lo cual en nuevo presidente democristiano, Ignacio Walker, reaccionó afirmando que "desde el día de hoy, a partir de esta votación, la oposición que tenemos en el Senado es más bien teórica".



La huelga de hambre de los comuneros *mapuche*, la partida de la ex presidenta Bachelet a las Naciones Unidas y el debate presupuestario, terminaron por marcar ese período.

La huelga de hambre fue el principal hecho político que, junto a las celebraciones del Bicentenario, cerraron el primer ciclo gubernamental. Aun cuando el Ejecutivo se abrió a crear una mesa de diálogo, tanto su agenda como los miembros de la misma fueron rechazados por los voceros de los huelguistas, producto de lo cual el Gobierno se abrió a una segunda mesa específicamente para tratar la huelga de hambre dado que su desenlace tendría efectos indudables sobre la aprobación presidencial[71].

Al mismo tiempo, la huelga creó tensiones al interior de la Concertación cuando la presidenta del PDD, Carolina Tohá, afirmó que había sido un error aplicar la Ley Antiterrorista contra los *mapuche*. Estas afirmaciones llevaron al nuevo presidente de la DC a tomar distancia de tales afirmaciones y al ministro del Interior de aquel entonces, Edmundo Pérez Yoma (DC), a señalar que la decisión había sido de la propia presidenta Bachelet.

Por su parte, sorpresivamente la ex presidenta Michelle Bachelet aceptó el nombramiento, antes rechazado, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para encabezar la nueva agencia creada por la Asamblea

---

71. "El apoyo a la manifestación se empina al 53% y un 86% piensa que huelga mapuche afecta imagen internacional de Chile". Véase http://diario.latercera.com/2010/09/13/01/contenido/pais/31-38458-9-encuesta-revela-que-86-piensa-que-huelga-mapuche-afecta-imagen-internacional-de.shtml

General de Naciones Unidas para los asuntos de la mujer (ONU-Mujer) con rango de Subsecretaria General. Este alejamiento del ruedo político de la principal figura concertacionista creó nuevas realidades en las relaciones y proyecciones de las dirigencias concertacionistas recientemente elegidas.

Finalmente, ese primer período de gobierno se cerró con el inicio de la discusión sobre la Ley de Presupuesto, lo que puso en tensión las relaciones Concertación-Gobierno, organizando los partidos opositores su propia comisión.

En suma, todo hacía pensar que si la proyección de crecimiento anual del Banco Central para 2010 se situaba en torno al 5%, la principal figura concertacionista se alejaba del país y las tensiones al interior de la Concertación continuaban o se profundizaban, el período octubre 2010-marzo 2011observaría inmejorables condiciones para que la agenda gubernamental ganara espacios al interior de la oposición y el diseño político del Ejecutivo adquiriera renovadas fuerzas. Todo eso, siempre y cuando la figura presidencial continuara logrando altos niveles de aprobación ciudadana.

CAPÍTULO 5

¿AIRE FRESCO Y LUZ DE SOL?
La "nueva derecha" y los conflictos sociales

La primera invitación que hizo al país la Coalición por el Cambio en la campaña presidencial de 2009, fue olvidarse del pasado y "abrir de par en par las puertas y ventanas para que entre el aire fresco a renovar y la luz del sol a iluminar".

Cumplido un año desde el inicio de la administración del Presidente Piñera, llamaba la atención la discrepancia entre sus propuestas programáticas y las realizaciones; la promesa de una nueva forma de gobernar más eficiente y técnica que, de acuerdo a sondeos de opinión, no satisfacía a la ciudadanía; el criticado papel jugado por el sector privado en la reconstrucción; y la nueva visión de los asuntos públicos que unía a sus fuerzas de apoyo, la que se vio rápidamente fragmentada.

Los desarrollos observados en el segundo semestre de gobierno mostraron que si bien el crecimiento logró su meta, las tensiones al interior de la Concertación se profundizaron y algunas iniciativas del Ejecutivo erosionaron la unidad opositora en el Congreso. Al mismo tiempo, la figura presidencial fue perdiendo apoyo ciudadano producto de conflictos mal enfrentados o innecesarios —como el de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)— y el diseño político gubernamental; "el relato" no logró cuajar.

El Gobierno trató de delinear con mayor claridad ciertos perfiles de su estrategia política formulando la tesis de una nueva derecha, encabezada por un líder con apoyo popular, capaz de consolidar una cohorte de dirigentes políticos autónomos de los partidos. Esta postura llegó a su clímax con el rescate de los mineros, pero en los meses posteriores se vio debilitada por una sostenida baja en la popularidad presidencial y el inesperado cambio de Gabinete, oportunidad en que se intentó incrementar el control político del Ejecutivo constituyéndolo en el gran elector del futuro candidato presidencial de la derecha. Los fallidos intentos presidenciales de presencia internacional —aun cuando con significativos avances en política vecinal—, la permanente crítica a la gestión Bachelet con la inútil pretensión de erosionar su apoyo popular, así como las permanentes concesiones valóricas y políticas al sector tradicionalista católico de la Alianza, caracterizaron el período.

Al interior de la Alianza, la disputa por el liderazgo hegemónico alimentó los permanentes conflictos entre RN y la UDI. La forma cómo se zanjó el caso de

la intendenta del Bío-Bío mostró la decisión de la UDI de hacer pesar su poder político haciendo retroceder al Ejecutivo, mostrándole los límites de su propio accionar, e imponiendo la permanencia de su futura candidata a senadora. Por su parte, los intentos de RN por abrirse a la DC —que recibieron de esta una respuesta negativa— despertaron el rechazo de la UDI tal como desecharon la tesis de la nueva derecha.

En ese espacio político, en el que no se cristalizó la apuesta estratégica gubernamental, se atisbaron algunas de sus intenciones de fondo. La política del desalojo logró éxito con el despido de 10.000 funcionarios públicos durante 2010 y, si bien la política de privatizaciones enfrentó dificultades, logró avances de manera encubierta en las áreas de salud y educación. No obstante, la protección a los pequeños y medianos agricultores y el estímulo a la inversión extranjera no fueron medidas suficientes como para fijar rumbos fundacionales para el sector privado, el que vio con desagrado las reglamentaciones a los bancos y la protección a los consumidores. Sin embargo, estas últimas medidas en defensa de los intereses ciudadanos, a las que se les sumó la política de subsidios habitacionales, tampoco sirvieron para superar las crisis, ineficiencias y demoras en la reconstrucción.

Las iniciativas políticas fueron escasas y todas ellas lograron éxito gracias al aporte de la oposición en el Congreso. Tal fue el caso del *royalty* minero, la Ley de Presupuesto y la reforma a la educación. Otras recién iniciaban su proceso legislativo, como la agenda de reformas políticas, la alta dirección pública y la extensión del postnatal. Las áreas más sensibles, y que sufrieron una profunda crisis, fueron aquellas más cercanas al ideario y sensibilidad gubernamental: seguridad ciudadana y defensa.

Simultáneamente, el estilo de gobierno se caracterizó por un doble discurso: por una parte, un énfasis en la protección de derechos ciudadanos y, por la otra, la implementación de políticas que no se les correspondían. Tal fue la situación observada en materia de normas medioambientales, la regulación *multirut*, la política en materia de comunicaciones, así como en derechos humanos. Todo esto condimentado con permanentes conflictos de intereses.

Enfrentado sucesivas crisis, el estilo gubernamental se caracterizó por un primer momento de despliegue retórico y efectivo de fuerza policial, el que terminó cediendo el paso a la negociación. Tales fueron los casos de la huelga de hambre de los comuneros *mapuche*, de la recuperación de tierra en Rapa Nui, de la toma del Chiflón del Diablo por trabajadoras en Lota y la movilización contra el alza del gas en Magallanes.

En ese marco, la Oposición se mostró lejana y sin presencia en los conflictos sociales, dividida ante las iniciativas legislativas del Gobierno, y presa de una permanente tensión estratégica entre aquellos que proponían refundar la Concertación como frente amplio y aquellos que no aceptaban nuevos socios y diseños institucionales distintos. No obstante, las opciones tácticas para enfrentar las municipales

fueron rompiendo ese alineamiento abriéndose la coalición a conversaciones con el PC, PRI y PRO para explorar en la nominación de un solo candidato en las elecciones municipales de 2012.

I. PIÑERISMO AL PODER

El diseño político del Gobierno trató de estructurarse en torno a la tesis de refundación de la derecha —la "nueva derecha"— bajo el liderazgo y continuada personalización del poder presidencial.

1. Presidencialismo plebiscitario y la nueva mayoría social

Agotado el uso y abuso de la épica del rescate de los 33 mineros, y vuelto el Presidente Piñera al país después de su primera gira a Europa, la estrategia política evidenció sus perfiles generando inmediato rechazo por parte de algunas de sus fuerzas de apoyo, en particular de la UDI.

Estas tensiones al interior de la Alianza se anticiparon en el mes de octubre de 2010 ante las propuestas para superar el problema de la minoría parlamentaria. Así, Carlos Larraín afirmaba que era "perfectamente posible entregarles un ministerio al PRSD y a la DC", ampliando la Alianza y revertiendo su minoría en Cámara y Senado[1]. La respuesta del nuevo presidente del PDC no se dejó esperar dejando en claro que su partido no estaba disponible para tal operación. No obstante, Larraín reiteró sus dichos cuando a comienzos de 2011, después de la Junta Nacional DC de enero, insistía en que su interés para tener a la DC como aliado radicaba en:

> (…) la crítica de la DC al sistema de mercado. A mí me parece que tiene su cuota de verdad y de lógica. Y veo más disposición para corregir lo que tiene de malo la economía de mercado en la Democracia Cristiana que en los sectores nuestros (…) El tema, yo se lo he planteado más de alguna vez al Presidente Piñera. Él preside un gobierno minoritario y no podría estar en contra de ampliar la mayoría política. Además él siempre se ha definido como un humanista cristiano.[2]

---

1. *La Tercera*, 1 de octubre 2010.
2. *Cambio 21*, 10 de enero 2011. Conceptos que reiteró en una entrevista a comienzos de febrero: "la directiva de RN y los parlamentarios nuestros responden a una cultura humanista cristiana. Por ahí encontramos muchos temas comunes. ¿En 2011 cuáles cree que podrían ser las coincidencias? En un discurso reciente expresé que no estábamos satisfechos con la forma en que está funcionando la economía de mercado en Chile. Que la sociedad chilena estaba siendo monopolizada por el Estado o por el mercado. Yo dije que nos veíamos como el partido de la sociedad y de la vida comunitaria auténtica". *El Mercurio*, 6 de febrero 2011.

Frente a esa postura de RN, el senador Longueira postuló una fórmula distinta. Tal era un "cambio de eje" para lograr acuerdos con la Concertación. De acuerdo a Longueira,

> lo que tenemos que hacer es cambiar el eje y que el Gobierno dé el paso de centrar las energías y llegar a acuerdos con la Concertación, porque creo que es más estable y más serio en el tiempo construir acuerdos que estar recurriendo a dos o tres votitos marginales ante los cuales tenemos que estar poniéndonos de rodillas cada vez que tramitamos un acuerdo (…) no soy partidario de esa estrategia de dividir a la Concertación. Muy por el contrario, soy una persona que ha creído siempre en los grandes acuerdos.[3]

Desde la extrema derecha, el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, contraatacaba afirmando que:

> la derecha debe comportarse de una manera distinta a la tradicional: debe dejar de avergonzarse de sus ideas y principios para reivindicarlos y aplicarlos. El escaso éxito político que ha tenido en los últimos 100 años en Chile no se debe a que sus ideas sean peores o menos atractivas que las de la izquierda, sino a que ha estado avergonzada de proclamarlas. Cambiar eso sí que sería un aporte del gobierno de Sebastián Piñera al Chile del Bicentenario[4].

En ese contexto surgió la propuesta gubernamental de fundar una "nueva derecha", la que se caracterizaría por intentar enfrentar temas que la derecha tradicional habitualmente había escabullido como el alza de impuestos, derechos de los pueblos originarios y ambientales, así como algunos valóricos, como en el caso del acuerdo de vida en común. El jefe del Gabinete, Rodrigo Hinzpeter, postulaba que se había consolidado una derecha que excedía los límites históricos del sector, porque a sus banderas tradicionales, como la seguridad ciudadana y el crecimiento económico, había sumado otras más vinculadas a la centroizquierda, como la agenda medioambiental, laboral y los pueblos originarios. Con estas definiciones se configuraría:

> Una centro derecha democrática y social (…) capaz de conducirse con pragmatismo, que a mí me gusta más llamarlo flexibilidad. Y creo que una centro derecha que aspire a gobernar tiene que ser capaz de seleccionar de cualquier mundo ideológico las cosas que funcionan y que ayudan a los chilenos (…) Esta no es una derecha que no esté por empoderar a los ciudadanos frente a los grandes intereses. Ahí se han jugado el Sernac Financiero, las cláusulas abusivas en los contratos, la venta de remedios en los supermercados, por ejemplo. Se ha reconfigurado la derecha que ganó con estos

---

3. *El Mercurio*, 1 de octubre 2010.
4. *La Tercera*, 3 de octubre 2010.

> nuevos elementos, que la convierten en una derecha democrática, social y que emerge con fuerza en estos siete meses.[5]

Orgánicamente, esta nueva derecha debería aspirar a fortalecer sus términos institucionales comunes en torno a la Coalición por el Cambio:

> Pasada la campaña, la Coalición ha entrado a un estado de hibernación que me preocupa. Es fundamental estructurar, institucionalizar y revivirla mucho más de lo que se ha hecho, y eso les corresponde primordialmente a los partidos. Los tiempos han andado más rápido de lo que imaginaba y tenemos que cautelar el afecto de los ciudadanos respecto de una opción política que está naciendo hoy día, como es sentirse identificado con la Coalición por el Cambio.[6]

Estas afirmaciones despertaron fuerte resistencia en sectores de la UDI. Ministros como Joaquín Lavín tomaron distancia de esa postura, al afirmar en el cónclave de su partido que "llegamos al gobierno para cumplir, para ser eficientes, para jugarnos por los más pobres y por ese sueño que ha tenido siempre la UDI popular, que es esta centroderecha distinta, con llegada a los sectores populares". Igualmente, el alcalde Francisco de la Maza y el propio Jovino Novoa enfatizaron la necesidad de que la UDI contara con una agenda política propia para hacerse un espacio en un Gobierno marcadamente centrado en la figura del Presidente, tratando de superar así la supuesta marginación de la colectividad del núcleo de poder en La Moneda.

La propuesta de estrategia gubernamental —etiquetada por el senador Girardi como la de una "derecha *hinzpeteriana*"—, liderada por la figura presidencial y apoyada por una amplia opinión pública (presidencialismo plebiscitario), aspiraba a romper el alineamiento político partidario de los últimos veinte años, atrayendo e integrando a la DC a ese nuevo esquema, capturando al centro político, aislando y reduciendo al resto de la Concertación a su mínima expresión.

Como moneda de cambio el Ejecutivo propuso un conjunto de reformas políticas fundamentadas en la necesidad de

> (…) perfeccionar nuestras instituciones democráticas, de modo de incrementar su solidez, legitimidad y eficacia en el contexto de una sociedad en constante cambio, compuesta por ciudadanos cada vez más exigentes (…) 3.700.000 chilenos, que corresponden a casi un tercio de nuestra población adulta, no están inscritos en los registros electorales (…) establecer un sistema de inscripción automática y voto voluntario

---

5. Cfr. Rodrigo Hinzpeter, "Una nueva derecha democrática y social", Intervención en el Consejo Ampliado de la UDI, 5-6 de noviembre, 2010; y entrevista en la revista *Capital*, véase http://www.capital.cl/poder/hinzpeter-sus-definiciones-y-la-nueva-derecha/
6. Ibíd.

> (…) permitir y regular el voto desde el extranjero de los chilenos que mantengan vínculos con el país (…) ampliar el poder de decisión de los ciudadanos en la selección de los candidatos a cargos de designación popular. Por eso nuestro gobierno presentará próximamente indicaciones al proyecto de ley sobre primarias.[7]

Junto a esas reformas políticas, circuló la propuesta de reelección presidencial, la que podría o no implementarse para el caso de Piñera, a cambio de una modificación del sistema electoral binominal y otras reformas largamente propuestas por la Concertación, como el financiamiento público a los partidos políticos.

Considerando que cuatro años eran insuficientes para implementar políticas a mediano o largo plazo, y siempre que no se aplicara durante el período en que se aprobara la iniciativa en el Congreso, la propuesta obtuvo el apoyo transversal de los diputados Juan Luis Castro (PS), Ramón Farías (PPD), Cristina Girardi (PPD), Marta Isasi (IND), Miodrag Marinovic (IND), Gaspar Rivas (RN) y Nicolás Monckeberg (RN)[8]. Propuesta que coincidió, en parte, con la del senador Pablo Longueira (UDI), el que se lanzó al ruedo pre-presidencial con un programa que contenía una solución plebiscitada a la mediterraneidad boliviana, una respuesta a los pueblos originarios, una profunda reforma educacional, la erradicación de la extrema pobreza, una reforma tributaria para superar la desigualdad, la reforma al sistema electoral y político, y un nuevo trato laboral decidido por una mesa tripartita[9].

La reacción de la directiva UDI frente a estas ideas mostró la profunda fractura al interior de la Alianza respecto del diseño estratégico de la nueva administración. Críticas a la tesis de una "nueva derecha" marcaron la primera jornada del Consejo Ampliado UDI por parte del alcalde Francisco de la Maza y del propio Jovino Novoa, quienes enfatizaron la necesidad que la UDI contara con una agenda política propia para hacerse un espacio en un Gobierno tan centrado en la figura del Presidente, enfrentando así la sentida marginación de la colectividad del núcleo de poder en La Moneda[10]. Si bien en la cena ofrecida por el Presidente a la directiva de la UDI el 8 de noviembre de 2010 este se pronunció en contra de la reelección, sus dirigentes respondieron que su opción política estaba por mantener los parámetros de la postura tradicional de derecha en materias tributarias, que las reformas políticas no podían pensarse para este período presidencial, y que el tema central en

7. Cristián Larroulet, "Reformas para una mejor democracia", *El Mercurio*, 6 de noviembre 2010, pág. A2. Frente a esta propuesta, Pepe Auth (PPD) propuso una iniciativa de reforma electoral que incorporaba 12 senadores, a través de seis nuevas circunscripciones, y agregaba treinta cupos más en la Cámara, elegidos a través de un sistema proporcional.
8. *La Nación*, 3 de diciembre 2010.
9. *El Mercurio*, 7 de noviembre 2010.
10. *El Mercurio*, 6 de noviembre 2010.

este período era el "enfrentar la elección municipal, apostando a la profundización de la descentralización y un mayor desarrollo de las regiones"[11].

La comisión política de la UDI analizó el tema sobre la base del texto "Qué hay de nuevo en la derecha", encargado al vicepresidente de la Fundación Jaime Guzmán, quien afirmó que:

> Lo primero y más novedoso que tienen las ideas de derecha en Chile es que hoy están en el gobierno. ¿Y qué significa ser de derecha? Algunas de las ideas matrices son: que las personas son anteriores al Estado; una vocación por la libertad y un aprecio por la institucionalidad y el orden público. Pero, ¿qué es lo distintivo de nuestra derecha en comparación con la antigua, y en relación con la del resto del mundo? En dos palabras: lo popular. Esta vocación por los más pobres, la construcción de una sociedad inspirada en valores cristianos y el abrazar la idea de una economía social de mercado han sido elementos muy novedosos en la evolución de nuestra derecha. Lo que le agrega aun más valor, es que esto fue planteado en una época en que la pobreza era bandera exclusiva de la extrema izquierda, cuando la economía libre no era el "único modelo" viable, y cuando lo cristiano era monopolizado por un partido. Es esta visión de la sociedad la que ha permitido a la derecha conectar transversalmente con una mayoría de los chilenos, siendo lo más destacado el hecho de que sus votantes emergen del pueblo y por sus propias convicciones. En el fondo, es que sus partidarios no son meros grupos de intereses reunidos en partidos, sino que la suma de convicciones e ideas.[12]

En lo fundamental ambos diseños mostraron distintas opciones estratégicas: por una parte, la gubernamental pensando en canalizar un amplio apoyo de opinión pública y cooptar al centro político a cambio de algunas reformas y abriéndose a temas no tradicionales de derecha como los valóricos, impuestos y medioambiente. Por la otra, la UDI, con una sólida mayoría parlamentaria, apostando a ampliar su base popular en las próximas elecciones municipales, captando al centro social a través de una diversificada orgánica partidaria con despliegue nacional y centrando su discurso en los temas propios de la derecha tradicional. Indudablemente, el triunfo de una de esas opciones suponía el definitivo sometimiento político de la otra, fractura que difícilmente se resolvería en el corto plazo.

Críticas a la tesis de la "nueva derecha" también se escucharon desde RN, siendo el senador Andrés Allamand quien sostuvo que "la tesis del ministro Hinzpeter es un concepto equívoco", dado que a su juicio era una teoría excluyente y que

11. *El Mercurio*, 8 de noviembre 2010.
12. *El Mercurio*, 15 de diciembre 2010. Un resumen en http://www.quepasa.cl/articulo/20_4825_9.html

desconocería el trabajo realizado por la UDI y RN y los independientes para que Piñera pudiera ser presidente[13].

Paralela a esas diferencias políticas se había incubado la competencia entre personalidades políticas independientes, miembros del Gabinete piñerista "como Laurence Golborne, catapultado al estrellato producto del rescate de los mineros, o el mismo Hinzpeter, marcado como el delfín del presidente", y los históricos de la derecha como Longueira, Allamand o Espina, llegando a advertir este último, durante la gira presidencial a China y Japón, que "el que quiera ser candidato, no puede ser ministro". No habiéndose cumplido un año de gestión, dentro de las filas de la Alianza comenzaba a gestarse la dura confrontación pre-presidencial, lo que forzó a Piñera a advertir que "el que quiera ser candidato no es ministro, porque no corresponde; y el que es ministro se preocupa de que el gobierno lo haga bien, y no se transforma en candidato".

No obstante, la renuncia de Ravinet (véase infra), la crisis del gas en Magallanes y la mala evaluación[14] de la gestión en el Transantiago, percutaron el primer cambio de Gabinete incorporando a un técnico en Transportes, fundiendo los ministerios de Energía y Minería, y nombrando como ministros a figuras emblemáticas de la Alianza, contradiciendo en los hechos la neutralidad de estos como presidenciables. El viernes 14 de enero de 2011, a tres días de celebrar un año de su triunfo electoral, Sebastián Piñera anunció un sorpresivo cambio de Gabinete, nombrando a los senadores Andrés Allamand en Defensa, Evelyn Matthei en Trabajo y Laurence Golborne como biministro de Energía y Minería. Posteriormente, Pedro Pablo Errázuriz[15], antiguo colaborador de Piñera en LanExpress, fue nombrado ministro de Transporte. Posteriormente, a comienzos de febrero, realizó un cambio de subsecretarios nombrando en Energía al ingeniero comercial Sergio del Campo[16], en Bienes Nacionales al abogado Juan Carlos Bulnes, en el SERNAM a la abogada y vicepresidenta de RN Cecilia Pérez Jara, y en la Subsecretaría de Salud Pública el médico Jorge Díaz. A pesar de su responsabilidad en la crisis que enfrentó el Ministerio de Defensa en 2010, el subsecretario de Defensa, ex comandante en jefe del Ejército general (r) Óscar Izurieta, fue confirmado en el cargo.

Aun cuando ese nuevo diseño político trató mejorar la falta de coordinación entre La Moneda y los partidos de la Alianza, y la capacidad de análisis y

13. *El Mercurio*, 21 de noviembre 2010.
14. El cambio de Gabinete mostró el rol político clave de María Luisa Brahm como jefa del grupo de asesores o "Segundo Piso".
15. Pedro Pablo Errázuriz, ex gerente general de la empresa sanitaria Essbio, ingeniero Universidad Católica, desempeñó como gerente general de LanExpress y cargos directivos en Endesa de Argentina, Chile y Perú.
16. Gerente general de la termoeléctrica Guacolda, filial de AES Gener, que opera cuatro centrales a carbón, y colega del ministro Golborne cuando ambos figuraban en la planta de ejecutivos de esa corporación.

prevención política, al ampliarse la reunión de análisis político con Allamand y Matthei como invitados, el cambio significó introducir en el Gabinete a dos figuras presidenciales más, las que junto con las tres ya existentes —Hinzpeter, Lavín y Golborne— configuraron un cuadro en el que la competencia por una mayor figuración y desempeño político en cada cartera tendría dos efectos principales. Por una parte, el aumento de las rivalidades internas y, por la otra, la acentuación del rol conductor de Piñera para contrapesar la nueva presencia de políticos experimentados y con apoyo partidario en el Gabinete[17]. De alguna manera, si bien estas inclusiones mejorarían las relaciones con la Alianza, al mismo tiempo daban la imagen que consolidaban a Piñera, siguiendo con su estrategia de gobernar por sobre los partidos, como el gran elector del candidato presidencial de la derecha. A su vez, por una parte, el Presidente integró al Gabinete a uno de los críticos más vocales de la Alianza como ministro de Defensa y, por la otra, cooptó como ministra de Trabajo a la senadora díscola de RN, fortaleciendo la representación de los sectores más conservadores de ese partido en el Senado. Con todo, el cambio de parlamentarios a ministros nuevamente desató las críticas —por parte de los partidos respectivos— a un sistema de nombramientos que si bien los fortalecía, aparecía reñido con los principios de representación democrática[18].

Una visión de conjunto del Gobierno la resumió Sergio Bitar (PPD), indicando que las debilidades que había evidenciado en ese primer período eran tres: "Crisis de credibilidad, falta de diálogo y selección de personal. Sobre lo primero, es evidente que hay una diferencia abismal entre los anuncios y los resultados. En lo segundo, no hay capacidad de entendimiento con la oposición, lo cual ha llevado a un roce constante. Y lo tercero, el personal que ha llegado no está a la altura"[19]. El Ejecutivo esperaba que el cambio de Gabinete permitiera superar esas debilidades.

---

17. "Esta semana el Presidente incorporó a Andrés Allamand y a Evelyn Matthei en su círculo más íntimo de poder. Le permitió a Laurence Golborne capitalizar el fin del paro en Magallanes, pero se preocupó de que Hinzpeter se llevara también parte de los aplausos. A Lavín lo mandó a buscar en helicóptero para felicitarlo en La Moneda por conseguir la aprobación de la reforma educacional. Sin embargo, notificó a los cinco que perderán su apoyo si se dedican a complacer a las encuestas en vez de cumplir la agenda del Gobierno". Véase *El Mercurio*, 24 de enero 2011

18. "Tras la designación del ex diputado Gonzalo Uriarte como senador, en reemplazo de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, el pasado miércoles, la directiva de la UDI optó este viernes por nombrar en el cupo vacante en la Cámara de Diputados al abogado Cristián Letelier Aguilar, cercano al ex presidente del partido, Pablo Longueira". Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/01/21/la-udi-designa-a-abogado-cercano-a-longueira-para-el-cupo-de-gonzalo-uriarte-en-la-camara-de-diputados/ En el caso del senador Allamand, RN decidió que su presidente Carlos Larraín fuera su reemplazante.

19. *Cambio21*, 15 de enero 2011.

2. Críticas a una gestión suprapartidaria y personalizada

Respondiendo a su estrategia, el estilo y formas de actuar del Presidente continuaron acentuado su protagonismo y el de los miembros de su Gabinete en desmedro de las figuras políticas de la Coalición para el Cambio, en particular, de la Alianza. Esta forma de actuar fue incluso criticada por los empresarios asistentes a la Cena Anual de la Industria, quienes cuestionaron el personalismo de Piñera y la falta de una política comunicacional clara en algunas materias relevantes[20].

Una muestra de la importancia dada a la política comunicacional centrada en el Presidente lo graficó, a comienzos de octubre, el gasto del Ejecutivo en sondeos de opinión pública, el que superaba en seis meses al total del primer año de la presidenta Bachelet. La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) firmó 17 contratos por un total de $ 208 millones para encargar sondeos y *focus groups*, a diferencia de los $ 150 millones utilizados en 2006[21]. De acuerdo al Presidente, "parte de estas encuestas se hicieron durante el período del terremoto, para conocer bien cuáles eran las necesidades, las expectativas, los sentimientos, pero uno cuando lee el diario no queda indiferente [y] deberán ser reducidos significativamente"[22].

El particular estilo presidencial generó preocupación en la oposición, dada la injerencia del Presidente en el Banco Central. El senador PPD, Ricardo Lagos Weber, consideró como "inapropiados" los dichos de Piñera cuando afirmó que conversaría con el organismo autónomo sobre la situación del dólar[23]. Coincidió con esa crítica al doble estándar gubernamental, Carlos Ominami, ex ministro de Economía de Aylwin, estableciendo que "la derecha habría rasgado vestiduras por la autonomía del BC si esto hubiese ocurrido con la Concertación", mandando recados por la prensa para luego reunirse con el consejo del BC a discutir sobre el dólar. Igualmente, Carlos Massad, ex presidente del organismo, recordó que su nombramiento fue rechazado en una primera votación del Senado por haber sido ex ministro de Salud[24].

Las críticas desde su propio sector se agudizaron, y miembros de su coalición con mayor proyección política, como el senador Pablo Longueira, afirmaban que "el gran problema del gobierno de Sebastián Piñera es que es de Sebastián Piñera. No he escuchado nunca a un ministro ni al Presidente hablar de la Alianza. No escucho a nadie hablar de la Alianza, el gobierno de nosotros, de la Alianza, de nuestras ideas", lo que a su juicio impedía desplegar los liderazgos de los partidos de la coalición poniendo en riesgo la continuidad del Gobierno[25].

---

20. *El Mercurio*, 29 de octubre 2010.
21. *El Mercurio*, 4 de octubre 2010.
22. Ibíd.
23. *El Mostrador*, 5 de octubre 2010.
24. *El Mostrador*, 7 de octubre 2010.
25. *Cooperativa* online, 26 de septiembre 2010.

En la misma dirección, pero con un matizado y diferente énfasis, Carlos Larraín, presidente de RN, afirmaba que "no se están tirando líneas de mediano plazo (…) hay que incorporar a nuestros parlamentarios más fogueados al trabajo político [si no] quien va a tomar el bastón en la elección del 2013"[26]. Y el senador Allamand coincidía en que "no basta una buena imagen presidencial, falta un mejor ensamble entre el gobierno y la Coalición para el Cambio"[27]. Por su parte, el senador UDI, Jovino Novoa, reiteraba su demanda de mayor presencia en el Ejecutivo: "la línea del poder pasa por el segundo piso y el Ministerio del Interior, y la UDI no está ahí. Hay áreas con personas muy capacitadas que están cumpliendo una muy buena labor, a las que sin embargo se les pide que no figuren públicamente"[28]. Esta situación se agravó con la decisión del ministro del Interior de aceptar la renuncia del jefe de la División de Seguridad Pública, Jorge Nazer (UDI), lo que forzó el nombramiento en su reemplazo del ingeniero comercial y gerente general de D&S hasta 2004, Cristóbal Lira (pro RN), ex secretario ejecutivo del comité de emergencia y asesor de proyectos especiales del Ministerio del Interior, donde desarrolló propuestas contra la microdelincuencia en el área de seguridad[29].

La personalización de la gestión gubernamental arrojó resultados ambiguos. Los datos de aprobación presidencial presentados por Adimark para septiembre le dieron a Piñera una baja de 56% a 53% —pero su desaprobación disminuyó de 36% a 32%—. Después del exitoso rescate de los mineros, de acuerdo a Adimark, la aprobación a la gestión del mandatario subió al 63%, pero un mes después volvió a bajar a un escaso 50%, siendo menor su aprobación que la de su propio Gobierno (54%)[30]. La encuesta CEP de diciembre 2010 arrojó resultados aun más desalentadores para Piñera, ya que, si bien la aprobación se mantuvo en 44%, igual que en el período junio-julio, el rechazo subió de 30% a 34%[31]. Coincidentemente, la encuesta Adimark de diciembre mostró una baja de la aprobación del 50% al 47% y un alza en la desaprobación del 36% al 43%[32]. Por su parte, la encuesta CERC informó una caída de 9 puntos en su aprobación respecto a septiembre, llegando al 47% en

26. *Cambio21*, 25 de septiembre 2010.
27. *La Segunda*, 1 de octubre 2010.
28. *Cambio21*, 10 de octubre 2010.
29. "Emparentado con una familia ligada al poder económico, político y académico, es nieto del fundador de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobrino del creador de lo que sería D&S, la mayor cadena de supermercados donde trabajó 22 años hasta que su primo Nicolás Ibáñez, le pidió la renuncia. Aunque no tiene militancia política por sus venas corre sangre de RN: su tío Pedro Ibáñez Ojeda fue fundador y financista de la colectividad, partido en el cual milita su jefe, Rodrigo Hinzpeter. De ser un empresario que ofreció ayuda en el terremoto pasó a ocupar un puesto clave en el gobierno de Piñera". Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/12/03/las-redes-de-influencia-del-nuevo-jefe-de-seguridad-publica-de-pinera
30. Véase http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=75
31. Véase http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4727.html
32. Véase http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/ev_gob_dic10.pdf

diciembre 2010. El sondeo de Adimark de enero de 2011 mostró, por primera vez, que la desaprobación de Piñera subía al 46%, muy por arriba de su aprobación, la que se desmoronó al 41%.

A este descenso de la popularidad presidencial se sumó la información proporcionada por Wikileaks, que informaba sobre la opinión que tenía sobre su persona la embajada de los EE.UU. durante la campaña, la que afirmaba que "Piñera ha estado vinculado en el pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus negocios, maneja tanto sus negocios como su política hasta los límites de la ley y la ética"[33].

El confuso episodio del aterrizaje del helicóptero que piloteaba con su amigo Andrés Navarro, dueño de SONDA, y la provisión de combustible proporcionada por Carabineros, volvió a poner en cuestión un estilo presidencial que no respetaba los límites entre lo privado y lo público, y no se condecía con la dignidad del cargo.

3. Lo doméstico en la actividad internacional presidencial

La presencia internacional del Presidente Piñera comenzó a marcarse con su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se refirió al ineludible tema de la huelga de los comuneros *mapuche*, ocasión en la cual reconoció la necesidad del reconocimiento a los pueblos originarios, del multiculturalismo y la necesidad de verdaderas oportunidades para esas comunidades, a la vez que mencionó la mesa de diálogo (el de la "pata coja"), la agenda del Reencuentro Histórico y el Plan Araucanía.

La iniciativa más destacada en ese período fue la gira presidencial a Europa, visitando Portugal, Reino Unido, Francia y Alemania, oportunidad en que firmó un acuerdo de cooperación con Francia y con la OCDE para fortalecer el diseño institucional en el área nuclear[34].

En Alemania —con un ofensivo "*Deutschland Über Alles*" estampado en el libro de firmas del Presidente alemán, de lo cual tuvo que excusarse posteriormente— firmó un acuerdo de cooperación científica y tecnológica con el instituto alemán de investigación Fraunhofer para la creación de su primer centrolatinoamericano en Chile.

En el marco de la demanda peruana en La Haya, Piñera visitó Perú agudizando las diferencias internas transversales en Chile sobre la conveniencia de llevar las relaciones con el país del norte por cuerdas separadas o a través de un enfoque

---

33. Véase http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=455115
34. "La decisión no se va a tomar ahora, ni siquiera en nuestro gobierno, pero nuestro gobierno tiene la obligación de preparar a nuestros ingenieros, científicos y técnicos (…) no he promovido el uso de energía nuclear como parte de nuestra matriz energética, y lo he hecho así porque no me parece prudente, porque es una convicción personal, ya que los peligros son conocidos [se realizarán] los estudios necesarios para que los próximos gobiernos puedan tomar sus decisiones". Véase *Diario Financiero*, 21 de octubre 2010.

compacto. La visita de Alan García a Chile en enero de 2011 reafirmó esta postura, logrando que el presidente peruano afirmara que "nosotros siempre respetaremos toda decisión consensuada, bilateral y armónica entre Chile y Bolivia (…) el Perú no será ningún obstáculo para ninguna decisión que ellos tomen"[35].

Otro tema doméstico que repercutió en la relaciones exteriores del país fue la negativa del Gobierno argentino de extraditar a Galvarino Apablaza, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y acusado de haber participado en el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristián Edwards, por lo que el Presidente advirtió que para Chile el asilo otorgado al ex frentista es "un retroceso para la causa de la justicia y los DD.HH. [que] en nada contribuye a las relaciones entre ambos países"[36].

En su visita a China, y destacando su compromiso con los derechos humanos, Piñera informó que "le propuse al Presidente chino establecer un diálogo franco y respetuoso en materia de derechos humanos y de reformas políticas. El Presidente estuvo de acuerdo y decidimos canalizarlo a través de las oficinas de China y Chile en Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York"[37], tal como estaba hasta ese momento.

Ampliando las oportunidades de negocios, en la segunda semana de noviembre, en su gira al Pacífico para participar en la Cumbre CEO APEC2010 —que decidió apoyar la integración económica regional con un Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP)[38]— el Presidente Piñera firmó un Acuerdo de Asociación Estratégica con Rusia y un Tratado de Libre Comercio con Malasia, e inició negociaciones con Tailandia e Indonesia. Y en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata, junto a los presidentes Alan García, José Manuel Santos y Felipe Calderón, selló un acuerdo estratégico para crear una alianza comercial y de desarrollo de los países del llamado Arco del Pacífico.

Enfrentado a la decisión del Gobierno brasilero en diciembre de 2010 de reconocer el Estado palestino, a comienzos de enero el Gobierno realizó el mismo reconocimiento pero sin referirse a los límites que tenía hasta 1967, lo que dejó localmente desconforme tanto a la comunidad local palestina como a la judía.

De esta forma, los temas más controvertidos en la política nacional —como la mediterraneidad boliviana, la situación del pueblo mapuche, el desarrollo de la energía nuclear, los derechos humanos— fueron proyectados al escenario internacional.

---

35. *La Nación*, 21 de enero 2011.
36. *El Mercurio*, 2 de octubre 2010.
37. *El Mercurio*, 17 de noviembre 2010.
38. El que se conseguirá a través de "vías", como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP o P4), ASEAN+3 y ASEAN+6. Pekín apoya como base al ASEAN+3, formado por ese grupo económico del sudeste asiático, más Japón, China y Corea del Sur. Washington favorece el TPP, del que Chile fue uno de los fundadores.

II. LA GESTIÓN DE GOBIERNO

La política confrontacional del Gobierno contra la oposición, aun cuando de manera decreciente, continuó dándose en torno a la gestión de la administración anterior. Ejemplo de ello fue el duro enfrentamiento que se produjo en torno a las cifras de pobreza luego que la CEPAL calculara que la pobreza bajó de 13,7% en 2006 al 11,7% en 2009, mientras el Gobierno, con base en la encuesta CASEN, mostró un alza de 13,7% a 15,1% en el mismo período, por lo que el ex presidente Lagos llamó al Gobierno a "recapacitar".

En torno a este mismo tema la ex presidenta Bachelet, en entrevista que concedió a Canal 13 desde Nueva York, manifestó sus deseos que la eficiencia fuera de la mano con una mayor preocupación por las necesidades de la gente y manifestó preocupación que los despidos masivos en las reparticiones públicas estuvieran relacionados con la posición política de las personas. Igualmente se refirió al tema de la reconstrucción indicando que "Hicimos procesos de licitación y dejamos en calidad de diseño proyectos como Talca y Santiago dos, y lamentablemente me he informado que está todo parado. O sea, todos se pararon cuando llegó el nuevo gobierno para redefinir, rediseñar, y la verdad es que estaban los diseños y los recursos"[39].

1. Desalojo

La política de despidos en la administración pública continuó durante todo el año 2010, llegando a los 10.000 funcionarios públicos despedidos[40].

Así, en el caso del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), importante centro de estudios de la agricultura chilena, más de la mitad de su personal fue exonerado. "Esto es gravísimo. Se está tirando por la borda 50 años de investigación en el ámbito agrícola. No sólo preocupan los despidos sino que toda la investigación que se pierde", señaló el diputado Sergio Ojeda[41]. En este marco se presentó una querella por fraude al Fisco en contra del director del Instituto, Guillermo Donoso, por aumentos en las remuneraciones de sus asesores sin justificación, préstamos bancarios sin seguir los procedimientos administrativos y despidos de personal ejecutando programas con recursos públicos.

---

39. *El Mostrador*, 14 de diciembre 2010.
40. El 26 de noviembre, justo cuatro días antes del despido masivo de trabajadores públicos, el jefe de Gabinete del director nacional del Fondo de Inversión y Solidaridad, Fosis, Claudio Storm, pro UDI, escribió un e-mail a todos los directores regionales que decía: "Necesitamos armar un relato y tener cosas que comunicar para el día 30 de noviembre". "Mail de la fruta", *Cambio 21*, 3 de enero 2011.
41. *El Austral*, 6 de octubre 2010.

"Los despidos de los trabajadores son una *razzia* política", acusaron los dirigentes sindicales de esa institución[42].

Una situación similar se observó en el Sistema de Alta Dirección Pública, donde a comienzos de octubre un "53% de los directivos elegidos habían sido desvinculados[43] por falta de confianza política; el 38% de los concursos fueron ganados por personas designadas a dedo como provisorias; y los altos directivos que fueron removidos, aún no reciben su indemnización[44]. En la Concertación calificaron de 'contradictorio' que mientras Hacienda anunciaba proyecto para perfeccionar el sistema, 'a la mayoría de los profesionales contratados se les pida la renuncia sin razón alguna'. Se han contratado sólo personas afines a la derecha"[45]. La ministra del Trabajo, Camila Merino, justificó los despidos en la administración pública como normales y "señaló que esta es una situación que se repite cada año, respondiendo a ajustes de programas que terminan, evaluaciones de desempeño y a renovación de contratas"[46].

En el caso del SERNAM, se desvinculó al 30% de los empleados. "El problema, no es sólo la reducción de la planta, sino la orientación política que está teniendo", indicó la ex Directora Laura Albornoz, "porque además, quieren reducir el servicio y quitarle la calidad de ministra. Lo que quieren es debilitar la estructura". Entre las despedidas, figuraban cinco mujeres embarazadas, quienes fueron notificadas de su "despedido a plazo", es decir, a contar del primer día después de que acabe su fuero maternal. Frente a esto, Albornoz aseguró que "lo que se está haciendo aquí es violar la ley laboral. No se puede violar este fuero de las embarazadas, no se puede amenazar con el despido antes de que ellas vuelvan. Se están atropellando las condiciones de las que ellas gozan con este fuero (…) Otro de los errores que cometieron, fue privar al Estado de personal técnico y traer personal que goza por sobre el escalafón del sueldo que se permite para funcionarios, con tareas menores. Esto es un desmantelamiento del SERNAM"[47].

Este masivo "desalojo" tuvo en algunas partes connotaciones racistas, como en el caso de José Corvacho, afrodescendiente que trabajaba en el FOSIS de Arica y Parinacota y que su contrato no fue renovado porque —según le dijo el propio director del organismo Claudio Piña— "no me gusta trabajar con negros", lo que le significó a este último renunciar al cargo el 26 de diciembre[48].

Producto de estos despidos masivos la ANEF anunció un paro nacional del sector público para el 24 de noviembre, a la que se sumaron los funcionarios

---

42. *Cambio21*, 5 de octubre 2010.
43. Véase http://www.leydetransparencia.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=40
44. *El Mostrador*, 20 de octubre 2010.
45. *Cambio21*, 27 de octubre 2010
46. *Cambio 21*, 4 de diciembre 2010.
47. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20101210/pags/20101210154041.html
48. *Cambio 21*, 3 de enero 2011.

del sector de la salud, la educación, los municipales y las universidades estatales. Todo esto en medio de las negociaciones por el reajuste al sector público que el Gobierno planteaba en un 3,7%, lejos del 8,9% que esperaban los trabajadores. Aun cuando los despidos fueron masivos en 2010, a comienzos de marzo se informó que esta política continuaba, siendo despedidos 25 funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS)[49]

2. Conflicto de intereses

Una vez más los conflictos de intereses le siguieron pasando la cuenta al Ejecutivo:

- La Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (ANFUCULTURA) denunciaron el hecho que el Teatro Lastarria 90, del cual el ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke era propietario, se haya ganado la no despreciable suma de $12 millones de pesos gracias a un premio FONDART, lo que despertó suspicacias entre los artistas[50].
- Tras detectar millonarias irregularidades en Chiledeportes, intervino la Contraloría. En la Concertación recordaron que "mientras fueron oposición acusaron a todos de corruptos. Hoy están mudos". La Contraloría investigó una licitación de más de $300 millones adjudicada a una empresa cuyo dueño era amigo de la jefa de Gabinete del subsecretario Gabriel Ruiz Tagle (UDI). La empresa no tenía ninguna opción de ganar, pero en Chiledeportes "lo hicieron posible"[51].
- Frente a la modificación de la ley medioambiental, las ONG destacaron el posible conflicto de intereses que pudo haber existido ya que el anteproyecto hecho durante el gobierno de Michelle Bachelet era bastante más severo en el control de emisiones de gases[52]. Casi todo el *staff* cercano al Presidente en temas ambientales estuvo vinculado con empresas termoeléctricas en el pasado. De hecho, la misma ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, trabajó para la consultora GAC (que se encargó del estudio ambiental para el proyecto termoeléctrico Barrancones).
- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que decidió remover de su cargo al coordinador de Concesiones, Mauricio Gatica, quien fue acusado al principio del Gobierno por tener conflictos de interés: antes de llegar al Ministerio era gerente de las mismas concesionarias[53].

49. *Cambio21* online, 1 de marzo 2011.
50. *Cambio21* online, 19 de enero 2011.
51. *Cambio21* online, 14 de diciembre 2010.
52. *El Ciudadano*, 21 de enero 2011.
53. *Cambio21*, 29 de enero 2011.

- El caso más destacado fue el de la elección del empresario educacional de nacionalidad española, Jorge Segovia, quien fue electo el 4 de noviembre como presidente de la ANFP, oportunidad en la cual el comentarista deportivo Felipe Bianchi aseguró que hubo intervención del Gobierno en la elección: "Me constan los llamados de Piñera, Ruiz-Tagle y Lavín para que hubiera una lista contraria a Mayne-Nicholls"[54]. Ante estas acusaciones, Piñera se mostró dispuesto a vender sus acciones de Colo Colo, ironizando al decir "después me van a pedir que venda mi bicicleta", y señaló la existencia de una supuesta campaña de desinformación: "En esta campaña han habido actitudes muy miserables e incluso canallescas. Este Presidente y este gobierno no han hecho ninguna gestión"[55]. A pesar de las negativas presidenciales, un 58% de encuestados creyó que sí las hubo[56]. Producto de estas situaciones, a fines de noviembre Piñera inició el proceso de venta de sus acciones en Colo Colo, desprendiéndose el 24 de diciembre del 13,7% que poseía en la sociedad Blanco y Negro por un total de US$7,4 millones.
- Otro conflicto de interés se presentó con el caso del intendente de la Región de O´Higgins, Rodrigo Pérez, quien era parte del directorio de la empresa Biodiversa S.A., filial de Essbio, siendo el encargado de aprobar un proyecto de construcción de piscinas para decantar los residuos orgánicos que generaría esa empresa en la región, comuna de Rengo[57].
- La Subsecretaria de Energía, Jimena Bronfman, participó en la negociación de Contratos Especiales para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con el Estado de Chile a fines de enero de 2010, en representación del consorcio suizo-estadounidense IPR-Manas, por la cesión de derechos del Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) que debía ser autorizado por el Ministerio de Energía. Cuando asumió el cargo este trabajo no fue incluido en su declaración de intereses[58].

3. Iniciativas políticas

A pesar de los permanentes ataques a la Concertación, la oposición mantuvo una consistente protección de sus logros en los veinte años de gobierno y una dura crítica a la gestión del mismo, desarrollando ciertos espacios de acuerdo en torno a iniciativas gubernamentales. Especial relevancia tuvieron los temas referidos al *royalty* minero, la Ley de Presupuesto y las reformas políticas esbozadas por el Ejecutivo.

---

54. *El Mostrador*, 5 de noviembre 2010.
55. *Cambio21* online, 8 de noviembre 2010.
56. Véase http://www.imaginaccion.cl/encuestas2010/08noviembreANFP.pdf
57. *Cambio21*, 11 de enero 2011.
58. *El Mostrador*, 1 de febrero 2011.

a) *Royalty minero*

El acuerdo por el *royalty* incluyó una disminución de la invariabilidad tributaria a seis años para los proyectos que optaran voluntariamente por la nueva fórmula de impuesto específico a la minería; un régimen general de tributación que incluía una tasa variable de 5% a 14% y que se aplicaría a los proyectos nuevos y a los que terminaban la invariabilidad en 2018; se estableció un período de transición entre 2010 y 2012, donde la tabla es variable de entre 4% y 9%; precisó la forma de distribución de los recursos para las regiones, US$400 millones en cuatro años; y se firmó un compromiso para crear un panel de expertos —integrado por cuatro representantes de la Coalición, cuatro de la Concertación y un representante del Ministerio de Hacienda— que entregara su propuesta en noventa días para modernizar el Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera.

La revisión al Estatuto fue uno de los puntos centrales de la postura negociadora concertacionista, dado que, según el senador PRSD José Antonio Gómez, la invariabilidad ya no se justificaba "porque en 1974 el país estaba aislado del mundo [...] y este mecanismo hoy les permite pagar pocos impuestos y nosotros consideramos que esto tiene que ser modificado porque el país cambió"[59].

b) *Presupuesto*

El estilo confrontacional del Presidente con la Concertación se volvió a repetir en el marco de la discusión del presupuesto 2011. De acuerdo a Piñera:

> Hay despilfarros, gasto innecesario, gasto ineficiente, y a veces corrupción. Pero yo tengo la impresión de que eso fue creciendo a medida que la Concertación envejecía, y a medida que el gasto público crecía en forma, a mi juicio, exagerada. Por ejemplo, que el gasto público haya crecido a más del 10% durante el gobierno anterior, en circunstancias que el Producto Nacional Bruto crecía solamente al 2,8%, generaba un

59. Según consta en el Servicio de Impuestos Internos (SII), en ese año se permitió que el inversionista extranjero pudiera optar por un impuesto de 42%, en vez del Impuesto Adicional de tasa 35%, pues en caso de optar por el 42% la tasa queda fija por un período de diez años, el cual podrá ser aumentado a un máximo de veinte años para las inversiones industriales o extractivas de US$ 50 millones o más. Además, el inversionista que opta por esta invariabilidad tributaria no se ve afectado, por ejemplo, por un alza en el Impuesto Adicional. También existe la posibilidad de acordar el "congelamiento" o fijación del IVA y del régimen arancelario aplicable a la importación de máquinas y equipos que no se produzcan en el país. En el año 2005, el Estatuto de la Inversión Extranjera fue modificado por la Ley 20.026, con el fin de otorgar nuevos derechos durante un máximo de quince años para las inversiones mayores a US$ 50.000.000 destinadas a proyectos mineros. Véase *Diario Financiero*, 8 de octubre 2010.

clima y un ambiente que podía amparar, ocultar o tolerar mucha ineficiencia, mucho despilfarro. Nosotros estamos en una guerra frontal contra la ineficiencia y el despilfarro porque queremos que cada peso llegue a la gente que lo necesita.[60]

La respuesta social a esta nueva embestida fue débil, y solo los funcionarios públicos de la salud paralizaron sus labores exigiendo un aumento del presupuesto para el sector[61], preocupados de que esas limitaciones fueran un camino a la privatización a través de la concesión de hospitales y un bajo presupuesto para atención primaria.

Por su parte, la oposición en el Congreso centró sus acciones en asegurar el gasto social y de reconstrucción. En la Cámara se criticó el fuerte incremento para pagos de honorarios y sueldos, encabezando la lista FONASA, con más del dos mil por ciento. El diputado José Ortiz (DC) se preguntó: "¿Es la nueva forma de gobernar con asesores pagados con sueldos millonarios?", y Gabriel Silber (DC) afirmó que no resultaba creíble que despidieran gente para contratar otra con mejor sueldo: "Tendrán que aclarar si es para operadores políticos de la derecha"[62]. En el Senado se rechazaron las asignaciones para la Alta Dirección Pública, con la senadora Ximena Rincón (DC) exigiendo "terminar con este sistema y que cada gobierno termine eligiendo a sus propios postulantes por afinidad política como lo hace hoy este gobierno"[63].

Finalmente, el Ejecutivo logró el acuerdo para regular un ingreso ético familiar con la mayoría opositora en el Senado; $7,3 millones de dólares adicionales para impulsar el crecimiento y la construcción de jardines infantiles y salas cuna; $3.000 millones para becas; un 10% de aumento para salud; el crecimiento de recursos para los allegados; el subsidio de arriendo para damnificados; y un mayor detalle de los recursos destinados al Plan Araucanía[64].

c) Reformas políticas

Las reformas políticas propuestas por el Ejecutivo se alinearon en función del diseño estratégico anteriormente mencionado. Las conversaciones se organizaron en torno a las primarias, el voto de los chilenos en el exterior, la iniciativa de ley ciudadana —reforma constitucional que permite presentar proyectos de ley a ciudadanos, excluyendo materias de exclusiva competencia del presidente o parlamentarios—,

60. *El Mercurio*, 3 de octubre 2010.
61. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-295632-9-personal-de-consultorios-evalua-positivamente-adhesion-al-paro-y-marchas.shtml
62. *Cambio21* online, 18 de octubre 2010.
63. *Cambio21* online, 28 de octubre 2010.
64. *El Mercurio*, 9 de noviembre 2010.

el perfeccionamiento de la declaración de patrimonio e intereses, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en el exterior[65].

Desde la oposición, Ignacio Walker, presidente DC, reivindicó el financiamiento de partidos políticos: "Lo que hemos planteado al gobierno es un doble financiamiento: uno institucional, modesto y razonable, y otro para programas e institutos de formación y capacitación". De la misma forma, Carolina Tohá, presidenta del PPD, indicaba que "la actividad de los partidos políticos es vulnerable si sólo unos pocos pueden influir en su mantención, por eso, es necesario regular su financiamiento y asegurar una base mínima de aporte público"[66].

La reforma del voto obligatorio por uno voluntario, tal como lo planteó el ministro Larroulet, obligaría a los partidos a entusiasmar a los votantes y movilizarlos a las urnas. La crítica no se dejó esperar. De acuerdo a Carlos Huneeus, "la Concertación optó por un camino de acuerdos con la derecha, pero con atajos, cediendo a las exigencias de ésta, como fue aceptar el voto voluntario, sabiendo que entre sus consecuencias negativas está aumentar la influencia del dinero en la política"[67]. Igualmente, J. Samuel Valenzuela indicaba que el voto voluntario

> disminuirá aún más, en vez de aumentar, la participación electoral (…) porque la abstención entre quienes ya están inscritos será con el voto voluntario mucho mayor que el tan esperado pero quimérico incremento del voto juvenil. En los países donde la votación es voluntaria, la participación electoral es en promedio como 30% más baja que en aquellos que tienen un voto obligatorio con sanción efectiva (…) Los estudios electorales muestran que al ser voluntario el voto participan menos los pobres, las minorías étnicas, los partidarios del gobierno de turno y los más jóvenes. Por otro lado, aumenta la proporción relativa de los votantes más politizados y militantes, de los que tienen opiniones extremas, de los que creen firmemente en alguna causa y de los más enrabiados. De una elección a otra puede variar el tipo de electores que se expresan, generando una discontinuidad que en el fondo no refleja las opciones del conjunto de la ciudadanía (…) El voto voluntario incentiva también el "acarreo" de los votantes y el cohecho. Fue en parte para desterrar de una vez por todas estos vicios que [hizo surgir] en Chile la ley del voto obligatorio.[68]

La primera reforma aprobada, el 6 de noviembre en la Cámara, adelantó la elección presidencial y una eventual segunda vuelta nunca antes del 13 ni después del 19 de diciembre, para no afectar las vacaciones de los chilenos.

---

65. *El Mercurio*, 22 de octubre 2010.
66. *El Mercurio*, 23 de octubre 2010.
67. *La Tercera*, 9 de noviembre 2010.
68. *El Mercurio*, 9 de noviembre 2010.

d) Educación

La reforma educacional se constituyó en una de las principales iniciativas de la nueva administración.

Las medidas propuestas por el ministro Lavín se referían a profesores, directores, alumnos y familias. Respecto de los profesores, se proponía un bono mensual sumado a la remuneración inicial de los egresados de pedagogía que estén en el 30% mejor evaluado de la prueba Inicia; una Beca Vocación de Profesor que permitiría que los alumnos con más de 600 puntos en la PSU estudien gratis la carrera; con más de 700 puntos, además, recibirían 80 mil pesos mensuales; y con más de 720 puntos, tendrían financiamiento para cursar un semestre de intercambio en el extranjero; triplicaba los premios con Asignación de Excelencia Pedagógica a los mejores profesores del sistema municipal y particular subvencionado; establecía un plan de retiro voluntario con bonos de hasta $20 millones para cada profesor que se jubilara; y bono entre $1 millón y $2 millones a quienes ya estaban jubilados y que dieron su vida por la educación. En materia de directores, estos serían elegidos por un sistema de Alta Dirección Pública Pedagógica; se establecerían convenios de desempeño; tendrían mayores rentas según el tamaño del colegio; y se propuso la posibilidad de armar sus equipos y la atribución de cambiar al 5% de los profesores peor evaluados.

En materia de alumnos, se realizaría un cambio curricular para fortalecer el aprendizaje: 1.300 horas más de Lectura y Matemática en toda la vida escolar desde 1º Básico hasta 2º Medio; nuevas evaluaciones y más frecuentes; el establecimiento de un SIMCE de Educación Física, de Inglés, de Tecnologías; el estímulo a una cultura del esfuerzo para ingresar a los Liceos Bicentenario; apoyo a los 1.000 colegios con peor rendimiento; nuevo material pedagógico en Lenguaje y Matemática; aumento de la Subvención Escolar Preferencial en un 20% promedio para los alumnos más vulnerables; más material para apoyar sus aprendizajes a través de Internet.

A las familias se les proporcionaría más y mejor información detallada sobre resultados SIMCE y PSU; los apoderados podrían apoyar a sus niños al tener material pedagógico en línea; aumentaría la Subvención Escolar Preferencial para el 20% de menos recursos $82.000 al mes, y para el siguiente 20%, $78.000 al mes.

La propuesta de reforma generó variadas respuestas. Una de ellas fue el llamado a reunirse al mediodía del 24 de noviembre en la Casa Central de la Universidad de Chile, llegando más de mil personas, quienes entregaron una carta dirigida al ministro solicitando una construcción participativa y democrática de las políticas educativas anunciadas por el Gobierno y oponiéndose a la reducción de horas de Historia y Ciencias Sociales.

Desde un ángulo académico, José Joaquín Brunner declaraba a *Radio Cooperativa* que en estas materias “hay más anuncio y más ruido que contenido como para

que dé para hablar de una revolución: me parece que es una exageración enorme y eso sólo busca crear cierto impacto comunicacional"[69].

Y en el campo de la educación superior, 16 planteles estatales acordaron declarar su oposición a la política del Gobierno que buscaba abrir los Fondos de Desarrollo Institucional MECESUP a todas las entidades autónomas y acreditadas, afectando el financiamiento de las universidades del Estado.

Finalmente, el Gobierno logró un acuerdo con la oposición en el Senado, el que incluyó: doblar los recursos para financiar los planes de retiro de los profesores del sector municipal (de los 30 mil millones de pesos propuestos inicialmente, se acordó un fondo de apoyo a los municipios de 60 mil millones de pesos para financiar el plan de jubilación para 13 mil docentes, que tienen o cumplen su edad de retiro hasta diciembre de 2012); se incorporó la creación de un Fondo Transitorio de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Municipal, que entre 2011 y 2013 inyectaría 45 mil millones de pesos; se incrementaría en el proyecto la subvención por concentración de alumnos vulnerables en un 20%; se extendería gradualmente la cobertura de la subvención escolar preferencial hasta 4° Medio (aportes que suman 179 mil 600 millones de pesos hasta el 2014).

Se acordó que antes del 30 de septiembre de 2011 se enviaría un proyecto que abordaría la institucionalidad y financiamiento de la educación municipal y establecería fórmulas alternativas a la administración municipal de las escuelas y liceos.

Se revirtió la disminución de las horas de Historia estableciéndose un mínimo de cuatro horas obligatorias, más un componente especial de formación ciudadana y educación cívica, y se ampliaría la entrega de información sobre resultados del SIMCE.

Se modernizaría la carrera profesional docente, para lo cual se enviaría un proyecto antes del 1 de marzo de 2012 y que incluirá las remuneraciones y el perfeccionamiento del actual sistema nacional de evaluación; y se acordó ampliar el plazo de un año a dos para que los docentes calificados como básicos deban someterse a evaluación[70].

Este acuerdo remeció a la Concertación, generando críticas y rechazos del presidente del PRSD, así como de los diputados de ese partido que congelaron su participación parlamentaria concertacionista (véase infra).

e) Alta Dirección Pública

Enfrentando las críticas de manipulación política en la Alta Dirección Pública por el despido del 53% de los ejecutivos existentes en el período anterior, el ministro

---

69. *El Periodista*, 28 de octubre 2010.
70. *La Tercera*, 19 de enero 2011.

de Hacienda, Felipe Larraín, envió al Congreso un proyecto que elevaba a ley las normas del instructivo presidencial creado en 2010; mejoraba las disposiciones sobre los interinos; y en tercer lugar se perfeccionaban otros procedimientos y se reformaba el estatuto administrativo respecto a directivos de tercer nivel, que correspondía a jefes de departamentos[71].

f) Posnatal

En cadena nacional, a fines de febrero de 2011, y en contra de las declaraciones iniciales de la ministra del SERNAM, el Presidente Piñera finalmente anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que extendía el posnatal a seis meses, ocasión en la que destacó las principales características de esta iniciativa:

> Incrementa en 12 semanas el permiso post natal, para alcanzar así 24 semanas. Y durante esta extensión, las madres recibirán un subsidio maternal financiado por el Estado, que cubrirá su remuneración, con un tope de 30 UF mensuales, que equivalen hoy día a 650 mil pesos. Esto significa que más de 8 de cada 10 madres beneficiadas, percibirán el cien por ciento de su remuneración durante estas 12 semanas adicionales de post natal. Las madres a quienes el subsidio maternal no alcance a cubrir íntegramente su remuneración podrán, si así lo desean y para evitar disminuciones de sus ingresos, incorporarse a sus puestos de trabajo con jornadas parciales, después de haber utilizado íntegramente las primeras 12 semanas del permiso post natal. El Proyecto también ampliará, en forma gradual y focalizada, la cobertura de subsidios maternales, de forma de beneficiar también a las madres trabajadoras más vulnerables de nuestro país, sujeto a una densidad mínima de cotizaciones y con un factor de proporcionalidad en los beneficios. Las madres beneficiadas con este permiso adicional de post natal tendrán la libertad y flexibilidad para, según su propia voluntad: a. Traspasar hasta 2 de las 6 semanas del pre natal, para extender el post natal por un periodo equivalente. De esta forma podrán ampliarlo desde 24 a 26 semanas. Y para proteger la salud de la madre y del hijo que está por nacer, esta decisión requerirá la autorización médica respectiva. b. Además, y para fomentar la participación del padre, la madre le podrá transferir, cuando el hijo haya cumplido sus primeras 12 semanas de vida, hasta 6 de las 12 semanas adicionales del permiso post natal. Las madres que adopten hijos también tendrán los beneficios del post natal.[72]

---

71. *Cambio21*, 21 de enero 2011.
72. Véase http://www.gob.cl/destacados/2011/02/28/presidente-pinera-presento-proyecto-de-post-natal-de-seis-meses.htm

4. Confrontando crisis

El momento estelar del Gobierno se dio en el marco del trágico derrumbe en la mina San José que tuvo sepultados a "los 33". Aun cuando el Presidente afirmó a BBC Mundo que "nosotros vamos a utilizar este capital (político) para lograr otras metas, [que] Chile sea tal vez el primer país de América Latina, que antes de que termine esta década logre ser un país desarrollado, sin pobrezas, con oportunidades para todos"[73]. Esta exitosa gestión también fue profusamente utilizada pata levantar su imagen y la del Gobierno a nivel nacional e internacional, llegándose a una saturación y abuso mediático[74].

En medio del recibimiento en La Moneda a los 33 mineros rescatados, el Presidente se comprometió a entregar medidas concretas para la seguridad de todos los trabajadores del país, señalando que "aprendimos la lección y en estos días vamos a anunciar un nuevo trato en materia laboral para que el respeto a la vida, a la integridad, a la dignidad y a la salud, no solamente de nuestros mineros, sino que de todas nuestras trabajadoras y trabajadores sea parte de la cultura de nuestro país"[75]. En medio de esa épica, algunas empresas privadas intentaron sacar partido del rescate[76].

Por su parte, la Concertación anunció total disposición para ayudar con esos compromisos pero sobre la base de un diálogo social con todos los actores involucrados.

---

73. *El Mostrador*, 18 de octubre 2010.
74. "Respecto a la pregunta sobre la exposición mediática que han tenido los mineros hasta el minuto, un 79,7%, consideró que ha existido un aprovechamiento de la imagen de los 33 por parte de los medios de comunicación". Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Universidad Central, véase http://www.radiobiobio.cl/2010/10/12/encuesta-revela-que-los-chilenos-creen-que-hay-aprovechamiento-mediatico-por-situacion-de-mineros
75. Véase http://www.gobiernodechile.cl/destacados/2010/10/25/presidente-pinera-en-homenaje-a-los-33-mineros-en-la-moneda-esto-fue-un-esfuerzo-de-todo-un.htm
76. "En un arranque de dudosa generosidad, la cadena Sushihouse ofreció productos gratis por un año a los mineros. Falabella también dio luces de querer subirse al carro; también Doziz que probó con unos modelitos de polera que duraron pocas horas en portada tras la avalancha de críticas por intentar lucrar con la tragedia. GEOTEC, la empresa dueña de la perforadora que alcanzó el refugio donde estaban los mineros, les envió camisetas con el nombre de la empresa para que se las pusieran al momento en que llegara la sonda. Los mineros lo hicieron, asumiendo, se supone, en su aflictiva situación, que hay que seguir toda instrucción que viene de la superficie. El gobierno se enfureció al ver la grabación y la censuró, no entregando las imágenes para ser exhibidas por televisión. Además la compañía repartió poleras y gorros con su logo entre los habitantes del campamento Esperanza. A todo lo anterior se suman las campañas a través de los medios escritos. Uno de ellos es el Banco Estado, que utiliza la frase 'Este país es mejor cuando estamos todos' en letra roja y de fondo con un papel arrugado, haciendo alusión al papel enviado por los trabajadores para dar a conocer que estaban vivos. Carlos Herrera A., una empresa comercializadora de productos de acero, también quiso estar presente en este ataque publicitario. 'Después de 2 meses, la esperanza se hizo realidad' es la frase a plana entera que ocupa", *Cambio21*, 14 de octubre 2010.

Así, Carolina Tohá indicó que "entendemos que este momento, que ha unido a los chilenos, que nos ha hecho sentir muchas emociones, nos deja también una gran tarea"[77]. En este marco, diputados y senadores de oposición de las comisiones de Trabajo y Minería, y el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), iniciaron un trabajo tendiente a plantear sus propias propuestas en torno a la seguridad laboral en todos los sectores[78].

Siguiendo las instrucciones presidenciales, el 24 de octubre la ministra Camila Merino, acompañada por los subsecretarios del Trabajo, Bruno Baranda, y de Previsión Social, Augusto Iglesias, además de la secretaria ejecutiva de la comisión de seguridad laboral (www.comisionseguridadeneltrabajo.cl), Mariana Elena Gaete, presentó al Presidente Piñera un preinforme con treinta propuestas sobre seguridad laboral en las áreas de minería, construcción, agricultura y pesca, las que incluyeron desde mejoras en la higiene hasta mayor coordinación en la fiscalización.

La épica del rescate culminó con la instalación de la cápsula Fénix 2 en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda, y dejó bajo tierra el hecho que el 28 de julio, Laurence Golborne y el subsecretario Pablo Wagner informaron a la Comisión de Minería del Senado que el Gobierno había decidido reducir exigencias a las mineras planteadas en el proyecto, excluyendo de la regulación las faenas de exploración; restringiendo las empresas sujetas a la normativa de aquellas que explotan más de cinco mil toneladas al mes a las que explotan sobre diez mil; eliminando del proyecto la custodia de los antecedentes históricos de la vida útil de una faena o instalación minera; suprimiendo la obligación de la empresa de difundir el plan de cierre a la comunidad; y suprimiendo como sanción la clausura definitiva de faenas e instalaciones[79].

Con todo, el capital político generado por el exitoso rescate se vio mermado por un conjunto de conflictos en los cuales el Gobierno no tuvo la misma suerte.

a) Huelga de hambre de comuneros mapuche

En el marco de la huelga de hambre de 32 presos de comunidades *mapuche* en las cárceles de la Octava, Novena y Décima Regiones, muy poco cubierta por los medios, las dependencias de *Radio Bío-Bío* fueron tomadas pacíficamente y el Colegio de Periodistas condenó el silencio informativo pidiendo poner término al cerco comunicacional respecto a sus demandas. Este bloqueo informativo fue así resumido por el ex Director de la CONADI, Domingo Namuncura:

---

77. Véase http://www.cooperativa.cl/concertacion-exigio-al-gobierno-dialogo-social-para-avanzar-en-reformas-laborales/prontus_nots/2010-10-15/141009.html
78. *La Nación*, 18 de agosto 2010.
79. *La Tercera*, 27 de octubre 2010.

> En los primeros 30 días de la huelga nadie le otorgó al movimiento una real importancia. Porque en la continuidad de la huelga y antes de 50 días el tema ya estaba siendo puesto, por la sola fuerza de los hechos, en los medios de prensa y porque ahora, cuando nos aproximamos riesgosamente a 80 días, el Gobierno entiende que se enfrenta a un escenario en donde no quiere aparecer "cediendo" y ahora busca convertir en "oportunidad" la crisis, mediante la idea de dividir las soluciones, formular declaraciones retóricas, confiar (y obligar si es posible) el conflicto a mediadores externos[80].

Así, gracias a las presiones sociales por superar el bloqueo informativo, el Gobierno se vio obligado a enviar un proyecto de ley para acotar el ámbito de acción de la justicia militar y el compromiso de revisar la Ley Antiterrorista. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicó que "se buscará el mecanismo en que las causas en que el imputado es un civil y que actualmente conoce la justicia militar sean traspasadas al conocimiento de la justicia ordinaria, para evitar los dobles procesamientos"[81]. Posteriormente la prensa informaba que al menos tres mil personas —convocadas por Twitter— marcharon por el centro de Santiago demandando el fin de la actual Ley Antiterrorista y la no aplicación de la justicia militar[82]. En este contexto, Piñera convocó a todos los presidentes de partidos solicitándoles su apoyo para dar término con esta huelga de hambre.

Sin embargo, la implementación de las medidas para dar por término con la huelga de hambre sufrió reiterados contratiempos. Por una parte, tras una ronda de diálogo político, el Gobierno introdujo cinco modificaciones a Ley Antiterrorista y le dio suma urgencia para su tramitación, pero resolvió mantener en esa ley el delito de incendio, aunque le rebajó las penas.

Dado que el Ejecutivo seguía negándose a conformar una mesa de diálogo, cuatro diputados entraron a la cárcel para sumarse a huelga de hambre mapuche, siendo desalojados, por lo que siguieron con su protesta en dependencias de la CUT. Solamente el 13 de septiembre, cuando Natividad Llanquileo, vocera de las huelguistas, informó la aceptación del obispo de Concepción, Ricardo Ezzati, como facilitador en un diálogo, los diputados terminaron su huelga de hambre. Con todo, Llanquileo reafirmó que la única forma de concluir la huelga de hambre era dar respuesta a las demandas planteadas: las modificaciones a la justicia militar y a la Ley Antiterrorista que permitan restablecer el debido proceso, eliminar los "testigos sin rostro" y brindar juicio justo con sentencias proporcionales y garantías básicas[83].

---

80. "Análisis del Discurso Presidencial en Naciones Unidas Relativo al Tema Indígena en Chile".
81. *Cambio 21*, 31 de agosto 2010.
82. *La Tercera*, 2 de septiembre 2010.
83. Domingo Namuncura, "Mapuches y mesa de diálogo", *La Tercera*, 17 de septiembre 2010.

La huelga de hambre remeció el escenario político despertando la autocrítica de Carolina Tohá, presidenta del PPD, cuando reconoció como error el haber aplicado por parte de los gobiernos de la Concertación la Ley Antiterrorista a los comuneros *mapuche*[84], y ex ministras de Bachelet protestaron en apoyo a demandas de comuneros llegando hasta el frontis del Palacio de La Moneda para exigir una pronta solución al conflicto. Esta autocrítica generó molestia en la DC y el ex ministro del Interior del Gobierno de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, el que afirmó que querellarse por Ley Antiterrorista contra comuneros *mapuche* durante el Gobierno de Michelle Bachelet fue una decisión aprobada por la ex mandataria, desmintiendo así las declaraciones de la ex vocera Carolina Tohá, quien había responsabilizado de ello al Ministerio del Interior.

Personeros de Gobierno y de la Alianza culparon a la administración Bachelet de haber incumplido acuerdos y reprimido violentamente a los comuneros, indicando que ese era un conflicto heredado. Así, el ministro Cristián Larroulet afirmaba que "las políticas que la Concertación ha implementado han sido mal enfocadas y han ido agravando el problema"[85], ante lo cual la ex presidenta Bachelet replicó que en su Gobierno intentó modificar la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, pero la oposición de derecha se rehusó[86].

La huelga de hambre alcanzó relevancia y protestas internacionales. Un acuerdo del grupo parlamentarios de la Unión Europea afirmó que "como producto de una larga historia de marginación, exclusión y discriminación, los mapuches viven en una situación de alta conflictividad social. Más aún, se aplica a ellos la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, heredada de la época de la dictadura y que les confronta a la vez con procesos ante tribunales civiles y tribunales militares, imponiéndoles dobles penas"[87].

Desde las Naciones Unidas el relator especial para los pueblos indígenas, James Anaya, instó al Gobierno a desarrollar "el máximo esfuerzo" en un diálogo "de buena fe" con los representantes de los presos *mapuche*: "Se trata de un paso fundamental para la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a responder a las preocupaciones y solicitudes de la huelga". Además, el relator aseguró que tanto él como su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, expresaron su preocupación sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que involucraban a los comuneros *mapuche*. Afirmó que pese a que desde este organismo se habían realizado recomendaciones específicas al respecto, "los acontecimientos de la huelga de hambre muestran que no ha habido

---

84. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/09/11/ppd-reconoce-error-al-invocar-la-ley-antiterrorista-contra-mapuches
85. *El Mercurio*, 26 de septiembre 2010.
86. *Cambio21*, 27 de septiembre 2010
87. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-291052-9-grupo-de-parlamentarios-europeos-solidarizan-con-causa-mapuche.shtml

una correcta implementación de estas observaciones"[88]. Por su parte, la CEPAL urgió por una "pronta solución" a huelga de hambre. "Expresamos nuestra esperanza de que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas", indicó en un comunicado el organismo. Paralelamente, activistas *mapuche* se tomaron las sedes de la CEPAL y OIT en Santiago.

A su vez, más de ochenta personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo de México y otros países iberoamericanos expresaron su "mayor preocupación" por las violaciones a los derechos humanos de los *mapuche* y criticaron que

> la legislación que criminaliza los reclamos y la lucha social por la tierra de ese pueblo, representada en la Ley Antiterrorista. Llamamos al Estado chileno a respetar los derechos y las garantías básicas del pueblo mapuche, a reconocer los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a responder de manera urgente a las demandas de los presos políticos en huelga de hambre.[89]

Posteriormente, Wikileaks desclasificó un texto de la embajada de los EE.UU. en Santiago que desmentía la existencia de evidencias de colaboración entre el grupo indígena y organizaciones terroristas internacionales: "Los ataques siguen siendo contra propiedades y no contra personas"[90].

En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente Piñera no pudo eludir el tema y se refirió a él señalando:

> He traído también conmigo, un verdadero reconocimiento que quiero expresar hoy día ante Naciones Unidas a nuestros pueblos originarios, los pueblos que habitaron nuestras tierras miles de años antes que llegaran los descubridores y conquistadores europeos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural, pero reconocemos que por siglos no hemos dado a nuestros pueblos originarios las verdaderas oportunidades que ellos merecen y necesitan. Y por ello estamos promoviendo en nuestro país el reconocimiento constitucional de todos nuestros pueblos originarios, dejando atrás la estrategia de la asimilación, para seguir la estrategia de la integración, respetando, valorando y protegiendo su idioma, su cultura, sus tradiciones, que son parte de la riqueza más profunda de nuestro país. Además, junto a esta Constitución, hemos constituido una mesa de diálogo integrada por el Gobierno, las Iglesias, la

---

88. Pauta Informativa Celare: Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, 25 de septiembre 2010.
89. Entre los firmantes de la misiva, están el cantante franco-español Manu Chao, el poeta mexicano José Emilio Pacheco y los cineastas de esa nacionalidad Alfonso Cuarón, Ofelia Medina, Daniel Jiménez Cacho y Fernando Eimbcke. *El Mundo.es*, 28 de septiembre 2010.
90. Véase http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cable/niega/cooperacion/mapuches/organizaciones/terroristas/elpepuint/20101213elpepuint_12/Tes

> sociedad civil y nuestros pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, en el cual vamos a reforzar la agenda del Reencuentro Histórico, con la iniciativa más poderosa que nunca se haya realizado en Chile en esta materia, que es el Plan Araucanía.[91]

La repuesta concertacionista la dio Namuncura, afirmando que "el discurso presidencial en Naciones Unidas es muy insuficiente y no califica para entablar expectativas serias en cuanto a que el actual Gobierno sabrá recoger las recomendaciones acumuladas en todos estos años"[92].

Así, en un contexto nacional e internacional tensionado por la huelga de hambre, el Ejecutivo finalmente se abrió al diálogo, pero de manera inconducente, anunciando la constitución "en el cerro Ñelol, que es un símbolo de la Araucanía, [de] una mesa de diálogo integrada por el Gobierno de Chile, las Iglesias Católica y Evangélica, por las organizaciones civiles de La Araucanía y el Bío-Bío y representantes de las comunidades del pueblo mapuche. Esta mesa deberá enriquecer las iniciativas del Plan Araucanía y del recuento histórico de forma tal que pueda entregar sus aportes antes que termine este año". El Ejecutivo estuvo representado por los ministros de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Planificación, Felipe Kast[93]. Tratando de aprovechar estas circunstancias el diputado de RN Alberto Cardemil y los UDI María Angélica Cristi y Jorge Ulloa propusieron extender los posibles beneficios que recibirían los comuneros a los ex uniformados procesados por violaciones a los DD.HH.

Junto a esta mesa, llamada "coja" por ausencia de los representantes de los huelguistas, finalmente el Ejecutivo se abrió a una mesa real de diálogo para dar término con la huelga en la cual el mediador, monseñor Ezzati, desempeñó un papel crucial. Finalmente, después de 82 días de ayuno y con la presencia de los ministros Hinzpeter y Larroulet, quienes se comprometieron a introducir cambios a la Ley Antiterrorista, reformas a la Justicia Militar y el retiro de las querellas por las que son imputados por el Ministerio Público, los comuneros *mapuche* dieron término a su huelga de hambre.

Así, el viernes 8 de octubre la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, los cambios hechos por el Senado al proyecto de reforma a la justicia militar, fijando la competencia de los tribunales castrenses solo para militares excluyendo totalmente a menores de edad, mientras que en casos de coautoría en que aparezcan civiles y uniformados, los primeros quedarán sujetos a la justicia ordinaria y los segundos a la militar, y dispone el traspaso de procesos seguidos por tribunales castrenses a la justicia ordinaria, cuando se persigue

91. Véase http://www.gobiernodechile.cl/destacados/2010/09/23/presidente-pinera-en-su-primera-intervencion-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-nos-sentimo.htm
92. "Análisis del Discurso Presidencial en Naciones Unidas Relativo al Tema Indígena en Chile".
93. *Clarín*, 17 de septiembre 2010.

responsabilidad de civiles. En este marco, después de dos años en prisión preventiva y tres meses de juicio oral, a fines de febrero el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió a 14 comuneros *mapuche* que estaban acusados de "incendio terrorista" por la Fiscalía.

A pesar de estos acuerdos, setecientas comunidades *mapuche* de la Región de La Araucanía (23 mil familias) quedaron sin los beneficios que el Programa Orígenes-CONADI entregó durante las dos fases de este programa de desarrollo con identidad, realizadas durante los gobiernos de la Concertación, ya que se anunció que en el futuro los recursos para las comunidades *mapuche* serían ejecutados desde el ámbito agrícola exclusivamente[94].

b) Rapa Nui

Un representante de la etnia rapanui recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares tras el violento desalojo del que fueron objeto algunos isleños el viernes 3 de noviembre de tierras comunales. El documento, que fue acompañado por las fotografías de 24 pascuenses heridos, denunciaba un "desalojo colectivo violento llevado a cabo contra el clan Rapa Nui". Según los isleños, "la recuperación de tierras ancestrales se hace en forma pacífica, no violenta". El Gobierno adelantó para marzo de 2011 los procesos de entrega de tres terrenos en Rapa Nui e indicó que los sitios más avanzados en la negociación estarían legalizados en esa fecha y se asignarían a las familias que los reclaman[95].

A mediados de febrero el Parlamento rapanui rechazó al ministro Joaquín Lavín como cabeza de un grupo integrado por el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac; de Bienes Nacionales, Catalina Parot; el subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes; el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores; el de Agricultura, Álvaro Cruzat, y el intendente de Valparaíso, Raúl Celis., ya que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue quien había iniciado el acercamiento[96]. Finalmente, la empresa Schiess entregó la propiedad de los terrenos del Hotel Hanga Roa a la Fundación Rapa Nui creada para tales propósitos y el Gobierno inició una entrega de tierra a algunos clanes. Sin embargo, Marisol Hito, vocera del clan opuesto a esta fórmula, insistió en que el Gobierno debía "cambiar de actitud y pedir perdón por los robos y abusos" cometidos, y devolver las tierras a sus antiguos dueños[97] y la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento temporal

94. *Cambio 21*, 26 de noviembre 2010.
95. *El Mercurio*, 8 de diciembre 2010.
96. *El Mercurio*, 16 de febrero 2011.
97. *El Ciudadano* online, 23 de febrero 2011.

del clan Hito por no poder ser procesados por usurpación del hotel Hanga Roa, hasta no determinar la propiedad de los terrenos en disputa.

c) Terremoto

Las críticas a la reconstrucción post-terremoto, silenciadas por la tragedia de los 33 mineros, recrudecieron con posterioridad a su salvamento. Así, un reportaje dominical de *El Mercurio* señalaba que a nueves meses del terremoto la reconstrucción avanzaba lentamente:

> Los bonos que se retrasan, la falta de agua potable y los problemas de conectividad son los principales conflictos que persisten en las regiones VII y VIII. Al tiempo que algunas caletas se levantan rápidamente, otras ciudades siguen teniendo carpas a pasos del centro (…) Los alcaldes coinciden en que el drama urbano son los problemas viales (…) La reconstrucción que se ha hecho hasta ahora en la ciudad corre por cuenta propia (…) otro panorama es el que se vive en los campamentos de Constitución, Talca, Dichato, Caleta El Morro y Tumbes. Beatriz Merino, de la directiva de la Caleta El Morro, resume un pensamiento que parece generalizado: "De qué reconstrucción me habla, si aquí no han reconstruido nada" (…) Las casas arrasadas por el maremoto en su mayoría aún no son demolidas y la gente de los campamentos de la VII y VIII Región se queja de lo mismo. "Cuando vino el Presidente, nos prometieron agua caliente. Hoy no tenemos ni agua potable", alega Viviana Méndez, de Dichato (…) El comercio a un tercio de su capacidad.[98]

El tema de la reconstrucción subió de tono a propósito de la discusión del presupuesto 2011. El senador Andrés Zaldívar (DC) indicó que "el gobierno tiene la obligación de presentar el plan nacional y regional de reconstrucción. Hasta la fecha no lo conocemos y el gobierno está incumpliendo la ley... lleva más de 60 días de retraso. Se nos dice que está pero no se da a conocer"[99].

En respuesta a esta crítica el Ejecutivo anunció la transferencia de $12 mil millones para la demolición de nueve edificios en el Gran Concepción, el derrumbe en Talcahuano del Palacio del Deporte, con un costo de $350 millones. Pero en la zona afectada por el terremoto y producto del término de empleos del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) en Maule y Bío-Bío, los nuevos planes de Gobierno solo podían absorber tres mil de los ocho mil cesantes por lo que mientras civiles y militares se despedían en Arauco, en Talca un grupo de

98. Marisol Olivares, "El lento avance de la reconstrucción, a nueve meses del terremoto", *El Mercurio*, 24 de octubre 2010.
99. *Cambio21*, 30 de octubre 2010.

trabajadores instaló una olla común para protestar[100] y 33 mujeres se tomaron e iniciaron una huelga de hambre en el Chiflón del Diablo (Lota) protestando por las mismas razones (véase infra).

En este contexto, se denunció que a fines de diciembre las intendencias no gastaron $160 mil millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y las zonas afectadas por el terremoto tenían la menor inversión. Solo se había utilizado en distintos proyectos un 71% de esos recursos.

Producto de estas situaciones, el lunes 20 de diciembre en la Cámara de Diputados, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, enfrentó la interpelación a cargo del diputado DC Juan Carlos Latorre, quien fundamentó la acción en que, al menos, 10 mil destinatarios del beneficio no cumplían con las exigencias y que solo se estaban construyendo 4.508 viviendas y 150 mil familias quedaban sin subsidios. La titular de Vivienda aseguró que se construían o reparaban 45 mil casas en la zona afectada por el terremoto. Latorre pidió la revisión de Contraloría[101].

La mala gestión frente a la reconstrucción alcanzó a la empresa privada. Tres sumarios en la ONEMI ordenó la Contraloría por el pago de $38 millones como "sobreprecios". En dos empresas, Un Techo para Cristo y Forestal Tromen, los pagos casi duplicaron el costo inicial de las viviendas. La Contraloría objetó US$ 28 millones por no haberse cumplido con la obligación de publicar las compras por trato directo —sin licitación— en el sistema de Mercado Público. Esto afectó directamente la gestión de Cristóbal Lira, ex jefe del Comité de Emergencia de la Presidencia y posteriormente nombrado Director Nacional de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, responsable del sistema de estímulos monetarios.

Así, se conoció que en marzo de 2010 la empresa CENCOSUD (Jumbo, Santa Isabel, Paris, propiedad del empresario Horst Paulmann), hizo una venta de alimentos al Estado para ayuda a los damnificados por el terremoto. El hecho quedó en evidencia durante una auditoría del organismo contralor a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, ente que gestionó la compra, momento en que se detectó que la empresa dueña de varios supermercados y centros comerciales, había ingresado una partida de alimentos por el paso Los Libertadores bajo el concepto de ayuda humanitaria, la que después terminó vendiendo al Estado[102].

Un nuevo escándalo estalló a comienzos de febrero cuando la intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), le confesó a la junta de vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, que por ser un lugar "privilegiado y regalón" se les edificarán departamentos, aun cuando un 60%

---

100. *El Mercurio*, 4 de noviembre 2010.
101. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20101216/pags/20101216110555.html
102. *Cambio21*, 7 de enero 2011.

de ellos no contaban con el certificado de inhabitabilidad. Frente a estas revelaciones la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, afirmó que el MINVU "no ha aprobado y no se ha otorgado subsidio habitacional alguno" al proyecto en cuestión. La disputa RN/UDI en torno a este caso subió de tono en la medida que el Gobierno no adoptaba una decisión final sobre la permanencia de la intendenta en el cargo y el Presidente solo calificaba como desafortunados los dichos de la intendenta. No obstante, por orden del fiscal designado para investigar el caso de subsidios mal entregados, personal de la PDI allanó las dependencias de la Municipalidad de Concepción en busca de doscientos certificados de inhabitabilidad entregados por el municipio.

Sondeos de opinión pública mostraron que un 65,1% estuvo en desacuerdo con la intendenta al inventar una historia al MINVU[103], a lo que se sumó el resultado de una investigación de la Contraloría en 2010 que detectó un déficit mayor a los tres mil millones de pesos mientras ella fue alcaldesa[104]. La tensión llegó a su clímax cuando, incluso al interior de la Alianza, RN pidió la salida de la intendenta. No obstante, gracias a una decidida presión de a UDI, el Presidente decidió mantenerla en el cargo argumentando la inexistencia de irregularidades, la buena evaluación de su gestión y la inexistencia de méritos para una acusación constitucional. Frente a esta decisión RN acató la decisión pero se manifestó en desacuerdo con ella y la Concertación inició un examen jurídico en vistas a una posible acusación constitucional.

A un año del terremoto la Concertación mantuvo sus críticas a la gestión gubernamental e insistió en urgir al Gobierno para aprobar el proyecto de ley que creaba la Agencia de la Reconstrucción Nacional, presentado en abril de 2010 por los senadores Ricardo Lagos Weber, Camilo Escalona e Ignacio Walker.

d) Lota

El 16 de noviembre, 33 mujeres ingresaron a la mina "Chiflón del Diablo" en Lota quedándose a 150 metros de profundidad, amenazando con permanecer allí hasta que se implementara nuevamente un programa de absorción de la cesantía, que estuvo a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT). Después de una semana y tras nueve horas de negociaciones con el Gobierno, se terminó la toma del pique y ayuno. Las autoridades reasignaron dos mil cupos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) entre las personas más vulnerables, que pertenecían a las comunas de Lota, Coronel y San Pedro de la Paz, las que fueron directamente afectadas por el término del plan a cargo del CMT.

---

103. *El Mercurio*, 10 de febrero 2011.
104. *Cambio21*, 10 de febrero 2011.

e) Seguridad ciudadana

Aun cuando la seguridad ciudadana fue una prioridad gubernamental, a fines del primer año de Gobierno de la Alianza el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza (UDI), criticó la creciente cantidad de asaltos con violencia en el sector oriente de la capital y afirmó que "tenía una mejor expectativa" del Ejecutivo, que se sentía "decepcionado" y que hacía cinco meses había pedido una audiencia al jefe de Gabinete y "todavía no tengo respuesta"[105].

A esta crítica se sumó la muerte de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010, lo que puso en cuestión, nuevamente, el sistema carcelario chileno, los recursos asignados, la falta de cárceles, el hacinamiento, la política frente a la delincuencia y el aumento de los reos producto de la reforma procesal penal. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA, señaló que "es imperativo que las autoridades nacionales adopten todas aquellas medidas que sean necesarias para que los centros penales no alberguen más reclusos de los que pueden alojar de acuerdo con su capacidad real", superar la "insalubridad extrema" y "pésimas condiciones de infraestructura" de las cárceles del país. Otro informe del Instituto de Derechos Humanos informaba que la sobrepoblación de cárceles chilenas alcanzaba el 55%, existiendo 56.000 personas privadas de la libertad en un país cuyas unidades penales solo tenían capacidad para albergar a 31.000 presos[106]. Se volvió a denunciar el uso de celulares en las cárceles, lo que originaba el 95% de las estafas telefónicas, y la poca dotación de efectivos capacitados para cuidar cárceles, con bajos sueldos y limitado equipamiento y protección.

Esa fue una nueva oportunidad para continuar con las recriminaciones a la Concertación, afirmando el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que "Lagos fue el que más prometió y el que menos entregó de los cuatro presidentes de la Concertación"[107].

Una crisis similar se evidenció en el Cuerpo de Carabineros, donde su personal se había visto involucrado en robos y maltratos, siendo cuatro oficiales y dos suboficiales dados de baja e indagados por vejar a un detenido. Igualmente, un mayor y seis uniformados fueron dados de baja por usar los componentes químicos de las bombas lacrimógenas para drogarse y otros cinco sufrieron la misma medida tras comprobarse que personal uniformado en Renca quitaba droga en falsos allanamientos. Continuando con las bajas de personal, 149 efectivos fueron despedidos tras revisar sus hojas de vida y sesenta quedaron en observación a raíz de la detención y baja de diez funcionarios en dos semanas por vínculos con ladrones de cajeros automáticos.

---

105. *El Mercurio*, 24 de noviembre 2010.
106. *El Mostrador*, 10 de diciembre 2010.
107. *El Mercurio*, 12 de diciembre 2010.

Esta situación de crisis institucional obligó al Director General de Carabineros, general Eduardo Gordon, a emitir un mensaje radial a todas las unidades dando respaldo a los carabineros y mandos para acentuar el control en comisarías. Igualmente, designó oficiales de mayor graduación en aquellas comisarías de barrios más afectados por el delito. La situación institucional volvió a complicarse cuando dos aspirantes a oficiales del Cuerpo de Carabineros murieron durante la jornada de instrucción en Curacaví.

Con todos estos escándalos no es de extrañar que el índice de la Fundación Paz Ciudadana-Adimark para el período octubre-diciembre de 2010 informara que si bien la victimización había bajado de 36.5% a 33%, y las denuncias habían subido de 52,6% a 56,%, los niveles de satisfacción con la actuación de la policía y la fiscalía después de denunciar bajaron tanto con la policía (46% a 43,3%), fiscalía (25,6% a 24,5%), así como con Carabineros (5,4 a 5,1) y la PDI (5,3 1 5,1)[108].

La promulgación de la ley del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que incluyó una Subsecretaría de Prevención del Delito y recuperó la dependencia de Carabineros y la PDI, que estaban bajo el Ministerio de Defensa desde la dictadura militar, abrió expectativas de una mejor coordinación en materias de orden y seguridad pública.

f) Puente mecano derrumba a ministro

En nueve meses de servicio, la gestión del ex DC Defensa, Jaime Ravinet, fue configurando una de las mayores crisis del gobierno Piñera. Un documento que circuló por las oficinas del ministerio criticaba a Ravinet por el "copamiento militar" del ministerio. Este comenzó con la designación del ex Comandante en Jefe del Ejército, general (r) Óscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, y continuó con el despido de personal a contrata y la incorporación de 15 oficiales en retiro, entre generales y coroneles, donde figuraban dos ex comandantes en jefe[109].

El escándalo que percutó la crisis fue la queja de la firma británica MBL por irregularidades en la compra en US$ 16 millones a la empresa estadounidense AC de un puente mecano que reemplazaría al puente viejo que cruzaba el Río Bío-Bío, dañado por el terremoto, producto de lo cual la Contraloría investigó al Ministerio

108. Véase http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110119133353.pdf

109. *El Mostrador*, 28 de diciembre 2010. Los generales (r) Julio Baeza, Mauricio Baker, Orlando Carter, Jorge Fuenzalida, Eduardo García, Mario Larenas, Alejandro Romero y Osvaldo Saravia; el Almirante (r) Rodolfo Codina; y los ex coroneles René de la Puente, Ricardo Maldonado, José Pérez, Mauricio Pizarro e Italo Seccattore. Junto a estos oficiales, se informó que el ex militar Pablo Belmar Labbé, implicado en el asesinato de Carmelo Soria, fue contratado por el familiar de la ministra Matte, Bernardo Kupfer Matte, que dirige el Parque Metropolitano y administra el Zoológico, piscinas y centros de recreación del cerro.

de Defensa por el sobrepago de US$ 2 millones. Los abogados de MBL acudieron a la Ley de Acceso a la Información, pero el subsecretario de las FF.AA., general (r) Óscar Izurieta, negó los documentos, aduciendo que se trataba de una compra secreta con fondos de la Ley del Cobre[110].

Frente a la decisión del Consejo para la Transparencia de acoger la solicitud, Ravinet afirmó que si se daba esa información, "a futuro las Fuerzas Armadas serán renuentes a prestar colaboración a las autoridades civiles ante catástrofes de la naturaleza, al verse obligadas a exhibir su material de guerra o equipamiento militar para acudir a prestar auxilio a la población civil, sean forma transitoria o permanente, como su Consejo lo está haciendo con los puentes mecanos"[111]. Ante la escandalizada reacción nacional, incluso de La Moneda, se vio forzado a recapacitar: "Quiero reiterar y aclarar que las FF.AA. son esencialmente obedientes y disciplinadas al Poder Ejecutivo. Por tanto, siempre que la autoridad lo solicite, estarán dispuestas a ayudar a la comunidad frente a catástrofes naturales, como lo hicieron el pasado 27 de febrero"[112]. Por su parte, el general Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en Jefe del Ejército, ya había afirmando que "nadie debería pensar que en alguna situación de emergencia, no estaríamos con el pueblo de Chile"[113]. Aun cuando el tema podría haberse sepultado, en su testimonio ante la comisión de Defensa de la Cámara, Ravinet comentó en micrófono abierto al diputado Ricardo Rincón (DC) que, en su opinión, el puente mecano "vale callampa huevón, lo podría haber mostrado todo aquí, el puente vale callampa"[114]. Con esa gota se rebalsó el vaso del ministro, quien después de una acalorada discusión telefónica con el Presidente, presentó su renuncia al ministro del Interior, acelerando el cambio de Gabinete.

La salida de Ravinet de Defensa visibilizó las graves situaciones ocurridas al interior de las FF.AA. Primero, la Contraloría objetó la compra por $ 1 millón de dólares de una vivienda para el jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Ejército Cristián Le Dantec, lo que fue seguido por una investigación de la misma entidad en contra del mismo general luego que la empresa Mar Azul, dedicada a la venta de *containers* habitables —usados por los ejércitos, hospitales y policías—, lo denunciara ante el organismo fiscalizador de cometer irregularidades en el proceso de otorgamiento de una licitación. Una auditoría integral aleatoria de la Contraloría realizada de oficio detectó varios procedimientos catalogados como irregulares y estableció que el Ejército debía determinar las sanciones que correspondieran a

110. *El Mostrador*, 13 de octubre 2010.
111. *El Mostrador*, 6 de enero 2011.
112. Ibíd.
113. *El Mercurio*, 8 de enero 2011.
114. *La Tercera*, 12 de enero 2011.

los altos funcionarios involucrados[115]. Producto de estas situaciones, el nuevo ministro Andrés Allamand (RN), recién asumido en Defensa el 19 de enero de 2011, aceptó la renuncia de Le Dantec, nombró en su reemplazo al general Hernán Mardones y ordenó otro sumario por irregularidades tras informe de Contraloría por la compra de pasajes aéreos, fletes y viáticos por parte del organismo entre los años 2007 y 2010[116]. Igualmente, ordenó un sumario por la compra del puente mecano y otra por la doble consultoría prestada a la regata Bicentenario de la Armada, en la que se vio implicado el ex vicealmirante (r) Cristián Millar y el agregado cultural en España, Cristián Pizarro, quien, llamado a informar a Santiago, presentó su renuncia al cargo.

Simultáneamente, el comandante en jefe del Ejército separó de su cargo al coronel Juan Luís Martin, que estaba a cargo del proceso de compra de la casa destinada al renunciado Jefe del Estado Mayor Conjunto y encargado de adquisiciones del Comando de Infraestructura Nacional, luego que la Fiscalía Militar de Valdivia iniciara una investigación por apropiación indebida de caudales y falsificación de instrumento público[117].

Sumándose a estos procesos, el Consejo de Defensa del Estado pidió un ministro en visita para que investigara millonarios contratos del Comando de Aviación del Ejército (CAE) por el mantenimiento de aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (BAVE) en Rancagua, para que la justicia criminal ordinaria se hiciera cargo del caso relativo a contratos que estaban en la justicia militar[118].

No solo el Ejército se vio involucrado en estos escándalos. La FACH "inició una indagatoria luego que una denuncia a la Contraloría revelara que Denise Benard, esposa del general (r) Ricardo Ortega, viajaba con su marido, aun cuando era médico del hospital institucional y nunca se le hicieron los descuentos respectivos. Además, la abogada Francisca Ortega, hija del uniformado, fue enviada a Haití, recibiendo sueldo chileno y de la ONU, y se le pagó un postítulo. Además, Ortega habría contratado a su asesora del hogar a través del club de campo de la Fuerza Aérea"[119], fondos que posteriormente tuvo que devolver a la institución.

Ante estas situaciones el nuevo ministro formuló la llamada "doctrina Allamand", la que estableció: 1.La proactividad de las FF.AA. frente a denuncias por irregularidades. De ahí el sumario administrativo que el ministerio abrió por la compra del puente mecano frente al cual puso al general de Aviación César Mac-Namara, subjefe del Estado Mayor Conjunto y no del Ejército que fue el

115. *El Mercurio*, 28 de enero 2011.
116. *El Mostrador*, 28 de enero 2011.
117. *El Mercurio*, 20 de enero 2011.
118. *El Mostrador*, 31 de enero 2011.
119. *El Mostrador*, 27 de enero 2011.

responsable de esa negociación; 2. Rapidez en la entrega de estas investigaciones con un máximo de veinte de días (prorrogables); 3. Los comandantes en jefe de las FF.AA. deben aplicar todas las medidas administrativas que cumplan con este objetivo de mayor transparencia; y 4. Existencia de un "catastro" en orden a establecer cuántas auditorías, investigaciones y sumarios se encuentran vigentes al interior de las tres ramas de las FF.AA., sobre todo en materias de adquisiciones y probidad, así como cuántas peticiones de información existen para el área de Defensa, de parte de la Cámara de Diputados y del Consejo para la Transparencia[120].

En ese contexto los ministros de Defensa y Hacienda anunciaron que este último ministerio asumiría la administración y gestión financiera de los saldos de la Ley Reservada del Cobre, hasta ese momento radicada en el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA), entidad que tenía prevista su disolución. De la misma forma, oficializó la creación de una comisión asesora para estudiar la derogación de la Ley Reservada del Cobre, que incluía a parlamentarios, las comisiones de Defensa de ambas cámaras y los partidos políticos, e integró al economista y subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer —futuro ministro de Educación— a ella[121].

Posteriormente, en el mes de febrero de 2011, el ministro Allamand creó el Consejo de Inversiones en Defensa (CID) integrado por los subsecretarios de Defensa y de Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los comandantes en jefe de cada rama de la defensa. Su función era "asesorar respecto a la pertinencia y relevancia de las distintas iniciativas de la inversión de las instituciones"; estas, si son aprobadas, vuelven a la respectiva institución para un estudio de prefactibilidad después de lo cual la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa daría su recomendación de aprobación. Después de todo ese proceso el CID aconsejaría la inversión para decisión final del ministro. Este nuevo procedimiento le daría transparencia al proceso de compra de armas e incrementaría el control civil sobre las FF.AA.

El "copamiento militar" del Ministerio de Defensa se vio fuertemente golpeado con las renuncias del jefe de Gabinete del ministro, el ex comandante en jefe de la Armada, almirante (r) Rodolfo Codina, y el despido de ex oficiales vinculados a la DINA y CNI solicitado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)[122].

No obstante esta limpieza, la segunda antigüedad del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, jefe del Estado Mayor, reconoció haber sido un agente de la

---

120. *La Nación*, 26 de enero 2011.

121. *La Nación*, 29 de enero 2011.

122. "Conforme a la nueva política de personal dispuesta por el Ministro Andrés Allamand, se informa que los señores Alejandro Romero Peragallo (ex CNI), José Pérez Manríquez (ex CNI) y Orlando Carter Cuadra (yerno de Manuel Contreras), han cesado en sus funciones en la Subsecretaria de Defensa a contar del día de hoy (lunes), habiendo sido comunicada esta resolución a ellos el día 17 de enero del presente. Respecto del señor Italo Seccatore Gómez (ex DINA) y Pedro Fernández Neira (ex CNI), se informa que prestaron servicios en la Subsecretaría de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2010". *El Mostrador*, 31 de enero 2011.

Central Nacional de Informaciones (CNI) por lo que las organizaciones de derechos humanos, incluido el Instituto de Derechos Humanos, exigieron su salida. A este se le sumó el caso del general Alejandro Maggi Ducomunn, comandante en jefe de la III división del Ejército en Valdivia, ex agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). El ministro Hinzpeter respondió que en el caso del general Castro este llegó a esa posición "con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno". Esto fue ratificado por el ex ministro de Defensa, Francisco Vidal (PPD), reconociendo que entre un 15% al 20% de las cien primeras antigüedades habían pasado por los organismos de inteligencia, indicó que en los gobiernos concertacionistas

> establecimos el 2009 la primera diferenciación. Se instruyó al comandante en jefe del Ejército, general Izurieta, que todo el personal que haya pasado por la DINA y que estaba recontratado en el Ejército se le llamara a cesar sus contratos. Con respecto a la CNI no se aplicó la misma política por dos consideraciones; oficial imputado o procesado pasaba a retiro y también se determinó que había un conjunto relevante de oficiales que había pasado en algunas de sus funciones por la CNI. Era mejor aplicarle a este segundo grupo la doctrina de juzgamiento, procesamiento e imputación para llamarlo a retiro y no sólo haber pertenecido a la CNI.[123]

Con todo, a fines de febrero el ministro Allamand, en reunión con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que "ni en el Gobierno ni en las Fuerzas Armadas van a participar personas que sean causantes directos de violaciones de DD.HH."[124].

Frente a las irregularidades en su institución la reacción del comandante en jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba, fue desafortunada: "En mi modesto criterio la exacerbación en ciertas cosas relativas a fallas de procedimientos, a objeciones de la Contraloría, a ciertos asuntos administrativos, la exacerbación de eso, en cierta medida daña instituciones que son enormemente grandes y esto no es lo fundamental de sus actividades"[125].

g) Derechos humanos

La política de derechos humanos se caracterizó por una doble política. Por una parte, una acción destinada a debilitar las instituciones estatales dedicadas al tema y, por la otra, una acción comunicacional que mostraba compromiso activo con estos derechos.

---

123. *La Tercera*, 2 de febrero 2011.
124. *El Mercurio*, 23 de febrero 2011.
125. *El Mercurio*, 30 de enero 2011.

Así, a mediados de noviembre la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se tomó las dependencias del Programa de Derechos Humanos reclamando por la política sobre justicia impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, señalando que llevaban más de seis meses en espera de una respuesta a sus demandas. Estas sumaban más de 350 acciones legales en esas últimas semanas, presentadas por parientes que nunca habían pedido a los tribunales indagar qué había ocurrido con ellos. Su presidenta, Alicia Lira, acusó al Ministerio del Interior de no querer interponer estas querellas, ya que abogados del programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado ya habían confeccionado estas acusaciones, pero no habían recibido la firma, tanto del subsecretario Rodrigo Ubilla, como del titular de la cartera Rodrigo Hinzpeter. El ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, las recibió el 18 de noviembre en La Moneda, aclarando que ya había presentado querellas por 11 casos de víctimas.

Ante el despido de tres abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior por "falta de confianza" —que ya habían sido criticados por la citación al subsecretario de Defensa, general (r) Óscar Izurieta en el caso Víctor Jara y al embajador en Panamá, Alberto Labbé, en el marco de la Operación Cóndor— las agrupaciones de DDHH continuaron acusando al Gobierno de permitir "impunidad". Igualmente, reclamaron por el estancamiento de causas en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y por lo que consideraron un "desmantelamiento" del área de Derechos Humanos de la PDI, la salida del subprefecto Sandro Gaete, calificando la medida como una desarticulación de la unidad[126].

Frente a esta práctica, la política explícita del Ejecutivo fue manifestar el compromiso gubernamental por el respeto a los derechos humanos. Así, el 25 de noviembre y ante la Corte de Apelaciones, el Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, interpuso una querella "por homicidio calificado con premeditación y alevosía contra quienes resulten responsables" de la muerte de José Tohá González, el ex ministro de Salvador Allende[127]. En el ámbito legislativo, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para extender el plazo de análisis de solicitudes de víctimas de la dictadura a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida también como la "Comisión Valech", prorrogando el mandato de la Comisión para que continuara con el proceso de calificación de los casos que llegaron a la instancia tras su reapertura. El Ejecutivo señaló que el proyecto consideró el "explosivo aumento" en el número de personas que presentaron solicitudes. La recepción de casos comenzó el 17 de febrero de 2010 y culminó el 17 de agosto pasado, recibiéndose más de 33 mil

126. *La Tercera*, 24 de enero 2011.

127. Corte de Apelaciones ordenó exhumar cuerpo de José Tohá. Perito que vio cuerpo de José Tohá señaló que: "Colgamiento era un montaje evidente". Alfonso Chelén señaló que "habían huellas de estrangulamiento previas a la maniobra de haberlo colgado aparentando un suicidio".

solicitudes, cifra superior a las 18 mil previstas originalmente. La comisión, creada el 2009, con la dictación de la Ley N° 20.405, estuvo integrada por María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Mario Papi, Elizabeth Lira, Lucas Sierra, Edgardo Riveros y Luciano Fouillioux[128].

Siguiendo esa misma línea, Piñera organizó un homenaje al ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 19 de enero, ocasión en la cual afirmó que "la muerte de un ex presidente de la República no puede quedar impune. Nuestro gobierno va a hacer todo lo que sea necesario y va a colaborar en todos los frentes para que se esclarezcan de una vez por todas las circunstancias de su muerte". Y, a inicios de febrero, anunció que el Gobierno interpondría una querella criminal por la muerte de Frei.

Esta postura alcanzó a algunos parlamentarios de Gobierno, quienes al comentar la publicación del diputado del PPD, Patricio Hales, "¿El perdón sin memoria? Respuesta a un General, respondiendo carta que el general Núñez le envió al Presidente el 26 de julio de 2010" pidiendo la libertad de los militares presos por violaciones a los DDHH. Así, el diputado RN Alberto Cardemil, afirmó que: "En lo político doctrinario aceptamos, los civiles que estábamos en el gobierno, plazos demasiado largos para gobernar. En el ámbito personal, con lo que hoy conozco habría sido más prolijo, más desconfiado, menos proclive a dar por ciertas versiones oficiales"[129].

h) Gas en Magallanes

Las declaraciones del ministro de Energía, Ricardo Raineri —"se acabó la fiesta"— frente a las protestas en Punta Arenas por el alza del gas, paralizaron la ciudad[130].

A las 22.00 horas de la noche del martes 11 de enero, la ciudadanía se reunió en la Plaza de Armas de Punta Arenas realizando cacerolazos y los vehículos llevaron banderas de color negro o de la Región de Magallanes. Todos los representantes locales de los partidos políticos en la Región de Magallanes —PC, PS, PPD, PRSD, DC, RN, UDI y PRI— suscribieron un documento donde reafirmaron su oposición al alza de las tarifas del gas.

---

128. *La Nación*, 11 de enero 2011.
129. *Cooperativa* online, 11 de enero 2011.
130. Este había indicado que: "El precio del gas en Magallanes el año 2000 era la quinta parte del precio sobre el resto del país; hoy es la octava. En 10 años el gas podría acabarse en la región. En 2009 la presidenta Bachelet, frente a una situación similar, revirtió la medida de forma irresponsable. No podemos hacer políticas públicas a través de las empresas del Estado (…) Los parlamentarios Marino Vic y Bianchi de la región han liderado una ofensiva en contra de este ajuste. Esta decisión no se va a revertir, porque habrá medidas para apoyar a la gente, debido a que queremos que finalmente se pague un precio menor por el gas y se haga un buen uso de la energía". *El Mercurio*, 9 de enero 2011.

La oferta del Gobierno fue la de otorgar "subsidios para poder cambiar los calefactores por tecnología más eficiente y también subsidios especiales para la gente de bajos ingresos y la tercera edad en Magallanes en la adquisición y pagos de su consumo de gas", pero los miembros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) rechazaron la oferta. Frente a la propuesta del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de parcelar el reajuste tarifario, Eugenio Bahamondes, uno de los voceros de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), informó que "le insistimos que nosotros queremos que no se aplique el alza y se forme una mesa de diálogo donde estén todos los sectores representados"[131]. Ese mismo día el Gobierno aceptó que el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, asumiera un rol facilitador y organizara una mesa de diálogo. Sin embargo, el viernes 14 de enero, el obispo declaró que "la reunión se terminó, porque las partes no llegaron a acuerdo", añadiendo que terminaba su rol como facilitador del diálogo[132]. Representantes del gobierno habían aflojado su postura, al punto de ofrecer durante la tarde la aplicación de solo un 3%, en lugar del 16,8% anunciado, por un período de diez meses. En ese lapso, el plan propuesto era conversar sobre proyectos de ley que beneficiaran a los magallánicos como habitantes de una zona extrema[133]. Frente a esta oferta los alcaldes de Punta Arenas y Porvenir, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Agrupación Gremial de Industriales y Artesanos (AGIA), estuvieron por aceptar el incremento del 3%, mientras que los gremios de la locomoción colectiva, camioneros y taxis colectivos trataron de mantener el paro.

En medio de las protestas el presidente DC, Ignacio Walker, rechazó el anuncio del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Magallanes: "Esto es un reflejo de un gobierno ausente, que no sabe negociar ni gobernar, que hace como que se sienta a la mesa y que, como no consigue lo que quiere, aplica la fuerza"[134]. Igualmente, el Arzobispo Ezzati consideró grave decisión del Gobierno de invocarla.

Finalmente, el Gobierno y la Asamblea Ciudadana de Magallanes firmaron un acuerdo finalizando el paro regional indefinido, el que contempló un alza de 3% (equivalente al IPC), pero con subsidios para cerca del 44% de la población de la región, que no vería incrementada sus cuentas. En la ocasión el ministro Golborne anunció que el 1 de marzo comenzaría a funcionar una mesa técnica consultiva de trabajo, conformada por representantes del Gobierno y la comunidad magallánica, con el fin de llevarle propuestas al Ejecutivo para el establecimiento de un nuevo sistema de regulación tarifaria del gas.

---

131. *El Mercurio*, 13 de enero 2011.
132. *Cambio21*, 15 de enero 2011
133. *El Mercurio*, 15 de enero 2011.
134. *La Tercera*, 17 de enero 2011.

A pesar que el Presidente Piñera al comienzo del conflicto afirmó que "nuestro gobierno apoyó una decisión difícil pero necesaria que adoptó la empresa ENAP a través de un alza muy moderada en los precios con dos objetivos: racionalizar el consumo y promover la producción de gas y petróleo en Magallanes"[135], indicando así que no había vuelta atrás en alza del gas en Magallanes, el resultado fue distinto, tanto que el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, reconoció que el Gobierno tenía "una cuota de responsabilidad en cómo se originó" el conflicto[136].

5. La gestión estatal

La gestión estatal se orientó a facilitar los espacios empresariales de nuevos y más amplios focos de renta y lucro privado. Aun cuando el proceso venía de años anteriores, -en ocho años el número de conglomerados empresariales en Chile aumentó en 31%-, en diciembre de 2010 la Superintendencia de Valores y Seguros identificó 113 grupos empresariales vigentes, 27 más que en 2002, la mayoría de los nuevos en el campo financiero y concesiones de obras públicas[137].

a) Privatizaciones

Argumentando acelerar la reconstrucción post-terremoto, el Ejecutivo ordenó vender la participación estatal en las empresas sanitarias pretendiendo recaudar US$ 1.600 millones por la participación en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal, destinando los recursos a financiar CODELCO, EFE, Metro y ENAP, así como los planes de CORFO y otras iniciativas del Gobierno.

La operación era la de mayor envergadura desde la privatización de las sanitarias en los años 90. En 1998, el Gobierno de Eduardo Frei inició un proceso de privatización de las empresas sanitarias bajo propiedad y gestión del Estado para financiar los planes de extensión de la red de cobertura de agua potable y alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas. Entre 1999 y 2000, el Fisco vendió el control de las tres mayores sanitarias del país: Aguas Andinas (34,98%), Esval (29,43%), Essbio (43,44%) y Essal (45,46%). Con la administración del Presidente Ricardo Lagos el modelo de venta del control de la propiedad se cambió por uno de concesión, bajo el cual el Estado entregó a privados los derechos de explotación de sanitarias por tres décadas. Bajo esta fórmula se concesionaron las sanitarias del Norte, Centro-Sur y Zona Austral.

135. *El Mostrador*, 13 de enero 2011.
136. *Radio Bío-Bío*, 19 de enero 2011.
137. Véase http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=36875

A este aviso se sumó la venta del 40% que mantenía CODELCO en la generadora eléctrica E-CL S.A. (en más de US$ 1.000 millones); y la venta del 100% de las acciones de CIMM T&S, firma que realizaba servicios a las mineras Escondida, Collahuasi, CODELCO, Andina, Pelambres, El Teniente y otras, y contaba con 2.000 trabajadores y ventas por US$ 65 millones.

Los jefes de bancada de los senadores de la colación opositora efectuaron una conferencia de prensa en la que hicieron una dura acusación en contra del Gobierno: que había una operación "oscura" y "sospechosa" tras la privatización de las empresas sanitarias, por lo que no descartaron llegar hasta el Tribunal Constitucional para que se pronunciara acerca de la legitimidad de la enajenación de estos activos. Por su parte, el ex Presidente Ricardo Lagos afirmó que "la venta de acciones de las sanitarias no tiene ninguna justificación. La explicación que ha dado el gobierno para vender su participación en dichas empresas no tiene sustento alguno. El Gobierno ha retirado en los primeros nueve meses de este año $4.129 millones de dólares de CODELCO, lo cual está muy por encima de lo calculado en la Ley de Presupuestos de 2010. En consecuencia, la mayor recaudación por el elevado precio del cobre hace que no se requiera venta alguna en las empresas sanitarias"[138].

No obstante la clara oposición concertacionista a este tipo de privatizaciones, un Decreto Supremo firmado por el Presidente el martes 15 de febrero aprobó la venta del 66% de la participación de CODELCO en el proyecto Inca de Oro (III Región) a la minera australiana PanAust[139].

b) Salud

Frente al anuncio de la instauración del Bono Auge, la ex ministra de Salud, María Soledad Barría, y la ex subsecretaria de la cartera durante la administración de Michelle Bachelet, Jeanette Vega, coincidieron en que el bono es una "privatización encubierta". Si bien podría haber sido temporal, según la primera, "lo que no se puede hacer es apretar al sector público no enviando los recursos suficientes para que mejore, o para que se incrementen las prestaciones. Eso es efectivamente una mayor privatización"[140]. Las concesiones de hospitales y bajo presupuesto para atención primaria eran los principales conflictos en el sector.

No obstante esa tendencia privatista, el informe de la comisión asesora presidencial de salud tuvo una disonante propuesta de reforma proponiendo poner fin al sistema de Isapres: crear un plan único y licencias cofinanciadas; fomentar la competencia en el mercado de la salud al dividir la cotización y su administración;

---

138. *El Quinto Poder.cl*, 24 de diciembre 2010.
139. *Cambio21*, 24 de febrero 2011.
140. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=450619

trabajador y empleador aportarían partes iguales para financiar las licencias médicas, y creaba un plan universal de salud con coberturas garantizadas para usuarios de Fonasa e Isapres.

c) Reglamentación de bancos y protección de agricultores

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), respondiendo a los requerimientos del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), que detectó en el mes de julio irregulares condiciones en los contratos entre los bancos locales y sus clientes, procedió a eliminar de sus contratos las cláusulas que no respetasen la Ley del Consumidor, como entregar libremente información de sus clientes a otras empresas, y modificar aquellas que resultan confusas para los consumidores[141].

Tratando de desmarcándose de la imagen de un "gobierno de los ricos" y en la perspectiva de delinear la "nueva derecha", la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) prohibió las ventas atadas de productos en la banca y el alza unilateral en comisiones o cupos en líneas de créditos estarían impedidos. Fue prohibida la oferta de una tasa más conveniente de créditos hipotecarios de largo plazo a cambio de la contratación de otros productos y, condicionada a la mantención de una cuenta corriente u otros productos similares, mantener de manera simultánea cuenta corriente, tarjeta de crédito y línea de crédito, o bajar cobros en función de pagos automáticos de servicios. Dos meses después, y luego de una serie de gestiones de la Asociación de Bancos, la SBIF autorizó nuevamente a las instituciones financieras a ofrecer servicios atados a los préstamos para la vivienda[142]. Según Juan Antonio Peribonio, director del SERNAC, lo que hizo la SBIF fue "regular la venta conjunta, o asociada a un producto más, para los efectos de pagar un crédito hipotecario. Para ello los bancos deben cumplir con la ley del consumidor, y respetar la libre elección de éstos, no pueden obligar a adquirir un segundo o tercer producto si no lo quieres (…) permitir la venta atada sería vulnerar los principios de los consumidores"[143].

Junto a estas reglamentaciones, el Gobierno redujo las tasas de retención del IVA en legumbres del 13% al 10% y en trigo del 11% al 4%, y eliminó la retención de IVA a los productores de trigo que llevaban contabilidad completa o contabilidad simplificada, que vendían más de 2.000 UTM al año. Al mismo tiempo, estableció en el presupuesto 2011 una base de $5 mil millones para la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), ente estatal para la estabilización de este mercado, que podía ser complementado para cumplir el rol

---

141. *El Mercurio*, 21 de octubre 2010.
142. *El Mercurio*, 16 de noviembre 2010.
143. *Estrategia*, 19 de noviembre 2010.

de establecer una correlación entre el precio alternativo de importación y el que se pagaba a los productores nacionales por un trigo de la misma calidad. Todas estas medidas tendientes a proteger al agricultor de la competencia de importaciones de granos[144].

El SERNAC denunció a la Justicia a las empresas CENCOSUD (Paris), Ripley (ECCSA) y Farmacias Cruz Verde por no entregar información que permitiera comprobar las promesas publicitarias de las pulseras "iónicas" que ofrecían una serie de efectos positivos para la salud[145]. Igualmente, hizo un llamado a los consumidores a denunciar "cláusulas abusivas" objetando 11 disposiciones que las tarjetas de grandes tiendas aplican a sus clientes[146].

d) Inversión extranjera

Una fuerte iniciativa pro inversión extranjera fue anunciada por el Ministerio de Economía. Si las iniciativas de las principales compañías superaban los US$30.000 millones para este año dentro y fuera del país, los anunciados para 2011 llegaron a los US$84.700 millones. Entre ellos destacó la reactivación de 56 proyectos privados en Chile, de los 105 que fueron postergados por la crisis económica. Entre los sectores con mayores inversiones se encontraban Minería, Forestal, Energía y Retail, entre otros[147]. La inversión extranjera autorizada observó un incremento del 200% a un récord de US$ 13.257 millones, aprobándose 56 solicitudes, 22 correspondiendo a nuevas iniciativas (69,9%) y 34 a aumentos de capital[148].

---

144. *Estrategia*, 26 de noviembre 2010.
145. *Cambio21*, 23 de noviembre 2010.
146. A fines de febrero el SERNAC estableció nuevas normas para las tarjetas de las casas comerciales: impide subir las comisiones o el cupo de la tarjeta, sin avisarle ni pedir consentimiento del consumidor; obliga a la empresa a indemnizar al consumidor y elimina el límite del monto del pago ante algún error de la compañía; elimina la estipulación que hacía absolutamente responsable al consumidor por fraudes, hurtos y robos de tarjetas; modifica la cláusula donde los consumidores autorizaban a las empresas a solicitar a terceros indeterminados, información personal en términos pocos precisos; se ajusta el artículo que daba la facultad a la empresa de no informar al usuario cuándo o por qué se podía exigir el pago acelerado de la deuda; el silencio del consumidor o la falta de respuesta no será considerada como una aceptación; elimina el artículo que permite destruir documentos que respalden las transacciones; se eliminan las cláusulas que exoneraban a la empresa de rendir cuentas al usuario e informarle del uso de ese mandato; elimina que los adicionales de las tarjetas se convierten en avales del titular, sin que firmara el contrato o se recogiera su consentimiento .
147. *Estrategia*, 4 de octubre 2010.
148. *Estrategia*, 11 de octubre 2010.

e) Subsidios habitacionales

El Gobierno anunció la introducción de cambios en las políticas de subsidios habitacionales a contar de 2011, beneficiando a los sectores bajos y medios aumentando entre un 20% y 50% los montos de los subsidios para acceder a la vivienda definitiva. Quienes postularan al subsidio de clase media podían obtener un beneficio que iría desde 100 hasta 300 UF. En los sectores bajos se consideró un aporte estatal de 400 UF (en vez de 330 a 370 UF) y un incentivo al ahorro del 100%. "Si una familia ahorra 10 UF, el Estado le proporcionará otras 10 UF". Quienes vendieran sus viviendas sociales usadas y quieran adquirir otras, recibirían 40 UF adicionales. En el caso de la clase media emergente, el Gobierno entregó beneficios de entre 300 a 400 UF según el precio de la vivienda, potenciando la postulación directa a través del SERVIU y otorgó mayor flexibilidad, ya que incluso se podrá postular a proyectos "en verde", casas usadas o en construcción, donde se consideraría el puntaje de la Ficha de Protección Social, a la cual se incorporarían nuevas variables, premiando la antigüedad en la postulación y apoyando a los grupos familiares numerosos, discapacitados y personas de la tercera edad. Los nuevos beneficios de los subsidios también abarcarían a los damnificados por el terremoto[149].

Producto de una mala política comunicacional se produjeron aglomeraciones en el SERVIU, donde más de cinco mil personas concurrieron a las oficinas del SERVIU Metropolitano para postular al Fondo Solidario de Vivienda de la Región Metropolitana. Solo uno de cada cinco lograba el anhelado subsidio, ya que el Ministerio de Vivienda solo tenía recursos para otorgar ese beneficio a unos mil postulantes.

f) Medioambiente

En la misma línea anterior, el 6 de octubre de 2010 el Presidente presentó la nueva institucionalidad medioambiental anunciando la creación de tres nuevas áreas protegidas en el país. En lugar de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), se creaban nuevas instancias con atribuciones y funciones independientes: Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) y Superintendencia del Medio Ambiente, y afirmó: "Hay algunos que por ganarse un peso, están dispuestos a destruir el planeta. Hay otros que por salvar una mosca, están dispuestos a empobrecer el planeta. Extremos que debemos apartarnos"[150].

---

149. *La Tercera*, 30 de octubre 2010.
150. *Diario Financiero*, 7 de octubre 2010.

Contradiciendo esa línea el ministro de Energía señaló que la suspensión de la central Barrancones fue un hecho excepcional y que la única manera de dar un salto al desarrollo de aquí al 2018 era a través de proyectos como las represas de HidroAysén y la central termoeléctrica Castilla, ya que la generación hidroeléctrica y térmica rebajarían los precios de la tarifa eléctrica, afirmaciones cuestionadas por parlamentarios de oposición, que calificaron como presión indebida tales declaraciones del ministro Ricardo Rainieri[151].

La movilización ambientalista volvió a manifestarse con la protesta en el bandejón central de la Alameda, frente a la Moneda, contra al peligro del poblado de Caimanes, de la provincia del Choapa, ante el inminente rebalse del tranque el Mauro, de la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, el que se dice es el más grande de Latinoamérica, y se encuentra a solo 12 kilómetros del poblado. La diputada PPD, Adriana Muñoz, solicitó a la Iglesia católica que medie en el conflicto que llevó a 11 vecinos de la localidad de Caimanes a iniciar una huelga de hambre para exigir el cierre del relave de desechos mineros[152].

El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, informó acerca de la voluntad gubernamental de eliminar la discrecionalidad de esa subsecretaría en la propuesta de cuotas al Consejo Nacional de Pesca, en la determinación de las vedas y de las tallas mínimas y que se estaba evaluando disminuir también atribuciones del Consejo Nacional de Pesca, como la fijación de cuotas. Galilea señaló que estudian instaurar paneles de expertos y dar mayor valor a la opinión de los comités técnico-científicos[153].

El Gobierno redujo la exigencia a termoeléctricas, y la nueva norma les permitió mayores emisiones al subir los límites de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), manteniendo los del material particulado. Las unidades en operación y las que fueron declaradas en construcción antes del 31 de diciembre de 2010, podrán emitir más que lo estipulado en el anteproyecto y en algunos casos (SO2) el doble, y no hay tope para las descargas de vanadio y níquel, aun cuando se mantienen para el mercurio. Se extendió el plazo para adaptar las centrales en funcionamiento de tres a cuatro años en zonas declaradas latentes o saturadas por material particulado, y a 5,5 años en áreas sin restricción[154]. Más adelante, el Presidente Piñera firmó el decreto que creó la norma de material particulado fino 2,5 para termoeléctricas.

Según los ambientalistas, el balance no era positivo ya que las termoeléctricas no solo quedaban aprobadas, sino que tendrían un margen mucho más blando que lo que en realidad se permite en Europa. El Dióxido de azufre se sube a 400 mg/Nm3 y el Óxido de nitrógeno sube a 500 mg/Nm3, respecto a la versión inicial

---

151. *El Ciudadano.cl*, 28 de octubre 2010.
152. Véase http://noticias.123.cl/noticias/20101125_befe494a3dc05a5a5a261ca9f8b0073c.htm
153. *Estrategia*, 25 de noviembre 2010.
154. Véase http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=79512

del proyecto. Por lo tanto habría una mayor emisión de gases peligrosos para las personas respecto a la idea inicial redactada en la administración Bachelet[155].

Nuevos conflictos medioambientales se abrieron en febrero de 2011. El primero, en torno a la Central Castilla, en Atacama, donde el Gobierno destrabó el trámite ambiental de la termoeléctrica más grande del país con el cambio que el Seremi de Salud de la región realizó de la calificación de la iniciativa (US$ 4.400 millones) de "contaminante" a "molesta".

Por otra parte, ONGs ambientalistas afirmaron que el proyecto carbonífero en Isla Riesco arrasaría con 1.500 hectáreas de bosques, humedales, valles y lagunas, destruiría la biodiversidad de la Reserva Nacional Alacalufe y pondría en riesgo el Parque Marino Francisco Coloane, emitiendo seis millones de toneladas de carbón y dañando la salud de los habitantes de la zona[156]. Una manifestación frente a la Moneda contra este proyecto a fines de febrero terminó con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros agrediendo a manifestantes, reporteros gráficos y periodistas[157].

g) Multi RUT

A pesar de lo anunciado meses antes, la legislación para evitar el *multirut* no cambió el concepto empresa, ganando la postura empresarial encabezada por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti.

En este contexto, el senador socialista Camilo Escalona le exigió al jefe del Ejecutivo establecer una "agenda laboral" y "hablar en serio", dado que "los abusos que se cometen tienen ahí su raíz". Incluso comentó que sostuvo una reunión con el presidente de la CPC, donde afirmó que

> si queremos terminar con la hipocresía, enfrentemos y resolvamos el problema de los multirut, es decir, holdings económicos que se dan el lujo de inscribir cuantas razones sociales ellos estiman conveniente, con el propósito de interferir en el proceso de formación de sindicatos, impedir la negociación colectiva y generar todo tipo de obstáculos para el ejercicio de los derechos laborales. Los abusos que se cometen tienen ahí su raíz. Los trabajadores están atomizados y divididos en miles de razones sociales jurídicamente diferentes y con múltiples representaciones sindicales producto de la situación anterior, sin una capacidad de poder interlocutar y de hacerse escuchar, todos los problemas pasan a ser de muy difícil solución.[158]

---

155. *El Ciudadano*, 21 de enero 2011.
156. *La Nación*, 17 de febrero 2011.
157. *RadioUChile.cl*, 24 de febrero 2011.
158. *Cambio21*, 26 de octubre 2010.

h) Comunicaciones

La política gubernamental en el sector de medios adoptó las mismas orientaciones privatistas y de reducción de la diversidad observada en otros campos. Por estas razones, el Observatorio de Medios, FUCATEL, denunció el decreto supremo del Presidente Piñera (*Diario Oficial*, 6 de octubre 2010) dando inicio a la adjudicación de concesiones para TV digital en circunstancias que estaba en discusión en el Congreso una ley que regulaba el régimen de concesiones, y "faculta a la Subtel para asignar frecuencias definitivas a los concesionarios facilitando las inversiones de largo plazo, que deberán luego ser puestas sobre una base jurídica más sólida con una nueva ley", además de la prolongación de las concesiones de demostración por un plazo de 1 a 5 años[159].

A partir de noviembre de 2010 se suspendió la impresión del diario *La Nación*, quedando como portal noticioso vía Internet. El presidente del directorio, Daniel Platovsky, afirmó que el "diario electrónico va a costar $1.500 millones al año, un tercio que el de papel"[160].

En una medida a favor del consumidor, el 6 de noviembre de 2010 el Presidente Piñera promulgó las leyes de Portabilidad Numérica, que posibilitará que los usuarios sean dueños de su número telefónico aunque se cambien de compañía; de la ley sobre reconstrucción y emergencias que estableció un sistema de alerta temprana ante posibles catástrofes; y la eliminación paulatina de la Larga Distancia Nacional.

i) Mujer

Un doble estándar se observó en materia de políticas hacia la mujer. A fines de octubre el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto para permitirle a la mujer ser la administradora de la sociedad conyugal al que se acoge el 54% de los matrimonios[161]. Igualmente, la ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, calificó de "indignante" la elección de Sergio Jadue en la ANFP, por sus antecedentes de violencia intrafamiliar[162].

Sin embargo, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) realizó una singular capacitación a sus secretarias: la correcta aplicación de sombras y lápices labiales, en la que resaltó lo sentador que era vestirse de blanco. Temas como nuevas formas de

159. Véase http://www.observatoriofucatel.cl/postura-del-observatorio-ante-los-proyectos-de-ley-de-tv-digital
160. *Cambio21*, 25 de octubre 2010.
161. *El Mercurio*, 25 de octubre 2010.
162. *Cambio21*, 15 de enero 2011.

atención a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, políticas para enfrentar la discriminación laboral o el acoso sexual, quedaron literalmente excluidas. Por su parte, SERNATUR lanzó y retiro un instructivo que imponía a las funcionarias tipos de peinado y maquillaje[163].

j) Valórico

Los temas valóricos generaron tensiones y conflictos no solo en la relación Gobierno-oposición, sino especialmente entre integristas y liberales al interior de la Alianza.

Como gesto a los católicos más conservadores, e iniciando las celebraciones del Mes de María, arribó a la casa de gobierno la imagen de la Virgen del Carmen Misionera a La Moneda, donada por el Papa Benedicto XVI, que estuvo en las zonas devastadas por el terremoto y en el campamento Esperanza en Copiapó. Encabezados por el ministro de la SEGPRES, Cristián Larroulet, los funcionarios participaron de una liturgia presidida por el capellán de la Presidencia, R.P. Luis Ramírez. "En este año, que hemos celebrado 200 años de vida independiente, hemos estado acompañados de la Virgen María tal cual como ha sucedido a lo largo de los muchos años de vida de nuestro país. Por eso, esta es una ceremonia de agradecimiento", dijo Larroulet. Tras el acto, la imagen de la Virgen fue trasladada a la Primera Compañía de Bomberos y a la parroquia San Andrés.

Frente a la campaña contra el SIDA, el MOVILH repudió que las visiones morales y religiosas se impusieran en un tema de salud pública, asegurando que el condón y los homosexuales estaban claramente fuera de la campaña, no por razones de una estrategia comunicacional pensada para generar mejores efectos de prevención, sino por razones morales y religiosas.

Profundizando las tensiones al interior de la Alianza, el Secretario General socialista, Fulvio Rossi, y la senadora Evelyn Matthei, presentaron una propuesta legislativa para reponer el aborto terapéutico[164]. Frente a la iniciativa el arzobispo electo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati

---

163. Situación que la ex ministra del servicio, Laura Albornoz, criticó duramente, y señaló que "esto viene a reflejar la mentalidad del gobierno (…) tienden a tratar los temas de la mujer de manera superficial, no se centran en las cosas importantes y ya vimos su manera de actuar con los funcionarios públicos donde no hay una capacidad de diálogo. Por si no lo saben, con este tipo de capacitaciones, no mejoran la situación laboral de las mujeres (…) Lo peor de todo, es que estas cosas ocurren justo cuando afuera han existido cuatro femicidios y todavía no se promulga la ley. A mí me preocupa por las mujeres y su calidad de vida. Me parece vergonzoso que pase esto". Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20101210/pags/20101210154041.html
164. *El Dínamo*, 15 de diciembre 2010.

afirmó: "No tengo miedo a dialogar". En la carta de esa organización, "Clamor por la vida de los inocentes", se rechazaba explícitamente el aborto en tres casos controversiales: "Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o atenta gravemente en contra de su salud, en casos en que el embarazo es producto de una violación, o bien cuando el concebido que se desarrolla en el vientre materno posee malformaciones". Sin embargo, en el punto 7 del documento se sostuvo que la Iglesia no se opone a "las acciones terapéuticas necesarias en favor de la madre para sanarla de una enfermedad, aunque comporten un riesgo, incluso letal, para el ser que no ha nacido". No obstante, el cardenal Errázuriz reafirmó su total rechazo al proyecto de aborto terapéutico en misa de Navidad.

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Ximena Ossandón —quien instaló una estatua de la Virgen a la entrada de esa repartición pública—, defendió al sacerdote Fernando Karadima, acusado de al menos cuatro casos de abuso sexual contra menores: "¿Qué le interesa al demonio: hacer caer a una persona común o al padre Karadima, que es uno de los próceres de la Iglesia católica chilena? Es obvio: al padre Karadima, porque el daño que va a hacer es potentísimo", afirmó recordando que fue el religioso quien ofició su matrimonio[165]. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue su mensaje en Twitter relativo a que su sueldo era *reguleque* ($3.700.000 al mes), razón por la que tuvo que renunciar.

Otro conflicto se produjo ante posibles uniones legales de parejas convivientes. El debate entre la UDI y RN se centró en el avance de las iniciativas respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, frente a lo cual el Gobierno desistió de enviar un proyecto al Congreso. En el campo más conservador bastó que se oficializara en la comisión política de la UDI la propuesta sobre uniones de hecho que preparó un comité nombrado por el presidente del partido, Juan Antonio Coloma, para que un sector del gremialismo expresara públicamente sus reparos a la iniciativa. Desde el Congreso, un grupo de diputados conformado por José Antonio Kast, Gonzalo Arenas, Gustavo Hasbún, María José Hoffman y Arturo Squella, argumentó que las proposiciones hechas podrían "igualar" los beneficios legales de los convivientes hetero y homosexuales con los del matrimonio. Principalmente los reparos se centraron en el tema de los derechos hereditarios en general, donde a partir de las modificaciones legales los convivientes podrían optar a los mismos beneficios que un cónyuge y los hijos. De ahí que la eventual reforma al derecho hereditario del Código Civil, tal como se propone, fue rechazada[166]. La misma tensión se produjo en RN entre su presidente, Carlos Larraín, y el autor de uno de los proyectos, el senador Andrés Allamand.

---

165. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20101215/pags/20101215174048.html
166. Véase http://www.lanacion.cl/propuesta-udi-sobre-uniones-de-hecho-genera-divisiones-internas/noticias/2011-01-04/201417.html

III. LA OPOSICIÓN

Las fuerzas opositoras, en particular los partidos de la Concertación, continuaron su difícil proceso de recuperación después de un período que dejó profundas heridas y resentimientos que no se sanaron, producto del inacabado proceso de análisis y acuerdo sobre las causas de la derrota.

Las diferencias intraconcertacionistas, además del debate estratégico que estas implicaban, fueron las primeras evidencias del inicio de una profunda reestructuración de las relaciones de poder dentro de la Concertación. Desde mediados de los 80 estas se habían configurado en torno al eje DC, en especial durante el proceso de formación de la "Concertación de Partidos por el NO". A partir de ese momento fundacional los pesos relativos de cada sector político-ideológico quedaron congruentemente estables durante los cuatro gobiernos concertacionistas, observándose lógicas variaciones dependiendo de quien controlaba el Ejecutivo[167]. En la oposición, y con un cuadro internacional adverso, el peso relativo al interior de la coalición comenzó a redimensionarse.

Sin un claro liderazgo, que hizo más evidente las profundas diferencias de línea estratégica, la oposición no logró adoptar una consistente postura unitaria frente a las iniciativas gubernamentales. Esas diferencias se agudizaron por la continuada ausencia de sus dirigentes en los conflictos sociales, las fracturas en materia de la política de alianzas y la incapacidad de conformar comisiones investigadoras en el Congreso. Esta crisis limitó fuertemente el despliegue de su rol opositor, no favoreciendo la movilización social antigubernamental[168]. Sin embargo, a fines de noviembre, tratando de recuperar

---

167. Esta ecuación originaria fue producto de un conjunto de factores, entre los que se pueden encontrar la mayor organicidad y mando único al interior del PDC a partir de la presidencia de Patricio Aylwin; "el National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes hacía la CIA de manera encubierta, el que junto a la federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de la oposición democrática y organizar el registro de votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo de votos para el día de la elección". Kornbluh, P., Schlotterbeck, M., "Reagan y Pinochet: El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura", CIPER, 23 de noviembre 2010. Véase http://ciperchile.cl/2010/11/23/reagan-y-pinochet-el-momento-en-que-estados-unidos-rompio-con-la-dictadura/. Lo mismo sucedió con gobiernos de la época en Europa (demócrata cristianos en Alemania e Italia, social demócratas en España, Francia, Italia, Portugal), el Vaticano y las fundaciones católicas.

168. A diferencia de lo ocurrido con la huelga de los comuneros *mapuche*, los dirigentes opositores no se vieron involucrados en las movilizaciones de trabajadores. Así, los 750 trabajadores de Farmacias Ahumada en huelga que exigían que el sueldo de apenas $32 mil pesos aumentara a nivel del sueldo mínimo, no encontraron apoyo de parlamentarios a sus demandas, como tampoco a sus denuncias que medios televisivos no cubrían, debido a que las amenazas de

su vínculo con las bases, los presidentes de los partidos de la Concertación se reunieron en Talcahuano con familias del campamento Lomas de Santa Clara, con sindicatos de pescadores artesanales agrupados en la Federación de Pescadores Artesanales del Bío Bío (FEREPA), y acusaron descoordinación y falta de información clara por parte del Gobierno dejando en evidencia, según Carolina Tohá, "una manera de actuar de este gobierno a lo largo de todo el territorio y especialmente en la zona del terremoto, donde se bypassea a alcaldes y autoridad locales, no se toma en cuenta la opinión de los parlamentarios y aún menos la de los afectados". Tohá insistió en que "hay una falta de respeto completa de las autoridades", por lo que hizo un llamado al Gobierno a dedicar menos tiempo a "victimizarse" [169].

Igualmente, la ausencia de base concertacionista en el acto de la Caleta El Membrillo en Valparaíso, durante la conmemoración del nuevo aniversario del triunfo al NO, al cual no llegaron más que 200 personas, siguió denunciando el déficit político concertacionista. En un único discurso, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, hizo una profunda autocrítica por la derrota electoral. Afirmando que "muchos confundieron el logro alcanzado, que fue real y contundente, con el exitismo y la arrogancia: dejaron de escuchar, dejaron de esforzarse y se acostumbraron al poder (...) muchos llegaron a creer que los espacios de representación les pertenecían y consideraron una ofensa que alguien quisiera competir ( ) las rencillas de la Concertación han desalentado a los ciudadanos y han desprestigiado a la política (...) allí el tono antipartidos ha encontrado un terreno fértil"[170].

En esa ocasión, la Concertación divulgó un compromiso opositor con la construcción de grandes acuerdos para reformas pendientes; con primarias abiertas y vinculantes; diálogo sin exclusión con todos los sectores de la oposición; asambleas de representantes en todas las regiones; convención municipal en abril del año 2011; y audiencias ciudadanas.

No obstante las declaraciones, en lo referido a la política de alianzas opositora, en particular al diálogo sin exclusión con todos los sectores de la oposición, las diferencias concertacionistas continuaron, separándose la DC del resto de sus socios, extremándose las propuestas de recomposición concertacionista. El abanico de

---

la empresa a canales de televisión de no invertir en publicidad (después de 32 días, a través de mesas de diálogo propiciadas por la Dirección del Trabajo, la empresa acordó aumentar el sueldo base a $172 mil). De igual forma, la amplia convocatoria que tuvo la marcha del 2 de noviembre —desde Plaza Italia por Monjitas hasta la Plaza los Héroes, para culminar en un acto cultural— y que reunió a trabajadores en conflicto de Farmacias Ahumada, Casinos Monticello y Transaraucaria, entre otras, tampoco contó con presencia de dirigentes políticos de la oposición.

169. *El Mercurio*, 28 de noviembre 2010.

170. *La Nación*, 6 de octubre 2010.

posiciones fue desde la negativa democratacristiana por abrirse a cualquier otra fuerza extra-Concertación, hasta la propuesta del senador PPD, Guido Girardi, de dar por terminada la coalición, pasando por la de su correligionaria, Carolina Tohá, y la del presidente del PS, Osvaldo Andrade, que proponían un diálogo y ampliación desde la Concertación.

En el caso del presidente DC, Ignacio Walker, los acuerdos con el PC eran imposibles toda vez, según su opinión, que este "tiene otra concepción de la sociedad y del derecho. Lo que para el PC ha sido democracia popular, para nosotros ha sido dictadura, lo que para el PC fue la estrategia de 'todos los métodos de lucha', para nosotros fue un intento de entronizar la dictadura de Pinochet. Eso no nos impide dialogar, hemos suscrito un pacto contra la exclusión, y el PC hoy tiene tres diputados. Sin embargo, las diferencias con el PC fueron, son, y me temo que seguirán siendo insalvables"[171]. No obstante, la senadora DC, Ximena Rincón, discrepó de tales dichos indicando que "el PC de hoy no es el mismo de hace 30 años, y creo que un acuerdo con ellos no es un tema que en la DC debamos satanizar"[172]. En la misma línea un grupo de parlamentarios DC liderados por el senador Mariano Ruiz-Esquide y los diputados Patricio Vallespín, el diputado y vicepresidente DC, Víctor Torres, así como la ex ministra Laura Albornoz, se abrieron a la búsqueda de nuevas alianzas con aquellos que han sido "leales" y "respetuosos" con la Concertación, como es el caso del Partido Comunista, desestimando acercamientos con el PRO y criticando a Marco Enríquez-Ominami[173]. Ante lo cual Walker reaccionó en carta dirigida a los autores de la iniciativa mostrando "sorpresa y perplejidad" e indicando que tal postura "me quita toda autoridad para hacer ver nuestros puntos de vista" en la Concertación, reiterando que "la política de alianzas de la DC, como ustedes bien saben, está dada por la Concertación de Partidos por la Democracia, y cualquier intento de modificarla debe ser discutido primero por y entre nosotros, y no por la prensa", de lo contrario se le inflige "un grave daño al partido"[174]. Estas diferencias quedaron nuevamente de manifiesto en el foro organizado el 19 de noviembre de 2010, en el campus San Joaquín de la PUC, donde Walker y Enríquez-Ominami abogaron por el voto obligatorio o voluntario, respectivamente.

Diferenciándose de su homólogo DC, ante el comité central de su partido, el timonel del PS formuló la tesis de un amplio abanico de alianzas que alcanzaría del PRI al Partido Progresista (PRO) para enfrentar las elecciones municipales

171. *El Mercurio*, 3 de octubre 2010.
172. *El Mercurio*, 28 de noviembre 2010.
173. *El Mercurio*, 18 de noviembre 2010.
174. *El Mercurio*, 25 de noviembre 2010.

de 2012[175]. De la misma forma se pronunciaron Carolina Tohá y José Antonio Gómez, presidente del PRSD, durante el V Foro Progresista[176]. Este último, en columna publicada en *La Tercera*, fue más allá y propuso la creación de "una federación que permita a todos entrar a debatir en igualdad de condiciones, sin que haya temas tabú ni peajes o aranceles para ingresar a este nuevo referente. Un referente que deberá debatir sobre la conformación de un gran bloque opositor"[177]. De manera menos rupturista, la comisión municipal del PPD elaboró un documento en el que proponía primarias abiertas con todas las fuerzas opositoras, independientes y partidarias, en vistas a las elecciones municipales de 2012[178]. Por su parte, el 19 de noviembre, y con la presencia de Carolina Tohá, se realizó el cónclave "La política escucha a la ciudadanía", convocado por el senador Guido Girardi (PPD), este puntualizó que la idea no era crear un referente político nuevo, sino una instancia de diálogo. Incluyó a Océanos Azules el que articularía un Consejo de Iniciativas Ciudadanas. Las críticas al legado de la Concertación marcaron el encuentro pero no hubo ningún tipo de llamado a formar un nuevo referente de izquierda.

Para aplacar las diferencias, los dirigentes de los cuatro partidos concertacionistas terminaron coincidiendo en una postura intermedia, más parecida a la de Carolina Tohá y su partido, en la que se afirmaba que

> La Concertación inicia una nueva etapa. Para ello, hemos decidido, desde la Concertación: Proponer un nuevo proyecto para Chile, en una clara perspectiva de futuro, asumiendo los nuevos desafíos del siglo XXI. En la construcción de este nuevo proyecto abriremos un diálogo y debate con todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas. Con este objetivo, hemos resuelto instalar un equipo de la Concertación que coordine este esfuerzo […] Abrir un diálogo político, desde la Concertación, con todas las fuerzas de oposición.[179]

Y a fines de noviembre, en carta dirigida a Marco Enríquez-Ominami (PRO), al senador Alejandro Navarro (MAS), al diputado Pedro Araya (PRI), al diputado Guillermo Teillier (PC), a representantes del Partido Humanista, ecologistas y otros movimientos, se los invitó a un diálogo bilateral con el objetivo de "Buscar entendimientos

---

175. *La Tercera*, 10 de noviembre 2010. Igualmente, recompuso las relaciones entre el ex Presidente Ricardo Lagos y la cúpula del Partido Socialista.
176. Véase http://www.chile21.cl/2010/11/11/llamados-a-la-unidad-del-sector-en-el-v-foro-del-progresismo
177. José Antonio Gómez, "¿Federación o frente amplio?", *La Tercera*, 20 de noviembre 2010. La misma propuesta la reiteró el 29 de enero en una columna en *La Tercera*, "Frente amplio de la oposición".
178. *El Mercurio*, 20 de noviembre 2010.
179. *El Mercurio*, 22 de noviembre 2010.

lo más amplios posibles para enfrentar los temas nacionales y constituir ante los chilenos una alternativa convocante e inclusiva, que represente los valores democráticos que compartimos quienes nos sentimos parte del centro y la izquierda de nuestro país". En vez de aplacar la disputa, la carta fue objetaba por Walker, quien señaló que

> Yo he expresado a nuestra coordinadora, la presidenta del PPD Carolina Tohá, que yo no tuve información ni fui consultado sobre el envío de esta carta ni del contenido, es distinto formar parte de una coalición política. Para ello tienen que haber acuerdos mínimos y valores compartidos, y lamentablemente hay valores no compartidos.

A esta polémica se sumó el hermano del presidente de la DC, Patricio Walker, quien enfatizó que: "Para la DC no hay dictaduras buenas y mientras el PC no condene la dictadura castrista es imposible formar una coalición política"[180].

Las respuestas del PRO, el PC y el PRI coincidieron en condicionar el diálogo con la Concertación a un pacto programático en áreas clave[181]. Carlos Ominami indicaba la necesidad de "abrir un diálogo programático sobre la base de acuerdos sólidos y, a partir de allí, explorar la posibilidad de constituir una federación del tipo Frente Amplio, da cuenta de esta nueva manera de mirar las cosas y de abrir un nuevo ciclo de la política chilena"[182].

Establecidas las alternativas existentes, a comienzos de diciembre de 2010 se pudieron observar algunos indicadores de avance en materia de unidad opositora. El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, junto al secretario general, diputado Lautaro Carmona, la concejala por Santiago, Claudia Pascual y Juan Andrés Lagos, encargado internacional y miembro de la comisión política del PC, entregaron información sobre el XXIV Congreso de la colectividad y la situación política del país, dentro de lo cual destacaron el llamado a una convergencia amplia para desplazar a la derecha del poder. En el Congreso del PC, con la presencia de Ignacio Walker en su cierre, Teillier se refirió a la política de alianzas con otros sectores de la oposición, señalando que:

> Lo primero es alcanzar la unidad de toda la oposición y con eso estaríamos cumpliendo con las expectativas de los trabajadores, de los pobladores, de aquellos que han sufrido con el terremoto y de aquellos que sufren las consecuencias de la

180. *El Mercurio*, 2 de diciembre 2010
181. Véase http://diario.elmercurio.com/2010/11/23/_portada/_portada/noticias/3CBCFA8B-0A31-4E92-B906-A6F7A2916278.htm?id={3CBCFA8B-0A31-4E92-B906-A6F7A2916278}
182. Carlos Ominami, "Una oposición en serio", *La Tercera*, 26 de noviembre 2010. Para potenciar la elaboración de nuevas miradas, el PRO estableció un vínculo privilegiado con el PS francés a través de su principal centro de estudios, la fundación Jean Jaurés, estableciendo una alianza con el think tank Progresa.

agudización del modelo neoliberal. Esa unidad opositora puede dar paso después a una convergencia en la búsqueda de alcanzar una importante mayoría en las próximas elecciones municipales, luego en las parlamentarias y después acceder al gobierno con una plataforma distinta a las que han tenido los gobiernos de la Concertación y por cierto, muy distinta a la de la derecha. Por ello nos preocupa que la Concertación demore las conversaciones con los partidos opositores. Mientras más tarda este inicio, más se consolida la derecha en el gobierno imponiendo con toda facilidad sus políticas, sin que exista un referente claro que exprese una alternativa, pero que sobre todo revierta la sensación de abandono y desencanto que aún persiste en la ciudadanía. La constitución de una convergencia de toda las fuerzas opositoras, que incluya a la Concertación, el Juntos Podemos Más, el PRO, el MAS, y el Partido Regionalista del Norte es la propuesta gruesa que entregamos a todas las fuerzas que conforman la oposición.[183]

Dos días después el presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, vocero de la Concertación, invitó a dialogar a todos los partidos de oposición, el que se iniciaría con un encuentro de la Concertación con las directivas del Partido Regionalista Independiente, Partido Comunista, Partido Humanista, el Partido PRO en formación[184] y el MAS. Igualmente, anunció un programa de encuentros ciudadanos en regiones y ámbitos temáticos, como también la constitución de equipos de trabajo municipal y el de la configuración de un proyecto futuro. Esta secuencia de encuentros de carácter ciudadano que iban a iniciar con un diálogo con el mundo de los estudiantes[185].

Los problemas volvieron a surgir cuando un grupo de dirigentes formuló la idea de organizar un cónclave programático como instancia de diálogo paralela a los encuentros organizados por el PS, lo que generó una oleada de cuestionamientos al senador Girardi (PPD) por promover cónclaves paralelos y motivar alianzas electorales que no estaban aprobadas por la Concertación. Tanto el presidente del PC, Guillermo Teillier, como el senador Navarro (MAS), respaldaron la labor de los jefes partidarios, reafirmando la idea de que el diálogo dentro de la oposición debe realizarse únicamente a través de conductos "institucionales"[186].

A las no resueltas diferencias estratégicas —alianzas y programas—, la dispersión opositora tuvo un nuevo capítulo durante la discusión y negociaciones de los proyectos de ley sobre el *royalty* y la reforma a la educación enviados por el Ejecutivo

183. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2056:en-inauguracion-de-congreso-del-partido-diputado-teillier-llama-a-la-convergencia-de-toda-las-fuerzas-opositoras&catid=35:politica&Itemid=55
184. El 21 de febrero el PRO presentó ante el SERVEL fichas de afiliación, correspondientes a Arica, Iquique y Antofagasta.
185. Véase http://www.cronicadigital.cl/news/politica/18745.html
186. *El Mercurio*, 14 de diciembre 2010.

al Congreso. Una primera señal fue la ausencia del presidente del PS en la votación del proyecto de reajuste del sector público, lo que permitió la aprobación de la fórmula del Ejecutivo, frente a lo cual Andrade señaló: "Creo que no tener reajuste habría sido un mensaje brutal para los seis millones de trabajadores de este país".

Otras diferencias concertacionistas se dieron en torno a diversas iniciativas gubernamentales. Por una parte, argumentando la necesidad de evitar el aislamiento político el senador PS, Camilo Escalona, afirmaba que "ser una oposición irreductible es un camino absurdo para la Concertación"[187], lo que lo llevó a apoyar una fórmula más limitada del *royalty* minero que la discutida por los equipos técnicos concertacionistas, así como a respetar el acuerdo del anterior Gobierno por la inscripción automática y el voto voluntario.

Igualmente, a expresa petición de Ignacio Walker, la bancada DC, adelantándose a la Concertación, anunció su apoyo a la reforma educacional del Gobierno, aprobándose esta con votos clave de diputados DC. A continuación, a fines de diciembre, el presidente de la DC y el ministro Lavín trabajaron en un acuerdo en el Senado. Las claves (véase supra) fueron el fortalecimiento de la educación pública, definición de la nueva carrera docente, aumento de la cobertura y calidad de la educación preescolar, restablecimiento de las cuatro horas obligatorias de Historia, con un componente de formación cívica, perfeccionamiento de los mecanismos de entrega de información, desplazando el sistema de semáforos del SIMCE y la garantía de que los programas de educación sexual impulsados por el MINEDUC respetaran los derechos humanos y la Constitución.

Frente a esto, el PRSD rechazó el acuerdo argumentando que el texto legal no favorecía una mejora real de la educación pública, y su bancada de diputados decidió congelar relaciones parlamentarias al interior de la Concertación por estar "decepcionados por la forma en que se elaboró el acuerdo entre los otros partidos de la Concertación y el gobierno, que permitió la aprobación de la reforma a la educación del Ejecutivo". El presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, aseguró que la Concertación no podrá seguir unida producto de "diferencias profundas" entre los partidos, y se pronunció por la creación de una nueva plataforma política de un nuevo referente ciudadano[188], el que debiera llamarse "Opción Democrática". Otro documento elaborado por Océanos Azules a un año del fracaso electoral hizo un crudo análisis de su derrota y promovía el fin de la Concertación, proponiendo en su reemplazo una "coalición de ciudadanos por la democracia"[189].

A esa crisis se sumó el diputado Sergio Aguiló, quien renunció indeclinablemente a su militancia y al comité central del PS después que la comisión política decidiera

187. *La Tercera*, 10 de octubre 2010.
188. *El Mostrador*, 19 de enero 2011. *El Mercurio*, 21 de enero 2011.
189. *El Mercurio*, 19 de enero 2011.

apoyar el proyecto del Gobierno. Posteriormente se dirigió hasta el Centro Ecuménico Diego de Medellín, donde lo esperaban el ex candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, el ex ministro de Minería de Salvador Allende y dirigente de la Izquierda Cristiana, Pedro Felipe Ramírez, para iniciar a una serie de reuniones de coordinación para elaborar una "nueva fuerza de izquierda" de coordinación directa con diversas organizaciones sociales.

La reacción de los jefes de partidos de la Concertación reaccionaron reconociendo "la necesidad de un pacto de centroizquierda expresada en la Concertación", y anunciaron la creación "lo antes posible" de "un nuevo espacio común de la oposición, con todos los actores políticos y sociales que se identifican con ella y deseen aportar a este esfuerzo de unidad", con carácter consultivo incluyendo a fuerzas sociales y políticas como las minorías sexuales, grupos culturales, juntas de vecinos, sindicatos y movimientos políticos, como el PC, el MAS y el PRO. La definición de su estructura será consensuada con las fuerzas que deseen participar en esta nueva orgánica[190].

En ese marco y con la asistencia de los tres diputados del PC, se dio inicio, el segundo fin de semana de enero 2011, a la Junta Nacional DC, la que aprobó un voto político enfatizando la política de alianzas centrada en la Concertación y una oposición más claramente definida frente al Gobierno, en particular sobre los procesos privatizadores. De los 18 nuevos elegidos, 13 fueron de la línea de Walker. Este fortalecimiento del nuevo presidente DC también significó un cambio en la correlación de fuerzas internas en el cual fueron desplazados los antiguos proveedores de trabajo en el Estado, evidenciándose un recambio generacional. No obstante, la presencia de ex "colorines" mostró que los sectores más de derecha al interior de la DC seguían teniendo fuerza y que muchos de los nuevos miembros de la Junta Nacional fueron dirigentes comunales, cargos importantes para la próxima elección de alcaldes y concejales.

Fortalecido en su rol, Ignacio Walter, en columna en un matutino, reaccionaba ante las propuestas de ampliar la Concertación afirmando conceptos ya conocidos:

> Esta tesis de la Concertación como pacto de centroizquierda se opone a la tesis que ha expuesto en esta misma sección, en días pasados, el senador José Antonio Gómez, presidente del PRSD, en torno a la necesidad de lo que denomina un "Frente Amplio de Oposición". En la práctica, este deviene inexorablemente en frente de izquierda, como lo prueba la historia de Chile desde el Frente Popular hasta la Unidad Popular. No es una mera coincidencia que en un documento suscrito y divulgado el fin de semana pasado el senador Gómez de por "superada" a la Concertación. La tesis del "Frente Amplio" la levantó el Partido Comunista en plena dictadura. Su rechazo por parte de la DC fue la clave del éxito en la lucha

190. *El Mercurio*, 25 de enero 2011.

> contra aquella, al imponerse la tesis de la oposición no comunista basada en la movilización social, política y electoral, frente a la tesis de todos los métodos de lucha, incluidos los militares y paramilitares, promovida en ese entonces por el PC. El resto de la historia es bien conocido: durante 20 años la Concertación estuvo en el gobierno y el PC en la oposición. ¿Por qué? Por las profundas diferencias que teníamos y que tenemos con dicho partido.[191]

Esa crisis interna tuvo efectos políticos externos, tanto así que la encuesta CEP diciembre le dio a la Concertación un 24% de respaldo, casi la mitad de lo logrado por la Coalición por el Cambio.

Así, la oposición en el Congreso se vio permanentemente fracturada, como en los casos anteriores, agregándose diferencias frente a la interpelación a la ministra de Vivienda, la comisión investigadora sobre relaves mineros[192] y la comisión investigadora sobre la injerencia presidencial en las elecciones de la ANFP.

La insuperada crisis orgánica de la Concertación determinó que las acciones compartidas se limitaran a la defensa del Gobierno Bachelet y la obra concertacionista de los últimos veinte años. En este marco los ex ministros de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, Sergio Bitar y Alvaro Erazo, lanzaron una página web, http://www.concerta2.com (de corta duración), cuyo objetivo era defender las obras de los gobiernos concertacionistas y crear una red de más de cinco mil ex funcionarios públicos.

Otra iniciativa implementada en el período fue el cónclave opositor organizado en Reñaca por ProyectAmérica, donde se acordó potenciar nuevas figuras y liderazgos de la Concertación[193]. Si bien la continuidad generacional era clave para el fortalecimiento opositor, el mero recambio no era suficiente para repotenciarlo, toda vez que los temas de fondo no habían sido superados. Aun cuando la ausencia de los viejos dirigentes podría haber facilitado las cosas, el alineamiento político concertacionista no pasaba principalmente por el tema generacional.

A pesar de las tensiones y diferencias internas, a comienzos de febrero de 2011, representantes de los partidos concertacionistas llegaron a un preacuerdo, a ser ratificado por las dirigencias partidarias en marzo, para la nominación de un solo candidato a alcalde que los representara en las elecciones municipales de 2012 en cada comuna del país, privilegiando el criterio de la elegibilidad. Igualmente, acordaron evaluar las posibilidades de un pacto con el PC, el PRI y el PRO, así como

191. *La Tercera*, 1 de febrero 2011.

192. A fines de octubre, por una falta de quórum, se frustró la creación de la comisión investigadora sobre relaves mineros. La conformación de la instancia legislativa la habían solicitado 48 parlamentarios de oposición, y su aprobación requería ese mismo número de votos. Solo se consiguieron 26 sufragios a favor contra seis en contra y nueve abstenciones.

193. *El Mercurio*, 30 de octubre 2010.

la realización de un catastro para definir en qué lugares el candidato se debería designar vía primarias y en cuáles por métodos complementarios, como encuestas de opinión o asambleas comunales[194].

Tratando de superar su desvinculación con las bases concertacionistas, con ocasión de la conmemoración del terremoto, los cuatro presidentes de los partidos de la Concertación visitaron Concepción, Dichato, Chiguayante, Tomé y Talcahuano, restándose de las actividades organizadas por el Gobierno y participando en la "Marcha por la Reconstrucción" en Concepción.



A fines de diciembre de 2010, en la cuenta pública en La Moneda —a la que dirigentes opositores no asistieron por encontrar que ese recuento se debía realizar en el Congreso— el Presidente afirmó que las metas de su Gobierno eran "ambiciosas pero alcanzables", ocasión en la que enunció siete reformas estructurales que su Gobierno impulsaría en 2011[195]. Estas fueron las de Educación; Salud: reforma al sistema de Isapres, reducción a cero de las listas de espera AUGE, reforma al sistema de licencias médicas, acreditación de hospitales públicos para asegurar su calidad, exención del 7% de cotización a pensionados y lanzamiento del Programa "Elige Vivir Sano"; Pobreza: creación del Ministerio de Desarrollo Social, implementación del Ingreso Ético Familiar, mejora a la Ficha de Protección Social, aumentar la frecuencia en los cálculos de la pobreza y mejorar la forma cómo se mide incorporando aspectos de multidimensionalidad; Seguridad: nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creación del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, reformular el sistema de construcción de cárceles, lanzamiento de la Política Nacional de Atención a Víctimas, diez mil nuevos carabineros en las calles; Modernización del Estado: creación para cada chileno de una clave para acceder a los servicios del Estado, implementar la Licencia Médica Electrónica y la Plataforma Digital de Servicios y Trámites; Profundización de la democracia: aprobar los proyectos de inscripción automática, voto voluntario y voto de chilenos en el extranjero, plebiscitos comunales, declaración de intereses y patrimonio, fideicomiso ciego, reforma a los partidos y primarias; y Energía y Medio Ambiente: nueva institucionalidad

No obstante, a fines de febrero de 2011 solo se anunciaron cinco principales: 1. creación del Ministerio de Desarrollo Social, el que reemplazará a MIDEPLAN, e implantación del Ingreso Ético Familiar; 2. eliminación gradual del 7% que cotizan los jubilados en salud; 3. postnatal de seis meses; 4. aseguramiento de la calidad

194. *El Mercurio*, 5 de febrero 2011.

195. Tribunales Ambientales, proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, nuevas normas de emisiones de termoeléctricas y reestructuración de la CChEN.

de la educación y subvención escolar; 5. modernización del Estado: con dos iniciativas: a) mecanismos para evitar conflictos de interés en la administración pública y b) reformas al sistema de la Alta Dirección Pública[196].

Esas iniciativas, que tendrían al Congreso como escenario principal, le exigieron al Presidente implementar alguna fórmula política que lo revigorizara so pena de enfrentar un veredicto ciudadano aun más negativo y mayores reveses en su gestión.

---

196. *El Mercurio*, 21 de febrero 2011.

CAPÍTULO 6

TOCANDO FONDO
Protesta ciudadana y desconcierto gubernamental

"Esta democracia le quedó chica al país"[1], afirmó ante la comisión de educación del Senado Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH, resumiendo los objetivos de la movilización estudiantil, la que se extendió a amplios sectores sociales y puso en jaque, no solo al Gobierno, sino a toda la institucionalidad política, económica y social.

La apreciación de una profunda crisis nacional encontró eco en los más diversos sectores. Desde el empresariado, la creciente incapacidad de conducción del Ejecutivo provocó en el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, Ronald Bown, una angustiada reflexión frente a los acontecimientos nacionales:

> Los cimientos de nuestra institucionalidad se van derrumbando día a día, producto de la falta de capacidad del país para poder abordar las soluciones requeridas ante las demandas que se han generado como consecuencia de la falta de visión que hemos tenido al crear sistemas, como el educacional, por ejemplo, sin una perspectiva de sustentación apropiada y sin haber sabido interpretar, desde ya hace varios años, los mensajes de una ciudadanía afectada clamando correcciones.[2]

Días más tarde, el ex presidente Lagos coincidía afirmando que la "institucionalidad ha llegado a su fin. La imposibilidad de tener expresión de la ciudadanía, y que siente que a través de un sistema institucional como el que tenemos, comenzando por el sistema electoral que no da adecuada representación a todos los ciudadanos, sienten que no pueden participar"[3]. Más tarde, propuso en la CEPAL un pacto social consistente en un cambio del sistema electoral, una reforma tributaria y el término del Estado subsidiario. En la misma línea desde el exterior, el ex Presidente Frei

---

1. Francisco Figueroa, Intervención del vicepresidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), en la sesión de la Comisión de Educación del Senado, debatiendo el proyecto de ley de fin del lucro en la educación. 16 de agosto 2011.
2. Ronald Bown, "¡Cómo me duele mi país!", *El Mercurio*, 7 de agosto 2011.
3. *La Tercera*, 11 de agosto 2011.

sentenciaba que "Piñera concibe al gobierno como una empresa; reemplaza ministros cada semana; habla por televisión y cambia de opinión tres o cuatro veces al día y, fundamentalmente, actúa con muy poca transparencia. Chile está al borde de la ingobernabilidad"[4].

Un breve análisis de los movimientos estudiantiles en el país[5], que se remonta a la creación de la FECH en 1906, muestra su larga trayectoria en pro de la paz, la justicia social, la equidad, la libertad y la democracia[6], mostrando ser, más allá de los temas educacionales, el portavoz de una sociedad que demanda cambios sustanciales al orden imperante. En la crisis evidenciada en 2011, pero larvada durante dos décadas, el movimiento liderado por la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, volvió a hacerse cargo de la demanda ciudadana por un cambio estructural en el país, apuntando a los tres pilares del actual sistema político-económico: la economía de mercado, la representación política y el Estado subsidiario.

La exigencia de los estudiantes de una nueva economía estalló en un período de excepcional crecimiento económico, mostrando raíces más profundas que el descontento de una clase media endeudada que no recibía suficiente apoyo del Estado. El fin del lucro y la educación gratis y de calidad cuestionaron la piedra angular de la economía de mercado, la que terminó por quedar desacreditada por la búsqueda sin límites de nuevos focos de renta y lucro privados por parte de los grupos económicos, la composición de los miembros del primer Gabinete del Presidente Piñera —todos ellos vinculados a los diez más poderosos conglomerados del país— y los permanentes conflictos de interés iniciados por el propio candidato de la Alianza, antes y después de asumir la presidencia. La aspiración estudiantil de una nueva economía fue una reacción ante la profundización del control oligárquico observado en el país tras el triunfo de Piñera[7].

Por su parte, el sistema de representación política fue impugnado a fondo por la demanda de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional, nuevos quórum para reformas constitucionales y limitaciones al hiperpresidencialismo. En el fondo de

---

4. *La Nación* (Argentina), 6 de agosto 2011.
5. Jaksic, I., Nazario, S., "Chile", en Altbach, P.G., *Student Political Activism: An International Reference Handbook*, Connecticut: Greenwood Press, 1989.
6. Desde 1906 los estudiantes se han pronunciado a favor de estos valores en la lucha por la paz, en 1920, contra la dictadura de Ibáñez, en 1931, y su política antipopular, en 1957, por reformas democráticas, en 1967, contra la dictadura en los ochenta, por la reforma educacional en 2006.
7. "Un crecimiento desde los $437 mil hasta los $494 mil registró el ingreso imponible promedio real de los trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones (4,4 millones de personas), entre junio de 2006 y junio 2011, crecieron 13,1%, y en los últimos doce meses, el alza real promedio de ingresos de los cotizantes subió 2,6%. La principal razón del incremento provino del grupo de trabajadores con sueldos de $1.050.000 o más, los que aumentaron un 121%", *El Mercurio*, 23 de agosto 2011.

esas exigencias se encontraba la masiva demanda ciudadana por la recuperación de su soberanía, la que un sistema ilegítimo le había arrebatado.

La *Constitución Política de la Republica de Chile*[8], en su Artículo 5º, señala que "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece". Era, por tanto, la Nación que se había rebelado frente a la imposibilidad de elegir sin limitaciones a sus autoridades, por las cortapisas al genuino ejercicio de las funciones de sus representantes y por no poder utilizar los mecanismos constitucionales establecidos para ejercer plenamente su soberanía.

Finalmente, el movimiento estudiantil ampliado exigió la superación del Estado subsidiario y su reemplazo por uno con injerencia en el diseño del futuro de la economía del país, capaz de asegurar que la educación gratuita y de calidad fuera un derecho universal exigible, tal como en la década anterior fueron establecidos los de salud y previsión social. La erosión permanente de ese tipo de derechos vía políticas de bonos, subsidios y otros mecanismos que debilitaban al sector público de provisión de servicios en beneficio del privado, no pasó desapercibida a los estudiantes, por lo que demandaron que lo avanzado no volviera atrás y que el rol del Estado fuera sustancialmente modificado.

Frente a esa "crisis orgánica", el movimiento estudiantil se convirtió en el portavoz y líder de una profunda inconformidad nacional, multiclasista e intergeneracional, la que terminó por mover el centro político y sus apoyos sociales hacia la izquierda.

1. La "crisis orgánica"

La crisis del Estado y de las relaciones entre este, la sociedad y el mercado, que se arrastró y fue creciendo gradualmente durante los gobiernos concertacionistas, fue percutada y establecida como prioridad nacional debido al desplome, en la conciencia ciudadana, de cada uno de los pilares estratégicos del Gobierno del Presidente Piñera. En ese contexto, cada nuevo elemento de crisis y conflicto adquirió una valencia mayor a la que habría tenido en otro marco político.

En 2011 se evidenció una crisis profunda de las instituciones nacionales: el Ejecutivo y el Congreso mostraron los niveles más bajos de apoyo ciudadano[9], e importantes autoridades gubernamentales cuestionadas por su conducta administrativa

8. Véase http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
9. Véase http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/07__evgob_jul__02011.pdf; http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4709.html

debieron renunciar (van Rysselberghe[10]); instituciones estatales no representativas se imponían por sobre la soberanía popular (Tribunal Constitucional); el principio republicano de separación de poderes era cuestionado de hecho (nombramientos de parlamentarios en puestos ministeriales; sistema ilegítimo de reemplazo de parlamentarios; miembros de la Fiscalía al Ministerio del Interior); se evidenciaban profundas fracturas ideológicas (Acuerdo de Vida en Común vs Acuerdo de Vida en Pareja, UDI-RN-Gobierno; Rubilar y el aborto terapéutico) y políticas en la Alianza gobiernista (apoyo UDI a movimiento de agricultores); las instituciones armadas daban muestras de falta de transparencia en sus procedimientos de aprovisionamiento (juicios por corrupción); las instituciones de orden se eran afectadas por falta de probidad de sus miembros (connivencia con delincuentes) y uso excesivo de la fuerza (manifestaciones estudiantiles); el sistema de regulaciones dañaba a los consumidores de menor poder adquisitivo (La Polar) y el generalizado rechazo al lucro en la educación puso en cuestión el sistema de mercado imperante, así como el rol subsidiario del Estado. En la oposición se proponía el fin de la Concertación, la que mostraba permanentes disensos internos en torno a temas claves (elecciones municipales, ley de educación, *royalty* minero, plebiscito por educación).

En esas condiciones, las dificultades del Ejecutivo para mantener su diseño estratégico original permitieron que todas estas tensiones se fusionaran, creándose una situación de crisis que fue creciendo y complicándose.

2. No es la técnica, es la política

Frente a las dificultades de la gestión gubernamental, y como respuesta a la crítica del senador Hernán Larraín ("la falta de coalición estructurada no ha permitido que tengamos un trabajo más sólido"[11]), la foto del Gabinete con los dirigentes de la Alianza en el día del primer aniversario graficó la nueva puesta en escena del Ejecutivo: buena relación entre los partidos de la Alianza y acuerdos con la oposición. Disposición que se repitió en la reunión del 21 de abril de 2011 en Cerro Castillo, con la concurrencia de los ministros políticos, los presidentes de RN y UDI, y los jefes y subjefes de las bancadas de la Cámara y del Senado. La institucionalización

---

10. Acusación constitucional: los parlamentarios establecieron que la acusación se basaba en que van Rysselberghe mintió "deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, al informarles a sabiendas de la falsedad, que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado oficialmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y con los recursos asignados para ello", para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado. Finalmente, el 3 de abril la intendenta se vio obligada a renunciar y la oposición desistió de la acusación. Véase El *Diario Financiero*, 5 de marzo 2011; y *Cambio 21*, 3 de abril 2011.
11. *La Tercera*, 20 de marzo 2011.

del diálogo se formalizó en las reuniones de coordinación periódica, agendándose encuentros con la UDI (2 de mayo) y RN en mayo[12].

El tema del "relato" pasó, sin resolverse, a segundo plano, y el propio Presidente mostró su irritación confesando que "el famoso relato, esa discusión me tiene hasta… (…) lo que queremos es tener una sociedad en el que todos se sientan seguros de andar en las calles, de poder enfermarse y saber que no estarán solos y que tendrán oportunidades de trabajo y de educación para sus hijos"[13]. Ese "relato" por defecto, sustituyó el inenarrable diseño de incrementar los niveles de maximización de ganancias, privatización del Estado y control oligárquico. Por esas razones, el ministro Larroulet, respondiendo a las críticas de Pablo Longueira, trataba de organizar un discurso presentable: "El relato es que este gobierno está dando las oportunidades que ningún otro dio (…) descansa en tres ejes. Uno es crear una sociedad de oportunidades para todos; dos, de seguridades donde haya un mínimo nivel de seguridad ante una eventualidad y, en tercer lugar, una sociedad de valores en la que se defienda el futuro"[14]. Avanzando en esa línea, en Cerro Castillo se definieron tres ejes programáticos: valores, oportunidades y seguridad.

Tras la reunión del 7 de junio en La Moneda, se acordó con RN y la UDI un nuevo modelo de trabajo del equipo político, una mayor asistencia de los ministros al Congreso, una relación más directa con los partidos, consensuar los proyectos de ley entre el Ejecutivo y el Congreso y terminar con la "letra chica". Sin embargo, el problema de fondo no era la mera coordinación Ejecutivo-Alianza-Congreso. Detrás estaba la decisión de la UDI, perjudicada y preocupada por la mala evaluación gubernamental, de tomar mayor control del Gobierno, limitando las veleidades populistas del Ejecutivo y posicionándose en vista de las elecciones municipales y, posteriormente, las parlamentarias y la presidencial. Por esas razones las críticas de la UDI arreciaron y el senador Hernán Larraín advertía a Piñera que "si no hace ahora los cambios, el próximo año puede ser muy tarde", agregando que a su juicio "el gobierno no ha sabido escuchar a su gente"[15], representándole al Presidente que el éxito de la UDI no era entendible sin el éxito del Gobierno, por lo que se necesitaban instancias constantes de conversación entre el Ejecutivo y la mesa partidaria[16].

Por su parte, el senador Jovino Novoa descartaba que el problema del Gobierno fuera uno de comunicación, estableciendo que se trataba fundamentalmente de conducción, apreciación apoyada en parte por RN cuando el alcalde de Puente Alto

12. *El Mercurio*, 22 de abril 2011.
13. *El Mercurio*, 18 de abril 2011
14. Véase http://www.clarin.com/politica/inflacion-mala-punto-vista-democratico_0_466153432.html
15. *La Tercera*, 3 de junio 2011.
16. *El Mercurio*, 24 de junio 2011.

y vicepresidente del partido, Manuel José Ossandón, predecía que "esto está demostrando que vamos a perder el gobierno en dos años más", ya que "claramente, el gobierno de excelencia ha tenido problemas"[17].

Si bien el Presidente aceptó el haber "cometido errores" y que "ha habido descoordinaciones", defendió los "aciertos" de su Gobierno, poniendo énfasis en los avances económicos. Finalmente, optó por no hacer cambio de Gabinete, exigiendo al ministro del Interior reforzar la coordinación del mismo.

La negación presidencial de problemas más de fondo acumulados en el año y medio de gestión, más que postergar la crisis, la adelantó poniendo en cuestión los principales aspectos de su apuesta estratégica.

3. Flaquean los pilares estratégicos

En los capítulos previos estimábamos que el Gobierno del Presidente Piñera no tenía un "relato", pero afirmábamos que sí tenía una estrategia política de hecho. A esta la caracterizamos como la de un *presidencialismo plebiscitario*, técnico y eficientista, suprapartidario, orientado a reordenar el perfil de las alianzas políticas de la derecha, al tiempo que maximizaba focos de lucro y renta privados. Es en este período que cada uno de estos pilares terminó por desplomarse, quedando un gobierno a la deriva sin claridad acerca de cómo enfrentar las manifestaciones de protesta.

a) Una opinión pública desfavorable

La piedra angular de la estrategia piñerista era mantener y —por qué no— subir el nivel de apoyo alcanzado con el rescate de los mineros (63%), lo que le habría permitido consolidar sus otras orientaciones de largo plazo. Sin embargo, el apoyo, que ya le había sido adverso en marzo (42%), se derrumbó al 27% en agosto, subiendo su rechazo al 68%. Este proceso de rápida erosión del apoyo popular se manifestó dramáticamente en la encuesta CEP del 4 de agosto, la que entregó la peor evaluación a un presidente en veinte años: 26% de aprobación y un 53% de desaprobación. En esta evaluación indudablemente influyó el hecho de que, por primera vez desde la vuelta de la democracia, el Juramento de la Bandera del 10 de julio se realizó sin la presencia del Presidente de la República, quien se quedó en México a ver un partido de fútbol. El diputado Patricio Hales expresó que el Presidente "no comprende sus funciones de Estado". El acto fue presidido por el

---

17. Ibíd. Por su parte el presidente de RN, Carlos Larraín, tratando de bajar el perfil al problema, indicaba que se estaba pagando el precio por HidroAysén, criticando que "Hay como una ansiedad por hacer muchas cosas al mismo tiempo".

ministro de Defensa, Andrés Allamand, que era el vicepresidente de la República, dado que el ministro del Interior estaba de vacaciones en Punta Cana.

Estos resultados agitaron la fronda gubernamental. La UDI cuestionó al ministro Hinzpeter por los resultados, y círculos RN, errando el bulto al acusar problemas de comunicación, pidieron la salida de la ministra von Baer de la Secretaría General de Gobierno[18]. En ese contexto, Blanca Arthur descarnadamente dictaminaba que

> está instalada la sensación de que el presidente no genera confianza ni es creíble —de hecho son sus peores atributos— básicamente por las excesivas expectativas que ha generado con bullados anuncios en temas sensibles, sin que éstos respondan a lo que prometen. Fue, sin ir más lejos, lo que ocurrió a fines de 2010 cuando calificó como "revolucionaria" la propuesta para mejorar la calidad de la educación, que, finalmente, consistía en medidas importantes como los cambios al estatuto docente, pero que no abordaban, por ejemplo, el problema de la municipalización. Es la actitud que el presidente repite cuando habla de grandes transformaciones estructurales en siete áreas, sin que éstas se conozcan, o cuando planteó como una gran "agenda social" el aumento del post natal o la reducción del 7% a los jubilados, que al fin no beneficiaban a todos quienes se suponía.[19]

Descalibrada de esta forma la piedra angular de la estrategia piñerista, sus otros componentes sufrieron un efecto dominó.

b) La "nueva derecha" hace agua

Producto de ese revés estratégico, el carácter supra partidario que le había tratado de imprimir el Presidente a su Gobierno se desfondó y resurgió la profunda fisura RN/UDI. Por una parte, la directiva RN impulsó un cambio de Gabinete que ampliara el arco político gubernamental y superara la minoría parlamentaria, proponiendo el ingreso del PRI y del Partido Radical al Gabinete con tres o cuatro representantes de ambos partidos[20]. Paralelamente, a comienzos de junio en la UDI se produjo el llamado golpe blanco, entrando en su directiva cuatro ex

---

18. "Seis diputados de Renovación Nacional decidieron analizar seriamente apoyar la acusación constitucional que presentó la oposición en contra de la intendenta del Bío Bío, Jacqueline van Rysselberghe, texto que se presentó el jueves pasado. A tanto llegó la molestia de parte de la UDI, partido en el que milita la ex alcaldesa de Concepción, que el diputado Gustavo Hasbún señaló que si los parlamentarios de RN votan a favor del líbelo acusatorio en el Congreso, lo más probable es que se termina la Coalición por el Cambio", véase *Cambio 21*, 28 de marzo 2011.
19. *Diario Financiero*, 9 de julio 2011.
20. *El Mercurio*, 30 de junio 2011.

presidentes del partido (Pablo Longueira, Hernán Larraín, Jovino Novoa y Julio Dittborn), en medio de una fuerte autocrítica por la falta de protagonismo del partido en el Gobierno.

Ante estas presiones, el Presidente se vio forzado a un segundo cambio de Gabinete. El 18 de julio realizó el cambio esperado, manteniendo al titular de Interior e incorporando a Andrés Chadwick en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, llevó a Lavín a MIDEPLAN, trasladó a Bulnes de Justicia a Educación, nombró a Teodoro Ribera en Justicia, a de Solminihac lo cambió de Obras Públicas a Minería —en un enroque con el ministro Golborne—, a Pablo Longueira lo nombró en Economía y en Energía al intendente de Santiago, Fernando Echeverría, renunciado a los pocos días por conflicto de intereses.

Ese desprolijo cambio de Gabinete mostró las limitadas capacidades y reducido personal político de la derecha y del piñerismo. Y la decisión de acallar las críticas desde la propia Alianza cooptando a su portavoz más conspicuo (Longueira), incorporando a políticos con experiencia y aumentando la presencia de la UDI, dio por cancelada la estrategia técnico-eficientista, limitando la propia capacidad de acción del Presidente.

c) La insegura seguridad ciudadana

El tercer vértice de la estrategia gubernamental fue administrar eficientemente el país y, en particular, reducir y controlar la delincuencia. Sin embargo, la eficiencia gubernamental mostró sus límites en la gestión de la reconstrucción post-terremoto y en el nunca bien reparado Transantiago.

Pero la peor nota la obtuvo en el área más sensible para la derecha: la seguridad ciudadana. Así, los datos para la Región Metropolitana del mes de mayo de 2011 mostraron que los asaltos habían subido un 27% frente al mismo mes de 2010, y los delitos un 13%[21]. Para el segundo trimestre los delitos de mayor connotación social aumentaron 10,8% y subieron los asaltos, lanzazos y hurtos. De acuerdo al Índice Paz Ciudadana-Adimark, la victimización por robo subió en junio rompiendo la tendencia a la baja de los últimos cuatro años, llegando al 37,9%, casi cinco puntos más que en diciembre de 2010. De igual forma, crecieron el alto temor y la revictimización, ante lo cual especialistas pidieron evaluar los programas de seguridad[22].

Intentando balancear el déficit, el Ejecutivo se planteó con mano dura frente a las manifestaciones sociales al punto que Amnistía Internacional criticó las reacciones "cada vez más duras" contra las protestas en Chile, la CUT estampó una denuncia criminal "por desorbitada e indiscriminada violencia policial" y el

---

21. Ibíd.
22. *El Mercurio*, 20 de julio 2011.

Vicario General de Aysén condenó irrupción de Carabineros en la Catedral de Coyhaique cuando un grupo de jóvenes ingresó en el templo para resguardarse del carro lanzaaguas. Ante estas críticas el ministro del Interior anunció la eliminación del uso de bombas lacrimógenas, las que se volvieron a usar contra manifestantes desde el 21 de mayo en adelante. Continuando con su apoyo irrestricto a las policías, Hinzpeter llegó a afirmar que "asesinar a un policía, aunque suene duro, es más grave que asesinar a un ciudadano común y corriente en el orden de sociedad en que nosotros nos hemos dado"[23]. De la misma forma, el Presidente criticó al juez que dejó en libertad a Francisco Javier Moreno Orellana, quien agredió a un carabinero con una bomba molotov, lo que motivó una fuerte respuesta de la Asociación de Magistrados considerando graves las críticas de Piñera.

En ese contexto, las relaciones civiles-policiales enfrentaron nuevos problemas cuando los diputados de la Concertación y del Partido Comunista, miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, solicitaron al general director de Carabineros pedir la renuncia al jefe de la inteligencia policial (DIPOLCAR), Bruno Villalobos, por la crítica a la labor de los parlamentarios de esa comisión al señalar que dieron "vitrina" para difundir información "de baja calaña", dada la denuncia del diputado Hugo Gutiérrez (PC) de intervención de su celular[24]. Por su parte, la Corte ordenó retirar del sitio de Internet, Panoramas News, información sobre aspectos de la vida privada del Director General de Carabineros, Eduardo Gordon, en la cual se aludía al pago de arriendo de una costosa casa-habitación, entre otras revelaciones[25].

Sin embargo, los problemas de Gordon continuaron cuando CIPER denunció que el Director General habría ordenado cambiar un parte policial para beneficiar a su hijo, por lo que el Gobierno le dio un plazo de 24 horas para aclarar la denuncia. El subdirector de la institución respaldó al jefe policial y negó su participación en los hechos[26]. No obstante, al día siguiente Gordon presentó su renuncia al cargo, con lo que el ministro del Interior quedó en una posición privilegiada para una cirugía a fondo del alto mando institucional. Sin embargo, el Presidente nombró al General Director Subrogante, General Inspector Gustavo A. González Jure, como reemplazante de Gordon, el mismo que defendió a Gordon de las acusaciones.

---

23. A esta denuncia se sumaron otras relativas a la entrega de viviendas a la empleada doméstica de la mamá de la Intendenta del Bío Bío. La Intendenta Jacqueline van Rysselberghe fue la que autorizó en definitiva la plantación de marihuana en Los Ángeles, Región del Bío Bío. *Cambio21* da a conocer el oficio ordinario 1.474 firmado por la cuestionada autoridad dirigido a Carabineros, Investigaciones y al Director del SAG. Véase *Cambio 21*, 25 de marzo 2011.
24. *La Nación*, 1 de agosto 2011
25. Véase http://www.pnews.cl/2011/07/30/director-general-de-carabineros-eduardo-gordon-vive-en-un-inmueble-de-mil-millones-pagando-32-mil-457-pesos-de-arriendo/
26. *La Tercera*, 2 de septiembre 2011.

Como colofón a esta fracasada política de orden público, el alcalde de Santiago consideró que si las manifestaciones estudiantiles continuaban, sería factible sacar las FF.AA. a las calles el 11 de septiembre[27]. La respuesta del ministro de Defensa no se dejó esperar aclarando que "el orden público se garantiza a través de la acción de Carabineros", descartando la opción de recurrir a las Fuerzas Armadas[28]. La incapacidad de imponer orden público a través de una adecuada y controlada acción profesional de las policías generó desconcierto en las filas gobiernistas, apareciendo en este contexto sus convicciones autoritarias más profundas.

Los efectos del clima represivo, autoritario y de uso desproporcionado de la fuerza tuvo como trágica consecuencia la muerte del joven Manuel Gutiérrez, por lo que el ministro Hinzpeter pidió la dimisión de Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana, y confirmó la salida de otros cuatro uniformados. Por su parte, el General Director, Eduardo Gordon, destituyó a otros tres oficiales, llegando a nueve las exoneraciones. El ex carabinero acusado de balear al menor en Macul aseguró que otros funcionarios también dispararon en el operativo.

En ese contexto los ex presidentes de la FECH pidieron al Gobierno terminar con la "institucionalización de la violencia" y el PS exigió que el ministro del Interior asumiera responsabilidad política y renunciara por la muerte del estudiante.

Dado el apoyo al Gobierno proporcionado por diputados PRI e independientes, y la ausencia de algunos concertacionistas, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter por su "responsabilidad política" en el nivel de represión de las manifestaciones ciudadanas.

d) Las privatizaciones continúan

El cuarto eje estratégico del Ejecutivo, la privatización de activos estatales aumentando los focos de lucro y rentabilidad privados, continuó avanzando. Así, se privatizó el agua de la Región Metropolitana, al vender el Estado en US$ 984 millones el 30% de su participación en Aguas Andinas. Sin embargo, tal política enfrentó serias dificultades, como durante el proceso de intento del ingreso de privados a la filial de CODELCO, "Gaby". El nuevo ministro, Hernán de Solminihac, admitió que ese tema estaba en evaluación, contradiciendo las versiones entregadas por el

27. "Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas". Véase *El Mostrador*, 14 de agosto 2011.
28. *La Tercera*, 15 de agosto 2011.

ex ministro Golborne. Ese cambio de política fue generado por la movilización de los trabajadores del cobre, quienes denunciaron el intento, a través de esa fórmula, de privatizar CODELCO[29].

Frente a la errática acción gubernamental, el sector empresarial no dejó de manifestar su molestia, confesando Jorge Errázuriz, socio de Celfin, que "los grupos fácticos [sic] se sienten huérfanos del poder, porque su capacidad de influencia es mucho menor"[30]. Y de acuerdo al *Diario Financiero*, "la agenda social y laboral del gobierno, se ha convertido en tema de profundo análisis por parte de la cúpula de los empresarios. Al interior de la CPC afirman que se le han hecho saber las aprensiones sobre temas como el multirut y el post natal. En tanto, desde el comercio se ve con preocupación como la autoridad cede ante los grupos de presión"[31].

Quizás como respuesta a estas inquietudes, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, anunció el envío de un proyecto que modificaría la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acotando el proceso de aprobación de los proyectos por parte de la direcciones de obras municipales a un mes y creando un registro público de profesionales —contrapartes técnicas privadas— que revisarían los proyectos[32], lo que llevó a preguntarse acerca de los efectos que sobre la calidad de los proyectos tendrá ese proyecto de ley.

4. Eppur si muove

De acuerdo a Carlos Peña, "Piñera es el primer Presidente nihilista: no tiene convicciones que orienten su voluntad. Tiene apetencias, anhelos de reconocimiento, deseos de aplauso, pero convicciones no tiene"[33]. Este descarnado diagnóstico centrado en las características personales del Presidente, que podría tener visos de realidad, no permitía ver con claridad lo que su Gobierno tenía claro, no a nivel de "relato", sino en su acción práctica. Desde esa perspectiva se podía apreciar que, a pesar de los problemas antes señalados, el Ejecutivo se estaba orientado por ciertos criterios de fondo.

a) Enfatizando el componente "popular"

Junto al cambio de Gabinete, el Ejecutivo quiso enfatizar una línea que ya había estado subrayada en su gestión, tal era la defensa de los consumidores. Con

29. *Diario Red Digital*, 12 de julio 2011.
30. *El Mostrador*, 11 de agosto 2011.
31. *Diario Financiero*, 20 de septiembre 2011.
32. *El Mercurio*, 19 de septiembre 2011.
33. *El Mercurio*, 31 de julio 2011.

la entrada de Pablo Longueira a Economía este elemento marcó la agenda por algunas semanas.

La primera acción del nuevo ministro fue anunciar una demanda colectiva del SERNAC contra Presto argumentando que "es inaceptable que exista gente honesta en Chile que figura en el Dicom. No lo queremos"[34], y respondió duramente al gerente de asuntos corporativos de Walmart, Claudio Hohmann (ex ministro del Presidente Frei), por defender el derecho de la firma de *retail* a mantener a sus deudores morosos en el boletín comercial. Presto terminó eliminando a 11.700 deudores del boletín comercial.

Continuando con esa política, a fines de agosto el SERNAC denunció a los bancos Santander, Banco de Chile, Scotiabank, Ripley, Falabella y Paris por no entregar información veraz a los consumidores sobre el costo final de un crédito y cobrar por seguros que no contrataron. Malas prácticas que incluían no entregar información del valor final del crédito y publicitar productos crediticios con costo cero. Y evaluó acciones contra las divisiones de crédito de tales bancos por una eventual discriminación arbitraria, ya que un mismo cliente era tratado en forma distinta si pedía el crédito en el Banco o en su división de consumo, donde incluso se le llegaba a cobrar el doble de intereses. Esa práctica explicaba el incremento de los beneficios netos de la banca en un 4,12 % respecto al mismo período de 2010[35]. En la misma dirección, la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación a los grandes proveedores de los supermercados por posible abuso de posición dominante, atentando contra la libre competencia[36].

Una segunda aparición pública del nuevo ministro fue favoreciendo el aumento de tributos, asegurando que si no se resolvía bien el conflicto estudiantil, los estallidos sociales se repetirían con más fuerza en un año o dos. El vocero, Andrés Chadwick, descartó una posible reforma tributaria asegurando que el programa de Gobierno estaba totalmente financiado. Por su parte, los empresarios se opusieron a cualquier alza tributaria. Si bien Jorge Awad (ABIF) dejó abierta la puerta, Carlos Jorquiera (CNC) y Lorenzo Constant (CPC) la rechazaron. Estas desinteligencias llevaron al ministro de Economía a anunciar tres nuevas mesas de trabajo en las que participaría la CPC, y a aclarar que esa era su "posición personal" en el tema tributario, pero quien decidía era el Presidente.

En todo caso, preocupado de la intranquilidad social, Longueira anunció $4.900 millones para el sector pesquero artesanal durante 2011 para programas regionales y financiamiento de proyectos productivos, y el Presidente formalizó nuevos subsidios

34. *El Mostrador*, 20 de julio 2011.
35. "La banca chilena obtuvo entre enero y julio de este año beneficios netos por 1.046.311 millones de pesos (unos 2.226,19 millones de dólares), un 4,12 % más que en igual período de 2010, informaron fuentes oficiales", véase *El Mercurio*, 2 de septiembre 2011.
36. *Diario Financiero*, 31 de agosto 2011.

para viviendas de entre UF 600 y UF 2.000 que beneficiarían a la clase media. En esta misma línea, la bancada de diputados de RN presentó sus "Propuestas en defensa de los consumidores, oportunidades para la clase media y reformas políticas", durante la reunión que sostuvieron el lunes 18 de julio en La Moneda. Con todo, al poco andar la cuestionada gestión de Longueira no logró remontar la gestión gubernamental, la que seguía atada a la movilización estudiantil ampliada.

A pesar de estos desencuentros intra-Gabinete, Longueira logró sacar adelante la rebaja de la tasa máxima de interés "como una forma de ayudar a la defensa de los derechos de los consumidores"[37], por lo que a comienzos de septiembre el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que la rebajaba del 50% al 45,4%, pudiendo llegar al 36% en los siguientes meses. Igualmente, en ese mismo período el SERNAC detectó cláusulas abusivas en contratos de cajas de compensación y firmas de telecomunicaciones, exigiendo ajustarlos, dando por terminado el monitoreo de los tres mercados en los cuales se concentraban los reclamos de los consumidores, incluyendo la industria financiera y el *retail*[38] .

Con todo, esta defensa de los consumidores, si bien respondió a una necesidad de empatizar con parte de la ciudadanía y proteger un bien público, al mismo tiempo continuó sumando evidencias sobre las malas prácticas empresariales convertidas en rutina institucional, lo que contribuyó a aumentar el desprestigio del sistema de mercado imperante. Este retahíla de escándalos se reflejó claramente en el Ranking de Reputación Corporativa, el que en términos absolutos continuó su sostenida baja desde los 748 puntos (máximo de 1.000) en 2005, a los modestos 643 puntos en 2011[39].

Finalmente, continuando con el cumplimiento de algunas líneas programáticas, después de una larga negociación con la oposición, y en una reunión entre el Presidente y los diputados de la comisión de Trabajo, este anunció el aumento del tope de la cobertura del beneficio del postnatal, fijándolo en 66 UF. Igualmente, a fines de septiembre anunció el envío del proyecto de Ingreso Ético Familiar, un total máximo posible de $ 78.000 dirigido a complementar los ingresos de 170.000 familias más pobres, e integrado por dos componentes: seguridades o transferencias por dignidad, monto entregado por el solo hecho de vivir en situación de pobreza extrema; y oportunidades, transferencias condicionadas a metas en salud y educación y trabajo de la mujer.

b) Proponiendo reformas políticas parciales

Una de las acciones permanentes del Ejecutivo fue escabullir el cambio del sistema binominal por uno proporcional a través de reformas parciales. Una de las

37. *Diario Financiero*, 19 de agosto 2011.
38. *El Mercurio*, 26 de julio 2011.
39. Véase http://www.rankingdereputacion.cl/

propuestas fue "perfeccionar el sistema binominal" a través del reconocimiento de las fuerzas políticas que obtuvieran más del 5% de representación en las próximas elecciones y que no lograran obtener cupos en la Cámara.

Los parlamentarios de RN se sumaron a esas pseudoreformas, proponiendo un incremento del número de senadores (de 38 a 50, como históricamente había sido en la conformación del Congreso), aumentando en cinco o seis circunscripciones, con dos senadores cada una o sumando diez senadores de representación nacional, que se elegirían por subpactos a través de un sistema repartidor.

Otra propuesta fue el voto de los chilenos en el extranjero, el que finalmente se acordó con la oposición sin los condicionamientos originales (estadía previa en el país) y con solo la inscripción voluntaria en las embajadas y consulados respectivos.

La oposición valoró la ley de primarias voluntarias y vinculantes para definir candidaturas presidenciales, parlamentarias y de alcaldes[40]. El lunes 5 de septiembre de 2011 se envió el proyecto que institucionalizaba el mecanismo, garantizando el financiamiento del Estado[41]. Las primarias organizadas por el SERVEL, para elegir al candidato presidencial de los distintos bloques o partidos que optaran por este mecanismo, se realizarían "el primer domingo de julio del año en que corresponde elección de Presidente de la República". Ese día se desarrollarían también las primarias para candidaturas parlamentarias. De esa forma, las primarias presidenciales se realizarían el 7 de julio de 2013 y el candidato sería formalmente proclamado un mes antes de la inscripción ante el Servicio Electoral, cuatro meses antes de los comicios fijados para el tercer domingo de noviembre y una eventual segunda vuelta, cuatro domingos después.

Así, entre reformas parciales (primarias voluntarias), propuestas sustantivas modificadas por la oposición (voto de chilenos en el exterior), y cambios menores (fechas de las elecciones presidenciales), el Gobierno fue lentamente avanzando en su agenda de reformas políticas, empantanando la discusión de fondo sobre un real cambio del binominal.

Con todo, una reforma interesante fue la nueva normativa que permitiría a las comunas formar agrupaciones con personalidad jurídica y patrimonio propio, que las habilitaría para comprar bienes en conjunto y contratar personal calificado que trabajara para todas las municipalidades que formaran parte de esa asociación. La ley fortalecería la Asociación Chilena de Municipalidades que no tenía personalidad jurídica.[42] De igual forma, en la tercera semana de septiembre el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que establecía la elección directa de los consejeros regionales, y se comprometió a enviar las indicaciones al proyecto de ley que modificaba la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

40. *La Tercera*, 26 de julio 2011.
41. *La Tercera*, 16 de agosto 2011.
42. *El Mercurio*, 22 de junio 2011.

para dotar de mayores atribuciones al Gobierno regional en la implementación de planes y programas de desarrollo regional, coordinación de servicios públicos, fomento productivo, social y cultural; separar funciones entre el presidente del Consejo Regional y el intendente; crear la figura del administrador regional; y definir que el secretario ejecutivo del consejo y los jefes de división fueran elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

c) Avanzando la agenda

Aun cuando el Ejecutivo logró aprobar a mediados de agosto la reducción del 7% de las cotizaciones del 60% de los adultos mayores más vulnerables, muchas de las acciones gubernamentales se ubicaron bajo el radar del Legislativo, al ser fundamentalmente de resorte administrativo del Ejecutivo.

Un ejemplo de este tipo de acción orientada por criterios de mercado vía administrativa, fue el escándalo de la incorporación de publicidad de empresas en textos escolares para niños de 12 años, decisión que fue defendida por el entonces ministro Lavín con el argumento que eso permitiría a los niños aprender a "enfrentar la publicidad" por parte de empresas telefónicas, de bebidas, de *snack*, bancos, y carreteras que se disputaban el segmento infantil y adolescente. Frente a las reacciones provocadas por esa política, se informó que esta publicidad se eliminaría a partir de la próxima impresión de los libros.

Con mayor consistencia, en el anuncio de las cincuenta medidas procompetitividad, y bajo el paraguas de un apoyo a las PYME, se incluyeron otras tendientes a favorecer al sector financiero; acelerar las concesiones costeras y de acuicultura; privatización de propiedades fiscales; limitación a los estudios del impacto sobre sistema de transporte urbano solo a los proyectos de construcciones urbanas de mayor tamaño; traspaso de toda la responsabilidad de calificación ambiental, en el marco de la SEIA, a autoridades medioambientales; modificaciones regulatorias necesarias en la distribución de electricidad; nuevo reglamento menos exigente para el manejo de lodos agroindustriales, exención de IVA a turistas extranjeros en hoteles turísticos; y, no podía faltar, flexibilización de normas laborales,[43]

Con esa misma orientación, la Directora Nacional del Trabajo dictaminó que las asignaciones de movilización y colación "no deben incluirse en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y de años de servicio", reduciendo así en un porcentaje importante, que puede alcanzar hasta un 20%, los montos que los trabajadores y trabajadoras reciben por concepto de indemnización.

---

43. Véase http://www.monitoreolaboral.cl/noticiasnacionales/impulsocompetitivo.pdf

En materia territorial, el Consejo Regional aprobó el plano regulador metropolitano ampliando los límites urbanos[44]. Al concluir el consejo de intendentes en Viña del Mar, el Ejecutivo acordó traspasar más recursos y atribuciones a los gobiernos regionales, decidiendo el envío de un proyecto que aumentaría en 50% los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional[45]. Al mismo tiempo trascendió que los recursos del programa "Fondo Social Presidente de la República" (FSPR), en vez de beneficiar a organizaciones ciudadanas, estarían siendo asignados principalmente a iniciativas patrocinadas por parlamentarios de derecha[46]. Igualmente, el Subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle (UDI), entregó $15.455 millones para 14 comunas con alcaldes de Gobierno y tres de oposición. "La manipulación política que está haciendo Ruiz Tagle, es realmente escandalosa, es vergonzosa, sectaria que recuerda a la dictadura, sin ningún pudor está asignando recursos de esta manera", afirmó el diputado Gabriel Ascencio (DC)[47].

En el área de salud, el Ejecutivo envió el proyecto de ley corta de Isapres al Congreso, en el que eliminaba dos tramos de edad (de los cero a cinco años y mayores de 65 años). Sin embargo, sus críticos indicaron que

> esto no significa que deje de haber discriminación por edad. Se atenúa pero no se elimina la diferencia de género: las mujeres en edad fértil tendrán que pagar igualmente más por sus planes de salud. Otro aspecto que el gobierno ha hecho gala, es que con este proyecto las alzas van a ser menores. Para esto el gobierno propuso crear un IPC de salud, es decir un índice de precios especifico para la salud. En el proyecto no da indicaciones de cómo se va a estructurar este índice. Tampoco indica si va a contemplar a todo el sistema de salud o solamente al privado. El objetivo es generar legitimidad al sistema, que podrá realizar las alzas amparado en este IPC. La evidencia frente a estos mecanismos apunta a que el IPC de salud siempre es más alto que el IPC general, por lo costoso de los sistemas de salud (tecnología, prestaciones, infraestructura). Además esto no va a significar que las Isapres tengan obligatoriamente que modificar sus precios por este IPC: ellas van a seguir conservando la potestad de cambiar los valores a su antojo.[48]

Finalmente, empujando la agenda privatizadora, Libertad y Desarrollo propuso un sistema de voucher para la defensa jurídica de los pobres, en causas civiles, laborales y de familia, eligiendo abogados privados y escogidos por los usuarios.

---

44. *El Mercurio*, 31 de marzo 2011.
45. *El Mercurio*, 7 de marzo 2011.
46. *Cambio 21*, 1 de abril 2011.
47. *Cambio 21*.cl, 13 de agosto 2011.
48. Véase http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/salud/opinion/-/blogs/alzas-de-precio-y-ley-corta-de-isapres-ii

5. Piedras en el camino

La promesa de una mejor gestión continuó confrontándose con una muy distinta realidad. En ese período la Contraloría detectó millonarias irregularidades en fondos post-terremoto y modificación de precios en el plan "Manos a la Obra"[49]. A su vez, los titulares de CENABAST y de JUNAEB renunciaron por problemas de gestión y se conoció el instructivo del SERNAM, conocido como "Espejito espejito", distribuido por el ministerio de la Mujer, que con un costo de $5 millones instruía como tener "buena facha, maquillarse y a tener las uñas bien cortadas".

a) Siguen los conflictos de intereses

Los conflictos de intereses continuaron acusando el carácter empresarial del manejo gubernamental. En el marco de la campaña por una comida sana, senadores de la Concertación acusaron al Gobierno de estar coludido con empresas de comida chatarra al promocionarlas a través de una cuponera de descuentos de la Tarjeta Joven, entregada por el Instituto Nacional de la Juventud. Al mismo tiempo, dadas las presiones empresariales, el Ejecutivo retiró el apoyo a un proyecto que regulaba la venta y prohibía la publicidad de los alimentos envasados que tuvieran al menos una característica nutricional elevada como sal, azúcar o grasas.

En el área minero-energética se conoció que el Presidente y algunos de sus ministros tenían intereses en el proyecto carbonífero de Isla Riesco, ubicada en la Región de Magallanes. Aprobado por el Consejo de Ministros y la institucionalidad ambiental, el proyecto pertenecía a la Minera Isla Riesco, sociedad anónima cerrada constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, eran Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda. El proyecto fue públicamente respaldado el 5 de noviembre de 2010, al incluirlo dentro del Plan Magallanes. El Presidente es uno de los mayores accionistas individuales de COPEC y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de estas empresas[50]. Endesa, el controlador del grupo Enersis y que tiene una participación del 51% en HidroAysén, entregó en mayo de 2010 un cheque por diez millones de dólares como primera donación al Fondo Nacional de Reconstrucción y la esposa del Presidente recibió un millón de euros de la Fundación Endesa para la reconstrucción de Jardines Integra dañados tras el terremoto[51].

---

49. Las 189 observaciones a intendencias, gobernaciones y cincuenta comunas del país, y un total de 28 sumarios a municipios, fueron parte de las conclusiones a las que llegó una extensa revisión de la Contraloría. Véase *Cambio21*.cl, 27 de abril 2011.
50. *Red Diario Digital*, 19 de abril 2011.
51. *Emol*, 27 de abril 2011.

A menores niveles se ubicaron las gestiones del ministro de la Cultura, Cruz-Coke, para cambiar las oficinas del ministerio a una nueva sede en Ahumada 11 ($300 millones anuales en arriendo) perteneciente al grupo Luksic cuya Fundación, Andrónico Luksic Abaroa, entregó un aporte sustantivo a Matucana 100, siendo el ministro presidente del directorio de este centro cultural[52]. Y el senador Alejandro Navarro (MAS) acusó negociación incompatible, luego que el SERVIU regional pagara US$2 millones por un terreno en la zona de riesgo de Dichato a un pariente de Sebastián Salas Cox, la máxima autoridad regional de Vivienda del Bíobío[53].

Generando una embarazosa situación para el Presidente, el novel ministro de Energía, Fernando Echeverría, renunció a su cargo, aduciendo razones de posible conflicto de interés al ser socio de la firma que presta servicios a ENAP, de la cual por su cargo preside el directorio. Conflicto que no percibió este ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción cuando modificó el plan regulador metropolitano[54]

Estos conflictos de intereses alcanzaron incluso al "Segundo Piso", cuando se conoció que dos hermanos de María Luisa Brahm eran directores de las empresas estatales (Enacar, Fesub y EFE)[55]. Un problema familiar similar se le planteó al nuevo ministro de Minería, Hernán de Solminihac Tampier, hermano de Patricio de Solminihac Tampier, uno de los principales ejecutivos de la empresa SQM[56]. Por este mismo tipo de relaciones, renunció la gerenta de Asuntos Públicos de CODELCO Chuquicamata Norte, Gina Román Serra[57].

Frente a este tipo de problemas, Juan Carlos Délano, Presidente de Chile Transparente, afirmó que en la práctica no se había avanzado nada en materia de legislación protransparencia[58]. A pesar de esta demora, el Ejecutivo entregó al Consejo para la Transparencia el control, manejo y fiscalización de toda la información pública[59].

b) Mala conducta empresarial

Como si los conflictos de intereses fueran poco, los empresarios amentaron los problemas de la coalición de Gobierno. Así, en la Región de O´Higgins se encontró

---

52. *El Mostrador*, 18 de mayo 2011.
53. *La Nación*, 18 de mayo 2011.
54. Véase http://www.cooperativa.cl/intendente-echeverria-no-tengo-intereses-creados-en-la-aprobacion-del-plan-regulador/prontus_nots/2011-03-30/235219.html
55. *El Mostrador*, 13 de mayo 2011.
56. *El Mostrador*, 26 de julio 2011.
57. Aprobó por asignación directa un contrato por $ 221 millones a una empresa ligadas a su marido, la firma REMA, quien tenía una relación societal con Jaime Fuentes Castillo, marido de Román. Véase *The Clinic*, 20 de agosto 2011.
58. *Diario Financiero*, 9 de abril 2011.
59. *El Mercurio*, 14 de abril 2011.

en extremas condiciones de vida a trabajadores paraguayos ilegales en el fundo de Francisco Javier Errázuriz, y en Concepción se conoció que trabajadores de Santa Isabel (CENCOSUD), eran encerrados bajo llave mientras trabajaban. Hasta la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, reconoció que "aquí ha fallado todo": desde la Dirección de Trabajo, por falta de fiscalización, hasta la propia empresa, y calificó la situación como gravísima[60]. Similares problemas con la justicia enfrentó en Argentina la misma firma dueña de supermercados Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, por "evasión y contrabando", cuando tras el terremoto del 27 de febrero ingresaron a Chile 190 camiones con mercadería para sus locales rotulados como "ayuda humanitaria". Por acción de impuestos internos trasandinos, la AFIP, el caso ingresó a la justicia argentina a comienzos de septiembre.

El fallo de la jueza Ximena Cárcamo, del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, dictaminó que entre un empaquetador y las empresas externas que ofrecen estos puestos de trabajo al interior de los establecimientos comerciales existía una relación laboral, por la cual debía pagarse al trabajador un sueldo junto con todas las prestaciones que consideraba la legislación laboral vigente, declarando inaceptable el cobro que se hacía a esas personas por realizar su labor[61].

En el llamado Caso Kodama, el Ministerio de Vivienda habría pagado $17.000 millones de pesos por un trabajo que la Contraloría estimó valía $95 millones. La ministra Matte fue engañada por su propio equipo de trabajo al intentar omitir el control de legalidad del ente contralor a sabiendas que los acuerdos de pagos con la empresa Kodama serían objetados. La ministra renunció sin esperar el informe de la Contraloría y Piñera designó a Rodrigo Pérez Mackenna, intendente de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, y hermano del brazo derecho de los Luksic, como nuevo ministro de Vivienda[62].

A nivel municipal, el Alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), devolvió $56 millones del cohecho realizado por el supermercado Tottus (Falabella) para la licitación de un terreno que la empresa necesitaba para otro de sus locales.

En cuanto al Caso La Polar, ejecutivos de la multitienda crearon una cartera de créditos paralela con simulación ante auditora y directores, omitiendo datos de la cartera original, haciendo pasar deudas vencidas como cartera al día gracias a repactaciones falsas. Gerentes y directores vendieron sobre US$ 25 millones en acciones entre mayo de 2009 y junio de 2011. La ministra Matthei sostuvo que era "una estafa y un robo" y que "ya es hora de no seguir hablando de malas prácticas"[63]. Diputados opositores criticaron a las entidades reguladoras y fiscalizadoras —Superintendencia de Bancos, SERNAC, SBIF y SVS— y solicitaron a la Contraloría

60. *Cambio 21*, 25 de marzo 2011.
61. *Cambio21*.cl, 12 de abril 2011.
62. *El Mostrador*, 21 de abril 2011.
63. *La Tercera*, 16 de junio 2011.

investigar las posibles responsabilidades administrativas de las dos últimas. Este fraude destapó otro escándalo: la venta a La Polar de la base de datos de FONASA, datos confidenciales y no accesibles al público de acuerdo a la ley.

Finalmente, pero no lo último, la empresa en que un familiar del ministro Chadwick (Ayalchile) es director, se vio favorecida por veinte años gracias a decisión de CORFO de poner barreras de entrada al sistema de créditos a PYMES por parte de Sociedades de Garantía Recíproca[64].

6. Cercado por conflictos emblemáticos

La gestión gubernamental se vio crecientemente enfrentada a conflictos y movilizaciones sociales provocadas por la implementación de sus políticas en el campo de los derechos humanos, la energía y la educación.

a) Desprotección de los derechos humanos

El 21 de mayo el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, destacó la creación de la Subsecretaría de DD.HH., el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la causa por muerte del ex ministro José Tohá, y a mediados de mayo se formularon cargos contra oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado del sacerdote chileno-británico, Miguel Woodward Iriberry, cuyo rastro se perdió luego de ser interrogado a bordo del buque escuela Esmeralda tras el golpe. Por estas razones, y expresando el sentir de sus compañeros de armas, el general de Ejército en retiro, Humberto Julio, afirmó que el Gobierno de Piñera no había cumplido con su promesa en los casos de militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos, sosteniendo que se sumaba al llamado de algunos sectores de no votar por la Alianza en las próximas elecciones municipales como forma de castigar la indiferencia de La Moneda por ese tema.[65]

En materia de orden público la política fue claramente represiva, con un uso desproporcionado de la fuerza policial. Al mismo tiempo se trató de manipular información política relevante. Así, el Consejo Nacional de Televisión acogió a tramitación dos denuncias presentadas contra Televisión Nacional, Chilevisión, Canal 13, Megavisión y UCV-TV, por omitir en sus espacios informativos las prolongadas huelgas de hambre de los hombres y mujeres imputados por el denominado Caso Bombas (sesenta días) y de los cinco comuneros *mapuche* recluidos en la cárcel de Angol, que también se encontraban en huelga de hambre por más de

64. *El Mostrador*, 22 de agosto 2011.
65. *Cambio 21*, 22 de junio 2011.

cuarenta días. El 3 de mayo la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se tomó las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por promesas incumplidas y la libertad concedida a militares retirados condenados por violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el 3 de julio un informe jurídico del Consejo para la Transparencia concluyó que el Ministerio Secretaría General de Gobierno debía aclarar su política de monitoreo de redes sociales, producto de lo cual el nuevo ministro abandonó tal iniciativa[66].

En el caso de la huelga de hambre de los cuatro condenados *mapuche* en Cañete, que pedían que no se usaran testigos secretos, un grupo interrumpió en su homilía al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y otros familiares de los presos se sumaron a la huelga de hambre. Gracias a la creación de la comisión para resolver este tema, integrada por el arzobispo de Concepción, la Pastoral Mapuche, la directora del INDH, Lorena Fries y el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, los huelguistas depusieron su acción.

b) Amenazas al medioambiente

A la contaminación de la Escuela de Puchuncaví[67], la legislación sobre transgénicos y patentes de semillas que ya contaba con veinte mil hectáreas de cultivos de este tipo, y que beneficiaba fundamentalmente a empresas transnacionales, se sumó la crisis generada por la aprobación del proyecto HidroAysén, el que contemplaba cinco represas, la inundación de miles de hectáreas y el tendido de dos mil kilómetros de líneas de alta tensión, proyecto caracterizado por el senador RN Antonio Horvath como "un autogol para el Gobierno".

Aun cuando un 74% rechazaba HidroAysén, ochenta mil personas marchaban contra la aprobación de las represas. El Episcopado afirmaba que "una decisión basada sólo en intereses económicos es éticamente inaceptable", y antes que los funcionarios de Gobierno votaran por su aprobación o rechazo, el ministro del Interior señaló que "para el país sería bueno que se aprobara HidroAysén", ejerciendo una presión indebida sobre sus subalternos —los seremis—, que por la tarde

66. "Según consta en los registros de Mercado Público, la licitación se publicó el 22 de marzo y tuvo dos empresas interesadas: Ingesmart S.A. y Brandmetric. Finalmente, se impuso esta última, que ofreció, entre otros elementos, un sistema de localización geográfica, una 'línea de tiempo' para ver cómo se propagan los temas en las redes sociales y un sistema de almacenamiento de la información 'en la nube'. El gobierno firmó el contrato el 25 de abril, por un valor total de $14.388.000 más IVA, con una vigencia de un año, prorrogable por un período igual. La licitación se lanzó una semana después de que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, diera a entender en el programa 'Tolerancia Cero' de CHV que el gobierno monitoreaba los comentarios en las redes sociales, lo que causó amplia polémica en Twitter y Facebook". Véase *Qué Pasa.cl*

67. *El Mostrador*, 1 de abril 2011.

votaron favorablemente la iniciativa. En la misma dirección, a mediados de agosto, el Comité de Ministros aprobó la explotación carbonífera en Isla Riesco. La iniciativa de las empresas Copec y Ultramar en Magallanes consideraba una inversión de US$ 530 millones. Coronando esta línea de decisiones, el Ejecutivo anunció que continuaría con la agenda de energía nuclear.

7. La protesta y demanda estudiantil

En el "año de la educación superior", decretado por el Gobierno, se desató la histórica movilización estudiantil, expresándose en masivas manifestaciones de protesta, las que se extendieron a amplios sectores del país en demanda de una educación igualitaria[68], de calidad y sin fines de lucro[69]. La encuesta CEP informaba que el 80% de los entrevistados estaba en desacuerdo con el lucro en la educación, apoyo que continuó masivo durante todo el proceso.

Las marchas convocadas por la CONFECH sufrieron una fuerte represión de Carabineros y PDI, e intentos frustrados de desalojo, al punto que el 4 de agosto Carabineros y estudiantes se enfrentaron por catorce horas en Santiago, y si bien el Gobierno logró impedir la marcha no autorizada por la Alameda, las protestas, barricadas y cacerolazos se extendieron a siete comunas en Santiago y 12 ciudades en el país. A pesar de todo, el movimiento estudiantil fue capaz de poner sus temas en agenda en materia de política y financiamiento para la educación.

En su Mensaje del 21 de mayo, el Presidente, intentando aplacar las protestas, anunció la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, el rediseño del Aporte Fiscal Indirecto y beneficios a los morosos del Fondo Solidario. Materializando los anuncios presidenciales, el ministro de Educación, Joaquín Lavín,

---

68. Estudio del Ministerio de Educación: origen socioeconómico afecta sueldos de egresados de una misma carrera. Un ingeniero comercial de quintil más pobre entra ganando $837.194, versus $1.232.348 de uno del quintil más rico.
69. "El negocio de los créditos universitarios que está en manos de Álvaro Saieh-Corpbanca se adjudicó la cartera que licitó el Estado, bajando la tasa para los estudiantes de un 5,7 a un 5,3 por ciento anual. Una mejora en la condiciones de mercado, que, sin embargo, las propias universidades califican de muy pequeña. Algo que se complica para los estudiantes si se considera que, según un informe del Banco Mundial, los universitarios con CAE tendrán una deuda casi 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando se titulen y se incorporen al mercado del trabajo". Véase *El Mostrador*, 7 de julio 2011. "El empresario y ex director de Presupuesto de la dictadura militar, Jorge Selume, está más involucrado en el conflicto estudiantil de lo que muchos pudieran creer. Corpbanca, institución de la que es director y accionista, se adjudicó la licitación para los Créditos con Aval del Estado para el 2011. Pero, además, es parte de la Junta Directiva de dos de los planteles que más concentran este beneficio: las universidades Andrés Bello y de Las Américas". Véase "Las Incestuosas Relaciones entre los Bancos y las Universidades", en *Diario Red Digita*l, 17 de septiembre 2011.

presentó 12 puntos de reforma a planteles tradicionales, entre los cuales figuraban la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, modificaciones al sistema de ayudas estudiantiles, a los aportes fiscales directo e indirecto (AFD y AFI), creación de nuevos fondos para universidades estatales y formación de profesores.

Frente a estos anuncios, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) manifestó su desacuerdo con el discurso y su diagnóstico: 16 universidades se declararon en toma y paro de actividades, liceos emblemáticos fueron tomados en demanda de una educación de mejor calidad, encontrándose en mayo 138 colegios a nivel nacional en paro. La reacción gubernamental fue convocar a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) y "terminar con las protestas y tomas". No obstante, los dirigentes de las federaciones de Estudiantes de la Universidad de Chile y Católica, además del Presidente del Colegio de Profesores y voceros de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, rechazaron la propuesta y a fines de julio entregaron al Senado y Cámara, en la sede del Congreso en Santiago, su propuesta "Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena"[70]. Los ejes centrales de la propuesta fueron:

> Entender la educación como un derecho social y humano universal garantizado por la Constitución, estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, gratuita, democrática y de calidad, organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles. Un sistema autónomo y democrático, sin carácter político partidista, religioso y económico. Pluralista, opuesto a dogmatismos y prácticas adoctrinantes. De calidad, con contenidos y valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de la sociedad y pueblos originarios. Gratuita, debiendo el Estado proveer los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica. Definida como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social. Para hacer viable las garantías del Estado, plantearon nuevas formas de financiamiento gracias a una reforma tributaria y la recuperación de los recursos naturales del país.

Las movilizaciones se multiplicaron en todo el país —con apoyos en las principales capitales del mundo—, aumentando su número de participantes, colorido y control de los sectores violentistas, llegando el 21 de agosto en el Parque O'Higgins a la más masiva concentración que se tenga recuerdo en la recuperada democracia. Posteriormente, el movimiento estudiantil se sumó al paro nacional de dos días convocado por la CUT, el que si bien no fue exitoso, en su segundo día fue capaz de convocar en las cuatro marchas a un amplio público, además seis estudiantes de Buin que depusieron su huelga de hambre luego de 37 días.

---

70. Véase http://www.emol.com/documentos/archivos/2011/08/01/20110801222821.pdf

Con el ánimo de concluir tomas y movilizaciones, el ministro de Educación hizo un tercer anuncio sobre educación, más focalizado que el GANE, y los 21 puntos del novel ministro Bulnes, en torno a cuatro ejes: endeudamiento, desmunicipalización, fiscalización al lucro y calidad. Estas incluyeron la desmunicipalización gradual de establecimientos fiscales con malos resultados, quedando a cargo de instituciones públicas autónomas locales; el aumento de cobertura y calidad de la educación parvularia; una garantía constitucional a la educación de calidad; el incremento sustancial del gasto en subvención escolar y requisitos básicos de calidad; la derogación de las normas que limitaban participación estudiantil en educación superior; aportes basales contra metas a universidades estatales y tradicionales; reestructuración del sistema de créditos y becas para estudiantes universitarios meritorios y aumento de becas; rebaja del costo del crédito y reprogramación a deudores morosos. Todo esto se operacionalizaría a través de una reforma constitucional y, al menos, siete proyectos de ley.

Los anuncios fueron recibidos con dudas y decepción por parte de la CONFECH, considerándolos como cambios cosméticos que dejarían al sistema educacional donde mismo.

El 23 de agosto los dirigentes de la CONFECH entregaron una carta al Presidente en la que, en 12 puntos, hicieron un diagnóstico de la educación nacional y sus problemas, identificando los temas que los separan del Gobierno: fin al lucro, el autofinanciamiento de las universidades y el término del sistema de financiamiento compartido a nivel escolar y universitario. El 26 de agosto el Presidente Piñera, distanciándose de la política del ministro de Educación, invitó a la CONFECH a conversar en La Moneda, cita que se fijó para el día sábado 3 de septiembre, a la cual asistieron el Presidente, el ministro de Educación, representantes del Colegio de Profesores, CONES, CRUCH (Pérez de la Chile, Solezzi de la USAG y Sánchez de la PUC) y los líderes de la CONFECH. En la sesión se trasparentaron las diversas posturas y el ministro de Educación se comprometió entregar una propuesta de agenda para el lunes 5 de septiembre, aun cuando los dirigentes no negociaron el fin de los paros y tomas de establecimientos educacionales. El cronograma de trabajo que el Gobierno propuso a los estudiantes consistió en tres mesas temáticas[71].

El movimiento estudiantil respondió el jueves 8 de septiembre rechazando la propuesta y demandando postergar el plazo para la reasignación de becas y créditos, suspender la tramitación de proyectos de ley relacionados con educación, asegurar transparencia del proceso y no abrir la llave de recursos públicos a instituciones que lucran, y también formularon una nueva estructura de la mesa de trabajo[72]. El ministro Bulnes respondió el 15 de septiembre aceptando entregar actas públicas con el contenido de lo abordado en las citas y fiscalizar el lucro en la educación superior,

71. *El Mostrador*, 6 de septiembre 2011.
72. Véase http://feuc.cl/wp-content/uploads/2011/09/comunicado-UTAL-CONFECH-final.pdf

pero rechazando aplazar el cierre del primer semestre y retirar las leyes que estaban en el Congreso, ante lo cual la CONFECH llamó a nuevas movilizaciones. Los diputados del PS, PPD, DC y PRSD advirtieron que no respaldarían proyectos si el Gobierno no llega a acuerdo con los estudiantes, ya que el Ejecutivo "no ha dado las suficientes garantías a los sectores estudiantiles y docentes"[73]. Esta crítica llegó incluso hasta personeros UDI, como el senador Hernán Larraín, el que insistió en postergar el envío de proyectos de ley en materia educacional[74].

La multitudinaria manifestación del 22 de septiembre mostró que el movimiento mantenía su convocatoria a pesar de la campaña gubernamental por generar una imagen de debilidad y fraccionamiento. Frente a esa nueva demostración de fuerza, el Gobierno propuso tres ejes para una convergencia aceptando las condiciones estudiantiles[75]. Finalmente, el martes 27 de septiembre la CONFECH aceptó incorporarse a una mesa de diálogo, pero manteniendo las movilizaciones hasta que no existiera una respuesta a las demandas de educación pública gratuita y de calidad y el fin del lucro. Las condiciones de los estudiantes fueron: 1, Advertencia: "Haremos cumplir las garantías mínimas. No podemos ser ilusos respecto a las expectativas, pues históricamente se han planteado instancias que no logran resolver de forma cierta los conflictos sociales". 2, Demandas: "Exigencia de transparencia de la Ley de Presupuestos, especialmente en la partida destinada a Educación. Mantención del fin al lucro y eliminación de la banca privada del sistema educativo, con participación de todos los actores". 3, Movilización: "Queremos dejar claro que el inicio del diálogo no condiciona nuestra forma de movilización". Un llamado a no iniciar las actividades del segundo semestre mientras no se vean avances concretos de parte del Ejecutivo. 4, Mensaje a bases: "No abandonarán a los movilizados, para que puedan cerrar sus semestres y no pierdan sus beneficios académicos. Apoyo a estudiantes en huelga de hambre y a la Aces por haber logrado su incorporación a la mesa"[76].

Las protestas y propuestas de la CONFECH tuvieron varios efectos. Primero, produjo un cambio de Gabinete, sacó a Lavín (18 de julio, 2011) y puso a Felipe

---

73. *La Tercera*, 17 de septiembre 2011.
74. *La Tercera*, 18 de septiembre 2011.
75. 1. "La agenda de trabajo legislativo será manejada en cuanto a sus urgencias y ritmos de tramitación de manera de permitir que los acuerdos que se alcancen en las mesas de diálogo puedan ser incorporados en los respectivos proyectos de ley". 2. "Los debates de las mesas de diálogo serán transparentes. Así, se levantarán actas públicas para que la ciudadanía pueda conocer los temas tratados y las posiciones de los participantes". 3."Para evitar la pérdida del año escolar y los semestres académicos, y en función del retorno oportuno a clases de los estudiantes, el Ministerio de Educación empleará los mejores esfuerzos y adoptará las medidas posibles para reprogramar los calendarios escolares de todos los establecimientos afectados por las tomas". *El Mercurio*, 25 de septiembre 2011.
76. *El Mercurio*, 28 de septiembre 2011.

Bulnes en Educación, el que confiaba destrabar el conflicto gracias a la entrega de 21 propuestas.

En segundo término, la Concertación entregó como respuesta a la CONFECH un documento con 37 reformas, pero que no contemplaba "la prohibición total del lucro y la defensa del principio de gratuidad universal del derecho a la educación"[77]. Por su parte, el Gobierno y el Congreso acordaron radicar el debate educacional en el ámbito legislativo. La CONFECH rechazó participar en la mesa de diálogo ofrecida por el Congreso, exigiendo respuesta del Ejecutivo a sus "demandas fundamentales" antes de iniciar otras conversaciones, dándole seis días para responder a sus demandas, especialmente a los temas referidos al fin del lucro y educación gratuita. Solamente aceptaron entregar, pedagógicamente, sus puntos de vista en una sesión de la comisión de Educación del Senado[78]. El 13 de septiembre el Senado aprobó en general el proyecto que prohíbe "sociedades espejos" en educación.

En tercer lugar, se instaló en la agenda política la demanda de plebiscitar los temas de gratuidad y lucro en la educación, por lo que 15 de 19 diputados DC firmaron una declaración apoyando la realización de un plebiscito para terminar con el conflicto educacional. El debate en torno al uso y abuso de los plebiscitos versus la existencia de instituciones representativas cruzó las organizaciones políticas opositoras encontrándose opiniones tanto a favor como en contra, salvo opiniones aisladas que consideraron posible una coexistencia virtuosa entre ambas instancias[79].

Un cuarto efecto de la discusión sobre el lucro en la educación alcanzó a miembros de la Alianza y Concertación, quienes dieron a conocer listas de parlamentarios que debían inhabilitarse en esta discusión. Mientras en la oposición presentarían el caso del diputado Ernesto Silva Méndez (UDI), en el oficialismo harían lo propio con la senadora Soledad Alvear (DC), autoinhabilitada.

Finalmente, el tema volvió a fragmentar a la Alianza. El 31 de julio parlamentarios RN, UDI, PS, DC e independientes presentaron una carta al Presidente en la que acogían la desmunicipalización de la educación, replanteando el sistema de subvención y creando un nuevo mecanismo de financiamiento. El 2 de agosto parlamentarios de todos los sectores presentaron el "Acuerdo Político Social por la Educación", que contemplaba una mesa de trabajo que incluyera a todos los actores. La iniciativa establecía tres puntos principales: elevar a rango constitucional el derecho a una educación preescolar, básica y media de calidad, desmunicipalizar la instrucción a través de un sistema público de carácter autónomo especializado en

---

77. Figueroa, F., *Llegamos para quedarnos. Crónicas de la revuelta estudiantil*, Santiago: LOM Ediciones, 2012, pág.134.
78. Véase http://www.youtube.com/watch?v=18flu8Sy2sc
79. Jorge Navarrete, "La mantequilla del pan", *La Tercera*, 21 de agosto 2011.

la gestión educacional, fin al autofinanciamiento de las universidades y dar cumplimiento a la ley que prohíbe el lucro en ellas. Desmarcándose de estos acuerdos, diputados y senadores UDI de las comisiones de educación respectivas presentaron un documento con sus propias ideas para el debate educacional. De la misma manera, los parlamentarios RN presentaron sus propuestas de reforma educacional a comienzos de septiembre.

El tema del fin del lucro dividió a la oposición. Por un lado, la derecha y los medios de prensa nacionales se pronunciaron en contra de su eliminación pronosticando un caos educacional en caso que se eliminara[80].

El ministro Larroulet reforzó la postura del Gobierno a favor del lucro, pero la senadora (RN) Lily Pérez negó que la aprobación de esa iniciativa implicara el cierre de cuatro mil colegios, como había dicho el ministro de Educación. Esa postura individual contrastó con la propuesta de RN, que defendía el emprendimiento de privados en educación, al igual que Libertad y Desarrollo, cuyo director del programa legislativo afirmó que "el proyecto de ley contra el lucro es inconstitucional y expropiatorio"[81]. Por parte de la Concertación, el 31 de agosto la comisión de Educación del Senado aprobó el fin del lucro en la enseñanza subvencionada. Esto prohibiría los aportes estatales a entidades de educación básica y media que persigan fines de lucro, contra la opinión del ministro Bulnes, que lo defendió. El Presidente que afirmó que la "Educación gratuita para todos no es conveniente ni justa".

Apoyando la demanda estudiantil, el Congreso extraordinario de alcaldes acordó apoyar la desmunicipalización de colegios, no permitir el lucro con recursos públicos y restringir la apertura de nuevos establecimientos particulares-subvencionados[82].

8. Oposición

La oposición mostró diversas caras y su principal manifestación fue en las calles. En las relaciones Gobierno-oposición parlamentaria no se logró estructurar una línea de relaciones claras, la Concertación continuó evidenciando fuertes discrepancias internas y se observaron algunos intentos por renovar sus planteamientos programáticos. Con todo, la coalición opositora, al igual que el Gobierno, también tocó fondo, lo que se expresó en el aumento de su rechazo por parte de la opinión pública,

80. "El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, es uno de los máximos exponentes del lucro en la educación. Su universidad, la Autónoma, ganó doce mil millones de pesos, según último informe público", véase *Cambio21*, 31 de agosto 2011.
81. *El Mostrador*, 31 de agosto 2011.
82. *La Tercera*, 1 de septiembre 2011.

el que entre abril y agosto subió del 61% al 71%, derrumbándose su aprobación del 26% al 17% en el mismo período.

a) Oposición-Gobierno

La dinámica política oposición-Gobierno estuvo caracterizada por la permanente oscilación entre los ataques y llamados a un diálogo y cooperación con el Ejecutivo realizados por el Presidente Piñera, y el acercamiento y toma de distancia de la oposición, lo que no se tradujo en una norma consistente de conducta.

Así, el gesto de La Moneda de realizar un homenaje a Edmundo Pérez Zujovic fue la oportunidad elegida para un llamado a la unidad nacional del Presidente. Las respuestas de la oposición fueron positivas[83], sin embargo en el área legislativa persistieron las diferencias. Frente al proyecto del postnatal la oposición acusó una reducción del fuero maternal en el proyecto y la exclusión de la clase media al ponerse un tope de 30 UF mensual; frente a la negativa opositora los senadores oficialistas acudieron al Tribunal Constitucional, el que por cinco votos contra cuatro acogió el requerimiento presentado por el Ejecutivo sobre la inconstitucionalidad de los cambios introducidos en el proyecto de ley. Finalmente, se acordó un tope de 54UF, el que a última hora —por presión opositora— fue subido a 66UF.

Provocando críticas en la coalición opositora, parlamentarios DC se reunieron con los ministros del Comité Político para tratar las reformas político-institucionales: primarias, posibles cambios al sistema binominal y el reemplazo de parlamentarios. Ignacio Walker, presidente DC, explicó los contenidos de la propuesta:

> Nuestro partido ha definido tres prioridades: primero, una nueva agenda social contra la desigualdad y el abuso; segundo, un nuevo pacto fiscal, que requiere una reforma tributaria para financiar esa nueva agenda social; y tercero, que es el único motivo que nos ha reunido aquí en La Moneda, un nuevo pacto constitucional, que signifique más y mejor democracia, y dar con una nueva institucionalidad política-parlamentaria.

Un desencuentro más enojoso con el Gobierno se dio a propósito de la cita pedida por la oposición al Presidente en relación al conflicto educacional, ante la cual el Presidente la modificó por una con todos los partidos políticos, por lo que

83. "Diálogo sincero y constructivo, sin descalificaciones mutuas" (Edmundo Pérez Yoma); "Que las legítimas discrepancias se resuelvan por la vía de la racionalidad" (José Antonio Viera-Gallo); "Tuvo palabras elogiosas para la transición" (Belisario Velasco); "Calmar tensiones que parecen como absurdas" (Enrique Krauss); "Llamado a la unidad me parece muy razonable y ojalá tenga eco" (Patricio Aylwin); "Respetándonos y reconociéndonos vamos a poder construir grandes acuerdos como los que hemos logrado en las últimas dos décadas" (Ignacio Walker). Véase *El Mercurio*, 9 de junio 2011.

la Concertación, accediendo a la solicitud de los estudiantes que ese momento entregaban su propuesta en el Congreso, se restó. Este hecho despertó críticas (Patricio Aylwin) y autocríticas (Presidente(s) del Senado, Juan Pablo Letelier), incluyendo singulares propuestas de un acto de reparación. Finalmente, la Concertación envió carta de excusas al Presidente lamentando "que esto se haya interpretado como un desaire a su persona".

b) Desacuerdos permanentes

Los desencuentros concertacionistas continuaron a propósito de la discusión de la orgánica de la coalición, en la que se presentaron posturas desde la refundación, la creación de un mecanismo para resolver controversias, hasta su apertura para incluir a grupos extra-Concertación al bloque. Todas estas alternativas fueron temas del "minicónclave" a fines de marzo en el Congreso, en el que participaron todos los parlamentarios del sector[84]. Sin haberse resuelto estos temas, las bancadas del PRI y el PRSD firmaron un protocolo de acuerdo para la creación de un nuevo referente, un acuerdo municipal y una nueva propuesta programática. Con todo, mientras en el PRI se pensaba en una "tercera fuerza" distinta a la Concertación y la Alianza, en el PRSD se inclinaban por un "frente amplio" de la oposición.

Frente a la reforma educacional aprobada con votos del oficialismo y de parlamentarios democratacristianos, la DC criticó al resto de la Concertación por no aprobar un "proyecto histórico de Bachelet" y calificó como "incomprensible" el rechazo de los diputados del PS y del PRSD a la reforma educacional y la abstención de la bancada del PPD.

Por su parte, el PPD convocó al PS para fortalecer el "ala progresista" de la Concertación, lo que provocó la crítica de la DC al bloque PPD-PS, por lo que el vicepresidente de la DC, Fuad Chahín, afirmó que está "pasado de moda" hablar de "conservadores o progresistas", aunque valoró la idea de repotenciar la centroizquierda ya que a su juicio "la Concertación, como coalición política, ya no tiene ningún sentido"[85]. Luego que propusiera el fin de la Concertación, la DC fijó una reunión extraordinaria para revisar la política de alianzas y explorar "un gran acuerdo" con el Ejecutivo, después de la cual la DC ratificó su pertenencia a la coalición "de centroizquierda", fijó una Junta Nacional para el último trimestre del año, y su vicepresidenta, Laura Albornoz, presentó un voto político pidiendo la realización del VI Congreso Ideológico.

Como respuesta a la propuesta progresista, la DC y el PS se reunieron para fortalecer el eje histórico concertacionista, ante lo cual Carolina Tohá insistió en que

---

84. *Cambio 21*, 25 de marzo 2011.
85. *El Mercurio*, 6 de junio 2011.

> El eje histórico de la Concertación es entre centro e izquierda, no entre la DC y PS (…) Estoy en desacuerdo con la mirada que hay detrás de esta iniciativa, y creo que hay un error profundo en la forma en que las dirigencias de la DC y el PS están interpretando este momento. Ese eje DC-PS paraliza a la Concertación y tiene un dejo conservador y excluyente. Es una arquitectura que no obedece a ninguna definición programática, no conecta con la ciudadanía, y tampoco es eficaz en lo electoral. Es una estrategia que surge del vértigo al cambio.[86]

Igualmente, frente a la mala evaluación ciudadana de la Concertación, Carolina Tohá afirmó que "Cuando hemos tenido esos acuerdos, la evaluación ciudadana no ha sido mucho mejor. La ciudadanía quiere acuerdos donde la tomen en cuenta, pueda participar y no sólo acatar".

Las discrepancias subieron de tono en torno a las elecciones municipales de 2012. Por una parte, a fines de marzo, la Concertación acordó llevar un solo candidato por comuna para las elecciones de alcalde, que este fuera elegido en primarias abiertas, y el establecer vocerías distintas para cada tema de la agenda.

En el mismo período se fijó como plazo el 5 de octubre —aniversario del triunfo del No en el plebiscito de 1988— para construir una "nueva coalición, socialmente amplia y políticamente articulada". Para generar esta instancia se establecería un diálogo con sectores políticos y sociales más allá de las fronteras del bloque, los que participarán de un "foro democrático" que se constituirá durante el mes de abril, lo que no sucedió. Por su parte, el senador Escalona propuso al PS ampliar la primaria e incluir a todas las fuerzas de oposición, ya que a su juicio la Concertación por sí sola no era capaz de ganar las presidenciales de 2013, por lo que planteó la formación de "un amplio acuerdo nacional con todas las fuerzas y expresiones que estén por derrotar a la derecha"[87]. Independientemente de estas propuestas, el 7 de julio el Comité Central del PS decidió apoyar al movimiento estudiantil, ratificó una lista única de concejales junto con la DC y el PPD fijó fecha para la inscripción de candidatos. Así, la discusión concertacionista por una lista municipal extra-Concertación, lista única, dos o tres listas de concejales (PPD, PRSD, DC-PS), terminó de hecho con tres listas de concejales para la próxima elección municipal.

Una nueva discrepancia se observó durante la discusión en el Senado sobre la Ley de Indulto, que beneficiará a unas cinco mil personas que cumplen condenas en libertad, lo que se aprobó con el voto dividido de la oposición.

---

86. Véase http://www.ppd.cl/sala-de-prensa/carolina-toha-el-eje-historico-de-la-concertacion-es-entre-centro-e-izquierda-no-entre-la-dc-y-ps
87. Véase http://www.congresops.cl/wp-content/uploads/2011/05/UNIDAD-PARA-VENCER- POR-CAMILO-ESCALONA.pdf

Frente al paro convocado por la CUT para el 24 y 25 de agosto, la DC se distanció del resto de la Concertación y solo respaldó las demandas, llamó a manifestarse pacíficamente y dejó en libertad de acción a sus militantes, en un contexto en el que hasta el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, perfilando su precandidatura presidencial, afirmaba que apoyaba "las reivindicaciones sociales y el sentimiento que está detrás del paro"[88].

La crisis de la Concertación tuvo una nueva vuelta de tuerca con la carta de Carolina Tohá a sus pares concertacionistas, condicionando el asumir la vocería de la coalición a la apertura del conglomerado a otras fuerzas políticas y creando una Convergencia Opositora y el mejoramiento de su coordinación[89]. Después de fuertes críticas a la iniciativa, se retomó el acuerdo de marzo para tener el 5 de octubre una propuesta consensuada de cómo hacerlo.

c) Propuestas programáticas

Los persistentes desacuerdos concertacionistas mostraron palmariamente la ausencia de orientaciones programáticas con las cuales enfrentar las iniciativas gubernamentales e impulsar las propias.

Como reacción a esa inacción sustantiva en la oposición, a fines de marzo el ex presidente Lagos inauguró la escuela de formación política "Michelle Bachelet" y presentó en ProyectAmérica su documento "Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad", propuesta que fue ampliando a medida que se discutía el documento previo y nuevos acontecimientos evidenciaban nuevos problemas. Con todo, su postura frente al proyecto HidroAysén —acuerdo inicial y crítica posterior— no ayudó a darle peso adicional a sus propuestas.

En el área sindical, la CUT exigió nuevo código laboral y reforma para que las empresas pagaran más impuestos. "No existe agenda laboral", dijo Arturo Martínez, agregando que no se había concretado nada de los anuncios realizados en el 21 de mayo pasado[90].

Un aporte singular ocurrió a comienzos de mayo, cuando el XXIX Congreso del PS estableció una cuota de 50% de mujeres entre sus candidatos a cargos internos y también en la conformación de las instancias directivas, como el comité central, e hizo un llamado "a todos los partidos de gobierno y oposición a incluir en sus propuestas de futuro medidas de paridad de género en los partidos, lo que hará aún más democrática nuestra sociedad". Igualmente, fechó para el tercer trimestre de 2012 la definición presidencial,

88. *La Tercera*, 23 de agosto 2011.
89. Véase http://static.latercera.com/20110911/1353722.pdf
90. *Diario Financiero*, 2 de mayo 2011.

confirmó la idea de que la Concertación llevara una sola lista para la elección de concejales y se pronunció por una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente y la elección de los candidatos a alcalde mediante elecciones primarias abiertas.

Por su parte, parlamentarios de la DC (Ignacio Walker, Soledad Alvear, Patricio Walker, Aldo Cornejo y Jorge Burgos) presentaron una propuesta de reforma político-institucional denominada "Más y mejor democracia", considerando que la actual Constitución, a pesar de todas las reformas introducidas desde 1989, no tenía una legitimidad suficiente. Después de claras diferencias al respecto, el Consejo de la DC aprobó la idea de realizar plebiscitos en caso de reformas político-institucionales, estableciendo: "De no prosperar un cambio propuesto por la vía legislativa, el PDC considera plenamente válido un plebiscito que permita el cambio político-institucional que constituye la sustancia de nuestra propuesta"[91].

Finalmente, tratando de remontar una propuesta programática sustantiva, a fines de agosto se constituyó un equipo concertacionista para elaborar un programa de Gobierno (Álvaro Elizalde, Miguel Crispi y Mahmud Aleuy, por el PS; Guillermo Vásquez, Patricio Tombolini y Marisol Aravena, por el PRSD; Felipe Harboe, Cristián Larraín y Verónica Pinilla, por el PPD, y Manuel Inostroza, Alejandro Micco y Claudio Orrego, por la DC).

En ese contexto, a comienzos de septiembre, los senadores Guido Girardi (PPD), Fulvio Rossi (PS) y Ximena Rincón (DC), acompañados de organizaciones sociales, realizaron un llamado para retomar el debate en torno a la legislación respecto del aborto terapéutico. La comisión de salud del Senado aprobó la idea de legislar.



La crisis sistémica evidenciada por la movilización estudiantil puso en cuestión cada uno de los pilares del nuevo régimen: la economía de mercado, el sistema de representación política y el rol del Estado. Esa crisis se vio agudizada por las reiteradas falencias en la conducción gubernamental del Ejecutivo, la profundización de sus disensos internos y la quiebra de su diseño estratégico de hecho. Los conflictos de intereses y la mala conducta empresarial coadyuvaron a una mayor deslegitimación de la economía de mercado impulsada por el gobierno Piñera.

Junto a la movilización estudiantil, los continuos conflictos en torno a los derechos humanos, el medioambiente y las reivindicaciones de las comunidades mapuche, le hicieron cada vez más difícil al Ejecutivo llevar a cabo su agenda privatizadora en educación, aun cuando la avanzó en el área de la salud.

En ese contexto, el cambio de Gabinete significó un mayor énfasis en la gestión política profesional, así como en la defensa de los derechos de los consumidores. Esta última política tuvo efectos contraproducentes toda vez que las continuas

91. *El Mercurio*, 30 de agosto 2011.

denuncias de irregularidades empresariales contribuyeron a profundizar la deslegitimación de la desregulada economía de mercado.

La gestión del Ejecutivo en materia de reconstrucción fue pobre y su acción legislativa se redujo a un limitado conjunto de proyectos, todos los cuales fueron finalmente modificados por la oposición parlamentaria, tal como ocurrió con la eliminación del 7% de cotización de los jubilados y el proyecto del postnatal. Con todo, el Gobierno continuó con su propuesta de reformas políticas parciales y con su intento de fisurar a la Concertación en torno a estas materias. Por su parte, esta última no dio muestras de recuperación orgánica ni programática, por lo cual apareció tan ingobernable como el resto del país.

Finalmente, la dinámica política quedó marcada por los temas puestos por los estudiantes y sus movilizaciones, quienes cambiaron radicalmente el escenario político nacional. La masiva aprobación de sus planteamientos mostró la traslación del centro político y social hacia la izquierda, abriendo nuevos espacios para una propuesta política progresista. Las banderas de lucha estudiantil, que redefinieron la dinámica política nacional, estaban para quedarse.

CAPÍTULO 7

LA FRONDA REDIVIVA
De la movilización social al acuerdo de Aysén

Lo sucedido en el cuarto semestre de la administración Piñera confirmó los efectos entrópicos de la derecha frondista. La principal iniciativa política presidencial de octubre de 2011 —la modificación al sistema electoral binominal— terminó sepultada por el propio Presidente a los tres meses de enunciada, gracias a la poderosa oposición de la UDI. A ello se le sumó la ausencia ministerial en acuerdos tan importantes como el alcanzado entre la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Central Única de Trabajadores (CUT). A lo anterior se agregó la información proporcionada por el Centro Democracia y Comunidad, la que demostraba que entre el 11 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, el 81,9% de los compromisos legislativos presidenciales no se habían cumplido:

> En ninguno de los 7 ejes que el Ejecutivo señaló como prioritarios en su plan de gobierno se alcanzó más de un 29% de cumplimiento. CDC hizo seguimiento de 205 promesas, especialmente las anunciadas en los discursos del 21 de mayo (contenidos en los ejes estratégicos: Economía, Empleo, Seguridad, Crecimiento, Salud, Pobreza, Calidad de la Democracia y Otros. Esta última representa una categoría residual que incorpora Vivienda, Energía, Medio Ambiente, etc.), más otros anuncios complementarios realizados en el periodo de la medición. De las 205 iniciativas anunciadas, sólo 37 han sido presentadas al Parlamento (18,1%), 63 se encuentran en proyectos de tramitación sin cumplir (30,7) y 105 no tiene proyectos presentados (51,2%). Analizando los proyectos por ejes, los con menos cumplimiento son Trabajo (5,3 %), Salud (7,7) y Democracia (9,5 %). Los ejes representados por Economía (24,3), Seguridad (22,5), Educación (28,6), Pobreza y Equidad (18,2) y Otros (14%) son los que obtienen mejores resultados, pero aun así no superan el 30% de cumplimiento.[1]

---

1. Véase http://cdc.cl/destacado/el-819-de-los-compromisos-legislativos-del-presidente-pinera-no-se-han-cumplido. En el mismo sentido, el análisis del cumplimiento de promesas del Programa de Gobierno en materia legislativa al 2012, realizado por la Fundación Ciudadano Inteligente, mostró solo un 24,4% de cumplimiento en relación a lo ofrecido en la campaña presidencial. Al respecto, véase http://deldichoalhecho.cl

Esta ausencia de liderazgo del Ejecutivo se reflejó en la baja sostenida de la aprobación presidencial, la que contradiciendo todas las estimaciones de que subiría a fines de 2011, siguió descendiendo hasta un pobre 23% de apoyo, además de alcanzar una mayoritaria desaprobación del 62%[2], cifras que reflejaron la negativa apreciación ciudadana sobre la errática conducción gubernamental.

El fracaso de la estrategia *presidencialista plebiscitaria*, que Piñera intentó implementar en sus dos primeros años de gobierno, derivó en una creciente incapacidad gubernamental para avanzar estratégicamente y creó el espacio para que el espíritu de fronda de la derecha se desplegara en toda su magnitud. Este se manifestó en la profundización de las contradicciones al interior de los propios partidos de la Alianza en torno a la reforma política y tributaria, en temas con fuertes componentes valóricos y en el manejo del orden público y las movilizaciones sociales.

1. Reformas políticas

En efecto, en su cuarto semestre, la iniciativa del Ejecutivo en materia de reformas políticas fue confusa, contradictoria y sin una clara línea estratégica. En enero de 2012 existían ocho proyectos de ley que no observaban avances significativos[3]. Sin embargo, a inicios de octubre de 2011 el Ejecutivo inició conversaciones con grupos democratacristianos para avanzar en reformas al sistema electoral binominal.

a) Cambios al binominal

A través de ProyectAmérica, el Presidente pidió a la DC presentar una propuesta de cambios al binominal. Materializando esa iniciativa, los ministros Hinzpeter y Chadwick se reunieron con parlamentarios DC, en casa del senador Andrés Zaldívar, para avanzar en un gran acuerdo nacional pro cambios en el sistema de elecciones. Así, a fines de octubre, ProyectAmérica y el Centro Democracia y

2. Véase http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4936.html La encuesta Adimark de enero 2012 confirma esta baja al mostrar el descenso de la aprobación presidencial del 34% al 33%, y la de marzo de 2012 mantuvo la aprobación en 33% pero aumentó la desaprobación del 57% al 58%; la aprobación del Gobierno bajó del 35% al 31%, y su desaprobación subió del 59% al 61%. Véase http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/01ev_gob_ene12_.pdf y http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/002ev_gob_feb012_.pdf
3. Primarias para las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales; elección directa de los consejeros regionales; voto para permitir el de los chilenos en el extranjero; probidad en la función pública; plebiscitos y consultas comunales; iniciativa ciudadana de ley; regionalización y nuevas funciones a los gobiernos regionales; y transparencia en la función pública. *El Mercurio*, 21 de enero 2012.

Comunidad (CDC) dieron a conocer una propuesta para modificar el actual sistema, reemplazándolo por uno proporcional de lista abierta, además de modificar la actual composición del Congreso. La iniciativa fue parte de un trabajo de cinco años liderado por Edmundo Pérez Yoma y el alcalde DC Claudio Orrego, quienes comandaron a un equipo de expertos electorales[4].

Las respuestas de RN y la UDI no se dejaron esperar: sus directivas declararon que no podía haber una propuesta sin acuerdo previo con la Alianza[5]. A fines de octubre la incomodidad con la iniciativa presidencial era tal que llevó a Carlos Larraín a afirmar que "plantear olímpicamente la revisión del sistema electoral en un momento de gran inestabilidad general, a mi entender, y espero que nadie se ofenda, linda con la locura"[6].

A pesar de esta oposición frontal, el Ejecutivo continuó sus conversaciones con la DC y explicó su postura a la UDI, logrando abrir brechas al interior de la Alianza. Así, Alberto Cardemil (RN) reconocía que estaba "dispuesto a pagar un peaje con reformas políticas y tributarias para tender puentes con la DC", dado que la Alianza debía abrirse a cambios en el binominal para ampliar su base[7]. Aspiración que tenía antecedentes a fines de 2010, cuando Carlos Larraín afirmaba que era "perfectamente posible entregarles un ministerio al PRSD y a la DC", ampliando la Alianza y revertiendo su minoría en Cámara y Senado[8]. Sin embargo, para la UDI una reforma al binominal significaba perder el poder dentro de la Alianza, abriendo posibilidades de acuerdos RN-DC que la dejarían aislada y definitivamente condenada a ser el más visible extremo derecho del espectro político.

No obstante esas posturas en la Alianza, opuestas a cambios en el binominal, el Ejecutivo continuó con su iniciativa y en diciembre 2011-enero 2012 invitó a los ex presidentes a conversar sobre estas reformas. En reuniones individuales, estos le entregaron propuestas específicas, incluyendo la de Ricardo Lagos sobre reforma tributaria, Michelle Bachelet acerca de la gratuidad en la educación y Eduardo Frei en materia tributaria, desafíos energéticos y regionalización.

Las primeras señales de retroceso se observaron cuando el ministro del Interior señaló que "nuestro sistema electoral necesita una reflexión y eventualmente cambios, y eso lo vamos a conversar como corresponde dentro de nuestra coalición. Posteriormente vamos a conversar con la oposición, pero siempre de cara a la ciudadanía"[9]. Sin embargo, la señal definitiva ocurrió sorpresivamente el 10 de enero, cuando el vocero declaró que el Gobierno no daría prioridad a la reforma

4. *El Dínamo*, 22 de octubre 2011.
5. *La Tercera*, 29 de octubre 2011.
6. *La Tercera*, 27 de octubre 2011.
7. *La Tercera*, 1 de noviembre 2011.
8. Cfr. Capítulo 5.
9. *El Mostrador*, 28 de diciembre 2011.

del binominal dadas las diferencias que esta propuesta generaba, asegurando que aquel buscaría acuerdos en la Alianza antes de impulsar una reforma[10]. Al día siguiente, el Presidente cuestionó los desacuerdos: "Quieren que se haga todo como ellos quieren (…) O se ponen de acuerdo o no hay cambios"[11], y La Moneda aclaró que el cambio al binominal no estaba dentro de sus prioridades para el 2012. A fines de enero el Presidente terminó por sepultar su propia iniciativa, originada tres meses antes, cuando afirmó que "hay prioridades más urgentes que cambiar el binominal"[12]. Sin embargo, a fines del mismo mes, al término del consejo de Gabinete en Cerro Castillo y del Comité Político Ampliado, el Presidente Piñera destacó que el 2012 tendría énfasis en lo social, potenciando las áreas de educación, salud, seguridad ciudadana e incentivos al crecimiento y empleo, confirmando el interés por realizar un ajuste tributario. Agregando —sorpresa nuevamente— ¡perfeccionar el sistema electoral![13]. Con todo, al cumplirse dos años en el Gobierno, el Ejecutivo desechó enviar en 2012 al Congreso una reforma al sistema electoral binominal[14], mostrando una vez más lo confuso de sus señales y su extraña nueva forma de gobernar.

b) El entusiasmo reformista

Entre los parlamentarios, la iniciativa presidencial generalizó un entusiasmo reformista. A comienzos de enero de 2012, senadores de oposición junto a independientes respaldaron la creación de una comisión bicameral para elaborar una nueva Constitución. Posteriormente, en ese mismo mes, senadores de oposición, RN e independientes firmaron proyecto de acuerdo que pedía al Presidente reformar el binominal. Y, a mediados de ese mes, diputados RN y DC buscaban constituir un equipo para establecer la fórmula común para reemplazar el actual sistema electoral.

---

10. *La Tercera*, 10 de enero 2012.
11. *La Tercera*, 12 de enero 2012.
12. Afirmaciones presidenciales: Binominal: "'Hay otras prioridades más urgentes que cambiar el binominal. No podemos esperar para la reforma a la educación o el Ingreso Ético". Reforma tributaria: "'Nuestro plan es enviar un proyecto de reforma tributaria en marzo o abril de este año, que va a significar un aumento moderado en la recaudación". Régimen presidencial: '"El mejor régimen para Chile es el presidencial y no el parlamentario, que conocimos en alguna época y no dio buenos resultados. Tampoco el semipresidencial". Sistema electoral: '"Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un 'sistema proporcional moderado' y un 'sistema mayoritario moderado'? Son palabras". Número de diputados: "'Aumentar el número de diputados de 120 a 150 creo que no es necesario, creo que eso atiende más bien a las necesidades de los propios diputados". *El Mercurio*, 30 de enero 2012.
13. *El Mercurio*, 25 de enero 2012.
14. *El Mercurio*, 9 de marzo 2012.

En ese mismo período la oposición preparaba el texto que presentaría al Gobierno estableciendo, según Osvaldo Andrade (PS), un "sistema proporcional moderado", ante lo cual el ex presidente Lagos afirmaba que esos eran "principios que dejan satisfechos a todos los que consideran que el sistema binominal debe ser superado"[15]. A fines de enero la Concertación entregó su propuesta a La Moneda, subiendo a cinco los senadores y a 150 los diputados. Ante esta propuesta, el PC se desmarcó anunciando que elaboraría su propia propuesta de un sistema electoral proporcional "efectivo" y no "moderado".

c) La propuesta DC-RN

Como si todos los desencuentros anteriores fueran pocos, el 19 de enero fue súbitamente oficializada en el ex Congreso la propuesta conjunta RN-DC de reformas políticas, planteando un régimen semipresidencial e instaurando la figura del Primer Ministro, reformando el sistema binominal por uno proporcional corregido, y dando un mayor protagonismo a los gobiernos regionales.

Nuevamente, la reacción de la clase política fue de incredulidad, sorpresa y rechazo. Por una parte, el Gobierno criticó el pacto RN-DC asegurando que lo desconocía, y el ministro Andrés Chadwick aseguró que La Moneda "tiene la absoluta convicción que la búsqueda de esos acuerdos, en primer lugar y por sobre todo, se buscan al interior de la Coalición", reafirmando que no estaba en los planes del Ejecutivo modificar el sistema presidencialista que impera en la Constitución[16]. A su vez, la UDI, sintiéndose traicionada por RN, los desafiaba: "Que se definan si están en el gobierno"[17].

En el campo socialista la iniciativa dividió las opiniones. La bancada de diputados PS valoró y respaldó el acuerdo y el senador Camilo Escalona declaró: "Ojalá de aquí surja el derrumbe definitivo del sistema binominal"[18]. No obstante, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, criticó el acuerdo afirmando que "la DC va a tener que dar también una explicación de por qué llegó a un acuerdo con RN", agregando que "si el Presidente es sorprendido, si el jefe de Gabinete es sorprendido por el presidente de un partido en que ambos militan, estamos en un problema mayor"[19].

---

15. *La Tercera*, 16 de enero 2012.
16. *La Tercera*, 19 de enero 2012
17. *Cambio21*, 30 de enero 2012.
18. *Cambio21*, 18 de enero 2012.
19. Ibíd. El ex presidente de la DC, Gutenberg Martínez, junto a los senadores Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar y el diputado Jorge Burgos, en representación de la directiva, trabajaron durante tres meses en esta propuesta

d) Otras reformas

A pesar de la confusión política y legislativa, a comienzos de noviembre el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que permitiría el *voto de los chilenos en el exterior*, lo que despertó la crítica desde la UDI, afirmando Juan Antonio Coloma que "el mero acto de inscribirse en el consulado no es un vínculo [con el país], desde nuestra perspectiva"[20].

Igualmente, a fines de diciembre el Senado despachó el proyecto de *inscripción automática y voto voluntario.* Aun cuando diputados DC ingresaron a fines de noviembre un proyecto para restablecer el voto obligatorio, el Ejecutivo promulgó a fines de enero el proyecto original, lo que fue calificado por este como una "revolución democrática".

Por su parte, diputadas de oposición respaldaron la propuesta de *ley de cuotas* impulsada por la ministra Schmidt, destacando que la iniciativa era un aporte a la participación femenina al incorporar "instrumentos que permitan abrir espacios a las mujeres"[21]. Al respecto, Comunidad Mujer propuso cuatro reformas al sistema electoral para mejorar la representatividad femenina en la política: retomar la discusión del proyecto ley de cuotas, avanzar hacia un sistema electoral que incorporara mayores niveles de proporcionalidad, financiamiento público a los partidos políticos para ser utilizado tanto en educación política como en el reclutamiento y preparación de líderes mujeres que compitan a cargos de elección popular, y limitar la reelección indefinida[22].

2. Reforma tributaria

La reforma tributaria fue otro de los temas que tensionó las relaciones políticas al interior de la Alianza. Así, el senador Hernán Larraín (UDI), preocupado por las desigualdades existentes en el país, propuso que el impuesto de primera categoría llegara hasta un 30%, proponiendo que "la gente que tiene bajos ingresos pague cero, cinco o 10%, pero luego se va subiendo a la escala del 10, del 15, del 20, el 25 y el 30"[23].

En una dirección distinta, Libertad y Desarrollo propuso una fórmula que permitía a las personas rebajar impuestos en salud y educación, descontando de su impuesto de segunda categoría y global complementario el gasto que realicen en "capital humano". En el caso de las empresas, propuso que solo las grandes compañías tributaran por utilidades reinvertidas, mientras que las PYMES lo harían

20. *La Tercera*, 1 de noviembre 2011.
21. *La Tercera*, 15 de diciembre 2011.
22. *El Mercurio*, 2 de octubre, 2011.
23. *La Tercera*, 9 de diciembre 2011.

únicamente por las ganancias distribuidas[24]. Por su parte, RN pidió un alza acotada del impuesto a la renta de primera categoría y propuso corregir la elusión producto de la organización jurídica de los contribuyentes.

Las diferencias de opiniones incluyeron a empresarios como Felipe Lamarca, el que propuso elevar los impuestos a las empresas conjuntamente con rebajar el IVA. En la misma línea, Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma, indicó que

> no cabe ninguna duda que es importante estudiar cómo financiar los grandes gastos, como educación y salud, de una forma permanente en el tiempo y con recursos estables, por ejemplo con impuestos. En estos momentos tenemos un reventón social que los empresarios debemos enfrentar, porque nos conviene la estabilidad social (…) La reforma tributaria es un tema que se discute siempre pero lo importante es ver qué tipo de impuesto es el que se aumenta, para que no sean los trabajadores quienes tengan que pagarlo.[25]

En una dirección opuesta, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Lorenzo Constans, hizo un llamado al Ejecutivo a no elevar los impuestos a las empresas, por cuanto los efectos de la crisis internacional ya se estaban empezando a sentir en el país[26]. Igualmente, el presidente de la SOFOFA, Andrés Concha, en la Cena Anual de la Industria, criticó la idea de una reforma tributaria afirmando que "no faltan quienes, con una mirada muy simplista, señalan que una reforma tributaria es el precio a pagar para 'comprar' paz social, dando por hecho que ello no afectará el crecimiento"[27].

Finalmente, el Gobierno anunció que no enviaría el proyecto para mantener en 20% el impuesto de primera categoría, con lo que este bajó automáticamente a 18,5% a contar del 1 de enero. En el debate entró indirectamente a terciar, a comienzos de febrero, el ministro Longueira, cuando indicó que el crecimiento del 6,3% del PIB en 2011 se había realizado con un impuesto del 20%, señalando que no había excusa para una reforma tributaria[28].

3. Conflictos al interior de la Alianza

Las contradicciones y conflictos entre el Gobierno y sus soportes partidarios aumentaron exponencialmente, y las abiertas y crecientes tensiones entre aliancistas

---

24. *El Mercurio*, 2 de enero 2012.
25. *El Mostrador*, 18 de octubre 2011.
26. *El Mostrador*, 30 de noviembre 2011.
27. *El Mercurio*, 3 de noviembre 2011.
28. Véase http://www.df.cl/pib-de-2011-llegaria-a-6-3-y-longueira-insiste-no-hay-excusa-para-una-reforma-tributaria/prontus_df/2012-02-06/222424.html

liberales y conservadores tradicionalistas mostraron, una vez más, la falta de capacidad del Presidente para disciplinar sus fuerzas.

Ejemplo paradigmático de esas tensiones fue el intercambio entre el ministro Chadwick y Carlos Larraín, director de Libertad y Desarrollo, cuando este último cuestionó públicamente el estatismo gubernamental, la crítica gubernamental a los empresarios en su defensa de los consumidores y el intento de realizar una reforma tributaria, todo lo cual a su juicio atentaba contra los principios de libertad y responsabilidad individual, fundamentales para la derecha. Como respuesta el ministro señaló que el origen del cuestionamiento era la molestia con la política gubernamental de disminuir las brechas de desigualdades[29].

a) El conflicto en RN

Las áreas en que se manifestó con mayor crudeza el conflicto fueron el aumento de los impuestos a las empresas, la eventual reforma tributaria, las primeras tratativas para cambiar el sistema binominal y el apoyo de los RN Lily Pérez y Antonio Horvath al proyecto de ley que se oponía al lucro en las entidades educacionales que reciben aportes del Estado.

El debate político abierto se volvió a manifestar en el discurso de bienvenida de Juan Antonio Coloma a la visita del Presidente al Consejo General de la UDI, cuando señaló que el impuesto a los combustibles afectaba a la clase media que "tiene que ser el eje de nuestra acción y el foco de nuestra atención". En la misma línea la UDI salió en defensa de Longueira tras críticas de RN que lo acusaron de "populista" por su opinión de rebajar ese tributo manifestarse molesto con la bancada RN por el proyecto sobre "designados" o reemplazantes no electos de parlamentarios.

Pero el conflicto más crudo se dio entre los críticos de la conducción de Carlos Larraín, dentro y fuera del Gobierno, y sus partidarios, lo que tensionó las relaciones de esa directiva con el Ejecutivo. Oponiéndose a cercanos de Larraín que pedían su repostulación, la disidencia RN comenzó a prepararse para la elección interna de 2012. Así, a fines de noviembre el vocero Andrés Chadwick validó la asistencia de autoridades políticas a actos de partido, aun cuando había asegurado que La Moneda no se inmiscuiría ni participaría en ningún tipo de situación partidaria interna. Ante eso, Carlos Larraín acusó que "son funcionarios de La Moneda que atornillan al revés y le hacen daño al gobierno", vetando la presencia del subsecretario Rodrigo Ubilla en el Comité Político[30].

---

29. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/02/07/el-duro-intercambio-de-fuego-verbal-entre-chadwick-y-el-director-de-ld/
30. *Cambio21*, 29 de septiembre 2011

A fines de noviembre Lily Pérez aseguraba que las "diferencias ideológicas" con la mesa de RN eran "cada día más evidentes y profundas", cuestionando la conducción de Carlos Larraín y afirmando que era "el presidente más conservador" que ha tenido RN[31]. La tensión creció al punto que la disidencia RN comenzó a especular con la posibilidad de fundar otro partido —Renovación Liberal Nacional—, para lo cual el senador Antonio Horvath circuló el documento propositivo "Propuesta Liberal Ciudadana"[32].

b) Las reacciones conservadoras

Otro frente de tensiones fueron las reacciones de los sectores conservadores en la Alianza frente a temas valóricos.

En un documento entregado en La Moneda por Monseñor Ezzati, las iglesias cristianas rechazaron los proyectos sobre aborto y uniones de hecho. La "Carta acerca de los Valores Fundamentales sobre la Vida, el Matrimonio y la Familia" fue dirigida a los tres poderes del Estado, advirtiendo que habían "cambios conceptuales drásticos en la legislación que afectan las profundas convicciones arraigadas en nuestro pueblo". El documento firmado por las iglesias Católica, Ortodoxa, Evangélica, Pentecostal Apostólica, Anglicana y Metodista Pentecostal recordó que el 85% de los chilenos se declaraban cristianos[33].

No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó por segunda vez el requerimiento presentado por 33 parlamentarios UDI, 9 RN, dos independientes y un DC, alegando que el artículo 2 del Proyecto de Ley que Establece Medidas Contra la Discriminación, donde se hace referencia a las minorías sexuales y otros sectores sociales, era contrario a la Constitución.

Por otra parte, el reemplazo del concepto dictadura por régimen militar en el nuevo currículum escolar produjo un fuerte rechazo y la renuncia de uno de sus miembros, el Premio Nacional de Educación, Alejandro Goic. No obstante, de acuerdo al ex Equipo Curricular de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, los cambios que el Ministerio de Educación introdujo en el currículum, especialmente en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales —cambios considerablemente más graves y alarmantes—, no fueron analizados[34].

---

31. *La Tercera*, 27 de noviembre 2011.
32. Véase http://www.elmostrador.cl/media/2011/11/Presentaci%C3%B3n-Propuesta-Liberal-Ciudadana.pdf
33. Véase http://documentos.iglesia.cl/conf/doc_pdf.php?mod=documentos_sini&id=4143
34. Equipo Curricular de Historia, Geografía y Ciencias Sociales hasta marzo de 2010, "Dictadura o régimen militar: la punta del iceberg", *El Mostrador*, 13 de enero 2012.

Favoreciendo al gran empresario pesquero, el Gobierno decidió reemplazar el régimen de límites máximos de captura por armador contemplando dos tipos de licencias para empresas extractivas: un permiso para las compañías que hoy cuentan con cuotas históricas y otro para las firmas que ingresen a través de las licitaciones. Este último solo se aplicaría si había excedentes en las pesquerías. En el caso de la primera modalidad, las firmas deberían pagar un *royalty*. Las compañías que se adjudicaran un porcentaje de la cuota a través de las subastas no estarían afectas a dicho impuesto específico[35].

Como parte de esa política, el ministro de Economía, Pablo Longueira, apoyó la entrega de $4.900 millones de pesos en apoyo a la pesca artesanal para su desarrollo institucional. Los acuerdos de la Mesa de Trabajo Pesquera, que estuvo presidida por el subsecretario de Pesca, se consagrarían en un proyecto de ley que regularía la industria por los próximos veinte años. Los conglomerados pesqueros y los dirigentes de los pescadores artesanales acordaron repartir las cuotas de pesca existentes evitando que el Gobierno enviara un proyecto donde se licitaba el 50% de las cuotas globales de extracción.

Tres grandes conglomerados que controlaban el 76% del sector pesquero nacional, rubro que generaba unos US$3.000 millones anuales, pero que pagaba un *royalty* de solo un 3% de sus utilidades. El 18% de las especies estaban sobreexplotadas y la producción se iba casi por completo a exportaciones. Las críticas no tardaron en llegar, pues con esto se impedía la entrada al mercado de nuevos actores y se aseguraba a los grandes conglomerados cuotas que podían tranzar a voluntad. Asimismo, se denunció que los conglomerados buscaban el reconocimiento como derecho adquirido, la explotación de esos recursos a perpetuidad y, si el Estado decidía alguna vez recuperarlos, debería expropiarles y pagarles lo que corresponda[36].

Otra señal de apoyo al empresariado fue la concesión a treinta años por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso, a Mall Plaza, empresa cuyos principales socios controladores son Falabella y el empresario Thomas Fürst, con el objeto de habilitar paseos, servicios, un centro comercial y eventual construcción de viviendas. El Comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, aseguró que la construcción del centro comercial era "asesinar" el puerto. No obstante, apoyado por el alcalde Jorge Castro y el ministro de Economía, Pablo Longueira, el proyecto

35. *El Mercurio*, 3 de noviembre 2011. Una crítica en: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/12/25/ nueva-ley-de-pesca/
36. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4988:escandalo-en-el-sector-pesquero-gatos-cuidando-la-pescaderia&catid=38:economia&Itemid=57

pagará al Fisco US$1 millón y medio de dólares, pero este se comprometió a pagar a Mall Plaza más de US$21 millones de dólares por la provisión del servicio de desarrollo y mantenimiento de espacios de uso público[37].

La conducta de las empresas continuó mostrando alarmantes rasgos discriminatorios. Así, las Isapres Banmédica y Vida Tres prohibieron afiliar a trabajadores de cincuenta empresas y organismos públicos en forma total, y a otros doscientos en forma parcial de acceder a seguros de salud obligatorios. Entre estos se encontraban el Servicio de Impuestos Internos, casi todo el Transantiago, LAN Express, CENCOSUD, Falabella, municipalidades y la Presidencia de la República, argumentado la alta tasa de licencias médicas que presentan a nivel global estas entidades[38]. Por su parte, Consalud vetó a trabajadores de 619 empresas e instituciones como municipios, operadoras del Transantiago, 163 hospitales públicos y 136 clínicas privadas.

En ese contexto, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal Philippi, acusó a las empresas Agrosuper, Ariztía, y Agrícola Don Pollo, de generar un cartel que controlaba más de un 90% del mercado nacional, solicitando una multa equivalente a unos US$26 millones a cada una. Un mes antes que estallara este escándalo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) firmó un convenio marco con la Asociación de Productores Avícolas (APA) por tres años, prorrogable"[39].

De la misma forma, la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles determinó que Transelec, Endesa, Colbún y Chilectra eran responsables del apagón del 24 de septiembre y de la demora en la restitución del suministro, arriesgando multas por hasta unos US$9 millones[40].

Coincidiendo con la judicatura argentina, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra quienes resultaren responsables por los delitos de contrabando y fraude al Fisco por el ingreso de camiones del *holding* de Horst Paulmann desde Argentina con mercancía rotulada como "ayuda humanitaria", que en la práctica no fue donada a los damnificados por el terremoto, pero que le permitió ahorrar más de un millón de dólares en impuestos. Aun cuando finalmente canceló lo adeudado, el ingreso de esa mercadería "le permitió fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción y liberarse —ilegalmente— de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización"[41].

Esas conductas tuvieron reacciones ciudadanas, como la comunidad de la V Región que se enfrentó con la empresa constructora Reconsa por el destino de las dunas de Con-Con. Entre los dueños y miembros del directorio de la empresa

---

37. *El Mostrador*, 30 de octubre 2011. La concesión se realizó el 10 de noviembre de 2006.
38. *El Mostrador*, 12 de octubre 2011.
39. *Cambio21*, 6 de diciembre 2011
40. *La Tercera*, 6 de diciembre 2011.
41. *El Mercurio*, 16 de diciembre 2011.

figuran Edmundo Pérez Yoma y Carlos Figueroa Serrano, el empresario Álvaro Saieh y el abogado de la oficina Claro y Cía, Sebastián Eyzaguirre[42].

La reacción empresarial ante las regulaciones estatales fue dura, como en el caso del "SERNAC financiero", que creaba la figura de dos mediadores para resolver disputas en materia financiera. Arturo Tagle, gerente general de Banco de Chile, afirmó que ese era

> un proyecto de inspiración derechamente soviética en algunas cosas (…) para tener un sello Sernac hay que tener un contrato visado por una agencia del Estado, y por lo tanto, si quiero tener la aprobación de esta agencia central, voy a tener que hacer el contrato como a una agencia se le ocurrió que tengo que hacerlo. Y si quiero hacer un negocio nuevo, voy a tener que ir a registrarlo a esta agencia nueva para que me lo visen y me digan cómo tengo que hacer el contrato.[43]

A pesar de las regulaciones y defensa de los consumidores, la empresa privada siguió expandiéndose en América Latina. Así, CENCOSUD compró su séptimo supermercado en Brasil: la cadena Prezunic, que tiene treinta locales en Río de Janeiro, en US$390 millones. Con esa adquisición, Brasil representará el 26% de los ingresos de CENCOSUD, unos US$3.640 millones, si se toma en cuenta que el *holding* computará ventas por US$14.000 millones en 2011[44]. Igualmente, se informó que las Isapres obtuvieron ganancias por $47 mil millones entre enero-septiembre de 2011, un 50,1% más que en igual periodo del año anterior[45].

La apreciación ciudadana de la conducta empresarial se reflejó en la encuesta nacional UDP, la que mostró que, mientras en el año 2008 el 23,7% confiaba bastante/mucho en las grandes empresas, en 2011 el porcentaje solo llegaba a 16,5%, ubicándose como el tercer actor en que menos confía la sociedad, después de los partidos y el Congreso Nacional. El nivel socioeconómico y la posición ideológica eran significativos: estratos altos y partidarios de la Alianza manifestaban mayores niveles de confianza en las grandes empresas, aunque siempre en porcentajes inferiores al 27%. A su vez, durante 2011, el total de reclamos de consumidores subió un 20% respecto de 2010.

Con todo, al margen de la gestión ministerial, un importante acuerdo de seis puntos entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue alcanzado a fines de enero, estableciendo:

> 1) Negociación colectiva: mantener como base los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas anteriores, salvo que la empresa atraviese por situaciones como una

42. *El Mostrador*, 4 de enero 2012.
43. *Diario Financiero*, 14 de noviembre 2011.
44. *Estrategia*, 17 de noviembre 2011.
45. *Diario Red Digital*, 20 de diciembre 2011.

quiebra o crisis. El acuerdo simplifica el proceso en al menos tres fases. Abre la posibilidad que sindicatos y empresas negocien abiertamente cualquier tema, como turnos y jornadas. Sin embargo, el sindicato debe representar, a lo menos, al 65% de los trabajadores. Y propone la creación de una comisión que hará seguimientos de los procesos de negociación colectiva y buscará facilitarlos. Dicha comisión estará conformada por miembros de la CPC y CUT; 2) Multi-RUT: en el caso de que una empresa tenga distintos RUT, los trabajadores podrán conformar un sindicato "inter-empresa" durante el proceso de negociación colectiva; 3) Seguridad laboral: apunta a disminuir la tasa de accidentabilidad, fortalecer a los comités paritarios, dando fuero a los representantes de los trabajadores y más atribuciones; 4) Plan anti-crisis: creación de un mecanismo permanente cada vez que la tasa de desempleo regional supere en 1% la de los últimos cuatro años. Dado que las cifras del INE reflejan los datos de meses anteriores, sugiere se tome como indicador los datos del seguro de cesantía; 5) Capacitación: "profundo cambio al Sence", y creación de un sistema donde también los trabajadores determinen quien se capacita; y 6) Seguro de cesantía: proponen elevar el tope de la cobertura de $305 mil a $750 mil, y aumentar la tasa de reemplazo de 50% a 70% en el primer mes (y aumentar las siguientes); toda empresa que no desvincule a trabajadores en 24 meses se le premiará permitiéndole disminuir el aporte que realiza al Fondo Solidario, del 0,8% actual a 0,7%; que no se descuente de la indemnización el aporte del 1,6% que el empleador realiza a la cuenta individual del trabajador. A través de reuniones tripartitas con el gobierno buscarán materializar en leyes tales acuerdos.[46]

Continuando con su política de abrir nuevos focos de renta privados, el Ministerio de Minería anunció que a partir de fines de este año se licitarían Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) —mineral que el Estado no puede concesionar— para que empresas nacionales y extranjeras exploten el mineral devengando un Pago Especial de Litio (PEL), el 7% del valor de las ventas anuales de la explotación, pago que no es un impuesto ya que no es un sistema de concesionalidad[47]. Este tema (séptima nueva medida de la Agenda de Impulso Competitivo anunciado por el ministro Longueira a comienzos de febrero) fue uno de los primeros en salir a la palestra en la primera semana después de la elección de Piñera, cuando los empresarios exigieron reformas al sistema regulatorio, entre ellos al litio, preocupados por la propuesta del entonces senador Ricardo Núñez de declarar a este mineral como material estratégico incorporado en la Constitución[48]. Para Cristián Cuevas, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la política de "Contratos Especiales de Operación del Litio es contraria a la soberanía de nuestro país y al interés de la nación porque principalmente vulnera la legalidad de la Constitución.

46. Cfr. *La Tercera*, 27 de enero 2012.
47. Véase http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=93192
48. *El Mercurio*, 26 de enero 2010, pág. B3.

Lo que intenta el gobierno es buscar subterfugio cuya finalidad es destrabar la declaración de inconsebilidad [no poder concesionarlas] del año 79 para entregarlo a empresas transnacionales, cuando, desde el punto de vista nuestro, debería impulsar el propio Estado, a través de CODELCO"[49].

En el área energética, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Energía (ENE), y los seis ejes para el desarrollo del mercado eléctrico: eficiencia energética, despegue de las energías renovables no convencionales, mayor preponderancia al recurso hídrico, menor dependencia externa, carretera eléctrica pública, mercado eléctrico más competitivo y avance sostenido en las opciones de interconexión eléctrica regional. No renuncia al uso del carbón y no se desarrollará la energía nuclear[50]. De acuerdo a Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, esa política es un rechazo "a las demandas ciudadanas de la Región de Aysén, que explícitamente pide plebiscitos vinculantes respecto de este tipo de megaproyectos. [L]as medidas se orientan a facilitar las concesiones eléctricas y establecer franjas fiscales, lo cual privilegia a las empresas eléctricas por sobre los derechos de otras actividades productivas [y] retrotrae al país a la matriz de los años 80".[51]

5. La captura del Estado

Permanentes conflictos de intereses mostraron a diversos funcionarios de Gobierno que, provenientes del mismo sector en el área privada, mantuvieron vínculos personales con estos últimos y, en sus nuevas posiciones, realizaron contratos entre ellos o bien formularon políticas que los favorecieron.

Lo reiterado de estas prácticas permite redefinir conceptualmente el fenómeno, el que más que un mero y puntual conflicto de intereses a nivel personal, se convirtió en una sistemática captura del Estado por parte de intereses y organizaciones empresariales. Así, a fines de diciembre, el Presidente cambio a los titulares de Educación y Agricultura, donde asumieron, respectivamente, Harald Beyer, subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP) —vinculado a la familia Matte— y Luis Mayol, empresario y presidente de la SNA, ambos de Renovación Nacional[52]. En el caso de la SNA, sus últimos presidentes han estado

---

49. Véase http://www.theclinic.cl/2012/02/09/el-gobierno-se-va-a-enfrentar-al-pueblo-por-esta-agresion-a-la-soberania/
50. *El Mostrador*, 28 de febrero 2012.
51. *La Tercera*, 5 de marzo 2012.
52. El caso de Mayol es significativo de las estrechas relaciones entre los miembros del Gabinete y las grandes empresas privadas. Este, en 1977, ingresó como director a Copeval y desde el 2003 ha sido el presidente de su directorio, empresa que es la mayor distribuidora de agroinsumos, maquinaria, riego tecnificado, ferretería agrícola, veterinaria y servicios agrícolas al sector, y abastece a Agrosuper, Super Pollo y Ariztía, acusadas de coludirse para subir los precios del

participando activamente del Gobierno. A Luis Mayol se sumó Ricardo Ariztía (pro UDI), director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), quien fue presidente de la SNA entre 1997 y 2000, y era Consejero Honorario de la entidad y miembro de su Comisión. En esta calidad firmó un millonario contrato con la SNA, donde su hijo integraba el Consejo Nacional[53]. Otro ex presidente, Luis Schmidt (2005- 2009), es embajador en China, y Gustavo Rojas, quien fue gerente de Desarrollo y Estudios y secretario general de la SNA, es el actual Director de la Oficina de Políticas Agrarias (Odepa)[54].

Otro caso fue el de María Francisca Correa, ex gerente comercial de la red de jardines infantiles Vitamina. Desde el 3 de agosto, Correa era la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), y como tal tenía a su cargo 1.900 jardines y doce mil funcionarios, y ofreció "tercerizar" los servicios de guardería para clientes como TVN, Clínica Santa María, IBM o el Banco Santander, entre otros. Esta empresa estaba controlada por otras figuras del mundo financiero, como Antonio Cruz de la empresa Aurus, que asesora inversionistas; Gonzalo Larraguibel de la consultora organizacional Virtus; Gonzalo Bofill, presidente de empresas Carozzi, y Verónica Edwards, vicepresidenta de Adimark. La JUNJI tiene relación con los jardines privados que opera Vitamina, ya que según una ley de 2003 debe otorgar una certificación de calidad o "empadronamiento" a todos los establecimientos abiertos de ese año en adelante, obteniendo un rol que le permite funcionar y que acredita el cumplimiento de ciertos estándares académicos, de infraestructura y personal[55].

Una situación similar —que no se produjo—, fue en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la que en sus nuevas bases de proveedores habría permitido que una sola empresa manejara el 20% de las raciones a nivel nacional. Esa concentración del modelo de la licitación habría permitido que solo cinco proveedores tuvieran el total de las raciones del país, perjudicando a las 36 empresas pequeñas y medianas que actualmente la proveen, las que con las nuevas condiciones no habrían podido competir. Sin embargo, el Tribunal de Contratación Pública acogió el recurso interpuesto por las PYMES y suspendió la millonaria licitación que beneficiaba solo a grandes empresas[56].

En este marco, un grupo de diputados DC calificó como una violación al principio de probidad administrativa la participación del ministro de Hacienda, Felipe

pollo. La Asociación de Productores Avícolas, APA, acusada de organizar "el cartel del pollo" por la Fiscalía Nacional Económica, es uno de los más importantes socios de la SNA, de la cual Mayol fue su presidente. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20111229/pags/20111229164933.html

53. *Cambio 21*, 7 de diciembre 2011.
54. *Diario Financiero*, 6 de enero 2012.
55. *El Mostrador*, 11 de octubre 2011.
56. *Cambio21*, 30 de enero 2012.

Larraín, en la nueva Ley de Pesca, toda vez que fue miembro del directorio de AntarChile, consorcio del grupo empresarial Angelini. Por ello los parlamentarios presentaron la denuncia en la Contraloría.

Pero los conflictos de intereses no solo se dieron a nivel de Gobierno, sino también en el Congreso. En este caso, la Fundación Ciudadano Inteligente mostró conflictos de interés siendo la UDI la que lideraba el ranking de parlamentarios que ocultaban sociedades pese a la obligación de declararlas. Los honorables tenían en total participación en 298 sociedades, de las cuales solo un 66% estaba correctamente declarada[57]. Igualmente, siete parlamentarios con vínculos en colegios y universidades que votaron sí al presupuesto 2012 contaban con participación directa en sociedades inmobiliarias o de asesorías educacionales, que después de la votación en el Congreso seguirían prestando servicios en 2012[58].

A mediados de febrero el ministro Longueira anunció la creación de la Comisión de la Libre Competencia, quedando entre sus objetivos el establecer un nuevo rango de multas para sancionar los delitos contra el libre mercado. Entre los doce miembros de la comisión, al menos cinco de ellos habían escrito informes a favor de empresas investigadas por prácticas desleales y otros habían ocupado cargos en empresas de mercados altamente regulados, como el energético, o industrias que están en la mira de la Fiscalía Nacional Económica, como el *retail*[59].

6. ¿Defensa de los consumidores o populismo?

Anticipándose a unas elecciones municipales en las que la Alianza, producto de la sostenida baja de aprobación del Gobierno y conflictos internos, podría haberse visto perjudicada en sus posiciones, y continuando con la política de intentar obtener apoyo popular, a comienzos de octubre el Gobierno estableció el Subsidio de Elección Solidaria, el que sucedería al Fondo Solidario de Vivienda. Esa medida eliminó los intermediarios, las entidades de gestión inmobiliaria social (EGIS), habilitando a las familias para postular directamente al SERVIU, También eliminó el postular con un proyecto armado, priorizándose a los grupos familiares grandes y a quienes vivían en condiciones materiales más precarias, y fomentaba la construcción en zonas rurales, donde los costos eran más altos[60].

En la misma línea electoral, el ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, envió a fines de octubre un proyecto de ley para entregar un nuevo bono de Asignación Social a 143 mil familias pobres que costaría $10 mil millones. Así, 541 mil personas recibirían

57. *El Mostrador*, 4 de noviembre 2011.
58. *The Clinic*, 30 de noviembre 2011.
59. *El Mostrador*, 10 de febrero 2012.
60. *El Mercurio*, 3 de octubre 2011.

diez mil pesos cada uno. El proyecto incluyó el subsidio al Trabajo de la Mujer, de hasta $25 mil mensuales, y el bono por Excelencia Académica de $50 anuales a los alumnos que fueran parte del 15% más destacado de cada curso entre 5º básico y 4º medio.

Igualmente, en defensa de los consumidores, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunció que a partir de febrero de 2012 la Subsecretaría de Previsión Social informará mensualmente cuál es la AFP más barata y la más cara en el sistema previsional; a mediados de enero, el Presidente encabezó el lanzamiento de la Portabilidad Numérica Móvil en todo el país; y la Cámara aprobó el proyecto de ley que eliminaba de los registros del DICOM a quienes mantenían deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 2011 y que fuesen inferiores a $2.500.000. En ese contexto se escuchó a Jovino Novoa advirtiendo que el Gobierno será mal evaluado si avanzaba solo en la lucha contra la desigualdad y los abusos, cuando era necesario generar crecimiento y seguridad ciudadana[61].

En el área bancaria, el "SERNAC financiero" impuso una serie de exigencias a los proveedores de crédito relativas a la información a los clientes, estableciendo un Sello SERNAC a quienes permitan que la entidad revise sus contratos. Entre otras medidas, las cotizaciones de los créditos serían por siete días; el consumidor podría terminar anticipadamente los contratos (tarjetas de crédito, cuentas corrientes, etc.); se terminaban las ventas atadas; el consumidor podría conocer el costo final de los créditos y comparar con mayor facilidad; todos los contratos deberían tener una hoja de resumen comparable cuando se definieran los reglamentos. También incorporó la figura de mediador y el árbitro financiero, aunque este último punto sería clarificado con otro proyecto que estaba iniciando trámite en el Congreso[62].

Y a inicios de marzo, tras una reunión técnica convocada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunció el envío de un proyecto de ley reduciendo la jornada de las trabajadoras de casa particular puertas afuera de 72 horas a solo 45 horas, asimilando su régimen al del resto de los trabajadores.

Contrastando con la publicidad dada a las medidas anteriores, silenciosamente la Dirección del Trabajo terminó con el concepto de "semana corrida", eliminándola del monto que los empleadores deben pagar por concepto de feriado, afectando a las remuneraciones que se pagan a quienes hagan uso de vacaciones y a las compensaciones e indemnizaciones por feriado que se pagan en los finiquitos[63].

Algo similar ocurrió con la propuesta gubernamental de Ley Corta de ISAPRE. Al respecto, el senador DC Mariano Ruiz-Esquide estableció que "hay que terminar con la carencia de los tres días; terminar con el tema de las licencias tal como está hoy; hacer planes con el IPC de la Salud; obligar a que las Isapres atiendan de por

61. *El Mostrador*, 15 de octubre 2011.
62. *La Tercera*, 19 de febrero 2012.
63. *Cooperativa*, 31 de diciembre 2011.

vida; cambiar el sistema de controladores por una instancia que esté por encima de las Isapres, Fonasa y el Gobierno; exigir el control ético de los profesionales de la salud; y terminar con la tabla de factores"[64]. En la misma línea, Rafael Urriola consideró esa ley como "una sutil privatización de la autoridad sanitaria y de las prioridades en salud, así como a incrementos notorios en los costos de la salud para la población[65].

En el área de vivienda, el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile cuestionó las cifras entregadas por el Gobierno, que mostró un avance de 47% en la reconstrucción de viviendas tras el terremoto de 2010, estableciendo que la reconstrucción debía medirse en función de la cantidad de viviendas entregadas, por lo que el avance real era de un 10%, ya que vía subsidio los damnificados habían podido comprar 12.248 casas (10.463 nuevas y 1.785 usadas), de un total de 110.000 viviendas que resultaron destruidas[66]. Ante la demora en la entrega de viviendas el Presidente informó que "hemos decidido diseñar un nuevo programa, el dar una vivienda o irse a vivir con un familiar aportando el subsidio de arriendo"[67], solución temporal de arriendo de una vivienda subsidiada por el Estado con un tope de $ 150 mil.

7. Movimientos sociales

A pesar del receso estudiantil, el efecto político de los movimientos sociales continuó dejándose sentir en la escena política nacional.

a) Movimiento estudiantil

Las permanentes diferencias de opinión al interior de la Alianza y del Gabinete en torno al tema educacional se volvieron a evidenciar a inicios de noviembre de

---

64. Centro Democracia y Comunidad, *Informe de Coyuntura*, segunda quincena de septiembre 2011.
65. "Plan Garantizado de Salud (PGS). ¿Cuáles serán estas prestaciones? Las del Plan AUGE, incluyendo el examen preventivo, más las catastróficas (muchas de las cuales ya están en el AUGE pero no se sabe cuáles otras incluirán) y las urgencias. Es decir, este plan básico es equivalente a lo que hoy ofrece FONASA con cobertura más bien universal y garantizada; en las demás enfermedades los afiliados quedan totalmente desprotegidos o cubiertos por planes complementarios que caerían fuera del concepto constitucional de seguridad social (…) el Consejo Consultivo del Plan Garantizado de Salud que "efectuará las evaluaciones de tecnologías sanitarias con un criterio de costo efectividad y de priorización sanitaria (…) un representante de las Isapres, uno de los prestadores privados, uno del Ministerio de Salud y uno de la Dipres". Véase Rafael Urriola, "Ley nueva de Isapres: privatización de la autoridad sanitaria", *Primera Piedra*, 4 de enero 2012.
66. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6450:expertos-del-observatorio-de-la-reconstruccion-cifra-real-de-la-reconstruccion-va-en-el-10-&catid=36:nacional&Itemid=58
67. *El Mercurio*, 22 de febrero 2012.

2011, cuando el ministro Larroulet informaba que "no es descartable [una] venta de activos del Estado para financiar proyectos de Educación". De inmediato el vocero, Andrés Chadwick, negó la posibilidad de realizar nuevas privatizaciones de sanitarias —vía CORFO— para financiar un aumento de gasto en educación: "No está considerada la venta de nuevos activos del Estado, y esa es una decisión asumida por el Presidente"[68].

A inicios de octubre el conflicto estudiantil se canalizó a través de una mesa de diálogo estudiantes-Gobierno, la que solo alcanzó a sesionar en dos ocasiones, acusando los estudiantes intransigencia del Gobierno. Universitarios, secundarios y profesores plantearon la necesidad de un sistema de enseñanza público y gratuito en todos los niveles, concretar el financiamiento basal, el aporte fiscal directo a las universidades estatales y gratuidad de al menos el 70% del estudiantado. Frente a lo cual el ministro Bulnes replicó que la gratuidad debía estar focalizada en las familias más vulnerables y en la clase media: "No creemos en gratuidad para los más ricos"[69]. Ante esta reacción la CONFECH llamó a no comenzar el segundo semestre, confirmó su participación en el paro convocado por la CUT para el 18 y 19 de octubre y llamó a "radicalizar la movilización", iniciando una marcha no autorizada el 6 de octubre, la que dejó como saldo 168 detenidos y treinta heridos.

Simultáneamente, la Mesa Social por la Educación Pública del Movimiento Social por la Educación (compuesto por la CONFECH, estudiantes secundarios, profesores y apoderados) organizó, a comienzos de octubre, el "Plebiscito por la Educación", en el que participaron casi 1,5 millones de votantes: 95% de los votantes se pronunció a favor de la educación pública y gratuita, 92% por desmunicipalizar, 89% por terminar con el lucro en educación y 95% por instalar el plebiscito vinculante. La movilización estudiantil también se proyectó internacionalmente, y a mediados de octubre sus líderes fueron recibidos en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y Camila Vallejo habló ante miles de "indignados" en París.

Después de fracasado el diálogo con los estudiantes, el Ejecutivo decidió llevar la discusión y alcanzar acuerdos en el Congreso. El 11 de octubre el ministro Chadwick confirmó que el Gobierno planeaba saltarse a los estudiantes y acudir al Parlamento, y el 13 de octubre Bulnes presentó a los doce expertos que integraron la comisión encargada de generar propuestas sobre financiamiento.

Así, a fines de noviembre el Ejecutivo presentó el presupuesto 2012 con un crecimiento del 5%, del cual el Ministerio de Educación recibirá US$ 11.650 millones, un crecimiento del 7,2%, la menor variación desde 2006. Aumentó en 21% el monto de la subvención escolar preferencial (SEP) que recibían los colegios con niños de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Luego que el oficialismo solicitara

68. *La Segunda*, 3 de noviembre 2011.
69. *El Mercurio*, 6 de octubre 2011.

la gratuidad de la educación superior para el 60% de los estudiantes, el Gobierno mantuvo la garantía solo para el 40% de las familias más vulnerables. Los dirigentes estudiantiles y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile criticaron el presupuesto 2012 para educación. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago calificó como "una vergüenza que parlamentarios después de siete meses de movilizaciones, después de que miles de chilenos se han manifestado y han dicho que quieren cambios, hoy día estén legislando por dar continuidad a un sistema educacional que no resiste"[70].

A mediados de noviembre líderes opositores presentaron el proyecto de reforma educacional "El Presupuesto de Educación 2012: Un nuevo paso hacia la reforma estructural de la educación chilena"[71], conteniendo ocho ejes, entre los cuales plantea gratuidad hasta el séptimo decil, una reforma tributaria y unificar el sistema de becas. Inmediatamente, la CONFECH rechazó las negociaciones entre Gobierno y oposición y ratificó el llamado a paro para el 24 de noviembre. Esta tensión volvió a generar diferencias en el seno de la Concertación cuando la senadora Ximena Rincón (DC) aseguró que era un error construir acuerdos sin el movimiento estudiantil, ante lo cual el senador Eduardo Frei le respondió: "Ya no hay tiempo para buscar la opinión del movimiento estudiantil"[72].

En materia del lucro en educación, el 10 de noviembre Piñera firmó el proyecto que creaba la Superintendencia de Educación Superior, y en la ocasión el ministro Felipe Bulnes reafirmó que "las universidades son corporaciones sin fines de lucro". La iniciativa esperaba regular que las instituciones de educación superior, públicas o privadas, no pudieran retirar, ya sea en forma explícita o camuflada, arriendos, tercerización de servicios y altas dietas de directorio.

A comienzos de 2012, el Senado, con el voto de dos parlamentarios de RN, decidió legislar sobre el proyecto contra el lucro. El nuevo ministro Beyer criticó la iniciativa. Sin embargo, el 10 de enero, Arturo Fontaine, director del CEP, distanciándose de la postura tradicional de la derecha, propuso que:

> sería en principio preferible aceptar tres tipos de universidades: estatales que por sus estatutos sean instituciones tolerantes y pluralistas; corporaciones privadas sin fines de lucro como lo son muchas de las mejores universidades del mundo y que se financian con donaciones de particulares, aportes estatales y matrículas; y universidades con fines de lucro abierto y transparente. En este último caso, debieran pagar impuestos como cualquier empresa comercial, no podrían recibir donaciones que se descuenten

70. *El Periodista*, 29 de noviembre 2011.
71. Véase http://www.lanacion.cl/educacion-texto-completo-de-la-propuesta-de-oposicion/noticias/2011-11-14/152536.html
72. *La Tercera*, 20 de noviembre 2011.

> de impuestos ni recibir, en general, financiamiento del Estado (préstamos con aval del Estado, por ejemplo).[73]

A fines de diciembre se aprobó en general el proyecto del Gobierno que bajaba el interés del Crédito con Aval del Estado, pero no incluyó una serie de acuerdos a los que había llegado con la oposición[74]. De acuerdo a *El Mostrador*:

> BCI, Santander y Scotiabank son los bancos que más partido le han sacado al CAE Mientras los alumnos estudian, los bancos hacen un estupendo negocio. No por la tasa de interés que les cobran, sino porque le venden al Fisco la cartera riesgosa y éste les paga altos intereses. La crisis de 2009 fue en extremo beneficiosa y disparó los costos para el Estado. La banca se deshizo del 67% de los créditos y cobró un 50% de sobreprecio.[75]

Finalmente, ratificando el aislamiento del Gobierno en el mundo universitario, el NAU (Nueva Acción Universitaria) asumió un cuarto período en la FEUC, eligiendo a Noam Titelman con un 52,77% de los votos. A su vez, en la FECH ganó Gabriel Boric, de la lista Creando Izquierda, asumiendo como vicepresidenta Camila Vallejo.

En suma, las demandas ciudadanas por una educación pública gratuita y de calidad, el fin del lucro, la reorganización del sistema de becas, el apoyo a las universidades estatales y a la educación técnico profesional, y un financiamiento estable para financiar estas políticas, lo que exigiría una reforma tributaria, fueron temas que quedaron pendientes dado el receso de verano y la recuperación de clases. Estos volverían a adquirir notoriedad después de marzo de 2013, cuando el redespliegue de la iniciativa estudiantil y ciudadana mostrara toda su fuerza.

Anticipándose a la represión anunciada para las movilizaciones de 2012 por Carabineros (véase infra), Camila Vallejo denunció ante la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y los relatores especiales de Naciones Unidas para la Educación y la Pobreza Extrema, en la ONU, Ginebra, la "criminalización del movimiento de protesta social", al penalizar "con tres años de cárcel toda forma de protesta social que se desarrolló en 2011, como ocupaciones de servicios públicos, cortes de tráfico y otras formas de ocupación pacífica, y no sólo a los que comenten estos actos, sino a los que los convocan ( ) la represión no sólo pasa por el amedrentamiento político y amenazas constantes, sino también por la represión física y las detenciones ilegales que hoy aumentan dentro de un marco ilegal"[76].

---

73. *El Mostrador*, 10 de enero 2012.
74. *Radio.uchile.cl*, 20 de diciembre 2011.
75. *El Mostrador*, 31 de enero 2011.
76. *La Tercera*, 11 de febrero 2012.

b) Aysén

La aprobación del proyecto HidroAysén tuvo consecuencias sociales inesperadas. Para los ayseninos fue la señal de alarma sobre las consecuencias que tendría este tipo de actividades en las condiciones de vida de la región. De acuerdo al obispo Luis Infanti, no era la región la que construiría su futuro, sino que "son otros los que deciden grandes proyectos, que pueden marcar un cambio radical en la geografía y en la vida económica, social, política y cultural de la región"[77]. La provisión de energía eléctrica, más la abundancia de agua, estaría pavimentando la entrada de las empresas mineras en la Patagonia con las devastadoras consecuencias medioambientales y turísticas que ello tendría. A esta amenaza se sumaron las malas condiciones de vida, salud y educación, la carestía de los combustibles y el permanente aislamiento de la zona, todo lo cual creó las condiciones para la masiva movilización regional.

Por tales razones, el 14 de febrero pescadores artesanales se tomaran el aeródromo de Melinka y otros grupos cerraron el acceso a Chacabuco. Las manifestaciones de adhesión a la movilización convocada por el Movimiento Social por la Región de Aysén, integrado por más de treinta organizaciones regionales, se extendieron rápidamente a Coyhaique, Islas Huichas, Mañihuales, Puerto Cisnes y Chile Chico, sumándose a ella todos los sectores sociales, económicos y políticos, tanto de Gobierno como de oposición.

La demanda regional se resumió en un petitorio de 11 puntos:

> Solución al alto costo de los combustibles (petróleo, bencina, parafina, gas, leña). Salud de calidad (infraestructura, especialistas, recursos tecnológicos adecuados). Equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado, nivelación de zona, estabilidad para los funcionarios públicos). Generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) para que sea la región la que decida sobre dos temas esenciales: la construcción de represas y el respaldo a Aysén como reserva de vida. Universidad pública regional de alta calidad y formación académica nacida de los intereses y necesidades de los ayseninos. Regionalización de los recursos naturales (agua, recursos hidrobiológicos, mineros, silvoagropecuarios). Tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca artesanal, producto de políticas públicas erradas que benefician esencialmente a los grandes industriales y exterminan nuestros recursos hidrobiológicos, además de entregar derechos de pesca en propiedad y recursos bentónicos para los 3.000 pescadores de la región de Aysén. Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básica (electricidad, agua, alimentos esenciales). Pensión regionalizada para los adultos mayores

77. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6453:luis-infanti-obispo-de-aysen-el-fondo-de-este-movimiento-es-el-cuestionamiento-a-las-privatizaciones-&catid=130:entrevista&Itemid=104

y personas con capacidades diferentes que viven en Aysén. Rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino.[78]

A la frustrada gestión inicial del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, le siguió una fuerte represión de Carabineros enviados desde Santiago. Sus excesos, en el fallido intento de controlar el orden público, provocaron que miembros de la Asociación Nacional de los Funcionarios Públicos (ANEF)[79] se tomaran pacíficamente, por una hora, la primera comisaría de Coyhaique, exigiendo "¡No más represión!", y el Instituto de Derechos Humanos denunciara el actuar "indiscriminado y desproporcionado" de Carabineros en Aysén"[80].

El manejo del conflicto por parte del Gobierno fue, desde su inicio, desprolijo. Una semana después de iniciado, con la visita del ministro de Salud, Jaime Mañalich, se logró un rápido acuerdo en materia de salud, pero no hubo anuncios por el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, derivando las respuestas sobre el costo de los combustibles al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez.

A estos primeros interlocutores fallidos les siguieron declaraciones cambiantes y encontradas de los ministros visitantes. Tal fue el caso del ministro Mañalich, quien inicialmente declaró: "Les encuentro razón a los ayseninos, porque efectivamente existe esa sensación de abandono[81]", para después denunciar al movimiento Patagonia sin Represas de estar agudizando el conflicto, acusar equivocadamente a los manifestantes de la muerte de una persona por los bloqueos de caminos, concluyendo que "si yo fuera el ministro del Interior, habría aplicado la Ley de seguridad del Estado"[82].

---

78. El petitorio fue firmado por: Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Región de Aysén; Central Unitaria de Trabajadores, Coyhaique; Pescadores artesanales de Aysén; Agrupación de los Derechos Ciudadanos de Aysén; Movimiento Ciudadano Patagonia Unida; Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas; Agrupación Jóvenes Tehuelches; Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén; Comisión Agua y Vida, Vicariato Apostólico de Aysén; Corporación Costa Carrera; Junta de Vecinos Michelatto de Puerto Aysén; Federación de Pescadores de Melinka; Sindicato de Pescadores Artesanales Nuevo Horizonte de Puyuhuapi; Agrupación de Mujeres Emprendedoras por un Futuro.
79. *El Mostrador*, 22 de febrero 2012. De acuerdo al Programa de Seguimiento de Violencia Policial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de la mitad de detenidos en la región tiene lesiones producto de balines. El informe fue presentado a la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados. Véase al respecto *El Mostrador*, 9 de marzo 2012. Según, Lorena Fries, Directora del IDH, existe "una práctica extendida de uso de escopeta antimotines [y una] cultura institucional que favorece excesos en las actuaciones policiales [por lo que] es necesario revisar protocolos de entrenamiento, protocolos de formación y tener un debate público sobre lo que estamos entendiendo por orden público y por uso del espacio público". Véase http://www.cooperativa.cl/indh-la-cultura-institucional-de-carabineros-favorece-las-actuaciones-fuera-de-margen/prontus_nots/2012-03-08/085112.html
80. *El Mostrador*, 25 de febrero 2012.
81. Véase http://www.biobiochile.cl/2012/02/22/manalich-por-aysen-el-eje-del-conflicto-es-tratar-el-tema-del-alto-precio-de-los-combustibles.shtml
82. *El Mostrador*, 2 de marzo 2012.

El empoderamiento a los negociadores gubernamentales fue retórico, tal como en el caso de la intendenta Pilar Cuevas, a quien inicialmente se le entregó toda la autoridad para resolver el problema para luego ser deslegitimada con la vista de los ministros. Incluso estos fueron debilitados por La Moneda, como el ministro de Energía, el que llegó a Coyhaique iniciando conversaciones, las que quedaron en cero después que La Moneda cambió su postura y le exigió al Movimiento deponer las tomas antes de instalar la mesa de negociación. Este endurecimiento de la postura gubernamental fue en reacción a la crítica de la UDI de no controlar bien el orden público y en prevención de movilizaciones anunciadas de estudiantes y ciudades (Calama).

Con todo, el 8 de marzo los dirigentes del Movimiento Social por la Región de Aysén suspendieron los bloqueos y el Ejecutivo, a dos días de celebrar su segundo año de Gobierno, volvió a la mesa de diálogo. Pasado el aniversario, el ministro Álvarez, siguiendo instrucciones de La Moneda, rompió las conversaciones al intentar dividir el movimiento. Un cambio posterior de política del Ejecutivo permitió la reanudación de las conversaciones, esta vez en La Moneda, finalizando el conflicto abierto y abriendo paso a las mesas sectoriales. La exclusión del ministro Álvarez de estas últimas rondas de negociación percutó su renuncia al cargo.

c) Otros movimientos sociales

i. El fallo del *Tribunal Laboral* de Valparaíso estableció que las autoridades no podían despedir arbitrariamente a los funcionarios públicos, por lo que el Ministerio de la Cultura debía cancelar indemnizaciones por más de $8 millones de pesos a una de sus trabajadoras. Esa sentencia se sumó a la de la Corte Suprema, que resolvió que el Ministerio de Hacienda no podía aplicar un instructivo de control de comportamiento a los funcionarios públicos que participaran de las movilizaciones del sector.

ii. A fines de septiembre *funcionarios de la Salud Municipalizada* iniciaron un paro nacional de la salud primaria para evitar la privatización del sector. Carolina Espinoza, presidenta de Confusam, declaró que “el ministro tiene como objetivo domar a un gremio que es nacional, fuerte, que demanda una mejor salud pública y concretar la agenda paralela que este Ministerio todo el tiempo ha implementado, que significa privatizar la salud pública, hacer de esto otro nicho de negocios”[83].

iii. *Protestas de pobladores* por cambios a la Ficha de Protección Social que medía la pobreza denunciando que se estaban realizando de manera unilateral, sin consulta a los pobladores, alzando injustificadamente los puntajes

83. Véase http://www.cooperativa.cl/confusam-y-paro-nacional-le-decimos-al-gobierno-que-debe-mejorar-la-salud-publica/prontus_nots/2011-09-28/083458.html

de los vecinos. El ministro Joaquín Lavín señaló que era necesario modificar el modelo de catastro por cuanto había permitido "que personas que no son pobres hayan obtenido beneficios a veces falseando sus datos y ha perjudicado a personas que sí lo son"[84].

iv. *Mapuches*. El Tribunal Oral de Temuco desestimó la aplicación de la Ley Antiterrorista y absolvió por falta de pruebas a los *mapuche* Mauricio Huaiquilao Huaiquilao (34) y Luis Tralcal Quidel (34), acusados de incendio y amenazas terroristas, incendio común y tenencia de municiones y explosivos por el Ministerio Público, sindicados por la fiscalía como miembros de la Coordinadora Arauco Malleco. Los jueces desestimaron la aplicación de la Ley Antiterrorista porque "no se acreditó legalmente la concurrencia de las condiciones y requisitos que la hacen procedente". Y absolvió a los acusados porque, a juicio del tribunal, las pruebas presentadas por la fiscalía "resultaron insuficientes" para acreditar la participación de ambos en los delitos mencionados.

A fines de 2011 el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, entregó 2500 hectáreas de tierras compradas a las comunidades Antonio Ñirripil y Didaico, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). El terreno del fundo Santa Rosa, que favorecería a trescientas familias *mapuche*, significó una inversión para el Estado de $3.500 millones. Pertenecía a la empresa Forestal Mininco y ambas comunidades lo ocuparon en sucesivas ocasiones a partir de 1999. Pichún y Norín cumplieron en 2007 condenas de cinco años y un día por incendio y amenaza terrorista contra predios en la zona.

En enero de 2012 el general director de Carabineros en visita a La Araucanía informó: "Les dije a los efectivos que el propósito es bajar los índices de temor"[85].

v. *Gas de Magallanes*. A un año de la crisis del gas en Magallanes se anunciaron nuevas movilizaciones dado que no había luces sobre la aprobación del proyecto de ley de tarificación del gas acordado con el ministro Laurence Golborne, cuando este ocupó la cartera de Energía para dar solución a la crisis.

8. Derechos humanos

La violación masiva de los derechos humanos durante la dictadura continuó teniendo presencia. Así, familiares de Ejecutados Políticos solicitaron al ministro de Defensa, Andrés Allamand, el rastreo de la costa de Quintero en busca de restos de personas lanzadas al mar desde helicópteros militares en el llamado caso "retiro de televisores"[86].

---

84. http://zoltankarpathy.wordpress.com/page/3/
85. *La Tercera*, 13 de enero 2012.
86. *Cambio21*, 29 de septiembre 2011.

Igualmente, temas relativos al respeto de los derechos humanos tuvieron una amplia presencia. A la denuncia en la Fiscalía Militar de Valparaíso contra cuatro carabineros de Fuerzas Especiales por detención ilegal, tortura y vejación injusta (estando detenido el fotógrafo Francisco Maturana un oficial introdujo en su pantalón el arma con que se lanzan bombas lacrimógenas), se le sumó la crítica del Relator de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, quien criticó el "deplorable" y "desproporcionado" uso de la fuerza para reprimir manifestaciones estudiantiles, señalando que tal proceder "no es algo compatible con la convivencia democrática"[87]. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos denunciaron violencia policial, tortura y vejámenes a mujeres, uso desproporcionado de la fuerza que se observó en la intervención de Fuerzas Especiales en una sesión de la Cámara de Diputados, en los enfrentamientos con los encapuchados y en las marchas pacíficas.

Con estos antecedentes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con el general director de Carabineros, Gustavo González, a quien le presentó un informe sobre el accionar policial en manifestaciones ciudadanas. El escrito, entre otros puntos, indicaba que se detectaron efectivos sin su debida identificación, que el personal no distingue entre manifestantes pacíficos y violentos, y que en vehículos policiales se generan espacios "sin control", lo que daría cabida a abusos.

Como reacción ante estas acusaciones, Carabineros refutó las imputaciones, especialmente la referida a que en los buses policiales no hubiera control y se generaran abusos, que no se usaran proporcionalmente los medios disuasivos y que se detuviera a cualquiera[88], y denunció a los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Lautaro Carmona (PC) por probable maltrato de obra a Carabineros durante la intervención de Fuerzas Especiales en una sesión de la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, decidió crear el grupo "Cazadores", equipo especial para detener a encapuchados, iniciar un "plan de control de estrés a las Fuerzas Especiales" para combatir su cansancio físico y mental en tareas de alta presión, y creó un Departamento de Derechos Humanos, a cargo de un coronel, para canalizar todos los asuntos referidos al tema que de alguna manera involucren a la institución. Entre las misiones de la unidad estaban el confeccionar respuestas ante requerimientos del público o autoridades, seguimiento de casos y situaciones procedimentales que se vincularan al tema de derechos humanos, y llevará a cabo el análisis de casos generando líneas de retroalimentación que garantizaran que la normativa y actuar internos no se apartaran de los principios del derecho esencial de las personas. En ese contexto, a fines de diciembre el general director Gustavo González se reunió con doscientos oficiales exhortándolos a desarrollar más trabajo en terreno, aumentando la

87. *La Tercera*, 28 de octubre 2011.
88. *El Mercurio*, 23 de noviembre 2011.

probidad y transparencia. Sin embargo, la práctica fue distinta. En agosto de 2011, el ex director de Carabineros, Eduardo Gordon, anunció la salida del general Sergio Gajardo, segundo jefe de Zona Metropolitana, la subteniente Claudia Iglesias y los funcionarios Patricio Bravo, Francisco Vásquez y Williams Rodríguez, debido a la responsabilidad administrativa en la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez, el 25 de agosto de 2011, por disparo del sargento Miguel Millacura. Al descubrirse el encubrimiento del hecho salió a retiro el coronel de la Prefectura Cordillera, Sergio Uribe (renunció días después); el jefe de la 43ª Comisaría, mayor Roberto Contreras (hizo lo mismo), y el capitán de la Subcomisaría Peñalolén, Carlos Castillo. No obstante, Contreras, Castillo e Iglesias fueron reubicados en otras unidades, por lo que el ministro del Interior solicitó "al general director(s) de Carabineros de Chile un informe por escrito respecto de la situación"[89]. Carabineros emitió un comunicado señalando que "los cargos imputados al mayor Contreras y al capitán Castillo no consideran medidas expulsivas, a diferencia de la subteniente Iglesias, a quien la investigación sumaria ha propuesto la 'separación del servicio', que sólo en su caso confirma la resolución inicial (…) una vez que la resolución quede firme y ejecutoriada y concluya su fuero maternal"[90]. De acuerdo a Gerson Gutiérrez, hermano de la víctima: "Carabineros, en su momento, se comprometió a que los efectivos involucrados en la muerte de Manuel serían apartados de la institución. Esto es una vergüenza y una burla. Creen que porque quizás somos pobres no tenemos derecho a la justicia. Pero no vamos a descansar hasta que se esclarezca la responsabilidad de estas personas en lo que pasó"[91].

Como una forma de distanciarse de la política represiva de Carabineros, el 5 de octubre el Gobierno expulsó en forma inmediata al ex coronel argentino buscado por DD.HH. y condenado en su país por secuestro, tortura y desaparición. A su vez, el Presidente Piñera rechazó cualquier manifestación de apoyo a condenados por graves atropellos a los derechos humanos después que una funcionaria de la Presidencia felicitara a los organizadores por el homenaje al brigadier (r) Miguel Krassnoff. "El Gobierno no respalda ni menos participa en homenajes a violadores de DD.HH.", sostuvo el ministro Andrés Chadwick. Y a fines de enero de 2012, el Presidente promulgó la ley que creaba la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo rol sería la promoción y protección de los derechos humanos, la coordinación de los esfuerzos gubernamentales en esta área, así como recibir, procesar y analizar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado ante los diversos organismos internacionales.

A pesar de estos esfuerzos por darle una nueva cara a la institución, a comienzos de febrero CIPER informaba sobre:

89. *El Mercurio*, 14 de febrero 2012.
90. Ibíd.
91. Ibíd.

> Adquisiciones con sobreprecios millonarios, proveedores privilegiados, como Mellafe y Salas; trampas al sistema de Chile Compra y contratos por trato directo que benefician a los hijos del ex general director Fernando Cordero, son parte de las irregularidades detectadas por CIPER en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). La repartición maneja un presupuesto anual de $ 40 mil millones. La historia incluye pagos hechos por oficiales a ex funcionarias para garantizar su silencio.[92]

9. Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana, principal tema de campaña de Sebastián Piñera, terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de su Gobierno, tanto así que a inicios de noviembre Lorenzo Constans, presidente de la CPC, percibía "una sensación de inestabilidad social que es prácticamente incontrolada"[93].

Las cifras mostraron que las denuncias subieron un 8,3%, y los detenidos en un 9,5%. El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, reconoció que "el robo con intimidación, o violencia, es el delito que presentó la mayor alza en el estudio realizado trimestralmente por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por cada 100.000 chilenos, 97,6 sufrieron un asalto en su casa y/o fueron intimidados o agredidos por un delincuente entre julio y septiembre de este año"[94]. Este delito se incrementó en un 15,1%, y los robos de cajeros automáticos subieron 214% en 2011 respecto de 2010 (hasta octubre 601 atracos, dos delitos diarios). Según Paz Ciudadana y Adimark, en 2011 el índice de victimización aumentó de 33% a 39,3%. Los hogares víctimas de robo en esos últimos seis meses subieron en el sector oriente de Santiago, pasando de 37,2% a 41%, acercándose a los máximos históricos[95]. De acuerdo a los alcaldes del sector Oriente de Santiago, los asaltos a casas y robos de autos eran los mayores problemas y, según la senadora Soledad Alvear (DC), a los delincuentes "no se les acabó la fiesta, están en un baile nocturno permanente"[96].

La reacción del Gobierno fue radicar las razones de la crisis en la presunta acción "garantista" de fiscales y de jueces e impulsar el aumento de las "bajas" penas impuestas a los autores. En esta dirección el Presidente anunció cambios al Código Penal y un endurecimiento de normas, asegurando que se tipificará el delito de saqueo endureciendo las penas[97]. Juan Antonio Coloma afirmó que el país requiere de un Ministerio Público "renovado" y que "rinda cuentas", planteando crear un

---

92. Véase http://ciperchile.cl/2012/02/02/millonarias-irregularidades-en-las-compras-de-una-unidad-clave-de-carabineros
93. *The Clinic*, 9 de noviembre 2011.
94. *El Mercurio*, 7 de noviembre 2011.
95. *La Tercera*, 16 de enero 2012.
96. *Cambio21*, 2 de octubre 2011.
97. *La Tercera*, 2 de octubre 2011.

consejo que fije metas a la Fiscalía y asesore al Fiscal Nacional. Los integrantes serían propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado[98].

Sintiéndose apoyado por esta ofensiva autoritaria, el ministro de Transporte, Pedro Pablo Errázuriz, anunció que aplicaría la Ley de Seguridad del Estado a colectiveros detenidos por bloqueos, decisión que —mostrado una vez más el desorden gubernamental— fue desmentida por el ministro Chadwick, que dijo que buscarían atender sus demandas[99].

Una segunda línea de explicaciones fue culpar a las manifestaciones estudiantiles por la gran cantidad de carabineros ocupados en controlar las marchas incidiría en incremento de delitos, por lo que el Ejecutivo se propuso incrementar las penas por tomas de colegios y universidades, las que arriesgarían hasta tres años de cárcel. Para agravar aun más la situación, el nuevo encargado de Orden y Seguridad de Carabineros, general Alfonso Muñoz, afirmó que estaba preparado para enfrentar las movilizaciones del año 2012[100].

El problema fue más grave aun cuando se analizaron los recursos fiscales destinados a este sector. De acuerdo a Libertad y Desarrollo, el gasto en delincuencia en 2010 fue de US$ 4.478 millones, cifra que representaba el 2,2% del PIB y equivalía a $131.000 anuales por chileno, por lo que recomendaba avanzar en la evaluación de programas y planes de seguridad pública[101]. Ante este cuadro el general González reconoció que "no siempre se entrega un servicio de calidad"[102].

Con todo, el Gobierno dio luz verde a la propuesta del alto mando 2012 de Carabineros, que incluyó el pase a retiro de doce generales pero dejó en actividad al general Bruno Villalobos, en ese entonces Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, quien señaló que las denuncias de presuntas intercepciones telefónicas a parlamentarios que estaría practicando Carabineros constituían informaciones falsas y "de baja calaña", que tenían el propósito de engañar a los diputados. Anunció acciones penales contra los denunciantes y criticó a los parlamentarios por haberse hecho eco de estas versiones[103].

10. Conflictos entre poderes del Estado

La debilidad de la política de seguridad ciudadana del Gobierno y el aumento de los índices de inseguridad llevaron al Ejecutivo a intentar encontrar las causas de

98. *El Mercurio*, 9 de diciembre 2011.
99. *Cambio21*, 26 de octubre 2011.
100. *Radio UChile.cl*, 22 de diciembre 2011.
101. *El Mercurio*, 13 de noviembre 2011.
102. *El Mercurio*, 28 de enero 2012.
103. Véase http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=45485

esta situación fuera de su campo de responsabilidades, iniciándose una escalada de acusaciones contra el Poder Judicial.

El primer conflicto se produjo a comienzos de octubre, cuando el Ejecutivo anunció su proyecto de "servicios de antelación al juicio", el que creaba un comité técnico que facilitaría antecedentes de los imputados y asesoría a los jueces sobre las medidas cautelares a aplicar en cada caso, como la prisión preventiva. El organismo tendría a su cargo el control de las medidas cautelares aplicadas por los tribunales, estableciendo un seguimiento que permitiera a los jueces aplicar esas restricciones de manera informada. Se crearía un comité directivo, del cual saldría el comité técnico, compuesto por autoridades del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Carabineros, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Fundación Paz Ciudadana, entre otras, coordinadas por el Ministerio del Interior. Reunido el Pleno de la Corte Suprema, rechazó por unanimidad el proyecto dado que produciría un tipo de "presión indebida" sobre los jueces.

Un segundo tema conflictivo fue la declaración, a fines de octubre, del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, indicando que el Gobierno evaluaría el criterio de los jueces —a su juicio "ultragarantistas"— antes de decidir su promoción, de manera que las nóminas de los postulantes a la Corte Suprema o de Apelaciones estuvieran informadas sobre la "jurisprudencia y criterio jurídico" de los magistrados[104]. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, rechazó los dichos considerando que la medida representaría un "veto" a los ascensos de jueces afirmando que "ninguna autoridad puede influir en nuestras decisiones"[105]. El Pleno de la Corte Suprema refutó tal medida y envió un reclamo al Presidente Piñera señalando que esta afectaría las garantías constitucionales.

Tratando de bajar el perfil al conflicto, el ministro Chadwick, contradiciendo al ministro de Justicia, afirmó que "el gobierno jamás mirará sentencias para determinar un ascenso", pero agregó que en materia de orden público los jueces "están vulnerando una situación que es importante"[106], en relación a los desórdenes públicos. Sin embargo, continuando con las evidentes contradicciones internas en el Gobierno, La Moneda y la Alianza salieron en defensa del ministro Ribera, siendo el Presidente quien afirmó que se respetaba la independencia del Poder Judicial, pero que se sentían en el derecho de pedirles a los jueces que "apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes"[107].

El clima generado por el Ejecutivo escaló en el Congreso donde el diputado Gustavo Hasbún (UDI) dijo que los jueces "están actuando con verdadera desidia y

---

104. *La Tercera*, 21 de octubre 2011.
105. *Cambio21*, 21 de octubre 2011.
106. *El Dínamo*, 24 de octubre 2011.
107. *El Mercurio*, 25 de octubre 2011.

no están impartiendo justicia", y anunció un proyecto de ley que permitiría acusar constitucionalmente a jueces de garantía[108] imputando a los magistrados de "ser cómplices de querer quebrar la institucionalidad". Acusaciones que los jueces calificaron de "gravísimas". Por su lado, el presidente de la Corte Suprema expresó que a los parlamentarios no les corresponde opinar sobre cómo resuelve un magistrado un conflicto[109], y que si bien "existe cierta inseguridad pública (…) eso no lo han provocado los jueces, ni fiscales"[110].

Durante Convención Nacional de Magistrados en La Serena, los jueces plantearon que los nombramientos de cargos lo hiciera un ente autónomo y que el "gobierno Judicial" quedara en manos de un organismo distinto del Poder Judicial y el Ejecutivo[111].

El conflicto tuvo efectos internacionales cuando Amnistía Internacional manifestó su preocupación ante eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en particular al derecho al debido proceso.

Otro conflicto, de naturaleza distinta, se produjo entre el Ejecutivo y el Consejo de la Transparencia producto de la decisión del subsecretario del Interior de no hacer públicos los correos electrónicos relativos a la reconstrucción y a la negativa de la Fundación Integra, liderada por Cecilia Morel, a entregar las remuneraciones de sus ejecutivos y gastos de donaciones tras el terremoto. Al dejar su cargo en el Consejo, su Presidente, Raúl Urrutia, señaló: "Es peligroso que los consejeros, para que puedan ser reelectos, tengan que emitir fallos que le agraden al gobierno de turno"[112].

Como corolario de todos estos conflictos, el Presidente de la Corte Suprema acusó la mayor presión política desde el fin de la dictadura: "Existe una actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido"[113]. Esta situación fue calificada por el senador Eduardo Frei como "inconstitucional e ilegal".[114]

11. Fuerzas Armadas

El estatuto de excepcionalidad que aún observan las Fuerzas Armadas fue cuestionado, una vez más, ahora por el pleno de la Corte Suprema, el que estableció

108. *La Tercera*, 23 de octubre 2011
109. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/23/509403/presidente-de-la-suprema-le-responde-a-hasbun.html
110. *La Tercera*, 11 de noviembre 2011.
111. *El Mercurio*, 31 de octubre 2011.
112. *La Segunda*, 28 de octubre 2011.
113. Véase http://www.lanacion.cl/juica- pinochet/noticias/2011-12-08/165249.html
114. *Cambio21*, 8 de diciembre 2011.

que “en la actualidad, salvo en aspectos netamente disciplinarios, no se vislumbran razones que justifiquen la existencia de la jurisdicción penal militar en tiempos de paz”[115].

Al mismo tiempo, los escándalos de corrupción al interior de las instituciones armadas continuaron golpeándolas. En el caso de la FACH, el juez instructor de la causa por comisiones ilegales en el caso Mirages, encontró US$ 12 millones en bancos suizos. Por su parte, fueron detenidos dos ex miembros de la Armada, el ex Almirante Patricio Basili y Juan Tapia, en el marco de la investigación por lavado de dinero por el pago de comisiones ilegales en la compra de las fragatas holandesas. El Ejecutivo reaccionó con molestia, modificando la propuesta entregada para el alto mando 2012 y obligando a pasar a retiro a Federico Niemann, ex director general de los Servicios de la Armada, y a Jorge Ibarra, ex director general de Personal, respecto de quienes se había propuesto continuidad. Al respecto, el Gobierno ha implementado la política de renovar los altos mandos de las FF.AA., enfatizando la integración de oficiales de diversos orígenes, especialidades y, principalmente, de diferentes generaciones.

Continuando con la equivocada política de darle un papel a las FF.AA. en el combate al narcotráfico, el Gobierno compró tres aviones para vigilar 192 pasos fronterizos no habilitados en las tres regiones del extremo norte.

12. Concertación

La dinámica política al interior de la Concertación fue igualmente contradictoria y se caracterizó por el inicio de la disputa hegemónica al interior del amplio arco bacheletista, oficializando esta confrontación la candidatura presidencial del ex ministro Andrés Velasco.

Obedeciendo a esta dinámica, el Gobierno desplegó una agresiva campaña contra la ex presidenta Bachelet y el equipo que enfrentó el terremoto del 27 de febrero de 2010. Así el ministro del Interior formulo la tesis de un “juicio político”[116] a la ex presidenta ya que el Ministerio Público acotó la búsqueda de responsabilidades hasta el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende.

Junto con su apertura a la derecha, la DC se abrió a la izquierda en materias valóricas a través de la iniciativa liderada por el senador Patricio Walker, cuando senadores DC presentaron un proyecto alternativo sobre aborto terapéutico, proponiendo un programa para acompañar a familias cuyos hijos sean diagnosticados con “anomalía fetal letal”.

---

115. *El Mercurio*, 12 de octubre 2011.
116. *El Mercurio*, 14 de febrero 2012.

Por su parte, un sector de la Concertación continuó con su política de ampliación hacia la izquierda. En el contexto del debate sobre futuro de la Concertación, el senador Guido Girardi (PPD) y el diputado Marcelo Díaz (PS) convocaron a un foro de "izquierda ciudadana", advirtiendo que la Concertación "terminó su ciclo" y que era necesario un nuevo referente de izquierda para articular "una nueva mayoría que se haga cargo del agotamiento del modelo". En el Consejo Ideológico del PPD se acordó una ampliación hacia las fuerzas de izquierda: Carolina Tohá llamó a privilegiar la alianza con el PS y Guido Girardi aclaró que no busca un nuevo referente, pero sí sumar más actores.

Como respuesta, los dirigentes concertacionistas establecieron que mantendrían la estructura de la Concertación y se propusieron establecer un "relato de proyecto país" con una fuerte autocrítica y una "articulación amplia de la oposición". Así, el documento indicaba que para la "coordinación de la oposición proponemos la realización en el próximo período de un Foro Democrático, que [incluiría] a actores políticos y ciudadanos, para debatir y definir la agenda de la oposición y una metodología de trabajo conjunta [y] vocerías en los temas principales donde pretendemos impulsar reformas (nueva constitución, agenda por la igualdad y desarrollo inclusivo)"[117].

Sumando propuestas, el ex Presidente Ricardo Lagos reimpulsó la idea de un partido único de izquierda, la que no fue especialmente bien recibida por los actores involucrados.

A pesar de los acuerdos DC-PS, sus diferencias siguieron manifestándose. Así, Ignacio Walker respondió a la declaración de siete senadores de la oposición, liderados por el PS Camilo Escalona, criticando que en la comisión de Educación tanto el senador por la V Cordillera como el PPD, Jaime Quintana, votaran en contra de la idea de incluir la prohibición del lucro en la Constitución. De la misma forma, con votos DC se rechazó la censura contra la mesa de la Cámara, lo que generó la crítica de los diputados PS al ver que la DC sostuviera tres posturas distintas frente a la impugnación de la mesa que lideraba Patricio Melero (UDI).

Con todo, el binominal fue más fuerte y a comienzos de noviembre el Partido Socialista anunciaba un pacto electoral amplio con la DC, que intentaría incluir al PPD, PRSD, además del PRO y el Partido Comunista, en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Al respecto, en medio de negociaciones por cupos de alcaldías, la DC aclaró que el posible acuerdo DC-PC era por omisión y no un pacto electoral. Esto acarreó las críticas del PPD y Carolina Tohá afirmó que ese pacto "no va en el sentido de lo que hoy necesitamos", dado que es "como un pedacito de la Concertación, resolviendo sus temas entre ellos", y

117. Concertación de Partidos por la Democracia, *Nuestro Compromiso*, Santiago, 5 de octubre de 2011, véase http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20111005/pags/20111005105957.html

que la Concertación debía integrar a otros sectores, anticipándose a las elecciones municipales 2012[118]

Por su parte, el PRO anunció que presentaría setenta candidatos a alcalde y 1.100 a concejales en 14 regiones y en más de cien comunas, compitiendo con las principales figuras de la Concertación y la Alianza en las alcaldías más importantes del país: Santiago, La Florida, Puente Alto, Maipú y Concepción. Con todo, apoyaría a candidatos de la Concertación en al menos 34 comunas, entre ellos Johnny Carrasco (PS) y Gonzalo Navarrete (PPD).

Un exitoso proceso de primarias para la elección de alcaldes y concejales finalizó el PDC, convocando a casi setenta mil personas que eligieron a 27 candidatos a alcalde. Independientes y simpatizantes llegaron al 80% del total de votantes. Y desafiando a su propia directiva y partido, el alcalde de Peñalolén y vicepresidente del PDC, Claudio Orrego, presentó a comienzos de marzo su candidatura presidencial, afirmando que "esta campaña y esta elección la vamos a construir desde las bases, conversando con la gente, no con los partidos"[119].



En este conflictivo marco de relaciones políticas intra e intercoaliciones, la sociedad chilena siguió observando, por una parte, una creciente concentración del poder y, por la otra, una creciente demanda por un mayor papel del Estado.

Al respecto, un análisis de Ramón Briones, Hernán Bosselin y Cristián Briones Montaldo mostró que no más de tres actores controlaban más del 50% de los mercados donde participan:

> En el sistema financiero, el Santander, Chile (grupo Luksic y Citibank) y BCI (Luis Enrique Yarur) concentran el 52% del crédito. Tres de las cinco isapres —Banmédica (Eduardo Fernández León, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín), Consalud (Cámara Chilena de la Construcción) y Cruz Blanca (José Said y fondo Linzor)— controlan el 64% de las prestaciones de salud. De la seis AFP, Provida (del banco español BBVA) y Habitat (Cámara Chilena de la Construcción) concentran el 63% de los afiliados. En las telecomunicaciones tres operadoras de telefonía móvil —Movistar, Entel (grupo Matte y Eduardo Fernández León) y Claro del mexicano Carlos Slim— se reparten el 99,8% del mercado. VTR —cuyo 20% está en manos de Álvaro Saieh y el resto en poder de la norteamericana Liberty Global Inc— posee el 54% de la televisión por cable. Movistar el 56% de la telefonía fija. En internet inalámbrica se repiten Movistar, Entel y Claro, como únicos proveedores. Y en fija, Movistar y VTR tienen un 83% del mercado. En el área supermercadista Alvaro Saieh (Unimarc y cadenas regionales) alcanzó una cuota del 24% y Líder (Walmart y

118. *La Tercera*, 8 de noviembre 2011.
119. *La Tercera*, 3 de marzo 2012.

> Nicolás y Felipe Ibáñez) y CENCOSUD (Horst Paulmann) suman un 64% de las ventas. En el sector forestal el 94% de la producción está en manos de CMPC (Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte) y Celco (sucesión de Anacleto Angelini), cuya matriz, Copec, es el principal actor en la distribución de combustibles con un 63,6%. Lan (familia Cueto y Liliana Solari, socia de Falabella), controla un 49,5% de los vuelos internacionales y un 79% de los nacionales.[120]

Por su parte, Marco Kremerman mostró las importantes consecuencias políticas de este proceso en el país:

> Según la encuesta CASEN 2009, en Chile 4.459 familias tienen un ingreso autónomo promedio de $18.951.931, se trata del 0,1% de los hogares más ricos (…) En esta lista se encuentran los dueños de los bancos, compañías de seguro, los supermercados, las AFP, Isapres, las pesqueras, las eléctricas, forestales, mineras, salmoneras, medios de comunicación (…) sólo una treintena de familias en Chile manejan en conjunto casi US$ 30.000 millones, es decir, el 10% de la riqueza total del país en activos líquidos, lo que representa casi el 1% de todo el dinero que hay en Latinoamérica (…) Estas familias están presentes (omnipresentes) en la decisiones que involucran la tasa de interés que usted termina pagando en un banco por un crédito de consumo, en los cobros excesivos de la cuenta de la luz, del agua o del gas, en las difíciles condiciones que se colocan a los pequeños emprendimientos que actúan como proveedores de las grandes empresas, en la cuenta de supermercado que usted paga mes a mes, en sus fondos de AFP que día a día pierden su valor y usted no entiende por qué, en la Isapre que le sube el valor de su plan, entre otras tantas batallas que usted debe dar para llegar a fin de mes. De la misma forma, son quienes deciden la parrilla programática de los canales de televisión, la línea editorial de los principales medios de comunicación escrito y con sus centros de pensamiento y su influencia política directa e indirecta han irritado a la institucionalidad para que se configure un sistema impositivo a su medida y se impida que tanto la educación y la salud sean un derecho universal, de carácter público y proporcionado gratuitamente por el Estado, como si ocurre en los países que tiene mejor calidad de vida que la nuestra y por cierto una elite menos subdesarrollada y tacaña.[121]

Frente a esta realidad, la encuesta CERC de diciembre del 2011 mostró que un 67% de los chilenos era partidario de nacionalizar las empresas mineras privadas, apoyo transversal a la tendencia política de los encuestados[122].

---

120. *El Mostrador*, 15 de febrero 2012.
121. Marco Kremerman, "La casta de las 4 mil familias que tienen secuestrado al país", *The Clinic*, 2 de noviembre 2011. Véase http://www.theclinic.cl/2011/11/02/ la-casta-de-las-4-mil-familias -que-tienen-secuestrado-al-pais/
122. Véase http://www.cerc.cl/pdf/BarometroPoliticaDiciembre2011.pdf

CAPÍTULO 8

UN GOBIERNO DE MINORÍAS
Mea culpa y elecciones municipales

Las movilizaciones estudiantiles, las protestas ciudadanas en regiones y las periódicas encuestas de opinión pública continuaron evidenciando el amplio descontento ciudadano con la gestión del Presidente Piñera. Esa insatisfacción se sumó a la ya generalizada crisis de legitimidad de las principales instituciones políticas, sociales y económicas del país.

Sin embargo, las crecientes expectativas creadas por la carrera presidencial y la competencia generada por las elecciones municipales, terminaron por reorientar a los actores políticos y a la propia opinión pública, en torno al proceso electoral. Así, la endémica crisis de legitimidad de las instituciones políticas y las masivas movilizaciones sociales no lograron transformar el descontento en crisis y a esta en cambio real. Con todo, la alta abstención observada en las elecciones municipales habría sido reflejo del cuestionamiento que las movilizaciones sociales, y la falta de respuesta del sistema político, generaron respecto de las instituciones políticas.

En ese período, el Ejecutivo organizó de mejor forma su conducción política. Por una parte, continuó buscando con "grandilocuencia comunicacional", apoyo popular, anunciando nuevos bonos y beneficios a los más pobres, adultos mayores y segmentos medios y, al mismo tiempo, intentó sintonizar esas medidas con la campaña municipal de la Alianza. Por otra parte, honrando, como decía el ministro Larroulet, el "sentido profundo de nuestras misión", continuó con su estrategia de fondo, ampliando las oportunidades de lucro y renta privados y, a pesar de la permanente acusación de obstruccionismo a la oposición, siguió sacando adelante sus principales proyectos legislativos. Por último, junto con mantener su política autoritaria de manejo del orden público, reiteró su temeraria actitud de cuestionar los fallos judiciales, lo que provocó la más fuerte reacción del Poder Judicial desde la vuelta a la democracia.

Enfrentada a las elecciones municipales, la Alianza ocultó, aun cuando no eliminó, sus confrontaciones internas dando paso a un clima de aparentes acuerdos. Esta engañosa unidad se vio, no obstante, crispada por las permanentes contradicciones entre el Ejecutivo y los partidos aliancistas frente a proyectos legislativos

como la reforma tributaria y la Ley de Presupuesto, y por la sorda y declarada competencia entre miembros del Gabinete por la sucesión presidencial, todo lo cual se tradujo en una baja de su respaldo en las elecciones municipales.

Por su parte, en un ensayo general de cara a las elecciones parlamentarias de 2013, la Concertación terminó formalmente dividida en la elección de concejales presentando dos listas, y se dispersó una y otra vez en el Congreso ante iniciativas legislativas claves como la reforma tributaria y la Ley de Pesca, así como en torno a la falsa disyuntiva entre la futura gobernabilidad de un eventual nuevo Gobierno concertacionista y el necesario cambio constitucional.

Enfrascados en el "área chica" de la política, todas las organizaciones políticas continuaron con bajísimos niveles de aceptación ciudadana, sin responder ante los preocupantes datos que seguían evidenciando una sociedad aproblemada. Así, a pesar de los aparentemente altos índices de "felicidad" o bienestar subjetivo[1], los chilenos continuaron soportando altos niveles de desigualdad; crecientes denuncias de abuso sexual a menores —incluido otro Obispo—; violencia intrafamiliar y aumento del femicidio; consumo de drogas por adolescentes y antidepresivos por adultos; aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres; y una clase política sorda ante la demanda de mayor participación política de la mujeres, cerrada a resolver los principales problemas que tenían paralizada la democracia.

Ante esta situación, un día antes de la muerte del Padre Pierre Dubois, ex párroco de la población La Victoria, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer su Carta Pastoral, "Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile", en la que cuestionó en profundidad el rumbo que adoptado por el país, afirmando que:

> El "lucro" desregulado, que adquiere connotaciones de usura, aparece como la raíz de la iniquidad, del abuso, de la corrupción y en cierto modo del desgobierno (…) Chile ha sido uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo excesivamente centrado en los aspectos económicos y en el lucro, sin poner atención a sus consecuentes tensiones y desigualdades escandalosas entre ricos y pobres (…) Se ha pretendido corregir el mercado con bonos y ayudas directas descuidando la justicia en los sueldos, que es el modo de reconocer y dignificar el trabajo (…) Hoy escandalosamente en nuestro país muchos trabajan y, sin embargo, son pobres (…) En un país marcado por profundas desigualdades resulta extremadamente injusto poner al mercado como centro de asignación de todos los recursos.[2]

---

1. PNUD, *Desarrollo Humano en Chile, 2012. Bienestar Subjetivo: El Desafío de Repensar el Desarrollo*, Santiago, 2012.
2. Véase http://documentos.iglesia.cl/conf/doc_pdf.php?mod=documentos_sini&id=4192 El 27 de septiembre de 2012, día del nacimiento del Cardenal Raúl Silva Henríquez (27 de septiembre, 1907).

Con todo, la agitada búsqueda de respaldo electoral para la elección municipal siguió dominando el espacio político nacional.

I. LA ELECCIÓN DE CONCEJALES

Al ser considerada como un hito para el posicionamiento de sus líderes en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2013, la presidencialización de la elección del 28 de octubre de 2012, por parte del Gobierno y la Alianza, le pasó una amarga cuenta a la Coalición por el Cambio (véase Cuadro 6).

Aun cuando no es el propósito de este capítulo el estudio pormenorizado de los resultados electorales, en una perspectiva estratégica interesa destacar algunos aspectos centrales. En primer término, la Alianza perdió en todo tipo de indicadores: número de alcaldes, votación, población gobernada y municipalidades emblemáticas, como Santiago, Providencia y Concepción.

Además de estos indicadores, y en relación a la crisis que la elección sumió al Gobierno y sus fuerzas de apoyo, es preciso destacar dos temas claves originados por la implementación, por primera vez en el país, de la inscripción automática y voto voluntario. El primero —desde una perspectiva nacional— fue la descomunal abstención cercana al 60% del nuevo padrón electoral. Esta situación se sumó a la persistente deslegitimación de las instituciones políticas a nivel ciudadano, lo que representa un desafío al conjunto de los actores políticos, los que deberán implementar formas más eficientes para sostener un sistema democrático, no solamente válido, sino que fundamentalmente legítimo.

El segundo elemento —desde la perspectiva del Gobierno y la Alianza— fue la abstención de las propias fuerzas electorales de la derecha. De acuerdo a Rafael Urriola, esta situación fue similar a la derrota de Frei ante Piñera en 2010: "La gente que votaba por la Concertación se sintió desafectada por los resultados y no fue a votar. Esto le pasó a la derecha porque es un voto crítico a la gestión"[3]. Análisis compartido por *El Mercurio*, el que en su editorial advirtió alarmado y crípticamente que esa desafección era "una advertencia categórica a los sectores con mejor acceso a la educación cívica, que en esta materia ya han dado en el pasado ejemplos de irresponsable indolencia, que luego lamentan inútilmente"[4].

3. Rafael Urriola, "Debacle de la derecha: la oposición gana emblemáticamente en Providencia, Santiago, Recoleta, Ñuñoa y Los Ángeles (3 mujeres)", en *El Análisis Semanal de Primera Piedra*, Nº 488, 29 de octubre 2012.
4. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-10-31&dtB=31-10-2012%200:00:00&PaginaId=3&bodyid=1

Desde el ángulo opositor, si bien los estudiantes secundarios se dividieron frente a las elecciones, a diferencia de la CONES, la ACES —bajo el lema "Yo no presto mi voto"— llamó a no votar, lo que fue refrendado por la casi nula asistencia a las nuevas mesas receptoras constituidas preferentemente por jóvenes.

Estos resultados pueden entenderse mejor al interior de un cuadro mayor, más complejo, como parte del descontento acumulado por la gestión del Gobierno, así como el producto de los desarrollos políticos ocurridos en este período a nivel del Ejecutivo, del sector empresarial, de los conflictos sociales que enfrentaron a la ciudadanía con el Gobierno, de las tensiones al interior de las fuerzas armadas y de orden, así como en la Alianza y en la Concertación.

II. EJECUTIVO

En medio de conflictos sociales no resueltos, el Presidente Piñera llegó a marzo con pésima evaluación pública y severa crítica internacional. Sin embargo, gracias a un mejor manejo comunicacional y mayor control de los medios, un crecimiento económico —impulsado por la demanda apoyada en créditos— que se prolongó por todo el período, y tensiones intra-Alianza con un perfil público más bajo, la aprobación presidencial subió modestamente, aun cuando mantuvo un alto nivel de rechazo.

1. Buscando apoyo ciudadano

De acuerdo a la encuesta CEP, entre diciembre de 2011 y agosto de 2012, la popularidad presidencial aumentó levemente, desde un 22% (diciembre 2011) al 27% (agosto 2012), y su desaprobación disminuyó, con mayor fuerza, del 62% (diciembre 2012) al 53% (agosto 2012). Con todo, la imagen internacional del Presidente continuó siendo negativa, al punto que *The Economist* llegó a afirmar que "parte del problema (del gobierno) es que el señor Piñera ha demostrado ser un político inepto"[5]. Más adelante, y producto del escándalo generado en torno a la encuesta CASEN, el *Economist*, el *Financial Times* y *The New York Times* pusieron en cuestión el estilo de conducción política de La Moneda[6].

En el Mensaje del 21 de mayo de 2012, tratando de revertir su mala evolución personal, el Presidente reconoció que "hemos cometido errores y pido perdón por ellos, pero también sé que hemos trabajado incansablemente y hemos entregado

5. *The Economist*, 14 de abril 2012.
6. *Financial Time*, 3 de septiembre 2012; *The New York Times*, 3 de septiembre 2012, véase http://www.economist.com/node/21563736

lo mejor de nosotros mismos para cumplir con nuestros compromisos y estar a la altura de los desafíos del Chile de hoy".

Dada la vaga referencia a los errores, posteriormente, en medios televisivos, explicó que "un presidente toma muchas decisiones y por supuesto a veces se equivoca y es bueno saber reconocerlo. Siento que en los conflictos sociales, Magallanes, Aysén o Freirina, los pudimos haber enfrentado de forma más oportuna y haberlos evitado. Se crearon grandes expectativas al comienzo (...) Antes de acostarme pienso qué pudimos hacer mejor y de ahí nació la idea de pedir perdón"[7]. Si bien reconoció como principales errores la creación de expectativas, en el mismo Mensaje volvió a reiterarlas anunciando la construcción del puente en el Canal de Chacao.

A pesar de estos reveses, y con claro sentido electoral, el Ejecutivo insistió en dos áreas claves: bonos a los más pobres y clase media, protección de los consumidores y control informativo. De esta forma, en el Mensaje anunció una amplia batería de beneficios a sectores estratégicos: el Bono Solidario de Alimentos para 1.677.000 familias de bajos ingresos ($40.000 y $7.500 pesos adicionales por hijo); la reforma constitucional para reconocer la multiculturalidad del país y creación de dos Áreas de Desarrollo Indígena en Ercilla, Collipulli y provincia de Arauco; la reparación a víctimas de minas antipersonales; la creación del Premio Nacional a la Innovación y el Emprendimiento; la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, similar al INDAP; aumento de cobertura de la Subvención de Educación Media del 40% al 60% de los alumnos más vulnerables; subvención a hogares de ancianos; puente de conectividad en Chiloé; mejoramiento de más de cinco mil kilómetros de caminos rurales para el desarrollo y las comunidades indígenas; carretera Estrecho de Magallanes-Canal Beagle; y término de 65 kilómetros faltantes entre Estancia Vicuña-Endegaia[8].

En los meses siguientes, esa estrategia se vio complementada por la entrega de bonos y gasto fiscal en el período preelectoral, anunciando costosas obras públicas. Así, un nuevo programa del Ministerio de Obras Públicas desembolsaría $51.000 millones de pesos, duplicando la inversión en caminos básicos para mejorar 1.000 kilómetros en 2012 (766 km fueron intervenidos en 2011). El ministro Golborne afirmó que el plan "apunta esencialmente a los más necesitados"[9]. Por su parte, en un acto encabezado por el ministro Rodrigo Pérez Mackenna, el Ministerio de Vivienda entregó más de 7.000 subsidios para clase media en la Región Metro-

7. *El Dínamo*, 23 de mayo 2012.
8. Véase http://www.gob.cl/destacados/2012/05/21/mensaje-presidencial-21-de-mayo-2012-chile-cumple-y-avanza-hacia-el-desarrollo.htm
9. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/04/18/nacional/nacional/noticias/24A1CE8A-68A9-4DAE-9990-5687E6C7AC29.htm?id=%7B24A1CE8A-68A9-4DAE-9990-5687E6C7AC29%7D

politana, en el que participó el candidato-alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett[10]. A fines de abril el Gobierno anunció un fondo de US$200 millones para comunas mineras y el ministro del Interior anunció que el proyecto permitirá una mayor "descentralización financiera". Igualmente, en el mes de mayo, el Gobierno anunció recursos por más de $225 millones de dólares para el Fondenor, enviando un proyecto que beneficiaría a cuarenta comunas de regiones mineras.

En esa misma línea, Piñera anunció una *Agenda de Impulso Social,* iniciativas diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social, consistente en diez medidas para superar la pobreza[11]. En septiembre empezaron a entregarse nuevos subsidios para erradicar la pobreza extrema al 2014 en el marco del programa "Bonos y transferencias monetarias para familias en pobreza extrema y que crea el subsidio al empleo de la mujer", también conocido como Ingreso Ético Familiar[12].

Continuando con la política de defender a los consumidores, en abril diputados UDI solicitaron al ministro de Economía disminuir el precio de las gasolinas, al rebajar en 50% el impuesto a los combustibles, lo que significaría un subsidio anual para los taxistas, colectiveros, conductores del transporte escolar y los feriantes. El Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO) es la fórmula que tiene el Ejecutivo para disminuir el impacto de las alzas del precio de los combustibles a través de un mecanismo de impuestos variables, de forma que cuando el precio sea alto, los impuestos bajen, el Fisco recaude menos y los consumidores paguen menos[13]. El 11 y 12 de septiembre la Cámara y el Senado, respectivamente, aprobaron la iniciativa.

El proyecto de ley, conocido como "Ley Super 8", que restringió la comida chatarra, fue aprobado por la Cámara, prohibiendo las promociones que se entregaban junto con los "combos" de comida rápida.

A fines de julio el SERNAC cambió 11 cláusulas en contratos de las empresas de telecomunicaciones, autorizando al usuario poner fin al servicio cuando este quiera, sin multas por término anticipado e impedir que se modifique la parrilla programática de un servicio de cable, dándole a las compañías treinta días hábiles para informar de las nuevas reglas a sus clientes.

Y, a comienzos de agosto, el Presidente Piñera promulgó la ley que anticipó el pago del bono "bodas de oro" a los adultos mayores, beneficiando a 320 mil personas.

---

10. Véase http://www.lanacion.cl/vivienda-entregan-mas-de-7-mil-subsidios-para-clase-media-en-region-metropolitana/noticias/2012-09-09/163959.html "Un ingreso familiar que no exceda la cantidad de $1.350.000. Ése será el nuevo requisito que incluirá el subsidio de clase media (DS-01), para las viviendas de entre 1.000 y 2.000 UF, a partir del próximo llamado", *El Mercurio*, 21 de septiembre 2012.
11. Véase http://www.gob.cl/destacados/2012/08/18/mandatario-visita-el-santuario-del-padre-hurtado-en-el-dia-de-la-solidaridad.htm
12. *El Mercurio*, 1 de mayo 2012.
13. Véase http://papeldigital.info/lt/index.html?2012042601#

La tercera estrategia fue la política de estricto y autoritario control de los medios[14], en especial del canal nacional[15]. En línea con esta política, los ministros tuvieron un 72% de cobertura en TV y opositores solo un 28%[16]. El aumento de control de los medios por parte de la derecha volvió a incrementarse cuando el Tribunal de la libre Competencia (TDLC) aprobó —con condiciones, dada la concentración horizontal existente— la adquisición de las radios *Horizonte y Oasis* por parte del grupo Luksic, controlador de TV13[17].

Sin embargo, el Gobierno tuvo un serio revés cuando se conoció el índice de pobreza en Chile entregado por la encuesta CASEN, el que habría bajado del 15,1 % al 14,4%, entre 2009 y 2011. No obstante, ese 14,4%, fue el producto de un aumento de la pobreza no indigente en 0,2% (del 11,4% al 11,6%), el que fue compensado por una reducción de la indigencia en 0.9% (del 3.7% al 2.8%). Según el Gobierno, la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre bajó de 46 veces a 35, producto del aumento de la ocupación del segmento más pobre en un 10%. Pero dado que el Gobierno no entregó el margen de error de la encuesta, el que posteriormente fue establecido en 0,8%, el 0,7 % de disminución de la pobreza, resultó poco significativo. Igualmente, la no anualización del nuevo bono de Asignación Social, que se entregó durante el trabajo de campo de la encuesta, gracias al cual 143.000 familias recibieron $10.000 pesos por cada uno de sus integrantes, y el que se tomaran dos muestras (desde el 17 de octubre al 13 de noviembre, y la

---

14. Igualmente, en una entrevista para BBC Mundo, en Brasil, su equipo asesor terminó abruptamente la entrevista y otro funcionario tapó la cámara de televisión y cortó el audio de forma violenta cuando se le interrogó sobre Pinochet y, de acuerdo a *El Mercurio*, entre el 10 de mayo y el 10 de agosto, Piñera solo aceptó preguntas de la prensa en cuatro oportunidades de las 86 actividades públicas en las que participó *El Mercurio*. 12 de agosto 2012.
15. Esta política de control se materializó en una razia en TVN con el cambio del presidente del directorio, Leonidas Montes, y su reemplazo por el abogado RN Carlos Zepeda; el despido de Alejandro Guillier, conductor de noticiarios; María Eugenia Sarroca, productora general de Informe Especial; Rodrigo Espinoza, editor nocturno; e Iván Pereira, editor de la señal de cable 24 Horas, dirigente sindical, elegido por la corriente socialista y que procedía de radio *Cooperativa*.
16. *El Mostrador*, 20 de agosto 2012. El nuevo manejo comunicacional presidencial fue caracterizado en el "Análisis de las declaraciones de políticos en noticieros centrales", realizado por la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales junto a Oemedios.com y News Executive Channel (NEX), y "mostró que el Presidente de la República, al igual que en el mes anterior obtuvo una mayoritaria cantidad de valoración positiva en las notas de los noticiarios centrales, incluso registrando un aumento de un 11% en este indicador (Junio 81% - Julio 92%). Sin embargo, el indicador que registra la cantidad de segundos que el presidente apareció realizando declaraciones disminuyó en un 33,3% respecto del mes anterior (Junio 2155 s. – Julio 1438 s.). En el mes de Julio el presidente Sebastián Piñera es mostrado por los noticieros centrales en una cantidad de temas variados, proponiendo programas y líneas de acción, es exhibido periódicamente enfocado en solucionar los problemas ciudadanos, en especial los de las personas más vulnerables".
17. Véase http://www.df.cl/el-tdlc-da-luz-verde-al-grupo-luksic-para-adquirir-radio-horizonte-y-oasis/prontus_df/2012-09-28/165704.html

segunda del 13 de noviembre al 15 de enero) e incorporando nuevas preguntas, despertó dudas sobre la confiabilidad de los datos.

Todos estos cuestionamientos exigieron que la CEPAL, revisora de los datos, emitiera un comunicado señalando su malestar por la política comunicacional del Gobierno al respecto, y que, a comienzos de octubre, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, anunciara que, después de 36 años de cooperación, ese organismo optaba por no seguir participando activamente en la medición oficial de la pobreza en el país. Producto de esto, el Gobierno anunció a fines de octubre que la CASEN 2012 se suspendía y que se crearía un INE autónomo para hacerse cargo de un nuevo cálculo de la pobreza.

Más allá de los errores gubernamentales producto de su "grandilocuencia comunicacional", este debate mostró la falta de un organismo autónomo e independiente que manejara las estadísticas claves del país, las que ese momento se encontraban repartidas entre el Instituto Nacional de Estadísticas, el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Social, el que, a su vez, mide las políticas que él mismo define e implementa.

Otra duda respecto a la confiabilidad de la información gubernamental se produjo después de la ofensiva comunicacional del Gobierno anunciando el fin de las listas de espera del AUGE, cuando la Contraloría detectó que el 44,5% de las listas se habían eliminado administrativamente[18].

Igualmente, el Gobierno siguió al debe en materia de reconstrucción post-terremoto. Así, la Relatora Especial de la ONU afirmó que esta falencia era una "violación al derecho humano a la vivienda", ante lo cual Felipe Kast, delegado presidencial, declaró que existía un 99% de familias en aldeas que tenían sus viviendas en reconstrucción y 1.000 familias que ya habían optado a subsidios para arrendar viviendas sólidas[19].

El primer informe de Vivienda mostró que 25 comunas concentraban departamentos tipo *block* como vivienda social y que uno de cada diez chilenos vive en hacinadas y deterioradas construcciones levantadas en zonas carentes de equipamientos y conexiones, siendo Puente Alto, Maipú y Quilicura los sectores más afectados por esta política habitacional[20].

A estos cuestionamientos a la eficiencia gubernamental se le sumaron los problemas en la ejecución en terreno del Censo 2012 y los problemas encontrados en los

---

18. "El ente fiscalizador auditó a seis hospitales de Santiago y regiones luego de una presentación que presentaron los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD). Esto, después que el gobierno, en noviembre de 2011, celebrara el fin de las listas de espera con 'seis meses de anticipación' y destacando que se trataba del cumplimiento de 'un compromiso' con los pacientes". Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/17/contraloria-devela-que-fin-de-listas-auge-anunciado-por-manalich-fue-solo-una-maniobra-comunicacional/
19. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120503/pags/20120503234723.html
20. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/10/nacional/nacional/noticias/95FCBDEF-986F-4308-A4F1-60CDACBA0C75.htm?id=%7B95FCBDEF-986F-4308-A4F1-60CDACBA0C75%7D

registros electorales con ciudadanos fallecidos (como, por ejemplo, Salvador Allende Gossens) y encuentro de votos y estampillas en basureros en la comuna de Lo Espejo.

2. Ampliación del lucro y rentas privadas

Continuando con su política privatista, el Gobierno volvió a intentarlo con el litio. Frente a lo cual el senador Mariano Ruiz-Esquide (DC) planteó un proyecto de modificación al Artículo 19-24 de la Constitución para asegurar la nacionalización del mineral. Igualmente, diputados PS presentaron un proyecto que establecía que el litio debería ser explotado por CODELCO. Sin embargo, el Gobierno, eludiendo al Parlamento, abrió licitaciones para Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL). El Subsecretario de Minería justificó la medida indicando que el *royalty* para esa explotación era uno de los más altos de la industria y que se esperaba recaudar US$350 millones por cada contrato, al pagarse el 7% de sus ventas brutas mensuales. La Federación de Trabajadores del Cobre expresó su total rechazo a la iniciativa y la senadora Isabel Allende dijo que esa era "una licitación a espaldas de la sociedad".

En un vuelco insospechado, y producto de la solicitud presentada por la firma china Li Energy SpA, impugnando el proceso ya que SQM mantenía litigios pendientes con el Estado, el Comité Especial de Licitación (CEL), presidido por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, resolvió invalidar el proceso. Producto de ese fiasco, a comienzos de octubre renunció el subsecretario Wagner y, posteriormente, Jimena Bronfman, secretaria del CEL.

En otro ámbito empresarial, golpeando la mesa el grupo Matte a través de Colbún, socia de Endesa en el mega proyecto HidroAysén, pidió suspender el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la línea de transmisión de esas centrales y cancelar el proyecto. En respuesta, el Gobierno anunció la construcción de una carretera pública eléctrica, con un costo de US$700 millones, cuyo proceso de concurso se realizará el primer semestre del próximo año; el Estado garantizará a los privados la trasmisión de electricidad, condición indispensable para materializar HidroAysén. Los empresarios valoraron el anuncio de licitar interconexión entre el SIC y el SING, la que se haría en el primer semestre de 2013, para hacer más eficiente el traslado de energía en el país. El Presidente se comprometió a acelerar plazos y otorgar certezas jurídicas en materia energética.

Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, esa propuesta era un "traje a la medida" para las eléctricas. "Chile no requiere una carretera eléctrica para conectar las centrales (…) Hoy el país tiene 15 mil watts aprobados que pueden empezar a construirse mañana, lo que a un crecimiento de la demanda del 4,6%, como ha señalado el Gobierno, alcanza para abastecer al país los próximos 20 años.

Por lo tanto, no tenemos un problema de falta de centrales, que es lo que pretenden seguir diciendo algunas empresas"[21].

Quizás para apaciguar a ese grupo empresarial, y siguiendo con la política de favorecer a las grandes empresas, el director de la Dirección General de Aguas (DGA) entregó derechos de agua a una filial de la empresa Colbún, del grupo Matte, lo que haría inviable la iniciativa—del propio Fisco— del embalse Chacarillas.

Igualmente, en materia deportiva, el proyecto de ley de Chiledeportes permitiría la creación de empresas privadas para la realización de eventos deportivos con recursos fiscales, eliminando los llamados a concurso, con lo que aumentaría la discrecionalidad en la asignación de los mismos (Boletín 8316-29).

La ola privatista llegó incluso a los sindicatos de ENAP, quienes se mostraron abiertos a discutir el ingreso de capital privado a la estatal, siempre que el Estado mantuviera el control y que fuera parte de una reestructuración total de la empresa para recapitalizarla y hacerla competitiva.

Esa arremetida se vio dificultada cuando pescadores artesanales protestaron por el proyecto de Ley de Pesca, el que, según sus dirigentes, atentaba directamente en contra de la biofauna marina por su sobreexplotación, lo cual la llevaría al colapso por la pesca industrial por parte de siete familias, las que pondrían en peligro el sustento de los pescadores artesanales[22]. El proyecto mejoraba la posición de los grandes industriales al entregarle los actuales derechos de pesca a perpetuidad y en condición de heredables; se eliminaba la posibilidad de licitar alguna cuota, como estaba incluso en la ley (votada y defendida por el entonces senador Piñera), y las industrias seguirían pagando patentes por la flota y no por la pesca. Al mismo tiempo, el proyecto contravenía el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, el que obliga a consultar a comunidades *lafkenche* eventualmente afectadas por esta ley.

En el campo social, el nuevo "IPC de la Salud" elaborado por la Superintendencia de Salud estableció que el alza en planes de Isapres no deberían superar el 2,15% real. Este porcentaje, sumado a la inflación, fue bienvenido por las Isapres, las que valoraron que ese índice demostraría que sus gastos crecían por sobre la inflación[23].

De la misma forma, el ministro Golborne planteó un cambio de fondo en cómo se harían las concesiones: delegando en las empresas concesionarias realizar las propuestas sobre cuáles son las obras que se debían hacer para enfrentar el crecimiento del tráfico"[24].

---

21. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/30/sara-larrain-chile-no-requiere-una-carretera-electrica-para-conectar-las-centrales/
22. Véase http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=5226:las-siete-familias-millonarias-beneficiadas-con-la-nueva-ley-de-pesca&catid=3:economia&Itemid=4
23. *El Mercurio*, 28 de marzo 2012.
24. Eduardo Engel, "Un enfoque equivocado en concesiones (o cómo no hacer políticas públicas)". http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/un_enfoque_equivocado_en_concesiones

3. Una reforma tributaria a medias

Sin ser parte de su programa de Gobierno, la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo fue producto de la necesidad de dar respuesta a la demanda estudiantil.

A pesar de las críticas de Hernán Büchi, quien calificó de "decepcionante" el proyecto de reforma tributaria, de las de Horst Paulmann, que afirmó que "desde el primer día dije que esto era innecesario y no era bueno para el país"[25], y de la crítica del presidente de Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Roberto de Andraca, asegurando que el Presidente Sebastián Piñera se había dejado manipular por pequeños grupos de presión y que "en los gobiernos de la Concertación había reglas más claras"[26], el Ejecutivo envió su proyecto afirmando que lo hacía para cumplir su compromiso con la educación. Por su parte, la UDI y el senador Jovino Novoa inicialmente se opusieron a la reforma manteniendo su negativa de subir los impuestos a las grandes empresas. Sin embargo, el tema dividió al partido cuando el senador Hernán Larraín pidió al Gobierno "hacer un esfuerzo adicional" para aumentar la recaudación de reforma tributaria.

De acuerdo a Claudio Agostini, el 60% de la rebaja tributaria a la renta de las personas beneficiaba a 82 mil contribuyentes de más altos ingresos, no a la clase media. Una persona que gana $600 mil mensuales vería incrementado su ingreso en solo 0,1%, pero el que ganaba $7 millones lo haría en 3,2%[27]. Por su parte, la propuesta del CEP y CIEPLAN —precedida por una defensa del sistema tributario sin incluir reformas de fondo— contenía una fórmula que recaudaba US$ 5 mil millones, incluyendo medidas contra la evasión, cambios en el impuesto a la renta, eliminación de franquicias, exenciones al IVA e igualación del impuesto del diésel y la gasolina[28].

De la misma forma, el senador Ricardo Lagos Weber criticó al Gobierno afirmando que el proyecto tenía "el vicio de reducirle la tasa de impuestos a los que más tienen", por lo que se declaró "burlado". Con todo, y aun cuando treinta académicos rechazaron la reducción de impuestos a padres de alumnos de colegios particulares[29], la Cámara y el Senado aprobaron la propuesta del Gobierno. Ante

---

25. Véase http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2012/09/11-11474-9-horst-paulmann-chile-es-la-nina-bonita-de-america-latina-en-el-mundo.shtml
26. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120618/pags/20120618173201.html
27. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/08/economia_y_negocios/economia_y_negocios /noticias/C129D09E-B9AB-4E5B-9CCF-35FB9264CB71.htm?id=%7BC129D09E-B9AB -4E5B -9CCF-35FB9264CB71%7D
28. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/12/economia_y_negocios/_portada/noticias/011B2D4A-67F4-4F0D-9AA0-C2EDA63C956C.htm?id=%7B011B2D4A-67F4-4F0D-9AA0-C2EDA63C956C%7D
29. Los académicos, entre estos José Joaquín Brunner, Cristián Cox, Juan Eduardo García-Huidobro y Mario Waissbluth, expresaron que "esta 'rebaja de impuestos' favorecerá especialmente a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas no gratuitas, es decir, con financiamiento compartido", *El Dinamo*, véase http://www.eldinamo.cl/2012/08/11/academicos-rechazan-reduccion-de-impuestos-a-padres-de-alumnos-de-colegios-particulares/

esa inconsistencia, el senador DC Jorge Pizarro afirmó que "era difícil explicar por qué nos íbamos a negar a una mayor recaudación para la educación"[30].

4. Disparen al Poder Judicial

Con serios problemas de gestión en el área de la seguridad ciudadana, el Ejecutivo continuó con su asedio al Poder Judicial. A comienzos de octubre, en pleno período electoral, volvió a pronunciarse contra los jueces de garantía y anunció un conjunto de reformas al proceso penal oral.

Primero —se anunció— se iba a "incrementar la protección y la participación de las víctimas" ya que, a su juicio, si bien existe una defensoría penal pública que representa a los imputados, no ocurre lo mismo con las víctimas. Segundo, se fortalecería la labor de las policías. Tercero, se incorporaban mayores exigencias y controles en los otorgamientos de libertad cuando haya prisión preventiva. Cuarto, se incorporaban mayores controles a los jueces de garantía a través del de fortalecimiento de algunos recursos judiciales. Quinto, se facilitaría la obtención de pruebas en los delitos para lograr condenas. Y sexto, se fortalecía la capacitación de las distintas instancias que participaban en la lucha contra la delincuencia[31]. La Asociación Nacional de Magistrados manifestó su absoluto desacuerdo con la declaraciones del Presidente y del ministro de Justicia, que abogaban por un aumento de los controles a los jueces de garantía y que "una reforma como la anunciada no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales y sin que signifique un retroceso desde el punto de vista de los derechos y garantías de las personas"[32].

Estos anuncios fueron complementados por una ofensiva mediática contra los jueces de garantía, calificados de "jóvenes, empoderados y desafiantes", los que se agruparían en organizaciones garantistas —como "Jurisdicción y Democracia", "Justicia, Unidad y Pluralismo", radicales como "Abolicionistas" y descentralizantes como "Regionalistas"— que los empoderaban. Como colofón, un vespertino recordaba que Miguel Otero, miembro del Consejo Directivo de la Academia Judicial, habría anunciado que la Academia Judicial haría un examen psicoanalítico a los aspirantes a jueces[33].

---

30. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-09-09&NewsID=75262&BodyID=3&PaginaId=6
31. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/10/787996/pinera-anuncio-los-seis-ejes-que-tendra-reforma-a-la-reforma-mas-control-a-jueces
32. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/16/jueces-rechazan-declaraciones-de-pinera-sobre-reforma-al-proceso-penal/
33. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/10/788249/jueces-garantistas-en-la-mira-del-gobierno-jovenes-empoderados-y-desafiantes Para la respuesta de Carlos Peña

III. EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Enfrentados a un Gobierno con alicaídas pretensiones de autonomía (recuérdese el fracasado intento de crear una "nueva derecha"), y que no respondía plenamente a sus intereses directos, en ese período el sector empresarial tuvo un mayor protagonismo político, criticando la judicialización de los conflictos ambientales y capturando mayores beneficios en sus relaciones con el Estado.

1. Sigue la ofensiva empresarial contra el Poder Judicial

El compromiso gubernamental con los grandes empresarios tuvo un importante hito en la confrontación ocurrida entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

Aun cuando en abril de 2012 la Corte no dio lugar a los recursos de protección contra HidroAysén y dio luz verde al proyecto, en el mes de mayo anuló la aprobación de la central Río Cuervo en Coyhaique y en agosto paralizó la construcción de la Central Castilla.

Rechazando el dictamen que suspendió Castilla, la ministra de Medio Ambiente criticó abiertamente a la Corte señalando que el "razonamiento del fallo incurre en errores", e indicó que esta se había pronunciado sobre un área que pertenecía a la institucionalidad ambiental[34]. El propio Presidente reconoció su involucramiento previo en ese cuestionamiento cuando declaró que la "ministra Benítez me planteó a mí que iba a defender la institucionalidad ambiental, y me pareció lógico y razonable que lo hiciera"[35]. La confrontación Ejecutivo-Poder Judicial llegó al punto que el propio Presidente, durante la firma del proyecto de ley que creaba una Carretera Eléctrica Pública, afirmó que aquel "busca generar una mayor certeza jurídica a los inversionistas y a la sociedad entera"[36], poniendo en duda la actualmente existente en el país.

Ante estas declaraciones, el Pleno extraordinario de la Corte Suprema acusó una "intromisión indebida" del Gobierno indicando que las afirmaciones de la ministra Benítez "van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos

a esta ofensiva, véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-10-14&NewsID=83590&dtB=14-10-2012%200:00:00&BodyID=10&PaginaId=19

34. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/09/10/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/50942328-3CD6-4385-993D-D0D5A8791DC9.htm?id=%7B50942328-3CD6-4385-993D-D0D5A8791DC9%7D
35. *La Tercera*, 20 de septiembre 2012.
36. Véase http://www.lasegunda.com/noticias/economia/2012/08/776990/pinera-proyecto-de-carretera-electrica-busca-generar-mayor-certeza-juridica-a-inversionistas

de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”[37]. Diputados opositores respaldaron a la Corte Suprema, pidieron la renuncia de la ministra y exploraron infructuosamente una acusación constitucional. La embestida del Ejecutivo contra la Corte Suprema incluso despertó las críticas de la ex senadora designada y abogada de Pinochet, Olga Feliú, quien sostuvo que la Constitución “establece explícitamente que no se pueden revisar los fundamentos de las resoluciones judiciales (...) Lo que resuelve el Poder Judicial no lo puede cuestionar el Poder Ejecutivo, debe acatarlo”[38]. Indirectamente terciando en esta disputa, el presidente de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, criticó la “excesiva judicialización de los proyectos energéticos”[39], dado que la Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón a la comunidad de Caimanes, concluyendo que la minera Los Pelambres, de la familia Luksic, no podía asegurar que las aguas a cielo abierto del tranque El Mauro, depósito de residuos tóxicos, no fueran contaminadas, pidiendo en la misma resolución la retirada del estanque de desechos[40].

Junto a la reiterada política del Ejecutivo de rechazar fallos que le eran adversos, ese episodio develó que el rol de protección de derechos que el Poder Judicial, como institución del Estado, había ido sistemáticamente desempeñando, era una tarea fuertemente resentida por el Gobierno y el empresariado.

2. Favoreciendo al gran empresario

La política de favorecer al gran empresario volvió a mostrarse cuando, en el mes de marzo, se conoció que CORFO había destinado fondos —para apoyar a pequeños y medianos empresarios— a algunas de las fortunas más grandes del país[41].

De igual forma, y en otro ámbito, aun cuando el SERNAC cuestionó los cobros por estacionamientos y uso de baños en centros comerciales exigiendo que estos fueran liberados puesto que son parte de su servicio principal, terminó imperando la postura empresarial eximiéndose de pago solo en la primera hora.

---

37. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/11/corte-suprema-acusa-intromision-indebida-del-gobierno-y-hace-firme-parele-por-criticas-al-fallo-de-castilla/
38. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/14/olga-feliu-la-constitucion-establece-explicitamente-que-no-se-pueden-revisar-los-fundamentos-de-las-resoluciones-judiciales/
39. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/09/07/economia_y_negocios/_portada/noticias/24C9F68F-7DB0-4BB5-B61E-2C999AE42111.htm?id=%7B24C9F68F-7DB0-4BB5-B61E-2C999AE42111%7D
40. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=7980:caimanes-consecuencias-de-la-actividad-minera-sobre-los-derechos-de-las-personas-&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
41. Véase http://www.elmostradormercados.cl/destacados/Corfo-y-millonarios/

Lo mismo sucedió ante la movilización de la Federación de Agricultores de la Provincia de Linares (que cortó la Ruta 5 Sur, al norte de Linares), en protesta por el proyecto del Gobierno de fijar el precio del maíz, inmediatamente después de lo cual el mismo indicó que no va a "intervenir o fijar precios, porque no sólo no es el espíritu de este gobierno, sino que ha sido una política de estado de Chile desde hace mucho tiempo y la vamos a seguir aplicando"[42].

Como colofón de esa política, el Servicio de Impuestos Internos condonó US$ 125 millones de la deuda de Johnson's, de Horst Paulmann, por el no pago de impuestos[43], el mismo que se permitió afirmar que el feriado irrenunciable del 19 de septiembre fue aprobado por "razones electorales", porque los gobiernos se preocupan de la política y no de la gente[44].

De esa forma, creyendo estar amparados por un Gobierno que velaba especialmente por sus intereses, diversos empresarios intentaron burlar las leyes. Así, en mayo se conoció que 488 colegios particulares subvencionados bajo la supervisión de la seremi de Educación de la Región Metropolitana, adulteraron la información de los alumnos para obtener más dinero fiscal del que les correspondía[45]; otros crearon sociedades zombis para burlar impuestos[46]; y unos más se concertaron para intentar obtener beneficios económicos[47].

La "responsabilidad social empresarial" quedó de manifiesto cuando el SERNAC informó que si bien las denuncias de los consumidores habían crecido un 45%, solo el 60% de ellas habían sido respondidas. "Vemos que siguen existiendo empresas que muestran una sonrisa en la venta, pero muestran los dientes si el consumidor tiene un problema y va a buscar una solución", advirtió su director, Juan Antonio Peribonio[48].

---

42. Véase http://www.adnradio.cl/noticias/economia/agricultura-descarto-intervenir-o-fijar-precios-de-alimentos-en-alza/20120418/nota/1671893.aspx
43. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/07/director-del-sii-no-hubo-condonacion -de-impuestos-sino-de-multas-e-intereses/
44. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120912/pags/20120912113920.html
45. Véase http://ciperchile.cl/2012/05/14/catastro-inedito-de-los-colegios-particulares-que-adulteran-y-lucran-con-las-subvenciones-fiscales
46. "En el 2004 el Servicio de Impuestos Internos concluyó que varias empresas de reconocidos grupos económicos evadieron impuestos. Usaron un artilugio para fusionar sus pujantes empresas con cerca de 16 sociedades de papel, del ex grupo BHC, que sólo tenían pérdidas. Los fiscalizadores calcularon que el perjuicio fiscal alcanzó la indecible cifra de $24.521.682.331. La mayoría de los inculpados devolvieron el dinero, pero la empresa Vital S.A. se fue a juicio". Véase http://www.theclinic.cl/2012/05/28/el-ardid-con-que-algunas-empresas-quisieron-ahorrar-24-521-682-331-en-impuestos-2/
47. "Las empresas Abercrombie & Kent S.A., ADSmundo Turismo Ltda, Turismo Cocha S.A., Chilean Travel Services Ltda. y Turavion Limitada, realizaron diversas conductas concertadas", *La Tercera*, 21 de septiembre 2012.
48. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/06/economia_y_negocios/enfoques/noticias/2494E916-DAA2-4034-91BF-67ABA596B6D1.htm?id=%7B2494E916-DAA2-4034-91BF-67ABA596B6D1%7D

3. Captura del Estado

La captura del Estado por parte de los sectores empresariales continuó al igual que en el período anterior. Así, la Sociedad Agrícola y Ganadera Los Corrales S.A. recibió un subsidio, por más de $13 millones de pesos, para desarrollar la "Instalación de Sistema de Riego por Aspersión", cuyo costo total se empinó por sobre los $38 millones. *Radio Bío Bío* informó de esa asignación a una de las propiedades del Presidente Piñera en Futrono, Región de Los Ríos[49]. Algo parecido sucedió con las cicletadas y corridas ejecutadas entre 2010 y 2011[50] financiadas por Chile Deportes.

El caso con mayor impacto fue la compra, pagando sobreprecios, de instrumentos de vigilancia para el Plan Frontera Norte, producto de lo cual el Ministerio del Interior hizo la denuncia respectiva, al tiempo que se pidió la renuncia al jefe de la división de estudios del ministerio, el ex fiscal Alejando Peña, a Felipe Baeza, jefe de la licitación investigada y a Carlos Álvarez, de la unidad de Crimen Organizado. Posteriormente renunció René Castellón, ex subdirector de Investigaciones, ex asesor en la Subsecretaría de Prevención del Delito y dueño de una empresa que participaba en la licitación de equipos antidrogas. El informe de CIPER mostró que

> el mercado está virtualmente repartido entre cuatro empresas: Tecnodata (cuyos principales clientes son Carabineros y la PDI), Sectrade (propiedad de los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque, y que provee precisamente a la policía uniformada), Santa Victoria (que vende a Aduanas) y Seguridad Geo (cuyo dueño es René Castellón, ex subdirector operativo de la PDI y actual asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior)[51].

La derecha volvió a dividirse en torno a este caso. Así, el senador Jovino Novoa (UDI) y el diputado Felipe Ward (UDI) señalaron que el propio subsecretario del Interior, e incluso el titular de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, debían responder,

---

49. "De acuerdo a la declaración de patrimonio que ingresó a Contraloría en abril del 2010, a través de sus acciones en Bancard Inversiones Limitada, el Presidente Sebastián Piñera tiene participación en la sociedad beneficiada con el subsidio. Piñera declaró poseer el 66,85% de las acciones de Bancard, que a su vez tiene un 50% de la participación en la Sociedad Agrícola y Ganadera Los Corrales S.A.", *El Mostrador*, 21 de marzo 2012.
50. "Estos tuvieron un costo de más de ¡¡1.600 millones de pesos!!, según datos entregados por la Dirección de Presupuesto. Empresa Meta Proyectos, el dueño de Meta Proyectos es Juan Pablo Grez Gubbins quien sería amigo personal de Gabriel Ruiz Tagle (UDI) y de María José Torrealba (hija del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, RN) que hasta febrero pasado fue jefa de Gabinete del subsecretario que además es primo del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma e íntimo amigo de Piñera", *Cambio 21*, 30 de marzo 2012.
51. Véase http://ciperchile.cl/2012/10/10/subsecretario-ubilla-paraliza-nueva-licitacion-por-us-8-millones-preparada-por-el-equipo-del-ex-fiscal-pena/

pero el presidente del partido, Patricio Melero, apoyó la gestión de las autoridades. Por su parte, Peña aseguró que no tuvo ninguna participación en sobreprecios y que las decisiones las tomaba el subsecretario. Por su parte, la Concertación prefirió apoyar la demanda judicial y el Consejo de Defensa del Estado se querelló por fraude al Fisco y cohecho.

Recurriendo a personal empresarial para desempeñarse en el Gobierno, en abril el Presidente designó a Jorge Bunster como ministro de Energía. Este había sido por 18 años un alto ejecutivo de Copec, del Grupo Angelini, principal competencia de la ENAP, con participación en Enersis. Según sus declaraciones se habría deshecho de $273 millones en acciones del sector[52], afirmando que "vendí las acciones para tener libertad y dar una señal política", descartando conflictos de intereses por su pasado como gerente general de Copec[53].

En La Moneda, el Programa "Elige Vivir Sano", presidido por Cecilia Morel, concentró las donaciones recaudadas con beneficios tributarios. Desde marzo de 2011 hasta junio de 2012 obtuvo $2.700 millones de pesos, recibiendo más recursos que el Hogar de Cristo y Un Techo Para Chile, por parte de compañías ligadas a los grupos Paulmann, Saieh y Hurtado Vicuña. La fundación se resistió a requerimientos de transparencia por ser "corporación de derecho privado"[54].

Finalmente, los vínculos familiares quedaron nuevamente al descubierto cuando Patricio de Solminihac, vicepresidente ejecutivo de SQM, una de las principales productoras de litio, se adjudicó —inicialmente— la licitación de este mineral. Su hermano, el ministro de Minería, afirmó que se había desligado completamente de esa iniciativa[55]. Con todo, diputados de oposición señalaron que la Contraloría debía pronunciarse sobre el requerimiento que pide la paralización del proceso, a lo que se sumó el recurso judicial que pidió la nulidad del Decreto Supremo que permitió la licitación, la que finalmente fue suspendida.

4. Trabajadores

Principalmente focalizada la atención en la opinión pública, el Gobierno no se dio por aludido por el acuerdo entre la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para avanzar en materias laborales. Más aun, volvió a confrontarse

---

52. Véase http://www.lanacion.cl/ministro-bunster-vendi-las-acciones-para-tener-libertad-y-dar-una-senal-politica/noticias/2012-04-03/205308.html
53. Véase http://www.lanacion.cl/ministro-bunster-vendi-las-acciones-para-tener-libertad-y-dar-una-senal-politica/noticias/2012-04-03/205308.html
54. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/31/fundacion-de-cecilia-morel-acapara-donaciones-de-grandes-empresarios/
55. *Diario Financiero*, 24 de septiembre 2012.

con la CUT al anunciar la modificación del sistema de salas cuna incluyendo el uso del Fondo de Cesantía Solidario, sin aviso previo a la CUT. No obstante, la ministra indicó que la idea del Gobierno era seguir trabajando con la CPC y la CUT porque "tienen un tremendo aporte que hacer"[56].

Aun cuando en mayo la CUT movilizó a sus asociados y aseguró que no negociaría un sueldo mínimo inferior a $250 mil, el Gobierno le puso urgencia a la ley y la ministra Matthei insistió que un sueldo mínimo de $250.000 significaría la quiebra para muchas empresas, aun cuando llamó a las empresas de mayor tamaño a incrementar los sueldos de sus trabajadores[57].

Un importante cambio político y de género se produjo en este período en la CUT, la que quedó encabezada, por primera vez en su historia, por una mujer, Bárbara Figueroa (PC), quien hizo un llamado a la unidad y agradeció a Martínez su "labor cumplida" al frente de la organización, enfatizando que rearticularla desde la década de 1990 ha costado "sangre, sudor y lágrimas"[58].

IV. CONFLICTOS

El gobierno continuó enfrentando conflictos de larga duración y otros que emergieron en este período. Estudiantes, mapuches y la comunidad de Aysén se enfrentaron al Ejecutivo con disímiles resultados.

1. Estudiantes: dos pasos adelante, uno para atrás

El resultado de las movilizaciones estudiantiles de 2011 fue de dulce y agraz, ya que no todas sus demandas fueron debidamente acogidas. Un importante paso adelante se dio en abril de 2012 cuando el ministro de Educación informó que enviaría un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el sistema CAE con participación de la banca, la creación de una Agencia Pública para administrar los fondos, una nueva política de becas que abarcaría nueve deciles y una nueva fórmula de cálculo del Arancel de Referencia, indicando que "los fondos ahora se originan desde el Estado y los bancos dejarán de financiarla". Los dirigentes estudiantiles reaccionaron positivamente señalando que la "erradicación de la banca privada es un gesto al movimiento estudiantil" (Camila Vallejo) y "que se saque a la banca privada es deseable" (Gabriel Boric). A mediados de agosto

56. *El Mercurio*, 15 de mayo 2012.
57. Véase http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/06/655-465166-9-ministra-matthei-reitera-que-sueldo-minimo-de-250000-significaria-la-quiebra.shtml
58. *El Mostrador*, 24 de agosto 2012.

el Congreso aprobó el proyecto que rebajó la tasa del CAE y el interés pasó del 5,6% a 2%, y ningún deudor pagará más del 10% de su sueldo. La nueva ley fue promulgada a fines de septiembre.

Sin embargo, el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, que evidenció ocho formas de lucro en universidades, no tuvo la misma suerte aun cuando mostró las instituciones que lucran con la educación superior[59]. En junio el Fiscal Nacional abrió una investigación ante denuncia criminal por lucro en universidades, sin embargo, en el mes de julio la Cámara rechazó el informe por un voto, dado los pareos y ausencia de diputados opositores. El diputado DC, Jorge Sabag, confesó: "No voté informe del lucro porque estudié en la U. del Desarrollo".

Igual destino tuvo parte de la reforma tributaria. Aun cuando en abril, con ochenta mil manifestantes en las calles, la CONFECH y secundarios demostraron que los estudiantes seguían movilizados, el Congreso aprobó el uso de fondos fiscales en la educación privada subvencionada. Gabriel Boric y Camila Vallejo criticaron la reforma[60], insistiendo en que las familias chilenas quieren educación gratuita y de calidad. Por su parte, el coordinador nacional de Educación 2020, Mario Waissbluth, sostuvo que "el 2011 el gobierno anunció 13 medidas en educación y sólo se han cumplido 4"[61], y que con la reforma tributaria "el Presidente Piñera estaba profundizando el apartheid educativo", ya que la reforma beneficiaba solo a los sectores más ricos puesto que "no incluye los recursos necesarios y ya anunciados para la educación superior", y consideró "ofensivo" el anuncio de deducciones del impuesto a la renta para pagar gastos privados en educación, afirmando que es "simplemente falso" que beneficiaría a 1.5 millones de contribuyentes de la "clase media".

---

59. Universidad de las Américas, Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar e instituto AIEP (pertenecientes al grupo Laureate International Universities); la Universidad Santo Tomás (controlada por el fondo de inversiones Linzor Capital); la UNIACC (comprada por el grupo Apollo); la Universidad del Desarrollo; y la Universidad del Mar. Véase http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20120624/pags/20120624130026.html
"Qué es y quiénes están detrás del grupo Laureate, uno de los sospechosos de lucrar con la educación", véase http://www.eldinamo.cl/2012/06/20/que-es-y-quienes-estan-detras-del-grupo-laureate-uno-de-los-sospechosos-de-lucrar-con-la-ensenanza-en-chile/
Véase también "Poder económico y social de la Educación Superior en Chile", en *Informe del Centro de Estudios de la FECH (CEFECH)*, véase http://www.eldinamo.cl/2012/06/20/que-es-y-quienes-estan-detras-del-grupo-laureate-uno-de-los-sospechosos-de-lucrar-con-la-ensenanza-en-chile/
60. Véase http://www.gob.cl/destacados/2012/04/26/jefe-de-estado-presento-al-pais-reforma-tributaria-para-el-financiamiento-de-la-educacion.htm
61. Véase http://www.elmostrador.tv/programas/educacion-2020-el-ano-pasado-el-gobierno-anuncio-13-medidas-en-educacion-y-solo-se-han-cumplido-4/

A pesar de la campaña de "criminalización" del movimiento estudiantil, la encuesta Adimark de septiembre mostró un apoyo ciudadano del 70% a las demandas del movimiento estudiantil, el mismo nivel que presentaba en la medición de diciembre de 2011[62].

2. Conflicto de Aysén

El conflicto entre la comunidad de Aysén y el Gobierno tuvo su desenlace final con la salida del ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. Este, crítico del "asambleísmo" de los dirigentes, fue acusado de "intentar dividir al movimiento" al proponer mesas de diálogo paralelas, suspendiéndose las negociaciones debido a los incidentes que tal propuesta produjo en la región. Ante tal situación el Gobierno recurrió a la Ley de Seguridad del Estado y el equipo de negociadores abandonó la región. Sin embargo, tras cuarenta días de conflicto y en un giro propio del Ejecutivo en esas condiciones, el Gobierno se reunió por casi nueve horas en La Moneda con los dirigentes del movimiento y llegó a un acuerdo sobre una zona franca especial, accedió a modificar la bonificación a la contratación de mano de obra, que pasará a ser cancelada directamente a los trabajadores y no al empleador, y retiró las querellas por Ley de Seguridad en Aysén. Producto de ese acuerdo, en el que no participó, el ministro Álvarez renunció por haber sido excluido del pacto y los dirigentes reinstalaron las mesas sectoriales de negociación.

3. Mapuche

La situación en los territorios *mapuche* siguió ampliando sus facetas. Así, la CEPAL alertó sobre el daño producido por las industrias forestales en la pérdida de tierras, degradación de los suelos y escasez de agua en estos territorios[63]; la UNICEF declaró su preocupación por "el creciente ambiente de conflictividad y violencia entre agentes del Estado y comunidades indígenas puede generar impactos permanentes en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescente"[64] y rechazó la acusación que los *mapuche* utilizaran a sus hijos como escudos para impedir la acción policial; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección contra Carabineros por violencia contra niños *mapuche*. Ante estas acusaciones de organismos nacionales e internacionales, el ministro del Interior afirmó que "res-

---

62. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/04/respaldo-al-movimiento-estudiantil-se-mantiene-intacto-con-70-de-apoyo-ciudadano-a-sus-demandas/
63. Véase http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/3/46283/P46283.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
64. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/04/24/unicef-preocupado-por-uso-de-fuerza-en-allanamientos-a-comunidades-mapuches/

paldamos el actuar de Carabineros, cuando se trata de ponerse en condiciones de dar resguardo a la ciudadanía, ciertamente que ese apoyo tiene un límite y ese límite está dado por lo que impone nuestra ley"[65].

Para responder a la inquietud en el área mapuche, el Gobierno presento, como parte de un nuevo trato, el Programa de Desarrollo Integral *Arauco Avanza*, anunciando la inversión de US$ 600 millones en Arauco y Bío-Bío. Junto a este plan de desarrollo, el Gobierno anunció el *Plan Especial de Seguridad para la Región de La Araucanía*, el que a través de nueve medidas espera incrementar la presencia y coordinación policial en la región[66].

Frente a estas medidas el Obispo de Temuco pidió el reconocimiento constitucional de los *mapuche*, afirmando que el problema "no se soluciona con plata ni carabineros"[67]. Con todo, en medio de fuertes medidas de seguridad y severas acciones represivas, el Presidente, a mediados de octubre, sostuvo un encuentro con la comunidad de Ercilla y realizó una visita al Grupo Integral de Trabajo Preventivo de Carabineros.

V. FUERZAS ARMADAS

En el área de la defensa nacional se observó un claro retroceso en la inserción de las Fuerzas Armadas en el sistema democrático y las responsabilidades institucionales e individuales producto del accidente del CASA-212, la politización de los mandos e instituciones y las resistencias a la modificación de la justicia militar, caracterizaron los procesos al interior de las instituciones armadas.

Así, producto del sumario del accidente aéreo, dos generales y un comandante de la FACH fueron llamados a retiro y se propusieron sanciones para otros diez oficiales de la institución. En un acto no habitual, el ex general Carlos Bertens Uthemann demandó por calumnias al Comandante en Jefe, general Jorge Rojas, señalando que en su salida de la institución "sin duda hubo irregularidades"[68].

En la Armada, si bien su comandante en jefe, almirante Edmundo González, reconoció los errores de la institución en el maremoto del 27 de febrero y llamó a cuidar la Marina[69], durante el mes del mar entró en terreno político alineando a

65. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/07/680-474320-9-ministro-hinzpeter-asegura-que-apoyo-a-carabineros-tiene-un-limite-dado-por-la.shtml
66. Véase http://www.gob.cl/informa/2012/07/24/ministro-rodrigo-hinzpeter-anuncio-plan-especial-de-seguridad-para-la-region-de-la-araucania.htm
67. Véase http://www.theclinic.cl/2012/07/27/obispo-de-temuco-esto-no-se-soluciona-con-plata-ni-carabineros/
68. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/04/558867/general-bertens-y-su-salida-de-la-fach-por-casa-212-hubo-irregularidades.html
69. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/22/nacional/nacional/noticias/0D355E95-ACF2-4672-B309-E531AF665E3C.htm?id=%7B0D355E95-ACF2-4672-B309-E531AF665E3C%7D

la Armada en la "Alianza del Pacífico" impulsada por el Gobierno[70] y, en un hecho inusual, dos vicealmirantes de la Armada —el Jefe de Estado Mayor, Francisco Guzmán y el director de Personal, Rafael González— visitaron a militares en retiro condenados en Punta Peuco por violar los derechos humanos, según sus declaraciones: para reunirse "con los representantes de Gendarmería del penal con el fin de coordinar la atención médica que requieren los internos, dada su avanzada edad"[71].

Por su parte, en Santiago el Ejército fue sacado de sus cuarteles por el Gobierno para aumentar en más de 10% la capacidad hospitalaria gracias a la colaboración del sistema de salud del Ejército. Igualmente, dejó la administración de albergues a cargo de la institución en Santiago y regiones, cobijando personas en situación de calle en toda la época de invierno, y asumiría el 12% del total de 89 mil intervenciones quirúrgicas para quienes no tienen acceso al plan AUGE.

Esta política de relacionamiento público tuvo un severo retroceso cuando el 20 de febrero, en la I División en Antofagasta, se conoció un instructivo del Ejército en el que se señalaban disposiciones generales para el proceso de selección de reclutas, entre ellas un especial cuidado en el reclutamiento de "ciudadanos más idóneos moral e intelectualmente capacitados", excluyendo a "aquellos que presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictuales, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y testigos de Jehová"[72]. Rápidamente el Ejército derogó las disposiciones que no cumplían con la Ley Antidiscriminación y dispuso la creación de un comité de Estado Mayor para continuar revisando la documentación vigente. No hubo identificación ni sanciones a los responsables. Posteriormente el comandante en jefe del Ejército, en reunión con dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), se puso en búsqueda de "propuestas de integración" y de "no discriminación"[73].

1. Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa

En junio el ministro de Defensa, Andrés Allamand, logró acuerdo de la Cámara para derogar la ley del cobre y aprobar un nuevo sistema de financiamiento para las FF.AA. Ese proyecto requería de una orientación estratégica previa producto de lo cual el Ejecutivo envió en consulta al Senado una nueva *Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa* (ENSD). Esta fue presentada en La Moneda, destacándose sus tres

70. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/05/28/la-vigencia-de-legado-de-prat-y-el-desafio-del-pacifico-sur-oriental/
71. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/09/armada-justifica-visita-de-vicealmirantes-a-punta-peuco-por-situacion-de-marinos-condenados-por-violaciones-de-dd-hh/
72. *La Tercera*, 8 de septiembre 2012.
73. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/23/historico-gesto-del-ejercito-al-movilh/

grandes conceptos: seguridad ampliada interministerial, cooperación internacional y capacidades de defensa. La ENSD contenía propuestas que excedían el marco constitucional en el que deben desenvolverse las FF.AA. Presentado a continuación del proyecto de ley sobre financiamiento de la Defensa, las comisiones de Defensa debían pronunciarse sobre una estrategia que se aprobaría vía decreto supremo, cuando gran parte de las definiciones legales centrales del proyecto (plurianualidad, pisos, fondos especiales) ni siquiera habían sido aprobadas por los legisladores. El concepto de "seguridad ampliada" que utilizaba era riesgoso al retomar la idea de combinar la defensa con la seguridad interior, involucrando a las FF.AA. en cuestiones de orden interno, tareas constitucionalmente asignadas a las instituciones policiales. Creaba una nueva institucionalidad confundiendo la relación entre el comité interministerial y el Consejo de Seguridad Nacional, además de resultar curioso que un comité "interministerial" sería presidido por el presidente de la República. El documento no destacaba las definiciones tradicionales de la política exterior de Chile, las que incluyen la promoción de la paz, la resolución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.

El supuesto que cruzaba al texto es que, al aumentar la inserción internacional del país, este "queda más expuesto a riesgos y amenazas, lo que demanda mayores niveles de seguridad". Esta concepción de fortaleza sitiada desenfatizaba los aspectos integradores de la inserción internacional del país. La ENSD tampoco establecía una proporcionalidad de eventuales amenazas, ubicando en un mismo plano crisis o ataques al territorio nacional, terrorismo, narcotráfico, carteles de la droga, tráfico de armas, catástrofes y ciberataques. Todos estos planteamientos parecieron ser un esfuerzo artificial para justificar los descomunales recursos que la propuesta de financiamiento les asignaría a las FF.AA. Finalmente, la ENSD era concebida como una "política de políticas" que orientaba la articulación de distintas políticas públicas sectoriales y definía los intereses nacionales desde la perspectiva castrense. La ENSD propuesta redefiniría aspectos fundamentales de la función castrense, de la política exterior y de la institucionalidad democrática[74].

Producto de la crítica generalizada al documento, La Moneda corrigió el texto —ya enviado a diversos ministerios de defensa extranjeros— estableciendo que las FF.AA. no intervendrían en orden público, descartó la figura del consejero de seguridad nacional, pero mantuvo el concepto de "seguridad ampliada" y conservó la enumeración de nuevas amenazas, riesgos y vulnerabilidades del país, como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la escasez energética, entre otros.

Con la misma ambición de formular políticas desde Defensa y en claro desafío a la Agencia Nacional de Inteligencia, el ministerio organizó el Plan de Alerta Temprana, intentando la coordinación de la inteligencia nacional para entregarla

74. Claudio Fuentes, Augusto Varas y Felipe Agüero, "Estrategia de Seguridad y Defensa", *La Segunda*, 26 de julio 2012

al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Presidente. La ANI se marginó de la iniciativa por no adecuarse a la Ley de Inteligencia que rige a la ANI[75].

Para aumentar la transparencia del sector Defensa se creó un registro de proveedores de armas y material de guerra, con lo cual se deberá individualizar a los representantes de las empresas en el país, así como presentar antecedentes comerciales y lazos de parentesco ante eventuales inhabilidades[76].

2. Justicia militar

En materia de justicia militar, la Corte Suprema se mostró partidaria de eliminar definitivamente los juzgados castrenses en tiempos de paz, calificando a la justicia militar como "altamente parcial, con falta de independencia y tardía, señalando que no puede haber dos tipos de justicia: una impartida por un órgano independiente del persecutor (fiscales), oportuna, fundada en un procedimiento oral y otra (justicia militar) impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y, por consiguiente, altamente parcial"[77]. Además de ser un proceso lento e inseguro, la justicia militar tiene problemas de acceso, falta de transparencia y debido proceso, siendo criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no respetar las condiciones básicas para un juzgamiento democrático[78].

VI. SEGURIDAD CIUDADANA

La falta de logros en el control de la criminalidad —uno de los principales propósitos de la candidatura Piñera— y el aumento de la violencia policial contra manifestantes, caracterizó el área de la seguridad ciudadana.

1. Delincuencia

Una de las banderas emblemáticas de la candidatura Piñera fue la derrota de la delincuencia. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas en su Octava Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el número de hogares que fueron víctimas de algún delito durante 2011 aumentó casi 3 puntos

---

75. Véase http://www.theclinic.cl/2012/10/14/la-pugna-secreta-de-la-inteligencia-chilena-con-el-subsecretario-de-defensa/
76. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/09/12/nacional/politica/noticias/C0344F83-0539-4497-9F56-9DA3E300798D.htm?id=%7BC0344F83-0539-4497-9F56-9DA3E300798D%7D
77. *Cambio 21*, 3 de septiembre 2012.
78. Véase http://www.eldinamo.cl/blog/reforma-a-la-justicia-militar-un-proceso-lento-e-inseguro/

porcentuales respecto al año anterior, esto es un crecimiento de 126 mil casos en 2011[79]. Esa situación se vio agravada por el bajo nivel de denuncias informadas a Carabineros por parte de la seguridad privada[80], la que llega a 73 mil personas.

Así, el Director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, afirmó que existiría un escaso avance en el compromiso por bajar delitos y que, si bien había algunos progresos legislativos y de programas, los resultados eran "bastante modestos"[81].

A partir de estos datos, en mayo, y para medir su efectividad en la reducción de la victimización y el temor, el Gobierno decidió licitar la evaluación del Plan Cuadrante de Carabineros, siendo la Fundación Paz Ciudadana la que se adjudicó el estudio. El ministro del Interior, responsable de esta área, fijó en dos meses la implementación total el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD)[82], asegurando que el 30 de julio debería estar funcionando en las quince regiones.

La situación institucional siguió viéndose cuestionada cuando en mayo Carabineros desvinculó a doce funcionarios de Calama por cohecho, al haber establecido vínculos con un empresario a quien advertían sobre los procedimientos en sus locales nocturnos. Y, a fines de octubre, desvinculó a otros cuatro de la 30º Comisaría de Radiopatrullas, incluyendo un oficial, por robo de droga a narcotraficantes, delito en conexión con el siguiente caso en la Policía de Investigaciones.

En la PDI, diez detectives fueron apresados, acusados de operaciones ilícitas con drogas y de proteger a narcotraficantes, además de "tormentos mentales, apremios físicos, delitos contra la Ley de Drogas, omisión de denuncia y entrega de información maliciosamente falsa al Ministerio Público y a tribunales", por lo que la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y la Brigada Móvil, ambas de la PDI, se intervinieron[83]. Posteriormente, el alto mando de la PDI llamó a retiro al jefe regional metropolitano, y miembro del alto mando, y al titular de la Prefectura Occidente.

La crisis del Estado en seguridad ciudadana fue ilustrada por la diputada Adriana Muñoz (PPD), al denunciar que "durante el año 2010, en las investigaciones por narcotráfico, en el proceso que va desde que se detiene a los delincuentes y se incauta droga hasta que ésta es destruida o quemada, se perdieron 1.100 kilos de cocaína"[84].

---

79. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=6934:no-se-le-acabo-la-fiesta-la-delincuencia-esta-derrotando-la-estrategia-de-seguridad-ciudadana-del-gobierno-&catid=36:nacional&Itemid=58
80. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/06/759005/informe-revela-que-solo-en-santiago-hay-mas-guardias-de-seguridad-que-carabineros-en-todo-el-pais-son-73-mil
81. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/10/nacional/nacional/noticias/4AC81519-1090-42D6-983D-1EACABBC7A8B.htm?id=%7B4AC81519-1090-42D6-983D-1EACABBC7A8B%7D
82. Véase http://www.seguridadpublica.gov.cl/stad.html
83. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/18/nacional/nacional/noticias/2BC5B156-B82B-4076-B385-63C7693661FF.htm?id=%7B2BC5B156-B82B-4076-B385-63C7693661FF%7D
84. Véase http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20121017143316/el-fracaso-del-gobierno-en-seguridad-ciudadana/

2. Violencia policial

Aun cuando el Gobierno no desaprovechó oportunidades para felicitar a Carabineros por su rol en el orden público, la aceptación de la querella por tortura y abuso de la policía a pobladores de Freirina, la agresión a estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado al entrar sin permiso al recinto universitario, el reconocimiento del general director de Carabineros de "excesos y tratos vejatorios" a estudiantes por parte de efectivos en Rancagua y a manifestantes en Aysén, obligaron al ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, a advertir que la institución no tenía "carta blanca" y que el Gobierno no tolerará excesos[85]. Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que Carabineros había actuado con excesiva fuerza en el control de las manifestaciones, tanto en la de los estudiantes durante el año pasado, como las movilizaciones en Aysén, cuestionó la justicia militar y argumentó que su mayor inquietud es que el Gobierno no está "tomando medidas al respecto"[86].

Frente a esta situación, el alto mando de la institución debió dar de baja a un efectivo de Fuerzas Especiales luego que golpeara a estudiantes refugiados en una obra, expulsar a un carabinero que golpeó a una mujer mapuche durante un allanamiento a la comunidad José Gineo Ñanco del sector Rofúe, en Metrenco, al sur de Temuco, y detener a un capitán de Fuerzas Especiales acusado de ejercer violencia en Isla de Pascua.

Dada la sistematicidad de la violencia policial a través del país, contra todo tipo de manifestantes, a fines de septiembre la Contraloría decretó la autorización para que funcionarios comisionados por el Instituto de Derechos Humanos pudieran ingresar a cualquier recinto policial donde hubiese detenidos. A pesar de todas estas pruebas en su contra, la institución se permitió dar respuesta institucional a las críticas del *The New York Times*, el que había dado a conocer el trabajo de los observadores voluntarios de derechos humanos[87].

VII. DERECHOS HUMANOS

En el contexto del asesinato de Daniel Zamudio, a comienzos de marzo de 2012 el Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto antidiscriminación y presionó a los senadores de la Alianza, a la jerarquía de la Iglesia católica y a los evangélicos, todos ellos temerosos de la posibilidad que la iniciativa abriera las puertas al matrimonio homosexual. Finalmente, después de siete años en el Congreso, el 9 de mayo el

---

85. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/08/31/nacional/nacional/noticias/7AB3FE09-9955-436C-908F-49FF0CEE662F.htm?id=%7B7AB3FE09-9955-436C-908F-49FF0CEE662F%7D
86. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120313/pags/20120313144041.html
87. *El Mercurio*, 21 de septiembre 2012.

Senado aprobó la Ley Antidiscriminación. Con esta ley (Ley Zamudio), los actos discriminatorios se enfrentarán con acción judicial especial y ejecutiva[88].

A fines de marzo, el Gobierno, a través de su Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, presentó una querella en la investigación sobre la muerte del padre de la presidenta Bachelet. Sin embargo, contradiciendo este celo, se supo que "del total de 64 agentes de la represión de la dictadura que están cumpliendo sentencias efectivas de cárcel, catorce, equivalentes a pocos más del 20%, ha recibido beneficios carcelarios[89].

Por tales razones, el Observatorio Parlamentario acusó un escaso avance y retraso en el debate de iniciativas de ley relevantes para la protección de los derechos humanos y democracia, y la existencia de insuficientes mecanismos para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones[90].

Profundizando su política represiva, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de *Ley de Fortalecimiento del Orden Público*, conocido como "Ley Hinzpeter", el que en opinión de los abogados Francisco Cox y Jorge Contesse, criminalizaba la protesta social[91].

VIII. MUJER

Centrando su limitada política en la mujer trabajadora, en mayo el Gobierno sacó adelante el proyecto de ley que redujo la jornada de trabajadoras de casas particulares de 72 a 45 horas semanales, con 15 horas especiales de descanso. Sin embargo, los temas referidos a la plena autonomía de las mujeres no fueron considerados.

Así, y aun cuando en el Senado desde 2009 se habían presentado tres iniciativas para regular el aborto terapéutico —proyectos Escalona; Girardi-Ominami; y Matthei-Rossi[92]— nuevamente en abril este rechazó la idea de legislar al respecto, por lo que la discusión solo podría ser retomada en un año más[93]. Al respecto se evidenciaron diversas visiones sobre el tema. La senadora Ena von Baer (UDI) afirmó

---

88. Véase http://elperiodistaonline.cl/locales/2012/07/ley-zamudio-actos-discriminatorios-se-enfrentaran-desde-hoy-en-chile-con-accion-judicial-especial-y-ejecutiva/
89. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=9701:el-silencioso-pacto-de-impunidad-del-gobierno-de-pinera-catorce-condenados-han-recibido-beneficios-de-gendarmeria&catid=41:derechos-humanos&Itemid=56
90. Véase http://www.eldinamo.cl/2012/04/05/observatorio-parlamentario-acusa-escaso-avance-en-proyectos-de-ley-sobre-ddhh-y-democracia/
91. Véase http://ciperchile.cl/2012/08/13/la-agenda-oculta-de-la-%E2%80%9Cley-hinzpeter%E2%80%9D/
92. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/03/18/reportajes/reportajes/noticias/5BC1E02F-EAAC-4168-AF66-2AF646C90577.htm?id=%7B5BC1E02F-EAAC-4168-AF66-2AF646C90577%7D
93. Véase http://www.cooperativa.cl/revisa-la-votacion-de-los-senadores-sobre-el-aborto-terapeutico/prontus_nots/2012-04-04/212534.html

que la mujer no tiene derecho al aborto terapéutico porque solo "presta el cuerpo" por el tiempo del embarazo a la vida que se está gestando[94], ante lo cual la senadora Ximena Rincón (DC) criticó duramente esos dichos asegurando que "no es bueno ni sano el fundamentalismo", ya que la discusión debe centrarse en lo que sucede cuando la vida de una mujer está en peligro y cuando el feto es inviable[95]. En este contexto, el Presidente circuló su carta "Mi compromiso con la vida", en la que se mostró "contrario a la legalización del aborto", aun cuando indicó que el debate era legítimo y necesario en una sociedad democrática, expresando la voluntad de su Gobierno de establecer mejores políticas para prevenir los abortos y los embarazos no deseados.

En marzo, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Carabineros, lanzaron una guía de apoyo para una mejor coordinación interinstitucional frente al femicidio [96]. En julio, la ONG Activa y la Universidad Pedro de Valdivia informaron que durante el primer semestre del 2012 los femicidios aumentaron un 30,7%[97].

Cambiando su postura anterior, igualmente refractario se mostró el Ejecutivo frente a una eventual ley de cuotas en política para las mujeres, las que de acuerdo a Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer, no constituyen un privilegio sino que son medidas de justicia para la igualdad.

Esta "ceguera de género" se volvió a manifestar cuando el ministro de Educación admitió como un "error" el que en programas escolares se catalogara la homosexualidad como "trastorno", asegurando que "esta es una situación normal en un programa que se está instalando, se cometen errores en los distintos programas, aquí hay un error claro y nosotros vamos a pedir que se enmiende"[98].

IX. ALIANZA

La divisiones al interior de la Alianza, sus partidos y entre estos y el Ejecutivo mantuvieron su visibilidad en todo este período, y ayuda a explicar, en parte, su derrota en las elecciones municipales de octubre.

A comienzos de mayo, el Presidente se reunió con los ministros precandidatos, intentando contener la desatada carrera presidencial en la derecha. A Laurence

94. Véasehttp://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/14/ena-von-baer-la-mujer-no-tiene-derecho-al-aborto-terapeutico-porque-presta-el-cuerpo/
95. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/03/14/ena-von-baer-la-mujer-no-tiene-derecho-al-aborto-terapeutico-porque-presta-el-cuerpo/
96. Véase http://www.lanacion.cl/lanzan-inedita-guia-de-coordinacion-para-enfrentar-el-femicidio/noticias/2012-03-27/173401.html
97. Véase http://www.elciudadano.cl/2012/07/07/54703/femicidios-aumentaron-un-307-durante-el-primer-semestre-del-ano-2012/
98. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120606/pags/20120606134426.html

Golborne, Andrés Allamand y Pablo Longueira les pidió que se dedicaran al ejercicio de sus tareas dado que quedaba mucho por hacer[99]. Sin embargo, meses más tarde, quizás persuadido que sus esfuerzos no habían dado resultados, en una visita a Cochrane le dio un abierto respaldo al ministro Allamand[100].

Al interior de Renovación Nacional, y manteniendo su férreo control partidario, Carlos Larraín fue reelecto con un 88% de los votos para su cuarto período como presidente RN, en clara demostración de poder frente a los sectores que desde La Moneda trataron de desestabilizarlo.

Por su parte, en junio, con ocasión del homenaje de los partidarios a Pinochet, el ministro Chadwick (UDI) —que lo consideró innecesario— se manifestó arrepentido de haber apoyado a un Gobierno que violó los DD.HH., declaraciones con las que el ministro Lavín (UDI) se sitió interpretado y el diputado Cardemil (RN) indicó que quienes fueron parte del régimen de Pinochet "tenemos responsabilidades políticas por omisión, por no haber podido hacer más"[101]. En abierta discrepancia con los anteriores, el diputado Moreira (UDI) afirmó: "Yo no me arrepiento ni me voy a arrepentir jamás" del Gobierno militar[102].

Al mismo tiempo, en la UDI se visibilizó la sorda disputa entre los ministros Longueira y Golborne, cuando el primero valoró el voto político de su partido para escoger candidato presidencial a través de un mecanismo como el consejo general, en vez de una nominación a través de encuestas.

En ese mismo partido continuaron profundizándose las fisuras entre los sectores más conservadores, como Libertad y Desarrollo, y aquellos más díscolos, como el senador Hernán Larraín, quien criticó la postura de ese centro de estudios, señalando que "la UDI debería posicionarse en una postura moderada y con una derecha más democrática y renovada [avanzando a una] identidad política como centroderecha social, y ya es hora de darle proyección pública, porque es lo que le da un norte a nuestra Alianza"[103].

Estas tensiones culminaron con la división de las fuerzas gobiernistas en las candidaturas a alcaldes de la Alianza, permitiendo así el triunfo de candidatos opositores en comunas como La Reina y Recoleta.

---

99. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/05/11/pinera-se-reune-con-ministros-candidatos-e-intenta-contener-carrera-desatada-en-la-derecha/
100. Véase http://www.lanacion.cl/pinera-habla-de-allamand-como-el-futuro-presidente/noticias/2012-08-25/214019.html
101. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/06/674-465842-9-cardemil-no-es-un-tema-del-gobierno-pronunciarse-a-favor-o-en-contra-del-regimen.shtml
102. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/06/674-465834-9-moreira-no-se-puede-ser-ciego-efectivamente-hubo-violaciones-a-los-ddhh.shtml
103. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/06/674-465842-9-cardemil-no-es-un-tema-del-gobierno-pronunciarse-a-favor-o-en-contra-del-regimen.shtml

X. CONCERTACIÓN

La dinámica política opositora continuó su proceso de recomposición. Por una parte, se observaron tendencias centrípetas en torno a las candidaturas a alcaldes, pero, por la otra, importantes fuerzas centrífugas limitaron seriamente su accionar conjunto. A la base de estas fuerzas de dispersión se encontraba la no declarada estrategia del "polo progresista" por disputarle a al eje DC-PS la hegemonía opositora y concertacionista. Igualmente, al interior del PS se distinguía una controversia entre Andrade y Escalona en torno al significado de las elecciones municipales, minimizándolas el primero y dándole mayor crédito el segundo[104]. Con todo, los sorpresivos resultados de las elecciones municipales de octubre tuvieron como efecto el fortalecimiento del eje DC-PS, con el consecuente deterioro de la capacidad de influencia del polo progresista.

1. Municipales

La dimensión cooperativa se expresó en un exitoso —pero con baja concurrencia— proceso de primarias para alcaldes organizadas por la Concertación, estimándose en cerca de 320 mil personas las que votaron el 1 de abril. La DC ganó en tres comunas clave (La Florida, Valparaíso y Maipú), pero Carolina Tohá (PPD) triunfó en Santiago. La cuenta mostró que se habían realizado 142 primarias en todo el país, 340 candidatos participaron del proceso, 214 recintos fueron habilitados para ello y 2.000 mesas fueron escrutadas.

Esa misma semana, y después de cuatro meses de negociaciones, la Concertación selló el pacto electoral municipal con el Partido Comunista, suscribiendo el apoyo mutuo en 337 comunas. Sin embargo, diez días más tarde, el PC aceptó la propuesta del PPD y PRSD de pactar una lista de concejales conjunta en competencia con la DC-PS.

2. Un nuevo referente

El debate sobre el nuevo referente de la Concertación —si ampliarla o crear uno nuevo—, integrando a otros sectores opositores incluidos los movimientos sociales, marcaron el debate interno en un contexto de permanente caída en la apreciación ciudadana.

En este marco, la declaración de Ricardo Lagos Weber: "Esta coalición terminó su ciclo", y su opinión sobre la necesidad de ampliarlo hacia otros sectores

104. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/25/nacional/politica/noticias/40E5F996-7881-433D-901E-0D9E2E400FB6.htm?id=%7B40E5F996-7881-433D-901E-0D9E2E400FB6%7D

resumió el período crítico por el cual pasó la coalición opositora[105]. Esa tendencia se vio refrendada por el triunfo del senador Quintana en las elecciones del PPD. A pesar de la amplia cobertura a esa postura, el encuentro de los partidarios del polo de izquierda con las organizaciones de la sociedad civil, solo reunió a quinientos asistentes y 350 organizaciones ciudadanas, y no contó con asistencia de Walker y Andrade.

Por su parte, desde la DC se defendió la continuidad de la coalición y se rechazó un eventual frente progresista de izquierda. Con todo, la DC decidió no desahuciar el pacto municipal por omisión con el PC[106]. Mientras el PPD y el PR estimaron que la ampliación concertacionista debía realizarse fuera de la coalición, el PS y la DC favorecieron un proceso a partir de ella. Alertando sobre los peligros de una formula izquierdizante, Ignacio Walker, en el encuentro "Ciudadanía y política" organizado por los impulsores del frente de izquierda, afirmó que "la alternativa de gobierno a la Concertación no está a la izquierda, sino hacia la derecha"[107].

Terciando en este debate y reeditando la disputa entre "autocomplacientes" y "autoflagelantes", un documento presentado por los vicepresidentes de la DC, Jorge Burgos, y del PPD, Felipe Harboe, afirmó que

> La tesis de una Concertación que se abre a un pacto electoral con otras fuerzas opositoras, como el PC, el MAS u otras colectividades, no es conciliable con la tesis de un "frente de izquierda" excluyente que posteriormente buscaría concordar con la DC. La fuerza matriz del cambio en Chile, como lo ha demostrado la historia, es la alianza del centro y la izquierda, con un solo programa y un accionar unido desde el inicio, bajo la impronta de un proyecto político compartido de transformaciones viables.[108]

En esa misma línea ya se había pronunciado el ex ministro Edmundo Pérez Yoma cuando, criticando al polo progresista, comentaba que esa era "una frase sin sentido, populista y marquetera"[109]. Sin embargo, a comienzos de octubre, el Presidente del PS, Osvaldo Andrade, afirmaba que:

---

105. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/04/674-455874-9-lagos-weber-y-futuro-de-concertacion-esta-coalicion-termino-su-ciclo.shtml
106. El MAS, del senador Alejandro Navarro, se mostró dispuesto a participar de un "Frente amplio de izquierda y progresista".
107. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/07/09/nacional/politica/noticias/068513C6-EC7A-4FBC-AF1B-F60834ACF6E0.htm?id=%7B068513C6-EC7A-4FBC-AF1B-F60834ACF6E0%7D
108. Entre sus promotores, Eugenio Tironi, el ex ministro Enrique Correa, el empresario socialista Óscar Guillermo Garretón, el ex presidente Ricardo Lagos, el senador PPD Ricardo Lagos Weber, el alcalde y precandidato presidencial de la DC Claudio Orrego y el también presidenciable Andrés Velasco. Véase http://diario.latercera.com/2012/06/22/01/contenido/pais/31-112030-9-manifiesto-reimpulsa-disputa-entre-autocomplacientes-y-autoflagelantes.shtml
109. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/23/nacional/politica/noticias/C6152425-58AD-40BD-A74F-FE3D0D597084.htm?id=%7BC6152425-58AD-40BD-A74F-FE3D0D597084%7D

> En la Concertación estamos en un momento de crisis, tenemos un compromiso con el documento del 5 de octubre de 2011, que dice que transitaremos desde la Concertación a una nueva coalición, más amplia. Pero las acciones políticas coherentes con ello no se han cumplido, porque hay temores de algunos sobre la claridad de los contornos de esa mayoría. Unos se preguntan qué pasa si se incorpora al PC, pero el salto también debe ser hacia el centro. Hay que crecer del PRI al PRO.[110]

La respuesta del senador Escalona, una vez conocidos los resultados electorales de las elecciones municipales, fue categórica: "¿Qué es del PRI al PRO? La nada misma"[111]. Ante lo cual el senador DC, Jorge Pizarro, retrucaba que el "llamado tiene que ser amplio, porque está claro que sólo con la Concertación no ganamos; hay que ampliar a todos los sectores que hoy día se sienten parte de la oposición"[112]. La amplitud de una futura coalición ganadora tendió a dominar el debate opositor en los meses siguientes.

3. Los secretos intentos de cambio al binominal

Las divisiones al interior de todo el espectro político nacional se volvieron a reproducir en torno a los cambios del binominal.

La necesidad de cambiar el sistema electoral binominal fue mayoritariamente apoyada por la opinión pública (63,2%). Un 69,5% creía que este ayudaba a deslegitimar a los parlamentarios y que un cambio mejoraría la calidad de la democracia[113]. Sin embargo, el debate político al respecto se redujo al análisis de modificaciones menores al mismo y RN y la UDI mostraron divisiones internas al respecto.

El ex presidente Ricardo Lagos sostuvo que "el sistema político que hemos tenido en los últimos 22 años llegó a su fin" —recordando que Piñera quiso derogarlo cuando fue senador—, reuniéndose en junio de 2012 con diputados RN favorables a este cambio[114]. Por estas razones, en el marco del 25º Consejo General

---

110. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/07/nacional/politica/noticias/c813bc88-d995-42ae-83d2-86ee1bbcc6a5.htm
111. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-10-30&dtB=30-10-2012%20 0:00:00&PaginaId=2&bodyid=3
112. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2012/10/793638/pizarro-dc-fue-un-buen-resultado-pero-no-saquemos-cuentas-alegres-esta-claro-que-solo-con-la-concertacion-no-ganamos
113. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/05/24/el-632-quiere-cambiar-el-sistema-binominal-y-695-cree-que-este-ayuda-a-deslegitimidad-de-parlamentarios/
114. La Alianza cuestionó la cita y Patricio Melero aseveró que la reforma impulsada por los diputados es "innecesaria y cara". Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/18/lagos-refuerza-agenda-contra-el-binominal-y-recuerda-que-pinera-quiso-derogarlo-cuando-fue-senador/

RN, Alberto Espina acusó a los diputados Cristián y Nicolás Monckeberg, Pedro Browne, Marcela Sabat, Karla Rubilar, Germán Becker, Gaspar Rivas, Joaquín Godoy y Frank Sauerbaum, de "violar la institucionalidad" de la directiva que acababa de asumir, por lo que optó por llevar el asunto a la Comisión Política[115].

En la UDI la idea no contó con el respaldo de la bancada, dado que esta idea "no forma parte de las prioridades de la ciudadanía", y advirtió a La Moneda que una reforma al binominal podría terminar con la Alianza, por lo que el Ejecutivo, debilitado ante la opinión pública, renunció a impulsar reformas al sistema político.

Pero sorpresivamente, en abril, los dirigentes de la DC y RN anunciaron que venían, en silencio, trabajando conjuntamente para definir propuestas sobre reformas políticas. Carlos Larraín afirmó que "hemos pensado con Ignacio Walker en la necesidad de trabajar desde ahora más en conjunto. Dentro de los primeros seis meses vamos a salir con algo muy concreto [ratificando que el entendimiento RN-DC es un acuerdo] político y no sólo académico"[116].

Con todo, en julio, gracias a una nueva división de los diputados concertacionistas, la Cámara rechazó la propuesta que buscaba reformar la cantidad de sus integrantes.

Otras propuestas parciales de reforma fueron, igualmente, lanzadas al ruedo, como la extensión del período presidencial a cuatro, cinco o seis años, con o sin reelección, o la propuesta del ministro del Interior de elegir entre ocho y diez senadores nacionales[117]. La suma de todo lo anterior fue la parálisis en materia de modificaciones al binominal.

4. Nueva Constitución

Esa frustrada iniciativa se sumó a la creciente demanda por profundos cambios en la organización política, económica y social. La propuesta de amplios sectores políticos y sociales por una nueva Constitución formulada a través de una Asamblea Constituyente dividió las opiniones, no solo concertacionistas, sino de todo el espectro político nacional.

El ex ministro DC Genaro Arriagada señaló que la experiencia en otros países no había sido buena y que esa asamblea se daba cuando no se canalizaban las reformas políticas: "Soy muy escéptico de los resultados de las asambleas constituyentes. Por lo general, ellas han creado órdenes constitucionales mal estructurados. Invocan la libertad, pero terminan concentrando el poder en líderes populistas"[118].

---

115. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120606/pags/20120606175842.html
116. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/04/13/nacional/politica/noticias/2FF94012-BA0D-402D-8516-E8E583E12680.htm?id=%7B2FF94012-BA0D-402D-8516-E8E583E12680%7D
117. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/08/17/nacional/politica/noticias/95D10BAA-10E8-4F7C-818E-5B568A37639B.htm?id=%7B95D10BAA-10E8-4F7C-818E-5B568A37639B%7D
118. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/08/22/nacional/politica/noticias/2B93BEEF-F0B6-4003-A8E4-CA0071A1D33A.htm?id=%7B2B93BEEF-F0B6-4003-A8E4-CA0071A1D33A%7D

En la misma línea, *El Mercurio*, en su editorial, estableció que:

> Una vez más se presenta en nuestra escena política la tentación del asambleísmo plebiscitario, impulsado por quienes confunden el fracaso de sus propias estrategias de reforma con una crisis del sistema político y de la democracia representativa. El presidente de la Democracia Cristiana —al igual como anteriormente lo han venido haciendo voces del PPD— ha propuesto sustituir los cauces institucionales de reforma de la Constitución y del sistema político por fórmulas entre las cuales no se descarta el mecanismo denominado "asamblea constituyente". Lo más preocupante es que esta propuesta, lejos de chocar con un rechazo contundente de la clase política como habría sido natural esperarlo—, parece encontrar cierta acogida, al menos en varios sectores del PDC —junto con el rechazo de otros sectores de esa misma colectividad[119].

Igualmente, en abril Camilo Escalona, Presidente del Senado, defendió el presidencialismo y el sistema político, rechazando la idea de tener un Estado "bicéfalo", con un Presidente y un Primer Ministro, afirmando que la propuesta "aparece bonita en el papel, pero su resultado es completamente incierto. Siento que, probablemente, provocaría el robustecimiento de las fuerzas económicas que lo contrarrestan, más que fortalecer su rol conductor, como debe ser el objetivo"[120]. Siguiendo una línea conservadora en apoyo de las actuales instituciones políticas —ampliamente deslegitimadas ante la ciudadanía—, Escalona se reunió en mayo con el ministro del Interior para avanzar en una agenda de consenso en materia de reformas tributaria y educacional[121].

Pero su protagonismo crítico se manifestó con mayor fuerza en septiembre, cuando los senadores José Antonio Gómez, Guido Girardi, Alejandro Navarro, Jaime Quintana y Fulvio Rossi presentaron un proyecto de reforma constitucional (Boletín N° 8.562-07, 3 de septiembre, 2012), estableciendo un procedimiento plebiscitario para el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. En entrevista en *El Mercurio*, Escalona, argumentando una irreconciliable tensión entre cambio constitucional y gobernabilidad[122], se mostró en desacuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente:

---

119. Véase http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/08/21/asambleismo-plebiscitario.asp
120. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/04/07/escalona-defiende-el-presidencialismo-y-el-sistema-politico-en-el-mercurio/
121. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/05/30/nacional/nacional/noticias/C6C1E8CB-7F73-4C65-B317-675651CD55E9.htm?id=%7BC6C1E8CB-7F73-4C65-B317-675651CD55E9%7D
122. "Con el destino de los países no se juega (…) Para que la gente confíe en nosotros, tenemos que actuar con la seriedad y la responsabilidad que se necesita", véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/22/561405/escalona-y-asamblea-constituyente-tenemos-que-actuar-con-seriedad-y-responsabilidad.html

> Cuando los estados se desploman hay fuerzas beligerantes que están relativamente equilibradas. Es una solución para resolver cuando los estados están en el suelo, los beligerantes llegan a un acuerdo y nombran una constituyente para buscar una solución (…) Nosotros no estamos con un Estado que esté destrozado, como por ejemplo es el caso hoy, dramático, de Siria o de las consecuencias ulteriores de la llamada revolución árabe y no es el derrumbe de la antigua dictadura de los coroneles en Grecia. Nuestro país, según todas sus relaciones internacionales, goza de una estabilidad democrática que para muchas naciones es envidiable (…) hay personas que confunden desencanto político con crisis institucional. Y ése es un gravísimo error (…) No veo una crisis institucional ni veo una situación política que propicie o valide una asamblea constituyente (…) No veo que sea practicable. ¿Quién la va a convocar? Si se junta un grupo de dirigentes sociales y se constituyen como asamblea constituyente, eso no es más que un grupo que se juntaron. No tiene ningún efecto práctico.[123]

Desconociendo la posibilidad de una consulta ciudadana, se declaró igualmente contrario a la propuesta de los senadores Gómez, Quintana, Girardi, Navarro y Rossi, quienes dieron a conocer el proyecto que busca modificar la Constitución para que en la próxima elección presidencial se incorpore una cuarta urna y preguntar a la gente su interés en elaborar una nueva Constitución:

> No hay ningún mecanismo en nuestro país hoy que permita cambiar la situación que tiene el país por una vía extra institucional. Toda posibilidad necesita de una mayoría que tenga la capacidad de contar con los votos necesarios en el Congreso Nacional. Y por eso, yo no descarto ninguna idea que, precisamente, a través de las reformas institucionales que se necesitan puedan ampliar nuestra democracia.[124]

En este sentido, coincidió con el senador Andrés Zaldívar (DC) en la fórmula de una comisión bicameral, quien afirmó, sin descartarla, que

> es fundamental conformar una Comisión Bicameral, para que radiquemos en el parlamento el estudios de las reformas constitucionales o de una nueva Constitución para Chile (…) Toda reforma hay que hacerla en los marcos constitucionales (…) Los senadores tiene el derecho a presentar las indicaciones o reformas constitucionales que estimen pertinentes, ahora, que tengamos las mayorías para aprobarlas es más complejo, porque sabemos que no es tan fácil con el veto de la UDI (…) Con la comisión Bicameral se puede escuchar a todos los sectores sociales, a todos los actores interesados sobre el tema, y a los expertos en materias constitucionales, porque es

---

123. Véase http://www.camiloescalona.cl/prensa_detalle.php?id=36 ; 1 de septiembre 2012.
124. Ibíd.

> acá en el parlamento donde se tiene que hacer la reforma, ya sea para instalar una Asamblea Constituyente o para hacer una nueva Constitución.[125]

En respuesta a estas posturas, en carta abierta a Camilo Escalona el ex senador Carlos Ominami formuló un llamado a una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, estableciendo que:

> Ningún problema importante podrá resolverse adecuadamente en el cuadro de la actual Constitución. La defensa en serio de la educación pública se topará con la libertad de enseñanza; la regionalización con el centralismo presidencialista; la recuperación de la soberanía sobre las aguas con la defensa de la propiedad privada; la discriminación positiva hacia las mujeres o el establecimiento de la multiculturalidad con la igualdad formal; la necesidad de un Estado ágil y atento para asegurar el paso del crecimiento al desarrollo chocará con el Estado Subsidiario y suma y sigue (…) El planteamiento a favor de la asamblea constituyente tiene fundamentos difícilmente más sólidos. Esta es la forma prácticamente universal a través de la cual los pueblos han definido las reglas a través de las cuales regir su convivencia (…) Los fundamentos de una asamblea constituyente arrancan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pasando por la práctica universal de la democracia. En el caso de Chile, la Declaración fundacional de la Alianza Democrática de 1983, antecedente directo de la Concertación, estableció claramente la necesidad de dotar a Chile de una nueva Constitución elaborada por una asamblea constituyente. (…) Las tres Constituciones que nos han regido, la de 1833, 1925 y 1980 han sido el resultado de la presión oligárquica y militar. Somos además el único país que ha buscado transitar hacia la democracia manteniendo la Constitución heredada de la dictadura[126].

Sorpresivamente, en agosto, a pesar de la oposición de sus correligionarios Hosain Sabag y Jorge Burgos, Ignacio Walker reconocía que "nos parece que la asamblea constituyente para una nueva Constitución representa un camino legítimo para la construcción de una plena e inclusiva democracia"[127].

5. Iniciativas programáticas

Dividida la Concertación en materia de cambios institucionales, y ante las crecientes expectativas de una ganadora candidatura a la presidencia de Michelle Bachelet,

125. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/09/674-481638-9-zaldivar-una-comision-bicameral-es-una-alternativa-mas-realista-para-instalar.shtml
126. *El Mostrador*, 4 de octubre 2012.
127. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/08/21/nacional/politica/noticias/587162BD-BF61-40E5-BBDA-71C7EAA5B18E.htm?id=%7B587162BD-BF61-40E5-BBDA-71C7EAA5B18E%7D

las diversas facciones comenzaron un debate programático tendiente a hegemonizar esa eventual candidatura.

Una serie de cartas de saludo de la ex Presidenta Michelle Bachelet a los partidos de la Concertación aumentaron las especulaciones sobre su eventual candidatura presidencial. Con ocasión de la elección en marzo de Camilo Escalona como presidente del Senado, Bachelet le señaló que

> entre medio, la historia nos mostró la cara más oscura de lo que le pasa a los países y a las sociedades cuando son incapaces de encontrar y cultivar el diálogo, el respeto al adversario político, la confianza y el amor a la patria (…) Buscarás los consensos; no te permitirás mirar intereses de grupos de poder, sino los intereses que hacen bien a Chile, a las personas, a los hombres y mujeres de trabajo; que llevarás con dignidad, altura y responsabilidad política, que siempre te ha caracterizado, en este nuevo rol que asumes.[128]

A la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en junio, la ex Presidenta, en su saludo, estableció que

> el país debe deshacerse de los privilegios que persisten en nuestra sociedad, emprendiendo el más amplio esfuerzo por fortalecer la educación pública en todos sus niveles, aumentar la inversión en salud (…) Todos estos son pasos que requieren de una verdadera reforma tributaria que signifique que aquellos que tienen más contribuyan en mayor medida, para así ampliar las oportunidades de todos los chilenos y consolidar un sistema de protección social que responda a las necesidades de nuestra gente (…) la sociedad chilena también demanda cambios profundos en nuestro sistema político (…) El sistema electoral chileno no da para más, necesitamos un cambio al sistema binominal, pero también una nueva ley de partidos políticos, el voto de los chilenos en el extranjero, elección democrática en los gobiernos regionales y primarias como mecanismo de participación ciudadana (…) Mis esfuerzos durante 2012 en Naciones Unidas estarán volcados a fortalecer la participación política de las mujeres, avanzar en su empoderamiento económico y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.[129]

En carta a las candidatas mujeres de la Concertación, a fines de enero, destacó la importancia de

> representar a miles de mujeres que no tienen igual representación en sus comunas y en las municipalidades (…) los logros que existen se han tardado muchísimo (…) los países

---

128. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/03/19/531627/bachelet-a-escalona-me-siento-orgullosa-de-que-asumas-la-presidencia-del-senado.html
129. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/06/674-467034-9-bachelet-envia-saludo-a-junta-nacional-dc-y-llama-a-impulsar-reforma-tributaria.shtml

que crecen más, son más democráticos, más justos, más completos, son porque más mujeres participan de la política (…) este es un proceso en el que ganan todos, hombres y mujeres, pero sobre todo gana el país. [Es] esperanzador ver como este movimiento democratizador de la mujer en la política es imparable a nivel mundial.[130]

Y al Consejo nacional del Partido por la Democracia (PPD), Michelle Bachelet indicó que

> Una nueva etapa y un nuevo ciclo político se han abierto en Chile (…) Se necesita sumar fuerzas y energías, construir consensos y voluntades, para proyectar un modelo de desarrollo sustentable y a escala humana, que no reproduzca ni acentúe las desigualdades, ni las injusticias ni los abusos que hoy conocemos. [Se] requiere un diálogo franco entre los diferentes actores, pero por sobre todo se necesitan propuestas claras e innovadoras (…) es en democracia, escuchando a la gente, permitiendo la participación, sin vetos, que se construyen los acuerdos y se pueden realizar los cambios.[131]

Sus énfasis en la necesidad del diálogo y la generación de consensos; combatir los privilegios; no someterse a los intereses de los grupos de poder; focalizar las políticas en los hombres y mujeres de trabajo; fortalecer la educación pública y la salud; una verdadera reforma tributaria; cambio del sistema electoral binominal; nueva ley de partidos políticos; voto de los chilenos en el extranjero; elección democrática en los gobiernos regionales; primarias como mecanismo de participación ciudadana; participación política de las mujeres; y desarrollo sustentable; dieron pie a imaginar que detrás de estos destacados existiría un programa de Gobierno *in nuce*, el que, además, requería de propuestas claras e innovadoras.

La competencia por hegemonizar las iniciativas programáticas continuó en el mes de julio, cuando el presidente del PS, Osvaldo Andrade, creó una comisión para elaborar el programa presidencial de Bachelet[132] y, en septiembre, el presidente del Senado, Camilo Escalona, presentó el libro *Retrato de la desigualdad en Chile*, documento programático con miras al próximo Gobierno. Contradiciendo todo lo anterior, Andrade afirmaba en octubre que:

> Me he sentido defraudado con la controversia por levantar papeles programáticos en la Concertación y no respetar los acuerdos del 5 de octubre de 2011. Veo un afán

---

130. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/01/674-427901-9-ex-presidenta-bachelet-envia-carta-de-apoyo-a-candidatas-de-la-concertacion.shtml
131. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-07-08&NewsID=60042&BodyID=3&PaginaId=4
132. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/07/20/nacional/politica/noticias/E8346FD8-7095-4E9D-BE9C-978DAD3C72A1.htm?id=%7BE8346FD8-7095-4E9D-BE9C-978DAD3C72A1%7D

inequívoco de mostrar identidades por encima de la coalición, donde cada quien quiere hacer lo suyo.[133]

Con todo, el domingo 7 de octubre el PPD, PR, PC e IC entregaron su propuesta programática en vistas a las elecciones municipales, que en lo fundamental mantuvo la idea de una Asamblea Constituyente; el fin al lucro en todos los establecimientos escolares, centros de formación técnica e institutos profesionales, entendiendo lucro como la obtención de ganancias del proceso educativo, tanto en instituciones privadas como públicas; obviar la libertad de elección y transformarla en un derecho constitucional que asegure un sistema integral, universal, de calidad y gratuito; una nueva institucionalidad, que favorezca la propiedad estatal del agua, crear la Empresa Nacional de Aguas de Chile y la Empresa Nacional de Explotación del Litio[134]. Paradojalmente, siendo la propuesta programática una demanda ciudadana, los electores no le dieron el esperado apoyo a este pacto electoral.

Criticando como abstracta la discusión programática, el ex candidato presidencial, Jorge Arrate, propuso seis ideas básicas, en cinco de las cuales no se necesitaba ley:

> 1. Las fuerzas políticas que sostienen la proporcionalidad como criterio fundamental debieran practicarla a los pactos electorales. 2. No se requieren los votos de la derecha para que los partidos de oposición pongan en práctica la ley de cuotas en su funcionamiento interno y en la nominación de sus candidaturas. 3. Limitar la reelección de los parlamentarios, alcaldes y concejales. Es perfectamente posible, sin los votos de la derecha, que los partidos que recojan estos postulados establezcan en sus normas internas un mecanismo que fije este límite. 4. Un gesto valioso para recuperar confianza pública es que los propios partidos pongan límite a la vigencia de sus adhesiones legales, obligándose así a renovar el compromiso del adherente. 5. Los partidos pueden reconfigurar la relación entre el dinero y la política. Los partidos, además, podrían establecer normas rigurosas y mecanismos de control para poner coto a eventuales conflictos de interés de sus dirigentes y parlamentarios, como también a la circulación descontrolada de lobistas en su interior. 6. Instalar una Cuarta Urna en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de una nueva Constitución para Chile.[135]

---

133. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/07/nacional/politica/noticias/c813bc88-d995-42ae-83d2-86ee1bbcc6a5.htm
134. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/08/nacional/politica/noticias/01D4EB28-D82B-4E31-B082-B28770041D32.htm?id=%7B01D4EB28-D82B-4E31-B082-B28770041D32%7D
135. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/07/23/la-crisis-de-los-partidos-y-la-sociedad-empezar-por-casa/

6. Primarias presidenciales

En medio de las frustradas conversaciones por cambios institucionales y procedimientos para ello, el gobierno continuó sacando sus iniciativas legislativas y, a mediados de septiembre el Senado aprobó el proyecto de primarias -voluntarias pero vinculantes- que fijó la votación 20 semanas antes de las elecciones. Las indicaciones que proponían transporte público gratuito el día de los comicios y un sistema de cuotas por género, fueron rechazadas.

Y, en un acto en el Caupolicán, el presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, abogando por un cambio en las reglas del juego que actualmente condicionan el desarrollo del país, apoyó a los candidatos a alcaldes y concejales de su partido y se proclamó candidato a la presidencia en 2013, dejando atrás la posibilidad de ir a primarias opositoras y afirmando que la primera vuelta era la primaria más efectiva de todas.

XI. SOCIEDAD

La dinámica política antes resumida siguió disociada tanto de los cambios socioculturales —que lenta pero sostenidamente se estaban produciendo en el país— como de los urgentes temas ciudadanos cotidianos que continuaron aquejando a la ciudadanía: planificación urbana, áreas verdes, abuso sexual infantil, mujeres jefas de hogar, drogas.

Así, los senadores Alvear y Frei, enfrentando este tipo de temas y tratando de enfrentar el caos urbano, propusieron que en Santiago, Valparaíso y Concepción hubiera elección de "alcaldes mayores", de manera de definir políticas viales y de desarrollo urbano que hoy se entrampan en comunas vecinas afectadas por decisiones de otros[136].

En ese mismo contexto, y pagando caro la improvisación, 15 mil hectáreas de parques perdieron el estatus de bien de uso público. Estos terrenos fiscales podrían ser enajenados y terminar siendo edificados. Si se hubiese gestionado a tiempo una modificación al Plan Regulador Metropolitano, lo que inexplicablemente no se hizo, esto no habría sucedido[137].

En otras materias, el abuso sexual infantil aumentó en un 25% y 49 colegios del sector Oriente de Santiago fueron investigados por delitos de presuntos abusos sexuales. La Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia

---

136. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120606/pags/20120606212104.html
137. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/17/el-error-de-ravinet-que-entrega-miles-de-areas-verdes-a-manos-de-privados/

y Adolescencia explicó el alza por la serie de casos de abusos en colegios que salieron a la luz pública[138].

Y el consumo de drogas continuó ascendente sin un debate de cómo avanzar en su control y disminución. De acuerdo al senador Ricardo Lagos Weber:

> Por un lado, se intenta educar, prevenir y rehabilitar, mientras que, por el otro, se busca reprimir a consumidores. La mano dura en la persecución y aplicación de la ley debe ser para el crimen organizado y no para los consumidores, el Estado debe tratarlos con compasión y asistencia sanitaria. No nos equivocamos, hay barrios y poblaciones en Chile donde los carteles han tomado el control y ahí no podemos dar el brazo a torcer. Pero eso no significa que debemos continuar gastando millonarios recursos para perseguir consumidores y detener a inocentes, es momento de iniciar un uso eficiente de las políticas públicas y los recursos, estableciendo claras diferencias entre la necesidad de abordar el crimen y la salud de maneras distintas.[139]

Por su parte, la encuesta CASEN mostró que las mujeres jefas de hogar se duplicaron en veinte años, alcanzado a los dos millones. En 1990, el 20% de las familias eran sostenidas económicamente por una mujer y en 2011, el 39%[140].



Finalizando su tercer año de gobierno, y a pesar de los pobres resultados en materia de apoyo ciudadano, el Presidente Piñera continuó implementando políticas públicas tratando de expresar a través de ellas el "sentido profundo de su misión". Así, la captura del Estado por parte del sector privado siguió encontrando un ambiente favorable en su administración y los intereses empresariales continuaron ampliando los márgenes de lucro y renta privada.

Su gestión legislativa, mejorada por las propuestas opositoras, logró sacar importantes proyectos de ley, como la eliminación del descuento del 7% a los jubilados, nuevas normas laborales para las empleadas domésticas, la eliminación del CAE, la defensa de los consumidores, limite a la comida chatarra, la Ley Antidiscriminación, el postnatal de seis meses y una reforma tributaria limitada con un importante guiño al sector privado.

Pero el Ejecutivo siguió al debe en materia de seguridad ciudadana, por lo que trató de aliviar la presión desviando la atención hacia el Poder Judicial, al tiempo

138. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/08/680-475584-9-medicos-aseguran-que-consultas-psiquiatricas-infantiles-por-abusos-sexuales.shtml
139. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/07/26/abramos-el-debate-en-materia-de-drogas/
140. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/07/26/economia_y_negocios/economia _y_negocios/noticias/4B141264-3088-4501-A94B-838110009151.htm?id=%7B4B141264-3088-4501-A94B-838110009151%7D

que aumentaba la violencia contra manifestantes pero no era capaz de controlar la delincuencia y corrupción al interior de las filas policiales.

Las medidas orientadas a apoyar a los candidatos de la Alianza en las elecciones municipales fueron sistemáticas, como los bonos y otras, pero no lograron el efecto esperado, llevándolos ineluctablemente a importantes derrotas. En este inesperado contexto, el Ejecutivo entró en su último año de gestión, con debilitadas perspectivas de darle continuidad al gobierno de la Alianza.

Intentando superar los errores cometidos, recuperar iniciativa y dar una conducción más sólida en el tramo final de su gestión, el Presidente realizó un importante cambio de Gabinete, liberando a los ministros presidenciables —Allamand y Golborne— y a la única ministra —Parot— que intentaría competir por un cupo parlamentario. Pero el cambio más importante fue el de Hinzpeter por Chadwick, reconociendo de hecho la falta de conducción política del Gabinete y sepultando definitivamente la fantasía inicial de poder someter a los partidos de la Alianza creando una "nueva derecha".

Así, con una ambiciosa agenda legislativa trataría de mantener la iniciativa. Ella contemplaba una serie de proyectos de ley: elección de consejeros regionales, plebiscitos comunales, el lobby en organismos públicos, ley de transparencia y ley de probidad pública, ley de presupuesto, el INE autónomo, la reforma al sistema procesal, la carretera eléctrica, la reforma al sistema de acreditaciones y nada menos que la reforma al sistema de partidos[141]. En un año electoral, una agenda de reformas de esa naturaleza tenía bajas posibilidades de llevarse exitosamente a cabo.

Vigorizados por los resultados de las elecciones municipales, los partidos de la Concertación, incluyendo al PC, encontrarían mayores puntos de convergencia programática en espera de la decisión de la candidatura de Michelle Bachelet, única opción hasta ese momento de un regreso opositor a La Moneda. Sin embargo, el 4,51% logrado en las elecciones municipales por el recientemente creado PRO requeriría de una compleja ingeniería para ampliar el arco de las fuerzas opositoras de manera de agrupar los dos tercios de la ciudadanía, en un ancho frente democrático y con un programa progresista que asegurara un amplio triunfo en 2013.

141. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/10/28/nacional/politica/noticias/E678BD36-7F1B-4D09-BFD9-E9B1D1D8B70C.htm?id=%7BE678BD36-7F1B-4D09-BFD9-E9B1D1D8B70C%7D

CUADRO 6

ELECCIONES MUNICIPALES, OCTUBRE 2012

Lista o Pacto	PORCENTAJE	ELECTOS	PORCENTAJE	ELECTOS
	2008		2012	
A: Igualdad para Chile, del Partido Igualdad			**0,81 %**	1
A.- Por un Chile Limpio	**7,56 %**	117		
Partido Ecologista	0,06%			
B: Partido Regionalista de los Independientes (PRI) + Independientes	3,70%		**7,63 %**	136
Independientes	3,59%			
B.- La Fuerza del Norte **I: Por el Desarrollo del Norte**	**0,58 %**	7	**0,45 %**	6
C.- Concertación Democrática **F: Concertación Democrática**	**27,84 %**	677	**27,36**	663
Partido Demócrata Cristiano + Independientes	13,98%		15,11%	387
Partido Socialista + Independientes	11,17%		12,24%	276
Independientes	2,74%			
D.- Juntos Podemos Más	**9,12 %**	79		
Partido Comunista	4,87%			
Partido Humanista	1,87%			
Izquierda Cristiana	0,03%			
F.- Concertación Progresista	**17,29 %**	393		
E: Por un Chile Justo			**22,10**	499
PPD + Independientes	8,53%		9,94%	269
Partido Radical + Independientes	5,19%		5,73%	128
Partido Comunista +IC +Independientes			6,42%	102
Independientes	3,61%			
Subtotal Concertación + PC	***50,00%***	***1070***	***49.46%***	***1164***
E.- Alianza **H.- Coalición**	***36,05%***	***861***	***32,94***	833
Renovación Nacional+Independientes	16,11%		15,70%	407
UDI+Independientes	15,09%		17,24%	407
Independientes	4,78%			

C: Cambio por ti (PRO+Ecologistas)			4,51%	49
D: Chile está en otra= Chile Primero			**0,14**	1
G: MAS Human@s			**3,05**	31
Partido Humanista + Independientes			1,86	19
MAS+Independientes			1,19	12
Independientes (Fuera de Pacto)	**1,56 %**	12	**0,96**	6
Total	**100 %**		**100 %**	

CAPÍTULO 9

A RÍO REVUELTO…
De la derrota electoral al último Mensaje

A diferencia de la tradicional quietud política durante el descanso estival, en el verano de 2013 la política nacional se vio inusualmente agitada, alcanzando altos niveles de tensión recién comenzado el otoño.

De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias, la derrota electoral de la derecha profundizó sus divergencias internas, visibilizándose significativas fracturas al interior de la Alianza y sus partidos. Igualmente, en medio de esperanzas renovadas de recuperar el Gobierno gracias a la ex presidenta Bachelet, la oposición mostró sus propias tensiones y divisiones intra e interpartidarias.

En su último año el Ejecutivo comenzó a preparar las condiciones para una salida digna del Gobierno y el traspaso del poder. Así, se fortaleció el control comunicacional de la presidencia y se anunció una amplia lista de iniciativas legislativas que cubrirían temas tan amplios como la reforma educacional, crecimiento e inversiones, reformas políticas y seguridad ciudadana, las que al no ser posible de aprobar durante la administración Piñera quedarían como agenda legislativa para una próxima administración y su respectiva oposición. En esta misma dirección, el Presidente nombró a María Luisa Brahm, su leal jefa de asesores del "segundo piso", como miembro del Tribunal Constitucional, en reemplazo de José Antonio Viera-Gallo, con el objetivo de fortalecer tal instancia como barrera antimayorías parlamentarias que en un futuro puedan aprobar leyes que amenacen los intereses basales de la derecha[1].

Igualmente, los empresarios fundadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) endurecieron posiciones, pidiéndole la renuncia a Arturo Fontaine, su director por 31 años, quien reiteradamente mostró opiniones desfavorables al Presidente, a su política educacional y se manifestó contra el lucro en las universidades. Ante esta solicitud de renuncia, Fontaine advirtió que "si la agenda se ha corrido a la

1. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/03/27/el-poder-no-electoral-que-busca-ejercer-la-derecha-desde-el-tribunal-constitucional

izquierda y el país se ha polarizado, es más importante que el CEP sea un lugar de conversación racional"[2]

En este revuelto río, el sector empresarial siguió capitalizando y las élites políticas continuaron controlando las barreras de acceso al poder, abriendo selectivamente las esclusas de las directivas partidarias a sus más cercanos y limitando el ingreso de independientes al Parlamento. Distante de este microcosmos, la sociedad mostraba sus anhelos participativos junto a una depresiva segregación.

I. EJECUTIVO

En medio de la abierta confrontación entre posturas liberales y conservadoras al interior de la Alianza, el Ejecutivo reaccionó con un hiperactivismo legislativo, intentando consolidar posiciones a la vez que continuaba con su incansable, y nunca plenamente lograda, búsqueda de un mayoritario apoyo ciudadano.

1. Reacciones ante la derrota electoral

Reaccionando ante los adversos resultados de las elecciones municipales de octubre de 2012, para el Gobierno y la Alianza (en particular para RN), el Ejecutivo efectuó dos movidas tácticas. Por una parte, realizó la cuarta modificación de Gabinete en tres años, cambiando al ministro Andrés Chadwick de SEGEGOB a Interior; a Rodrigo Hinzpeter de Interior a Defensa; nombró como nueva vocera de Gobierno a la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez; y mantuvo a Rodrigo Pérez Mackenna como biministro de Vivienda y Bienes Nacionales. La ministra Catalina Parot (Bienes Nacionales), quien se postularía al Senado, junto a los presidenciables, Laurence Golborne (Obras Públicas) y Andrés Allamand (Defensa), dejaron el Gobierno. De esa forma, al desprenderse de "ministros-candidatos" en competencia, intentó reducir la entropía que esa sorda pugna había generado en su administración, paralizando relativamente la gestión gubernamental. En la medida que los ministros involucrados desde sus respectivas carteras luchaban por cobertura mediática, la atención pública terminó centrada en ese duelo más que atendiendo los logros de su administración.

Tratando de recuperar la iniciativa secuestrada por la rivalidad intra-Gabinete, el segundo movimiento presidencial fue promulgar, a fines de noviembre de 2012, la Ley de Primarias, de carácter vinculante, para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de alcaldes, las que se realizarán el 30 de junio de 2013, y, en

2. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/05/18/fontaine-si-la-agenda-se-ha-corrido-a-la-izquierda-y-el-pais-se-ha-polarizado-es-mas-importante-que-el-cep-sea-un-lugar-de-conversacion-racional/

enero, anunció una ambiciosa agenda legislativa compuesta por 24 proyectos, agrupados en cuatro grandes sectores, a saber:

> 1. *Reforma educacional*: Superintendencia de Educación Superior, Nuevo Sistema de Financiamiento, Subvención Clase Media, Carrera Docente, Nuevo sistema de acreditación. 2. *Crecimiento e inversiones:* Carretera Eléctrica Pública, Agilización de Concesiones Eléctricas, Proyecto Misceláneo pro Inversión, Ley de Quiebras, Venta de medicamentos en establecimientos comerciales, Modernización de notarios y conservadores, Ley Única de Fondos. 3. *Mejores instituciones*: Perfeccionamiento del sistema de votaciones y escrutinios, Elección de CORES, Plebiscitos comunales, Ley de Lobby, Ley de Probidad Pública, Reforma a la Ley de Transparencia, Transparencia en Municipios, Ley de Partidos Políticos. 4. *Seguridad Ciudadana*: Reforma a la reforma procesal penal, Restringe beneficios a condenados por delitos sexuales a menores, Fortalecimiento del resguardo del orden público, Reforma al SENAME[3].

Considerando los escasos siete meses hábiles que de hecho disponía el Ejecutivo para avanzar proyectos de ley, la lista presentada mostró sus debilidades, por lo que a comienzos de marzo de 2013 el paquete de proyectos se redujo a 15, siguiendo "una estrategia que considera el rasgo 'electoral' de este año"[4] y pondría cincuenta urgencias legislativas a proyectos de ley hasta el fin de su administración.

2. Las dos almas de la Alianza

El revés electoral de la derecha revivió tensiones internas, evidenciando una pugna ideológica transversal en la Alianza, la que se instalo públicamente en entrevistas y libros. A fines de 2012, quienes abrieron los fuegos fueron los miembros del sector más conservador de la derecha, encabezado por el ex ministro de Pinochet, Hernán Büchi, quien declaró que "el gobierno está dejando de lado la defensa de sus ideas y convicciones"[5]. Lo siguió, en su libro en defensa del "modelo", el director de Libertad y Desarrollo, Luís Larraín, acusando que:

> Ni la centroderecha, en particular el Gobierno (…) han hecho esfuerzos serios por defender algunos de los muchos elementos positivos que tiene el marco institucional y económico chileno. Es más, muchas veces se han sumado irreflexivamente a las críticas (…) uno se pregunta por qué lo hacen si llegaron al poder precisamente con el respaldo

3. *El Mercurio*, 2 de enero 2013.
4. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/03/03/reportajes/cuentan_que/noticias/586618D4-9952-483C-92F0-06FF6D1799BE.htm?id=%7B586618D4-9952-483C-92F0-06FF6D1799BE%7D
5. Véase http://cnnchile.com/noticia/2012/12/31/hernan-buchi-critica-a-gobierno-de-sebastian-pinera-por-dejar-de-lado-la-defensa-de-sus-ideas-y-convicciones

del electorado para completar la transición de Chile hacia el desarrollo, su principal promesa de campaña.[6]

A estas críticas se le sumó el senador UDI, Jovino Novoa, el que en su libro *Con la fuerza de la libertad* criticó acerbamente al Gobierno por no defender la economía de libre mercado ni avanzar en la flexibilidad laboral, por subir impuestos, ceder a la presión pública cambiando reglas del juego (Barrancones), aceptar la demonización del lucro, para finalmente comprarse la consigna de que "la desigualdad es un mal"[7]. Su conclusión fue que "el gobierno de Sebastián Piñera es, en gran medida, responsable de la debilidad y la pérdida de identidad de la centro-derecha"[8].

La respuesta a estas críticas provino del Gobierno y del ministro Cristián Larroulet, también UDI, el que en su libro *Chile, camino al desarrollo* afirmó que el país había cerrado la consolidación democrática gracias a la alternancia con un Gobierno de centroderecha, el que había mostrado sensibilidad social, preocupación por los derechos humanos y tolerancia, dando por tierra con la superioridad moral de la izquierda, creando una centroderecha moderna, capaz de llevar al país más cerca del desarrollo gracias al emprendimiento e innovación, empleo, distribución del ingreso, protección de los consumidores, educación, una nueva política social, seguridad pública, reformas a las instituciones políticas, modernización del Estado, descentralización, y un oído atento a las demandas ciudadanas[9].

Después que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusara de traidor al senador Novoa —y posteriormente se desdijera—, el Presidente respondió directamente las críticas:

> Escucho a algunos que creen que porque hicimos una reforma tributaria hemos abandonado nuestros principios, ¡por favor! Hicimos una reforma que significó aumentar algunos impuestos de 17 a 20% a las empresas, pero bajamos otros… porque lo hicimos ¿por un capricho? No, porque sentíamos la necesidad de reconstruir nuestro país (…) los principios y valores nuestros, los de siempre, los de nuestro sector, la libertad asociada a la responsabilidad, el trabajo bien hecho, una sociedad con mayor justicia, el respeto irrestricto de la vida, promoción de la familia. Esos son los valores que nos han guiado.[10]

---

6. Larraín, L., *El regreso del modelo*, Santiago: Instituto Libertad y Desarrollo, 2012, véase http://www.lyd.com/wp-content/files_mf/lyd236enero9.pdf
7. Véase http://diario.latercera.com/2013/01/12/01/contenido/reportajes/25-127443-9-jovino-novoa-los-empresarios-no-salen-a-defender-el-modelo.shtml Novoa, J., *Con la fuerza de la libertad*, Santiago: *La Tercera*-Planeta, 2013.
8. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/01/17/pinera-responde-con-dureza-a-criticas-de-jovino-novoa-y-hace-arenga-electoral-con-miras-a-las-presidenciales/
9. Larroulet, C., *Chile camino al desarrollo*, Santiago: Mercurio-Aguilar, 2013.
10. *El Mostrador*, 17 de enero 2013.

Así, a tres años de su elección, el Presidente reconocía las profundas diferencias que lo separaban de su principal partido de Gobierno.

Pero estas diferencias también se manifestaron al interior de su propia administración, tal fue el inesperado apoyo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, a la despenalización del consumo de ciertas drogas y la rehabilitación de drogadictos; tal como la OEA, que recomendó regular algunos estupefacientes. Ante esta declaración, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que "hoy día nosotros creemos que no tiene que haber cambios legales que cambien el norte y el camino que ha señalado el Presidente de la República"[11]

3. La incesante búsqueda de apoyo ciudadano

Estimulado por el leve aumento de la popularidad presidencial en el período noviembre-diciembre 2012 (31% aprobación), el Ejecutivo continuó fortaleciendo su política comunicacional a través de un mayor control noticioso, organización cabildos abiertos, entrega de subsidios, organización de comisiones presidenciales y presencia en temas internacionales.

a) Control noticioso

El mayor control gubernamental en TVN significó, de acuerdo a FUCATEL, una distorsión de la agenda noticiosa. Así,

> más de la mitad del tiempo dedicado a política en el noticiero de las 21 horas, se destina a la difusión de la labor del Gobierno [existiendo una] mínima presencia de otros partidos políticos —como los de la izquierda extra Concertación—, las iglesias y organismos de derechos humanos (entre 0% y 1% de su pauta). Lo mismo con las informaciones regionales [La presencia del] Ejecutivo en notas sobre política, (…) alcanza un 57% (…) Del total de la agenda noticiosa de TVN los partidos fuera de las dos grandes coaliciones solamente tienen una presencia de 0.2% para la Izquierda Extra Concertación, y un 0.9% para otros partidos, produciéndose una desproporción con respecto del apoyo de estos sectores tanto en encuestas como en las urnas en las últimas elecciones municipales.[12]

---

11. Véase http://www.24horas.cl/nacional/gobierno-cierra-la-puerta-a-cambios-legales-en-drogas-654297
12. Véase http://www.observatoriofucatel.cl/observatorio-fucatel-analiza-noticiero-central-de-tvn-y-hace-un-llamado-a-discutir-el-concepto-de-pluralismo/

Una política similar se implementó en los registros de entrada al Palacio de la Moneda y visitas a Cerro Castillo, negándose el Ejecutivo a entregar la información solicitada en base "al respeto de la vida privada de la persona y su familia"[13].

El uso sesgado de la información por parte del Gobierno quedó nuevamente de manifiesto cuando la ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, acusara a ONU-Mujeres de usar "datos falsos, que databan de cuatro años atrás" para la campaña de este organismo contra el femicidio, "para dar la imagen de que las mujeres estamos muy mal en Chile"[14]. Junto al retiro de las pancartas por orden del Representante Residente del PNUD en Chile, la ministra recibió la respuesta desde la sociedad civil. Pamela Díaz-Romero, Directora Ejecutiva de Fundación Equitas, señaló:

> Si el femicidio, tal como fue tipificado en la ley, puede ser contabilizado a partir de las víctimas ingresadas o través de los casos terminados —con sentencias e imputados— publicados por el Ministerio Público, en este no se incluyen los asesinatos de mujeres cometidos por desconocidos, parejas no convivientes u ocasionales, y quienes mueren luego de haber sido abusadas sexualmente. A estos se suma la violencia sexual sin resultado de muerte contra niñas y jóvenes, que de acuerdo al informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (…) es un hecho de ocurrencia cotidiana, en espacios familiares y privados, comunitarios e institucionales. Polemizar para resaltar números favorables al gobierno no mejora esta realidad, podría ser interpretado como electoralmente oportunista y es una muestra de falta de consideración con las víctimas.[15]

Esta política comunicacional implicó un aumento del gasto gubernamental en publicidad durante el 2012, el que llegó a cerca de USD$ 66 millones de dólares, aumentando un 13,3% real respecto de 2011[16].

b) "Cabildos abiertos"

Una peculiar nueva metodología para sus giras ideó el Presidente, tal fue la de cabildos abiertos, organizando reuniones con cuarenta o cincuenta dirigentes

---

13. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/02/01/listas-secretas-en-la-moneda-y-cerro-castillo-la-contradictoria-agenda-de-transparencia-del-gobierno/
14. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/02/03/reportajes/_portada/noticias/8365C04E-0294-4230-B2E1-3EF0B20621F4.htm?id=%7B8365C04E-0294-4230-B2E1-3EF0B20621F4%7D
15. Pamela Díaz-Romero, "Sernam y la polémica: ¿Oportunismo de quién?", 31 de enero 2013, http://www.fundacionequitas.org/noticias/detalle.aspx?id=120
16. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130319/pags/20130319182149.html

sociales locales, como presidentes de clubes deportivos, centros de madres, líderes vecinales y carabineros de comisarías[17].

c) Subsidios para la clase media

Continuando con el intento de ganar apoyo gracias a subsidios y bonos, en noviembre de 2012, en el tercer llamado del año, el Presidente entregó 4027 mil subsidios de clase media a familias de la Región Metropolitana, con montos entre 500 y 100 UF, para adquirir viviendas entre 600 y 2.000 UF, asignándose en todo el país 10.247 mil subsidios de este tipo, con un costo de $62 mil millones de pesos. De acuerdo al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, este "beneficio ha dinamizado el mercado inmobiliario, a través de la inyección de más de 1.750 millones de dólares, cifra que incluye los recursos destinados a subsidios, los créditos otorgados por los bancos y el ahorro de las familias"[18]. Sin embargo, de acuerdo a *El Mercurio*

> cerca de la mitad de los subsidios de clase media que se han lanzado a concurso no logran convertirse en un aporte financiero para la vivienda y terminan venciendo, siendo desechados o devueltos por quienes los consiguen (…) Otro factor es el valor del suelo urbano y su incidencia en los costos de vivienda. Según advirtió la Cámara Chilena de la Construcción en un informe del año pasado, la escasez de suelos disponibles para construcción en ciudades como Santiago, Concepción y La Serena ha encarecido la compra de propiedades, lo que ha convertido en una odisea la búsqueda de departamentos o casas de menos de 2.000 UF. Así, los grupos de clase media que quieren aplicar el subsidio en viviendas familiares, generalmente encuentran solución en sectores periféricos.[19]

d) Bono de marzo

De la misma forma, en la celebración de su tercer año de gobierno, el Presidente anunció un bono de $40 mil pesos y el aumento del sueldo mínimo por sobre los $200 mil pesos mensuales afirmando que "por primera vez hemos incorporado a 300 mil familias adicionales de clase media, que son las que tienen Ficha de

---

17. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/12/23/reportajes/cuentan_que/noticias/FB39CC9B-2FB3-46F1-8E8B-DFDF69854764.htm?id=%7BFB39CC9B-2FB3-46F1-8E8B-DFDF69854764%7D
18. Véase http://www.lanacion.cl/presidente-y-minvu-entregan-mas-de-4-mil-subsidios-a-clase-media/noticias/2012-12-22/164503.html
19. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/03/31/nacional/nacional/noticias/596B239E-7A1C-44A8-8C5B-3059EA89A9DB.htm?id=%7B596B239E-7A1C-44A8-8C5B-3059EA89A9DB%7D

Protección Social y un sueldo que no supere el millón 370 mil pesos [y] a partir del mes de abril, el sueldo mínimo en nuestro país va a estar por encima de los 200 mil pesos mensuales”[20].

Esta medida recibió críticas de distinto signo. El presidente de RN, Carlos Larraín, se manifestó contrario a los bonos: “Estoy diciendo lo mismo que he dicho siempre, los bonos no son una solución, no he cambiado (…) no me gusta la idea de que haya que quitarle el dinero a personas que ganan sus ingresos y que pagan impuestos por ellos y luego restituírselo”[21].

Por su parte, Gonzalo Durán y Marco Kremerman, economistas de la Fundación SOL, señalaron que la anticipación del reajuste del salario mínimo, “desde una óptica empresarial, también es favorable en términos económicos. En efecto, habiendo enfrentado los trabajadores elevados precios de los alimentos en buena parte del 2012, corresponde recuperar poder adquisitivo, sin embargo, coincidente con el anticipo, la inflación acumulada hoy es históricamente baja: 1,3 % a 12 meses. Vale decir, para las empresas es el mejor momento para negociar. Es barato”[22].

e) Comisiones presidenciales

Al inicio de su administración el Presidente Piñera afirmaba que “éste va a ser un gobierno que no se va a quedar atrapado en comisiones, sino que va a ser un gobierno de acción”, y en menos de tres años el Ejecutivo creó 16 Comisiones Asesoras Presidenciales de carácter no permanente, a diferencia de las seis creadas por la presidenta Bachelet[23].

f) Bolivianos y Chávez

Incorporando la política exterior al diseño político interno, el Gobierno escaló innecesariamente las tensiones con Bolivia por el ingreso no autorizado de tres conscriptos bolivianos al territorio nacional portando un arma de guerra. En vez de expulsarlos inmediatamente, como se había hecho en anteriores oportunidades, el Gobierno posibilitó el inicio de acciones judiciales en su contra. Ante la protesta

---

20. Véase http://www.gob.cl/destacados/2013/03/12/presidente-destaca-que-bono-marzo-llegara-a-2-millones-de-familias-chilenas.htm
21. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130311/pags/20130311180120.html
22. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/03/13/la-estrategia-que-hay-detras-del-anunciado-reajuste-del-salario-minimo
23. Véase http://especiales.latercera.com/especiales/2012/predicciones/fernandez.html

de abierta o encubierta de opositores y partidarios, el Gobierno finalmente expulsó a los conscriptos del país.

La muerte del presidente Chávez fue otro episodio en que el Ejecutivo, demostrando más pragmatismo que ideología, decidió asistir a sus exequias terminando de principal guardia de honor en la ceremonia. Además, no demoró en asistir a la entronización del nuevo Papa Francisco.

g) 27/f

Un nuevo aniversario del terremoto y maremoto de 2010 fue la oportunidad para, una vez más, criticar la gestión de la presidenta Bachelet. Sin embargo, esta estrategia volvió a mostrar sus limitaciones, ya que la opinión pública no modificó su adhesión a ella.

h) Iniciativa repetida

El "Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad", anunciado por el Presidente Piñera a comienzos de abril, establecía que los sostenedores podían presentar proyectos entre junio y septiembre en las Secretarías Regionales Ministeriales para mejorar la gestión de las escuelas en las áreas administrativa, capacitación de directivos y profesores, reforzamiento del aprendizaje, infraestructura, participación de los padres y cultura y deporte. Sin embargo, ese fondo ya había sido propuesto por la oposición durante la discusión de la Ley de Presupuesto y rechazado por La Moneda[24].

4. Ley de primarias

Como parte del activismo legislativo presidencial, el Congreso había despachado el 2 de octubre de 2012 la ley de Primarias para designar candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, pero a mediados de marzo el Ejecutivo propuso un perfeccionamiento del sistema electoral, incluyendo normas sobre inscripción automática y voto voluntario y ley de primarias, haciéndolo más desigual y discriminatorio. De acuerdo a Claudio Fuentes, con estos cambios los "partidos decidirán dónde y bajo qué condiciones se compite; la publicidad quedará en manos de quien tenga más recursos; la rendición de gastos se transformó en un acto de fe; no existirán sanciones; no se considerarán medidas de acción afirmativa para resolver las brechas de representación"[25].

---

24. Véase http://www.ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130411/pags/20130411152956.html
25. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/03/19/el-legislador-egoista-y-la-ley-de-primarias

Con todo, la atención terminó desplazándose a las primarias parlamentarias y presidenciales, ante lo cual, continuando con su adicción pecuniaria, a comienzos de marzo el Gobierno propuso un sistema. Los partidos que cumplieran con una cuota mínima de un 20% por sobre el promedio de candidatas mujeres de la última elección equivalente, accederían a dos incentivos financieros adicionales. El primero sería un reembolso de 0,0135 UF por voto de candidata en su lista, el que se pagaría un 30% al partido y el 70% restante a la postulante. El segundo sería 0,009 UF para el partido por cada voto de candidata elegida. Estos reembolsos aumentarían en un 50% el financiamiento actual, que es de 0,045 UF por voto, y se desactivarían cuando se alcance un 30% de mujeres electas por tipo de votación, promedio en el mundo desarrollado.

Dadas las dificultades de lograr acuerdos internos, el 1 de mayo la UDI y la Concertación inscribieron sus candidatos a la primaria presidencial y, salvo RN, anunciaron que no irían a primarias parlamentarias, creando una profunda decepción ciudadana.

El fracaso inmediato de esta nueva institución política mostró los devastadores efectos del binominal sobre los partidos al dejar al desnudo las dimensiones más crudas de la lucha por el poder. Tal fue la situación creada en el PS por la negativa inicial de realizar primarias en las regiones de Los Ríos y Los Lagos y designar al senador Camilo Escalona y al diputado Alfonso de Urresti en esos cupos. Algo similar ocurrió con las designaciones sin primarias en la UDI, de José Antonio Kast en la Región Metropolitana, Iván Moreira en Los Lagos y Ena von Baer en Los Ríos.

5. Consumidores

Agotando la política de protección al consumidor, el Gobierno decretó que 220 fármacos bioequivalentes deberán estar obligatoriamente en el stock permanente de las farmacias[26], y el SERNAC interpuso una demanda colectiva en contra de Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, para compensar a los consumidores dañados por su colusión entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. A su vez, demandó a las multitiendas Corona, Hites y Dijon por cobro ilegal a sus clientes y cláusulas abusivas en contratos, y anunció mediaciones con Fashion's Park, Cruz Verde, Salcobrand, Tricot, ABC DIN y CENCOSUD por contratos con cláusulas abusivas pero sin cobros en las compras[27].

El Ejecutivo presentó, en marzo, un proyecto de ley que imponía un fuerte aumento de las exigencias a jardines infantiles públicos y privados, exigiendo que

26. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/12/19/nacional/nacional/noticias/186350FF-6D33-4078-96AA-4AB581085BA8.htm?id=%7B186350FF-6D33-4078-96AA-4AB581085BA8%7D
27. Véase http://www.ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130412/pags/20130412140926.html

cuenten con un reglamento interno que incorpore políticas de prevención y protocolos de acción ante conductas como abusos sexuales o maltrato infantil[28].

A la multa impuesta por la Corte Suprema a CENCOSUD por cláusulas abusivas en sus contratos a clientes, se sumó el acuerdo con el Banco Estado, el que devolverá $5.700 millones cobrados por este concepto en 2003. Producto de ese fallo la Superintendencia de Bancos derogó la "aceptación tácita" de alzas en comisiones de tarjetas de créditos y otros cobros unilaterales, lo que fue calificado como acto irresponsable por el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, ya que no lo reemplazaron con norma alguna[29].

6. Instituciones

Un nuevo episodio en el deterioro de la legitimidad de instituciones del Estado involucró al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al ser cuestionado —por el Banco BCI, la consultora Gemines y el banco internacional de inversiones Morgan Stanley— los datos de inflación proporcionados por el instituto. Preocupación que escaló hasta el fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió información al respecto. A esas dudas se sumó la exoneración de la Subdirectora Técnica y la carta pública de representantes de algunas jefaturas del INE, dirigida al director, Francisco Labbé Opazo, en la que expresaron:

> Lamentablemente las recomendaciones técnicas planteadas por los equipos en orden a introducir actualizaciones metodológicas en el índice fueron desestimadas por usted y el no poder responder a los cuestionamientos de los analistas nos parece que ha causado un daño a la credibilidad de imagen de nuestra institución.[30]

Las denuncias de errores[31] y falsa información deliberadamente entregada percutaron la salida del director del INE, y para investigar si hubo ilícitos en la realización del Censo 2012, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) retiró computadores y documentos de las oficinas del INE, incluido el celular del director, el que además fue reemplazado por Juan Enrique Coeymans, director del departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica.

---

28. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2013/03/829520/Gobierno-aumenta-exigencias-para-funcionamiento-de-jardines-infantiles-y-salas-cunas
29. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2013/05/09/bergoeing-versus-awad-duro-enfrentamiento-por-caso-de-comisiones-y-cobros-unilaterales/
30. Véase http://www.df.cl/jefaturas-del-ine-cuestionan-a-labbe-y-dicen-que-despido-de-sub-directora-tecnica-es-inexplicable/prontus_df/2013-04-17/145251.html
31. Véase http://ciperchile.cl/2013/04/26/mariana-alcerreca-%E2%80%9Cen-el-censo-2012-si-ha-habido-manipulacion%E2%80%9D/

7. Transparencia

Después de un lustro, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia acordaron inaugurar a fines de abril el portal para la transparencia (www.portaltransparencia.cl), administrado por el CPLT, y que centralizará la información que deben proporcionar todas las instituciones públicas.

II. EMPRESARIOS

El sector empresarial continuó aumentando sus ganancias organizándose para incrementarlas, capturando rentas y consumidores, así como confundiendo intereses públicos con privados.

La encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que "la distribución de ingresos laborales totales se ha mantenido altamente desigual en los últimos 2 años, el nivel de ingresos mensuales de los empleadores aumentó de $1,7 millones mensuales a $2,4 millones desde noviembre del 2010, con lo que sus rentas se incrementaron en casi $700 mil, mientras que el de los trabajadores pasó de $234 mil a $266 mil, anotando una expansión de $32 mil (…) la diferencia de ingresos entre ambas categorías laborales aumentó más de 23% desde noviembre del 2010"[32].

En ese contexto, y ampliando su capacidad de maximización de ganancias, la Asociación Nacional de Armadores (ANA), integrada por los grupos Urenda, Von Appen y Luksic, entre otros, anunciaron la conformación de un *cluster* que incluiría empresas navieras, puertos, astilleros, agentes de naves, firmas de remolcadores, a Armadores Zona Sur-Austral (ARMASUR), sociedades de clasificación, proveedores de naves, empresas de muellaje, servicios de *bunkering*, formación marítima y administración de naves. Y apoyando la concentración de la propiedad y servicios, la Corte Suprema autorizó, con condiciones, a Shell, del grupo Luksic, a comprar Terpel. Los compradores tendrán que vender alguna estación en los lugares en que esté duplicada la presencia de Shell o Terpel[33].

Replicando al grupo Luksic, a mediados de abril COPESA (*La Tercera*), controlada por Álvaro Saieh, anunció la puesta en el aire del canal de televisión abierta, 3TV.

---

32. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130124/pags/20130124155451.html
33. Véase http://pram.elmercurio.com/Private/SendTicketSSO.aspx?SSOAuthStatus=0&SSOTargetUrl=http%3a%2f%2fdiario.elmercurio.com%2f2013%2f01%2f03%2feconomia_y_negocios%2f_portada%2fnoticias%2f3F35CF89-2637-4F84-8349-D7A954F52887.htm%3fid%3d%257B3F35CF89-2637-4F84-8349-D7A954F52887%257D&ApplicationName=EM30

1. Captura de rentas

La captura de rentas se hizo más evidente en este período en las áreas de pesca, tierras, litio y plantaciones forestales.

a) Pesca

La discusión de la Ley de Pesca evidenció tanto las presiones empresariales por mantener la captura de estas rentas, como las grandes fracturas políticas, ideológicas y de intereses que paralizan a la oposición.

Distanciándose del acuerdo entre el Gobierno, el senador Fulvio Rossi (PS) y los senadores DC, Ximena Rincón y Mariano Ruiz-Esquide, señalaron que ese acuerdo no representaba a su bancada porque "un requisito básico para que existiera como tal era la concurrencia de todos nosotros y ello no fue posible", y consideraron que la idea de "otorgar el 85 por ciento de la cuota industrial a un pequeño grupo de empresas por 20 años renovables *ad eternum* nos parece excesivo (…) creemos que no es posible aceptar, en ningún proceso de negociación, una norma que vulnere la definición esencial que debe fundar el marco regulatorio pesquero"[34]. A esa declaración se le sumaron dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno interpuesto por el senador PS, Pedro Muñoz, y Ximena Rincón (DC). El senador Camilo Escalona estimó que al otorgar licencias renovables se entregan "privilegios odiosos en desmedro de todos los chilenos y chilenas. Se vulnera el principio de la libertad económica. Claramente el artículo 19 número 2 de la Constitución establece que no se pueden fijar privilegios a favor de ningún sector de la población sin razón ni justificación". El otro requerimiento fue puesto por el senador PPD, Eugenio Tuma, para hacer respetar los derechos de los pueblos originarios, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [35].

La fundación protransparencia *Ciudadano Inteligente* denunció conflictos de interés en la votación de esa ley, ya que, de acuerdo a las declaraciones de patrimonio firmadas por los parlamentarios al asumir su cargo el senador Andrés Zaldívar, este tenía un hermano y un sobrino en una empresa productora de alimentos del mar; Carlos Larraín era propietario de una parte de una empresa pesquera; y Jovino Novoa era miembro de una empresa productora de alimentos del mar[36]. Agravando

34. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20121124/pags/20121124112337.html
35. Véase http://www.theclinic.cl/2012/12/20/senadores-de-oposicion-impugnan-ley-longueira- ante-tc-por-privilegios-odiosos-a-la-industria-pesquera
36. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/11/12/fundacion-pro-transparencia-manda-carta-publica-denunciando-conflictos-de-interes-de-senadores-por-ley-de-pesca

aun más el conflicto de intereses en la aprobación de esta ley, CIPER reveló que la diputada Marta Isasi (independiente, originalmente elegida en cupo UDI) recibió una donación de parte de la empresa Corpesca para financiar su reelección por Iquique. Estos fondos, que admitió haber recibido, se le habrían entregado antes que comenzara la tramitación de la Ley de Pesca, iniciativa que fue respaldada por ella. Producto de este apoyo, Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, tuvo que renunciar a su cargo.

Graficando la colusión de intereses privados y públicos, la Contraloría ordenó la realización de varios sumarios administrativos en la Subsecretaría de Pesca por graves irregularidades en los permisos de extracción de especies marinas, algunas en veda, para fines de investigación, figura que permitió encubrir actividades comerciales[37].

b) Tierras

El 51% del territorio de Chile continental es de propiedad fiscal, del cual un 26,8% será concesionado a empresarios privados en el marco del plan de licitación 2013. El proyecto fue presentado a los empresarios por el ministro de Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez Mackenna, quien detalló que son 408 terrenos a lo largo del país. De ellos, un 65% estará orientado al sector inmobiliario; 21% a la concesión y el turismo; y un 14% será destinado a las industrias y energías renovables no convencionales[38].

c) Litio

El conflicto por la propiedad de los recursos naturales tuvo un nuevo episodio cuando un grupo transversal de diputados ingresaron un proyecto de ley que reservaba a las empresas del Estado, o aquellas en las que este tenga participación, la exploración y explotación del mineral litio. La iniciativa fue avalada por los diputados Pedro Velásquez (Ind), Pedro Araya (PRI), Roberto Delmastro (Ind), Alfonso de Urresti (PS), Ramón Farías (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Ojeda (DC), Alberto Robles (PRSD), Manuel Rojas (UDI) y David Sandoval (UDI)[39].

---

37. Véase http://www.theclinic.cl/2013/01/17/contraloria-ordena-sumario-en-subsecretaria-de-pesca-por-graves-irregularidades-en-cuotas-de-extraccion
38. Véase http://www.biobiochile.cl/2012/12/13/bienes-nacionales-presento-licitacion-de-terrenos-2013-enfocada-a-empresarios.shtml
39. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20121226/pags/20121226130154.html

d) *Plantaciones forestales*

El Ejecutivo envió el proyecto que modificaba y extendía por otros veinte años el Decreto Ley 701 de 1974 que impulsó, vía subsidios de hasta 90% a la empresa privada, la depredación del bosque nativo y su sustitución por bosques más rentables en el corto plazo, como pino radiata y eucaliptos. La Comisión de Agricultura de la Cámara continuó la discusión en particular del proyecto[40], y el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Eduardo Vial, instó a los parlamentarios a aprobarlo dado que "hasta ahora no tenemos el título segundo vigente y no rigen los incentivos a la forestación, no están funcionando, por lo que presentamos este proyecto para prorrogar y aprovechar de modificar algunas cosas"[41].

2. Captura del Estado

La captura del Estado por parte de intereses empresariales volvió a manifestarse con el perdonazo del SII a la empresa Johnson's de Horst Paulmann, los contratos de INDAP y Chiledeportes. A pesar de los masivos despidos de funcionarios públicos de la anterior administración, el empleo en el sector público aumentó durante esta administración.

a) *Sector público*

El último día de 2012 la ANEF denunció en tribunales más de 640 despidos injustificados de la administración de Piñera. A pesar que la estabilidad laboral de los funcionarios estaba avalada por un instructivo acordado entre el Ejecutivo y la ANEF, más de 1.500 expulsiones se produjeron en las últimas semanas del año[42], las que se sumaron a los miles de despidos en los años anteriores.

Un análisis de datos del INE de aumento de la ocupación por rama de actividad económica, entre noviembre-enero 2010 y el mismo período en 2012, muestra que en total esta aumentó en un 4,6%, pero en la administración pública

---

40. Boletín 8603-01, Proyecto de Ley sobre Fomento Forestal que modifica y extiende el DL N° 701, disponible en: http://bcn.cl/17hxc (enero 2013).
41. Véase https://www.google.cl/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=Actualidad+en+Medio+Ambiente+Semana+del+9+al+15+de+enero+de+2013&oq=Actualidad+en+Medio+Ambiente+Semana+del+9+al+15+de+enero+de+2013&gs_l=hp.12...2786.2786.0.4411.1.1.0.0.0.0.244.244.2-1.1.0...0.0...1c.2.5.psy-ab.R1WS9VxHpMo&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.eWU&fp=882ea22d9c37df7d&biw=1024&bih=610
42. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20121207/pags/20121207150935.html

lo hizo en un 16,9%, lo que despertó serias dudas sobre la neutralidad política de los despidos anteriores.

b) Caso Johnson's

A fines de octubre de 2012, la comisión investigadora de la Cámara acreditó irregularidades en el caso Johnson's, concluyendo que el director Julio Pereira y el subdirector jurídico Mario Vila no cumplieron con su deber de abstención y vulneraron el principio de probidad administrativa y de imparcialidad, y acordó oficiar al Ministerio Público para que iniciara "una investigación por la posible comisión de los delitos de fraude al Fisco, cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios"[43]. Las denuncias volvieron a desatar tensiones al interior del Gobierno y la Alianza. El Presidente tomó distancia afirmando que "no me gustó no ser consultado", lo que fue criticado por RN, quien respaldo a Pereira, por lo que La Moneda estableció que el destino de Pereira estaría dado por el informe de Contraloría. Finalmente, esta solo determinó levantar cargos contra el subdirector jurídico del SII, Mario Vila, y la ex directora de Grandes Contribuyentes, Mirtha Barra, con lo cual el Gobierno terminó respaldando la "actuación apegada a la ley" del director del SII —comercialmente vinculado a Horst Paulmann—, confirmándolo el Presidente en su cargo[44]. Con todo, a mediados de marzo un grupo de parlamentarios opositores se querelló contra Pereira por cohecho, tráfico de interés y fraude al Fisco[45].

c) INDAP

La Contraloría indicó al director de INDAP que debió abstenerse de participar en dos convenios con privados y lo llamó, en lo sucesivo, a cumplir con el deber de abstención. De acuerdo a ese informe:

> la circunstancia que uno de los hijos del Director Nacional del INDAP sea miembro del Consejo Directivo de la SNA, obligaba a dicha autoridad pública a abstenerse de intervenir en la celebración y aprobación de los correspondientes acuerdos de voluntades, en acatamiento de lo dispuesto en los citados artículos 62, N° 6, de la ley

43. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/31/comision-investigadora-acredita-irregularidades-en-caso-johnsons
44. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/03/04/pinera-entrega-espaldarazo-a-director-del-sii-tras-informe-de-contraloria
45. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130311/pags/20130311153244.html

N° 18.575, y 12, N° 2, de la ley N° 19.880, pues podía configurarse en la especie un conflicto de interés que podría haber comprometido su imparcialidad. No obsta a la prevención indicada el hecho de que tal descendiente no haya participado directamente en esos actos (…) el artículo 8° de la Constitución Política de la República prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, recogido en el orden legal particularmente en los preceptos del Título III de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo artículo 52, inciso primero, ordena que sus autoridades y funcionarios deberán dar estricto acatamiento al principio de probidad administrativa, precisando su inciso segundo que ello significa observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular (…) Ricardo Ariztía de Castro, en su calidad de director del Indap, adjudicó las propuestas presentadas al concurso nacional "Alianzas Productivas 2010", entre otras entidades, a la empresa Copeval Agroindustrias S.A., para desarrollar proyectos vinculados al rubro de los cereales en las regiones de La Araucanía y del Bío-Bío (…) De los antecedentes examinados aparece que la aludida empresa es una filial de la sociedad Copeval S.A., en cuya propiedad participa don Manuel Ariztía Ruiz, tío del Director Nacional de INDAP, circunstancia que impedía la intervención de esa autoridad en la evaluación y adjudicación de las propuestas antes anotadas, por concurrir una de las causales previstas en el mencionado N° 6 del artículo 62 de la ley N° 18.575 y en el artículo 12, N° 2, de la ley N° 19.880, que lo obligaban a abstenerse de intervenir en los procedimientos y decisiones en que tuviera interés la citada compañía, exigencia que no fue cumplida en la especie, por esta razón y atendido lo expuesto en el dictamen N° 25.336, de 2012, se remiten los antecedentes a la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General para los fines pertinentes. [46]

A su vez, un reportaje de *El Mostrador*, "Los vínculos de Agrosuper con Indap", indicaba:

Uno de los primeros en caer en esta red es Ricardo Ariztía de Castro, director de Indap, (pro UDI) quien no sólo está ligado a la cuestionada compañía Ariztía por vínculos familiares, ya que es sobrino del dueño de Agrosúper. A él se suma el actual subdirector de Indap, Juan Carlos Domínguez Covarrubias (UDI) quien estuvo vinculado a Agrosúper desde 2002. Ese año se integró a la división Agrosúper Comercializadora de Alimentos, donde se desempeñó como Product Manager de las áreas de salmón, hortalizas y congelados. En 2003 se incorporó a la empresa pesquera Los Fiordos, del holding de Agrosúper ligado a la marca Súper Salmón.

46. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/01/28/contraloria-da-golpe-a-ricardo-ariztia-y-cuestiona-contratos-del-indap-con-sna/

> En mayo de 2009, el ingeniero agrónomo fue ascendido a subgerente de negocios, a cargo de la planificación y coordinación de la producción de aves, planificación y coordinación de las ventas nacionales y oficinas en el extranjero y la definición de los planes comerciales y estrategias de negocios. En abril de 2010 se convierte en asesor del subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat (UDI), cargo que ejerció hasta junio de 2010, tres meses antes que la FNE iniciara la investigación que hoy tiene de cabeza al mundo de los pollos. En Indap también trabaja el hijo de quien fuera gerente de asuntos corporativos por 27 años de Agrosúper y director suplente de la Asociación de Productores de Pollo (APA) la que tuvo que disolverse al ser acusada de coordinar la colusión, Ramón Arrau de la Cerda. El hijo de Arrau de la Cerda, Ramón Arrau García de la Huerta, llegó en mayo de 2010 a ocupar el puesto de asesor a contrata del director nacional de Indap, Ricardo Ariztía de Castro, que en la práctica era la función de un jefe de Gabinete. Por ese rol recibía un sueldo de $3.662.105, percibiendo además un bono de "función crítica de 82%" por comisión de servicio al extranjero desde el 31 de julio hasta el 19 de agosto de 2010. Luego fue traspasado a un contrato a honorarios por $4.827.000 al puesto de asesor profesional con el fin "de hacer más eficientes los programas que van en apoyo a la agricultura familiar campesina".[47]

Con todo, este director nacional del INDAP se dio el lujo de proporcionar una muestra de la cultura patrimonialista de Estado de los funcionarios de responsabilidad política de la administración Piñera. Esta se observó durante el 50 aniversario del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), donde se coreó el himno nacional con la estrofa prohibida de "vuestros nombres valientes soldados" —abucheada por los funcionarios—, los Huasos Quincheros cantaron el "Patito Chiquito" y se exhibió ante los campesinos una muestra de caballos corraleros valorados en más de cinco millones de pesos cada uno.

Y su conclusión ante el fallo de Contraloría fue que: "Hay cosas por las que debo velar y lo he aprendido, revisar sociedades de parientes aun cuando no me sienta involucrado. Fui presidente de la SNA y sé que ese consejo en el que participa mi hijo opera 3 o 4 veces al año en las grandes políticas de la institución y nunca imaginé que pudiera verse alguna vinculación. En el caso de Copeval hay un tío mío que tiene acciones, ahora tengo que revisar todos los accionistas para no caer y abstenerme (…) La familia Ariztía ha sido agricultora toda la vida así que deberé estar más atento para saber dónde está cada uno"[48].

Cuatro días después del informe de la Contraloría, en ceremonia encabezada precisamente por Ariztía y el ministro de Agricultura, Luis Mayol, se inició la

---

47. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120523/pags/20120523170636.html
48. Véase http://www.df.cl/indap-la-familia-ariztia-ha-sido-toda-la-vida-agricultora-estare-mas-atento-donde-esta-cada-uno/prontus_df/2013-02-14/193438.html

entrega en La Araucanía de cosechadoras brasileñas por Copeval S.A., en la que su primo hermano, Eugenio Ariztía Benoit, era uno de los principales accionistas; y el ministro Mayol tenía el 2,1% de participación en la propiedad de Copeval cuando se firmó el contrato por $493,5 millones, proporción accionaria que de acuerdo a las normas no constituía conflicto de interés[49].

d) Deportes

Una licitación para organizar una serie de corridas familiares en la Región Metropolitana con ocasión del Bicentenario en junio de 2010que iba a ser adjudicada a la empresa Aventura 100 entre nueve oferentes, fue anulada. Semanas después se reabrió el proceso y la seleccionada fue Meta Proyectos S.A., misma empresa que había ganado casi mil millones de pesos en tres años, adjudicándose la organización de corridas y cicletadas familiares[50].

e) Municipalidades

Importante irregularidades estableció el informe de Contraloría sobre la gestión del ex alcalde de la municipalidad de Providencia, Cristián Labbé, el que pagó millonarios sobresueldos mediante la figura del pago de horas extraordinarias, contrato de asesorías sin la debida licitación ni orden de compra, además de gastos en bencina que superaban el límite permitido[51].

3. Captura del consumidor

La suerte del consumidor, en el área de la salud y la previsión, siguió dependiendo de los grandes conglomerados del sector.

a) Salud

Según el estudio encargado por la Fiscalía nacional Económica (FNE), la estructura de propiedad que se observa en el mercado de la salud

49. Véase http://www.ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130410/pags/20130410155550.html
50. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/01/18/las-cuestionadas-licitaciones-del-instituto-nacional-de-deportes
51. Véase http://www.ww.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130413/pags/20130413092024.html

> requiere ser sometida a un minucioso análisis, existiendo importantes riesgos asociados. La influencia de la Isapre en la elección del consumidor puede generar cierta cautividad del mismo, quien verá severamente limitadas sus posibilidades de elección, sin beneficios evidentes. Las advertencias hechas a propósito de los convenios, respecto a la suavización de la competencia por calidad, deben ser aquí subrayadas. Mención adicional merece el riesgo de colusión tácita que este esquema genera, toda vez que el seguro negocia precios y condiciones con prestadores que compiten (potencialmente) con su prestador relacionado.[52]

Contrario a la iniciativa original de crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) de tarifa fija y de igual precio para los afiliados a una misma aseguradora, con el fin de terminar con la histórica discriminación por sexo y edad de las aseguradoras de salud —que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional—, la indicación presentada por el Ejecutivo dio un vuelco al proyecto de reforma a las Isapres. La propuesta de generar cuatro tramos de edad para diferenciar los cobros fue solicitada por parlamentarios gremialistas, entre los que se encontraba el presidente de la Comisión de Hacienda, Ernesto Silva Méndez, quien poseía títulos en Banmédica:

> Ernesto Silva, según consta en su declaración de patrimonio, posee 12.100 acciones en la Isapre Banmédica, conocida en el sector como "el bastión de la UDI", lo que en abril de 2010 representaba unos 7 millones 700 mil pesos (actualizados equivalen a 12,5 millones de pesos). El parlamentario conoce de cerca el negocio de las isapres. Su padre, Ernesto Silva Bafalluy, fallecido en 2011, fue director de varias empresas del grupo Penta, vinculada a Carlos Alberto Délano —uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera— y Carlos Eugenio Lavín, financista de la UDI. Además de accionista controlador del holding Banmédica, y dueño de la isapre del mismo nombre y de Vida Tres. Como parte de Penta era presidente de otra filial del grupo, la AFP Cuprum. Hasta su muerte, Silva Bafalluy era rector y socio fundador de la Universidad del Desarrollo, también propiedad de algunos de los dueños de Banmédica (…) el actual superintendente de Isapres, Luis Romero, aterrizó en el cargo desde el puesto de subgerente general de la Isapre Colmena Golden Cross, que posee 16,07 % de participación en el mercado. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que dejó el cargo tras la fallida licitación del litio hace poco más de un mes, fue gerente de planificación y desarrollo del holding de Banmédica, que junto a Vida Tres —con la que existe una estrecha vinculación de sus accionistas—, poseen en conjunto 25,29% del sector. Esta puerta giratoria también ha operado desde la otra vereda, ya que importantes funcionarios de salud de la Concertación han terminado con altos cargos en el mundo de las aseguradoras

---

52. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/10/31/estudio-encargado-por-la-fiscalia-nacional-economica-revela-los-tentaculos-del-negocio-de-las-isapres/

de Salud. Es el caso del ex ministro de Salud y de Fonasa, Álvaro Erazo, que en abril de 2011 fue reclutado como miembro del directorio por el holding Cruz Blanca, del grupo Said y con un 19,77 % del mercado. El holding Cruz Blanca asimismo cuenta con otro ex director de Fonasa, César Oyarzo, que es el actual gerente general de la prestadora de Salud del grupo: Integramédica, que también contó en su directorio entre 1994 y 2002 con el primer superintendente de Isapres del país, Héctor Sánchez. El antecesor de Hernán Doren como presidente de la Asociación de Isapres de Chile, fue el ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat, quien desde 2006 hasta junio de 2010 estuvo en el cargo. [53]

El poder de las empresas privadas proveedoras de salud se explica por el nivel de concentración al que han llegado. De acuerdo a un estudio publicado por *El Mercurio*[54]:

La mitad de las clínicas privadas que hay en el país están vinculadas en términos de propiedad a las sociedades que a su vez son dueñas de instituciones de salud privada. Siete grupos tienen en sus manos al menos 40 clínicas de un mercado global de 83, según cifras de 2011. Lo que según el ministro Mañalich dice que "probablemente haya una vulneración del espíritu de la ley". Los usuarios de las isapres están concentrados en siete instituciones que poseen en conjunto el 97,09% de los afiliados, a marzo de 2012. Todos los socios de las aseguradoras abiertas tienen a su vez vínculos de propiedad con clínicas privadas. Las que tienen más prestadores relacionados son Consalud, Banmédica y Cruz Blanca, que además son las isapres con más cotizantes, teniendo en conjunto sobre 62% del mercado según estadísticas a noviembre de 2012 de la Superintendencia de Salud. Esta participación sube a casi el 67% del total de afiliados si es que se considera Vida Tres, ligada a los dueños de Banmédica.

¿Quién está detrás de cada grupo de salud privado?

- Consalud: tres empresas ligadas a la Cámara Chilena de la Construcción son dueñas de esta isapre: Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción (80,82%), Cámara Chilena de la Construcción (9,17%) y Mutual de Seguridad del gremio (10,01%).
- Empresas Banmédica es dueña de las isapres Banmédica y Vida Tres, y tiene como principales accionistas a Empresas Penta (ligada a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín) e Inversiones Santa Valeria (relacionada a Eduardo Fernández León), cada una con el 28,74%. Tras ellos está Moneda, con el 7,14% y después la familia Gianoli —socios de Molymet— que participa a través de Las

53. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/11/13/isapres-detienen-reforma-de-la-industria-y-le-doblan-la-mano-a-manalich/
54. Texto extraído de: Valeria Ibarra, "Dueños de isapres participan en la propiedad de casi la mitad de clínicas privadas que hay en Chile", *El Mercurio*, 27 de enero 2013.

Bardenas Chile, Inversiones Green, Itati y Gorriti y tiene en conjunto el 7,82%. Otros socios son: LarrainVial; Megeve (familia Solari) y AFP Habitat, etc.

- Cruz Blanca tiene como mayor accionista al grupo Said, que a través del fondo de inversión privado Costanera tiene el 40,64% de la propiedad según información a diciembre de 2012. Los restantes mayores socios son Banco Itaú —por cuenta de terceros—, que tiene el 13,24% y el fondo de inversión de Compass con 5,21%. Los otros fondos de inversión que tienen presencia en esta isapre son LarrainVial (4,04%), Celfin (4,98% en dos fondos distintos), Banco de Chile (en representación de terceros no residentes en el país, con 3,41%), entre otros inversionistas institucionales.
- Colmena tiene como accionistas a Carlos Trucco, con el 50% de las acciones, mientras que el resto de la propiedad se distribuye entre los empresarios Cecil Chellew, José Subercaseaux y Patricio Mosso. Esta isapre está en proceso de venta al fondo de inversión de LarrainVial, que también es accionista de otras isapres y clínicas. La transacción bordearía los US$ 500 millones. Ferrosalud nació hace más de 100 años para atender a los accidentados por un accidente ferroviario, tanto pasajeros como operarios, cubría los riesgos de salud y además tenía centros hospitalarios propios que, tras la decadencia de la industria de los trenes, se vendieron y el 2008 la propiedad de la isapre que en esos tiempos sólo atendía funcionarios de EFE pasó a manos de privados. La familia Tamm compró las acciones, la misma que es dueña de la Clínica Central y el centro médico Plusmédica y la firma agrícola Copeval. MasVida tiene como socios a casi 8 mil médicos a través de 89 sociedades de inversión. Es una sociedad anónima cerrada en la cual cada médico tiene una sola acción.

Los fondos de inversión y corredoras participan de varias isapres. LarrainVial, por ejemplo, está tras la Isapre Colmena, que está en proceso de venta, y es accionista en Cruz Blanca y Empresas Banmédica, así como en la Clínica Las Condes e Indisa. Otros fondos de inversión tienen un rol similar: Celfin está en Cruz Blanca y en la Clínica Las Condes, mientras que Banchile está en Banmédica.

Algunos de los más grandes establecimientos hospitalarios cerrados tienen empresarios de alto perfil entre sus accionistas. En el caso de Clínica Las Condes, el mayor accionista es Inversiones Santa Filomena, ligada a María Luisa Solari. En Clínica Indisa están Alejandro Pérez, ex gerente general de Arauco y socio de la Universidad San Sebastián; Jorge Selume, representante de la red Laureate en Chile, y Juan Antonio Guzmán, ex gerente general de Gener, entre otros.

De acuerdo al ministro de Salud, "si se comparte propiedad entre quien indica la prestación y quien la otorga, hay potencial de que el ciudadano sufra daño. Este tema (integración) tiene varios riesgos. El primero, que se pierda la libertad de elegir y la persona esté condicionada a tomar una oferta en la que comprometa calidad

y eficacia en el cuidado de su salud. El segundo riesgo es la sobreindicación: si por ir a una determinada clínica yo arrastro copago, arrastro financiamiento, genero una mejor caja, existe el riesgo de que te indiquen más exámenes o prestaciones de las que necesitas. En esa línea, por ejemplo, el Código Sanitario prohíbe taxativamente que los médicos cirujanos sean dueños de farmacias, porque existe el riesgo de que les digan a sus pacientes 'tome esto y cómprelo en la farmacia tal' (...) Un riesgo es la sobreindicación: si por ir a una determinada clínica yo arrastro copago, arrastro financiamiento, genero una mejor caja, existe el riesgo de que te indiquen más exámenes o prestaciones".

b) Previsión

Una alarmante información entregó el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, al afirmar que los trabajadores contarán con una pensión digna después de trabajar más de cuarenta años, ya que las administradoras no cumplirán con las expectativas con que se crearon. Los beneficios que entregarán, a pesar de las comisiones que se llevan el 20% del dinero de un afiliado, no beneficiarán al trabajador: "Cerca del 60% de cotizantes activos que entraron al sistema en 1981 (año en que partieron las AFP) tiene saldos inferiores a $20 millones, cifra que no incluye bono de reconocimiento. Con ese saldo se puede aspirar a una pensión del orden de $150 mil. Una parte importante de ellos va a caer al sistema de Aporte Previsional Solidario (APS) [el] pilar solidario jugará un rol clave para las personas de ingresos bajos y baja densidad de cotizaciones"[55].

De acuerdo a Manuel Riesco, las razones de esto radicaban en que "en los últimos cinco años y medio, la rentabilidad del conjunto de los fondos de pensiones ha sido cero, los fondos A y B han perdido dinero y sólo el más conservador fondo E muestra una modesta rentabilidad de 4 por ciento anual en este período. De este modo, la tan cacareada rentabilidad promedio de más de ocho por ciento anual desde 1981 hasta ahora, en los últimos años se ha reducido a cero"[56].

Junto a estos limitados beneficios, las AFP han invertido en importantes empresas que contemplan cuestionados proyectos hidroeléctricos, tal como han sido las inversiones en Enersis y Endesa, las que alcanzaron los US$ 3.665 millones a julio de 2012: US$1.682 en Enersis y US$1.983 millones en Endesa; 1,13% y 1,34% del total de los Fondos, respectivamente[57]. De aquí que cobrara cada vez más cuerpo el tema de la creación de una AFP estatal, capaz de bajar costos y reorientar la lógica de las inversiones.

55. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130125/pags/20130125125218.html
56. Véase http://economia.manuelriesco.cl/2013/02/pichicateada.html
57. *Diario Financiero*, 3 de agosto 2012.

c) Sanitarias

Los cortes de agua que afectaron a la ciudad de Santiago en enero de 2013, por turbiedad del río Maipo, evidenciaron un secreto acuerdo entre Aguas Andinas y AES Gener por el uso del agua de las Laguna Negra y Lo Encañado, que abastecen de agua potable a Santiago, frente a lo cual los diputados Cristina Girardi, Adriana Muñoz, Enrique Accorsi (PPD) y Carlos Montes (PS), llamaron a recuperar el agua como un bien nacional de uso público[58].

4. Abusos de poder

Horst Paulmann, dueño de CENCOSUD, respondiendo al ministro de Economía, Pablo Longueira, con ocasión del Sello Pro Pyme, afirmó que era imposible pagar a los proveedores en un plazo de treinta días: "Aquí nosotros no podemos pagarles a 120 o 150 días a los proveedores como dice el ministro de Economía (…) Eso es un sueño, no es una realidad"[59]. Sin embargo, un advenimiento de CENCOSUD con sus proveedores, hecho en la Fiscalía Nacional Económica en 2008, se comprometió ante la Corte Suprema a pagar a los pequeños proveedores en un plazo de entre 30 y 45 días. Ante estas declaraciones, el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, afirmó que como CPC son partidarios del sello "propyme" y que el sector empresarial puede hacer un esfuerzo para pagar en 30 días.

Aprovechando la inauguración del XX Congreso Nacional de la Confedech, Longueira volvió a señalar que los pagos diferidos en 120 y 150 días que efectúan las grandes empresas asfixian a los emprendedores en Chile: "Si hay algo que asfixia en Chile al espíritu emprendedor es que se les pague a las PYMES a 120 ó 150 días. No puede seguir esta práctica en Chile"[60].

Volviendo a mostrar la conducta abusiva del consorcio CENCOSUD con los consumidores, a fines de abril la Corte Suprema obligó a restituir los dineros cobrados en exceso por el aumento unilateral de la comisión de mantención de sus tarjetas Jumbo Más y ordenó la eliminación de las cláusulas contractuales que lo permitían por ser abusivas. Condenado a pagar cerca de US$ 70 millones, Horst Paulmann señaló: "Estamos contentos de que la mayor parte de la plata va a ser devuelta a los clientes y no al Estado"[61].

---

58. Véase http://www.lanacion.cl/diputados-opositores-llaman-a-recuperar-el-agua-como-bien-de-uso-publico/noticias/2013-01-23/192830.html
59. Véase http://www.infinita.cl/titulares/?paulmann-responde-a-longueira-no-podemos-pagarles-a-120--150-das-a-proveedores&n=2161
60. Véase http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/03/655-515129-9-longueira-si-hay-algo-que-asfixia-a-los-emprendedores-es-que-se-les-pague-a-120.shtml
61. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/04/842293/Paulmann-y-fallo-contra-CENCOSUD-En-2006-se-hizo-aplicar-la-norma-de-ese-entonces

5. Conflictos de interés

El Gobierno presentó al nuevo director del SERNAC, Juan José Ossa, ex litigante en un juicio contra el propio organismo en el año 2009, donde defendió a CENCOSUD, en este caso a los supermercados Jumbo de Horst Paulmann[62].

La nueva ministra de justicia, Patricia Pérez, señaló que no veía ningún conflicto de interés en que su marido sea el Fiscal Regional de Valparaíso, aun cuando ella tiene un tiene que ver con temas relacionados con las facultades y obligaciones del Ministerio Público, en cuya gestión interviene directamente su esposo, ya que la administración de este se encuentra a cargo de un Fiscal Nacional, con intervención de un Consejo integrado por todos los fiscales regionales[63].

III. CONFLICTOS

Aun cuando el conflicto mapuche siguió su marcha, otras áreas conflictivas no tuvieron la misma visibilidad.

1. Freirina

Producto de la movilización ciudadana en Freirina, a fines de diciembre de 2012, Agrosuper anunció el cierre indefinido de su planta, argumentando que "la reciente Resolución de Calificación Ambiental restringe sustancialmente la operación, dejando una limitada viabilidad económica y agrega incertidumbre a su desarrollo"[64]. Ante esta decisión de la empresa, *El Mercurio* editorializó criticando al Gobierno, haciéndolo responsable de generar incertidumbre jurídica y politización de las decisiones técnicas"[65].

2. Estudiantes

Aun cuando el movimiento estudiantil no tuvo el protagonismo de años anteriores, en este período la oposición política y social se anotó importantes triunfos.

---

62. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20121126/pags/20121126191823.html
63. Véase http://www.theclinic.cl/2012/12/20/el-conflicto-de-interes-de-la-ministra-de-justicia
64. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/10/agrosuper-cede-y-anuncia-cierre-indefinido-de-su-planta-en-freirina
65. *El Mercurio*, 13 de diciembre 2012.

Por una parte, la elección de sus nuevos dirigentes mostró una fuerte continuidad. En la UC la Nueva Acción Universitaria (NAU) volvió a ganar las elecciones. En la Universidad de Chile el colectivo Izquierda Autónoma, por segunda vez, se puso a la cabeza de la FECH. Sus nuevos dirigentes reiteraron la necesidad de reformas estructurales a la educación superior.

A su vez, producto de su vinculación con Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, procesado por soborno y lavado de activos en la venta de acreditaciones a centros educativos, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, fue forzado a renunciar a pesar del apoyo de RN y su presidente. Esta renuncia fue vista por la prensa internacional como una gran victoria para el movimiento estudiantil[66].

En reemplazo de Díaz fue nombrado Matko Koljatic como nuevo presidente de la CNA, quien dando inicio a su gestión afirmó rotundamente que "el lucro puede ser una fuerza que genere inversión en el sistema universitario", y adelantó que se inhabilitaría en tres casos: la PUC (profesor y ex vicerrector económico), la Universidad Cardenal Silva Henríquez (integrante del consejo asesor) y, "por prudencia", en DOUC (donde estuvo hasta hace siete años)"[67].

La crisis del sistema de educación superior continuó su ascenso cuando en medio del escándalo de venta de acreditaciones universitarias en la Comisión Nacional de Acreditación, la Contraloría reveló ausencia de manuales de procedimientos internos, la baja asistencia (29%) del jefe de división de Educación Superior a las sesiones, Juan José Ugarte, y ordenó "procedimiento disciplinario" en su contra[68].

La crisis alcanzó hasta el sector de la educación escolar. Andrés Hernando, director ejecutivo del centro de estudios Horizontal (integrado por personas de derecha), desalineándose del Gobierno, aseguró que el subsidio escolar para la clase media "no tiene exigencias adicionales para los colegios más allá de los que plantea al subvención escolar general. Es decir, estos recursos frescos son a cambio de nada (…) estos fondos no tengan demasiado impacto [y] podrían incluso aumentar la segregación en nuestro sistema escolar"[69].

La tensión entre un Gobierno que trataba de armonizar posiciones en torno al lucro en la educación superior y la demanda social y política por terminarlo,

---

66. Véase http://www.theclinic.cl/2012/12/19/the-guardian-dice-que-salida-de-ribera-fue-un-golazo-del-movimiento-estudiantil
67. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/negocios/2012/12/05/nuevo-presidente-de-la-cna-oficio-de-testigo-a-favor-de-director-de-la-polar-sancionado-por-la-svs
68. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/11/27/contraloria-cuestiona-baja-asistencia-de-juan-jose-ugarte-a-sesiones-de-la-cna-y-ordena-procedimiento-disciplinario-en-su-contra
69. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/01/21/horizontal-critica-proyecto-estrella-del-mineduc-y-dice-que-este-puede-incluso-aumentar-la-segregacion-escolar En su directorio figuran ex funcionarios de Gobierno, como el subsecretario de Vivienda Juan Carlos Jobet, el ex ministro de MIDEPLAN Felipe Kast y el asesor de imagen del Presidente Piñera, Hernán Larraín Matte.

finalmente derivó en la aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación por parte de la Cámara de Diputados, Harald Beyer.

La acusación tuvo tres capítulos:

> Infracción a la probidad: falta de veracidad, por cuanto el ministro expresó reiterada y sistemáticamente durante el 2012, lo mismo que su defensa, no tener facultades para sancionar e investigar las denuncias efectuadas por personas naturales e instituciones, en relación a la flagrante vulneración de la ley que prohíbe al lucro. Falta de control jerárquico: durante el 2010 fueron acreditadas, sin justificación aparente, todas las universidades que participaron en dicho proceso. Lo que no debe haber sido estudiado por el ministerio, ya que constituiría un salto en la calidad nunca visto y el ministro no ejerció la tutela jerárquica sobre sus subordinados. Omisión de fiscalización: negativa del ministro de investigar y sancionar a las universidades privadas que desarrollaron actividades lucrativas, el secretario de Estado no habría velado por el cumplimiento de las normas de su sector, el no haber investigado denuncias concretas, y la vulneración de los principios de celeridad y exclusividad, y no se dejó por escrito en el dictamen de cierre de la Universidad del Mar cuya causal era el lucro.

El ministro Beyer fue un ícono en la lucha estudiantil contra el lucro en la educación superior. Convertido en un referente político nacional, criticado desde la derecha por no haber defendido suficientemente el lucro y, desde la oposición, por no haberlo combatido en forma decidida, pagó el precio de haber integrado el Gabinete de un presidente que insistió hasta el final de su mandato en nominar técnicos sin experiencia política previa. En su reemplazo fue nombrada la ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, quien en su primera declaración pública insistió en radicar en el Congreso el diálogo entre las partes involucradas, y mantendría los proyectos de reforma a la educación ya enviados, ambos temas en abierta contradicción con la solicitud de los estudiantes, proyectos que Mario Waissbluth, presidente de la Fundación Educación 2020, calificó de "segregadores", "perversos" e "inadecuados"[70]. Como una forma de dar cauce a su gestión, la ministra Schmidt solicitó que se indagara el nexo de 53 universidades con sus empresas relacionadas, ya que "a través de ellas se pueda burlar" la prohibición de lucro[71].

3. Mapuche

En medio del conflicto mapuche, las declaraciones del ministro del Interior, afirmando que "enfrentamos un enemigo poderoso que goza de apoyo político,

---

70. *El Mostrador*, 23 de abril 2013.
71. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/05/18/nacional/nacional/noticias/13f40a84-d3dd-4895-baab-8fb95589b96e.htm

comunicacional e internacional"[72], y la muerte de Werner Luchsinger y su señora Vivian MacKay en ataque incendiario en su fundo, agudizaron las tensiones. En tal contexto, el presidente designó al general inspector de Carabineros, Carlos Carrasco, para controlar la "violencia terrorista" en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y de Los Ríos, y anunció siete medidas para un "ataque frontal contra el terrorismo", medidas que según *The Economist* no alcanzarían para superar conflicto en La Araucanía:

> 1. Querella criminal por Ley Antiterrorista, dado el atentado incendiario que terminó con la vida de dos personas. 2. Recalificación de la querella que fue presentada hace algunas semanas atrás, por otro atentado incendiario. 3. El nombramiento por parte del Fiscal Nacional, de un persecutor especial con dedicación exclusiva a la investigación de la causa. 4. Aumento en 84 carabineros más la dotación en la zona, llegando a 400 efectivos, un segundo helicóptero de vigilancia y cuatro nuevos carros blindados más, de los seis existentes. 5. Solicitud al general director de Carabineros la creación de una zona de control y seguridad en las zonas más afectadas, con funcionamiento diurno y nocturno. 6. Creación de equipo jurídico especial. 7. Al director de la Agencia Nacional de Inteligencia recabar información complementaria de las Fuerzas Armadas, "para poder aumentar la eficacia de la lucha contra el terrorismo en esta región".[73]

Esta última, que implicaría inconstitucionalmente reconocer o darle un rol a las FF.AA. en el orden interno, fue duramente criticada por la oposición.

Junto a estas medidas represivas, el ministro del Interior apoyó públicamente el paro de camioneros en protesta por violencia en La Araucanía, afirmando que "todo lo que implique rechazo y manifestación contraria a la violencia, el gobierno lo ve como algo positivo"[74]. Frente tales declaraciones, los diputados Ascencio y Silber amenazaron con presentar acciones legales contra las autoridades por no denunciar a camioneros que interrumpieron el tránsito, producto de lo cual el ministro Chadwick rectificó sus dichos indicando que "junto con comprender y valorar esas motivaciones, obviamente que el gobierno lamenta y rechaza el hecho de que en esas movilizaciones se hayan producido cortes de caminos" [75].

---

72. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/24/chadwick-viaja-a-la-araucania-y-presenta-querellas-por-atentados-registrados-en-la-zona
73. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-501882-9-pinera-anuncia-en-temuco-siete-medidas-para-un-ataque-frontal-contra-el.shtm
74. Véase http://www.df.cl/gobierno-respalda-paro-de-camioneros-en-protesta-por-violencia-en-la-araucania/prontus_df/2013-01-07/134058.html
75. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/01/674-502569-9-chadwick-precisa-dichos-por-paro-de-camioneros-el-gobierno-entiende-las.shtml

Paralelamente, el ministro de Agricultura rindió homenaje a los agricultores de La Araucanía y solidarizó con el paro de camioneros, señalando que se manifestaron "contra los terroristas". También defendió el uso de armas por parte de agricultores afirmando que "es normal que cualquier ser humano quiera defenderse"[76].

Aumentando la entropía en la zona, la CAM rechazó las acciones que provocaron las medidas gubernamentales:

> Como CAM rechazamos, nuevamente, dichas acciones y aseguramos que ellas solo sirven a los intereses del empresariado y del Gobierno que defiende sus intereses, razón por la cual no nos queda más que pensar en la tesis de la INFILTRACION DERECHISTA de algunos grupos, cercanos a las comunidades mapuche, a través de operadores que pudiesen estar instigando a cometer acciones que sirvan de excusa para reprimir y detener el avance hacia la reconstrucción del Pueblo Mapuche y su liberación nacional.[77]

Producto de la falta de claridad de hechores e interlocutores, tres diferentes reuniones se organizaron en enero 2013. Por una parte, los ministros Chadwick y Lavín se reunieron con alcaldes y concejales indígenas en Temuco, los gobernadores de Cautín y Malleco y el coordinador de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. En esa cita el Gobierno planteó cuatro ejes para abrir diálogo con autoridades mapuche: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, promulgación de una ley que regule la aplicación del Convenio 169 de la OIT, creación de un Consejo Nacional Mapuche y reconocimiento de una "deuda histórica" del Estado con el mundo indígena[78].

En la cita las autoridades indígenas plantearon ciertas condiciones para mantener el diálogo: baja del cabo de Carabineros Walter Ramírez (autor del disparo que causó la muerte a Matías Catrileo) la "desmilitarización" de la zona y que se integre a "autoridades ancestrales" de comunidades[79].

La segunda reunión fue convocada por el Consejo de Todas las Tierras en el cerro Ñielol, en la que se aprobaron 10 conclusiones:

> 1. Voluntad de diálogo de las comunidades con el Gobierno. 2. Exigencia de un autogobierno desde el Bío-Bío al sur. 3. Formar una comisión para revisar tratados. 4. Reconocimiento constitucional, sólo si se da entre los dos Gobiernos. 5. Pedir una

---

76. Véase http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130107/pags/20130107171134.html http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-502567-9-ministro-mayol-defiende-uso-de-armas-por-parte-de-agricultores-es-normal-que.shtml
77. Declaración Coordinadora Arauco Malleco, 8 de enero 2013.
78. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/01/15/nacional/politica/noticias/E12549C8-F3C9-45F0-BD59-270A0BA01484.htm?id=%7BE12549C8-F3C9-45F0-BD59-270A0BA01484%7D
79. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/01/15/nacional/politica/noticias/E12549C8-F3C9-45F0-BD59-270A0BA01484.htm?id=%7BE12549C8-F3C9-45F0-BD59-270A0BA01484%7D

indemnización del Estado, no sólo en dinero, sino también en tierras. 6. Instar a las autoridades a pedir perdón por los daños causados. 7. Rechazo a la ocupación militar de la zona. 8. Retiro de las Fuerzas Policiales de las comunidades en conflicto. 9. Rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista. 10. Rechazo a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Una tercera reunión fue en el Senado, donde se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Alberto Espina (RN), Jaime Quintana (PPD), Eugenio Tuma (PPD), Ena von Baer (UDI) y José García (RN), que consideraba impulsar un diálogo político que incluyera al pueblo mapuche, solicitaba al Gobierno el envío de iniciativas legales para implementar el convenio 169, el cual garantiza la participación de los pueblos originarios en las materias que les afecten, establecía la creación de un Consejo Nacional Indígena, para que sea un interlocutor válido con el Estado, dándole un carácter de ley al proceso de consultas indígenas, y consideraba reformas institucionales para una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios[80].

A mediados de enero 2013, Carabineros informó haber dado de baja el cabo 2° Walter Jhonattan Ramírez Espinoza, procesado por el crimen de Matías Catrileo en 2008.

Sumándose a la crisis de las relaciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, las comunidades *lafkenche* declararon incomprensible el que la Ley de Pesca "propiciada por el gobierno y encabezada por el ministro Longueira, garantice derechos a los industriales y abra las puertas a inversionistas extranjeros, otorgándoles la explotación de los recursos naturales, dejando de lado a los Pueblos Originarios, que milenariamente se han desarrollado en función del mar"[81].

4. Derechos humanos

El anuncio del recién asumido ministro del Interior, acerca de continuar con la Ley Hinzpeter —aun cuando le retiró la urgencia— fue seguido por un informe de la UDP, que denunció los escasos avances en derechos humanos y que, junto con reprochar la actuación policial, afirmó la existencia de "una discriminación estructural y violencia estatal"[82]. Lo mismo fue ratificado en enero de 2013 por José Aylwin, consejero del INDH, quien explicó que el informe critica duramente

80. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/01/17/nacional/nacional/noticias/7574D2EC-4749-42AE-B2F0-A165F39ABF37.htm?id=%7B7574D2EC-4749-42AE-B2F0-A165F39ABF37%7D
81. Véase http://www.theclinic.cl/2012/12/04/los-lafkenche-y-la-ley-de-pesca-por-que-marchamos
82. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/11/13/nacional/nacional/noticias/C7AF967A-CDB0-4257-A139-1183F3DF8AE4.htm?id=%7BC7AF967A-CDB0-4257-A139-1183F3DF8AE4%7D

a Carabineros por violencia en manifestaciones y denuncia "una situación de desprotección en múltiples ámbitos y pone énfasis en los derechos de los sectores más discriminados, como son pueblos indígenas, migrantes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y la diversidad sexual, dada la incapacidad del Estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos adecuados, por un lado, y hacia políticas públicas que los implementen, por el otro"[83].

a) Memoria

La inextinguible presencia de las violaciones a los derechos humanos continuaron mostrando los horrores ocurridos durante la dictadura. El procesamiento de 13 ex agentes de la DINA por desaparición y muerte de veinte personas en Villa Grimaldi y del coronel en retiro, Marcelo Moren Brito, por torturar y asesinar a su sobrino, así como a siete ex carabineros por secuestros y ejecuciones de pobladores, cerraron el año 2012. Al mismo tiempo, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se querelló por la muerte del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, así como por el asesinato de Ronnie Moffitt, ciudadana estadounidense y secretaria del ex canciller Orlando Letelier, y el ministro Alejandro Solís. Además ordenó prisiones preventivas de ex uniformados que tuvieron problemas con jóvenes y feriantes del sector de Peñalolén en octubre de 1973.

Curiosamente, en el mismo período asaltaron la casa del corresponsal en Chile de la agencia alemana DPA, Mauricio Weibel, sustrayéndole el computador con información sobre casos de violaciones a los derechos humanos. Situaciones similares le ocurrieron en los mismos días a Carlos Dorat, el autor del libro *La danza de los cuervos*, a Javier Rebolledo y la periodista Pascale Bonnefoy[84].

b) Carabineros

Los abusos policiales continuaron con importantes consecuencias institucionales. En noviembre de 2012 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal por tortura de Carabineros de la 36ª Comisaría,

83. Véase http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=7116:negativo-informe-sobre-derechos-humanos-en-chile-presentaron-organizaciones-sociales&catid=1:politica&Itemid=11
84. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/18/reporteros-sin-fronteras-denuncia-amenazas-contra-periodistas-que-investigan-crimenes-de-la-dictadura

contra una estudiante de la ACES realizada en agosto. A esto se sumó la patada intencional de un carabinero a un observador de DDHH, lo que provocó el atropello de estudiantes. Inicialmente Carabineros informó que este había perdido "la estabilidad, cae y pasa a llevar a personas", sin embargo el alto mando dio de baja al motorista días después[85]. A su vez, a comienzos de 2013 el mando institucional dio de baja a otros cinco carabineros que golpearon a un detenido en comisaría de la Región de O'Higgins.

Junto a los temas de derechos humanos, Carabineros siguió recibiendo críticas por signos de corrupción interna. Así, en febrero de 2013, las denuncias de CIPER en 2012 por millonarias irregularidades en el Departamento TIC de Carabineros, provocaron la salida del general González Theodor y de otros dos oficiales, evidenciándose sobreprecios en generadores comprados a Mellafe & Salas por más de $900 millones, facturas falsas, multas a Elsag Datamat por $400 millones jamás cobradas y el viaje a Japón que Mellafe & Salas le pagó a un oficial del TIC[86].

Ante el reiterado abuso policial, corrupción interna, y producto de un autocrítico documento interno elaborado por analistas de la Dirección General, el mando ordenó el regreso de los patrullajes a pie y desmanteló la unidad de Asuntos Internos, creando una nueva unidad anticorrupción y de control ético[87].

A pesar de esta situación institucional un editorial de *El Mercurio*, proponía un amplio uso de implementos, más tecnología e inteligencia, menos control y severidad gubernamental con la policía, arguyendo que esta:

> debe tener apoyo político y capacidad técnica para preservar el orden público [reducirla] a un cuerpo impotente, prohibiéndole usar implementos de uso normal en otras democracias —gases lacrimógenos, balines de pintura, carros lanza agua, caballos y perros auxiliares—, sometiéndola a un rigor exagerado [y] exigir resultados policiales, pero luego tratar a las policías con severidad desproporcionada [con una] proliferación indefinida de sumarios, expulsión de efectivos por motivos discutibles [inflige] el golpe adicional de anularla también frente a los desórdenes públicos (...) [se necesita] más inteligencia antidelictiva o ejercer un control coercitivo más tecnificado.[88]

---

85. Véase http://www.theclinic.cl/2012/12/03/pacos-dan-de-baja-a-motorista-que-atropello-a-manifestantes
86. Véase http://ciperchile.cl/2013/02/05/los-%E2%80%9Csobreprecios%E2%80%9D-y-contratos-de-palabra-que-provocaron-la-salida-del-tercer-hombre-de-carabineros
87. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/12/03/nacional/nacional/noticias/5CEE41FA-08CE-4D93 -8DB7-2D696A1D3824.htm?id=%7B5CEE41FA-08CE-4D93-8DB7-2D696A1D3824%7D y http://diario.elmercurio.com/2012/12/05/nacional/nacional/noticias/DBBBEC2E-5D49-47B1-8B8E-1DF4554298A7.htm?id=%7BDBBBEC2E-5D49-47B1-8B8E-1DF4554298A7%7D
88. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2013/04/23/11154/Trato-a-encapuchados.aspx

IV. FUERZAS ARMADAS

La tendencia a inmiscuir a las FF.AA. en temas de orden interno volvió a quedar en evidencia a fines de marzo, cuando se llevó a cabo el primer consejo militar del año. El comandante en jefe, general Fuente-Alba, explicó que este debía partir con un análisis "relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las fuerzas armadas chilenas y el Ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar"[89].

Una encuesta de clima laboral en el Ejército, realizada en 2012, mostró que un 96,6% estaba contra el ingreso de homosexuales al Ejército, versus un 3,4% que respondió que sí; 66,4% respondió que "la homosexualidad es incompatible con la disciplina de la carrera militar"; un 23,3% afirmó que "con la integración de homosexuales en el Ejército se podría poner en riesgo el espíritu de cuerpo"; un 8,2% opinó que "es una situación que se presentará a mediano o largo plazo y se debe aceptar"; y solo un 2,1% señaló que "la condición de homosexual no es impedimento para desarrollar la carrera militar"[90].

En relación al Servicio Militar, un 81% de los encuestados quedó satisfecho con el nivel de instrucción y entrenamiento recibido, un 70% le puso nota 6 o 7, 84% de los entrevistados le recomendaría a un amigo o familiar realizar el servicio. El Ministerio de Defensa había anunciado, en octubre 2012, un aumento del 60% a la asignación anual de un conscripto, la que alcanzaría $ 900 mil al año. Con todo, a fines de febrero, a menos de un mes del término del período de postulación para el Servicio Militar, la cantidad de voluntarios registrados era un 21% más baja respecto a igual fecha de 2012[91].

Las irregularidades denunciadas por la Contraloría volvieron a golpear a las instituciones de Defensa. Así, ordenó un sumario en la Subsecretaría para las FF.AA. por anomalías en licitación de seguros al BCI: descubrió que esta arregló concursos públicos para favorecer nombramientos a funcionarios de su confianza, e inicio juicio de cuentas a la Armada por usar dineros fiscales para reparar casas particulares[92].

---

89. Véase http://www.biobiochile.cl/2012/03/22/ejercito-planifica-actividades-de-2012-en-primer-consejo-militar.shtml
90. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/12/680-501128-9-ejercito-toma-medidas-para-adaptarse-a-nueva-ley-antidiscriminacion.shtml
91. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/02/680-509931-9-postulacion-al-servicio-militar-es-la-mas-baja-desde-2007.shtml
92. Véase http://www.theclinic.cl/2013/02/11/la-armada-no-para-contraloria-inicia-juicio-de-cuentas-por-usar-dineros-fiscales-para-reparar-casas-particulares

V. ALIANZA

Los problemas de la Alianza continuaron después de su deslucida performance municipal, evidenciándose pugnas de poder y disensos valóricos, pero el caso más grave fue el dramático final de la precandidatura del abanderado de la UDI.

a) Valores y poder

Las diferencias al interior de la Alianza continuaron profundizándose en torno a temas valóricos y políticos. Así, una vieja fractura se manifestó en torno a la iniciativa "Acuerdo de Vida en Pareja". En el mes de noviembre, la UDI cuestionó el proyecto y su jefe de bancada presentó una queja formal al Gobierno durante la reunión del comité político. Algo parecido sucedió a comienzos de diciembre, cuando la UDI protestó por el nombramiento del nuevo gobernador en Marga-Marga y otras autoridades regionales, las que fueron vistas como nombramientos funcionales a la candidatura de Allamand.

En ese ambiente de tensiones, Carlos Larraín, presidente de RN, presentó su renuncia al cargo como respuesta a la remoción del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, vinculado al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, formalizado por cohecho y lavado de activos. Gracias a la gestión de Allamand y el Ejecutivo, Larraín retiró su renuncia.

Y en el campo de la UDI, a fines de 2012 Felipe Kast lanzó su propio movimiento independiente, "Evolución Política", para postular al Senado posicionándose en vista a las elecciones primarias de la Alianza.

Las divergencias políticas al interior de la Alianza continuaron, ahora frente al binominal. A fines de enero de 2013 el Senado rechazó el informe que modificaba el sistema binominal al obtenerse dos votos menos de los requeridos. La posibilidad de continuar tramitando el proyecto tampoco contó con los dos tercios necesarios, aun cuando los senadores Espina y Lily Pérez votaron a favor.

b) El caso Golborne

La suerte del precandidato de la UDI a la presidencia, Laurence Golborne, comenzó a declinar producto de sucesivas revelaciones sobre sus previas actividades comerciales y profesionales y su falta de sintonía con el Ejecutivo.

Complicando su relación con La Moneda a fines de marzo, el precandidato propuso "reducir en forma sustancial, y de manera permanente, el impuesto específico a las gasolinas", ante lo cual el presidente retrucó que "no es conveniente para Chile rebajar el impuesto a los combustibles, por razones muy

claras. Es tal vez el único impuesto verde que tenemos en nuestro país, tiende a desincentivar la contaminación y la congestión"[93], entrando directamente así en la primaria gubernamental. La dúplica de Golborne encrespó más aun las relaciones al indicar que con el presidente "podemos tener diferencias de opinión pero lo que hay fundamentalmente es una diferencia de sensibilidades"[94].

A continuación, en el mes de abril, la Corte Suprema multó a CENCOSUD por conducta abusiva con los consumidores, período en el que el precandidato presidencial era gerente general de la empresa, ante lo cual se defendió afirmando que tales decisiones de cobro las realizaba el directorio y el como gerente general solo las aplicabas. Estas declaraciones fueron contradichas por el actual gerente general, Daniel Rodríguez, sosteniendo que "yo como gerente general de la compañía me hago responsable de las decisiones de la compañía y obviamente yo consulto al directorio y es el directorio el que me da las guías para poder funcionar, pero la administración es del gerente general"[95].

A esta multa se sumó la información sobre su omisión en la declaración de patrimonio acerca de la participación en Sanford Management Corp., con inversiones en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, tema que terminó por sepultar su candidatura. Las críticas no se dejaron esperar y la UDI se tomó 48 horas para sustituirlo por Pablo Longueira y, finalmente, el 1 de mayo confirmar que iría a la primaria con Andrés Allamand. La rápida nominación de Longueira a las primarias aliancistas suturó la herida UDI/RN, dándole un impulso a la alicaída campaña parlamentaria de la derecha.

Con estas decisiones se cerraba un capítulo de la sorda pugna entre el sector más cercano al empresariado, encabezado por Jovino Novoa, y la "UDI popular", liderada por el nuevo precandidato presidencial. Con este triunfo la UDI canceló sus primarias parlamentarias y Longueira se transformó en el factótum partidario, convocando a candidatos y reorganizando esa plantilla.

VI. OPOSICIÓN

Las contradicciones al interior de la oposición y de sus partidos continuaron ordenándose en torno a tradicionales ejes de disputa: las reformas políticas, la disciplina interna, las relaciones con el PC y los quiebres frente a proyectos de ley.

93. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/04/24/nacional/politica/noticias/F280900C-3949-43E9-A8DC-FB57065234A7.htm?id=%7BF280900C-3949-43E9-A8DC-FB57065234A7%7D
94. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/04/674-520355-9-golborne-responde-a-pinera-y--defiende-rebaja-gradual-a-los-combustibles.shtml
95. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/04/26/actual-gerente-general-de-CENCOSUD-desmiente-a-golborne-yo-me-hago-responsable-de-las-decisiones-de-la-compania/

1. Reformas políticas

Aun cuando durante 2012 se abrió un amplio espectro de opiniones sobre el tipo y número de reformas políticas que habría a implementar en el país[96], los resultados de las elecciones municipales dejaron a los sectores reformistas en desmerecidas condiciones. En ese contexto el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ironizaba al señalar que en la Concertación, "a quienes tienen la intención de dar un giro a una izquierda más extrema, les fue mal. La brecha entre las dos listas de la Concertación es grande, a pesar de que una de ellas sumó a un nuevo integrante, que es el PC. La clave del progreso en Chile en los últimos años tiene que ver con un acuerdo entre el centro y la izquierda. Los que hablan de un giro tienen mucha retórica y pocas nueces. Revivir un par de ideas de los años 70 y llamarlo nuevo proyecto progresista es un espectáculo triste"[97].

A pesar de tal derrota, y apoyado en carta enviada por la ex presidenta Bachelet al PPD en su 25° aniversario, reiterando la necesidad de cambiar el binominal e instando a promover una ética de lo público[98], el PPD se pronunció en definitiva por cambiar la Constitución de Pinochet mediante Asamblea Constituyente[99].

2. Autoritarismo

La proximidad de una respuesta definitiva de la ex presidenta Bachelet como candidata a presidenta de la Concertación reiteró algunos rasgos de la conducción política concertacionista. Así, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, advertía que "en la elección parlamentaria vamos a tener que tener un requisito clave: si queremos hacer transformaciones, el Parlamento tiene que ser coherente con el liderazgo nacional. No estoy dispuesto a correr el riesgo de que la oposición elija en las próximas parlamentarias diputados que van a correr con colores propios"[100]. En la misma dirección, Francisco Díaz, ex asesor del Segundo Piso de Bachelet, advertía que "al momento de armar los equipos que ella estime necesarios [h]ay una cosa que es un requisito fundamental: es difícil ser bacheletista sin valorar el gobierno de Bachelet. Eso sí que no pega ni

---

96. Cfr. http://www.elciudadano.cl/2012/11/12/60016/posiciones-frente-a-plebiscito-por-asamblea-constituyente/
97. Véase http://blogs.elmercurio.com/cronica/2012/11/02/los-liderazgos-tradicionales-d.asp
98. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/15/bachelet-reitera-necesidad-de-cambiar-el-binominal-e-insta-a-promover-una-etica-de-lo-publico
99. Véase http://www.theclinic.cl/2013/01/20/ppd-se-la-juega-por-cambiar-constitucion-de-pinochet-mediante-asamblea
100. Véase http://diario.latercera.com/2012/11/03/01/contenido/pais/31-122084-9-osvaldo-andrade-no-puedo-pedirle-al-pc-que-nos-ayude-a-ganar-el-gobierno-y.shtml

junta"[101]. Con un tono distinto, Enrique Correa recomendaba que "nunca hay que despreciar al adversario y menos menospreciar a una potencia aliada (…) La arrogancia es mala consejera. La modestia, la humildad, la templanza en el trato con aliados y adversarios siguen siendo puntos clave del éxito"[102].

3. PC/DC

Las tensiones entre la DC y el PC continuaron en torno a temas de derechos humanos, el programa y candidatura presidencial y la cartilla parlamentaria.

a) Presidencia y programa

Por una parte, después de las elecciones municipales el pleno del Comité Central del PC acordó priorizar una convergencia programática, y junto a la Concertación y la Izquierda Ciudadana se incorporó formalmente al debate por un programa único de la oposición.

Ante este énfasis del PC, el presidente de la DC criticó el que se hubiera decidido anteponer el programa a la candidatura presidencial. Con todo, a comienzos de enero de 2013 la Concertación decidió trabajar sobre cuatro grandes ejes programáticos: reformas políticas, laborales, cambios en pensiones y modificaciones al sistema de salud, incorporando el acuerdo alcanzado en reforma tributaria y educación[103].

b) Parlamentarias

La respuesta del PC fue la demanda de un "eje de asignación proporcional" para cada partido para realizar una lista única de oposición, como garantía de una representación que refleje el 6,44% que obtuvieron en la elección de concejales en octubre de 2012[104], postura que posteriormente derivó en acceder a participar en las primarias de la oposición.

---

101. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-04&dtB=04-11-2012%20 0:00:00&PaginaId=8&bodyid=10
102. Véase http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-03&dtB=03-11-2012%20 0:00:00&PaginaId=2&bodyid=3
103. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2013/01/812333/en-cita-con-andrade-partidos-de-oposicion-fijan-4-ejes-centrales-para-programa-presidencial
104. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/11/18/reportajes/cuentan_que/noticias/32935477-2BE3-4CDD-80E3-FCF65AC2CBC0.htm?id=%7B32935477-2BE3-4CDD-80E3-FCF65AC2CBC0%7D

c) Futuro Gobierno

Las diferencias se volvieron a expresar frente a la posibilidad de conformar un futuro Gobierno. Así, Ignacio Walker afirmaba que la "DC no va a formar parte de una coalición política con el PC[105]", ya que, según él, no se podría confiar en la lealtad de los comunistas si se convierten en parte de un futuro Gobierno. Entrando al ruedo, el ex presidente DC y ex diputado Gutenberg Martínez, pidió mantener y resguardar la identidad de la Democracia Cristiana y cuidar los excesivos acercamientos con el Partido Comunista ,y criticó la postura de este frente a los derechos humanos en Cuba[106], afirmando que "DC y PC somos muy distintos. Nuestras tradiciones ideológicas son antagónicas[107]".

La respuesta de Teillier fue dura: "Nunca vamos a renunciar a una relación de apoyo con el movimiento social; entonces qué van a hacer ellos, ¿van a dictar una nueva Ley de Defensa de la Democracia o de nuevo un sector de la DC va a apoyar un golpe de Estado si ven que estamos 'atentando contra el orden y las leyes' de este país?"[108]. Ante lo cual Walker afirmó que esa declaración había sido "una ofensa a la DC, la historia no se reescribe así [el partido] tiene una trayectoria democrática impecable [y] si hay un partido que se la jugó en Chile para salvar la democracia, ese fue la DC"[109]. Los dirigentes del PS y PR, Andrade y Gómez, cuestionaron las críticas de Walker al Partido Comunista, y el senador Lagos Weber (PPD) afirmó que "sin el PC, no tenemos ninguna posibilidad de doblar en ninguna parte en la parlamentaria"[110].

La tensión bajó de tono con la carta de la ex presidenta Bachelet con ocasión del centenario del PC, en la cual afirmaba: "Me alegra que el PC pueda celebrar este aniversario en un Chile que ha sido capaz de superar no pocos obstáculos para construir una convivencia libre y democrática, y que —a pesar de las limitaciones del sistema electoral binominal que urge reformar— haya alcanzado una legítima representación parlamentaria, en el marco de un acuerdo amplio de las fuerzas democráticas, que también dio sus frutos en la reciente elección municipal"[111].

---

105. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/11/674-495147-9-ignacio-walker-la-dc-no-va-a-formar-parte-de-una-coalicion-politica-con-el-pc.shtml
106. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/11/18/nacional/politica/noticias/6D3E9C91-3C76-472A-B484-F857895BA371.htm?id=%7B6D3E9C91-3C76-472A-B484-F857895BA371%7D
107. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/12/02/nacional/politica/noticias/26379994-3033-44D1-9CF4-A9FFC0E30E01.htm?id=%7B26379994-3033-44D1-9CF4-A9FFC0E30E01%7D
108. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10229:dura-replica-a-declaraciones-del-senador-ignacio-walker&catid=35:politica&Itemid=55
109. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/11/674-495953-9-ignacio-walker-por-dichos-del-pc-sobre-respaldo-al-golpe-de-estado-eso-fue-una.shtml
110. Véase http://www.lasegunda.com/especiales/politica/entrevistas/index.html
111. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/12/674-497674-9-la-carta-de-michelle-bachelet-y-los-entretelones-que-marcaron-la-jornada-de.shtml

4. Disensos internos

Otros coletazos de las elecciones municipales fueron las renuncias, a fines de 2012, de los diputados Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya, al PRI, y la negativa de Patricio Hales de presentarse a un nuevo período argumentando que eso significaría validar el binominal.

Por su parte, el PRO llamó a primarias parlamentarias para, finalmente en el mes de marzo, descartarlas en forma definitiva; a fines del mismo mes lanzó el libro *Por un Nuevo Chile, Propuestas para un Debate Ciudadano*, que incluyó un amplio rango de propuestas de cambios institucionales.

La DC también observó importantes procesos internos. El 19 de enero, con cerca de sesenta mil votantes, Claudio Orrego ganó las primarias presidenciales de la Democracia Cristiana obteniendo el 59% sobre Ximena Rincón, que obtuvo 41%. A mediados de marzo, en una elección igualmente reñida por la presidencia del PDC, se volvió a evidenciar la profunda fractura partidaria interna. El presidente en ejercicio, Ignacio Walker, obtuvo el 50,66%, contra un 47,14% de Aldo Cornejo —apoyado por Ximena Rincón—, quien reconoció el resultado de la elección. Una importante diferencia socioeconómica se asoció a los resultados, observándose un alto porcentaje de votos por Walker en comunas de estratos alto y medio alto, e igualmente una mayor votación por Cornejo en comunas de estratos medios y bajos.

Un indicador más de la profundidad de los disensos concertacionistas fue la imposibilidad de llegar a acuerdo para organizar primarias parlamentarias —solamente hubo acuerdo para la presidencial—, por lo que la decisión de los candidatos a senadores y diputados nuevamente fue monopolizada por las dirigencias partidarias. Michelle Bachelet estimó que tal inhabilidad había sido "una mala señal para la ciudadanía", ya que su propuesta de "nueva mayoría" implicaba abrir las opciones de candidatos a independientes, otros partidos y movimientos en primarias concertacionistas. Su liderazgo en estas materias quedó en evidencia al apoyar las primarias en la Región de Los Lagos, producto de lo cual Camilo Escalona —enemigo de las mismas— quedó fuera del Senado.

5. Equilibrio inestable

Importantes disensos estratégicos transversales mostró la oposición. Ante la demanda del movimiento social y grupos partidarios por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución vía plebiscito, otros sectores, considerando inviable ese mecanismo por las limitaciones institucionales existentes ("fumar opio", según el senador Camilo Escalona), propusieron una reforma constitucional en el marco del actual Parlamento. Para superar tales limitaciones, los primeros propusieron

reforzar las movilizaciones sociales y, recordando el caso colombiano, intentar un plebiscito de hecho con una papeleta adicional adscrita a la votación presidencial. Estas propuestas por reformas de fondo fueron rechazadas por quienes afirmaban que el país no sufría una crisis institucional y que, por lo tanto, no era necesaria una medida tan profunda de cambio, favoreciendo una agenda de transformaciones que se adecuara a la fuerza política con que contaban los sectores reformistas. Saliéndose del eje maximalismo-minimalismo, se propuso que la oposición formulara un plan de transformaciones institucionales de largo plazo, que incluyera los cuatro años de una nueva administración concertacionista, pero que se proyectara por tres administraciones más[112].

Ese cuadro de opciones estratégicas mostró lo que podría llamarse un "equilibrio interno inestable", en el cual las fuerzas maximalistas-minimalistas no podían ni tenían los recursos necesarios para volcar definitivamente la situación a su favor. Así, la demanda por Asamblea Constituyente y cambios profundos vía movilizaciones nacionales no consideraba el efecto desmovilizador del intento de migración de sus dirigentes paradigmáticos (Fuentes, Vallejo, Jackson, Ballesteros) al Congreso y la absorción de la energía política nacional por parte de las primarias, elecciones parlamentarias y presidencial. A su vez, la tendencia minimalista proponía cambios significativos en materia de educación, desigualdad, energía y reformas laboral, tributaria y del binominal, las que de acuerdo a su visión podrían realizarse vía grandes consensos logrados gracias al fuerte y amplio liderazgo de la ex presidenta Bachelet. Sin embargo, lo que no estaba seguro era si ese liderazgo iba a poder vencer la radicalidad en la que se había refugiado gran parte de la derecha. "La guerra está declarada", informó Carlos Larraín frente a la destitución del ministro Beyer, declaración que grafica el punto.

6. El retorno de la ex presidenta Bachelet

"Por razones personales vuelvo a mi país", informó la ex presidenta Michelle Bachelet al cierre de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, comunicando su renuncia como directora ejecutiva de ONU Mujeres, cargo que había asumido el 13 de septiembre de 2010. Una de sus últimas comunicaciones desde Nueva York, antes de volver al país el 27 de marzo, fue la carta de felicitaciones a Ignacio Walker por su reelección como presidente de la DC:

> Hago llegar mis felicitaciones por tu reelección como Presidente de la Democracia Cristiana junto a la nueva directiva y te agradezco que la hagas extensiva a toda la

112. Véase http://www.theclinic.cl/2013/03/19/ricardo-lagos-w-este-no-es-el-proyecto-de-los-cuatro-anos-de-bachelet-es-uno-para-los-proximos-12-anos-de-chile

militancia, hombres y mujeres, que a lo largo de Chile participaron activamente en esta elección interna, demostrando una vez más la cultura democrática de la Democracia Cristiana (…) sin duda este proceso eleccionario participativo y la directiva que encabezas será fundamental para seguir aportando al desarrollo de Chile, con sentido de humanidad, progreso y justicia social.[113]

Tal como lo indicara la periodista Alejandra Carmona, la ex presidenta enfrentaba una campaña en la cual tenía que tomar posición sobre una serie de temas que dejó pendientes en su anterior administración, y otros que surgieron después. Derechos laborales y subcontratación, demandas del pueblo mapuche, limpiar la matriz energética y mejores estándares de termoeléctricas, Asamblea Constituyente y cambio del binominal, educación gratuita y lucro, soberanía sobre los recursos naturales, reforma del sistema de AFP e Isapres y conflictos de interés de su entorno familiar, eran inevitablemente parte de una agenda programática o plataforma presidencial[114].

En su discurso de inicio de campaña en la Municipalidad de El Bosque, el mismo día de su arribo al país, Michelle Bachelet señaló que el país iniciaba un nuevo ciclo social, político y económico, el que requería una nueva mayoría política y socialmente hablando, de un nuevo consenso y unidad nacional sin exclusiones y de una nueva política centrada en torno a los valores de justicia, participación y solidaridad.

Reconoció que los gobiernos concertacionistas habían logrado crear una democracia estable, introducir mejoras sociales y crecimiento económico pero con insuficiencias y reformas que quedaron sin hacer. Igualmente, estableció que los beneficios del desarrollo no llegaron a todos y que los niveles de desigualdad no mostraron cambios significativos, lo que ha generado un malestar ciudadano transversal.

Para enfrentar estos problemas se propuso promover diálogos y encuentros para que el programa de su campaña tuviera un sello ciudadano, afirmando su participación en primarias, ya que ellas eran un camino legítimo y válido para que la ciudadanía señalara su preferencia. De esta forma se establecería, a futuro, un pacto de gobierno con un compromiso mutuo entre gobernante y gobernados.

Se refirió a la necesidad de una educación gratuita y de calidad, particularmente en la educación municipal; a la inclusión y protección de la clase media; la descentralización y atención a regiones; la protección de los consumidores frente a los abusos de poder de empresas, en especial de la salud; la reducción

113. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/03/674-514550-9-michelle-bachelet-envia-carta-a-ignacio-walker-para-felicitarlo-por-triunfo-en.shtml

114. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/03/13/la-agenda-y-las-cuentas-pendientes-con-que-el-movimiento-social-espera-a-bachelet

de las brechas salariales entre hombres y mujeres; el mejorar la capacidad de negociación colectiva; el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y mujeres, y de los pueblos originarios; así como a la necesidad de revisar las bases del modelo de desarrollo basado en la exportación de productos primarios.

Los temas referidos a la matriz energética, a la Asamblea Constituyente y cambio del binominal, al lucro en la educación, a la soberanía sobre los recursos naturales y la reforma del sistema de AFP, no fueron tocados en esa oportunidad.

A partir de esas definiciones generales, su programa de gobierno comenzó a especificarse gradualmente. Así, el 1 de abril, después de un encuentro con dirigentes sociales en Conchalí, informó que "el primer proyecto que voy a enviar al Congreso va a ser uno para poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad de la educación en todos sus niveles". Esas afirmaciones generaron rápidas reacciones desde la DC. Así, Ignacio Walker afirmaba "que la ex Presidenta Michelle Bachelet debiera especificar con mayor claridad a qué se refiere cuando habla del fin al lucro y de avanzar en gratuidad", y el candidato PDC a las primarias opositoras, Claudio Orrego, señalaba que "la eliminación del lucro no resuelve el problema fundamental de la educación, que es la calidad. El 50% de los estudiantes chilenos estudia hoy en entidades públicas sin fines de lucro, de mala calidad"[115].

Días después, manifestó su rechazo a la gratuidad en la educación superior "para quienes pueden pagar", presentó al equipo —integrado solo por economistas— que tendría a cargo la propuesta de reforma educacional y que elaboraría una reforma tributaria que aumentaría la recaudación para destinar fondos a la reforma educacional. Igualmente, en entrevista a *The Clinic*, informó que crearía un equipo que elaboraría una reforma constitucional, sin especificar el procedimiento de la misma; se declaró partidaria de legalizar el aborto terapéutico, e informó que tendría una postura sobre el matrimonio igualitario, demostrándose arrepentida de haber aplicado la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche[116]. Su postura frente a la gratuidad de la educación volvió a dar un vuelco después de la manifestación estudiantil del 11 de abril, afirmando el 13 de abril, durante su proclamación por el PS y el PPD en el Teatro Caupolicán, que se debía "avanzar hacia la gratuidad universal".

Agregando elementos a su propuesta de gobierno, en entrevista con TVN el 14 de abril afirmó su convicción en que debía existir una AFP estatal: "Eso es lo que creemos nosotros, lo tratamos de hacer en mi gobierno y no resultó. Sin embargo,

115. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/04/03/nacional/politica/noticias/a8e94edb-ed0c-4702-abe2-fa1f367481a7.htm

116. Véase http://www.theclinic.cl/2013/04/11/entrevista-exclusiva-a-michelle-bachelet-es-necesaria-una-nueva-constitucion/

espero ser una presidenta con un parlamento que realmente permita hacer estos cambios que los chilenos demandan y yo estoy disponible a hacer"[117]. El 23 de abril presentó el equipo de ocho abogados que confeccionará una propuesta de reforma constitucional considerando "alternativas viables" y "la historia de Chile y otras experiencias de América Latina", para lograr tener "una Constitución nacida en democracia sin los cerrojos y las trabas que heredamos en condiciones políticas muy diferentes"[118]. Igualmente, propuso un Bono Marzo permanente para todas las familias que reciban Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Ingreso Ético y, a fines de abril, en Punta Arenas, propuso la elección directa de los intendentes regionales.

VII. SOCIEDAD

La activa vida política partidaria y gubernamental continuó contrastando con la despreocupación y distanciamiento de la ciudadanía de los asuntos públicos, aun cuando su situación de vida siguió mostrando grandes insuficiencias.

1. Participación

Las señales dadas por la sociedad chilena en este período mostraron un preocupante desinterés de la ciudadanía por votar y participar comunitariamente.

Aun cuando la prensa oficialista afirmó que, a pesar de la baja de votantes en las elecciones municipales, en los municipios más pobres se había registrado la mayor participación electoral, otros expertos compararon municipios similares pero con distintos ingresos promedios y concluyeron que hubo mayor participación en los de mayores ingresos. Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes y La Reina tuvieron una tasa promedio de 41.8%, frente a Renca, El Bosque, Lo Espejo, San Joaquín y La Pintana, con una participación promedio de 32,7%[119].

Ciudad Viva informó que el nivel de cumplimiento en municipios de Ley de Participación Ciudadana era muy bajo. "De las 345 municipalidades del país a las que se les solicitó información, sólo 147 (43%) respondieron en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los 198 restantes, es decir el 57% de las alcaldías consultadas, no entregaron los datos que

117. Véase http://www.df.cl/bachelet-plantea-afp-estatal-y-apoya-salario-minimo-cercano-a-250-mil/prontus_df/2013-04-15/002207.html
118. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/04/24/nacional/politica/noticias/26E33D6F-EA4B-4E99-9C0A-0AEB16A886E1.htm?id=%7B26E33D6F-EA4B-4E99-9C0A-0AEB16A886E1%7D
119. Véase http://ciperchile.cl/2012/11/05/voto-voluntario-%E2%80%A6-%C2%A1y-votaron-mas-los-ricos

permitían evaluar su cumplimiento"[120]. Dada esa situación, trece alcaldías Pro Participación Ciudadana se comprometieron a incrementarla en 2013.

Esta baja participación comunitaria se vio replicada a nivel sindical. Así, dadas las barreras que impone la actual legislación, la Encuesta Nacional del Trabajo 2011 mostró que 73 mil empresas del país no cuentan con sindicatos, informando una baja del 54,1% al 48,3% de la sindicalización de las grandes empresas durante los últimos tres años, mientras que en la microempresas apenas llega a 1,6%[121].

No respondiendo a estas graves señales sociales, en noviembre, al no alcanzar el quórum de 3/5 de los parlamentarios (72), la Cámara rechazó por 63 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, el proyecto de reforma constitucional que adelantaba la elección directa de los consejeros regionales (CORES). El proyecto planteaba adelantar al año 2013 la elección de consejeros regionales por sufragio universal en votación directa, por lo que solo podría realizarse en el año 2016[122].

En ese contexto no fue de extrañar que ante la no publicación de la encuesta Adimark de octubre, Roberto Méndez, director del centro de estudios, informara que un alto número de personas se negaron a responder el cuestionario, especialmente en los grupos de bajos ingresos.

La baja participación comunitaria y electoral contrastó con la alta participación en el mercado, con todas sus consecuencias negativas. Así, la segunda encuesta del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) señaló que el 52,4% de las familias más pobres se ha endeudado con alguna entidad formal o informal en el último año para comprar alimentos, ropa o costear gastos de salud[123].

Con todo, un signo de optimismo a fines de 2012: la ONG Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH Chile) mostró su existencia en acción. Nacida en 2011 por iniciativa de la Confederación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CONFECH), permitió que personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos actuaran como observadores ante las numerosas denuncias de violaciones a los DDHH durante las manifestaciones estudiantiles. Su trabajo es de carácter voluntario y no reciben remuneraciones por su importante labor"[124].

---

120. Véase http://diario.elmercurio.com/2012/12/25/nacional/nacional/noticias/136796F5-6657-4A28-BA62-69A360C20D4E.htm?id=%7B136796F5-6657-4A28-BA62-69A360C20D4E%7D
121. Véase http://www.lanacion.cl/73-mil-empresas-del-pais-no-cuentan-con-sindicatos/noticias/2012-12-14/122917.html
122. Véase http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/11/06/camara-de-diputados-rechaza-proyecto-que-adelantaba-eleccion-directa-de-consejeros-regionales
123. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/01/17/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/1C1DA98D-228A-41FC-8C8E-3A06EC0D0DAA.htm?id=%7B1C1DA98D-228A-41FC-8C8E-3A06EC0D0DAA%7D
124. Véase http://www.elciudadano.cl/2012/12/11/61456/vigilando-los-derechos-humanos

2. Desigualdad y segregación urbana

El primer informe de política nacional urbana de la OCDE constató altos índices de segregación entre las principales 26 ciudades chilenas en ámbitos como vivienda, pobreza, densidad habitacional y acceso a las áreas verdes. La pobreza urbana experimentó una expansión en 20 de 26 de las ciudades con más habitantes[125]. Esta situación de pobreza contrasta la concentración de la riqueza en el país. De acuerdo al estudio de Ramón López, Eugenio Figueroa B. y Pablo Gutiérrez C., "La 'parte del león': nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile":

> aun en base a una estimación conservadora del ingreso de los súper ricos, su participación en el ingreso personal total es extraordinariamente alta, llegando a más de 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% más rico y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante el periodo 2004-2010. En términos internacionales estas son las más altas participaciones que se conocen. Aun excluyendo ganancias de capital o utilidades retenidas, la participación del 1% más rico es la más alta registrada dentro de una lista mucho más amplia de alrededor de 25 países para los cuales esto se ha medido (…) Las estimaciones obtenidas para Chile muestran que el país es por lejos el más concentrado entre todos los países para los cuales existen datos basados en declaraciones tributarias oficiales y estimaciones de las ganancias de capital de las que se apropian los estratos más ricos. El 1% más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos como proporción del ingreso total del país que lo que en promedio recibe el 1% más rico en los 7 países para los cuales existen datos que incluyen ganancias de capital para el periodo considerado. Más aún, mientras que el 0,1% más rico en Chile se lleva cuatro veces más que el promedio de la muestra de países, el 0,01% más rico se apropia de casi 6 veces (5,8) la proporción de la que se apropia los que pertenecen al 0,01% más rico en los otros 6 países de la muestra"[126].

3. Depresión

La forma de vida que llevaba gran parte del país derivó, más que un aumento de la "felicidad", en un incremento de la demanda por Clonazepam y otros ansiolíticos, la que se incremento en 20% a fines de 2012. Nadie se escapó de la depresión generalizada, los ricos también sufrían. Al respecto, *El Mercurio* informaba: "En el sector oriente de Santiago la disponibilidad de estos medicamentos es, por estos días, escasa"[127].

---

125. Véase http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2013/03/14/1010815/ocde-advierte-altos-indices-desigualdad-ciudades-chilenas.html
126. Véase http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf
127. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/01/02/nacional/nacional/noticias/8D3E0668-3C71-4168-B77C-E60CDE319FE7.htm?id=%7B8D3E0668-3C71-4168-B77C-E60CDE319FE7%7D

4. Movilizaciones sociales

El paro de los trabajadores portuarios a comienzos de abril, junto al paro de los trabajadores de CODELCO y la exitosa marcha estudiantil —más de cien mil manifestantes y apoyada por la CUT—, dieron inicio al año de las movilizaciones sociales. Tal como indicaba Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el paro de CODELCO —centrado en temas de previsión social— no esperaba respuesta del gobierno Piñera en los próximos ocho meses de su administración, implícitamente apuntando a que sus demandas estaban dirigidas a quien lo sucediera.

A comienzos de mayo, más de cinco mil personas, básicamente integrada por enfermos crónicos y graves, marcharon en demanda de un mayor acceso a remedios y llamaron a crear un fondo nacional para medicamentos. La marcha coincidió con las declaraciones del Premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, quien denunció a los grandes consorcios farmacéuticos que detienen el avance científico en la búsqueda de curas a enfermedades que son rentables para ellos[128].



Iniciando su último año de gobierno, el presidente Piñera se enfrentó a una desarticulación severa de las relaciones Estado-mercado-sociedad, marcando una diferencia con las últimas administraciones.

La gestión del Ejecutivo mostró permanentes tensiones con el empresariado, el que resintió parte de sus políticas especialmente en el ámbito tributario y en derechos de los consumidores. Su articulación con la sociedad civil no fue de las mejores, teniendo que enfrentar permanentes conflictos sociales que impusieron temas no anticipados de agenda. Al mismo tiempo, el sector empresarial vio cuestionada su legitimidad por parte de la sociedad civil como producto de los abusos cometidos en los puntos de producción y distribución de bienes y servicios.

Así, la fracturada tríada Estado-mercado-sociedad quedó en espera de una próxima reparación.

128. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2013/05/04/premio-nobel-denuncia-que- farmaceuticas-bloquean-los-medicamentos-que-curan-porque-no-son-rentables/

CAPÍTULO 10

LA HORA DE LA VERDAD
Derrota gubernamental y crisis en la derecha

La derrota de la Alianza y del Gobierno en las elecciones municipales de 2012 fue la alerta temprana de la debacle que enfrentarían a fines de 2013, crisis agudizada por sus divisiones y conflictos internos, los que dejaron a la derecha en una crítica situación.

Efectivamente, después de su último Mensaje, el Ejecutivo continuó siendo incapaz de darle coherencia a su gestión, ordenar sus apoyos partidarios y transmitir una visión de futuro basada en un sólido legado político. Así, en medio de una reñida primaria —incluyendo el retiro del ganador y la nominación de una nueva candidata—, una ácida disputa por cupos parlamentarios y recriminaciones y perdones por haber apoyado la dictadura, las contradicciones evidenciadas en el seno de la Alianza desde el inicio de la gestión Piñera continuaron profundizándose.

Por su parte, la gradual intensificación de la competencia electoral amplió y creó nuevos espacios a la oposición para plantear sus propuestas de cambio y, a pesar de la alta abstención electoral, la ciudadanía volvió a adquirir protagonismo gracias a una masiva y sorpresiva participación en las elecciones primarias —lo que no se repitió en las de noviembre—, así como en la organización de diversas agrupaciones interesadas en el futuro político del país.

La presentación de una amplia gama de propuestas de reformas políticas, económicas y sociales por parte de las diversas candidaturas y organizaciones de la sociedad civil repusieron en la agenda temas claves de política pública: reformas estructurales, intereses y derechos colectivos. En suma, se privilegió lo público por sobre los intereses privados. Esta variedad de propuestas se vio incrementada por la presentación de nueve candidatos a la presidencia, hecho inédito en la historia política chilena. Una oferta política, si bien numerosa, mostró una baja calidad y alta segmentación de su público objetivo, escenario en el cual se perdió relativamente de vista lo nacional, predominando la protesta sobre la propuesta.

Dándole un tono de crispación a esta etapa, la catarsis colectiva observada a los 40 años del golpe militar empapó la dinámica electoral. Los medios de comunicación difundieron inéditos testimonios de violaciones masivas a los derechos

humanos durante la dictadura, e inesperados *mea culpa* volvieron a reponer las aún no totalmente aclaradas responsabilidades militares y civiles en ellas.

I. DEL DICHO AL HECHO

Acercándose el final de su administración, el Presidente Piñera entregó la última cuenta anual al Congreso en medio de especulaciones sobre su contenido, el que defraudó las expectativas al no tener una clara y sólida exposición de su principal legado, ni constituirse en una carta de navegación para el futuro.

Su último Mensaje no fue un hito estratégico. Lo más destacado fue la enumeración de logros de su administración desde una simple perspectiva mercadista, como la expansión del consumo de los chilenos en diversos rubros sin analizar su desigual distribución por clases sociales.

Anunció la creación del nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para convertir al país en una potencia agroalimentaria en un contexto de crisis de la agricultura; se quiso empinar en la historia con un proyecto de ley para hacer el jardín infantil obligatorio; y reiteró su preferencia por los bonos con el de maternidad para parejas que tengan a futuro tres o más niños ($100 mil al nacimiento del tercer hijo hasta $200 mil con el nacimiento del quinto) y una bonificación para tratamientos dentales (obturaciones y endodoncia dental) para menores de entre doce y dieciocho años.

En el plano político, reiteró su tendencia al uso autoritario del poder y la fuerza con el anuncio que seguiría invocando la Ley Antiterrorista en el mundo mapuche, su llamado a aprobar pronto la Ley Hinzpeter y el envío de un proyecto de ley que establecía como un nuevo delito el insulto grave a un carabinero o policía en ejercicio de sus funciones; elevaba las penas del delito de maltrato de obra, causando lesiones graves a los miembros de Carabineros o la PDI, en una clara reincidencia en la política de criminalización del movimiento estudiantil y otras manifestaciones sociales.

La pobreza de su último Mensaje contrastó con la ambición del primero. Una comparación —de ninguna manera exhaustiva— a partir de temas políticos sustantivos muestra los grandes déficits en su gestión gubernamental.

Desde la perspectiva del "gran diseño", el énfasis puesto en la unidad nacional y los valores de solidaridad y equidad contrastó fuertemente con el individualismo privatista que empapó sus políticas, la ausencia de resultados efectivos en materia de equidad y la permanente crítica a la administración pasada.

Si bien puede contar a su haber la creación de los cincuenta liceos Bicentenario, la eliminación gradual y progresiva del 7% de la cotización de salud de los jubilados más pobres, el posnatal, la reducción —a la fuerza— de los préstamos a universitarios y el ingreso ético vía bonos condicionados, no puede decir lo mismo ante la ausencia

de perfeccionamiento del seguro de desempleo, ni de su nula acción sobre lo que en 2010 llamó las "malas prácticas que muchas veces distorsionan el concepto de empresa, recurriendo a múltiples RUTs, afectando negativamente los derechos de los trabajadores". Las mismas ausencias se pueden apreciar en materia de la prometida adaptabilidad horaria y turnos en las regiones, el teletrabajo y las ocupaciones desde el hogar.

Igualmente, aun cuando logró aprobar "primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular", no honró su compromiso con "una profunda revolución descentralizadora, transfiriendo poder efectivo a las regiones y a los municipios, a través de la transferencia de funciones, atribuciones y recursos, desde el gobierno central a los gobiernos regionales y comunales, en un contexto de mayor flexibilidad y autonomía en su gestión y plantas de personal, respetando los legítimos derechos de los funcionarios municipales". Tampoco lo hizo con las reformas constitucionales para un cambio del binomial, plebiscitos comunales, la iniciativa popular de ley y la ley del Congreso. Y en su último Mensaje reiteró la política de los anuncios con una futura reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, para modernizar y transparentar su estructura y financiamiento, así como el voto de los chilenos en el extranjero en las elecciones presidenciales, pero que mantengan un vínculo con Chile, el que se acreditará mediante su inscripción previa en alguna de las embajadas o consultados.

Todo lo anterior planteó la pregunta si su ambicioso plan de gobierno fue puramente retórico o bien solo fue un sueño de una noche de verano en Tantauco.

1. Gobierno

Afectado por la derrota en las municipales de 2012, la reacción del Presidente fue incrementar sus críticas a la gestión de Bachelet desplegando, por una parte, una estrategia de trinchera de manera de contener el avance opositor y, por la otra, el despeje de rivales para una eventual repostulación en 2017.

En esta dirección se orientó el incremento del protagonismo presidencial, la abierta participación e intervención electoral del Ejecutivo, la campaña contra las propuestas de cambios de Bachelet, el intento de retomar la iniciativa política anunciando un desorbitado conjunto de veintiún urgencias a iniciativas legislativas y la presentación de un presupuesto 2014 que limitaba la acción de la nueva administración.

2. Activismo legislativo

Con la convicción de una elección presidencial perdida y la necesidad de fortalecer o mantener intacta la presencia de la derecha en el Congreso, el Ejecutivo se

involucró decididamente en la campaña aliancista, trató de aunar opiniones con dirigentes políticos y empresariales, al tiempo que, intentado retomar la iniciativa, anunció una agenda desproporcionada de proyectos de ley para los pocos meses de gestión que le quedaban.

Este involucramiento fue reconocido por la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, al decretar el fin de la prescindencia del Ejecutivo en la campaña indicando que para La Moneda no le era "indiferente" la elección presidencial y que "en los horarios libres" se desplegarían por el candidato de la Alianza[1]. Y apoyando públicamente la precandidatura de Andrés Allamand en la primaría de la Alianza, entró directamente en la campaña señalando que la reforma tributaria de Bachelet "produce incerteza" y puede afectar el crecimiento. "Creemos que cuando existe 'incerteza' en materia institucional es cuando efectivamente se puede ver afectado el crecimiento particularmente y es en el crecimiento cuando se generan más y mejores empleos, es en el crecimiento donde las PYMES pueden tener reutilidades que les permitan salir adelante sin tener que verse siempre ante la negativa de un crédito bancario"[2]. Por su parte, contradiciendo su propia anticipación de un enfriamiento de la economía en 2013, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entró derechamente en la contienda electoral señalando que propuestas como la asamblea constituyente, cambios en el sistema de AFP y alzas de impuestos "ya han provocado efectos negativos"[3].

El involucramiento del Gobierno en la campaña aliancista produjo, a comienzos de junio, un nuevo cambio de Gabinete. Roberto Ampuero y Bruno Baranda asumieron los ministerios de Cultura y Desarrollo Social, reemplazando a Luciano Cruz-Coke y Joaquín Lavín, respectivamente, los que renunciaron para incorporarse, el primero, al comando de Andrés Allamand como su jefe de campaña y el segundo al de Pablo Longueira, cambios que despertaron la crítica del vicepresidente de Renovación Nacional quien afirmó que esa era "una mala señal", ya que la labor de un ministro era "más importante" que una campaña[4].

La "puerta giratoria" Gobierno-campaña continuó a fines de julio cuando el Presidente tomó juramento al ex subsecretario de Vivienda, Juan Carlos Jobet, como ministro de esa cartera, en reemplazo de Evelyn Matthei. Este había sido subsecretario de Vivienda hasta noviembre de 2012, tras lo cual dejó ese cargo para asumir como jefe de proyectos programáticos de Andrés Allamand.

---

1. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/07/01/606791/vocera-de-gobierno.html
2. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/06/17/la-moneda-dice-que-reforma-tributaria-de-bachelet-produce-incerteza-y-puede-afectar-el-crecimiento/
3. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/07/economistas-salen-al-paso-de-dichos-de-larrain-la-politica-tiene-poco-que-ver-con-la-actual-caida-de-la-inversion/
4. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/06/06/602479/ossandon.html

Igualmente, intentando posicionarse en vistas a 2017 con una "bancada piñerista", el Presidente promovió al ministro Cruz-Coke, cercano colaborador, como candidato a senador por RN en Antofagasta, postulación que fue cuestionada por el PS toda vez que el ex ministro no había renunciado en tiempo reglamentario. Dada su condición de jefe de servicio, su postulación fue aprobada por el Tribunal Electoral, pero el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dejó sin efecto su candidatura senatorial por la Región de Antofagasta al acoger los recursos de impugnación presentados por el PS y del candidato independiente Daniel Guevara.

Con posterioridad al Mensaje, las iniciativas gubernamentales se multiplicaron, cayendo el Ejecutivo en lo que podría calificarse de "grandilocuencia legislativa". Algunas de estas medidas, anunciadas el 21 de mayo, fueron severamente criticadas incluso por la prensa extranjera. Tal fue el caso de *The Economist* que calificó el anuncio de un bono por tercer hijo como "soborno por niño (…) Sus críticos dijeron que fue diseñado para recompensar a las familias adineradas, conservadoras, famosa por su fecundidad prodigiosa. También dicen que hay formas más constructivas para alentar a las mujeres a tener familias más grandes, como los de atención infantil"[5].

Y, a comienzos de junio, anunció un plan de veintiún medidas intersectoriales para revertir la caída en la tasa de natalidad —algunas de las cuales habían sido iniciativas ya adoptadas en otro marco de políticas—, entre las cuales se destacaron medidas en salud, vivienda, educación y trabajo:

> 1. Tratamientos para la infertilidad: Se amplió la cobertura y acceso a tratamientos de fertilización, tanto de alta como de baja complejidad, beneficiando a cerca de 1.450 personas durante 2013. 2. Bono por tercer hijo: entrega de $100 mil al nacimiento del tercer hijo, de $150 mil para el cuarto hijo y $200 mil con el nacimiento del quinto. 3. Bono maternidad para temporeras y con contratos a plazo fijo, cuyo monto depende de la cantidad de cotizaciones que hayan realizado con anterioridad a embarazarse, contando con un monto mínimo asegurado de 50 mil pesos aproximados mensuales durante 30 semanas. 4. Programa Salud de la Mujer: más de 1.500 mamografías en 2013 en distintas zonas de Chile. 5. Programa de atención al embarazo adolescente: inclusión social de embarazadas y madres adolescentes. 6. Centro especializado de atención y apoyo a la maternidad: contención, atención, orientación, apoyo, seguimiento y derivación a todas las personas que tengan alguna inquietud respecto a temas relacionados con la maternidad. 7. Posnatal de 6 meses: extensión del posnatal de tres a seis meses, ampliando su cobertura, de una de cada tres mujeres, a todas las trabajadoras. 8. Programa de 4 a 7: inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y

---

5. *The Economist*, May 30, 2013.

recreativo después de la jornada escolar. 9. Bono al Trabajo de la Mujer: Durante 2012 más de 174 mil mujeres fueron beneficiadas por este bono. 10. Fortalecimiento de educación pre-escolar estableciendo la obligatoriedad de kínder: reforma constitucional que permitirá avanzar hacia la universalidad y gratuidad de la educación preescolar, estableciendo la obligatoriedad de kínder. 11. Aumento de cobertura pre-escolar: 12. Ingreso ético familiar: además de entregar bonos por deberes como el Control del Niño Sano y de Asistencia Escolar, Bono al Logro Escolar y el Bono al Trabajo de la Mujer, las familias son reconocidas cuando sus hijos se destacan académicamente o la mujer encuentra trabajo. 13. Aumento presupuesto de salas cuna y jardines infantiles. 14. Aumento de exigencias para jardines infantiles y salas de cuna: proyecto de ley que autoriza el funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles estableciendo requisitos mínimos, dejando en la Superintendencia de Educación Escolar el deber de velar el cumplimiento de los mismos, resguardando la integridad y seguridad de los niños. 15. Creación de subvención regular y Subvención Escolar Preferencial (SEP) para los niños entre 3 y 4 años para asistir a educación preescolar: proyecto de Ley que crea gradualmente la Subvención Universal para los niños desde los tres años, incluyendo también una subvención preferencial para los niños más vulnerables. 16. Aumento subvención de pre-kinder y kínder en 2013 ese monto supera los $85 mil. 17. Aumento de subvención escolar: Se incrementó en más de un 20% la subvención escolar preferencial, ampliando sus beneficios gradualmente, desde la Educación Básica hasta la Educación Media, beneficiando así a más de 1,1 millón de alumnos. Si se aprueba el Proyecto de Ley que crea la subvención especial para la clase media —actualmente en el Congreso— 2,2 millones de estudiantes se verán beneficiados con una subvención adicional. 18. Crédito tributario para la educación por los gastos que los padres realicen en la educación de los hijos, de hasta $100.000 anuales por hijo. En la operación renta 2013, más de 240 mil contribuyentes solicitaron el beneficio. 19. Aumento de número de becas para educación superior: se extendió la cobertura de las becas a la clase media, beneficiando a estudiantes de familias del 60% más vulnerable en términos de ingresos, permitiendo ofrecer en 2013 becas para más de 314 mil estudiantes (y 400.000 en 2014, casi cuatro veces más lo entregado en 2009). 20. Reducción de tasas de interés para financiamiento de educación superior —Crédito con Aval del Estado— del 6% al 2% y se estableció que esa cuota nunca podrá superar el 10% de los ingresos que tengan los beneficiados una vez que ingresen al mundo laboral. 21. Aumento de tamaño de vivienda sociales desde 42 a 47 mts^2, y sobre 50 mts^2 para las familias más numerosas o que acojan a adultos mayores o personas con capacidades diferentes.

En esta misma línea, anunció un proyecto de ley para proporcionar salas cuna a todas las trabajadoras del país, no solo en empresas donde trabajaran veinte o más mujeres.

En relación a estos temas, y frente al caso de Belén, la niña embarazada de once años violada reiteradamente por su padrastro, el Presidente Piñera alabó su inten-

ción de que tuviera la guagua: "Nos sorprendió con palabras que demostraban una profundidad y una madurez"[6]. Declaración que fue retransmitida internacional y críticamente por *The Washington Post*, la *BBC* y *El País*, entre otros[7]. Por su parte, el diputado UDI, Issa Kort, afirmó que Belén "ya está preparada para ser madre"[8]. Con todo, el sondeo CEP de octubre de 2013 informaba que un 63% de los entrevistados apoyaba la despenalización del aborto terapéutico y el mismo nivel de apoyo se observaba para casos de violación[9].

Siguiendo la política de anuncios e iniciativas, a mediados de junio el Presidente entregó seis mil subsidios habitacionales para la clase media y anunció una reforma previsional para mejorar las pensiones de los trabajadores rebajando las comisiones de AFP, incrementando el retorno de las inversiones, aumentando las cotizaciones y prolongando los años de trabajo[10]. Posteriormente, en septiembre, entregó 5.640 subsidios habitacionales a familias de la Región Metropolitana.

A mediados de junio, promulgó la Ley de Tuición Compartida, que permite que tanto padres como madres puedan hacerse cargo del cuidado de sus hijos en forma más igualitaria. Igualmente, reimpulsó la ley del lobby y, a comienzos de julio, le dio suma urgencia al proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, lo que nuevamente despertó reparos de la UDI y de la jerarquía de la Iglesia católica.

En una nueva acción legislativa, el 19 de agosto el Gobierno anunció que le daría prioridad, en el corto plazo que le restaba, a veintiún proyectos de ley entre los cuales se contaba la llamada "Ley Hinzpeter", la ley que sanciona el maltrato a Carabineros y el control preventivo de identidad, la obligatoriedad del kínder, la subvención para estudiantes de clase media, la creación de la Superintendencia de Educación Superior y un nuevo sistema de acreditación, la modificación al sistema privado de las Isapres incorporando un plan de salud garantizado, cambios a la ley de fármacos que asegurara el acceso a medicamentos a través de las góndolas en el supermercado (lo que motivó un nuevo enfrentamiento entre el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los diputados, al acusarlos de ceder ante un supuesto lobby de las farmacéuticas), un proyecto que crearía un procedimiento para otorgar concesiones eléctricas y la creación de una carretera eléctrica pública, la interconexión del SIC (Sistema Interconectado Central) y el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande), la factura electrónica, un estatuto laboral para jóvenes estudiantes, la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, el INE autónomo, la regulación del lobby, probidad en la función públi-

---

6. http://www.theclinic.cl/2013/07/09/pinera-pide-a-manalich-que-se-preocupe-personalmente-de-la-salud-de-belen-la-nina-de-11-anos-embarazada-por-su-padrastro/
7. http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130710/pags/20130710145737.html
8. http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130709/pags/20130709131039.html
9. Véase http://www.cepchile.cl/PDFs_CEP/encuestaCEP_sep-oct2013-completa.pdf
10. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2013/06/856940/Pinera-anuncia-reforma-previsional-para-mejorar-las-pensiones

ca, el perfeccionamiento de la ley de transparencia, la reforma al sistema binominal (anunciada en octubre de 2011 y sepultada en enero de 2012 por el propio Presidente) y el fortalecimiento de la regionalización.

A fines de agosto, el presidente Piñera firmó proyecto de ley que incentivaría el reciclaje y continuó con la política de apoyo a los consumidores. Al respecto, en julio, el ministro de Economía había presentado un reglamento que contemplaba varios métodos —como mensajes de texto— para dar consentimiento a las repactaciones, pero las asociaciones de consumidores y usuarios advirtieron que el reglamento de "Consentimiento Expreso" no terminaba con las cláusulas abusivas. Fernando Arancibia, presidente de la Fundación Chile Ciudadano, señalaba que:

> El proyecto no sólo es ilegal sino que inconstitucional, ya que en nuestro derecho la regulación de la formación del consentimiento es de dominio legal y no puede estar entregada a un acto administrativo; que el uso de medios electrónicos y de comunicación a distancia exponen a enormes incertidumbres a los consumidores y siempre será necesario una confirmación expresa por escrito; y criticamos, también, la inaceptable facultad de terminación unilateral del contrato por parte del proveedor, si no se aceptan las modificaciones de un contrato indefinido que (¡el mismo proveedor!) propone.[11]

El activismo legislativo continuó con la promulgación de la ley que agrava penas contra pedófilos y, como una manera de debilitar el papel de las comunidades indígenas, se dictó una nueva norma del SEA —que entró en vigencia en diciembre de 2013— sobre la consulta no vinculante de proyectos medioambientales en territorios ancestrales de pueblos originarios.

Después de cinco años de trámite legislativo se despachó la ley de televisión digital, la que incluyó los conceptos de pluralismo y obligatoriedad de promover contenidos, lo que generó diferencias entre parlamentarios, llevando la UDI el tema al Tribunal Constitucional ya que, según este partido, tal ley atentaría contra la libertad de los medios. El Ejecutivo vetó catorce aspectos de la ley, especialmente el concepto y obligación de promover el pluralismo y campañas públicas.

Como salario mínimo el Gobierno presentó una base de $207.000. Trabajadores y economistas exigían $250.000, ante lo cual el Gobierno cedió y propuso un reajuste del sueldo mínimo de $ 210.000 para asegurar su aprobación en el Congreso. Y, en línea con la propuesta de la candidata de la Alianza, días antes de las elecciones presidenciales, el Gobierno anunció un proyecto que limitaría el pago de contribuciones para los adultos mayores.

Casi al finalizar el año, el Ejecutivo presentó su propuesta de Presupuesto 2014 centrado en siete ejes: crecimiento, educación y salud, lucha contra la delincuencia,

---

11. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/28/consentimiento-expreso-otra-casi-derrota-para-los-consumidores/

superación de la pobreza, apoyo a la familia, desarrollo regional y reconstrucción. Dispuso de un fondo de libre disposición de US$ 600 millones para iniciativas que determine su sucesor/a. Al respecto, Andrés Zaldívar (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) advirtieron sobre la alta deuda que dejaba el Gobierno y criticaron el alza del gasto de solo 3,9%, la segunda menor en diez años.

A pesar de la aprobación puesta en marcha o el anuncio de tantas iniciativas, el Ejecutivo no pudo implementar algunas políticas públicas promercado. Así, en el mes de agosto la Corte Suprema anuló la decisión del Consejo de Ministros que aprobó la termoeléctrica Punta Alcalde. En el mes de julio, diputados de oposición e independientes rechazaron el proyecto de ley que creaba los hospitales clínicos de Maipú y La Florida, en la Región Metropolitana, acusándolo como proyecto de "privatización encubierta" de la salud pública. En materia agraria, el Gobierno pretendió extender el subsidio a empresas forestales por veinte años, pero críticos de esta política plantearon que en los treinta y ocho años de existencia del subsidio se habían entregado cientos de millones de dólares a las grandes empresas del sector sin considerar los daños para el medioambiente y las comunidades rurales.

Por su parte, manifestantes protestaron contra la Ley de Obtentores Vegetales que privatizaría las semillas y potenciaría los cultivos transgénicos —"Ley Monsanto"[12]— favoreciendo a la multinacional de ese nombre que elabora productos transgénicos. La familia de la senadora UDI, Ena von Baer, estaría involucrada en el negocio, por lo que la llamaron a inhabilitarse en la votación del Senado, donde hubo un triunfo parcial de la ciudadanía contra esta ley, ya que veintiún senadores ya la rechazaban. Al respecto, Michelle Bachelet afirmó que:

---

12. Treinta organizaciones ciudadanas y campesinas se manifestaron en contra de este proyecto de ley, estableciendo que: " No estamos de acuerdo con esta ley que da nuevas atribuciones y garantías para que las empresas (obtentores) sigan aumentando sus registros de semillas 'certificadas', 'híbridas' o 'mejoradas' y expandiendo la monopólica industria agroquímica. Ello constituye una amenaza de apropiación del patrimonio natural y biológico con fines de lucro por parte de empresas transnacionales particulares, gobiernos, institutos o universidades. Los nuevos 'derechos de obtentor' contenidos en esta ley liquidan los derechos ancestrales de los campesinos a guardar la semilla, intercambiarla y disponer libremente del producto de su cosecha. De ser aprobada la ley, los obtentores podrán ejercer acciones judiciales contra quienes sean acusados de usar libremente esa semilla. Nos oponemos tajantemente a aquello.

    No admitimos la expansión de monocultivos, ni de semilleros transgénicos de exportación por que atentan contra la vida, los ecosistemas, el bienestar y el desarrollo de generaciones futuras. Sostenemos que los cultivos transgénicos no deben coexistir con los cultivos agroecológicos u orgánicos por el peligro de contaminación derivado de aquellos, pues ha sido comprobado en episodios como la contaminación del maíz y de la miel por transgénicos. Así mismo, cualquier alimento que contenga transgénicos debe llevar un rótulo que lo identifique (etiquetado) para hacer efectivo el derecho del consumidor a elegir libremente cómo alimentarse". http://www.elciudadano.cl/2013/11/08/98438/declaracion-publica-por-proyecto-de-ley-monsanto/

> El sentido original del proyecto era promover el desarrollo tecnológico para aumentar la productividad y competitividad del sector agrícola. Y nuestro interés era también resguardar y respetar tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales chilenos [...] En estos 5 años el contexto ha cambiado. Hemos visto nuevos antecedentes y presenciado un debate sobre la pertinencia de esta ley y sus riesgos. No podemos hacer oídos sordos a esto, y a lo que la ciudadanía a través de organizaciones, campesinos y mundo académico están alertando sobre los riesgos que conlleva este proyecto de ley [...] Vamos a revisar ese proyecto de ley escuchando todas las opiniones.[13]

Otro episodio embarazoso para el Ejecutivo ocurrió en agosto, a propósito del proyecto sobre votación de reos, cuando la ministra de Justicia, Patricia Pérez, que lo promovía, fue desautorizada públicamente por el ministro del Interior.

Una muestra del privilegio que la administración Piñera le dio al sector privado fue el cambio del uso de suelo de 10.000 has. agrícolas localizadas en ocho comunas periféricas, para transformarlas en urbanas. Al respecto, la Fundación Defendamos la Ciudad se hizo parte en la acción de nulidad de derecho público, ya que esta última Resolución era muy distinta a la Resolución Nº 89 del 20/04/11 firmada por el ex intendente Fernando Echeverría y respaldada por el Consejo Regional (CORE) de entonces. Patricio Herman señaló al respecto:

> Este injustificado cambio en las reglas del juego territorial está viciado en su origen porque al interior del radio urbano tenemos del orden de las 25.000 has aptas para acoger negocios inmobiliarios y lo que persigue el PRMS100 es entregar plusvalías patrimoniales a todos los actores privados quienes, por disponer de esos territorios rurales, solicitaron al gobierno anterior el cambio en comento. Tampoco podemos perder de vista que el propio Ministerio de Agricultura recomendó por escrito al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promotor éste del cambio que objetamos, la inconveniencia de llevarlo a cabo en atención a que un alto porcentaje de las 10.000 has agrícolas son suelos de clase I y II, los mejores de Chile. Tampoco el gobierno se enmarcó en la ley ambiental ya que este antojadizo proyecto no cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) tal como lo ordena la actual ley ambiental vigente desde el 26/01/10. Como la Resolución Nº 153 no sometida a votación en el CORE es muy distinta a la Resolución Nº 89, los tribunales de justicia tendrán que exigir el cumplimiento de la ley y en tal sentido con la próxima anulación judicial de ese inicuo acto público será posible la correcta aplicación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU, firmada recientemente por el presidente Piñera.[14]

---

13. http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/09/05/618289/bachelet-en-temuco.html
14. Véase http://www.elclarin.cl/web/index.php/noticias/cronica/9798-anuncian-acciones-judiciales-en-contra-de-resolucion-que-modifica-el-uso-de-suelo-agricola-para-transformarlo-en-urbano

3. Deterioro de instituciones públicas

El deterioro y erosión del prestigio de las instituciones públicas tuvo nuevos episodios. Así, en el mes de julio y tras el escándalo de la condonación de deuda tributaria a Jonhson´s, la Contraloría determinó que el SII debía instruir un proceso disciplinario en la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) por la no abstención de su Director en el proceso que benefició a esta empresa con una rebaja de US$119 millones, ya que este fue socio de PwC, la firma que asesoró a la multitienda en la estrategia tributaria que la enfrentó con el SII. Por tales razones, el Director, Julio Pereira, presentó su renuncia. Además, Pereira le arrendaba en $89 millones de pesos mensuales un terreno al dueño de esa empresa, Horst Paulmann. Simultáneamente, el Comité Penal del CDE acordó querellarse contra Pereira por negociación incompatible. El informe de Contraloría había detectado condonaciones del SII a nueve empresas de las que Julio Pereira era accionista[15].

A las críticas sobre que el Sename no estaba cumpliendo los estándares requeridos, se sumó la recomendación de la comisión revisora del Censo 2012 —que costó US$ 60 millones— de volver a hacerlo, ante lo cual el Presidente reconoció los errores y pidió "humildemente perdón a todos los chilenos". No obstante, a fines de noviembre, la comisión internacional revisora del censo invalidó las sugerencias de expertos locales de repetirlo. Con todo, Michelle Bachelet aseguró que lo repetiría, ante lo cual el Presidente, desconociendo sus declaraciones anteriores, afirmó, "el Censo es válido, no tiene ningún sentido tirarlo por la borda".

En octubre, debido al paro de funcionarios del Registro Civil por dieciocho días hábiles, y tras una nueva falla del sistema computacional recién instalado, su Director, Rodrigo Durán, fue removido del cargo. Despido que no resolvió todos los problemas ya que en noviembre se observó que el sistema confundía huellas dactilares y fotos del carnet de identidad, entregando documentos errados a los solicitantes.

4. Críticas al Poder Judicial

Continuando con la batida contra el Poder Judicial, por su supuesto rol en el aumento de la delincuencia, la derecha abrió fuego contra lo que llamó el "activismo judicial", noción que fue rechazada por la Asociación de Jueces. El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió a las críticas contenidas en

15. Véase http://www.theclinic.cl/2013/07/15/informe-de-contraloria-habria-detectado-condonaciones-del-sii-a-nueve-empresas-de-las-que-julio-pereira-era-accionista

un libro de Libertad y Desarrollo[16], señalando: "Eso es un eslogan para afectar la independencia del Poder Judicial"[17]. El ministro consideró una "contradicción" las críticas en materia medioambiental ya que "precisamente lo que se judicializó fue la política ambiental. No solamente se hizo, sino que se crearon Tribunales Ambientales y ¿para qué se crean?, ¿para controlar a la gente? No, sino para controlar al Estado en sus políticas ambientales. Entonces parece un contrasentido hablar de activismo judicial"[18].

Por su parte, el Presidente recogió la propuesta de la candidata presidencial de la Alianza y, afirmando que "algunos jueces piensan que importan más los derechos de delincuentes que de los inocentes", y anunció la creación de un "Observatorio Judicial" el que sería implementado por la Universidad Adolfo Ibáñez. La iniciativa fue calificada por el Presidente subrogante de la Corte Supera, Milton Juica, como "una intromisión muy fuerte", luego de lo cual la propia Corte Suprema cuestionó la constitucionalidad del observatorio. Ante las críticas del Poder Judicial y expertos constitucionalistas, el Ejecutivo informó que el Gobierno no financiaría el observatorio.

La detención en España de Mónica Caballero y Francisco Javier Solar, absueltos en 2012 en el "Caso Bombas", acusados de poner una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza de Barcelona, reavivó la ofensiva del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Ante esta información el ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que:

> Pudo haber apresuramientos en otras instancias en el pasado, que quizás impidieron desarrollar un juicio con más tiempo […] no queda bien nuestro Sistema Procesal Penal cuando ocurren estas situaciones […] sería bueno la explicación de algunos tribunales, quienes descartaron el 60% de las pruebas que puso a disposición el Ministerio Público (…) eso puso un obstáculo a la investigación.

La dura respuesta del Poder Judicial no se dejó esperar. El presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió que con tales comentarios:

> De alguna manera se está quebrantando lo que dispone el artículo 76 de la Constitución que le entrega el ejercicio único de la jurisdicción a los tribunales de justicia y que prohíbe al Presidente y al Congreso hacer revivir procesos fenecidos o hacer apreciaciones que vayan contra el contenido y fundamento que tomaron los jueces […]

---

16. Véase http://www.lyd.com/libros/libros-de-lyd/2013/08/activismo-judicial-en-chile-¿hacia-el-gobierno-de-los-jueces/
17. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/09/02/milton-juica-y-el-activismo-judicial-eso-es-un-eslogan-para-afectar-la-independencia-del-poder-judicial/
18. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/09/02/milton-juica-y-el-activismo-judicial-eso-es-un-eslogan-para-afectar-la-independencia-del-poder-judicial/

es una falta de deferencia, hacer un comentario sobre una situación ya resuelta [cada poder del Estado] tiene un grado de competencia privativa en la que los otros órganos no se pueden involucrar […] el Poder Judicial no comenta lo que hacen otros órganos del Estado […] lamentablemente eso se ha perdido […] La causa se terminó, bien o mal, esa es la verdad jurídica y hay que respetarla.[19]

5. Derechos Humanos

Los derechos humanos continuaron bajo el asedio de una política gubernamental represiva, pero la oposición fue capaz de contenerla, legal y simbólicamente.

En materia de pueblos originarios, el "Informe de Observación" del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) detectó graves insuficiencias en los procedimientos y representatividad de la denominada "Mesa de Consenso" sobre reglamentación de la Consulta a Pueblos Indígenas, al "carecer de metodologías claras y consensuadas previamente que permitan generar un diálogo fluido"; improvisación; plazos poco flexibles; carencia de moderador competente e imparcial; ausencia de actas; ausencia y retiro de actores relevantes, por lo que afirmaba que "se cierne la duda de la legitimidad de los acuerdos alcanzados"[20]. Y, a fines de julio, el Relator Especial de derechos humanos de la ONU, Ben Emmerson, instó afirmó que "ley antiterrorista debiera suspenderse hoy"[21].

A pesar de estas críticas, Carabineros continuó haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. Tal fue el caso del ingreso a la Universidad de Chile. Ante lo cual su rector, Víctor Pérez, denunció que tales hechos "han roto una tradición de respeto […] Es inaceptable lo que ha hecho Carabineros en la Casa Central", y anunció denuncias a través de la Dirección Jurídica de la Universidad. Ante esta situación el ministro del Interior replicó: "No necesitamos pedir permiso" [22].

A mediados de junio un video mostró la fuerte represión policial contra un joven participante en protestas estudiantiles, el que quedó inconsciente tras golpes de efectivos de Fuerzas Especiales[23]. La Unicef rechazó públicamente

19. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/11/14/escala-conflicto-entre-la-moneda-y-la-suprema-por-imputados-del-caso-bombas-detenidos-en-espana/
20. http://www.politicaspublicas.net/panel/chile-ddhh/noticias-/1664-indh-informe-01-mesa-consenso.html
21. http://www.theclinic.cl/2013/07/31/andres-chadwick-asegura-que-recomendacion-de-relator-de-la-onu-de-terminar-con-la-ley-antiterrorista-carece-de-fundamento/
22. http://www.elmostrador.cl/pais/2013/06/13/carabineros-ingresa-a-casa-central-de-la-u-de-chile-tras-incidentes-con-manifestantes
23. http://www.theclinic.cl/2013/06/13/video-muestra-brutal-represion-policial-contra-joven-que-quedo-inconsciente-tras-golpes-de-efectivos-de-fuerzas-especiales/

la violencia y brutalidad policial contra secundarios, ante lo cual la ministra de Educación, Carolina Schmidt señaló que se debía investigar si Carabineros actuó en forma correcta. No obstante, el Presidente Piñera, en claro apoyo a Carabineros y su proceder, informó que enviaría al Congreso un proyecto para establecer la identificación preventiva en caso de desórdenes. Por su parte, Carabineros creó un grupo especial de intervención rápida —"Fenix"— para detener a encapuchados.

Y a comienzos de septiembre, las alcaldesas Josefina Errázuriz y Carolina Tohá exigieron a Carabineros la reinstalación de los lienzos que recordaban a desaparecidos puestos en puentes sobre el río Mapocho por parte de la ONG Londres 38, señalando que contaban con su apoyo.

Al uso desproporcionado de la fuerza por Carabineros se sumó la detención de cuatro funcionarios del OS-7 Arica por tráfico de drogas y asociación ilícita, lo que gatilló la remoción de su jefe nacional, coronel Carlos Hidalgo, por la responsabilidad del mando. Las irregularidades alcanzaron a la PDI, donde diez de sus miembros fueron imputados por tráfico, apremios, detenciones ilegales y abusos.

En este contexto, en el mes de julio se registró un alza significativa del índice de victimización en la Región Metropolitana (39,8%), particularmente en sectores de más bajos ingresos, donde el aumento fue de 5 puntos porcentuales.

Un revés a la política de endurecimiento de la represión política fue el rechazo en la Comisión de Constitución de la Cámara a la llamada "ley mi cabo" que penalizaba el insulto a Carabineros, propuesta de ley que ya había recibido críticas por parte de Amnistía Internacional. Igual suerte corrió el proyecto de ley conocido como "ley Hinzpeter", que endurecía las penas a encapuchados, el que fue rechazado por el Senado.

Simbólicamente, la alcaldía de Punta Arenas anunció que apagaría la última "Llama de la Libertad" que ardía durante todo el año y usaría los $3 millones anuales que pagaba en gas en otras prioridades. Inaugurada en 1982, por el centenario de la Batalla de La Concepción, era parte de la iniciativa inaugurada en 1975 por Pinochet en la Plaza Bulnes de Santiago

A su vez, gracias a la sostenida movilización ciudadana, el Concejo Municipal de Providencia reemplazó el nombre de "Avenida 11 de Septiembre" por el original desde su creación: "Avenida Nueva Providencia".

6. Imagen presidencial

El eje central de la estrategia piñerista, de lograr altas aprobaciones ciudadanas, siguió dando pobres resultados.

Si bien el viaje del Presidente a Canadá, EE.UU., Salvador y Panamá, permitió la promoción de inversiones en Chile y exploración de contratos

de importación de gas, la nota que dominó el viaje fue lo que el *Daily Mail* consideró como conducta "vergonzosa" de Piñera al salirse del protocolo y sentarse en el escritorio del Presidente Obama en la oficina oval. Luego "empeoró las cosas" al justificar su actitud diciendo que su hija había nacido en EE.UU.

El sondeo de Adimark de mayo le dio un 40% de apoyo al Presidente, pero en julio mostró una nueva baja. Por su parte, la encuesta de septiembre de la UDP le dio un 33%. Salud, educación y delincuencia siguieron siendo los temas que más preocupaban a la ciudadanía, y la encuesta CEP de octubre le dio solo un 34% de aprobación. No obstante, el nuevo sondeo Adimark de noviembre informó un 43%, superando el 40% observado en mayo. Ninguna de las cifras anteriores fueron cambios muy significativos en comparación con el gran esfuerzo desplegado para remontar en la esquiva aprobación popular.

II. EMPRESARIOS

Políticamente, el empresariado mostró un bajo perfil en ese período electoral, adoptando la tradicional táctica adaptativa ante el nuevo escenario de 2014. Tal situación incluso llevó a la candidata de la Alianza a señalar que "o los empresarios apoyaron a Bachelet o no sé de dónde son las platas [...] Bachelet ha tenido tres veces más dinero que nosotros[24].

Igualmente, la falta de ética de algunos empresarios continuó evidenciándose. Así, el SAG detectó 43 mil kilos de carne contaminada de pollos con dioxinas en una planta de Agrosuper en Requínoa, propiedad de Gonzalo Vial. Antes fue su planta en Freirina en la que reconoció tal situación, pero adujo que los pollos contaminados representaban solo el 0,3% de su producción[25].

A fines de junio, 3.000 afiliados recurrieron a la justicia por alzas AUGE en las Isapres, las que se sumaron a 7.000 presentaciones por aumento de precios base durante ese mes.

CELCO Arauco, del Grupo Angelini, no apeló al fallo del Tribunal Civil de Valdivia que lo condenó por la catástrofe ambiental en el Santuario de la Naturaleza, Carlos Anwandter, del río Cruces, causada por sus residuos tóxicos

---

24. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/11/674-550863-9-evelyn-matthei-o-los-empresarios-apoyaron-a-bachelet-o-no-se-de-donde-son-las.shtml
http://diario.elmercurio.com/2013/11/09/nacional/politica/noticias/CFB10A8F-CE21-4E07-AD18-F885A5EEF965.htm?id=%7BCFB10A8F-CE21-4E07-AD18-F885A5EEF965%7D
25. Véase http://www.diarioreddigital.cl/index.php/medioambiente/48-medioambiente/245-agrosuper-lo-hizo-de-nuevo-sag-detecto-pollos-contaminados-con-dioxinas-en-planta-de-requinoa

evacuados al humedal, y cuyos venenos dieron muerte —en 2004— a especies emblemáticas como el cisne de cuello negro, taguas, huillines y coipos, entre otras[26].

En el área de los medios de comunicación, el dueño del diario *Estrategia*, Víctor Ojeda, fue multado con 15.000 UF por publicar información falsa en 2004, provocando en un día un alza de 419% en el valor de las acciones de Schwager S.A. La información le redituó a Ojeda $183 millones en ganancias. La multa fue solicitada por Habitat, Provida, Cuprum, Capital y Planvital[27].

Algo parecido sucedió en la minería. Entre 2009-2011 se realizaron cientos de transacciones con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, vendiendo, por parte de las "cascadas", algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Julio Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la reventa a las "cascadas" a precios sobre la cotización del momento. Esto generó ganancias para Ponce, amigos y socios, y pérdidas para las "cascadas". León Vial (socio de LarrainVial y vicepresidente de la Bolsa de Comercio), BanChile, Citigroup, Celfin y otros empresarios estaban involucrados[28]. Según informe de la Superintendencia de Pensiones, las AFP tenían US$ 758 millones en las "cascadas" de Julio Ponce y SQM.

Y en el *retail*, producto del fallo de la Corte Suprema en abril, a comienzos de octubre Cencosud comenzó a devolver el aumento unilateral del cobro de las comisiones a más de setencientos mil clientes de este año.

Lloviéndole sobre mojado al candidato a senador por la zona oriente, Laurence Golborne, su hija Ignacia Golborne, candidata a diputada de la UDI por el distrito de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo, apareció en la nómina de beneficiarios con subsidios de interés territorial otorgados a comienzo de 2010. El subsidio no retornable es para la compra de una vivienda económica en Zonas de Renovación Urbana y en Zonas de Desarrollo Prioritario, hasta un total de 200 UF.

Frente a este cúmulo de engaños y abusos, ese mismo mes, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, al inaugurar la cena anual de la industria advirtió que "ser socialmente responsable requiere un comportamiento ético. Es por esta razón que condenamos con fuerza aquellos casos, donde empresarios, víctimas de la codicia o del egoísmo, han traspasado los límites de la confianza y han actuado con falta de ética o derechamente han caído en la estafa"[29].

---

26. Véase http://www.elciudadano.cl/2013/08/22/79343/historico-celco-reconoce-responsabilidad-en-catastrofe-ambiental/
27. Véase http://ciperchile.cl/2013/09/02/corte-de-apelaciones-ratifica-millonaria-multa-a-dueno-del-diario-estrategia/
28. Véase http://www.elmostrador.cl/negocios/2013/10/03/devastador-informe-de-svs-implica-a-los-actores-mas-poderosos-del-sistema-financiero-chileno-en-caso-cascadas/
29. Véase http://www.df.cl/sofofa-condena-casos-de-empresarios-con-falta-de-etica-o-que-han-caido-en-la-estafa/prontus_df/2013-10-16/235442.html

El cierre clasista de la derecha chilena fue comentado por James Robinson, profesor de Harvard invitado al lanzamiento de Espacio Público, quien observó que "la mitad de los presidentes de las 100 empresas más grandes de Chile viene de 5 colegios privados […] instituciones informales que controlan el acceso y el ejercicio del poder político"[30]. En el contexto anterior, tales afirmaciones significaron una fuerte crítica a las élites económicas chilenas.

Finalmente, el endurecimiento político de la derecha en el período postelecciones municipales también se dejó sentir con el cambio del director del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde a comienzos de junio fue removido su director, Arturo Fontaine, y nombrado en su reemplazo el ex ministro de educación y antiguo miembro de la institución, Harald Beyer, a quién Fontaine no había apoyado explícitamente en su accidentada gestión educacional.

De la misma forma, desde el mundo empresarial se criticó abiertamente al Gobierno. Horst Paulmann reprochó que este cuestionara a los empresarios, afirmando que "no puede ser que se les critique, que son la base del país […] El desprestigio que se les ha hecho en el último tiempo es increíble, no es justo, no corresponde, porque el crecimiento de Chile y el trabajo que se ha dado a mucha gente es porque estos empresarios locos y malos, como dicen muchos, han creado algo distinto"[31].

III. PROTAGONISMO CIUDADANO

Aun cuando las movilizaciones sociales no tuvieron la magnitud de años de 2011 y 2012, y a pesar de la alta abstención en la elecciones presidenciales de noviembre, la ciudadanía mostró un nuevo interés político al participar masivamente en primarias presidenciales oficiales y parlamentarias informales, así como en la conformación de diversos grupos que promovieron importantes temas de relevancia política nacional.

1. Primarias

Con la aprobación, a fines de junio, de la ley que estableció la franja televisiva de primarias, se dio inicio a un proceso inédito que sorprendió a los actores políticos.

Las primarias fueron testigo de un nuevo protagonismo ciudadano electoral que se pensaba inexistente dada la baja participación observada en las elecciones municipales y

30. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/08/03/la-mitad-de-los-presidentes-de-las-100-empresas-mas-grandes-de-chile-viene-de-5-colegios-privados/
31. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/11/02/paulmann-reprocha-al-gobierno-de-pinera-por-cuestionar-a-empresarios-y-dice-que-no-puede-ser-que-se-les-critique-que-son-la-base-del-pais/

el voto voluntario. No obstante, en esa oportunidad se observó una notable participación ciudadana cercana los 3 millones de electores —22,6% del padrón electoral—, los que favorecieron en dos tercios a los candidatos de la Nueva Mayoría (71%), con una proporcionalmente mayor participación en comunas ricas en comparación con las más pobres; gran apoyo transversal y regional a Bachelet (73,05%), con un 85,16% en Dichato, la zona más afectada por el maremoto de 2010.

Los principales perdedores fueron los partidos internamente divididos: PR (5,06%) y PDC (8,86%), versus el "centro liberal" de Andrés Velasco (13%). Lo mismo sucedió en la Alianza, la que observó una baja participación, ganando Pablo Longueira a Andrés Allamand por mayor votación en los reductos más fuertes de la UDI: Vitacura, Las Condes y Barnechea. La votación de Allamand (48,62%) en comunas ricas fue menor que la de Longueira (51,37%). Allamand trató de ganar retóricamente la derecha dura, pero perdió la derecha liberal a favor de Velasco. Los resultados también fueron una derrota del Gobierno, su permanente intervención electoral y los ataques a Michelle Bachelet.

Paralelamente, la Nueva Mayoría realizó primarias voluntarias y parciales en once distritos, compitiendo treinta y tres candidatos y convocando a 50.000 personas, las que votaron el 4 de agosto. El Partido Socialista y la Democracia Cristiana se quedaron con cinco escaños cada uno (el primero presentó once candidatos y el segundo siete), mientras que el PPD obtuvo tres (postulaba siete). El PRSD logró imponer a dos de sus cinco postulantes, mientras que el PC triunfó con sus dos nombres.

Con todo, las primarias no fueron utilizadas en todos los distritos en disputa, y la Nueva Mayoría terminó omitiéndose a favor de la candidatura de Giorgio Jackson en Santiago Centro, y le entregó de hecho los cupos a Guillermo Teillier en Lo Espejo y a Camila Vallejo en La Florida, al incluir en su lista candidatos de menor tonelaje. El PC había dado su apoyo sin condiciones a la candidatura de Michelle Bachelet.

2. Cambios al binominal versus Asamblea Constituyente y nueva Constitución

Intentando retomar el control de la agenda pública con la propuesta abandonada en 2010 de cambios al binominal, a inicios de julio senadores de RN y de la Concertación suscribieron un acuerdo para modificar partes del sistema. En enero de 2012, RN ya había suscrito un acuerdo con la DC. Entre los puntos que se pretendían modificar, destacaba el aumento de 120 a 150 los diputados y de 38 a 48 los senadores, donde algunos de ellos serían "nacionales". Los distritos, de 60 pasarán a 28, que tendrían entre 3 y 8 legisladores circunscripciones senatoriales, 40 senadores regionales elegidos por binominal y 8 nacionales elegidos proporcionalmente.

Frente a esa propuesta, el Gobierno intervino con su propia iniciativa consistente en mantener la elección de 120 diputados pero en 30 distritos, que

elegirían un número variable de 2, 4 o 6 diputados. Los nuevos distritos se conformarían mediante la unión, dentro de cada región, de los actuales distritos sin modificar su territorio. Se elegirían 38 senadores en 14 circunscripciones senatoriales que elegirían un número variable de 2 o 4 senadores. Se unirían las circunscripciones senatoriales que actualmente forman parte de una misma región y se contemplaba la posibilidad de presentar listas y pactos electorales y adicionalmente subpactos de partidos políticos, con el objeto de sumar los votos de un mismo pacto y subpacto para la determinación de los elegidos, de una forma similar al sistema vigente de concejales. Los electos en cada distrito o circunscripción senatorial se determinarían según el método proporcional de D'Hondt o de cifra repartidora[32].

Una tercera iniciativa fue presentada por los senadores Eugenio Tuma, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Juan Pablo Letelier, la que establecía un sistema proporcional y rebajaba los quórum respecto a aquellas leyes donde era muy alto.

A pesar del acuerdo Gobierno-RN-Concertación para avanzar en cambios al binominal, y pese al inicial respaldo del presidente de la UDI, Patricio Melero, diputados de su partido se opusieron a la propuesta de La Moneda y, posteriormente, la propia comisión política de la UDI ratificó decisión de no aumentar el número de parlamentarios.

Una respuesta diferente desde la sociedad civil, ahora para el cambio de la *totalidad* del sistema binominal, fue realizada por más de doscientas personalidades, quienes propusieron la realización de un plebiscito que permitiría organizar una Asamblea Constituyente que elaboraría una nueva Constitución[33]. De acuerdo a la encuesta MORI, en junio de 2013, un 64% apoyaba una Asamblea Constituyente. Sin embargo, producto de la fuerte campaña en contra, el sondeo del CEP de octubre solo arrojó un 45% de acuerdo con ella, particularmente entre los adultos jóvenes (50%) y, paradojalmente, en los niveles socioeconómicos altos (55%).

Las diferencias respecto a la necesidad y posibilidad de generar una Asamblea Constituyente, junto a temas como las AFP y la gratuidad universal en educación superior, fueron objeto de divergencias al interior de la Nueva Mayoría. Al respecto, Michelle Bachelet sancionó el tema al ratificar la necesidad de una Constitución "nacida en democracia", pero afirmando: "Quiero que los cambios constitucionales se hagan por la vía institucional. Yo me quedaría hasta ahí"[34], postura que se reiteraría en su *Programa de Gobierno, 2014-2018*[35].

---

32. Véase http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/asi-es-la-reforma-electoral-del-gobierno/2013-07-15/205925.html
33. Véase http://www.manuelantoniogarreton.cl/documentos/2013/plebiscito_florencia.pdf
34. *El Mercurio*, 14 de agosto 2013.
35. Véase http://michellebachelet.cl/michelle-bachelet-presenta-programa-de-gobierno-con-enfasis-en-una-reforma-estructural-la-educacion/

3. Movilizaciones

Dado el creciente protagonismo electoral y la confrontación entre los candidatos, las movilizaciones y protestas ciudadanas no tuvieron la misma magnitud e intensidad de los años anteriores.

Entre mayo y septiembre diversas comunidades se movilizaron en regiones para protestar por las malas condiciones de vida. A fines de mayo fue Quellón que, luego de la muerte de dos mujeres, exigió mejores condiciones en la atención de salud en Chiloé. Le siguió Tocopilla. En Vallenar, Huasco y Freirina se realizaron protestas por la mala calidad del agua.

A fines de junio, la marcha con más de cien mil personas en las calles de Santiago, estudiantes, trabajadores del cobre y portuarios apoyó la decisión de mantener en toma sus colegios y pedir el retiro de los proyectos de ley sobre Educación.

Desalojados de forma pacífica los colegios como lugares de votación antes de las primarias presidenciales, estos acogieron a cerca de tres millones de personas el domingo 30 de junio, lo que debilitó la postura de los estudiantes que aseguraban una masiva fatiga electoral. Manifestaciones y huelgas de empleados municipales y fiscales continuaron hasta las elecciones de mediados de diciembre. De acuerdo a algunos de sus dirigentes, esas protestas tuvieron como interlocutor de hecho a la futura Presidenta, Michelle Bachelet, más que a Piñera.

Como colofón a las diferencias al interior de los estudiantes, se produjo una fuerte diferencia entre liceos emblemáticos y el resto de los liceos por el uso de las notas en el puntaje final para ingreso a las universidades, lo que debilitó aun más al movimiento estudiantil.

Finalmente, las elecciones de las federaciones de alumnos de la Universidad Católica y Chile mostraron en la primera la mantención de la "Nueva Acción Universitaria" (NAU) y, en la segunda, el triunfo de la lista de izquierda "Luchar", ambas declarándose escépticas a los anuncios de la candidata de la Nueva Mayoría sobre una reforma. Anunciaron nuevas movilizaciones para 2014.

IV. LA CRISIS DE LA DERECHA

Además de los pobres resultados en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, en este período se observó una mayor polarización al interior de la Alianza y una reacción defensiva, de trinchera, de la derecha más dura, consistente con la "declaración" de guerra a la Nueva Mayoría por parte de Carlos Larraín después de la destitución de Harald Beyer en la cartera de Educación[36].

36. Véase http://www.cnnchile.com/noticia/2013/04/18/las-consecuencias-politicas-de-la-destitucion-de-harald-beyer

1. El embrollo de la candidatura presidencial

La renuncia del candidato aliancista, Pablo Longueira, a su candidatura producto de una depresión clínica, profundizó la crisis de la Alianza. El veto de la UDI a Allamand como su reemplazante y el interés de Piñera por sacarlo de la cancha para el 2017 derivaron en la nominación de Evelyn Matthei como candidata de la coalición, la que fue apoyada por el 80% de los diputados RN. Con todo, Carlos Larraín rechazó integrar el comité estratégico ampliado de Matthei. Y como una muestra más de las profundas divisiones en la Alianza, en plena campaña y a una semana de la elección presidencial, el propio Carlos Larraín afirmó públicamente: "Fue un error bajar a Golborne"[37].

Las razones del apoyo RN a Matthei se deben encontrar en la mayor cobertura territorial de la UDI respecto a RN; su mayoría de 40 diputados versus los 18 de RN; y la mayor capacidad económica de la UDI para enfrentar campañas caras. De hecho cuando esta gasta 7, RN gasta 3; RN era un partido quebrado que dependía económicamente de Carlos Larrain y muchos resentían tal situación; a lo que se sumó la permanente disputa de liderazgo en RN. Por tales razones, Allamand percibió el mayor rechazo a su persona en la UDI que el de Matthei en RN, al tiempo que se hacía insostenible la insistencia de Carlos Larraín de nominar a Manuel José Ossandón o Francisco Chahuán en reemplazo de Allamand. Todo lo cual llevó a este último a postular como senador por Santiago Oriente compitiendo con Pablo Zalaquett (UDI), quien esperaba triunfar frente a la anteriormente nominada candidata RN, Catalina Parot, ex jefa de campaña de Allamand. Así, al ganar Allamand su senaduría podría constituirse en la principal figura de la nueva oposición en el Senado, lo que lo posicionaría para 2017.

2. Los "40 años" del golpe militar

Al contrario de lo estimado a fines de los noventa, respecto que la transición había terminado y que la fisura dictadura-democracia ya no era el eje ordenador de la política nacional, la conmemoración de los 40 años del golpe militar visibilizó la indeleble fractura que ha dividido la sociedad chilena, la que se ha constituido en un alineamiento político-cultural de alta resiliencia.

De acuerdo con Carlos Ominami, "a la manera de los naufragios, poco a poco han ido emergiendo a la superficie los fragmentos que pueden permitir reconstituir la verdadera historia que condujo al golpe de septiembre del 73"[38].

37. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/11/674-551106-9-carlos-larrain-presidente-de-rnfue-un-error-bajar-a-golborne.shtml
38. Carlos Ominami, "Allende y su infinita soledad", La Tercera, 11 de septiembre 2013.

En efecto, al acercarse los "40 años", surgieron nuevos antecedentes de violaciones masivas a los derechos humanos en dictadura involucrando a importantes personeros de la derecha y Fuerzas Armadas. El caso del general en retiro, Juan Emilio Cheyre —que forzó su renuncia a la presidencia del Servicio Electoral— y los reportajes con altísima audiencia de Chilevisión, con videos inéditos de brutalidad militar[39], fueron hitos paradigmáticos de la permanencia del tema, mostrando el carácter intergeneracional de esta resiliencia. Ante el silencio de los cómplices civiles de la dictadura se generó una fuerte reacción ciudadana demandando transparencia y el fin del pacto de silencio castrense sobre detenidos desaparecidos. En este marco, incluso Agustín Edwards prestó declaración en calidad de testigo ante el juez Mario Carroza, por el financiamiento de la CIA a *El Mercurio* en la causa que este lleva adelante sobre los gestores del golpe de 1973.

Dándole más dramatismo al período, a fines de julio se encontraron en las costas de Caldera los rieles usados para arrojar a ejecutados políticos al mar, gracias a la confesión antes de morir de un militar que participó en los lanzamientos de cadáveres. Este fue el segundo hallazgo de este tipo tras el realizado en Quintero en 2004[40].

En ese contexto, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Fundación Víctor Jara iniciaron la búsqueda de respaldos para un proyecto de ley que degradaría a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. El proyecto modificaba el Código de Justicia Militar y fue presentado por el parlamentario DC, Gabriel Ascencio. Públicamente se solicitó "la degradación militar y la pérdida de todos sus grados, honores y reconocimientos"[41].

La reacción social ante los nuevos testimonios fue de tal magnitud que llegó a impactar a personeros de derecha, como el senador UDI, Hernán Larraín, quien en el lanzamiento del libro *Las voces de la reconciliación*, editado junto al ex senador PS

---

39. A diferencia de Chilevisión, TVN no emitió *Nostalgia de la luz* de Patricio Guzmán, otro capítulo de una larga serie de censuras y problemas con documentales, películas e investigaciones que no se han transmitido —como *El diario de Agustín* de Agüero/Villagrán—, o se han dado en forma incompleta o en horarios de amanecida.

40. "Según declaraciones judiciales de suboficiales y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, entre octubre de 1973 y agosto de 1977, al menos 500 cuerpos fueron arrojados al mar desde helicópteros. Varios declarantes coinciden en que al menos hubo 40 vuelos, con entre ocho y quince cuerpos transportados en cada uno. Los cadáveres eran puestos en sacos, cosidos con alambre y después a cada uno le amarraban un trozo de riel. Cuando se conmemoran 40 años del golpe militar, aún hay familias que nunca supieron del destino de sus familiares". *El Ciudadano*, 3 de agosto 2013.

41. Santiago Escobar, "La locura moral de las FF.AA. y la urgente degradación de Pinochet y Contreras". http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/09/17/la-locura-moral-de-las-ff-aa-y-la-urgente-degradacion-de-pinochet-y-contreras

Ricardo Núñez, pidió perdón por "omitir lo que debía hacer" tras el golpe militar, o el presidente de RN, Carlos Larraín, que declaró: "Debí haber estado sensibilizado" a los derechos humanos "y no lo hice"[42].

Sorprendentemente, este clima se extendió a personeros de izquierda, como el senador Camilo Escalona, quien pidió perdón por haber sido "parte de la polarización en los años previos al golpe [...] Por el grano de arena que involuntariamente yo pude haber colocado en la agudización de las contradicciones, naturalmente que debo pedir perdón"[43]. Declaraciones que fueron contestadas por el ex Presidente Lagos, quien afirmó "no estoy de acuerdo en que hay que pedir perdón por lo que hizo Allende"[44]. Por su parte, el diputado Fidel Espinoza recalcó que "no tenemos por qué pedir perdón si nosotros fuimos victimas del terrorismo de Estado. Nosotros no matamos a nadie, no generamos el miedo. Los que tienen que pedir perdón son los que dirigieron el país en ese tiempo"[45].

Los perdones continuaron incluso en el Colegio de Matronas, por el rol que tuvo el gremio en la dictadura. Por su parte, la Asociación de Magistrados pidió perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y emplazó a la Corte Suprema a "reflexionar" sobre su rol en dictadura[46]. Ante este emplazamiento la Corte Suprema no pidió perdón, pero reconoció la "omisión de jueces de la época" para evitar violaciones a los derechos humanos en dictadura, asegurando que "el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal"[47]. En ese marco, asignó dedicación exclusiva a jueces que investigaban causas de derechos humanos.

Simultáneamente a los pedidos de perdón se revivió la polémica sobre el papel de los partidos integrantes de la Nueva Mayoría en el golpe, producto de lo cual el presidente de la DC criticó las declaraciones del secretario general del PS, Osvaldo Andrade, sobre las responsabilidades demócrata-cristianas, acusándolo de "autocomplaciente", y que sus dichos carecían de "autoreconocimiento de sus responsabilidades", ante lo cual Andrade replicó que su colectividad había hecho la "más feroz autocrítica de su conducta", y que a la DC le faltaba eso: "Creo que intentar

42. Véase http://www.lanacion.cl/larrain-debi-haber-estado-sensibilizado-a-los-ddhh-y-no-lo-hice/noticias/2013-09-08/214532.html
43. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/09/674-540856-9-escalona-pide-perdon-por-ser-parte-de-la-polarizacion-en-los-anos-previos-al.shtml
44. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/09/674-541380-9-lagos-no-estoy-de-acuerdo-con-aquellos-que-creen-que-hay-que-pedir-excusas-por.shtml
45. http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20130904/pags/20130904170656.html
46. *El Mostrador*, 4 de octubre, 2013.
47. Véase http://www.theclinic.cl/2013/09/06/corte-suprema-no-pide-perdon-pero-reconoce-omision-de-jueces-de-la-epoca-para-evitar-violaciones-a-los-ddhh-en-dictadura/

defender la conducta de los partidos uno comete el error de no darse cuenta de los errores cometidos, de los propios también"[48]. A esas declaraciones se sumó el ex diputado DC, Andrés Aylwin, quién declaró: "Patricio [Aylwin] equivocadamente aceptó el golpe"[49].

Finalmente, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, calmando la polémica, estableció que:

> Chile no supo sopesar el gigantesco cambio que significaba pasar de una democracia reducida a una democracia genuinamente de masas y sufragio extendido. Los canales de participación se hicieron estrechos. El pueblo muchas veces pasó a organizarse de manera espontánea, porque en el sistema tradicional tenía poca cabida. Surgieron, incluso, voces críticas a la institucionalidad, llamada con desdén "democracia burguesa". Mientras, del otro lado, las fuerzas conservadoras mostraban renuencia absoluta a cualquier tipo de adaptación del sistema. Esa es una primera lección que debemos extraer. O la democracia se asume en permanente proceso de expansión, o sencillamente los hechos la irán superando.[50]

Ante estas manifestaciones, la reacción de los personeros de la derecha más dura fue de trinchera, como en el caso de Evelyn Matthei, la que declaró: "Yo no tengo que pedir perdón"[51], aun cuando antes había señalado: "El golpe militar es uno de los hechos más traumáticos de la historia de Chile"[52]. Por su parte, Alberto Cardemil declaraba que: "Pedir perdón por lo ocurrido en el régimen militar no aporta en nada"[53], o Iván Moreira, que insistía en que "no hay que olvidar que el 73 eran ellos o nosotros"[54]. No obstante, la candidata de la Alianza se vio posteriormente obligada a declarar que "Nunca se debe usar la violencia para alcanzar el poder [...] las violaciones a los derechos humanos no son aceptables nunca"[55].

---

48. Véase http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-generalista/elmostrador.cl/20130908/noticia.html?id=r8MtMMM
49. Véase http://buscador.emol.com/noticias/Andres+Aylwin
50. Discurso de Michelle Bachelet en acto de conmemoración por los 40 años del golpe de Estado.
51. Véase http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/evelyn-matthei-yo-no-tengo-que-pedir-perdon/2013-08-27/111742.html
52. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2013/07/27/13866/esta-no-sera-una-campana-testimonial-hemos-partido-a-full-.aspx
53. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/09/09/618786/alberto-cardemil-en-las-circuntacias-actuales-no-creo.html
54. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/09/03/moreira-udi-no-hay-que-olvidar-que-el-73-eramos-ellos-o-nosotros/
55. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/09/674-541844-9-matthei-tras-acto-por-40-anos-del-golpe-nunca-se-debe-usar-la-violencia-para.shtml

3. La respuesta de Piñera

En ese contexto, retomando su estrategia *presidencialista plebiscitaria* y separándose de la extrema derecha, Sebastián Piñera se manifestó contra del golpe, pero equiparó la dictadura militar con la crisis política durante el gobierno de la Unidad Popular.

A fines de agosto, y preparando el terreno para la conmemoración de los "40 años", el Presidente hizo fuertes declaraciones, señalando que "hubo muchos que fueron cómplices pasivos" de la dictadura y las violaciones masivas a los derechos humanos, y criticó a la prensa y al Poder Judicial por su actuación durante la dictadura militar[56]. En ceremonia realizada el 9 de septiembre en La Moneda —sin la presencia de los ex presidentes que se marginaron del acto oficial y con solo tres candidatos presidenciales— implícitamente se sumó a los pedidos de perdón indicando que "los que pudimos hacer más por los derechos humanos tenemos una cuota de responsabilidad". No repitió lo de los "cómplices pasivos" y no habló de "dictadura militar" sino de "Gobierno" o "régimen militar", y volvió a endosarle la responsabilidad del golpe a la Unidad Popular, elogiando el proceso de transición como "ejemplar". No obstante, el 4 de noviembre insistió en la existencia de "cómplices pasivos", e implícitamente cuestionando a Evelyn Matthei señaló que fue un "error" votar Sí: "Si hubo civiles que tuvieron poder y tuvieron información y no actuaron con la fuerza que se debió (en materia de derechos humanos), ellos tienen también una cuota de responsabilidad"[57]

Tales declaraciones profundizaron aun más las divisiones entre el Ejecutivo y la UDI, cuyo presidente criticó los dichos de Piñera y lo culpó anticipadamente de una eventual derrota de la derecha[58]. El rechazo de la UDI a Piñera llegó al punto que el diputado Felipe Ward afirmó que no volvería a votar por Sebastián Piñera, en caso que este se repostulara el 2017[59]. Por su parte, Jovino Novoa cuestionó a quienes pretendían "refundar la derecha" y llamó a defender la dictadura de Pinochet. Y el diputado UDI, José Antonio Kast, respondiendo las afirmaciones del ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, señaló que no estaba dispuesto a "hacer la pérdida del gobierno militar"[60].

Un episodio adicional se sumó a los anteriores cuando la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional el

56. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/08/674-540379-9-pinera-y-los-40-anos-del-golpe-hubo-muchos-que-fueron-complices-pasivos.shtml
57. Véase http://www.lanacion.cl/pinera-insistio-en-complices-pasivos-y-en-que-fue-error-votar-si/noticias/2013-11-03/235915.html
58. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/10/06/melero-critica-la-ofensiva-de-pinera-por-conmemoracion-del-golpe-y-lo-culpa-anticipadamente-de-un-eventual-derrota-de-la-derecha/
59. *El Mostrador*, 26 de septiembre 2013.
60. *El Mostrador*, 1 de octubre 2013.

proyecto presentado por los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN), que buscaba otorgar libertad inmediata a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990[61]. En esos momentos el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, en una desafortunada intervención pidió una mirada "humanitaria" para los ex uniformados involucrados en casos de derechos humanos[62], ante lo cual la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos repudió sus dichos y afirmó que este debería ser dado de baja. De esta forma se reabrió el tema del Penal Cordillera, acumulándose los pedidos de su cierre, así como el de Punta Peuco. La senadora PS, Isabel Allende, se sumó a los pedidos de las agrupaciones de derechos humanos, fustigó al Gobierno por los privilegios de esos detenidos, y el ex Presidente Ricardo Lagos pidió el cierre inmediato del Penal Cordillera por violar el decreto de su creación. Ante esta nueva situación, el Presidente encargó al ministro de Justicia detalles del funcionamiento del recinto, lo que fue analizado en el comité político. A su vuelta de Naciones Unidas, donde reiteró su apreciación al proceso pacífico de transición democrática y argumentando la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, anunció el cierre definitivo del Penal Cordillera y el traslado de los condenados a Punta Peuco.

Esta medida enfrentó, una vez más, al Ejecutivo con los partidos de la Alianza. Así, Carlos Larraín rechazó por "inoportuno" el cierre del Penal Cordillera, ya que tal decisión tendría como "efecto colateral" un perjuicio a la campaña de Evelyn Matthei, y presentó una queja por escrito al Gobierno. El presidente de la UDI, Patricio Melero, confesaba que "muchos nos preguntamos si era estrictamente necesario y oportuno en estos momentos"[63], y la UDI en pleno calificó de "error" el cierre. Un inesperado episodio fue el suicidio del general en retiro, Odlanier Mena, recluido en ese penal, en dramática protesta por el trato que ese traslado significaría a su dignidad como oficial superior.

Este conjunto de acciones y reacciones al interior de la Alianza mostraron que al fondo de ellas seguía incubándose la rechazada fórmula estratégica del Presidente de crear una "nueva derecha", lo que volvió al tapete público con la renuncia a RN de su cercano colaborador, Daniel Platovsky, quien formuló la tesis de que el *piñerismo* se rearticularía fuera del partido[64], en claro desafío a la propuesta de Andrés Allamand de crear una "Coalición Popular".

---

61. Véase http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/06/05/602280/comision-declara-inconstitucional-proyecto-que-buscaba-amnistiar-a-condenados-por-delitos-de-lesa-humanidad.html
62. http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-07-14&NewsID=149069&dtB=14-07-2013%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=9
63. *El Mercurio*, 30 de septiembre 2013.
64. *El Mostrador*, 14 de octubre 2013.

V. CANDIDATURAS

Las candidaturas de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei elaboraron sus respectivos programas de gobierno teniendo presente las demandas de sus mundos políticos y electorales. De acuerdo a la encuesta CEP de septiembre-octubre 2013, los principales temas que preocupaban a la población eran la salud, la delincuencia y las drogas, la educación, el empleo y la pobreza. A continuación un apretado resumen de las principales medidas propuestas.

1. Nueva Mayoría

Las propuestas de la candidata Michelle Bachelet, entregadas sucesivamente, fueron sistematizadas en el documento *Chile de Todos. Programa de Gobierno. Michelle Bachelet 2014-2018*, el que fue antecedido por los *50 Compromisos para los primeros 100 días de Gobierno*. En su *Programa de Gobierno*, la candidata separaba las reformas de fondo, las que incluían reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución, de otras políticas sectoriales[65].

a) Reformas de fondo

En las reformas de fondo se destacaban:

i. Reforma Educacional. Propuso "un cambio del paradigma de cómo entendemos la educación, es decir que pase de ser un bien de consumo a un derecho social", lo que implicaría educación gratuita en un plazo de seis años y la creación de dos universidades estatales en regiones de O'Higgins y Aysén; educación preescolar: 4500 nuevas salas cunas para llegar a 90 mil niños de entre 0 y 2 años además de 34 mil cupos nuevos en salas ya existentes para niños hasta 5 años; terminar progresivamente con el lucro y el financiamiento compartido en la educación, mayor

---

65. En las que se destacaban las referidas al programa económico (buena economía y responsabilidad fiscal; energía; ciencia, tecnología e innovación; modernización del Estado; protección y defensa de los consumidores; competencia y transparencia; agricultura; pesca y turismo; minería y recursos hídricos; inversión pública y concesiones; y emprendimiento de micro, pequeña y mediana empresa); protección y oportunidades (salud; trabajo; pensiones; seguridad ciudadana; y justicia); descentralización, territorio y desarrollo (descentralización; ciudad, vivienda y territorio; medioambiente; cultura; deporte; transporte y telecomunicaciones; municipios; defensa; y relaciones exteriores); derechos ciudadanos (superación de la pobreza; derechos humanos; equidad de género; pueblos indígenas; infancia y jóvenes; discapacidad; igualdad y no discriminación y participación e inclusión; adultos mayores).

incentivo al trabajo de profesor y acceso real a capacitación continua; educación superior: garantizar financiamiento, acceso y calidad en 4 años, desde que la ley se apruebe, cubrir al menos a los estudiantes pertenecientes al 70% alcanzando la gratuidad en un máximo de 6 años; congelamiento de los aranceles para universidades, centros de formación técnica e institutos, además de un nuevo sistema de acreditación para las entidades de educación superior[66].

Ante estas propuestas, atemorizados personeros de derecha llegaron a exclamar: "¡La educación no es un derecho!": "La educación, aunque el dogma de moda diga lo contrario, es un bien económico, y no un derecho. Los bienes económicos por definición son escasos y satisfacen necesidades o deseos. La educación claramente cuadra con esa definición"[67]. Por su parte, los representantes de secundarios y universitarios —ACES y Confech—, se mostraron escépticos ante los anuncios de la ex Presidenta[68].

ii. Reformas Políticas. "Chile requiere una nueva Constitución, que no frene los anhelos de cambio de la mayoría y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales. Esta nueva *Carta Magna*, nacida en democracia, debe poner fin al sistema binominal y estar acorde a las necesidades y opiniones de los ciudadanos del Chile del siglo XXI […] Tenemos que introducir mecanismos (...) como plebiscitos y referéndum".

Como se ha visto más arriba, diversos grupos de opinión propusieron un plebiscito para la organización de una Asamblea Constituyente que redactara esta nueva Constitución. Frente a esta demanda, afirmó: "Yo quiero que sea por la línea institucional, que sea participativa, representativa, y que incorpore la historia y tradición de nuestro país. Que no sea un proceso de cuatro paredes"[69].

iii. Reforma Tributaria. Una reforma tributaria para alcanzar alrededor de 3 puntos del PIB para financiar estos y otros cambios, incluía, entre otras medidas, la propuesta de eliminación en cuatro años del Fondo de Utilidad Tributable (FUT); la inclusión de un sistema de depreciación instantánea, con el que las empresas podrán descontar íntegramente de las utilidades la inversión total del año en curso; la exención de impuestos a las personas por las ganancias percibidas con el ahorro que realicen en instrumentos financieros; y modificaciones al sistema simplificado

66. Véase http://www.lanacion.cl/bachelet-profundiza-sobre-educacion-gratuita-garantizaremos-financiamiento-acceso-y-calidad/noticias/2013-06-08/125429.html
67. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2013/06/18/12722/La-educacion-no-es-un-derecho.aspx
68. Véase http://www.elmostrador.cl/dia/2013/10/29/confech-no-le-compra-propuesta-educacional-a-bachelet-y-anuncia-un-2014-con-movilizacion-callejera/
69. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/09/03/nacional/politica/noticias/B42E1321-B356-4FA2-B4AD-3E6EE7C1FF1F.htm?id=%7BB42E1321-B356-4FA2-B4AD-3E6EE7C1FF1F%7D

bajo el cual tributa la PYME —establecido en el artículo 14 de la Ley de la Renta, mediante una ampliación del beneficio a todas las empresas con ventas anuales inferiores a 14.500 UTM, entre otras medidas—.

La propuesta de reforma tributaria fue criticada ásperamente desde el Presidente Piñera hasta los comandos de las precandidaturas de la Alianza, afirmando que esta significaría un freno al desarrollo y estancamiento nacional. Igualmente se escucharon voces críticas desde la oposición. De acuerdo a Carlos Ominami y Eugenio Rivera: "No se aclara, sin embargo, por qué la eliminación del FUT se hará en el cuarto año y no se diseña un cronograma de cierre del FUT en un plazo razonable [y] muy negativo es la propuesta de reducir la tasa marginal del impuesto a las personas de 40 a 35%. ¿Qué sentido tiene rebajarles los impuestos a 23 mil chilenos que ganan más de $ 6.000.000 al mes? Ello no haría más que acentuar el carácter regresivo del sistema tributario"[70].

A estas medidas claves se le sumaron otras, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y creación del Ministerio de Asuntos Indígenas; matrimonio igualitario; despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación; gratuidad para los centros de formación técnica; 30% de presencia de energías renovables al año 2030; revisión de la "Ley Monsanto"; no apoyo a hidroeléctrica en cuenca del río Achibueno; reforma a las FF.AA. y eliminación definitiva del Cosena; programa de reconstrucción efectiva para terminar con los efectos del terremoto de 2010; y transformación del Sernam en Ministerio de la Mujer.

b) 50 Compromisos para los primeros 100 días de Gobierno

El 6 de octubre, después de la conmemoración del triunfo del "NO", Michelle Bachelet anunció 50 medidas para sus primeros 100 días de gobierno[71], compromisos que buscaban "empezar desde el primer día en enfrentar la desigualdad y entregar una mejor calidad de vida a todos los chilenos y chilenas". Estas medidas se sumaron a las reformas estructurales antes mencionadas.

Con un costo de $720 millones de dólares, durante el año 2014, esas medidas se dividieron en 15 áreas temáticas:

- **Educación:** proyecto de ley para "una gran reforma educacional"; listado de localidades donde se implementarán en 2014 las primeras 500, de un total de 4500 salas cuna; inicio de programa de ingreso jóvenes vulnerables

70. Véase http://diario.latercera.com/2013/06/21/01/contenido/opinion/11-139750-9-la-propuesta-de-bachelet.shtml
71. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/10/674-545892-9-bachelet-anuncia-50-medidas-para-sus-eventuales-primeros-100-dias-de-gobierno.shtml

a educación superior; proyecto de ley que crea universidades estatales regionales en Aysén y O'Higgins; convenios que crean los primeros CFT públicos en regiones.

- **Salud:** definición de las comunas donde se implementarán los primeros 132 servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad; firma de convenios con municipalidades para empezar con el fondo nacional de medicamentos para pacientes de enfermedades crónicas en salud primaria; contratación de 33 mil horas médicas semanales adicionales de especialidades, equivalente a la contratación de 750 médicos especialistas; plan de inversiones en salud para el período 2014-2018; convocatoria a equipo de expertos para tener los lineamientos principales de una nueva ley de Isapres.
- **Protección social:** proyecto para pagar desde el 2014 el aporte familiar permanente de marzo de $40 mil por carga a 2 millones de familias; cambio a la ficha de protección social y revisión de la entrega del bono de invierno; definición del cronograma de construcción de 15 establecimientos de acogida de adultos mayores; creación del Consejo Nacional de Infancia.
- **Pensiones:** restitución del pago de la pensión básica solidaria a quienes lo hayan perdido sin que su condición socioeconómica haya tenido un cambio; proyecto que crea AFP estatal; estudio sobre el sistema de pensiones con alternativas "que den solución a los problemas del sistema de pensión chilena".
- **Trabajo:** indicación al actual proyecto de ley del multirut; entrega de implementación de un nuevo programa de formación y capacitación femenina; plan de inserción laboral para jóvenes.
- **Seguridad ciudadana y combate a la delincuencia:** proyecto que aumenta en 4 años, 6 mil los Carabineros y en 1200 la PDI; 11 nuevas comunas donde estará el plan de 24 horas de seguridad ciudadana.
- **Descentralización:** creación de comisión asesora presidencial con medidas específicas para el desarrollo regional y propuestas para el traspaso de funciones a las autoridades regionales; plan de desarrollo de zonas extremas en Magallanes, Aysén y Arica; inicio de estudios para plan de conectividad para Concepción y Antofagasta, y a Valparaíso para integrar ascensores, trollebuses y Merval.
- **Regiones y reconstrucción:** 30 comunas donde se implementará un plan de parques y áreas verdes; definición de comunas que conformarán la segunda parte del programa "Quiero mi barrio"; plan nacional para la tenencia responsable de animales; plan de ciclovías "de alto estándar"; estudios para extensión de metro a Quilicura y San Bernardo; diagnóstico del estado de la reconstrucción de las zonas afectadas por el 27/F.
- **Medioambiente:** proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas; plan de descontaminación para zonas con situaciones críticas; y un delegado presidencial.

- **Cultura:** proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio; definición de ubicación de 15 centros de desarrollo artístico para jóvenes talentosos; recuperación de edificios patrimoniales.
- **Deporte:** ubicación de 30 nuevos centros deportivos; reposición de programa de escuelas de fútbol.
- **Equidad de género:** Ministerio de la Mujer; 24 nuevas casas de acogida; programa "Más sonrisas para Chile".
- **Pueblos indígenas:** proyecto con discusión inmediata que confiere el rango de ministro de Asuntos Indígenas al director de la Conadi; proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas; elaboración de agenda de pueblos originarios en temas como educación, salud, tierra y desarrollo productivo.
- **Agricultura y pesca:** propuesta para situación de deudores de Indap; duplicar fondos para la pesca artesanal; nombramiento de delegado presidencial para los recursos hídricos.
- **Crecimiento:** agenda de productividad, innovación y crecimiento económico a contar de 2014; agenda energética; proyecto de fortalecimiento al Sernac.
- **Reforma tributaria:** proyecto para financiar parte de los compromisos y enfrentar el déficit estructural heredado la administración Piñera.

En página editorial, *El Mercurio* estimó que en las propuestas de su candidatura, "implícitamente, pero de modo inequívoco, se percibe un manto de sospecha sobre las iniciativas privadas, que desde su perspectiva serían el germen de la desigualdad, el abuso y la desprotección [lo que] corresponde a la visión de izquierda tradicional —con ostensibles semejanzas con ideas en boga en los años 60 del siglo pasado—". En materia de medios de comunicación, señalaba que "vista la dramática experiencia de los medios de comunicación en los países latinoamericanos que siguen el modelo chavista, así como lo ocurrido con ellos en la culta Argentina bajo el kirchnerismo, no cabe subestimar el peligro envuelto en lo que se anticipa respecto del 'derecho a una información plural, veraz y trasparente, lo que nos lleva a luchar por establecer las condiciones para democratizar el actual sistema de medios de comunicación, que ha permitido concentrar en pocas personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control de los medios de comunicación masivos [...] también resulta necesario incentivar en los medios de comunicación tradicionales un auténtico pluralismo tanto en los contenidos como en la propiedad'. El lenguaje utilizado deja en la sombra a qué medidas daría lugar lo anterior"[72].

A estas apreciaciones se sumaron las de la consejera de Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, quien en un foro con empresarios afirmó que "el programa de

72. *El Mercurio,* 3 de agosto 2013.

Bachelet es el primer escalón en el establecimiento del socialismo en Chile"[73]. Afirmación contradicha por el Catastro de la Corporación de Bienes de Capital, el que para 2014 anticipaba que se preveían inversiones privadas por US$ 26.859 millones, lo que significaba un alza cercana al 4% respecto del tercer trimestre, correspondiendo al 29% de la cifra global para el quinquenio, dinamismo que podría compensar la desaceleración de la economía para el año[74].

Y días antes del debate televisivo del 10 de diciembre entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, el ministro Cristián Larroulet afirmó que las señales de desaceleración en la economía eran producto de las reformas tributarias y constitucionales anunciadas por la candidata de la Nueva Mayoría. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insistió en que "el programa que se está planteando no atrae la inversión, lo que ha ocurrido es que la inversión se ha desacelerado". El presidente de RN, Carlos Larraín, agregó: "La relación entre inversión y empleo es conocida, si hay más inversión, hay más empleo y hay más pan en la mesa". Y el presidente de la UDI, Melero, desafió "al comando de la Concertación y el Partido Comunista a que me digan una, sólo una propuesta en el programa de Bachelet que ayude a mantener y generar empleo… no hay ninguna. Todo lo que hay desincentiva la inversión y el empleo"[75].

Tales alarmantes predicciones fueron desestimadas por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien afirmó que sería positiva la realización de una reforma tributaria en Chile y que "hay una desaceleración general en toda la región y Chile no está ajeno a esa desaceleración general"[76]. En la misma línea se pronunciaron el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, y el presidente del grupo Falabella, Juan Cúneo[77].

2. Alianza

Las propuestas de la candidata de la Alianza[78], en un primer momento, fueron reactivas a las de Bachelet. Así, Evelyn Matthei señalaba: "No creo en la educación universitaria gratis para todos", quienes ingresan a las mejores carreras son los

---

73. Véase http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-11-27&dtB=29-11-2013%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3
74. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/02/13/economia_y_negocios/_portada/noticias/419E4E6D-553F-40C1-89D5-23556797B710.htm?id=%7B419E4E6D-553F-40C1-89D5-23556797B710%7D/
75. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/09/la-alianza-y-la-moneda-arremeten-con-todo-contra-programa-de-reformas-de-bachelet/
76. Véase http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/12/655-555846-9-cepal-hay-una-desaceleracion-general-en-toda-la-region-y-chile-no-esta-ajeno-a.shtml
77. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/10/awad-y-cuneo-contradicen-tesis-de-larroulet-sobre-efectos-negativos-del-programa-de-bachelet-en-la-inversion/
78. *Un 7 Para Chile. Programa Presidencial Evelyn Matthei 2014-2018. Alianza Por Chile.*

"niños de familias pudientes [...] No estoy dispuesta a gastarme plata de todos los chilenos en eso"; y descartó apoyo al aborto terapéutico: "Me he comprometido a que no impulsaré una ley del aborto".

Sin embargo, con el correr del tiempo y los malos resultados de la campaña llegó incluso a aceptar discutir la despenalización de la marihuana, afirmando que "el experimento uruguayo es interesante". Anunció un ingreso mínimo de $300.000 para el 60% de mujeres más pobres que trabajen jornada completa; sueldo mínimo de $250.000; crear 600 mil nuevos empleos, incluyendo 400 mil trabajos para mujeres; el término de diferencias salariales entre hombres y mujeres; incremento en 22% de la pensión básica solidaria a $100.000 y ampliación del aporte previsional solidario hasta los que reciban $350.000.

En materia de tercera edad propuso la liberación a la tercera edad del pago de contribuciones y subvención al transporte público para los adultos mayores; Sernac autónomo; y que los usuarios podrán terminar unilateral e inmediatamente sus contratos con proveedores de servicios con un solo clic por Internet.

Sus compromisos en salud incluyeron mejorar la atención de consultorios y la cantidad de especialistas; mejoras en salud pública: nuevos recintos; formación de especialistas; 100 consultorios de excelencia con médicos especialistas, tecnología para la toma de exámenes y atención digna y puntual; y que todos los afiliados a FONASA tendrán derecho a libre elección.

Como respeto a toda la clase media, la educación debería "ser pública, de calidad, de mucha calidad", señalando que "hoy muchas familias hacen un tremendo esfuerzo mandando a sus hijos a colegios particulares subvencionados, porque los colegios públicos son malos, y eso no puede ser"; premios a los profesores de excelencia que opten por hacer clases en 1.000 escuelas prioritarias. No se refirió a la educación superior.

En regionalización, dijo: "Queremos que las empresas dejen dineros a las regiones"; regionalización y transporte público en Santiago: "Transantiago ha sido la peor política pública de los últimos cincuenta años y la vamos a arreglar".

Seguridad ciudadana: terminar con la libertad bajo fianza para delincuentes reincidentes; delincuentes y narcotraficantes reincidentes tendrán que ir a la cárcel sin derecho a libertad provisional; castigo a quienes anden con armas en la calle; si inmigrantes cometen delitos, se les pondrá en la frontera; 6 mil nuevos policías con más atribuciones que los defiendan y protejan de sus agresores; prevención y rehabilitación.

Otras medidas incluyeron: mayores costos por "mala fe" en judicialización de proyectos ambientales; penas por retraso en 30 días del pago del IVA a PYME; reforma al sistema de capacitación inspirada en el modelo alemán; y creación de Agencia de Competitividad.

Casi al final de la campaña aliancista, y acercándose al mundo evangélico, la candidata puso una importante nota en el campo valórico afirmando que en el programa

de Michelle Bachelet había "una amenaza fuerte a tener a Dios como centro de la vida", cuestionado el compromiso de la Nueva Mayoría con un "Estado Laico", el que establece que "deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa". Matthei afirmó que esto impediría a las autoridades el que pudieran jurar al asumir sus cargos y afectaría el financiamiento de colegios con educación religiosa[79]. Por su parte, el senador UDI, Víctor Pérez, señaló que Bachelet ponía en riesgo los valores basados en el cristianismo, los que "la candidatura de Evelyn Matthei defiende"[80].

Coincidentemente con tales declaraciones, la 106ª Asamblea Plenaria de Obispos llamó a considerar las posturas valóricas de los candidatos al decidir el voto, tales como el aborto, el matrimonio homosexual y la justicia social.

3. Elecciones y resultados electorales

Las elecciones de noviembre 2013 arrojaron resultados inesperados, a partir de los cuales se pueden elaborar algunas hipótesis sobre su ocurrencia, así como establecer posibles consecuencias políticas.

a. Hechos significativos

Las cuatro elecciones simultáneas de noviembre de 2013 fueron únicas en su tipo. A la primera vuelta de la elección presidencial y a las de senadores y diputados, se sumó la de consejeros regionales. Junto a este inédito dato, el voto voluntario —proyecto enviado por la administración Bachelet y criticado por ella como nueva candidata— puso en cuestión la capacidad predictiva de las encuestas electorales, ya que ninguna de ellas anticipó el resultado del 17 de noviembre. La voluntariedad del voto incrementó la abstención electoral, la que pasó de 40,4% en 2009, con voto obligatorio e inscripción voluntaria, a 51% en 2013, con inscripción automática y voto voluntario. De acuerdo a Marta Lagos, la abstención mostró un claro sesgo socioeconómico aumentando en los sectores de menor educación[81].

Si bien Michelle Bachelet alcanzó cerca del 46,67% de las preferencias, obtuvo 120.679 votos menos que en la primera vuelta de 2009 (3.070.012 votos en 2013

79. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/11/01/matthei-se-aleja-de-votos-de-la-derecha-liberal-y-dice-que-hay-una-amenaza-fuerte-a-tener-a-dios-como-centro-de-la-vida/
80. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/11/02/perez-udi-senala-que-programa-de-bachelet-pone-en-riesgo-valores-basados-en-el-cristianismo/
81. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/11/21/la-elitizacion-del-voto/

y 3.190.691 votos en 2005). Por su parte, Evelyn Matthei logró la peor votación de la derecha desde 1993, en parte, por el voto cruzado (por ejemplo, Bachelet/Ossandón en Santiago Oriente) y la abstención del votante RN. Estas diferencias también se observaron en la elección de consejeros regionales, en la que la Nueva Mayoría logró un 56,5% del total y la Alianza solo un 37,3%.

Otro dato significativo fue la mayor votación obtenida por diputados y senadores respecto a las respectivas candidatas presidenciales, lo que llevó a preguntarse sobre el papel que juega en las campañas la territorialidad del candidato y el caudillismo local, particularmente del parlamentario en ejercicio. En todo caso, estos no traspasaron su apoyo a las candidatas de su respectivo sector.

Desde el punto de vista partidario, la pérdida de dos senadores emblemáticos de la DC, Soledad Alvear y Hosain Sabag, fue un indicador adicional de la pérdida de influencia y del poder de veto de la DC en la coalición opositora. Como contrapunto se tiene que el PC aumentó al doble sus diputados, logrando su plena integración competitiva en el sistema político formal.

Finalmente, la elección como diputados de destacados dirigentes sociales que lideraron las movilizaciones de 2011 y 2012, junto al 75% de los electores que dieron sus preferencias a los ocho candidatos que proponían a lo menos algún cambio sustancial en el país, mostró la decisión mayoritaria del electorado de un decidido cambio de rumbo.

b. Razones políticas

A partir de los datos anteriores es posible esbozar algunas hipótesis respecto de ese proceso.

Una primera explicación radicaría en la decisión del electorado de continuar con el proceso de largo aliento iniciado por las administraciones concertacionistas, el que la derecha había interrumpido. Más que un cambio de ciclo político, se estaría en presencia de la voluntad de continuar con uno interrumpido. De hecho, la elección de Sebastián Piñera fue producto de la derrota de Eduardo Frei más que del triunfo del primero. El uso y abuso del poder; la captura del Estado por parte de privados; la reversión del reconocimiento por parte del Estado de derechos económicos y sociales, redefinido como contraprestaciones a cambio de una amplia gama de bonos; la profundización del rol subsidiario del Estado y de su acción externalizando servicios a proveedores privados; el subsidio principalmente de la demanda en la educación; el reemplazo de los derechos de las mujeres por programas orientados a su habilitación laboral y la redefinición de los temas de género al interior del tradicional esquema de la familia patriarcal, habrían sido algunas de las principales razones por las cuales la ciudadanía favoreció a la Nueva Mayoría y a las candidaturas opositoras. Así, el país volvió a su curso de izquierda moderada después de haber experimentado el fuerte giro de derecha.

De hecho, la encuesta CEP de noviembre 2013 mostró una mayoría absoluta que favorecía temas progresistas, como la nacionalización del cobre, la educación gratuita, reforma tributaria, despenalización del aborto y fin del sistema binominal, aun cuando no se llegó a favorecer la legalización de la marihuana, el matrimonio del mismo sexo y una Asamblea Constituyente. Los temas que se impusieron en la agenda pública fueron la salud, delincuencia y drogas, educación, empleo y pobreza, y la desigualdad como los grandes temas ciudadanos. Aquellos propios de la derecha y del sector empresarial, como por ejemplo la flexibilidad laboral, no fueron ni siquiera tematizados por ese sector.

c. Posibilidades de reformas

Dada la alta votación parlamentaria de la Nueva Mayoría e independientes opositores, la administración Bachelet podrá verdaderamente proponerse la materialización de gran parte de su programa de gobierno. Leyes de quórum calificado (50% + 1 de congresistas en ejercicio), leyes orgánicas constitucionales (4/7, 57%, o 69 diputados y 22 senadores) y reformas a la Constitución (3/5 o 60%), podrían ser implementadas toda vez que pueda organizar un amplio arco, en torno a la Nueva Mayoría, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio: 72 diputados (de 120), y 23 senadores (de 38). Sin embargo, algunas reformas constitucionales[82] requerirían del apoyo de parte de la oposición de derecha para obtener los 2/3 (66%) del Congreso Nacional (80 diputados y 25 senadores). En este esquema, la relación DC-RN volvería a cobrar relevancia. Al respecto, Ignacio Walker, presidente de la DC, afirmaba:

> Tenemos que evitar los cantos de sirena de los modelos refundacionales. El camino es la reforma y el cambio gradual. No queremos renegar de los profundos cambios que introdujeron los gobiernos de la Concertación […] El hecho de tener una mayoría en el Senado y en la Cámara no significa que estemos pensando en pasar la aplanadora. No es esa nuestra vocación y no entendemos así la política, por lo que seguiremos creando vasos comunicantes, puentes y diálogos que sean necesarios para que a Chile le vaya mejor.[83]

82. Capítulos I (Bases de la Institucionalidad), III (Derechos y Deberes Constitucionales), VIII (Tribunal Constitucional), XI (Fuerzas Armadas), XII (Consejo de Seguridad Nacional), y XV (Reforma Constitucional).
83. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/11/23/nacional/politica/noticias/27931228-D80A-4C00-ABE2-BC489064DA6C.htm?id=%7B27931228-D80A-4C00-ABE2-BC489064DA6C%7D

Declaraciones similares tuvo Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, al ser entrevistado sobre el tema:

> Sustentar reformas que van a tener consecuencias para Chile en los próximos veinte años, solamente en una mayoría parlamentaria que puede cambiar en cuatro años más, no habla de una política que piensa en el largo plazo. Espero que el próximo gobierno, independiente de los quórum que tenga en el Parlamento, siga con la política de los acuerdos, consensuando las materias, incorporando la visión de la oposición y la de todos los actores, entre ellos, de la empresa.[84]

Antes estas afirmaciones, Felipe Harboe, recién electo senador PPD, replicaba: "Buscaremos que la Alianza se sume a nuestros proyectos; si no ocurre, ejerceremos la mayoría como corresponde"[85]. Y la futura Presidenta reafirmaba:

> Yo no prometo lo que no se pueda cumplir, sino que me comprometo a sacar las cosas adelante […] Vamos a poder cumplir porque tenemos mayoría en el Parlamento que nos va a permitir llevar adelante los cambios que Chile necesita: la reforma educacional, la reforma tributaria, una nueva Constitución.[86]



En su último período efectivo de gobierno, el Presidente Piñera persistió en su estrategia política inicial, desplegando iniciativas orientadas a fortalecer su *presidencialismo plebiscitario* y ampliando los espacios de lucro y rentas privados, de manera de permitir en un futuro cercano la creación de una nueva derecha a partir de lo que quedaría de ella después de su gobierno.

---

84. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/11/894789/bernardo-larrain-hacer-reformas-estructurales-sin-consensuar-con-la-oposicion-es-malo-para-chile-y-eso-si-es-preocupante
85. http://diario.elmercurio.com/2013/11/24/reportajes/reportajes/noticias/96A42EE5-616E-460A-8C4F-0866B2EA3923.htm?id=%7B96A42EE5-616E-460A-8C4F-0866B2EA3923%7D
86. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/11/24/bachelet-sobre-dudas-a-su-programa-vamos-a-cumplir-porque-tenemos-mayoria-en-el-parlamento/

ANEXO

Cuadro 1

VOTACIÓN ELECCIÓN PRESIDENCIAL

		Votos	%
1 FRANCO ALDO PARISI FERNÁNDEZ	IND	665.414	10,11
2 MARCEL CLAUDE REYES	PH	184.906	2,81
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER	PRI	37.965	0,57
4 MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO	PRO	722.270	10,98
5 ROXANA MIRANDA MENESES	IGUALDAD	83.687	1,27
6 MICHELLE BACHELET JERIA	PS	3.070.012	46,67
7 EVELYN MATTHEI FORNET	UDI	1.645.271	25,01
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS	ECOV	154.593	2,35
9 TOMÁS JOCELYN-HOLT LETELIER	IND	12.830	0,19

Cuadro 2

VOTACIÓN ELECCIÓN DE SENADORES

	Votos	%	Candidatos	Electos
C. NUEVA MAYORIA	2.279.657	50,64	20	12
F. PARTIDO HUMANISTA	156.244	3,47	9	0
H. NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE	176.141	3,91	9	0
I. SI TÚ QUIERES, CHILE CAMBIA	110.259	2,44	4	0
J. ALIANZA	1.710.069	37,99	19	7
L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE	68.626	1,52	6	1

Cuadro 3

VOTACIÓN ELECCIÓN DE DIPUTADOS

	Votos	%	Candidatos	Electos
C. NUEVA MAYORÍA	2.962.583	47,73	118	68
E. PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES	72.329	1,16	26	0
F. PARTIDO HUMANISTA	208.995	3,36	67	0
H. NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE	172.727	2,78	47	0
I. SI TÚ QUIERES, CHILE CAMBIA	338.341	5,45	75	1
J. ALIANZA	2.245.114	36,17	120	48
L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE	206.034	3,31	17	3

Fuente: http://www.servel.cl/ss/Satellite?c=Page&cid=1349388530399&pagename=SERVEL/Page/S_Home_Layout

CAPÍTULO 11

FUTUROS IMPERFECTOS
La derecha en su laberinto y los desafíos de Bachelet

Al terminar su mandato y conduciendo su propio auto, Sebastián Piñera se alejó del Congreso Pleno, iniciando a cuatro años plazo una nueva campaña presidencial.

En este último período, la elección de Michele Bachelet como Presidenta de la República (2014-2018), con un sólido 62,16% de los votos en segunda vuelta electoral, sumió a la derecha en una profunda crisis. La derrota parlamentaria y presidencial percutó significativas escisiones y una profunda reconfiguración de fuerzas en su interior, en medio de la cual emergió con perfiles más claros un agregado sociopolítico liberal-capitalista en busca de un nuevo liderazgo.

Por su parte, la Nueva Mayoría y la Presidenta entrante enfrentaron complicaciones en el proceso de designación de las nuevas autoridades, recibieron las demandas de los sectores empresariales y comenzaron a identificar los problemas heredados de la administración Piñera.

I. GOBIERNO

El Presidente Piñera, preparando el cierre de su gestión y permanencia en la escena política —“voy a seguir en la cosa pública, no voy a volver a la actividad privada”[1] —, formuló una somera autocrítica de su gobierno, continuó desplegando iniciativas legislativas para los pocos meses y días que le restaban, siguió su antagonismo con el Poder Judicial, y enfrentó el desfavorable fallo de la Corte Internacional de Justicia, dejando una herencia de problemas sin resolver a la próxima administración.

1. Véase http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/01/655-559234-9-el-futuro-del-saliente-gabinete-de-empresarios-y-economistas.shtml ; http://www.df.cl/fideicomiso-ciego-el-plan-que-barajan-los-cercanos-a-pinera-tras-el-fin-de-su-mandato/prontus_df/2014-03-04/212334.html

1. Autocrítica de Piñera

En una breve autocrítica, el Presidente Piñera mencionó algunos de los principales problemas que, a su juicio, aquejaron su administración: insuficientes avances en materia de seguridad ciudadana producto de una cadena de instituciones en la que principalmente fallaron los jueces permitiendo una puerta giratoria para los delincuentes; excesivas expectativas generadas después del terremoto sin adaptar la agenda gubernamental; una compleja relación con los partidos de la Alianza; mala relación con los movimientos sociales; problemas de comunicación de los logros del Gobierno a la ciudadanía; divisiones al interior de la Alianza; minoría en las cámaras; y una dura e intransigente oposición[2], a la que calificó de "cerrada, obtusa y malintencionada"[3]. Y, trasluciendo su estilo autoritario y desconocimiento de la política en democracia, agregaba su ignorancia de lo que era gestionar el Estado ya que, de acuerdo a sus palabras, "tienes que gastar mucho tiempo convenciendo a las personas, discutiendo y tratando de crear apoyos mayoritarios para tus medidas. Y eso es algo que no haces en el sector privado"[4]. Sin embargo, ninguna de esas razones permitían explicar la pérdida de 1.479.352 de votos entre su elección en 2010 y la derrota de 2013 (Véase Cuadro 7).

Cuadro 7

PÉRDIDA DE VOTOS DE LA DERECHA, 1989-2013

Elección	Concertación	Derecha	PC	Otros	Total	Conc + PC
1989	3.850.571	3.129.288			6.979.859	3.850.571
1993	4.040.497	2.132.274	327.402	468.777	6.968.950	4.367.899
1999 1a v	3.383.339	3.352.199	225.224	94.366	7.055.128	3.608.563
1999 2da v	3.683.158	3.495.569			7.178.727	3.683.158
2005 1a v	3.190.691	3.376.302	375.048		6.942.041	3.565.739
2005 2da v	3.723.019	3.236.394			6.959.413	3.723.019
2009 1a v	2.065.061	3.074.164	433.105	1.405.123	6.977.753	2.498.166
2009 2da v	3.367.790	3.591.182			6.958.972	3.367.790
2013 1 av	3.075.839	1.648.481		1.861.488	6.585.808	3.075.839
2013 2da v	3.470.055	2.111.830			5.581.885	3.470.055

Fuente: Sergio Fernández Figueroa, "¿Por qué fue masacrada la derecha chilena?", *El Mostrador*, 19 de diciembre, 2013.

2. *El Mercurio*, 29 de diciembre 2013.
3. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/02/917224/Pinera-por-su-mandato-Enfrente-a-una-oposicion-cerrada-y-malintencionada
4. *El Mercurio,* 8 de diciembre 2013.

Con ese escueto análisis de sus cuatro años de gobierno, en el último período de su mandato Piñera pasó a dedicar sus esfuerzos a preparar las condiciones para su relanzamiento político en 2017. Así, en reunión en Cerro Castillo junto a diputados electos y en ejercicio, alcaldes y consejeros regionales, explicó algunas funciones de la fundación que crearía después de dejar el Gobierno, compuesta en su mayoría por ex colaboradores al gobernar, y que estaría al servicio de los legisladores y dirigentes del sector con asesorías legislativas, legales y administrativas, señalando que tenía en carpeta cincuenta proyectos de ley para ser presentados en el próximo período legislativo. Igualmente, "instó a sus invitados a formar una bancada de parlamentarios menores de 45 años con representantes de todo el sector. Una de las misiones que tendría el grupo sería la de defender el legado de su gobierno"[5]. En apoyo de esa cohorte de colaboradores, ex candidatos a parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli, y a pocos días después de perder en los comicios, estos fueron contratados a honorarios —la llamada por la oposición "beca Piñera"— en distintas reparticiones públicas[6].

En esta misma línea, informó que no volvería al mundo de los negocios y que dejaría su fortuna en fideicomisos en los que decidiría un comité ejecutivo integrado por su hijo Sebastián, el abogado Fernando Barros y su amigo José Cox[7].

En ese contexto, Adimark informaba que en enero de 2014 Piñera salía del Gobierno con un 49% de aprobación ciudadana, su mejor resultado desde 2010.

2. Iniciativas

Continuando con la política de expandir el mercado, el lucro y las rentas privadas, durante el mes de diciembre el Ejecutivo cambió el plan regulador de Santiago incorporando tierras agrícolas a las urbanas, beneficiando a empresas como Bodegas San Francisco (Sergio Barros Ruiz-Tagle y familia Sylberberg), las firmas inmobiliarias PY (Pérez Yoma), Esepe (familia Schneider), Queylen y Avellaneda, CCU, o la viña RR Wine, algunas de los cuales ya tenían planes maestros o se aprestaban a buscar socios para destinar tales predios a uso habitacional.

El mismo día, Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sofofa, declaraba que "el estatismo fracasó", y Lucas Sierra, director interino del CEP, afirmaba que "las personas siguen pensando que el progreso depende del esfuerzo personal

5. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/12/674-555895-9-pinera-da-detalles-de-su-fundacion-y-convoca-a-seminario-a-parlamentarios.shtml
6. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/02/10/se-extiende-la-beca-pinera-14-candidatos-perdedores-de-la-alianza-fueron-recontratados-en-el-estado
7. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/01/12/_portada/_portada/noticias/7F05EA82-9031-41B6-93B8-772A358CC254.htm?id=%7B7F05EA82-9031-41B6-93B8-772A358CC254%7D

en la medida que hay igualdad de oportunidades, mucho más que del trato asistencialista del Estado"[8].

Con esa inspiración, en un decreto emitido por el Ministerio de Vivienda y publicado el pasado 12 de diciembre en el *Diario Oficial*, se modificó y flexibilizó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que despertó la crítica del Colegio de Arquitectos y decanos de Arquitectura, quienes advirtieron que de acuerdo al decreto "un hospital, torre de oficinas o un mall podrá instalarse en medio de un barrio residencial, con acceso por calles estrechas, siempre que esté relacionado con una vía troncal o expresa ubicada a 300 metros de su acceso vehicular [...] contrario a los conceptos más elementales de la planificación urbana [introduciendo] gran incertidumbre respecto del destino de barrios residenciales". Al respecto, Mathias Klotz, señaló: "Aquí hay intereses inmobiliarios y de especulación clarísimos [...] Literalmente, donde podíamos hacer casas, a contar del 12 de diciembre podemos hacer estadios de fútbol o centros comerciales [...] ya pueden haber comenzado a pedirse permisos a las direcciones de obras (municipales), y la autoridad no tiene ninguna herramienta ni ningún argumento para negar un permiso si cumple con la legislación vigente"[9].

Fortaleciendo a las empresas constructoras, a fines de diciembre, el Gobierno vía Decreto Supremo publicado el 24/12/13 en el *Diario Oficial*, permitió que los proyectos inmobiliarios que se ejecuten en zonas de latencia o saturada de contaminantes del país no sean evaluados ambientalmente. En el mismo período se informaba un aumento, desde 2011, del 43% en los subsidios habitacionales para familias de clase media[10], y en enero de 2014 lanzó "Chao Suegra", aporte mensual con un tope de 3 UF y por un plazo máximo de 5 años para ser utilizado en el pago de arriendo máximo de $200.000[11].

Culminando su política libremercadista, en febrero de 2014 Piñera firmó el acuerdo de libre comercio de la Alianza del Pacífico, entre Chile, Colombia, México y Perú, dejando en cero el 92% de los aranceles.

Junto con su política privatista, a fines de diciembre el Gobierno continuó con grandilocuente estrategia comunicacional presentando nuevas iniciativas, como la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión; los compromisos relativos a la igualdad de oportunidades, participación social y accesibilidad; reactivó la ley de fármacos; se refirió a la interconexión energética entre el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la ley del lobby y la

8. *El Mercurio,* 8 de diciembre, 2013.
9. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/30/arquitectos-alertan-sobre-nuevo-decreto-del-minvu-aqui-hay-intereses-inmobiliarios-clarisimos/
10. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/12/09/nacional/nacional/noticias/0583C194-A139-46B0-9116-8F5901E97D69.htm?id=%7B0583C194-A139-46B0-9116-8F5901E97D69%7D
11. Véase http://www.minvu.cl/opensite_20131210112618.aspx

de probidad pública (que establece el fideicomiso ciego y la declaración de patrimonio e intereses); la eliminación del alza de contribuciones al adulto mayor […]; el veto introducido a la Ley de Televisión Digital (observaciones a puntos como la multa para los concesionarios de las frecuencias, la definición del concepto "pluralismo", la integración del CNTV, y la cantidad de horas de programas culturales); el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP); la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos; el control preventivo de identidad; [la modificación de] la Ley de Transparencia (con nuevos plazos y procedimientos); la prórroga del programa que revalúa los bienes raíces agrícolas en zonas afectadas por la sequía; y la creación de nuevas competencias para gobiernos regionales"[12]. Posteriormente anunció suma urgencia a dos proyectos de educación y a la eliminación del 6% a los jubilados de las FF.AA.

Intentando compensar las deficiencias en materia de seguridad pública (leve disminución de la victimización, pero aumento de la percepción de inseguridad)[13], a comienzos de enero el Gobierno creó un banco de datos criminales para coordinar mejor el combate a la delincuencia, y anunció un proyecto de institucionalidad permanente para salario mínimo. Un avance importante en materia de protección al consumidor fue la implementación de la Ley Nacional de Medicamentos, o Ley de Fármacos, gracias a la cual se pusieron a la venta dosis unitarias; los médicos deberán prescribir los medicamentos tanto por su nombre como por su denominación genérica; permitió la instalación de góndolas en todos los locales y la obligatoriedad de contar con todos los medicamentos bioequivalentes en su inventario. Lo mismo ocurrió con el veto presidencial a la eliminación del preservantes de vacunas multidosis Tiramisol en curso en el Congreso. La aprobación de esa ley habría significado un enorme costo al fisco y cuantiosas ganancias a los laboratorios extranjeros. Y a menos de un mes de terminar su mandato el Presidente anunció el envío de cinco proyectos más al Congreso: el veto a la ley de TV digital, el control preventivo de identidad, probidad en la función pública, el programa ChileAtiende y el nuevo Código Procesal Civil. Para la última semana legislativa de su mandato lo redujo a tres prioridades: TV digital, control preventivo de identidad y el AVP (Acuerdo de Vida en Pareja). Finalmente, derogó la norma que obligaba guardar correspondencia digital por seis años y, en su último día como Presidente envió tres proyectos al Congreso: la ley corta para el pago retroactivo por bono de colación a los trabajadores portuarios, una mejora del pilar solidario de pensiones de las Fuerzas Armadas y la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Educación Superior.

---

12. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/01/02/nacional/politica/noticias/D26C9070-41EB-4F53-BEB6-A84F0C52DC7B.htm?id=%7BD26C9070-41EB-4F53-BEB6-A84F0C52DC7B%7D
13. Véase http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-03-05&dtB=05-03-2014%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3

En ese mismo período sufrió un serio revés cuando, contradiciendo la denuncia gubernamental de tres mil falsos exonerados, la PDI informó que solo indagaría a setenta y un personas por entregar documentos adulterados, y no pudo alinear a todas sus fuerzas en el Senado al aprobarse la idea de legislar sobre el AVP[14].

Igualmente, el Rector de Universidad de Chile, Víctor Pérez, mostró la inhibición de la ministra de Educación para ordenar una investigación formal por lucro del grupo Laureate y sus universidades, asesorado por Gonzalo Molina, socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz y esposo de la ministra Carolina Schmidt. Ante este cuestionamiento el ministerio de Educación inició procesos formales de investigación a cuatro universidades: Andrés Bello, de Las Américas, Gabriela Mistral e Iberoamericana. Tales investigaciones fueron consideradas "tardías y parciales" por el rector Pérez.

3. Conflicto con el Poder Judicial

Las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se prolongaron hasta el final del período Piñera. Así, frente a las reiteradas críticas del Presidente a "la puerta giratoria" de los delincuentes ya que los jueces "no están aplicando la ley de acuerdo a su espíritu y letra", del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien polemizó por la absolución del comunero mapuche Daniel Melinao por la muerte de un Carabinero, y de un conocido columnista de la derecha que llegó a declarar que en la zona mapuche "no hay Estado de derecho"[15], Sergio Muñoz, el nuevo presidente de la Corte Suprema, calificó tales expresiones como "políticas, generales e infundadas"[16]. Y en la inauguración del año judicial 2014 insistió en que "no está a la altura de la autoridad emitir pronunciamientos descalificatorios", solicitando respetar la independencia de los poderes del Estado, ya que cuando los cuestionamientos vienen de "autoridades estatales el tema es más sensible, puesto que es posible que ello redunde en respuesta de parte de los jueces en los mismos términos e intensidades que las críticas, con lo cual se produce un espectáculo indecoroso en el Estado"[17].

El desborde de declaraciones sobre el conflicto mapuche llegó al punto que la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, Afirmó: "Aquí falta mayor diligencia

---

14. Votaron en contra: Juan A. Coloma (UDI), Alejandro García-Huidobro (UDI), José García (RN), Carlos Kuschel (RN), Carlos Larrain (RN) y Ena Von Baer (UDI).
15. Véase http://diario.latercera.com/2014/01/12/01/contenido/opinion/11-155460-9-deficit-de-estado-de-derecho.shtml
16. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/01/07/nacional/_portada/noticias/6E8CA15F-E6B3-4007-87E4-6EFB71DC21D8.htm?id=%7B6E8CA15F-E6B3-4007-87E4-6EFB71DC21D8%7D
17. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/03/01/presidente-de-la-suprema-sale-al-paso-de-criticas-de-chadwick-y-dice-que-no-esta-a-la-altura-de-la-autoridad-emitir-pronunciamientos-descalificatorios/

para llegar finalmente al resultado que todos buscan, que es la pacificación de La Araucanía"[18]. Desafortunada referencia a la campaña realizada por el Ejército entre 1860-1883, que dejó miles de mapuche muertos. Y ante las afirmaciones del Presidente, sobre que existiría terrorismo en la zona, Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como "terroristas" mientras se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche[19].

Antes estos ataques, y reiterando su independencia como poder del Estado, la Corte Suprema acogió el recurso para conocer razones por las que TVN no exhibió *El diario de Agustín*, de los realizadores Ignacio Agüero y Fernando Villagrán.

4. La Haya

El fallo de la Corte Internacional de Justicia, si bien reconoció el Hito 1 como frontera del suelo, subsuelo y mar entre ambos países, entregó a Perú una parte de la zona económica exclusiva bajo soberanía chilena. Esta decisión, calificada como "pérdida dolorosa" por la Presidenta Bachelet, reavivó las críticas tanto de la oposición como a sectores oficialistas a las "cuerdas separadas" (Gabriel Gaspar, Ignacio Walker, Juan Emilio Cheyre)[20] y a la "forma mercantil de hacer política exterior" (Marco Enríquez-Ominami)[21].

Con todo, el presidente peruano Ollanta Humala, abriendo un nuevo litigio bilateral, señaló que "el fallo no se pronuncia sobre el límite terrestre y no prejuzga ni afecta la frontera terrestre del Perú que se inicia en el punto Concordia conforme a lo establecido en el Tratado de 1929"[22].

---

18. Véase http://www.elciudadano.cl/2014/01/07/101493/los-medios-y-la-nueva-pacificacion-de-la-araucania/
19. "Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje", detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro. Véase http://radio.uchile.cl/2014/02/12/agente-infiltrado-de-carabineros-confiesa-autoria-de-atentados-incendiarios-en-la-araucania
20. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/14/gaspar-critica-duramente-la-tesis-de-las-cuerdas-separadas-de-moreno-y-dice-que-chile-es-mas-que-lan-y-falabella/;http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/17/ignacio-walker-dice-que-fue-un-error-condecorar-a-alan-garcia-y-se-suma-a-criticos-de-las-cuerdas-separadas/ ; http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/20/cheyre-es-un-error-tener-con-peru-una-cuerda-privilegiada-de-tipo-comercial/
21. Véase http://www.biobiochile.cl/2014/01/27/me-o-dice-que-fallo-de-cij-representa-la-derrota-de-una-forma-mercantil-de-hacer-politica-exterior.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiobiobio+
22. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/02/674-564120-9-el-triangulo-terrestre-las-posturas-de-chile-y-peru-tras-el-fallo-de-la-corte-de.shtml

Frente a esta situación, y teniendo en mente la demanda boliviana ante La Haya, el Presidente informó que pediría estudios a favor y en contra del retiro de Chile del Pacto de Bogotá.

5. Herencia

Una difícil herencia económica dejó la administración Piñera al Gobierno de Bachelet: menos ingresos fiscales para cumplir primeras metas del programa, sin recursos para un nuevo censo, 50 mil subsidios entregados sin financiamiento ni terrenos para su construcción, presupuesto 2014 con baja importancia a la innovación, y una serie de contratos suscritos por el Ejecutivo dejando dineros comprometidos para los próximos años[23]. De acuerdo al senador Camilo Escalona, el Gobierno entregó el país con una:

> Vergonzosa postración de la salud pública, la agudización de la delincuencia y el debilitamiento de la seguridad pública, la exacerbación del tema indígena y de la demanda mapuche, el conflicto latente de decenas de miles de familias con subsidios de vivienda sin casas que los respalden, el reducido margen del presupuesto del año en curso, el aumento de los abusos de AFP e ISAPRES y de los servicios telefónicos, de transporte y bancarios durante los meses de verano, la desprotección de la pesca artesanal y el incremento de los atropellos en el sector laboral. En suma, el conjunto de un fardo de injusticias y desigualdad que se desconoce por mediciones de opinión hechas a la medida del gobernante.

Y responsabilizó a la Nueva Mayoría por no haber

> ejercido la crítica política suficiente ante el artificial exitismo gobiernista. Pareciera ser que las preocupaciones se subsumen en el exclusivo ámbito de las postulaciones a futuros cargos en el aparato administrativo del gobierno que pronto asume. Hay mucha ansiedad que conduce a errores. Por ello, se debe reconocer que dejar que desde La Moneda se instale un balance hecho a imagen y semejanza de sus intereses futuros, puede devenir en un tiempo breve, en un pesado lastre para las iniciativas de las propias nuevas autoridades. Se está dejando pasar un diagnostico artificial de la realidad, acomodado a la estrategia del que se va en marzo y quiere volver en cuatro años más.[24]

---

23. Véase http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140113/pags/20140113164409.html
24. Véase http://www.camiloescalona.cl/noticias_nacionales_detalle.php?id=1030

II. EMPRESARIOS

El mundo empresarial reaccionó proactivamente frente a la elección de Michelle Bachelet. Así, avanzaron en el acuerdo CUT-CPC y formularon una serie de demandas sectoriales.

1. Acuerdo CUT-CPC

Adaptándose a las nuevas condiciones políticas nacionales y avanzando con el trabajo realizado en 2012, la CUT y la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) elaboraron un acuerdo laboral base que contemplaba la protección del empleo en tiempos de crisis, seguridad laboral, avances en la reforma al seguro de cesantía, subsidio a la contratación del primer empleo y de quienes han estado mucho tiempo sin empleo, fin del multirut, salario mínimo, empleo femenino, y sindicalización y negociación colectiva. Posteriormente incorporaron temas como: el respetar el piso establecido en el contrato colectivo previo, terminar con los grupos negociadores, el reconocimiento de la titularidad de los sindicatos y la entrega de beneficios a aquellos trabajadores que se incorporan después de la negociación colectiva, mayor protección ante el desafuero sindical (la ley no especifica las razones), y la posibilidad de aumentar las horas sindicales (mayor que 6 horas a la semana) pagadas por la empresa[25]. Desde la CPC afirmaron que "el acuerdo con la CUT se acerca al programa de Bachelet", por lo que podría tener rápida aceptación del Gobierno, constituyéndose en la hoja de ruta de la nueva administración.

2. Demandas sectoriales

Por su parte, los gremios empresariales sectoriales comenzaron a plantear la necesidad de avanzar en una agenda público-privada. Daniel Hurtado, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), indicó que uno de los desafíos más relevantes para el próximo Gobierno era equilibrar las demandas de cambio con el fortalecimiento de aquellos aspectos que han permitido las transformaciones y progresos del país. Y la clave para superar estos problemas —como la falta de energía—, era el trabajo público-privado. Compartía estas apreciaciones el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien señaló que para avanzar hacia el desarrollo se debe trabajar

---

25. Véase http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/02/7-38316-9-cpc-y-cut-instalaran-mesa-de-trabajo-en-marzo-para-afinar-alcances-de-acuerdo.shtml

unidos: "Nos interesa trabajar en conjunto las materias que el Gobierno quiere desarrollar en un esquema de una buena relación pública-privada, para entregar nuestra opinión y debatir sobre cómo se pueden ir generando los cambios que la presidenta ha planteado".

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, manifestó que su organización "está dispuesta a colaborar con las autoridades que se designen para que la industria minera siga siendo el gran pilar del desarrollo. Para su éxito han sido claves las garantías de estabilidad y confiabilidad de las reglas del juego que ha otorgado el Decreto Ley 600 a la inversión extranjera", decreto que el Programa de Gobierno de Bachelet contemplaba eliminar. Otros aspectos que inquietaban a la Sonami era la pérdida de competitividad, a raíz del aumento de costos y la disminución de los niveles de productividad, y la energía, que mostraba los valores más altos en la estructura de costos de la industria, lo que ha conducido a "una incertidumbre que castiga la evaluación de nuevos proyectos". Por ello llamaron a las autoridades entrantes a mejorar la matriz energética, preferentemente con energías limpias, sin desechar ningún tipo de generación, como la nuclear. Igualmente, demandaron certidumbres en el acceso al agua. Llamaron a que la nueva normativa ambiental no entrampe los nuevos proyectos y que se alcance un equilibrio con las comunidades. Este gremio también pidió mayores incentivos para incrementar los procesos de exploración, así como extender las ventajas competitivas del sector a la industria proveedora[26].

Finalmente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, explicitó su agenda sosteniendo que el mayor desafío a corto plazo "será mantener el ritmo de crecimiento del país y fortalecer la competitividad. Para ello, indica que se requieren avances concretos, especialmente en materia energética, en la agilización para la tramitación de proyectos de inversión, y elevar la eficiencia en los servicios públicos vinculados a las operaciones de comercio exterior, como puertos, aduanas, Servicio Agrícola Ganadero. Y, Cristián Allendes, presidente de Fedefruta, indicó que "los gobiernos centrales tienen que ver la fruticultura y al mundo del agro como herramientas para una verdadera regionalización"[27].

III. ALIANZA

Tal como la derrota de la Concertación en 2010, que la sumió en una profunda crisis, el fracaso de la derecha (Matthei, 37,83%) fue igualmente multifactorial. Esta

26. Cfr. diario *La Tercera*, 18 de febrero de 2014.
27. Para estas afirmaciones, ver diario *La Tercera*, del 17 de diciembre 2013.

produjo una "falla geológica de desgarre" en que las tendencias liberales incubadas en las últimas décadas en la derecha comenzaron a desprenderse de los componentes más conservadores de ese sector. Al respecto, Hernán Larraín Matte, ex asesor del Presidente Piñera, ex vocero del comando de Evelyn Matthei y presidente de *Horizontal*, quien se ha propuesto aportar al desarrollo de una derecha moderna[28], señalaba que se pueden:

> visualizar dos centroderechas: una tradicional, pro *statu quo*, conservadora, economicista y neoliberal, versus una derecha moderna, pro cambio social, abierta, diversa y democrática. Y puedes ver a un mundo que defiende un proyecto político heredado de la dictadura y la protección de ese modelo, versus la conformación de una centroderecha moderna, cuyo principal arquitecto ha sido Sebastián Piñera y este gobierno, que le ha dado legitimidad democrática al sector; que le ha permitido al país retomar el crecimiento, el empleo y el avance en diversas áreas sociales; y que le ha permitido a toda una generación entrar al mundo de lo público y valorar el Estado.[29]

Este proceso de "desgarre" puede analizarse desde dos perspectivas complementarias, a nivel político-partidario y político-societal.

1. Nivel político-partidario

A nivel político-partidario esa crisis tuvo razones institucionales generadas por el sistema binominal y por las contradictorias relaciones nunca resueltas entre el Ejecutivo y los partidos de la Alianza.

a. Binominal

Este "desgarre", como veremos más adelante, tuvo como componentes institucionales asociados la renuncia a RN, a fines de diciembre, del díscolo senador por Aysén, Antonio Horvath, y la creación del referente regionalista Democracia Regional —junto al senador reelecto por Magallanes, Carlos Bianchi, y Carlos Cantero por Antofagasta—. Y replicando la emergencia de Evópoli, se constituyó Amplitud, escisión de los diputados Karla Rubilar, Joaquín Godoy, Pedro Browne y la senadora Lily Pérez, todos de RN.

---

28. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/12/674-556344-9-hernan-larrain-matte-la-candidatura-de-matthei-pudo-haber-tenido-una-sintonia.shtml
29. Véase http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2013/03/19-11297-9-la-nueva-campana-de-hernan-larrain-matte.shtml

Si bien la creación de estos "terceros estratégicos" tuvo explicaciones políticas e ideológicas, también fue incentivada por el sistema binominal, el que generó motivaciones en la derecha para romper la díada RN/UDI, creando agrupaciones autónomas que dentro o independientes de ella adquirirían una mayor capacidad de negociación frente a las maquinas electorales mayores. Sin un sistema de representación proporcional corregido, este sistema "rentista", según Genaro Arriagada, "destruye la respetabilidad de la política", en la medida que "envolviéndose en la bandera de la patria, declarando no tener otros motivos que la defensa de la libertad de pensamiento", negocian su apoyo a cambio de "proyectos para la región o decididamente se adentra en la corrupción"[30].

b. Crítica al Ejecutivo

Junto a este incentivo institucional, la crisis de la derecha tuvo causas políticas radicadas en el Ejecutivo. Así, la primera crítica la proporcionó el electo senador por Santiago Poniente, Andrés Allamand, el que denunció el:

> déficit político y [los] graves errores comunicacionales […] la desatención del debate de ideas en la sociedad. El gobierno asumió que simplemente atiborrando a la ciudadanía con cifras de buen desempeño económico iba a mantener su confianza y no observó la profundidad de los debates ideológicos que surgieron en la ciudadanía y luego no reaccionó adecuadamente ante ellos. Por ejemplo: hace cuatro años, plantear la ilegitimidad de la Constitución era apenas el planteamiento de una minoría radicalizada […] La segunda razón tiene que ver con el menosprecio al rol de los partidos en una democracia, y aquí no hay que utilizar eufemismos: el gobierno de Piñera menospreció a los partidos desde el día uno, y para reafirmar tal concepto, basta simplemente recordar la conformación del primer gabinete, donde prevalecieron los técnicos y se despreció la experiencia política. Tercero: la nueva forma de gobernar se desprestigió muy rápido producto de dos fenómenos: la grandilocuencia con que se abordaron las políticas públicas y la efectividad de la llamada letra chica […] Y cuarto: desde el día uno hubo expectativas que no se pudieron satisfacer, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, que había sido una de las promesas fundamentales del actual Presidente.[31]

Desde los partidos, RN insistió en el error del Ejecutivo de haber postergado a los partidos en la gestión pública, y en su documento "RN y la derecha que queremos" estableció que:

---

30. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2014/01/18/18744/El-transfuguismo-y-el-camisetazo.aspx
31. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/12/674-557317-9-andres-allamand-el-principal-responsable-del-fracaso-electoral-es-pinera.shtml

> Lo que realmente ocurrió es que claudicamos en la defensa de nuestro ideario […] debemos recuperar la nuestra de centro derecha, moldeada durante la Transición y anclada en una historia de respeto por la democracia representativa, las instituciones republicanas y la virtud cívica […] fortalecer su vocación de centro […] No ser frontón donde rebotan todos los cambios, políticas públicas o modernizaciones […] Ni trinchera, para quedarse defendiendo un tercio del electorado, del Congreso, y transformarnos en actores de veto, [debemos tener] vocación de mayoría, [defender] el interés público con fuerza, lo hace desde la convicción más profunda de que la libertad, el mérito personal y la igualdad de oportunidades [RN] no defiende intereses particulares [defiende] tolerancia y el respeto una opción sexual diferente adultos mayores y a los pueblos originarios [respeto] las autoridades y a las instituciones [propicia un] eventual acercamiento con la Democracia Cristiana, superando las fronteras que dibujó el plebiscito del año 88 […] una reforma al régimen político, [fuimos] un poco incoherentes y demasiado tecnócratas, [debemos] defender el interés público, sin doble estándar frente a los abusos a los consumidores, y al mismo tiempo resguardar al motor de Chile: nuestros emprendedores […] La libertad, el mérito y el esfuerzo son valores esenciales.[32]

Como forma de resolver la crítica situación en que quedó RN se multiplicaron los llamados a la DC, y en un texto del vicepresidente RN, Cristián Monckeberg, se propuso un giro al centro acercándose a los demócrata-cristianos, a lo que Francisco Chahuán replicó llamando a impulsar una federación de partidos de centro. Ante estas declaraciones, el presidente DC, Ignacio Walker, reafirmo: "No hay ninguna posibilidad de construir una coalición política con RN […] Nosotros tenemos un domicilio político conocido, hemos sido oposición a un gobierno de derecha, somos parte de la Nueva Mayoría, vamos a ser un partido de gobierno con Michelle Bachelet, pero desde ahí se puede conversar con todo el mundo"[33].

Sorprendentemente, reaccionando a estos llamados de la derecha, Camilo Escalona apeló a la unidad de la Nueva Mayoría y a evitar la "pretensión sectaria", planteando que no se podía desatender "la estrategia de un viraje hacia el centro que se sugiere a RN por el diputado Cristián Monckeberg"[34].

El análisis de la UDI fue algo más pobre, afirmando que el Presidente fue "cómplice" de la derrota presidencial, además de exhibir un déficit político característico de su gestión, y se autocriticó por haberse separado de las bases ciudadanas.

---

32. Véase http://static.latercera.com/20131230/1875198.pdf
33. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/31/ignacio-walker-no-hay-ninguna-posibilidad-de-construir-una-coalicion-politica-con-rn/
34. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/01/04/nacional/politica/noticias/F9A917B2-742F-4C4F-8CAB-473F77C073B4.htm?id=%7BF9A917B2-742F-4C4F-8CAB-473F77C073B4%7D

2. Nivel político-societal

A nivel político-social, la crisis de la derecha se relaciona con sus crecientes limitaciones ideológicas, y del efecto que está teniendo en ella la emergencia más o menos organizada de un sector liberal-capitalista.

a. Ideologismo

Esta crisis de la derecha se caracterizaría por un profundo desencuentro entre su discurso e ideología y la realidad nacional en la que le toca desenvolverse. De acuerdo a Carlos Peña:

> La derecha chilena nunca ha resuelto bien sus relaciones con la modernidad y la democracia de masas […] En otras palabras, capitalismo y tradición no se llevan bien. Parte de la derecha se encuentra entre ambos: medra con el mercado capitalista, pero su identidad todavía se construye mirando a la tradición. En otras palabras, la derecha chilena abraza las consecuencias de la modernización (mercado, expansión del consumo, acumulación) pero rechaza sus premisas (autonomía, igualdad, diversidad). Esto explicaría por qué los intelectuales de derecha se reducen a economistas, gente experta en las consecuencias monetarias de la modernización de Chile, pero ignorantes de las premisas culturales que le subyacen y que, tarde o temprano, afloran.[35]

Incluso su relación muy particular con el empresariado, cimentada por una afiliación católica conservadora muy ligada a los cuestionados movimientos eclesiales tradicionalistas[36], comenzó a verse erosionada producto de los importantes cambios y nuevos énfasis pastorales en la Iglesia católica bajo el Papa Francisco, los que dejaron doctrinariamente desvalidos a la derecha y empresarios, sin un apoyo doctrinario externo que los validara como antaño.

A esta situación se sumó la crítica interna de políticos conservadores, como Iván Moreira (UDI), quien denunció el trato clasista y oligárquico que sufrió en su partido, declarando que "saldría escapando de este partido, porque tengo rabia, ira y una contradicción muy grande. Tengo rabia con personas que están aquí, que me despreciaron y despreciaron a la gente popular. Todo por no tener currículo ni

---

35. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/01/19/reportajes/opinion/noticias/CEDD2D5C-517D-458E-89AE-F9823646D019.htm?id=%7BCEDD2D5C-517D-458E-89AE-F9823646D019%7D

36. Cfr. Augusto Varas, *La democracia frente al poder. Chile 1990-2010*, Catalonia: Santiago, 2012, capítulo 3.

linaje […] Y nunca más aceptaré que en este partido me desprecien, no permitiré que a quien no tenga estudios o sea pobre, lo maltraten”[37].

b. Capitalismo liberal

A su vez, la crisis ideológica de la derecha se vio orgánicamente acompañada por la emergencia visible de un agregado político-social de características capitalistas y liberales.

Las elecciones primarias, parlamentarias y la presidencial evidenciaron una crisis del sistema de partidos y profundas fracturas al interior de cada uno de ellos. Nueve candidaturas a la Presidencia, conflictos entre RN y la UDI, renuncias en la DC y RN, emergencia de grupos como Evópoli, Horizontal, Red Liberal, Espacio Público, Fuerza Pública, Revolución Democrática, o apoyos cruzados para candidatos al interior de la Concertación, mostraron débiles liderazgos colectivos, caudillismo, declinante voluntad asociativa y crecientes déficits ideológicos en los partidos políticos existentes. La crisis previa al interior de la Concertación no se manifestó de la misma forma en la Nueva Mayoría, dada la presencia aglutinadora de Michelle Bachelet y la cierta posibilidad de ser Gobierno nuevamente.

En medio de este espacio poblado de diversas expresiones político-societales, se pudo percibir la existencia de un *imaginario político liberal-capitalista,* de formas cambiantes —amebiótica o de magma fluida—, constituido por compartidas “normas, valores, lenguajes, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente y de hacer cosas”[38], que pusieron énfasis en la “primacía del individualismo, el predominio creciente y unilateral en diversos ámbitos de la existencia social de la razón instrumental y un descompromiso de los mismos ciudadanos hacia su comunidad política, ocupado cada uno con su propio autogobierno”[39]. Este agregado sociopolítico se caracterizaría por la afirmación de comunes valores y derechos individuales en el campo político, económico y cultural. Favorecería “la primacía del individualismo, [de] los derechos civiles individuales y una actuación contenida tanto de la sociedad civil como del Estado en la dirección de la cosa pública. Esta visión tiende al desarraigo, a la pérdida de un sentido más compartido de la existencia, al exagerado autocentramiento en cada cual, empobreciendo con ello la vida de todos”. A este individualismo y descompromiso con la comunidad se le suma “*el predominio creciente* y unilateral en diversos

---

37. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/13/el-duro-discurso-anti-clasista-de-moreira-en-el-consejo-de-la-udi/
38. Castoriadis, C., *Los dominios del hombre*, Barcelona: Gedisa, 2005, pág. 67.
39. Esta cita y las siguientes fueron obtenidas de: Pablo Salvat, “¿Educación para el crecimiento económico y/o educación para una ciudadanía democrática? Notas desde el comunitarismo y el republicanismo democrático”, Informe de Trabajo N°2, Universidad Alberto Hurtado, manuscrito.

ámbitos de la existencia social de la *razón instrumental*. Mercado, Estado, mediante el prestigio de la ciencia y técnica, tienden a expandir los criterios validadores de una tecnologización creciente, puesta como vía regia para la solución de los males de la humanidad". La preeminencia de la tecnocracia y del economicismo neoclásico en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas completaría este cuadro ideológico del liberalismo-capitalista.

Sin embargo, tal como lo expresara Daniel Mansuy, este ideario tiene que modernizarse ya que su visión individualista le impide hacerse cargo de temas públicos:

> La derecha debe oponer las ideas de justicia y sociedad a las consignas igualitarias y estatistas. Debe asumir que Chile se convirtió en una sociedad de masas, pero que requiere conducción política —la modernidad está lejos de ser un fenómeno unívoco—. A la confianza ciega en el Estado invocada por la izquierda, no hay que responder con una confianza ciega en el mercado, porque la idea central del sector no es esa, sino la confianza en las personas, la ética de la responsabilidad y la valoración del trabajo. Hay que tomarse en serio la noción de justicia social, el papel de los sindicatos y de la sociedad civil, porque es imposible leer fenómenos sociales —ni hablar de hacerse cargo de ellos— desde el individualismo.[40]

Coincidía con esto Luis Larraín cuando señalaba:

> Una reflexión serena debe tomar en cuenta que la legitimidad del modelo económico-social de Chile en los últimos veinticinco años ha sido cuestionada al imponerse visiones críticas a la desigualdad, al abuso y la creencia de que un desmedido afán de lucro perjudica a los consumidores. También debe hacerse cargo de que hay hoy día una mayor valoración de los derechos humanos y del medioambiente. Que el surgimiento de una gran clase media a partir del éxito económico ha alimentado altas expectativas que van más allá de las posibilidades financieras de un gran número de familias. Que la política se ha desprestigiado por la poca renovación de los liderazgos y cabida a nuevas ideas. Sin embargo, de esa reflexión no puede surgir la conclusión de que hay que moverse hacia la izquierda, adoptando las recetas de nuestros adversarios. Porque se supone que se está en política porque te mueven ideales, no para ganar el poder a cualquier precio. La derecha debe elaborar sus propias soluciones: para la desigualdad, mejores empleos y educación; para los abusos, más competencia y movilidad; para la clase media, seguros públicos y privados y disminución de la vulnerabilidad más que regalos del Estado; para educación y salud de calidad, libertad de elegir; para los temas de ciudad, más sociedad civil […] En definitiva, hay que construir identidad y legitimidad en

40. Véase http://diario.latercera.com/2013/12/25/01/contenido/opinion/11-154168-9-sin-anestesia.shtml

> la centroderecha. Contarle a la gente por qué queremos gobernar, que es mejor empoderar a los chilenos vulnerables para que labren con libertad su propio futuro que darles en bandeja desde el Estado la solución a sus problemas. Esa es la tarea de hoy. Ya llegará el tiempo de decidir quién liderará el proyecto.[41]

Una modernización y ampliación del espacio ideológico de la derecha liberal-capitalista podría perfectamente proporcionar las bases conceptuales para una extensión horizontal de su identidad hacia la centro-izquierda, como veremos más adelante.

IV. CLASE, INTERESES E IDEOLOGÍA

La visión de este sector del "qué y cómo hacer las cosas" no solo obedece a perspectivas y valores compartidos, también es el producto de la contradicción entre sus intereses individuales y políticas con fuerte sentido de redistribución igualitarista, propuestas desde la izquierda. Frente a estas últimas se observa una desconfianza o abierto rechazo a una redistribución radical de ingresos, a impregnar las políticas con valores solidarios, y a la expansión de derechos económicos y sociales garantizados por el Estado.

Una redistribución igualitarista fuerte pasa por la implementación de una efectiva y profunda reforma tributaria que genere los recursos permanentes para ella. Esta reforma tendría dos afectados principales. Por una parte, al 4% de las familias más ricas (sector comercialmente denominado "AB")[42]. Y, por la otra, a los segmentos ubicados entre los percentiles 90 y 96 de la distribución del ingreso familiar ("C1"), quienes se verían afectados por una retasación de la propiedad rural y urbana, el control de la elusión a través de sociedades de profesionales, y los aumentos de los impuestos de 1ª y 2ª categoría, y global complementario, entre otros.

Además de ver afectados sus niveles de ingreso, este sector medio-alto acomodado, resentiría y resistiría los efectos socioculturales de una redistribución profunda que pondría en cuestión la rígida estructura de estratificación social y de movilidad social existente en el país, debilitando sus "marcadores privilegiados de clase"[43].

---

41. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2014/01/11/18541/La-derecha-en-llamas.aspx
42. Las cifras y citas contenidas en estos tres párrafos son de: Criteria Research, "Clase media. Diversidad y distinciones tras el estereotipo", Estudio sindicado, Reporte para prensa, junio 2011. Véase http://www.criteria.cl/wp-content/files/clase_media.pdf
43. Sobre estos "marcadores", cfr.: Pierre Bourdieu, *Distinction. A social critique of the judgment of taste*, Routledge, New York, 1984, pág. xxv.

A la resistencia —desde los intereses— de este grupo a una reducción fuerte de las desigualdades, se sumaría —desde la ideología— otro importante segmento de la llamada "clase media". Este sería el que va del 80 al 90 percentil de la distribución del ingreso familiar. La parte alta de este sector incluida en el segmento denominado "C2" —que en su conjunto incluye los ingresos de los deciles 7 y 8—, entre la cual "predomina la ideología liberal […] se caracterizan por ser desconfiados de las instituciones y desligados de la religión, abiertos a las creencias alternativas, respeto a la diversidad sexual, apoyo al aborto terapéutico, lo que indica apertura al cambio".

Este agregado sociopolítico liberal-capitalista no homogéneo, compuesto por una proporción baja del grupo "C1", en el que prevalecerían los intereses económicos asociados a su situación de clase, y una proporción alta de individuos pertenecientes al "C2", entre quienes imperaría como hegemónico el pensamiento individualista liberal, constituiría la base social del "desprendimiento" liberal-capitalista de la derecha. Desde esta perspectiva, si bien ambos sectores de la clase media se diferencian entre sí, en conjunto constituirían un agregado social antagónico a políticas redistributivas radicales capaces de modificar de manera importante la jerárquica estratificación social en el país. El desafío político que estos sectores presentarían a un nuevo liderazgo de derecha sería hermanarlos para mantener el actual modelo económico sobre la base ideológica de un liberalismo renovado.

V. ORGÁNICA

Este agregado sociopolítico no tendría una sola expresión institucional, liderazgo y domicilio político. Su base social se evidenció en el apoyo ciudadano y de opinión pública a la candidaturas prepresidencial de Andrés Velasco, así como en las propuestas de una variedad de políticos que van desde la UDI (Hernán Larraín), pasando por disidentes piñeristas en RN (Daniel Platovsky), excandidatos DC (Hosain Sabag) y figuras públicas del PPD o del PS, personeros que configurarían los bordes fronterizos de tal sector y que de alguna forma se mostraron en el episodio Peirano y en el debate sobre la educación superior gratuita.

Desde un punto de vista estratégico, las opciones de poder de este agregado social serían, por una parte, la mantención de su informalidad, con una presencia inorgánica y la latencia de este imaginario y sus portadores influyendo en las diversas agrupaciones políticas, y, por la otra, su formalización en una institucionalidad política única, capaz de recrear el escenario político nacional bajo un nuevo liderazgo. La primera opción ofrecería una transversalidad diversificada con capacidad de veto y contención de políticas más radicales en todos sus posibles puntos de origen. La segunda —lugar que pretende ocupar Sebastián Piñera, entre otros—,

tiene las naturales dificultades de crear, financiar y mantener una orgánica con despliegue nacional capaz de constituirse en un tercer polo de atracción dentro del esquema político nacional, pero tiene la bondad de generar una pública voluntad de poder con cierto arrastre de masas.

En su fase preorgánica, esta tendencia liberal-capitalista modernizada se manifestó institucionalmente en Evópoli, Red Liberal, Amplitud y Fuerza Pública.

Evópoli[44], también integrado por miembros del Gabinete de Piñera, se compromete con la lucha por la libertad individual —incluida la diversidad sexual— sin interferencias del Estado y del empresariado, y una ética de la responsabilidad. En palabras de sus dirigentes:

> Más que ser de derecha o izquierda, Evópoli es un proyecto político con la libertad como el eje sobre el cual el Estado debe actuar. Creemos en una sociedad que se articule con el Estado. Evópoli tiene una vertiente doctrinal relacionada con lo que ocurrió con David Cameron, que logró reencantar a Inglaterra con la lógica de más sociedad y no más Estado (Felipe Kast).

> […] tenemos que reconocer un domicilio en la centroderecha con sus pros y contra, que quiere crecer —como lo hicimos el 2009— haciendo alianza con un grupo de liberales o sociales cristianos que han quedado súper abandonados, porque hoy la Nueva Mayoría se ha izquierdizado y ahí hay una oportunidad (Luciano Cruz-Coke).[45]

Su equivalente, con origen en la centro-izquierda, *Fuerza Pública*, se propuso:

> Defender y profundizar las libertades públicas e individuales […] más transparencia […] eliminar las malas prácticas y los abusos, tanto en el mundo público como el privado […] Exigimos más competencia y mejor fiscalización […] un país con más libertades […] Que a nadie se le discrimine por su apellido, ni por la comuna en que nació, ni el

---

44. "…movimiento político que emerge con el desafío de construir un Chile libre, inclusivo y justo. Entendemos por justicia la libertad efectiva de cada persona para desplegar sus talentos según sea su voluntad, independiente del lugar de origen. Creemos que la ruta para lograr este desafío requiere estar dispuestos a priorizar con sentido de urgencia aquello que permita emparejar la cancha y potenciar la libertad de cada uno de nuestros niños […] Nuestra economía necesita mercados y relaciones transparentes, libres de abusos que asfixien la competencia, el emprendimiento y la innovación. La política requiere nuevas conversaciones, nuevos acuerdos […] Como sociedad debemos estar dispuestos a invertir lo que sea necesario para igualar las condiciones de participación en la sociedad […] El desafío anterior no pasa sólo por mayor inversión del Estado, sino también por asumir que la ética y calidad de nuestras relaciones humanas juegan un rol irremplazable. No llegaremos muy lejos sin una sociedad civil, anclada en los valores de la responsabilidad, la reciprocidad y el respeto a la diversidad". Véase http://www.evopoli.cl/portal/?page_id=2

45. Véase http://www.capital.cl/poder/los-desafiantes/

> color de su piel, ni sus ideas, ni su religión, ni su género, ni su orientación sexual, ni sus capacidades especiales […] Las instituciones que facilitaron la transición a la democracia le quedan chicas al Chile de hoy […] nos falta en igualdad y dignidad para todos.[46]

Por su parte, *Red Liberal*, en una perspectiva más proactiva, formuló un llamado a convertir 2014:

> [en el año de la] convergencia de todos los liberales […] están los liderazgos, están los proyectos y están los ciudadanos que apoyan nuestras causas […] Es hora que los liberales asumamos un rol activo en el nuevo escenario político […] Llevamos mucho tiempo divididos. Hasta hace poco, las razones para esto parecían sólidos témpanos. Hoy, sin embargo, se deshacen ante el sol de los nuevos tiempos. La división de los liberales debe terminar […] Se decía que los liberales estábamos mejor dentro de la diversidad de partidos tradicionales, cada uno empujando desde la trinchera propia. Decían que, repartidos, tendríamos mayor impacto. La evidencia muestra lo contrario: en pocos años, los partidos y las coaliciones del pasado se han movido inexorablemente hacia los extremos. Ya no son capaces de alojarnos. Allí los liberales se sienten cada día más huérfanos, mientras nuestras ideas conquistan cada día más voluntades. Seremos cada día más, pues nuestra cultura política es empujada principalmente por las nuevas generaciones. Queremos, podemos y debemos construir nuestra casa propia.[47]

Posteriormente, *Amplitud*, propuso crear al interior de la Alianza una colectividad liberal, un "partido con Evópoli, Amplitud y Red Liberal"[48]. De acuerdo a sus formulaciones doctrinarias:

> el liberalismo es mucho más que un mecanismo económico con fines desarrollistas. El liberalismo es una opción política cuyo fin es defender las libertades individuales, cuestión que no es antagónica con creer en un Estado capaz y funcional. Estas ideas no son nuevas en Chile. Lo que hoy llamamos centro-derecha fue a lo largo del siglo XX una fiel defensora de la democracia representativa y de la progresiva liberalización de las costumbres. La dictadura militar interrumpió este proceso que hoy retomamos con fuerza […] rechazan el golpe de Estado, negándose a 'justificar los atroces crímenes y atropellos'; asumen como propias las reformas constitucionales 'dentro de la institucionalidad'; hablan de 'justicia y fortalecimiento de la sociedad civil' y añaden que

46. Véase http://www.fuerzapublica.cl/
47. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/10/red-liberal-llama-a-hacer-de-2014-el-ano-de-la-convergencia-de-todos-los-liberales/
48. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/02/912193/joaquin-godoy-esperamos-ser-un-partido-con-evopoli-amplitud-y-red-liberal

'soñamos con un partido preocupado de lo público que ofrezca respuestas de centroderecha, no sólo basadas en la defensa del mercado, a los temas de dimensión pública tales como el desarrollo de las ciudades, la educación, la previsión, la salud, la discapacidad, la protección del medioambiente, la investigación científica y la descentralización'.[49]

Frente a estas nuevas y modernizadas propuestas, desde la orgánica partidaria tradicional, Andrés Allamand anunciaba su diseño estratégico en julio 2013, indicando: "Yo veo el futuro con una centroderecha ampliada hacia el mundo liberal, que ojalá se organice en torno a un partido, hacia los independientes, y hacia la Democracia Cristiana […] El objetivo político debe ser una alianza con la DC"[50]. Y el 11 de agosto del mismo año había propuesto la creación de una nueva "Coalición Popular" que incluiría a la DC, al PRI y "a los votantes que se identifican con la candidatura de Franco Parisi"[51]. En materias ideológicas propuso excluir de la declaración de principios de RN la justificación al golpe militar. Su elección y la de José Manuel Ossandón como senadores, ambos críticos del Gobierno, y los relativamente buenos resultados electorales de RN con Carlos Larraín a la cabeza, otro crítico de Piñera, dificultaron la estrategia piñerista de crear una Nueva Derecha desde RN, por lo que una alternativa era la formar su propio movimiento, tal como lo planteó Daniel Platovsky al renunciar a RN.

Desde la UDI, el senador Hernán Larraín propuso refundar la Coalición por el Cambio, integrando a Evópoli y Democracia Regional, propuesta que resonó inmediatamente en el vicepresidente de RN, senador Francisco Chahuán"[52].

Si bien este amorfo agregado sociopolítico adquirió visibilidad y potencial proyección política, sus desarrollos ideológicos e intereses de clase no lograron en ese período su punto de fusión, ni han reconocido un solo liderazgo y orgánica institucional. Por estas razones, Sebastián Piñera en su última cuenta a sus partidarios, intentando liderarlo, definía las tareas que se debían enfrentar:

Primero, diseñar y elaborar un proyecto político que en base a nuestros valores y principios, recoja con renovación, con imaginación y con solidez los problemas del presente y los desafíos emergentes de nuestra de nuestra sociedad. Segundo, definir o implementar una estrategia clara para transformarnos en una

---

49. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/08/diputados-renuncian-a-rn-con-declaracion-doctrinaria-que-critica-el-neoliberalismo-y-propinan-duro-golpe-politico-a-carlos-larrain/
50. Véase http://www.quepasa.cl/articulo/politica/2013/07/19-12186-9-el-objetivo-politico-debe--ser-una-alianza-con-la-dc.shtml
51. Véase http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B4d3cbc4d-d969-43da-93a7-203eded1d78c%7D
52. Véase http://diario.elmercurio.com/2013/12/25/nacional/nacional/noticias/E2C140E2-E6C1-4A68-91AC-1F54B250346E.htm?id=%7BE2C140E2-E6C1-4A68-91AC-1F54B250346E%7D

> oposición constructiva en la búsqueda de diálogos y acuerdos, pero muy firme en la fiscalización del futuro Gobierno y en la defensa de nuestras ideas y de nuestras visiones. Tercero, y lo digo con claridad, defender, porque vamos a ser sujetos de ataque, lo mucho que hemos logrado avanzar, gracias al esfuerzo de todos ustedes, durante estos cuatro años de Gobierno. Y cuarto, construir una verdadera opción de Gobierno, que logre nuevamente atraer, cautivar a una nueva mayoría de corazones y voluntades que nos permita una vez más tener los merecimientos para poder nuevamente tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país, desde este Palacio de La Moneda.[53]

En suma, al final de su mandato el Presidente Piñera dejó a una derecha en crisis, en medio de la cual comenzaba a emerger aquel sector que trató de dirigir desde el inicio de su gestión y que intentará conducir en el futuro. Los próximos cuatro años serán cruciales en la configuración de esta tercera potencial fuerza política, la que de ser exitosa dejaría en difícil situación a la Alianza y le presentaría distintos desafíos a la Nueva Mayoría.

VI. MICHELLE BACHELET

Los dos primeros meses después de su elección fueron particularmente difíciles para la Presidenta Bachelet, especialmente producto de las críticas surgidas a los nombramientos de ministros, subsecretarios e intendentes.

1. Configuración del Gabinete

La primera medida de la Presidenta electa fue la configuración de su equipo ministerial reclutado en una generación distinta a la "transicional", en la mayoría de los casos respetando la presencia de los partidos de la Nueva Mayoría, pero seleccionando aquellas personas con una relación particular y previa con la Presidenta, aun cuando estos fueran partidariamente independientes. Casos paradigmáticos fueron los nombramientos de Rodrigo Peña y Lillo (PPD) como ministro del Interior, de Alberto Arenas (PS) en Hacienda y de Nicolás Eyzaguirre (PPD) en Educación. Así, el equipo ministerial quedó constituido por 6 PPD, 5 DC, 3 independientes, 5 PS, 1 PR, 1 IC, 1 PC y 1 MAS.

Este proceso no quedó exento de críticas. Con solo un tercio de mujeres en su primer Gabinete, frente al 48% del de 2006, la propia Presidenta Bachelet confesó: "Me hubiese gustado tanto que hubiera más paridad"[54].

---

53. Véase http://www.gob.cl/especiales/cuenta-publica-final/discurso/
54. Véase http://diario.elmercurio.com/2014/02/03/nacional/politica/noticias/4C1357E2-9026-47FF-801C-C56FD10366E0.htm?id=%7B4C1357E2-9026-47FF-801C-C56FD10366E0%7D

Por otra parte, el nombramiento de la senadora Ximena Rincón como ministra Secretaria General de la Presidencia, reeditó los cuestionamientos a un procedimiento iniciado por la propia Presidenta en su anterior administración, criticado por debilitar el régimen republicano presidencial, no parlamentario, de separación de poderes.

Sin embargo, las críticas más duras fueron al débil proceso de selección de los nombramientos ministeriales, de subsecretarios e intendentes. Dos ministras designadas (Cultura, Claudia Barattini, y Desarrollo Social, Fernanda Villegas) figuraban en la lista de morosos del Crédito Fondo Solidario, y la PR, Aurora Williams (Minería), ex gerenta de administración y finanzas de la empresa operadora del Puerto de Antofagasta (ATI), controlada por el grupo Luksic, reflotó las serias críticas ambientales a su gestión. De los subsecretarios, la persona nombrada en Educación (Claudia Peirano) se había pronunciado públicamente en contra de la gratuidad de la educación, lo que motivó una fuerte reacción de la Confederación de Trabajadores de la Educación, de funcionarios de su futuro Ministerio, y de los diputados electos líderes del movimiento estudiantil, lo que provocó su renuncia a pesar de la confianza que días antes le había reiterado la propia Presidenta. En su reemplazo fue nombrada Valentina Quiroga, ex directora de políticas educativas de *Educación 2020*.

Los cuestionamientos continuaron con los nombramientos de Carolina Echeverría (PPD) en la subsecretaria para las FF.AA. (acusaciones de chantaje por parte de marinos constitucionalistas, cuestionamientos a su gestión anterior como Subsecretaria de Marina; denuncias contra su padre ex militar por torturas); de Miguel Moreno (PR), condenado al pago de una multa por ofensas al pudor; Ignacio Moreno (PPD), en Minería, ex subgerente de Desarrollo Empresa Nacional de Minería (Enami) y gerente general de la compañía minera Cerro Dominador en 2012, donde enfrentó una huelga en Antofagasta y un fallido proceso de negociación colectiva; Hugo Lara (DC), Agricultura, enfrentaba querella por estafa y apropiación indebida y un caso previo, solucionado en 2013, de giro doloso de cheques; Mitchel Cartes (PS), intendente de Tarapacá, con dos sumarios administrativos por eventuales negligencias en la dirección de Vialidad Regional hasta 2012; Jaime Burrows (DC), Salud, con declaraciones previas contrarias al aborto terapéutico, iniciativa propuesta por la Presidenta en su campaña; y el subsecretario designado en Transportes, Cristián Bowen (DC), quien enfrentaba un juicio por injurias y calumnias en junio de ese año. Del conjunto de cuestionados, además de Peirano, la Presidenta electa solo reemplazó a Hugo Lara por Claudio Ternicier (DC), a Moreno por Jorge Maldonado (PR) y a Echeverría por Gabriel Gaspar (PS).

Aun cuando el presidente del PS, Osvaldo Andrade, reconoció que "ha habido una desprolijidad en algunos nombramientos"[55], apuntando la crítica al designado ministro del Interior, las reacciones ante ellas evidenciaron las tensiones más

55. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/02/674-563952-9-presidente-del-ps-osvaldo-andrade-ha-habido-una-desprolijidad-en-algunos.shtml

profundas al interior de la Nueva Mayoría. Así, en apoyo a Peirano[56] se criticó el "dogmatismo fundamentalista" de la reforma educacional (Mariana Aylwin), el "narcisismo" de los estudiantes y la gratuidad en la educación como "artículo de fe" (José Joaquín Brunner), la "pérdida de la capacidad de gobernar por ceder al poder de veto de los estudiantes y bancada estudiantil" (Sergio Bitar), y la nueva "beatería" de aceptarlo sin cuestionarlo (Genaro Arriagada). De esta forma, quedó en claro que el gobierno de la Nueva Mayoría y de Michelle Bachelet se volvía a constituir en espacio de lucha entre las tradicionales dos almas de la Concertación.

Considerando que 14 de las 50 medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet requerían aprobación del Congreso, surgió la legítima duda si para lograr estas metas el jefe del Gabinete podría ordenar al oficialismo en el Congreso y a los funcionarios en el Ejecutivo.

2. Nueva Mayoría

Aun cuando la Nueva Mayoría triunfante había logrado una cómoda situación y posicionamiento político, pronto comenzaron a aparecer los problemas.

a. Nuevo eje PS-PPD

A comienzos de enero, el PS y el PPD formaron un bloque, constituido por 32 diputados, para transformarse en el eje del gobierno Bachelet, afirmando el senador PS, Fulvio Rossi, que el eje histórico PS-DC "fue contra natura" ya que existiría mayor afinidad con el PS[57]. Frente a esta iniciativa, parlamentarios DC reivindicaron importancia de ese eje histórico, pidieron no "encajonar a la principal bancada" del pacto Nueva Mayoría y continuaron con críticas a la integración del PC en el Gabinete.

Las relaciones DC-PC continuaron en zona crítica al cancelarse —unilateralmente por el PC— y posteriormente postergarse la reunión fijada para debatir la situación de los derechos humanos en Venezuela.

b. Asamblea Constituyente

Otro de los temas conflictivos al interior de la Nueva Mayoría fue el mecanismo para el cambio de la Constitución. A comienzos de enero, la Cámara de

56. Carta de Dante Contreras, María Olivia Recart, Jorge Manzi, Gregory Elacqua, Paulina Araneda y otras veinticinco personas. Véase http://www.elmercurio.com/blogs/2014/02/05/19228/Renuncia-de-Claudia-Peirano.aspx
57. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/01/904175/senador-rossi-eje-historico-dc-ps-es-contra-natura-con-el-ppd-tenemos-mayor-afinidad

Diputados aprobó la reforma constitucional eliminando el guarismo 120 (número de diputados) de la Constitución, abriendo el camino para hacer cambios al sistema binominal. En este contexto, el ex presidente Lagos descartó una Asamblea Constituyente y propuso una comisión bicameral para reformarla: "Planteé al Parlamento de Chile una comisión bicameral (ocho a diez diputados y ocho a diez senadores) y que esa comisión bicameral se abra a la ciudadanía, junte una gran comisión asesora con las ONG, con los sindicatos, con los empresarios, con todas las fuerzas vivas de un país, representantes de regiones, los alcaldes, los gobernadores"[58].

Frente a esta postura, en un foro con más de doscientos asistentes, Marco Enríquez-Ominami llamó a otros movimientos y federaciones de estudiantes a unirse en torno a la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

VII. SOCIEDAD

Entre el término del gobierno de Sebastián Piñera y el inicio de la gestión de Michelle Bachelet, la sociedad chilena reaccionaba silenciosamente ante las condiciones políticas existentes. Así, en diciembre de 2013, Adimark informaba que el 53% de los chilenos prefería el voto obligatorio; el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales advertían "una curva siempre ascendente de denuncias [de violencia policial] a nivel nacional desde el retorno a la democracia. [...] lo que muestra el estudio es que el ciclo de denuncias es anterior [a 2011], produciendo una escalada relevante a partir del año 2004-2005"[59], período en que la seguridad pública estaba en manos del ministro del Interior José Miguel Insulza y, especialmente, del Subsecretario, Jorge Correa.

La violencia policial siguió siendo noticia producto de la muerte de un detenido dentro del furgón policial en Rancagua. Al respecto el Instituto de Derechos Humanos señaló que este era el resultado de un "conjunto de prácticas de Carabineros" y que no fue "un hecho aislado"[60]

Al mismo tiempo se dejaron sentir los efectos sociales de las políticas económicas implementadas: Cepal observaba que entre 2002 y 2011 la jornada laboral de los chilenos subió de 42 a 44 horas semanales, cumpliendo horarios más

---

58. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2013/12/02/lagos-descarta-asamblea-constituyente-y-propone-comision-bicameral-para-reformar-la-carta-magna/
59. Véase http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/01/17/denuncias-por-violencia-policial-cifras-para-preocuparse/
60. Véase http://www.elmostrador.cl/pais/2014/02/27/indh-apunta-contra-conjunto-de-practicas-de-carabineros-detras-de-muerte-de-detenido-en-furgon-y-asegura-que-no-fue-un-hecho-aislado/

largos que los de Europa, donde el promedio es de 38 horas y los salarios más altos; la Superintendencia de Pensiones detectaba que la brecha de sueldos entre hombres y mujeres llegaba al 20% en 2013, aumentando en siete puntos en una década; el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile señalaba que "la distribución de ingresos laborales totales se ha mantenido altamente desigual en los últimos dos años", la brecha entre el ingreso promedio mensual de los percentiles más bajo (10) y más alto (90) se ha mantenido desde 2011[61]; y Techo-Chile reconocía que a octubre de 2013 había 705 campamentos y 31.783 familias en esa situación[62], pero el Minvu cifraba los asentamientos en 542 apuntando a la falta terrenos y familias que no acceden a planes del Estado, argumento en indirecto apoyo a la extensión urbana más arriba señalada.

Como ejemplo de la visión clasista y ambientalmente ciega de la gestión publica de la derecha, el nuevo nudo vial Kennedy-Manquehue, entregado en marzo en la comuna de Las Condes, no consideró obras para peatones, aun cuando en su entorno existen colegios y oficinas.



Fiel a su estilo, después de entregar el mando presidencial, Sebastián Piñera abandonó la sede del Congreso en Valparaíso rompiendo el protocolo y declarando su nueva condición política como la de un ciudadano común y corriente. Así, a diferencia de su sucesora que abandonó el país y mantuvo silencio por tres años, el saliente mandatario dio claras muestras que seguiría activo en la política contingente. Y para no dejar dudas al respecto, a menos de una semana de haber dejado La Moneda instaló su nueva fundación, en la que se dedicará a debatir temas coyunturales, propuestas legislativas, temas económico-sociales, todo ello apoyado por un adecuado sistema de comunicaciones y extensión. De esta forma, iniciaba una nueva maratón política con la vista fija en 2017.

61. Véase http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/02/655-564873-9-solo-el-20-de-los-ocupados-tiene-ingresos-sobre-los--570-mil-al-mes.shtml
62. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/12/680-554208-9-informe-de-techo-reabre-debate-sobre-campamentos-en-chile.shtml

EPÍLOGO

EN LA RETINA CIUDADANA

Al final de su mandato, Sebastián Piñera dejó a una derecha en crisis en medio de la cual comenzó a visibilizase el sector que trató de conducir desde el inicio de su gestión, tarea pendiente en su agenda.

Los próximos cuatro años serán cruciales en la configuración de esta tercera y potencial fuerza política. Sin embargo, en su camino deberá enfrentar la mala imagen que dejó en la memoria colectiva —a pesar del 50% de aprobación ciudadana que arrojó la última medición de Adimark—, el eclipse de su estatura política por la potente figura de la Presidenta Bachelet, así como por los difíciles cambios que deberá introducir en su estrategia política de seguir persiguiendo una nueva victoria presidencial.

1. Memoria colectiva

A nivel de la micropolítica, lo que sin duda quedará en la retina ciudadana será la alta personalización del poder presidencial en el intento de imponer un *presidencialismo plebiscitario*. En este marco predominó la preferencia por el espectáculo, la que llegó a su clímax durante la celebración del tercer aniversario de su asunción al Gobierno. Tal como lo resumiera *El Mostrador*:

> Igual que los partidos norteamericanos, con luces y flashes, música y un animador al micrófono, una alfombra roja, dos pantallas gigantes, un escenario principal y filas de sillas ordenadas para más de mil asistentes, en el Patio de los Cañones, celebró el Gobierno de Sebastián Piñera su tercer aniversario en la presidencia. En la ceremonia, ubicadas en primera fila, participaron también ciudadanos electores de la Alianza que saludaron y llenaron de besos a los principales invitados —ministros y candidatos presidenciales— que fueron llegando al encuentro, el cual fue transmitido a través de las pantallas de CNN Chile.[1]

---

1. Véase http://www.elmostrador.cl/noticias/2013/03/11/la-moneda-celebra-su-tercer-aniversario-al-estilo-de-los-premios-oscar/

Esta tendencia al espectáculo se complementó con la ya mencionada grandilocuencia comunicacional, en la que imperaron los anuncios de medidas a ser desarrolladas más que los resultados efectivos de las políticas implementadas. Paralelamente, un creciente control comunicacional se puso al servicio de su política.

Aun cuando estas prácticas podrían haber sido políticamente inocuas, la alta personalización del Ejecutivo se tradujo en una relativa falta de cuidado por las instituciones republicanas, lo que se manifestó en las permanentes críticas al Poder Judicial continuadas hasta el final de su gestión, la falta de respeto a la institucionalidad ambiental, o el embate contra los dictámenes del Consejo para la Transparencia. De igual forma, la creación de múltiples comisiones para elaborar propuestas de ley creó más de una turbulencia con el Congreso, el que resintió ser definido en los hechos como una mera oficina de partes para proyectos "precocinados".

La extrema confianza depositada en el sector privado fue permanentemente defraudada o cuestionada por importantes sectores empresariales en torno, por ejemplo, a la reforma tributaria, la tasa máxima de interés o la eliminación del multirut. Los escándalos de La Polar, Kodama, y Johnson's, más los permanentes intentos de captura del Estado por el sector privado, le jugaron una mala pasada a quien trató de pavimentar y ampliar la cancha al capital privado.

Algo similar sucedió con los intentos de configurar un arco político más amplio que la Alianza. Así, la iniciativa de integrar a la DC o personalidades relevantes de ese partido al Gobierno terminó en la fracasada aventura del ministro Ravinet. Sus relaciones con la derecha fueron altamente controversiales, al punto que desde la directiva de RN su Gobierno fue acusado de digitar la remoción de Carlos Larraín en la presidencia de ese partido. Y en el caso de la UDI se dio una crítica abierta de sus diputados al AVP y una rotunda negativa a permitir el voto de chilenos en el exterior, entre otras oposiciones.

El modelo de crecimiento basado en el consumo, que le habría dado la base estructural al *presidencialismo plebiscitario*, se fortaleció temporalmente gracias al notable precio del cobre, la masiva inversión extranjera en la minería y las altas tasas de interés, lo que le permitió al sistema bancario disponer de grandes recursos financieros que ampliaron y multiplicaron el acceso a créditos privados de diverso tipo, produciendo amenazantes burbujas en los sectores inmobiliario y automotriz. El resultado fue un consumo mayor que el producto y una cuenta corriente deficitaria. Este desequilibrio estructural se dejó sentir, finalmente, en la gradual desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 e inicios del 2014. Por su parte, las proyecciones de crecimiento del propio Gobierno fueron a la baja, todo lo cual generó un cuadro económico desfavorable para la próxima administración.

Con todo, la política de crecimiento vía estímulo al consumo tuvo como contrapartida la defensa de los consumidores, la que se manifestó en el apoyo al Sernac, la leve ampliación de sus funciones al área financiera, así como en el creciente

rol contralor de las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros. Así, los derechos de los consumidores, actores centrales en el esquema económico imperante, fueron el sustituto a los derechos ciudadanos garantizados por el Estado.

Junto a la protección del consumidor, su Gobierno abusó de la asignación de recursos a diversos sectores sociales a través de bonos y otras medidas pecuniarias, más que en la afirmación de derechos universales. Ejemplo de esto fue el posnatal que cubrió hasta las 66 UF, o los apoyos monetarios a determinados quintiles en vez de una educación gratuita para todos.

Aun cuando la política de reducir la criminalidad no dio los resultados anunciados, el Ejecutivo pudo adjudicarse el logro de haber sometido, por primera vez, a las fuerzas policiales, en particular a Carabineros, a un control evaluativo externo de eficiencia a través de la implementación del Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD). Con todo, el gobierno Piñera será recordado por su tendencia al uso autoritario del poder y la fuerza como forma de resolver y contener la protesta y conflictos sociales, aplicando la Ley Antiterrorista contra activistas mapuche.

Finalmente, y no menos importante, Sebastián Piñera rompió con el pasado pinochetista y abrió el espacio a un nuevo grupo etáreo, a jóvenes políticos de derecha que se podrán proyectar sin esa piedra de molino en el cuello.

2. Némesis y Minerva

A pesar de su grandilocuencia comunicacional, hiperactividad legislativa y ubicuidad en el territorio nacional, Sebastián Piñera no logró el alto grado de aprobación ciudadana al que aspiró desde el inicio de su administración y que logró momentáneamente con el rescate de los treinta y tres mineros. Cuatro años más tarde, Michelle Bachelet se convirtió, metafóricamente, en su Némesis —diosa de la venganza, la justicia retributiva, sancionadora de la desmesura, que no dejaba que los hombres fueran demasiado afortunados—. Con todo, estas tareas solo podrá lograrlas plenamente una vez terminado exitosamente su mandato y entregado el poder, ahora sí, a un continuador de su propia coalición.

De esta forma, Piñera podría eventual y —una vez más, figurativamente— convertirse en el búho de Minerva, el que inicia su vuelo al caer el crepúsculo y recupera protagonismo pasada su hora, ya que a partir del 11 de marzo de 2014 la administración Bachelet comenzó a enfrentar a una serie de problemas tanto propios como heredados que, dependiendo de cómo los supere, abrirá o cerrará las posibilidades de una vuelta de este al Gobierno. Cinco grandes problemas, entre otros, deberá sortear el nuevo Gobierno para darle continuidad a su programa más allá de su corta administración.

En primer término, la gran crisis de la derecha probablemente permanecerá durante toda la gestión de Michelle Bachelet. Esta no solo afectará a sus partidos, sino que también le generará importantes dificultades a la nueva administración. En la medida que su recomposición tomará su tiempo, la dispersión de interlocutores institucionales válidos para negociar la implementación de las reformas prometidas por Bachelet —sin pasar “la aplanadora”— tenderá a darle protagonismo a lo fáctico —terreno dominado por el piñerismo—y a los caudillos de las diversas facciones. A falta de partidos en forma, capaces de negociar con el Ejecutivo, en la práctica este se verá forzado a lograr acuerdos con una variedad inorgánica de actores, lo que le dará una mayor falta de transparencia a este proceso de por sí opaco, y fortalecería el caudillismo imperante. En un contexto donde la transparencia llegó para quedarse y expandirse, esta opacidad y sus efectos serán un obstáculo en su gestión y un frente abierto a la crítica pública, por lo que la nueva administración deberá superarlo con inteligencia y celeridad.

En segundo lugar, muchas de las medidas anunciadas por la presidenta electa —y quizás otras por venir— serán generadas por las ya anunciadas comisiones presidenciales: política para el litio; reajuste del salario mínimo; política criminal y persecución penal; cárceles concesionadas; desarrollo regional; ciudad, vivienda y territorio; enseñanza del arte; aplicación de la Ley Antiterrorista en territorios *mapuche*; delitos sexuales contra niños; atención a la discapacidad, salud mental y cuidado. En el contexto de las altas expectativas generadas por su campaña y las reacciones al nombramiento de ciertos miembros de su Gabinete y subsecretarios, la integración de estas comisiones debiera responder a la orientación general e inspiración de cambios de su programa. De no ser así, cada una de estas áreas se constituirá en nuevos espacios de confrontación. Algunas de estas diferencias ya se manifestaron en el episodio Peirano. Al respecto, la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, explicitó la postura de los estudiantes frente a la reforma educacional: “La gratuidad que hemos planteado está bajo la lógica del derecho social”[2], política que, como se ha visto, no es plenamente compartida por la coalición que llegó al poder, al punto que figuras públicas como José Miguel Insulza afirmaron que para tal política “Chile hoy no está en condiciones”[3].

Vinculado a esta relación entre expectativas y realizaciones, en tercer término, el factor tiempo jugará un rol más importante que en otras administraciones. Desde ya, algunas movilizaciones sociales previas fueron anuncios y mensajes anticipados de ciertos sectores para el nuevo Gobierno (estudiantes, mineros, puertos, regiones, deudores habitacionales), y la sociedad ha visto que producto de la alta

2. Véase http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/01/680-560441-9-confech-llama-a-seguir-con-la-movilizacion-estudiantil-en-2014-ante-las.shtml
3. Véase http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/11/674-552102-9-jose-miguel-insulza-no-estoy-seguro-de-priorizar-gratuidad-universal-en.shtml

concentración del poder en el país la forma más expedita de hacer ver sus demandas y lograr algunas de sus reivindicaciones es la manifestación pública. En este contexto, como consecuencia de frustraciones previas y ante las "profundas diferencias con Bachelet", el movimiento seguirá con movilizaciones. La forma en que la nueva administración reaccione ante estas, maneje adecuadamente el uso de la fuerza, se relacione y vincule a los movimientos sociales a su proceso de transformaciones, determinará en gran medida su éxito o fracaso.

Una cuarta dificultad será poner en práctica las 50 medidas anunciadas para los primeros 100 días, así como la implementación del conjunto de su Programa de Gobierno, lo que requerirá de un no habitual ordenamiento político legislativo de la Nueva Mayoría y sus apoyos independientes ("la aplanadora"), así como de una disciplina y alto rendimiento de los cuadros administrativos. El "¡vivan los díscolos!"[4] del senador Alejandro Navarro grafica la situación.

Finalmente, en su último período se evidenció un conjunto de situaciones altamente complejas que la administración Piñera dejó sin resolver o bien las agudizó producto de las políticas implementadas. Además de neutralizar las medidas que retrotrajeron los avances concertacionistas, el gobierno Bachelet deberá enfrentar un campo minado de nudos complejos, como, por ejemplo, un presupuesto restrictivo en una economía a la baja; un conflicto mapuche agravado; una política de energía inexistente; concesión y financiamiento del Metro de Santiago; déficits en concesiones viales; crisis de las concesiones hospitalarias y penitenciarias; inseguridad ciudadana; vivienda y reconstrucción; nueva política de defensa; derechos de las mujeres; y diversidad sexual.

Neutralizar los retrocesos, reducir las incertidumbres heredadas y satisfacer las expectativas generadas, son las tres grandes tareas que la Presidenta y la Nueva Mayoría deberán enfrentar. Logros inciertos en cada uno de estos ámbitos crearían amplios espacios para un posible retorno de quien quedó a la espera de una segunda oportunidad.

3. El "hombre del destino"

Mirando a futuro, hay quienes afirman que Sebastián Piñera sería la carta de la derecha para 2017. Aun cuando existen serias dudas al respecto dado el balance político de su gestión, no sería extraño que nuevamente este sector optara por el mismo camino de 2009, reiterando esa vieja costumbre de elegir líderes ajenos a su tradición política.

---

4. Véase http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2014/03/918538/navarro-mas-vivan-los-discolos-el-gobierno-debe-tener-un-cable-a-tierra

Cuatro décadas atrás (17 de mayo, 1972), el presidente de la entonces poderosa Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz, en su discurso ante la Junta General Ordinaria de esta asociación empresarial, anticipaba que "solo el futuro podrá revelar el rostro y el nombre del estadista que transformará [este modelo] de gobierno. Cuando este *hombre del destino* aparezca, con regocijo miraremos a nuestros políticos tradicionales, y más aún si él emerge de sus filas, esforzándose por clasificarlo con sus gastados patrones de derecha, centro o izquierda". Un año más tarde, su "hombre del destino" apareció encarnado en el general Pinochet.

Esta búsqueda de un representante o líder por fuera de su clase política tradicional ha sido una permanente inclinación de la derecha chilena, quizás en la incansable tarea de encontrar quién domesticará su arraigado gen frondista, del que ha terminado siendo su principal víctima. A pesar de los costos que ha pagado por esta práctica, volvió a depositar su confianza en líderes no tradicionales que aparentemente se apartaban de los supuestamente gastados patrones de alineamiento político, apostando en 1989 por el derrotado Hernán Büchi y, en 2009, por el finalmente electo Sebastián Piñera. La misma apuesta se volvió a repetir dramáticamente en la UDI, que seducida por los altos porcentajes de aprobación y popularidad de Laurence Golborne, lo nominó su precandidato presidencial en 2013.

El interés que generó la primaria presidencial entre Pablo Longueira y Andrés Allamand fue, en parte, consecuencia del atractivo que despertó la restauración de la primacía de la política por sobre la encuestología y del hecho que se enfrentaran dos opciones desnudas de poder, las que proponían darle a su eventual gobierno un claro y definido sello político. Ambos representantes de la derecha no se disfrazaron de técnicos, apolíticos y no ideológicos, y elaboraron un "relato" distinto al de su gobierno. Ellos intentaban "representar el centro social" (Longueira) o lograr la "adhesión del centro político" (Allamand).

Lo disonante en sus propuestas es que no se correspondían con su común aspiración de ser los verdaderos continuadores de Sebastián Piñera, un mandatario que nunca reveló el sentido profundo de su misión: aumentar el lucro y la renta privados. En ese contexto, quien resultó paradojalmente fortalecido fue el Presidente Piñera, que si bien no fue capaz de llevar acabo su estrategia *presidencialista plebiscitaria*, la anticipable derrota de la abanderada de la Alianza en diciembre de 2013 lo dejó como el nuevo "hombre del destino" en el cual la derecha podría volver a fijar sus esperanzas.

Comprometiéndose con este curso de acción, anticipadamente Piñera dio sus primeros pasos para configurar un esquema defensivo de fuerzas para el próximo cuatrienio. Así, en la perspectiva de contener las iniciativas legislativas enunciadas por Michelle Bachelet, consideradas excesivamente izquierdistas, el Presidente nombró a María Luisa Brahm en el Tribunal Constitucional. Igualmente, anunció la creación de una fundación, con personeros sub 50, para elaborar propuestas de políticas públicas e iniciativas legislativas

Así, se podría hipotetizar que la proyección política de Sebastián Piñera en los próximos cuatro años podría adquirir viabilidad a partir de tres supuestos copulativos.

El primero sería la posibilidad de darle coherencia, más allá de la ideología mercadista, a un conjunto aún incoherente, no formulado, de un imaginario político liberal-capitalista que se expresó de diversas formas en las primarias y en la campaña presidencial, tanto en la centro-derecha como en la centro-izquierda.

En segundo lugar, un aspecto clave sería la capacidad de institucionalizar ese nuevo "relato" a través de un liderazgo nacional capaz de convocar a las diversas expresiones, sueltas e inorgánicas que lo encarnarían, reemplazando a la Alianza con una fórmula orgánica que no perdiera a sus principales integrantes. Algo parecido en esta dirección formuló Piñera en su cuenta final en La Moneda, al hacer un guiño a "Amplitud" y referirse reiteradamente a la inexistente "Coalición para el Cambio".

El tercer supuesto sería la integración a tal estrategia, ya no de sus más íntimos empresarios, sino a la nueva generación de jóvenes políticos dirigentes de derecha que gracias a la denuncia presidencial de los "cómplices pasivos", la condena a la violación de los derechos humanos durante la dictadura y el rescate de la transición democrática como "ejemplar", quedaron liberados del pasado pinochetista; ahora pudiendo proyectarse sin grandes complejos en la política nacional.

Esta refundación conceptual, orgánica y del liderazgo colectivo es la principal tarea pendiente que dejó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera a la derecha. Faena ya iniciada al colaborar decididamente a la crisis de la coalición política que lo llevó al poder.



Con el término del gobierno de Piñera se cerró un nuevo ciclo político.

Después de cuatro años, Sebastián Piñera pudo irse satisfecho de su gestión: amplió el mercado, privatizó, desestatizó y debilitó el Estado, fortaleció los intereses empresariales aumentando las posibilidades de lucro y renta privados, producto de lo cual dejó al país con mayores incertidumbres de las imaginadas al inicio de su gestión. Como colofón, Adimark le entregó un 50% de aprobación al finalizar su período, lo que le permite mirar su futuro político con optimismo.

Sin embargo, al inicio de su mandato, en su discurso durante la firma de los proyectos de ley para el perfeccionamiento de la democracia, Piñera destacaba que nuestra democracia estaba perdiendo fuerza y envejeciendo, que mostraba poca participación, que su legitimidad estaba siendo cuestionada por la ciudadanía, y anunciaba una serie de importantes medidas para superar todos estos males.

Cuatro años más tarde todo indica que nuestra democracia siguió perdiendo fuerza, continuó envejeciendo, carece de atractivo para las nuevas generaciones y

perdió legitimidad. Al parecer, las políticas implementadas en su gobierno para cambiar la situación previamente diagnosticada estuvieron equivocadas o no fueron suficientes para remediar la situación.

A la luz de estas realidades es oportuno recordar, una vez más, a Michel Foucault. Este constataba que la verdadera resistencia del poder político, su verdadera solidez, siempre se encuentra allí donde no lo esperamos. Sebastián Piñera la encontró en la fronda aristocrática rediviva.